

RIT N° : 412-2023

RUC N° : 2201068442-4

DELITO : Asociación ilícita, receptación vehículo motorizado, estafa, delito tributario, tenencia ilegal de arma y municiones y lavado de activos.

ACUSADOS : YERKO ANDRES SILVA TORO
ALBANO ARIEL SILVA TORO
ILICH ALEXIS CHOPA ALDANA
CAMILO SAMMY SANDOVAL GODOY
JUAN FRANCISCO GABRIEL NAVARRETE VASQUEZ
DAVID ENRIQUE MILLALÉN LLANCAO
GERMAN DEL CARMEN DUARTE PEREIRA
CAROLINA ANGÉLICA CORNEJO ARRIAGADA
VÍCTOR MANUEL QUEZADA BRAVO

DEFENSAS : Percy Velásquez Bravo
Rodrigo Núñez Canec
DPP. Carolina Zúñiga Ponce
Ilan Eck Falkas e Ilan Russo Bocic
Martín Müller Calisaya
Solange Matamala Moreira
Claudio Uribe Hernández y José Núñez Avilés

FISCALES : Claudia España Pincheira y Sebastián Gana Encalada

QUERELLANTE : Servicio de Impuestos Internos.

Santiago, veintitrés de diciembre de dos mil veinticuatro.

VISTO, OÍDO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Tribunal e intervinientes. Que, los días veintinueve y treinta de abril; dos y tres, seis a diez, trece a diecisiete, veinte, veintidós a veinticuatro, veintisiete, veintinueve y treinta de mayo; tres al siete, diez al catorce, diecisiete, dieciocho, veintiuno y veinticuatro a veintiocho de junio; uno al cinco, ocho al doce, diecisiete al diecinueve, veintidós y veintitrés, veinticinco y veintiséis, veintinueve a treinta y uno de julio; uno, siete a nueve, doce a catorce, diecinueve a veintitrés, veintiséis a treinta de agosto; dos a séis, nueve a trece, veintitrés a veintisiete y treinta de septiembre; uno a cuatro, siete a nueve, once, catorce, dieciocho y de veintiuno a veinticinco de octubre, todas las fechas del año dos mil veinticuatro, ante la sala del Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, integrada por los jueces titulares, don **Eduardo Gallardo Frías**, quien la presidió, doña **Marcela Nilo Leyton**, redactora, y doña **Alejandra Rodríguez Oro**, se llevó a efecto la audiencia de juicio oral correspondiente a la causa **RIT 412-2023, RUC 2201068442-4**, seguida por los delitos de asociación ilícita, receptación de vehículo motorizado, estafa, apertura de giro con antecedentes

falsos, tenencia ilegal de arma de fuego y municiones y lavado de activos, en contra de los acusados **YERKO ANDRES SILVA TORO**, cédula de identidad 16.083.237-1, chileno, fecha de nacimiento 19.02.1985, soltero, comerciante, con domicilio en Navas de Tolosa N° 303, valle Lo Campino, comuna de Quilicura, actualmente cumpliendo condena en el Complejo Penitenciario de Rancagua condenado en causa RIT 6244-13 del Juzgado de Garantía de Arica y causa RIT 596-15 del 10° Juzgado de Garantía de Santiago y en prisión preventiva por la presente causa, representado por el defensor privado Percy Velásquez Bravo; **ALBANO ARIEL SILVA TORO**, cédula de identidad 13.656.296-7, fecha de nacimiento 06.01.1979, 45 años, soltero, comerciante, con domicilio en Pasaje Bondad N° 3737, comuna de Cerro Navia, actualmente en prisión preventiva en el CCP de Antofagasta en causa Rit 10.010-2022 del Juzgado de Garantía de Antofagasta y anticipada en esta causa, representado por el defensor privado Rodrigo Núñez Cancec; **ILICH ALEXIS CHOPA ALDANA**, cédula de identidad 15.911.618-2, fecha de nacimiento 11.09.1984, 39 años, soltero, ingeniero comercial, con domicilio en Avda. Costanera N° 7488, Dpto. 204, Torre B, San Pedro de la Paz, Concepción, actualmente condenado en la causa RIT 1942-20 del Juzgado de Garantía de Temuco y RIT 307-20 del Juzgado de Letras y Garantía de Bulnes, representado por la defensora pública privada Carolina Zúñiga Ponce; **CAMILO SAMMY SANDOVAL GODOY**, cédula de identidad 17.027.885-2, fecha de nacimiento 16.11.1988, 35 años, soltero, confecciona muebles, con domicilio en calle Los Arrayanes N° 6850, comuna de Lo Prado, actualmente en prisión preventiva por esta causa, representado por los defensores privados Ilan Russo Bocic e Ilan Eck Falkas; **JUAN FRANCISCO GABRIEL NAVARRETE VÁSQUEZ**, cédula de identidad 18.613.986-0, fecha de nacimiento 06.12.1993, 30 años, soltero, trabaja en construcción, con domicilio en Tierra del Fuego N° 2050, comuna de Cerro Navia, en prisión preventiva en esta causa, representado por el defensor privado Martín Müller Calisaya; **DAVID ENRIQUE MILLALEN LLANCAO**, cédula de identidad 14.584.198-4, fecha de nacimiento 11.07.1979, 45 años, soltero, trabaja en construcción, con domicilio en calle Sara Gajardo N° 6449, comuna de Cerro Navia, en prisión preventiva por esta causa, representado por el defensor privado Martín Müller Calisaya; **GERMÁN DEL CARMEN DUARTE PEREIRA**, cédula de identidad 13.080.843-3, fecha de nacimiento 17.05.1975, 48 años, casado, comerciante, con domicilio en calle Ramón Sanfurgo N° 148, comuna de Santa Cruz, representado por la defensora privada Solange Matamala Moreira; **CAROLINA ANGÉLICA CORNEJO ARRIAGADA**, cédula de identidad 16.481.490-4, fecha de nacimiento 13.11.1987, 37 años, soltera, contadora auditora y docente y **VÍCTOR MANUEL QUEZADA BRAVO**, cédula de identidad 15.998.069-3, fecha de nacimiento 02.06.1985, soltero, estudiante y trabaja en una oficina de contabilidad, ambos con domicilio en calle Sector Piedra Blanca S/N, comuna de Teno y representados por los defensores privados Claudio Uribe Hernández y José Núñez Avilés.

El Ministerio Público compareció representado por los fiscales doña **Claudia España Pincheira** y don **Sebastián Gana Encalada** y el querellante Servicios Impuestos Internos (en adelante SII), representado por los abogados doña **María Carolina Peñailillo Tolosa**, doña **Francisca Buchheister Arrau**, don **Diego**

Hernández Maya, don Andrés Durán Rodríguez, don Lino Videla Bustillos y don Manuel Navarrete Gómez. Todos los intervinientes tienen domicilio y forma de notificación registrados en el Tribunal.

SEGUNDO: Acusaciones fiscal y particular. Que los hechos materia de las acusaciones deducidas en contra de los imputados, están contenidos en el auto de apertura de juicio oral, de fecha 6 de septiembre de 2023, en el siguiente tenor:

I.- Acusación fiscal:

“1.- Hechos, calificación jurídica y participación que se le atribuye a los imputados:

a) Los Hechos:

Los acusados, desde al menos el año 2016, se organizaron bajo el liderazgo de Yerko Silva Toro, contando con roles y tareas definidas con el objeto de vender vehículos robados como si fueran vehículos lícitos. Para esto crearon 16 empresas y han comprado y vendido a lo menos 211 vehículos.

1) La asociación adquirió vehículos robados, en su mayoría mediante violencia o intimidación; 2) Luego, presentando declaraciones y antecedentes falsos al Servicio de Impuestos Internos, abrieron giro y obtuvieron facturas para realizar la primera inscripción de los autos como si estos fueran nuevos. 3) En paralelo a los trámites de inscripción, se alteraban los números de motor y chasis, para que estos coincidieran con la placa patente, y los vendían a terceros de buena fe, sin levantar sospechas, como si se tratara de vehículos nuevos. De los vehículos adquiridos, adulterados y vendidos de esta manera, los primeros dos fueron inscritos por la asociación en la oficina del Registro Civil ubicada en la comuna de Cerro Navia.

2) Para lograr su cometido la organización actuaba de la siguiente manera:

Líder de la organización criminal:

Yerko Andrés SILVA TORO: Es quien tiene el rol de líder en la asociación ilícita investigada, él está detrás de todo el proceso delictual, desde la coordinación para la compra de vehículos robados, contactos para la modificación de los mismos, creación de empresas de papel, emisión de facturas, obtención de certificados de homologación, coordinación para el reclutamiento de testaferros para la inscripción en el Servicio de Registro Civil de los vehículos como nuevos y posterior venta de los mismos (sin perjuicio de delegar también dichas funciones en algunos de los imputados que han conformado y conforman el brazo operativo de la asociación), publicación de los vehículos en distintos portales de internet, coordinación para la exhibición de los vehículos a los posibles adquirentes, hasta la recepción del dinero producto de la actividad ilícita, coordinación del pago a los diversos actores involucrados, administración de los ingresos en un primer momento a través de su ex pareja Claudia SANDOVAL GODOY; y luego a través de su hermana Daniela ESPINOZA TORO, y posterior blanqueamiento de los mismos, en conjunto con su hermano Albano SILVA TORO y su núcleo familiar más cercano.

El imputado maneja la asociación desde el interior de los diversos centros de reclusión en que se ha encontrado, en cumplimiento de una condena por tráfico de drogas.

Yerko Silva Toro a través de terceros miembros de la asociación que actuaban bajo su dirección, participó activamente en las maniobras de engaño que dieron origen a la compraventa de la totalidad de los vehículos involucrados en el plan criminal, los que fueron adquiridos por víctimas de buena fe que creían adquirir vehículos lícitos, pagando por estos y siendo perjudicadas por montos superiores a 40 UTM en cada caso; vehículos que para tal efecto, a través de terceros miembros de la asociación, el imputado comercializó de la forma señalada, a sabiendas del origen ilícito de los mismos.

El imputado YERKO SILVA TORO, en su rol de líder de la organización criminal antes expuesta, dirigió el proceso de inicio de actividades y la posterior obtención de autorización de documentación tributaria electrónica de carácter falso, todo ello considerando que tanto él como el resto de los miembros de la organización, tenían pleno conocimiento de la falsedad de los antecedentes que se proporcionan al ente fiscalizador. Para esto, instruyó a terceras personas para presentar información falsa ante el SII. De esta manera, dichas sociedades presentan características comunes, tales como domicilios inexistentes o pertenecientes a otros contribuyentes, capitales que no se condicen con las características de sus socios o accionistas, utilización de testaferros, sociedades que no registran importaciones, todo ello a objeto de obtener la autorización y utilización de documentación tributaria electrónica que genere una apariencia de legalidad en la comercialización de vehículos de origen ilícito o para la comisión de otros ilícitos tributarios.

El imputado YERKO ANDRÉS SILVA TORO con el objeto de facilitar la comisión de los delitos investigados, constituyó diversas sociedades que fueron creadas maliciosamente mediante la proporción de datos falsos, con la única finalidad de obtener autorización de documentación tributaria para dar una apariencia lícita a la inscripción de los vehículos que habían sido sustraídos. Es así que durante los años comerciales 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, el imputado SILVA TORO proporcionó datos falsos en las declaraciones de iniciación de actividades de al menos 15 sociedades.

Las sociedades así constituidas, presentan los siguientes patrones comunes que permiten sostener su inicio de actividades de carácter ilícito:

1.- En primer término, obtuvieron la autorización de folios para la emisión de documentos tributarios de conformidad a la información disponible en las bases informáticas del Servicio.

2.- Fueron constituidas a través del portal de Registro de Empresas y sociedades de conformidad a la Ley N°20.659, así como también su inicio de actividades, el cual fue realizado desde dicho portal.

3.- Los supuestos socios no contaban con ingresos suficientes para la constitución de las sociedades, así como tampoco para desarrollar las actividades que estas informaron al SII.

4.- Ninguna de las sociedades presenta compras de vehículos de acuerdo con los documentos tributarios electrónicos que les fueron emitidos durante el período comprendido entre el 01 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2020.

5.- Ningún vehículo fue declarado o incorporado las Declaraciones de Ingreso (DIN) respectivas, que dieran cuenta de importaciones de cualquier clase.

6. Los domicilios informados por las sociedades son de carácter falso, y en su mayoría fueron informados como domicilio virtual, por ende, no se dispone de un lugar físico para el desarrollo de las actividades económicas informadas y no poseen dentro de sus registros comerciales bienes raíces de su propiedad que pudiesen ser utilizados para tales fines.

Una vez constituidas las sociedades, el imputado efectuó declaración de inicio de actividades de las sociedades mencionadas ante el Servicio de Impuestos Internos, proporcionando, a sabiendas, datos y antecedentes falsos respecto de las empresas mencionadas, según el siguiente detalle:

1. La sociedad AUTOMOTORA VALENZUELA Y ARCE SPA se constituyó mediante firma electrónica avanzada gestionada personalmente por su único socio CARLOS GÓMEZ ZÚÑIGA. Primero, la contribuyente informó una dirección inexistente en Avenida Kawel N°7530, Maipú. Al día siguiente, modificó su domicilio a Avenida Kawel N°203, Pudahuel, sin aportar antecedentes de respaldo. Finalmente, mantiene informada su dirección en Avenida Holanda N°099, oficina N°1101, indicando que se trataría de un arriendo autorizado ante notario sin aportar antecedentes de respaldo, contrato desconocido por los dueños del inmueble, INVERSIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES LIMITADA.

2. La sociedad AUTOMOTORA KOR SPA se constituyó mediante firma electrónica avanzada gestionada personalmente por sus socios CLAUDIO TAPIA OLGUÍN y CARLA SANDOVAL RIVEROS. La contribuyente Automotora Kor SpA, ha informado dos direcciones en Alonso de Córdova N°s 400 y 4125, en calidad de arrendataria, contratos desconocidos por la propietaria CONSTRUCTORA INARCO S.A. Posteriormente informó cambio de domicilio a José Córdova N°40006 en la comuna de La Granja, dirección inexistente.

3. La sociedad AUTOMOTORA NOVA SPA se constituyó mediante firma electrónica avanzada gestionada personalmente por sus socios HÉCTOR TAPIA PAILLAQUEO y MIGUEL PARDO CORTÉS. La sociedad informó su domicilio como un arriendo autorizado ante notario, en la dirección en calle Francisco Bilbao N°160 en la comuna de Providencia, sin aportar antecedentes que lo respalden.

4. La sociedad COMERCIALIZADORA FULL ORION LTDA. se constituyó mediante firma electrónica avanzada gestionada personalmente por sus socios IGNACIO ZAVALA HORMAZÁBAL y WILLIAM ORELLANA MORALES. La sociedad informó su domicilio en calle Los Pozos N°6855, departamento N°1056, informando que se trataba de un arriendo, sin aportar antecedentes de respaldo.

5. La sociedad COMPRAVENTA DE AUTOMÓVILES ORION LTDA. se constituyó mediante firma electrónica avanzada gestionada personalmente por sus socios IGNACIO ZAVALA HORMAZÁBAL y WILLIAM ORELLANA MORALES. Inicialmente, la contribuyente informó su domicilio en Muñoz Gamero N°201, comuna de Recoleta, sin aportar antecedentes de respaldo. Posteriormente, la contribuyente modificó su domicilio a Avenida Francisco Bilbao N°8750, indicando que se trata de un arriendo, contrato desconocido por el dueño de dicho inmueble, INMOBILIARIA CABURGA LIMITADA.

6. La sociedad AUTOMOTRIZ MÉNDEZ MOYA SPA se constituyó mediante firma ante notario gestionada personalmente por el único socio NELSON MÉNDEZ MOYA. La contribuyente informó su domicilio en calle Santo Domingo N°4532 en la comuna de Quinta Normal indicando que se trataba de un arriendo, contrato desconocido por el dueño de dicho inmueble, SERVICIOS INTEGRALES R 6 SPA.

7. La contribuyente OLÍMPICA AUTOS SPA, se constituyó mediante firma electrónica avanzada gestionada personalmente por sus socios JAIME TORO CARES y LUIS BEAS RIVEROS. La contribuyente mantiene su domicilio informado en la dirección Lo Boza N°431 en la comuna de Pudahuel, indicando que se trata de un arriendo autorizado ante notario, pero sin aportar antecedentes de respaldo sobre dicho contrato.

8. La sociedad AUTOMOTORA ASTORGA SPA, se constituyó mediante firma electrónica avanzada gestionada personalmente por su única socia PAULA ASTORGA ORELLANA. Inicialmente, la contribuyente informó domicilio en Alonso de Córdova N°2437, indicando que se trataba de un arriendo simple con el contribuyente NELSON MÉNDEZ MOYA, único accionista y representante legal de AUTOMOTORA MÉNDEZ MOYA SPA. Sin embargo, al verificar el certificado de avalúo fiscal de dicho inmueble se corroboró que el dueño de dicho inmueble es GOURMET MARKET SPA. Luego modificó su domicilio en dos oportunidades, indicando mantener arriendo con el contribuyente YARQUEN SOLUCIONES SPA por los inmuebles ubicados en Av. La Capitanía N°80, oficina N°108, comuna de Las Condes, y Avenida Camino a Melipilla N°9160, comuna de Cerrillos, sin antecedentes de respaldo.

9. La sociedad AUTOMOTORA BILBAO SPA, se constituyó mediante firma ante notaria gestionada personalmente por su único socio GUSTAVO VIVEROS VIVEROS. La contribuyente informó domicilio en calle José Joaquín Pérez N°4253, comuna de Quinta Normal, como arrendatario en virtud de un contrato con EDUARDO PINO ARTEAGA, sin antecedentes de respaldo. Luego informó nueva dirección en calle Monjitas N°550, comuna de Santiago, en virtud de contrato de arriendo con YARQUEN SOLUCIONES SPA, sin posterior confirmación. Posteriormente, modificó su domicilio a José Joaquín Pérez N°6056, comuna de Quinta Normal, indicando que se trataría de un arriendo con JOSÉ GRANADA VIDAL, contrato desconocido por éste último. Finalmente, informó como nueva dirección Avenida Irarrázaval N°4790, indicando que se trataría de un contrato de arriendo autorizado ante notario pero sin entregar respaldos de ello.

10. Las sociedades AUTOMOTRIZ PORTILLO SPA y AUTOMOTRIZ NUEVO LAREDO SPA se constituyeron ambas mediante firma electrónica avanzada gestionada personalmente por su único socio

JULIÁN MARTÍNEZ ARRIAGADA. Las contribuyentes informaron domicilio en Santo Domingo N°4532, comuna de Quinta Normal, indicando que se trataba de un contrato de arriendo simple e informando como dueño de la propiedad a la misma AUTOMOTRIZ PORTILLO SPA. Sin embargo, se corroboró que este pertenece a la sociedad SERVICIOS INTEGRALES R 6 SPA, la que desconoció cualquier contrato de arriendo.

11. La contribuyente IMPORTADORA BRUNNO FRITSCH SPA se constituyó mediante firma ante notario gestionada personalmente por su único socio HANS BRAVO RIVEROS. Dicho contribuyente informó como domicilio la dirección de Santo Domingo N°4536, comuna de Quinta Normal, con fecha 02.04.2019, señalando que lo utilizaba como arrendatario en virtud de un contrato con el contribuyente LUIS HERNÁNDEZ CABELLO, contribuyente que falleció en marzo del año 2012, siendo el actual dueño de la propiedad, SERVICIOS INTEGRALES R 6 SPA, quien desconoció cualquier vínculo con el contribuyente consultado.

12. La contribuyente COMERCIAL GILDEMEISTER SPA se constituyó mediante firma electrónica avanzada gestionada personalmente por su único socio Eduardo Sanhueza Pérez. Inicialmente, informó domicilio en Santo Domingo N°4540, comuna de Quinta Normal, señalando que lo utilizaba en virtud de un contrato de arriendo simple con el contribuyente SERVICIOS INTEGRALES R 6 SPA, quien desconoció el contrato. Luego informó domicilio en calle Ahumada N°312, oficina N°715, comuna de Santiago, indicando que lo utiliza como arrendataria en virtud de contrato con CARLOS LOBOS PINOCHET, quien desconoció dicho contrato.

13. Las contribuyentes AUTOMOTRIZ GUILLERMO MORALES SPA y C. HERNÁNDEZ SPA se constituyeron mediante firma ante notario gestionada personalmente por su único socio Alejandro Ruiz Arancibia y Renán Huenteo Maliqueo, respectivamente. Ambas contribuyentes informaron domicilio en calle Ahumada N°312, oficina N°715, comuna de Santiago, indicando que lo utilizan como arrendataria en virtud de contrato con CARLOS LOBOS PINOCHET, quien desconoció dichos contratos.

Recaudadoras de la organización:

Claudia SANDOVAL GODOY: Fue pareja del líder de la organización hasta principios del año 2020, con quien tiene una hija en común, y es hermana del imputado Camilo Sandoval. Durante ese tiempo, administró el dinero de la organización, pagando a los brazos operativos y testaferros montos variables por la ejecución de las distintas actuaciones esenciales para la realización del proceso delictual, y recibiendo dinero obtenido de la actividad de la asociación ilícita. Recibía instrucciones directas de Yerko SILVA TORO, telefónicamente y en visitas a los penales donde éste se encontraba; manteniendo contacto fluido con otros integrantes de la asociación, e incluso participó activamente en la entrega de facturas falsas de sociedades de fachada, al menos en una oportunidad, entregando instrucciones sobre la tramitación de inscripción de vehículos en el Registro Civil.

Daniela ESPINOZA TORO: Es hermana del líder de la asociación, Yerko SILVA TORO. La imputada mantiene en su poder el dinero obtenido por la organización producto de la actividad ilícita que ésta realiza, los que son de propiedad de Yerko, o al menos administrados desde su lugar de reclusión. Este rol lo asume preponderantemente con posterioridad a que su hermano y Claudia Sandoval terminaron su relación. Recibe instrucciones directas de Yerko SILVA, telefónicamente y en visitas a los penales donde éste se encuentra; manteniendo contacto fluido con otros integrantes de la asociación. Recibe depósitos en su cuenta corriente del Banco ITAÚ, desde el 30 de enero de 2017 al 3 de septiembre de 2019, de parte de Jeanette Toro Brenet, Adrian Espinoza Toro, Camilo Sandoval Godoy, Claudia Sandoval Godoy y Albano Silva Toro, entre otros, por un monto total de \$46.948.945. Todo lo anterior sin contar con ingresos formales que le permitieran justificar tales movimientos, de acuerdo a lo informado por el SII.

Brazos operativos:

Tatiana América ARANA ESPINOZA: Recibía instrucciones de Yerko SILVA TORO, ya sea telefónicamente, durante visitas carcelarias o a través de otros miembros de la asociación, y las retransmitía a otros miembros o las ejecutaba por sí misma. Contactaba a personas para que actuaran como testaferros, para la inscripción y venta de vehículos, también tenía contactos con los proveedores de vehículos robados. Depositaba dinero a Claudia SANDOVAL, producto de las actividades de la asociación ilícita y recibía dineros de Albano Silva Toro, hermano del líder de la asociación y brazo operativo de la misma. Participó como solicitante y adquirente de vehículos inscritos por las empresas investigadas, y en la posterior venta de los mismos, junto a otros blancos investigados, para lo cual incluso en oportunidades utilizaba el nombre de "Paula".

Tuvo un papel relevante en la asociación, ya que el líder confiaba plenamente en ella y le daba instrucciones que iban más allá de la ejecución del plan criminal, como por ejemplo, salir de su propio domicilio y eliminar cualquier elemento incriminatorio, posterior a la detención flagrante del imputado CAMILO SANDOVAL GODOY por delito de receptación, de fecha 22 de abril de 2019, para lo cual, la imputada se trasladó a un hotel junto a un tercero y el imputado LUIS ASTUDILLO PEÑA, ya condenado en esta causa.

Edith Nélida SILVA SANCHEZ: La imputada recibe instrucciones directas de Yerko Silva Toro, vía teléfono y en visitas carcelarias. Contacta a personas como testaferros, para la inscripción y venta de vehículos. Desempeñando sus funciones en la asociación ilícita, participó activamente en la compraventa de vehículos inscritos fraudulentamente a víctimas de buena fe, defraudándolas por diversos montos y generando de esta forma dinero ilícito para la asociación, el que posteriormente depositaba a las recaudadoras de la misma, para lo cual, mantuvo en su poder y comercializó dichos vehículos, sabiendo o no pudiendo menos que saber que estos habían sido previamente sustraídos y adulterados.

Albano Ariel SILVA TORO: Es hermano de Yerko Silva Toro, junto al cual, dentro del período investigado, mantuvieron dos locales de comida, Alto Machu Picchu y La Parrilla del Gaucho, ambos en la misma ubicación, siendo el segundo sucesor del primero, donde se inyectaba el dinero proveniente de los

ilícitos, y a través de los cuales la asociación realizó maniobras de lavado de activos, en el primero a través de flujos de dinero entre Albano y los imputados Víctor Quezada y Carolina Cornejo, y en el segundo, utilizando como fachada la sociedad “SYB SPA”, constituida por los hermanos Silva Toro a través de sus parejas, Paula BECERRA LEYTON y Claudia SANDOVAL GODOY.

Los locales son administrados por Albano Silva Toro y Paula Becerra Leyton, y el capital lo aportan los hermanos Silva Toro. El imputado recibe instrucciones directas de su hermano Yerko.

Desempeñando sus funciones en la asociación ilícita, el imputado solicitó la primera inscripción del vehículo PPU LPHD.24, y al menos participó activamente en las maniobras de engaño que resultaron en la compraventa de los vehículos PPU HFX.33 y LJPX.58, a las víctimas de buena fe que, engañadas de esta forma, adquirieron dichos vehículos, pagando por los mismos y siendo perjudicadas en montos superiores a las 40 UTM en cada caso, siendo reconocido al menos en un caso junto al imputado Juan Navarrete y el imputado Marco Supanta, ya condenado por estos hechos. Vehículos que para tal efecto mantuvo en su poder y comercializó, sabiendo o no pudiendo menos que saber que estos habían sido previamente sustraídos y adulterados de la forma ya señalada.

El día 16 de octubre de 2020, en horas de la madrugada, al interior del restaurant “La Parrilla del Gaucho” ubicado en avenida Gladys Marín N° 6106, comuna de Estación Central, durante la ejecución de una diligencia de entrada y registro autorizada mediante resolución de 14 de octubre de 2020 en esta causa, el imputado ya individualizado mantenía en su poder el vehículo marca PORSCHE, PPU GXPD.55, que tenía encargo vigente por robo con intimidación de 15.07.2020, sin portar sus placas patentes, conociendo o no pudiendo menos que conocer su origen ilícito.

Sebastián Andrés MARTINEZ ZAVALA: Constituye las empresas de fachada utilizadas por la asociación para “blanquear” los vehículos robados y posteriormente modificados. Una vez realizado el trámite de constitución por parte de los testaferros, falsificaba poderes amplios a su nombre y los presentaba ante el Servicio de Impuestos Internos para obtener los permisos para después poder facturar y realizar la gestión de inscripción en el Registro Civil. Mantiene contacto directo con Yerko SILVA TORO y otros miembros de la asociación, recibiendo depósitos de Claudia SANDOVAL GODOY como forma de pago, de lo cual queda registro en las escuchas telefónicas autorizadas judicialmente.

El día 16.10.2020, durante la ejecución de una orden de entrada y registro autorizada judicialmente en causa RUC 1800227155-5, el imputado mantenía en su poder diversos documentos vinculados a la asociación, entre ellos, poderes amplios a nombre de Claudia Sandoval Godoy, Hans Bravo Riveros (socio de importadora Bruno Fritsch), y Julián Martínez Arriagada (socio de Nuevo Laredo SpA), un contrato de compraventa del vehículo PPU KKLL.10, fotocopias de cédulas de identidad con timbres y firmas de Notaría, documentos que fueron confeccionados personalmente por el imputado, simulando la intervención de los involucrados y atribuyéndoles participación falsamente, fingiendo sus respectivas firmas para ello, además de documentación de Automotora Bilbao SPA, Automotriz Moya SPA, Brunno Fritsch y Automotriz Méndez

Moya. Para tales fines, el imputado utilizó un timbre de la 46ª Notaría Alberto Mozo Aguilar y 2 timbres de agua de la citada Notaría y de la 37ª Notaría Nancy de la Fuente, los que se acreditó durante la investigación que son falsos, de confección artesanal, y que el imputado mantenía en su poder, en su domicilio, al momento de su detención.

Camilo Sammy SANDOVAL GODOY: El imputado ejecuta diversas actividades claves para el funcionamiento de la asociación, entre ellas, contacta a los proveedores de vehículos robados, participando en algunos casos en la compraventa de estos, contacta a los testaferros para la inscripción de los vehículos adulterados y su posterior compraventa, participando en algunos casos directamente en esta; también mantiene contacto con otros miembros de la asociación que realizan las modificaciones físicas de los vehículos para su proceso de reinscripción con una identidad nueva. Deposita dinero a Claudia SANDOVAL y Daniela ESPINOZA TORO, en sus roles de tesoreras de la organización. Además, consta en sus productos bancarios la recepción de 20 depósitos, por parte del imputado Ilich Chopá Aldana, por un monto total de \$5.595.000.

Con fecha 22 de abril de 2019, el imputado fue sorprendido por personal policial en la comuna de Renca, conduciendo un vehículo marca Nissan modelo Qashqai, PPU LDHP.37, la que, contrastada con el número de chasis no coincidía, correspondiendo dicho número al automóvil PPU KHCR.97, que mantenía encargo vigente por delito de robo con intimidación de 09.04.2019, a su vez, las placas que portaba, tenían encargo vigente por delito de robo en bien nacional de uso público, de 11.04.2019. El imputado conocía, o no podía menos que conocer el origen ilícito del vehículo.

Desempeñando sus funciones en la asociación ilícita, el acusado al menos participó activamente en las maniobras de engaño que resultaron en la compraventa de los vehículos PPU LDLS.12, JHFW.67, JHFW.87, JHFW.91 y GYLH.70, a las víctimas de buena fe que, engañadas de esta forma, adquirieron dichos vehículos, pagando por los mismos y siendo perjudicadas en montos superiores a las 40 UTM en cada caso, siendo reconocido al menos en un caso junto a Tatiana Arana. Vehículos que para tal efecto mantuvo en su poder y comercializó, sabiendo o no pudiendo menos que saber que estos habían sido previamente sustraídos y adulterados de la forma ya señalada.

El día 16 de octubre de 2020, en horas de la madrugada, en el domicilio ubicado en Los Arrayanes 6850, comuna de Lo Prado, durante la ejecución de una diligencia de entrada y registro autorizada por el tribunal competente, mediante resolución de 14 de octubre de 2020 en causa RUC 1800227155-5, el imputado ya individualizado fue sorprendido teniendo en su poder un arma de fuego tipo revolver calibre 32, con 6 cartuchos, serie N° 287041, la que se encuentra apta para el disparo, sin contar con las autorizaciones correspondientes.

Por último, el imputado SANDOVAL GODOY proporcionó al Servicio de Impuestos Internos datos falsos en la iniciación de actividades de la sociedad AUTOMOTORA BILBAO SPA., a objeto de obtener la

autorización y utilización de documentación tributaria electrónica, de tal forma de generar apariencia de legalidad en la comercialización de vehículos de origen ilícito o para la comisión de otros ilícitos tributarios.

Freddy Alejandro MIRANDA ARANA: Mantiene relación directa con Yerko Silva Toro y otros miembros de la asociación, recibiendo instrucciones del primero por teléfono o en visitas carcelarias, sirviendo como nexo entre éste y otros brazos operativos. Participa activamente de las actividades de la asociación junto a su madre Tatiana Arana y se relaciona, además, directamente con Franco CRUZ ILIGARAY, Aimel GAVILAN CARO y Sebastián Martínez ZABALA, contactando a proveedores de vehículos robados y a testaferros y palos blancos para la inscripción de los vehículos modificados por la asociación, y su posterior compraventa, realizando incluso dichas labores él mismo en algunas oportunidades, y depositando el dinero obtenido a Claudia Sandoval.

Luis Felipe ASTUDILLO PEÑA: El imputado, apodado "Raperito", realiza diversas funciones para la asociación, entre ellas, está encargado del contacto con los proveedores de vehículos robados, inscripción de los mismos y reclutamiento de testaferros para su inscripción y adquisición.

Ilich Alexis CHOPA ALDANA: Brazo operativo de la asociación en el sur del país, específicamente en la ciudad de Los Ángeles. Participa en la constitución de las empresas que utiliza la asociación para la venta de vehículos, específicamente respecto de "Automotora Nuevo Laredo SPA" y "Automotriz Portillo SPA", pagando en ambas la firma electrónica, mediante transferencia electrónica desde su cuenta vista del banco BCI N° 74679694. Desde la misma cuenta vista, según información obtenida judicialmente con el levantamiento del secreto bancario, efectuó depósitos a diferentes miembros de la asociación, entre ellos: 20 depósitos a Camilo Sandoval Godoy por un monto total de \$5.595.000, un depósito a Jorge Salinas Uribe por el monto total de \$250.000, 6 depósitos a Franco Cruz Iligaray por un monto total de \$810.000.

Desempeñando sus funciones en la asociación ilícita, el acusado al menos participó activamente en las maniobras de engaño que resultaron en la compraventa de los vehículos PPU KJCT.68 y KPYL.92, a las víctimas de buena fe que, engañadas de esta forma, adquirieron dichos vehículo, pagando por estos y siendo perjudicadas en montos superiores a las 40 UTM en cada caso. Vehículos que para tal efecto mantuvo en su poder y comercializó, sabiendo o no pudiendo menos que saber que habían sido previamente sustraídos y adulterados de la forma ya señalada.

Jesús GACITÚA CANDIA: Brazo operativo de la organización criminal. Mantiene relación directa con Yerko SILVA TORO, quien utiliza su cuenta del Banco Santander N° 71000184335, bajo su consentimiento, para desarrollar la actividad ilícita, realizando transferencias a otros brazos operativos, testaferros y familiares, a saber: Juan Francisco Navarrete Vásquez, Francisca Venegas Miranda (actual pareja de Yerko Silva Toro), Daniela Espinoza Toro, entre otros, además de recibir dineros en la cuenta producto de las acciones ilícitas ejecutadas.

Juan NAVARRETE VASQUEZ: Brazo operativo de la organización y tributación. Mantiene relación directa con el líder Yerko SILVA TORO, por medio de contacto telefónico, mensajes por whatsapp y presencial mediante visitas al lugar de reclusión de Silva Toro. Recibe depósitos de la asociación. Realiza en la calle las operaciones que le señala el líder, especialmente trámites notariales y otros necesarios dentro del proceso de “blanqueo” de los vehículos.

Desempeñando sus funciones en la asociación ilícita, el acusado al menos participó activamente en las maniobras de engaño que resultaron en la compraventa de los vehículos PPU LPHC.30 y LJPX.58, a las víctimas de buena fe que, engañadas de esta forma, adquirieron dichos vehículos, pagando por los mismos y siendo perjudicadas en montos superiores a las 40 UTM en cada caso, siendo reconocido al menos en un caso junto al acusado Albano Silva y el imputado Marco Supanta, ya condenado por estos hechos. Vehículos que para tal efecto mantuvo en su poder y comercializó, sabiendo o no pudiendo menos que saber que estos habían sido previamente sustraídos y adulterados de la forma ya señalada.

Paralelamente, con el propósito de contribuir a la operatividad de la asociación, durante los años comerciales 2018 y 2020, el imputado Juan Navarrete contribuyó en la creación e inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos, de las empresas Gildemeister Motor Spa y Brunno Fresh SpA, cuyo único socio y representante legal es Jonathan Carrión Muñoz; Automotriz Soliste Spa, cuyo único socio y representante legal es Víctor Solís Torres; y Automotora Bilbao Spa, representada legalmente por Gustavo Viveros Viveros. El imputado efectuó la verificación en notaría de las firmas digitales de los socios, requeridas para la creación de dichas sociedades, pagando por dichos trámites y a quien el notario correspondiente emitió las boletas de honorarios.

Una vez constituidas las sociedades, con el objeto de obtener autorización de folios para la emisión de documentos tributarios electrónicos, que les permitieran acceder a facturas electrónicas con las cuales inscribir los vehículos sustraídos ante el Registro Civil como si estos fuesen nuevos, dándoles una nueva identidad, el imputado efectuó declaración de inicio de actividades de las sociedades mencionadas ante el Servicio de Impuestos Internos, proporcionando, a sabiendas, datos y antecedentes falsos respecto de las empresas mencionadas, según el siguiente detalle:

AUTOMOTRIZ SOLISTE SPA, RUT 77.178.321-K: La sociedad fue constituida el 30.06.2020, misma fecha en que realizó inicio de actividades en los giros de “Venta al por menor de vehículos automotores nuevos o usados” y “Asesoría y gestión en la compra o venta de pequeñas y medianas empresas”, ambas afectas a Impuesto de Primera Categoría e Impuesto al Valor Agregado.

La referida sociedad informó como domicilio la dirección de Morandé N°835, Oficina 518, en la comuna de Santiago Centro, en la Región Metropolitana, domicilio que resultó ser ficticio, ya que si bien el domicilio existe, su propietario indicó no tener ningún contrato de arriendo con Automotriz Soliste SpA ni su representante legal, por lo que no cuentan con autorización para utilizar dicho domicilio.

Efectuada la revisión de ingresos del socio exclusivo Jonathan Carrión Muñoz, se pudo constatar que no habría recibido ingreso alguno, de forma que no contaba con ingresos suficientes para la suscripción de acciones que se declara haber efectuado en la escritura de constitución, donde se señala que el aporte de capital fue suscrito y pagado por la suma de \$50.000.000 en efectivo a la fecha de la constitución.

GILDEMEISTER MOTOR SPA, RUT 77.135.184-0: La sociedad fue constituida el 06.03.2020 e inicio de actividades el 09.03.2020 con un capital inicial de \$30.000.000 y el giro "Otras actividades de dotación de recursos humanos", el que se encuentra afecto al Impuesto de Primera Categoría y al Impuesto al Valor Agregado. Y se encuentra acogida al Régimen Pro Pyme General con contabilidad completa, contenido en el artículo 14 letra D N°3 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

El domicilio registrado por la contribuyente es Ahumada N°312, oficina N°715, en la comuna de Santiago Centro, de la Región Metropolitana, domicilio que resultó ser ficticio, ya que si bien el domicilio existe, su propietario indicó no tener ningún contrato de arriendo con Gildemeister Motor Spa ni su representante legal, por lo que no cuentan con autorización para utilizar dicho domicilio.

En la escritura de constitución de la sociedad se declaró un capital suscrito y pagado de \$30.000.000, en circunstancias de que su único accionista y representante legal el Sr. Jonathan Andrés Carrión Muñoz no posee ingresos suficientes para haber podido efectuar la suscripción de acciones correspondiente.

BRUNNO FRESH, RUT 77.135.192-1: La sociedad fue constituida el 06.03.2020 sin inicio de actividades, ni emisión de documentos tributarios de ningún tipo. Fue constituida a través del Registro de Empresas y Sociedades e informa un capital enterado de \$20.000.000.

La Sociedad registró como domicilio ante el Servicio de Impuestos Internos, Santo Domingo N°4535, en la comuna de Quinta Normal, verificando la inexistencia del mismo. Sin embargo al revisar la escritura de constitución se pudo constar que el domicilio correspondía a Santo Domingo N°4536, el cual resultó ser ficticio, puesto que su propietario declaró que ni Jonathan Carrión Muñoz ni Brunno Fresh SpA son arrendatarias de la propiedad ubicada en Santo Domingo N°4536, en la comuna de Quinta Normal, sino que en dicho domicilio trabaja Servicios Integrales SpA.

Jonathan Carrión Muñoz, único socio y representante legal, no contaba con ingresos suficientes para la constitución de la sociedad Brunno Fresh SpA cuyo capital enterado declarado fue de \$20.000.000, pues de acuerdo a lo informado por los agentes retenedores el contribuyente recibió sueldos en los años tributarios 2017 a 2019, por un valor total de \$3.140.009 y honorarios en los años tributarios 2021 por \$4.768.921 y 2017 por \$71.790.

No obstante, la contribuyente no cuenta con inicio de actividades y por tanto tampoco con autorización de emisión de documentos tributarios.

AUTOMOTORA BILBAO SPA, RUT 76.920.261-7: El imputado Juan Navarrete Vásquez reclutó al testaferro Gustavo Viveros Viveros para la constitución de la sociedad Automotora Bilbao SpA, pagando una suma de dinero para que éste afirmara ser socio, entregando información falsa en el inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos con el fin de permitir la emisión de documentación tributaria.

Franco CRUZ ILIGARAY: Cumple el rol de confeccionar las facturas de las empresas de papel que mantiene la organización, con los nombres de las personas que realizan la solicitud de primera inscripción en el Servicio de Registro Civil e Identificación, para posteriormente registrar como dueños de los vehículos provenientes de delitos que han sido previamente modificados y adulterados, para finalmente ser comercializados por integrantes de la organización. Mantiene comunicación constante y directa con Yerko SILVA TORO y otros miembros de la asociación, recibiendo el pago por parte de Claudia Sandoval.

Aimel Osiel GAVILAN CARO: Realiza las modificaciones de los números de motor y chasis a los vehículos robados, y confecciona los stickers de seguridad que se ubican en las puertas y parabrisas de los mismos, para defraudar al sistema registral y a los potenciales compradores de buena fe, vehículos que posteriormente son inscritos con su nueva numeración y vendidos como nuevos. Muestra de lo anterior consta en imágenes que mantenía en su teléfono celular el imputado Camilo Sandoval Godoy. La asociación le realiza transferencias por sus trabajos.

Roberto Antonio BASCUR ARANCIBIA: Confecciona los “stickers”, que son adhesivos pegados debajo del parabrisas y en los perfiles de las puertas de los vehículos, con la identificación del número de VIN de los mismos, los que en este caso reflejan los números adulterados, coincidiendo con la nueva identidad obtenida fraudulentamente, de manera de favorecer el engaño a las víctimas estafadas. Mantiene relación directa con el imputado Camilo Sandoval Godoy.

Vendedores:

David MILLALEN LLANCAO: Obedeciendo instrucciones del imputado Juan Navarrete, bajo la dirección de Yerko Silva, ha participado en la exhibición y venta de autos robados junto a otros miembros de la asociación.

Con fecha 23.01.2020, el imputado fue sorprendido en la comuna de Santiago, transitando a bordo de una camioneta Marca Nissan, Modelo Qashqai, PPU LPHB.53, inscrita con factura de la empresa de papel Automotora Guillermo Morales SPA. Además, al interior del citado vehículo, mantenía documentación de la empresa de papel Comercial Gildemeister SPA. Una vez periciado el móvil, se determinó que estaba adulterado en sus números de chasis y motor, correspondiendo su verdadera identidad al vehículo PPU KYDV.92, con encargo vigente por delito de robo con violencia de fecha 16.12.2019, conociendo el imputado su origen ilícito, o no pudiendo menos que conocerlo.

El día 16.10.2020 en horas de la madrugada, en el domicilio ubicado en calle Sara Gajardo N° 6449, comuna de Cerro Navia, durante la ejecución de una diligencia de entrada y registro autorizada por el

tribunal competente, mediante resolución de 14 de octubre de 2020 en causa RUC 1800227155-5, el imputado fue sorprendido teniendo en su poder 01 revolver marca Taurus, calibre.38 especial, N° serie 1562991 más 01 cargador con 6 cartuchos del mismo calibre en su interior, 01 pistola marca CZ modelo 75 calibre 9mm N° de serie XB2412 más 01 cargador, con 12 cartuchos calibre 9 mm en su cargador, y 01 pistola marca Brevete SGD G N° de serie 176438, con 7 cartuchos del mismo calibre en su cargador, además de 27 municiones de distintas marcas y calibres, sin contar con las autorizaciones correspondientes; elementos que se encuentran aptos para el disparo o para ser disparados.

Alejandro YAÑEZ RECABAL: Desempeñando sus funciones en la asociación ilícita, solicitó la primera inscripción de diversos vehículos de la asociación, y participó en la venta de los mismos, siendo reconocido al menos por una víctima estafada.

José Reinaldo RAIMAN CORDERO: Desempeñando sus funciones en la asociación ilícita, el imputado participó en la inscripción de diversos vehículos ante el Registro Civil, y al menos participó activamente en las maniobras de engaño que resultaron en la compraventa de los vehículos PPU JCKK.31 y JLL.87, a las víctimas de buena fe que, engañadas de esta forma, adquirieron dichos vehículos, pagando por los mismos y siendo perjudicadas en montos superiores a las 40 UTM en cada caso; siendo reconocido por estas junto a la imputada Edith Silva Sánchez, ya condenada por estos hechos. Vehículos que para tal efecto mantuvo en su poder y comercializó, sabiendo o no pudiendo menos que saber que estos habían sido previamente sustraídos y adulterados de la forma ya señalada.

Germán del Carmen DUARTE PEREIRA: Desempeñando sus funciones en la asociación ilícita, el imputado solicitó la primera inscripción y primera adquisición de diversos vehículos, y al menos participó activamente en las maniobras de engaño que resultaron en la compraventa de un vehículo a la víctima de buena fe que, engañada de esta forma, adquirió dicho vehículo, pagando por este y siendo perjudicada en un monto superior a las 40 UTM, siendo reconocido por la víctima junto a Tatiana Arana. Vehículo que para tal efecto mantuvo en su poder y comercializó, sabiendo o no pudiendo menos que saber que este había sido previamente sustraído y adulterado de la forma ya señalada.

José Alfredo PAREDES QUEVEDO: Desempeñando sus funciones en la asociación ilícita, el acusado realizó solicitudes de diversos vehículos, y al menos participó activamente en las maniobras de engaño que resultaron en la compraventa de los vehículos PPU JSSD.29 y JHFX.82, a las víctimas de buena fe que, engañadas de esta forma, adquirieron dichos vehículo, pagando por los mismos y siendo perjudicadas en un monto superior a las 40 UTM en cada caso. Vehículos que para tal efecto mantuvo en su poder y comercializó, sabiendo o no pudiendo menos que saber que estos habían sido previamente sustraídos y adulterados de la forma ya señalada.

Carlos GOMEZ ZUÑIGA: Desempeñando sus funciones en la asociación ilícita, solicitó la primera inscripción y primera adquisición de diversos vehículos, y participó en la posterior venta de los mismos.

Dueño y socio de la empresa “Valenzuela & Arce”, empresa ficticia creada para inscribir vehículos y darles apariencia de legalidad, burlando al sistema tributario y registral, de la forma mencionada.

Ignacio Andrés ZAVALA HORMAZABAL: Desempeñando sus funciones en la asociación ilícita, solicitó la primera inscripción y primera adquisición de diversos vehículos, y participó en la posterior venta de los mismos. Dueño y socio de las empresas “Orión Ltda.” y “Full Orión”; empresas ficticias creadas para inscribir vehículos y darles apariencia de legalidad, burlando al sistema tributario y registral, de la forma mencionada. Mantiene contacto directo con Yerko Silva Toro.

Jorge PROVOSTE SALGADO: Desempeñando sus funciones en la asociación ilícita, solicitó la primera inscripción y primera adquisición de diversos vehículos de la asociación, y participó en la posterior venta de los mismos, a través de su empresa AUTOMOTORA PROCAR LTDA.

Inscriptores de vehículos:

Jorge Octavio SALINAS URIBE: Solicitó la primera inscripción de 8 vehículos, utilizando las facturas ideológicamente falsas, obtenidas por la asociación mediante declaración de un giro inexistente ante el Servicio de Impuestos Internos.

En el contexto de la asociación, trabaja para Camilo SANDOVAL y Tatiana ARANA, siguiendo sus instrucciones, y consta la recepción de un depósito de parte del imputado Ilich Chopa Aldana, por el monto de \$250.000.

Nicolás Sebastián CHACÓN NAVARRO: Solicitó la primera inscripción de 28 vehículos, utilizando las facturas ideológicamente falsas, obtenidas por la asociación mediante declaración de un giro inexistente ante el Servicio de Impuestos Internos. Es dueño único de la empresa investigada “SOBRERUEDAS SPA”, creada para inscribir vehículos y darles apariencia de legalidad, burlando al sistema tributario y registral.

Carla Francisca LEAL LEAL: Desempeñando su rol en la asociación, solicitó la primera inscripción de un vehículo y registró como primer adquirente dos vehículos robados y reinscritos de la forma señalada.

Marco SUPANTA AGUILERA: Solicitó la primera inscripción de 5 vehículos, utilizando las facturas ideológicamente falsas, obtenidas por la asociación mediante declaración de un giro inexistente ante el Servicio de Impuestos Internos.

Sergio CALFUEN CARRASCO: Solicitó la primera inscripción de 4 vehículos, utilizando las facturas ideológicamente falsas, obtenidas por la asociación mediante declaración de un giro inexistente ante el Servicio de Impuestos Internos.

Sebastián DIAZ SALINAS: Solicitó la primera inscripción de 5 vehículos, utilizando las facturas ideológicamente falsas, obtenidas por la asociación mediante declaración de un giro inexistente ante el Servicio de Impuestos Internos.

Jonathan PEREZ PEREZ: Solicitó la primera inscripción de 4 vehículos, utilizando las facturas ideológicamente falsas, obtenidas por la asociación mediante declaración de un giro inexistente ante el Servicio de Impuestos Internos.

Nelson MENDEZ MOYA: Desempeñando sus funciones en la asociación ilícita, solicitó la primera inscripción de un vehículo y registra como primer adquirente de tres vehículos. Además, participó activamente en las maniobras de engaño que resultaron en la compraventa del vehículo PPU HHBL-27 a una víctima de buena fe que, engañada de esta forma, adquirió dicho vehículo, pagando por este y siendo perjudicada en un monto superior a las 40 UTM. Vehículo que para tal efecto mantuvo en su poder y comercializó, sabiendo o no pudiendo menos que saber que había sido previamente sustraído y adulterado de la forma ya señalada. Por último, es socio en dos empresas: "AUTOMOTORA MENDEZ MOYA SPA", con 10 vehículos inscritos, y "AUTOMOTORA MOYA SPA", sin vehículos inscritos; empresas ficticias creadas para inscribir vehículos y darles apariencia de legalidad, burlando al sistema tributario y registral, de la forma ya señalada.

Socios de las empresas ficticias:

El rol de los imputados William ORELLANA MORALES, Carla SANDOVAL RIVEROS, Claudio TAPIA OLGUIN, Julián MARTINEZ ARRIAGADA, Gustavo VIVEROS VIVEROS, Paula ASTORGA ORELLANA, Héctor TAPIA PAILLAQUEO, Miguel PARDO CORTÉS, Hans BRAVO RIVEROS, Jaime TORO CARES, Luis BEAS RIVEROS, Alejandro RUIZ ARANCIBIA, Eduardo SANHUEZA PEREZ y Renán GUENTEO MALIQUEO fue constituir empresas ficticias para favorecer el blanqueo de los vehículos a través de facturas falsas que permitieran su primera inscripción; estas empresas ficticias eran creadas para inscribir vehículos y darles apariencia de legalidad, burlando al sistema tributario y registral, de la forma ya señalada.

Para esto, los imputados crearon y son dueños de las siguientes empresas: Valenzuela y Arce SPA, Méndez Moya SPA; Orión Ltda., Full Orión, Kor SPA, Nuevo Laredo SPA, Portillo SPA, Automotora Bilbao, Astorga SPA, Nova SPA, Brunno Fritsch Spa, OLÍMPICA AUTOS SPA, GUILLERMO MORALES SPA, COMERCIAL GILDEMEISTER SPA, C. HERNÁNDEZ SPA y Soliste SPA.

3) Delitos del plan criminal:

La Asociación Ilícita adquiere vehículos obtenidos mediante delitos de sustracción, en su casi totalidad, robos con intimidación o violencia, para posteriormente "blanquearlos". Los vehículos son adulterados y reinscritos de la forma fraudulenta ya descrita.

Para estos efectos, la asociación, a través de algunos de sus miembros, constituyó diversas sociedades que fueron creadas maliciosamente, mediante entrega de datos falsos en las declaraciones de iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos, con la única finalidad de obtener autorización de documentación tributaria y así dar una apariencia lícita a la inscripción de los vehículos previamente sustraídos y adulterados; sociedades con domicilios inexistentes o no correspondientes, que no desarrollaron las actividades del giro declaradas ante dicho organismo.

De este modo la asociación ilícita constituyó las siguientes empresas:

A.- VALENZUELA Y ARCE SPA, RUT 76.807.369-4, con giro asociado a la “compraventa al por menor de vehículos motorizados nuevos o usados”, y fecha de inicio de actividades el día 30 de noviembre de 2017, la que fue constituida a través del portal web “Empresa en un día”, bajo la modalidad de Firma Electrónica Avanzada, previa concurrencia personal del imputado y único socio Carlos Andrés GÓMEZ ZÚÑIGA a la entidad acreditadora.

La asociación a través de esta empresa, inscribió como nuevos en el Registro Civil, a sabiendas que se trataba de vehículos robados y adulterados, los siguientes 10 vehículos: PPU KBSR.10, HYFL.43, JJLG.46, GPCH.74, JXRD.49, KBWK.63, KBKR.44, HHBL.28, JZLP.77 y KCFD.17.

B.- AUTOMOTORA KOR SPA, RUT N°76.825.403-6, con giro asociado a la “compraventa al por menor de vehículos motorizados nuevos o usados”, e inicio de actividades el día 03 de agosto de 2017, la que fue constituida a través del portal web “Empresa en un día”, bajo la modalidad de Firma Electrónica Avanzada, previa concurrencia personal de los imputados y socios Claudio TAPIA OLGUÍN y Carla SANDOVAL RIVEROS, a la entidad acreditadora.

La asociación a través de esta empresa, inscribió como nuevos en el Registro Civil, a sabiendas que se trataba de vehículos robados y adulterados, los siguientes 12 vehículos: PPU JRZY.69, GYPP.92, JCCJ.30, JCKK.31, JPSP.56, GYLH.70, JJLL.87, GKWP.19, HHBL.12, HHBL.27, JYPV.39, JZKY.32.

C.- AUTOMOTORA NOVA SPA, RUT N°76.825.403-6, con giro asociado a la “compraventa al por menor de vehículos motorizados nuevos o usados” e inicio de actividades el día 22 de enero de 2018, la que fue constituida a través del portal web “Empresa en un día”, bajo la modalidad de Firma Electrónica Avanzada, previa concurrencia de los imputados y socios Héctor TAPIA PAILLAQUEO y Miguel PARDO CORTÉS a la entidad acreditadora, quienes realizaron personalmente los trámites pertinentes para la obtención de la misma.

La asociación a través de esta empresa, inscribió como nuevos en el Registro Civil, a sabiendas que se trataba de vehículos robados y adulterados, los siguientes 48 vehículos: PPU KJCT.68, JXRD.74, KGFB.18, KBWV.94, KJLJ.52, KHKY.11, KHPB.88, GYKK.86, HYZD.81, KCPT.20, HYDG.53, HYDG.38, GKWP.22, GKWP.23, KJPX.90, KDVI.76, JRZZ.79, JRZZ.96, KHSW.68, KHSW.93, KHSW.94, HSG.054, KHGR.40, KJST.23, KJCT.95, KLLT.68, KGFC.20, KGFC.33, KHPC.38, KCPT.44, KCPT.36, HYDG.43, KKYG.90, KHSW.99, KPGW.13, KPFT.53, KHSD.85, KLJK.79, KPFR.79, KPFT.54, KLJK.76, HYDG.48, KPTT.73, KRWC.10, HYDG.45, KGFC.48, KLJL.40, KRKD.59.

D.- COMERCIALIZADORA FULL ORION LTDA., RUT N°76.689.663-4, con giro asociado a la “compraventa al por menor de vehículos motorizados nuevos o usados” e inicio de actividades el día 31 de diciembre de 2016, la que fue constituida a través del portal web “Empresa en un día”, bajo la modalidad de Firma Electrónica Avanzada, previa concurrencia de los imputados y socios, Ignacio ZAVALA HORMAZÁBAL

y William ORELLANA MORALES, a la entidad acreditadora, quienes realizaron personalmente los trámites pertinentes para la obtención de la misma.

La asociación a través de esta empresa, inscribió como nuevos en el Registro Civil, a sabiendas que se trataba de vehículos robados y adulterados, los siguientes 6 vehículos: PPU JJSD.29, JHFX.82, GZTH.48, JTGR.48, HSWJ.63, HFX.33.

E.- COMPRAVENTA DE AUTOMOVILES ORION LTDA., RUT N° 76.687.982-9, con giro asociado a la “compraventa al por menor de vehículos motorizados nuevos o usados” e inicio de actividades con fecha 27 de diciembre de 2016, la que fue constituida a través del portal web “Empresa en un día”, bajo la modalidad de Firma Electrónica Avanzada, previa concurrencia de los imputados y socios, Ignacio ZAVALA HORMAZÁBAL y William ORELLANA MORALES, a la entidad acreditadora, quienes realizaron personalmente los trámites pertinentes para la obtención de la misma.

La asociación a través de esta empresa, inscribió como nuevos en el Registro Civil, a sabiendas que se trataba de vehículos robados y adulterados, los siguientes 10 vehículos: PPU JHHR.66, GYKK.46, GYKK.56, JHJV.67, JHFW.67, JHFW.87, JHFW.91, HFX.32, JGYD.61, JPPW.84.

F.- AUTOMOTRIZ MÉNDEZ MOYA SPA., RUT N°76.861.015-0, con giro asociado al “cultivo de trigo”, e inicio de actividades el día 27 de abril de 2018, la que fue constituida a través del portal web “Empresa en un día”, bajo la modalidad de firma ante notario, para lo cual el imputado y socio Nelson Méndez Moya concurrió personalmente a completar el trámite, mediante firma estampada ante la notaria Claudia Gómez Lucares.

La asociación a través de esta empresa, inscribió como nuevos en el Registro Civil, a sabiendas que se trataba de vehículos robados y adulterados, los siguientes 10 vehículos: PPU KKTP.99, KKTR.11, KKTR.26, KKTR.36, KKTR.44, KSCV.55, KPSD.13, KPSD.14, KRVV.61, KPYJ.33.

G.- OLÍMPICA AUTOS SPA, RUT 76.907.435-K, con giro asociado a “la compraventa al por menor de vehículos motorizados nuevos o usados” e inicio de actividades el día 19 de agosto de 2018, la que fue constituida a través del portal web “Empresa en un día”, bajo la modalidad de Firma Electrónica Avanzada, previa concurrencia de los imputados y socios, Jaime Alberto TORO CARES y Luis Guillermo BEAS RIVEROS, a la entidad acreditadora, quienes realizaron personalmente los trámites pertinentes para la obtención de la misma.

La asociación a través de esta empresa, inscribió como nuevos en el Registro Civil, a sabiendas que se trataba de vehículos robados y adulterados, los siguientes 28 vehículos: PPU JCDJ.56, JCYL.86, JCYL.94, JCYL.95, JKXX.64, JPTP.98, KRWC.37, KRWC.39, KRWC.50, KRWC.51, KRWC.52, KRWC.53, KSSC.67, KTFG.93, KTFG.97, KTFG.98, KTXK.84, KXHK.17, KXHV.23, KYDX.56, GWZD.31, KRWC.17, KSWY.32, KTVV.28, KTZB.43, KTZB.44, KVLB.29, KYBZ.61.

H.- AUTOMOTORA ASTORGA SPA, RUT N°76.848.081-8, con giro asociado al lavado de vehículos, e inicio de actividades el día 23 de marzo de 2018, la que fue constituida a través del portal web “Empresa en un día”, bajo la modalidad de Firma Electrónica Avanzada, previa concurrencia personal de la imputada Paula ASTORGA ORELLANA a la entidad acreditadora, quien realizó personalmente los trámites pertinentes para la obtención de la misma.

La asociación a través de esta empresa, inscribió como nuevos en el Registro Civil, a sabiendas que se trataba de vehículos robados y adulterados, los siguientes 5 vehículos: PPU KHKW.72, KHTC.73, KKWC.35, KLHJ.79, KKLL.10.

I.- AUTOMOTORA BILBAO SPA., RUT N° 76.920.261-7, con giro asociado a la “compraventa de vehículos nuevos o usados”, e inicio de actividades el día 24 de septiembre de 2018, la que fue constituida a través del portal web “Empresa en un día”, bajo la modalidad de firma ante notario, para lo cual el imputado Gustavo Viveros Viveros concurrió personalmente a completar el trámite, mediante firma estampada ante la notaria Claudia Gómez Lucares.

La asociación a través de esta empresa, inscribió como nuevos en el Registro Civil, a sabiendas que se trataba de vehículos robados y adulterados, los siguientes 15 vehículos: PPU KPYL.49, KRWC.41, KWVF.56, KXSS.27, KZTP.55, JKXX.66, KVTB.46, KWVF.42, KXSJ.24, KWVF.69, KXSG.95, KXSP.88, LDCR.89, LCCH.86, LCXH.92.

J.- AUTOMOTRIZ PORTILLO SPA., RUT 76.962.651-4, con giro asociado a la “compraventa de vehículos nuevos o usados” e inicio de actividades el día 08 de enero de 2019, la que fue constituida a través del portal web “Empresa en un día”, bajo la modalidad de Firma Electrónica Avanzada, previa concurrencia personal del imputado Julián MARTÍNEZ ARRIAGADA a la entidad acreditadora, quien realizó personalmente los trámites pertinentes para la obtención de la misma.

La asociación a través de esta empresa, inscribió como nuevos en el Registro Civil, a sabiendas que se trataba de vehículos robados y adulterados, los siguientes 20 vehículos: PPU LBCY.63, KPYL.92, LBCY.57, KZZR.17, LBCV.61, LBCX.22, KXST.97, LCPX.13, LBCZ.86, LBCZ.92, LCFR.33, LCPX.63, LCHC.53, HCHC.21, LCXJ.40, LXFS.16, LXCS.51, LXFS.20, LVHZ.96 y GYKL.45.

K.- AUTOMOTRIZ NUEVA LAREDO SPA., RUT 76.962.652-2, con giro asociado a la “compraventa de vehículos nuevos o usados” e inicio de actividades el día 08 de enero de 2019, la que fue constituida a través del portal web “Empresa en un día”, bajo la modalidad de Firma Electrónica Avanzada, previa concurrencia personal del imputado Julián MARTÍNEZ ARRIAGADA a la entidad acreditadora, quien realizó personalmente los trámites pertinentes para la obtención de la misma.

La asociación a través de esta empresa, inscribió como nuevos en el Registro Civil, a sabiendas que se trataba de vehículos robados y adulterados, los siguientes 12 vehículos: PPU LCFR.74, LFGB.76, LCFR.41, LFWV.14, LFWV.16, LDLR.97, LDLS.15, LCXW.22, KTXP.57, LGHS.14, LCXS.80, LDLS.25.

L.- IMPORTADORA BRUNNO FRITSCH SPA., RUT 76.995.608-5, con giro asociado a la “compraventa de vehículos nuevos o usados” e inicio de actividades el día 02 de abril de 2019, la que fue constituida a través del portal web “Empresa en un día”, bajo la modalidad de firma ante notario, para lo cual el imputado Hans Bravo Riveros concurrió personalmente a completar el trámite, mediante firma estampada ante la notaria Claudia Gómez Lucares.

La asociación a través de esta empresa, inscribió como nuevos en el Registro Civil, a sabiendas que se trataba de vehículos robados y adulterados, los siguientes 12 vehículos: PPU LJSF.50, LCXS.73, LJJD.43, LKKL.67, LGCC.49, LKKL.73, LBVX.82, LBVX.85, LJLD.71, LDLS.12, LDLS.13, LJTK.43.

M.- AUTOMOTRIZ GUILLERMO MORALES SPA., RUT 77.073.741-9, con giro asociado a la “compraventa de repuestos y accesorios automotrices” e inicio de actividades el día 27 de septiembre de 2019, la que fue constituida a través del portal web “Empresa en un día”, bajo la modalidad de firma ante notario, para lo cual el imputado Alejandro Ruiz Arancibia concurrió personalmente a completar el trámite, mediante firma estampada ante el notario Nelson Baeza Gutiérrez.

La asociación a través de esta empresa, inscribió como nuevos en el Registro Civil, a sabiendas que se trataba de vehículos robados y adulterados, los siguientes 17 vehículos: PPU HCHC.40, JKXX.88, LBVY.68, LJLJ.18, LJLV.73, LJLV.85, LJPX.58, LPHB.53, LPKZ.19, LPKZ.56, LPSW.24, LPSW.31, LPSW.43, LPSW.53, LRBS.44, LXTY.25, LYDH.25.

N.- COMERCIAL GILDEMEISTER SPA., RUT 77.116.042-5, con giro asociado a la “venta de repuestos y accesorios y mantenciones” e inicio de actividades con fecha 20 de enero de 2020, la que fue constituida a través del portal web “Empresa en un día”, bajo la modalidad de firma ante notario, para lo cual el imputado Eduardo Sanhueza Pérez concurrió personalmente a completar el trámite, mediante firma estampada ante el notario Nelson Baeza Gutiérrez.

La asociación a través de esta empresa, inscribió como nuevos en el Registro Civil, a sabiendas que se trataba de vehículos robados y adulterados, los siguientes 10 vehículos: PPU LBVY.80, LPHC.22, LPHC.23, LPHC.69, LPHC.70, LPHC.80, LRCH.64, LVGC.77, LXVS.35, LPHD.24.

O.- C. HERNÁNDEZ SPA., RUT 77.120.627-1, con giro asociado a la “asesoría integral en terreno” e inicio de actividades el día 30 de enero de 2020, la que fue constituida a través del portal web “Empresa en un día”, bajo la modalidad de firma ante notario, para lo cual el imputado Renán Huenteo Maliqueo concurrió personalmente a completar el trámite, mediante firma estampada ante el notario Nelson Baeza Gutiérrez.

La asociación a través de esta empresa, inscribió como nuevos en el Registro Civil, a sabiendas que se trataba de vehículos robados y adulterados, los siguientes 03 vehículos: PPU LPHC30, LVPD.14, LXJY.28.

P.- AUTOMOTRIZ SOLISTE SPA, RUT 77.178.321-K, con giro asociado a la “venta al por menor de vehículos automotores nuevos o usados y fecha de constitución 30.06.2020, a través de la cual la asociación

inscribió como nuevos en el Registro Civil, a sabiendas que se trataba de vehículos robados y adulterados, los siguientes 14 vehículos: PPU LJVD19, LJVD24, LXFR60, LSBF24, LTJV87, LXFR82, LXFR78, LJVD54, LTJV81, LXCD14, LXCD80, LVFY80, LXCB61 y LVFZ69.

4) Destino del dinero obtenido y lavado de activos:

Los imputados Yerko Andrés SILVA TORO, Albano Ariel Silva Toro, Víctor Manuel QUEZADA BRAVO, Carolina CORNEJO ARRIAGADA, junto a otros miembros de la asociación ya condenados por estos hechos, a sabiendas que el dinero y otros bienes proceden directa o indirectamente de las actividades de la asociación ilícita, a lo menos desde el año 2016, ocultaron o disimularon su origen ilícito o los bienes en sí mismos, y adquirieron, poseyeron, tuvieron o usaron bienes de la misma procedencia, conociendo su origen ilícito, todo con ánimo de lucro. Con este objetivo ejecutaron diferentes maniobras que les permitieron desvincular el dinero de su fuente ilícita, e introducirlo al sistema económico financiero mediante actividades comerciales lícitas.

El dinero y bienes de origen ilícito generados por los delitos base señalados, corresponden a las ganancias en dinero provenientes de la actividad propia de la asociación ilícita para la receptación de vehículos motorizados y estafa, la cual en sí misma generó importantes ingresos de origen ilícito, permitiéndoles adquirir otros bienes y realizar inversiones que se tradujeron en un incremento patrimonial injustificado en función a los ingresos formales que registran.

Las actividades realizadas por los imputados que se subsumen en los tipos penales de lavado de activos de la ley 19.913 son las siguientes:

- Adquisición de caballos:

Tanto Yerko SILVA TORO como su hermano Albano SILVA TORO, registran como contribuyentes con patrimonio asociado al vector “patrimonio en caballos”, específicamente \$1.285.200, en el caso de Yerko SILVA TORO, y \$4.690.346, en el caso de Albano SILVA TORO.

- Adquisición de vehículos:

Específicamente una camioneta marca Jeep, modelo Renegade Sport, año 2018, PPU KKGL.19, adquirida con fecha 30.04.2018 a nombre de Claudia Sandoval Godoy, pareja de Yerko Silva Toro a esa fecha.

- Adquisición de inmuebles:

1. Inmueble ubicado en Papa San Eleuterio N° 542, comuna de Pudahuel, el que fue adquirido por el imputado Albano Ariel SILVA TORO, con fecha 01 de agosto de 2017, por un valor de \$115.000.000 millones de pesos, monto coincidente con un vale vista tomado con fecha 29 de junio del mismo año por la Automotora PROCAR del imputado Juan Provoste Salgado, del que fue beneficiario Albano, quien posteriormente, con fecha 18 de junio de 2018, vende dicho inmueble a Casane Inmobiliaria y Transportes

Spa., en la suma de \$60.000.000 millones de pesos; empresa constituida dos meses antes por dos socios que aportaron un capital de \$35.000.000.- enterado al contado en el acto de la constitución, quienes no tienen ingresos formales para justificar tales aportes ni la compra de bienes raíces, siendo además el presente, el único inmueble adquirido por la citada inmobiliaria.

2. Inmueble ubicado en Los Robles N° 1034, comuna de Lo Prado. En el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, este inmueble sólo registra como última inscripción la actuación celebrada por personas ajenas a esta investigación en el año 2001. No obstante, de acuerdo a la información del vector externo obtenida del Servicio de Impuestos Internos, la sociedad “Comercializadora SyB SPA” lo adquirió con fecha 29 de marzo de 2019, previo pago al contado de \$80.000.000.

- Cuentas bancarias de testaferros:

A fin de disimular el origen ilícito de los dineros obtenidos por la organización criminal liderada por Yerko Silva Toro, o desvincular las ganancias de su origen ilícito, en conocimiento de ella y del origen de los dineros generados por ella, los imputados utilizaron diversas tipologías de lavado de activos que implican el uso de productos bancarios, según consta del análisis de las cuentas previa autorización judicial:

- Existen importantes movimientos de dinero entre las cuentas utilizadas por Yerko Silva Toro y su núcleo familiar, Claudia Sandoval, Albano Silva, Daniela Espinoza, Paula Becerra y Jeannette Toro, que dan cuenta de ingresos percibidos y que carecen de justificación, siendo coincidentes con las actividades de la asociación ilícita investigada y los dineros asociados a las mismas.

Entre enero del año 2017, hasta septiembre del 2019, Daniela Espinoza Toro (2 años y medio), hermana de Yerko Silva Toro, realizó un total de 91 transferencias, desde su cuenta N° 0212147923 del Banco Itaú, a su madre Jeannette Toro Brenet, por un total de \$27.997.842. Y realizó 14 transferencias a Claudia Sandoval por un total de \$4.240.000. A su vez, recibió 132 transferencias por parte de su madre Jeannette Toro, durante el mismo período, por un total de \$ 39.960.510

- A su vez, los imputados utilizan las cuentas de terceras personas o testaferros, para así poder disimular el origen ilícito de dicho dinero, como es el caso del imputado Jesús Gacitúa Candia, quien facilitó su cuenta bancaria del Banco Santander N° 71000184335 a fin de que en ellas se depositaran los dineros obtenidos de la actividad ilícita realizada por la asociación.

- Por último, los imputados utilizaban a terceros, quienes conociendo el origen ilícito de los bienes, facilitaban sus cuentas bancarias para la realización de depósitos en las mismas, depósitos que posteriormente devolvían a las cuentas de los miembros de la organización, quedándose a su vez con parte del dinero. Mediante el alzamiento del secreto bancario del imputado Albano Silva Toro, se identificó a Víctor Quezada Bravo, funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile, y a su pareja Carolina Cornejo Arriagada, quien mantuvo una relación laboral con Albano Silva Toro, administrando el local ya señalado, como facilitadores de sus productos bancarios en los términos señalados.

En base a la información obtenida mediante el alzamiento del secreto bancario de los imputados, se pudo determinar que Víctor Quezada Bravo recibió en sus cuentas bancarias de Banco Estado y Scotiabank, un monto total de \$62.510.377.- en el período 2017-2018, en 184 depósitos efectuados desde las cuentas de Albano SILVA TORO, de la empresa del mismo y de su socio, Diego SEPÚLVEDA GUZMÁN. Asimismo, el imputado QUEZADA BRAVO, transfirió desde su cuenta bancaria hacia las cuentas asociadas a Albano Silva, la suma total de \$26.562.609.- en 71 depósitos, en el mismo período.

A su vez, se pudo determinar que Carolina Cornejo Arriagada recibió en su cuenta bancaria de Banco Estado, un monto total de \$21.032.949.- en el período 2017-2018, en 120 depósitos efectuados desde las cuentas de Albano SILVA TORO y de la empresa del mismo. Asimismo, la imputada CORNEJO ARRIAGADA, transfirió desde su cuenta bancaria hacia las cuentas asociadas a Albano Silva, la suma total de \$2.447.280.- en 16 depósitos, en el mismo período.

Por otra parte, el imputado Quezada Bravo mantiene saldos en su cuenta de Banco Estado, específicamente en los meses de enero y febrero de 2017, ascendentes a los 20 millones de pesos aproximadamente, cifra muy superior a sus ingresos formales mensuales, monto que va disminuyendo progresivamente los meses siguientes.

Depósitos, transferencias y saldos que no se condicen con los ingresos percibidos por los imputados Quezada Bravo y Cornejo Arriagada, y que corresponden a dineros transferidos por Albano SILVA TORO, ya sea desde su cuenta personal o de su empresa, o a través de la cuenta de su socio Diego Sepúlveda, a Carolina CORNEJO y Víctor QUEZADA, los cuales a medida que se van transfiriendo, van regresando a las cuentas ya mencionadas, esto con la finalidad de ocultar el origen ilícito del dinero.

- Utilización de empresa de fachada o pantalla (El MP confunde dos tipologías distintas en su denominación, mas es claro que se está refiriendo a una empresa pantalla):

Esta tipología de lavado de activos consiste en constituir sociedades legales, con existencia física y que cumplan con la actividad económica señalada en su giro.

Con este fin, los imputados Yerko y Albano Silva Toro utilizaron el local ubicado en Avenida Gladys Marín N° 6106, comuna de Estación Central, como fachada para el desarrollo de tales actividades, en un primer momento como restaurant “Alto Machupichu”, al alero del cual se llevaron a cabo las maniobras de movimiento de dinero entre las cuentas de Albano y los imputados Víctor Quezada y Carolina Cornejo, y en una segunda fase de mayor elaboración, a través del restaurant “La Parrilla del Gaucho”, el cual corresponde al nombre de fantasía o razón social utilizado por la sociedad “Comercializadora SyB Spa”, sociedad que inicialmente registró como propietaria a las imputadas Claudia Paz SANDOVAL GODOY y Paula Inés BECERRA LEYTON, ambas parejas de los imputados Yerko y Albano Silva Toro, respectivamente, en ese momento.

El local comercial está ubicado en Avenida Gladys Marín N° 6106, comuna de Estación Central, correspondiendo al arrendador de dicho inmueble a la sociedad “Construcciones Bernardo José Olguín Donoso EIRL”, sociedad que registra como único dueño al imputado Bernardo José OLGUÍN DONOSO, ya condenado por estos hechos.

Al momento de ser constituida, dicha sociedad registró como capital social inicial la cantidad de \$50.000.000.-, dividido en 100 acciones nominativas, de una misma serie, ordinarias y sin valor nominal, respecto de las cuales las imputadas Claudia SANDOVAL GODOY y Paula Becerra Leyton suscribieron 50 acciones cada una, equivalente a la suma de \$25.000.000.- del capital social, que pagaron con dinero efectivo y al contado.

Posteriormente, con fecha 28 de febrero de 2019, Claudia SANDOVAL GODOY vende su participación en la sociedad a Paula BECERRA LEYTON, en la suma única, total y definitiva de \$25.000.000, que se pagó en el acto, quedando entonces Paula Becerra Leyton como única dueña de la mencionada sociedad, modificación que se materializa con fecha 4 de marzo de 2019.

Mediante escuchas telefónicas, debidamente autorizadas, se da cuenta que el citado local comercial es de propiedad y administrado por los imputados Yerko Silva Toro y Albano Silva Toro.

Sumado a lo anterior, consta de la información obtenida del SII, que la Sociedad “SyB” compró un bien raíz con fecha 29.03.2019, por un monto de \$80.000.000.-, el cual fue pagado al contado. Todo esto, sin contar las imputadas con ingresos que justifiquen su nivel de participación en la sociedad, ni las posteriores compras al contado.

b) Calificación jurídica, grado de desarrollo y participación:

Los hechos relatados se subsumen en los tipos penales de asociación ilícita, receptación, falsificación de instrumentos privados y públicos, infracción al artículo 210 del Código Penal y artículo 192 de la Ley 18.290, delito tributario del artículo 97 número 23, estafa y lavado de activos, todos en grado de consumados y cabiéndole a los acusados participación según el siguiente detalle:

1. Yerko SILVA TORO:

- Autor directo de Asociación Ilícita, ilícito previsto y sancionado en el Art. 292 y 293 del Código Penal.
- Autor inductor de Receptación reiterada de vehículos motorizados, conociendo su origen en delitos de robo con intimidación y/o violencia, ilícito previsto y sancionado en el Art. 456 bis A del Código Penal, en relación con el artículo 351 del Código Procesal Penal.
- Autor inductor de Estafa reiterada, ilícito previsto y sancionado en el Art. 467 y siguientes del Código Penal, en relación con el artículo 351 del Código Procesal Penal.

- Autor inductor de delito reiterado de Apertura de giros con antecedentes falsos al Servicio de Impuestos Internos, ilícito previsto y sancionado en el Art. 97 N° 23 del Código Tributario, en relación con el artículo 351 del Código Procesal Penal.

- Autor directo de Lavado de activos, ilícito previsto y sancionado en el Art. 27 letra a) y b) de la ley 19.913.

2. Albano SILVA TORO:

- Autor directo de Asociación Ilícita, ilícito previsto y sancionado en el Art. 292 y 293 del Código Penal.

- Autor directo de Receptación reiterada de vehículos motorizados, ilícito previsto y sancionado en el Art. 456 bis A del Código Penal, en relación con el artículo 351 del Código Procesal Penal.

- Autor directo de Estafa reiterada, ilícito previsto y sancionado en el Art. 467 y siguientes del Código Penal, en relación con el artículo 351 del Código Procesal Penal.

- Autor directo de Lavado de activos, ilícito previsto y sancionado en el Art. 27 letra a) y b) de la ley 19.913.

3. Camilo SANDOVAL GODOY:

- Autor directo de Asociación Ilícita, ilícito previsto y sancionado en el Art. 292 y 293 del Código Penal.

- Autor directo de Receptación reiterada de vehículos motorizados, conociendo su origen en delitos de robo con intimidación y/o violencia, ilícito previsto y sancionado en el Art. 456 bis A del Código Penal, en relación con el artículo 351 del Código Procesal Penal.

- Autor directo de Estafa reiterada, ilícito previsto y sancionado en el Art. 467 y siguientes del Código Penal, en relación con el artículo 351 del Código Procesal Penal.

- Autor directo de Apertura de giros con antecedentes falsos al Servicio de Impuestos Internos, ilícito previsto y sancionado en el Art. 97 N° 23 del Código Tributario.

- Autor directo de Tenencia ilegal de arma de fuego, ilícito previsto y sancionado en el Art. 9 y 2 b) de la Ley 17.798.

4. Ilich CHOPA ALDANA:

- Autor directo de Asociación Ilícita, ilícito previsto y sancionado en el Art. 292 y 293 del Código Penal.

- Autor directo de Receptación reiterada de vehículos motorizados, ilícito previsto y sancionado en el Art. 456 bis A del Código Penal, en relación con el artículo 351 del Código Procesal Penal.

- Autor directo de Estafa reiterada, ilícito previsto y sancionado en el Art. 467 y siguientes del Código Penal, en relación con el artículo 351 del Código Procesal Penal.

5. David MILLALEN LLANCAO:

- Autor directo de Asociación Ilícita, ilícito previsto y sancionado en el Art. 292, 293 y 294 del Código Penal.

- Autor directo de Receptación de vehículo motorizado, ilícito previsto y sancionado en el Art. 456 bis A del Código Penal.

- Autor directo de Tenencia ilegal de armas de fuego y municiones, ilícitos previstos y sancionados en el Art. 9 en relación con el Art. 2 letras b) y c) de la Ley 17.798.

6. Juan NAVARRETE VASQUEZ:

- Autor directo de Asociación Ilícita, ilícito previsto y sancionado en el Art. 292 y 293 del Código Penal.

- Autor directo de Receptación reiterada de vehículos motorizados, ilícito previsto y sancionado en el Art. 456 bis A del Código Penal, en relación con el artículo 351 del Código Procesal Penal.

- Autor directo de Estafa reiterada, ilícito previsto y sancionado en el Art. 467 y siguientes del Código Penal, en relación con el artículo 351 del Código Procesal Penal.

- Autor directo de delito reiterado de Apertura de giros con antecedentes falsos al Servicio de Impuestos Internos, ilícito previsto y sancionado en el Art. 97 N° 23 del Código Tributario, en relación con el artículo 351 del Código Procesal Penal.

7. Germán DUARTE PEREIRA:

- Autor directo de Asociación Ilícita, ilícito previsto y sancionado en el Art. 292, 293 y 294 del Código Penal.

- Autor directo de Receptación de vehículo motorizado, ilícito previsto y sancionado en el Art. 456 bis A del Código Penal.

- Autor directo de Estafa, ilícito previsto y sancionado en el Art. 467 y siguientes del Código Penal.

8. Víctor Manuel QUEZADA BRAVO:

- Autor directo de Lavado de activos, ilícito previsto y sancionado en el Art. 27 letra b) de la ley 19.913.

9. Carolina CORNEJO ARRIAGADA:

- Autor directo de Lavado de activos, ilícito previsto y sancionado en el Art. 27 letra b) de la ley 19.913.

2.- Circunstancias modificatorias de responsabilidad penal:

A juicio de la Fiscalía, concurre la circunstancia atenuante de responsabilidad penal del artículo 11 N° 6 del Código Penal, esto es, irreproachable conducta anterior, respecto de los acusados Albano SILVA TORO, Camilo SANDOVAL GODOY, David MILLALEN LLANCAO, Juan NAVARRETE VASQUEZ, Germán DUARTE PEREIRA, Carolina CORNEJO ARRIAGADA y Víctor QUEZADA BRAVO.

Al acusado Yerko SILVA TORO lo afecta la circunstancia agravante de responsabilidad penal del artículo 12 N° 15 del Código Penal.

Al acusado Ilich CHOPA ALDANA, lo afecta la circunstancia agravante de responsabilidad penal del artículo 12 N° 16 del mismo Código, respecto de su participación en todos los delitos por los cuales se le acusa.

Finalmente, al acusado David MILLALEN LLANCAO lo afecta la circunstancia agravante específica, dispuesta en el artículo 12 de la Ley 17.798.

3.- Preceptos legales aplicables:

A juicio de la Fiscalía, son aplicables al caso los siguientes preceptos legales: artículos 1°, 7°, 11 N°6, 12 N°15, 12 N°16, 14, 15, 21, 29, 30, 31, 50, 68, 69, 70, 74, 76, 292, 293, 294, 294 bis, 456 bis A, 467 y siguientes, y demás pertinentes del Código Penal; además de los artículos 259 y siguientes, y artículo 351 y demás disposiciones pertinentes del Código Procesal Penal; el artículo 97 N°23 del Código Tributario; el artículo 27 letras a) y b) de la Ley N°19.913; el artículo 192 de la Ley N°18.290; el artículo 2° letras b) y c), 9 y 12, todos de la Ley N°17.798; y el artículo 17 de la Ley N°19.970.

4.- Pena cuya aplicación se requiere:

Por tales consideraciones, la Fiscalía requiere se imponga a los acusados:

1.- Yerko SILVA TORO: la pena de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo como autor del delito de Asociación Ilícita previsto y sancionado en el artículo Art. 292 y siguientes del Código Penal; la pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo y multa ascendente al doble de la tasación fiscal de los vehículos receptados, en su calidad de autor del delito de Receptación reiterada de vehículos motorizados, previsto y sancionado en Art. 456 bis A del Código Penal; la pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo y multa de 30 UTM en su calidad de autor del delito de Estafa reiterada, previsto y sancionado en el Art. 467 y siguientes del Código Penal; la pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo y multa de 2 UTA en su calidad de autor del delito reiterado de Apertura de giros con antecedentes falsos al SII, previsto y sancionado en el Art. 97 N° 23 del Código Tributario; la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo y multa de 400 UTM en su calidad de autor del delito de Lavado de activos previsto y sancionado en

el Art. 27 letras a) y b) de la Ley 19.913, accesorias legales y el **comiso de lo incautado en relación con el ilícito de lavado de activos**, específicamente, de los inmuebles correspondientes a Los Robles N° 1034, comuna de Lo Prado, foja 56153, número 53960, año 2001, Conservador de Bienes Raíces de Santiago y Papa San Eleuterio N° 542, comuna de Pudahuel, foja 46505, número 66845, año 2018, Conservador de Bienes Raíces de Santiago; los dineros retenidos en los productos bancarios de las siguientes personas y entidades: 1) Daniela Espinoza Toro: Banco Itaú y Corpbanca, 2) Jeannette Toro Brenet: Banco Falabella, Banco Estado, BCI, Banco Itaú, Corpbanca y Banco Santander, 3) Claudia Sandoval Godoy: Scotiabank y Banco Estado, 4) Comercializadora SyB, RUT 76.893.612-9: Banco Estado, 5) Yerko Silva Toro: Banco Estado, 6) Albano Silva Toro: Banco Estado y Banco Santander, 7) Comercializadora de productos alimenticios Albano Ariel SILVA TORO EIRL, RUT 76.530.779-1: Banco Estado, 8) Paula Becerra Leyton: Banco Santander, Banco Estado y Banco de Chile, 9) Jesús Gacitúa Candia: Banco Santander; y del mobiliario del Restaurant La Parrilla del Gaucho, ubicado en avenida Gladys Marín N° 6106, comuna de Estación Central, todo de conformidad a resolución de 21 de octubre de 2020, correspondiente a audiencia de control de la detención realizada ante el 5° Juzgado de Garantía de Santiago en causa RUC 1800227155-5 RIT 3098-2018, entre los días 16 a 21 de octubre del mismo año.

2.- Albano SILVA TORO: la pena de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo como autor del delito de Asociación Ilícita previsto y sancionado en el artículo Art. 292 y siguientes; la pena de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo y multa de 20 UTM en su calidad de autor del delito de Receptación reiterada de vehículos motorizados, previsto y sancionado en Art. 456 bis A; a la pena de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo y multa de 30 UTM en su calidad de autor del delito de Estafa reiterada, previsto y sancionado en el art. 467 y siguientes; a la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo y multa de 400 UTM en su calidad de autor del delito de Lavado de activos previsto y sancionado en el Art. 27 letra a) y b) de la Ley 19.913, accesorias legales y el comiso de los bienes incautados en relación con el ilícito de lavado de activos, que ya fueron detallados.

3.- Camilo SANDOVAL GODOY: la pena de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo como autor del delito de Asociación Ilícita previsto y sancionado en el artículo Art. 292 y siguientes; a la pena de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo y multa ascendente al doble de la tasación fiscal de los vehículos receptados en su calidad de autor del delito de Receptación reiterada de vehículos motorizados, previsto y sancionado en Art. 456 bis A; la pena de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo y multa de 30 UTM en su calidad de autor del delito de Estafa reiterada, previsto y sancionado en el art. 467 y siguientes; la pena de 4 años de presidio menor en su grado máximo y multa de 1 UTA en su calidad de autor del delito de Apertura de giros con antecedentes falsos al SII, previsto y sancionado en el Art. 97 N° 23 del Código Tributario; la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo en su calidad de autor del delito de tenencia ilegal de arma de fuego, previsto y sancionado en los Arts. 9 y 2 b) de la Ley 17.798, más el comiso de las especies incautadas y accesorias legales.

4.- Ilich CHOPA ALDANA: la pena de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo como autor del delito de Asociación Ilícita previsto y sancionado en el artículo Art. 292 y siguientes; la pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo y multa de 20 UTM en su calidad de autor del delito de Receptación reiterada de vehículos motorizados, previsto y sancionado en Art. 456 bis A; la pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo y multa de 30 UTM en su calidad de autor del delito de Estafa reiterada, previsto y sancionado en el Art. 467 y siguientes, más el comiso de las especies incautadas y accesorias legales.

5.- David MILLALEN LLANCAO: la pena de 540 días de presidio menor en su grado mínimo en su calidad de autor del delito de Asociación Ilícita, previsto y sancionado en el Art. 292 y siguientes; la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo y multa de 20 UTM en su calidad de autor del delito de receptación de vehículo motorizado, previsto y sancionado en el artículo 456 BIS A del Código Penal; la pena de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo en su calidad de autor del delito de tenencia ilegal de armas de fuego previsto y sancionado en los Arts. 9 y 2 letras b) en relación con el artículo 12 de la Ley 17.798; la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio en su calidad de autor del delito de tenencia ilegal de municiones, previsto y sancionado en el Art. 9 y 2 letras c) de la ley 17.798; más el comiso de las especies incautadas y accesorias legales.

6.- Juan NAVARRETE VASQUEZ: la pena de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo como autor del delito de Asociación Ilícita previsto y sancionado en el artículo Art. 292 y siguientes; la pena de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo y multa de 20 UTM en su calidad de autor del delito de Receptación reiterada de vehículos motorizados, previsto y sancionado en el Art. 456 bis A; la pena de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo y multa de 30 UTM en su calidad de autor del delito de Estafa reiterada, previsto y sancionado en el Art. 467 y siguientes; la pena de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo y multa de 1 UTA en su calidad de autor del delito reiterado de Apertura de giros con antecedentes falsos al SII, previsto y sancionado en el Art. 97 N° 23 del Código Tributario, más el comiso de las especies incautadas y accesorias legales.

7.- Germán DUARTE PEREIRA: la pena de 300 días de presidio menor en su grado mínimo en su calidad de autor del delito de Asociación Ilícita, previsto y sancionado en el Art. 292 y siguientes; la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo y multa de 10 UTM en su calidad de autor del delito de receptación de vehículo motorizado, previsto y sancionado en el artículo 456 BIS A; la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo y multa de 15 UTM en su calidad de autor del delito de estafa, previsto y sancionado en el Art. 467 N° 1 del Código Penal, más el comiso de las especies incautadas y accesorias legales.

8.- Víctor Manuel QUEZADA BRAVO: la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo y multa de 200 UTM en su calidad de autor del delito de Lavado de activos previsto y sancionado en el Art. 27 letra b) de la Ley 19.913, más el comiso de las especies incautadas y accesorias legales.

9.- Carolina CORNEJO ARRIAGADA: la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo y multa de 200 UTM en su calidad de autora del delito de Lavado de activos previsto y sancionado en el Art. 27 letra b) de la Ley 19.913, más el comiso de las especies incautadas y accesorias legales.

Asimismo, y de acuerdo a lo previsto en el artículo 17 de la Ley 19.970 sobre Sistema Nacional de Registro de ADN, solicita determinar la huella genética de los condenados, previa toma de muestras biológicas, y ordenar la incorporación de dicha huella genética al Registro de Condenados”.

II.- Acusación particular de la querellante Servicio de Impuestos Internos (en adelante SII):

Se presentó en contra de los querellados Yerko Andrés Silva Toro, Camilo Sammy Sandoval Godoy y Juan Navarrete Vásquez, fundada en idénticos hechos que la acusación fiscal.

En cuanto a la calificación jurídica, grado de desarrollo y participación, el SII estimó que los hechos descritos son constitutivos del ilícito tributario establecido en el artículo 97 N°23 inciso primero del Código Tributario, en grado de consumado, respecto de los acusados YERKO SILVA TORO, CAMILO SANDOVAL GODOY y JUAN NAVARRETE VÁSQUEZ, a quienes les corresponde una intervención en calidad de autores de acuerdo a lo previsto en el artículo 15 N° 1 del Código Penal.

Destacó que el delito fue cometido en carácter de reiterado, por los acusados YERKO SILVA TORO y JUAN NAVARRETE VÁSQUEZ, aumentando con ello su pena en uno o dos grados de conformidad al artículo 112 del Código Tributario en relación con el artículo 351 del Código Procesal Penal.

En relación con las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, señaló que concuerda con el Ministerio Público en cuanto concurre la circunstancia atenuante de responsabilidad penal del artículo 11 N° 6 del Código Penal, esto es, irreprochable conducta anterior, respecto de los acusados CAMILO SANDOVAL GODOY y JUAN NAVARRETE VASQUEZ. En cuanto al acusado YERKO SILVA TORO, lo afecta la circunstancia agravante de responsabilidad penal del artículo 12 N°15 del Código Penal.

Asimismo, respecto de los tres acusados, concurre la agravante contemplada en el artículo 111 inciso segundo del Código Tributario, toda vez que éstos se concertaron para cometer el hecho punible.

Prevía cita de los preceptos legales aplicables, esto es, artículos 1, 3, 5, 7, 11 N° 6, 12 N°15, 14, 15 N° 1, 24, 28, 29, 30, 31, 50, 67, 68, 69 y demás pertinentes del Código Penal, artículos 259 y siguientes del Código Procesal Penal; artículos 97 N°23 inciso primero, 111, 112 y 162 del Código Tributario, solicitó se impongan las siguientes sanciones:

1. YERKO SILVA TORO: la pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo y multa de 2 UTA en su calidad de autor del delito previsto y sancionado en el Art. 97 N°23 inciso primero del Código Tributario en carácter de reiterado.

2. CAMILO SANDOVAL GODOY: la pena de 4 años de presidio menor en su grado máximo y multa de 1 UTA en su calidad de autor del delito previsto y sancionado en el Art. 97 N°23 inciso primero del Código Tributario.

3. JUAN NAVARRETE VÁSQUEZ: la pena de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo y multa de 1 UTA en su calidad de autor del delito previsto y sancionado en el Art. 97 N°23 inciso primero del Código Tributario en carácter de reiterado.

TERCERO: Alegatos de apertura.

Que, al inicio del juicio, el **Ministerio Público**, representado por el fiscal Sebastián Gana, expuso que durante el año 2023 se cometieron a nivel nacional alrededor de 3 mil delitos de robo de vehículos con intimidación y/o violencia, en distintas modalidades conocidas en la prensa como portonazos, encerronas, etc. Desde el año 2015 estos números se mantienen al alza, y esto se entiende como el negocio que es.

Sostuvo el fiscal que el robo con violencia o intimidación es el primer eslabón de una cadena delictiva que genera ganancias por sobre muchos otros mercados, incluso por sobre el mercado de la droga. Prueba de ello es que el líder de la asociación que se presenta en este juicio estaba privado de libertad por delitos contra la Ley de Drogas. En este negocio se pagan precios irrisorios por vehículos que son sustraídos de esta forma y luego se les da una apariencia de licitud para ser vendidos a terceros de buena fe.

Indicó el persecutor que esta asociación creó al menos 16 empresas para darles una nueva identidad a vehículos que fueron adquiriendo o encargando a personas que se dedicaban al robo de éstos, para finalmente venderlos con esta nueva identidad a personas de buena fe, que los adquirieron y luego les fueron incautados por personal policial porque eran vehículos robados. Esta organización realizó dicha actividad en al menos 234 oportunidades, de acuerdo a lo que se pudo comprobar durante la investigación.

Señaló que en este juicio se escucharán alrededor de 600 testigos, muchos de ellos víctimas, y se dará cuenta de una forma de organización y una actividad sofisticada con la que se lograron muchas ganancias, que era una “industria del portonazo”, el tribunal conocerá de una organización delictiva empresarial, dotada de procesos de trabajo, constituida como una estructura jerarquizada compuesta por personas con distintos perfiles de cargo. Entre ellos, funciones de administración de dinero, a cargo de tareas operativas y apoyos técnico logísticos, todos ellos bajo la subordinación y dependencia de un líder. Esta empresa se posicionó, al menos desde el año 2016 hasta el año 2020, a través de la creación de sociedades con antecedentes falsos, en el negocio de la compraventa de vehículos robados, la adulteración física de estos y el blanqueo de su origen a través del uso y abuso perverso de nuestro sistema financiero registral, generando facturas falsas para hacerlas coincidir con los números identificatorios modificados a los vehículos, de tal forma de inscribirlos con estos antecedentes ante el Registro Civil y obtener placas patentes con las que se vendían, a terceros de buena fe, automóviles aparentemente nuevos, en circunstancias que eran vehículos inexistentes, originalmente robados.

El fiscal manifestó que, fue así como, los acusados junto a otros sujetos que ya han sido condenados por estos hechos, se asociaron utilizando distintos roles, bajo el mando y liderazgo del acusado Yerko Silva Toro, con el fin de planificar, ejecutar y consumir los delitos comprendidos en el plan criminal, logrando su cometido a la perfección.

Afirmó que, en este juicio se probará, más allá de toda duda razonable, que existió una asociación ilícita que creó un modelo de negocios diseñado por el líder, mediante el cual se crearon aproximadamente 16 empresas con nombres similares a los de automotoras existentes, y con ellas se inscribieron más de 200 vehículos, de los cuales al menos 100 fueron vendidos a terceros de buena fe, según los roles que cada miembro desempeñó a sabiendas de la ilicitud de sus conductas, lo que le permitió a la cúpula de la organización obtener ganancias relevantes que se tradujeron en un enriquecimiento monetario, que los acusados ingresaron al mercado formal, mediante diversas maniobras que les permitieron ocultar o disimular el origen ilícito de los dineros que obtuvieron y que se convirtieron en un producto de la organización.

Hizo presente el fiscal que, para dar cumplimiento a su plan criminal, los imputados presentaron declaraciones y antecedentes falsos ante el Servicio de Impuestos Internos, abrieron giros y obtuvieron facturas para realizar la primera inscripción de los automóviles como si fueran nuevos. En paralelo a estos trámites de inscripción, alteraban los números del motor y chasis de los vehículos robados, para que estos coincidieran con la placa patente y los vendían a terceros de buena fe sin levantar sospechas, como si se tratara de vehículos nuevos.

Desde el punto de vista jurídico, manifestó el fiscal que la doctrina y la jurisprudencia nacional han ido dotando de contenido a los elementos que conforman una asociación ilícita, los que se encuentran presentes en el caso que nos convoca. Estos elementos son los siguientes: En primer lugar, la pluralidad de sujetos. Respecto de la asociación ilícita del artículo 292 y siguientes del Código Penal, vigente a la fecha de los hechos, la jurisprudencia y la doctrina se inclinan por exigir al menos que haya dos personas, mientras que la opinión minoritaria ha exigido a lo menos la presencia de tres personas. Esto se ha modificado con la Ley 21.577 que señala que se requiere al menos tres personas.

Sin embargo, advirtió el persecutor, esta discusión acerca de la pluralidad de dos o tres sujetos en este juicio en particular se torna irrelevante, porque se está ante un número de integrantes que excede con creces esos números. Se probará en este juicio que la asociación se encontraba conformada por al menos cincuenta sujetos, de los cuales aproximadamente cuarenta ya fueron condenados en procedimiento abreviado en sede de Garantía.

Añadió que, más importante aún, como ha señalado la Il. Corte de Apelaciones de Santiago, en cuanto a la pluralidad de sujetos, más allá del número de integrantes de la asociación, estos deben actuar de forma conjunta, que es lo que se acreditará respecto de todos los acusados, incluidos los mandos medios, que actuaban bajo instrucciones del líder, Yerko Silva Toro.

Un segundo elemento de la asociación ilícita es la finalidad de cometer delitos y crímenes. En este caso, ese requisito se cumple a cabalidad, toda vez que los acusados se reunieron durante un largo tiempo para exclusivamente cometer ilícitos, en su gran mayoría contra la propiedad, pero también contra las personas y en menor medida otros delitos como, por ejemplo, perjurio, falsedades documentales, aperturas de giro con antecedentes falsos ante el Servicio de Impuestos Internos, a propósito de una instrumentalización de estos ilícitos para efectos del objetivo final de la asociación.

El acusador aseguró que, mediante la prueba que se rendirá, quedará demostrado cómo la finalidad que tenían los acusados era la de llevar adelante una operatoria que incluía los delitos por los cuales se encuentran acusados, afectando bienes jurídicos, como lo exige el artículo 292 del Código Penal, así como la puesta en peligro, no solamente de los bienes jurídicos propiedad e integridad física a propósito de los robos, sino que también de la fe pública en el sistema registral vehicular, considerando que las víctimas estafadas confiaron que estaban comprando un vehículo con una placa patente lícita y que estaba inscrito, por lo tanto, alcanzaba el estándar de seguridad razonable como para invertir dinero en él. Sin perjuicio de lo cual, con posterioridad estos vehículos les fueron incautados en algunos de los casos cuando las personas aún estaban pagando créditos para comprarlos.

Un tercer elemento de la asociación ilícita es la permanencia en el tiempo. En este caso, se trata de una asociación que al menos se organizó desde el año 2016, que es la fecha de la primera creación de empresa y de la primera inscripción de vehículos ante el Registro Civil, hasta al menos el año 2020, que es la fecha en que se decretaron las órdenes de detención y las múltiples entradas y registros, siendo formalizados los imputados por su participación en estos hechos.

Un cuarto elemento es la organización y liderazgo. Así lo ha señalado en reiteradas oportunidades la jurisprudencia y la doctrina nacional. Sostuvo el fiscal que, en la realidad nacional se han visto diversas densidades organizativas, llegando incluso a descartar el día de hoy la exigencia de jefatura rígida, lo que ha sido recogido por la normativa actual, mas no en la que se encontraba vigente al momento de comisión de los hechos. Actualmente es suficiente para cumplir los requisitos del tipo, una organización y distribución funcional en pos del objetivo delictivo común, que en este caso se trata de las receptaciones de los vehículos robados para, finalmente, cometer las estafas con estos mismos vehículos una vez constituida la nueva identidad, entre otros delitos. En este caso se presenta una estructura clara, con distribución de funciones también relativamente clara.

Indicó que existe un rol de líder que es cumplido por Yerko Silva Toro, quien también ejecuta algunas de las maniobras del plan de negocio. Hay brazos operativos, por ejemplo, Albano Silva Toro, que mantuvo locales donde se inyectaba el dinero proveniente de los ilícitos y que también participó en la inscripción y compraventa de vehículos; Ilich Chopa Aldana, que participó en la constitución de empresas utilizadas por la asociación para la compraventa de vehículos robados; Camilo Sandoval Godoy, que contactaba a proveedores de vehículos robados, reclutaba a testaferros para las inscripciones y también

participó en algunas oportunidades en la inscripción y en la venta de los vehículos una vez ya generada la identidad nueva; Juan Navarrete Vázquez, el que mantenía relación directa con el líder de la asociación, Yerko Silva Toro y participó también activamente en el proceso de blanqueo de los vehículos; David Millalén Llancao, que participó en la exhibición y venta de vehículos robados ya en la fase posterior de la estafa, lo mismo respecto de Germán Duarte Pereira, que también participó en la inscripción de vehículos y en la compraventa de los mismos.

Precisó que se probará que los acusados se organizaron para llevar adelante este plan delictivo, de la siguiente manera:

Yerko Silva Toro era el líder de la asociación ilícita y estaba detrás de todo el proceso delictual, en la estructura de la organización empresarial era como un director ejecutivo o un gerente general. Este acusado manejaba la asociación encontrándose privado de libertad y cumpliendo una condena por tráfico de drogas. Él coordinó la compra de vehículos robados, mantuvo contacto para la modificación de los mismos, para la creación de las empresas de papel, para la emisión de facturas, obtención de certificados de homologación, coordinación para el reclutamiento de testaferros para la inscripción ante el Servicio de Registro Civil de los vehículos como nuevos y finalmente la venta de los mismos, participó de la publicación de los vehículos en distintos portales de Internet, de la coordinación para la exhibición de los vehículos a los posibles adquirentes, pagó a los diversos actores involucrados a través de terceros miembros de la asociación que actuaban bajo su dirección y participó activamente, encontrándose privado de libertad, en las maniobras de engaño que en algunos casos dieron origen a compraventas que resultaron en la estafa de determinadas víctimas.

Asimismo, este acusado recaudaba el dinero producto de la actividad ilícita en diversas cuentas corrientes a través de otros miembros de la asociación, como su hermana Daniela Espinoza, su madre Jeannette Toro, su pareja al momento de los hechos Claudia Sandoval, y también a través del imputado, ya condenado por estos hechos, Jesús Gacitúa que le facilitaba su cuenta bancaria para que pudiera realizar distintos movimientos.

Esta asociación también contaba con un departamento de contabilidad o de finanzas. Yerko Silva Toro y su hermano Albano, utilizaron a su círculo más cercano para administrar tanto el flujo de dinero necesario para adquirir y pagar los bienes y servicios propios del negocio, como el de la asociación.

Refirió que destacaron en estas funciones Claudia Sandoval Godoy, Daniela Espinoza Toro, Jeannette Toro Brenet y Paula Becerra Leyton, pareja de Albano Silva Toro, al menos al momento de los hechos. Además, Claudia Sandoval es hermana del acusado Camilo Sandoval Godoy. Por separado ellas administraban el dinero de la organización.

En cumplimiento de sus funciones en la asociación, Claudia Sandoval pagó a brazos operativos y testaferros y participó en la entrega de facturas falsas, recibió y lucró con el dinero obtenido de la actividad de

la asociación ilícita, recibiendo instrucciones directas de su pareja, Yerko Silva Toro, y manteniendo contacto fluido con otros de los integrantes de la asociación. Además, junto a Paula Becerra, cumpliendo las instrucciones de los hermanos Silva Toro, participaron en la constitución de la empresa S&B, a través de la cual la cúpula de la asociación ingresó los dineros obtenidos ilícitamente en el mercado formal. Por eso, se encuentran condenadas por el delito de lavado de activos.

Daniela Espinoza Toro y Jeannette Toro Brenet son la hermana y la madre, respectivamente, de los acusados Yerko y Albano Silva Toro. Ellas mantuvieron en su poder y bajo su custodia, en distintos productos bancarios, el dinero obtenido por la organización, producto de la actividad ilícita. Este rol fue asumido con posterioridad y de manera preponderante, luego que el acusado Yerko Silva terminara su relación con Claudia Sandoval.

En este departamento cumplía también un rol relevante el imputado Jesús Gacitúa Candia. Su función en la asociación fue facilitar su cuenta del Banco Santander a Yerko Silva para desarrollar la actividad ilícita, ya que él la utilizaba como si fuera propia con conocimiento y voluntad de Gacitúa, quien también se encuentra condenado actualmente en estos hechos por el delito de asociación ilícita y lavado de activos.

Luego en este plan de negocio, están los encargados de tareas operativas, pues encontrándose Yerko Silva privado de libertad, se hizo necesario contar con personas de confianza que en el exterior ejecutaran su plan de negocios, quienes haciendo las veces de directivos o administradores de la empresa, siempre bajo el liderazgo de Yerko Silva y siguiendo sus instrucciones, se encargaron en paralelo o sucesivamente del funcionamiento de cada uno de los eslabones de la cadena productiva del plan criminal.

Entre ellos, destacan el acusado Albano Silva Toro, quien durante el periodo de funcionamiento de la asociación colaboró directamente con su hermano, ejecutando sus instrucciones en el exterior, reclutando personas para la compra de vehículos robados, para la inscripción de los mismos como nuevos y posterior venta, o bien realizando directamente tales conductas, solicitando la primera inscripción de un vehículo, y participando activamente en la comercialización y las maniobras de engaño que resultaron en la compraventa de dos vehículos, junto al acusado Juan Navarrete, y al imputado, Marco Supanta, que actualmente también se encuentra condenado por estos hechos.

Otro brazo operativo es el acusado Camilo Sandoval Godoy, quien durante el tiempo de la asociación ilícita, ejecutó actividades claves para el funcionamiento de la misma. Reclutaba y contactaba a los proveedores de vehículos robados, participando en algunos casos en su compra. Reclutaba y contactaba a testaferros para la inscripción de los vehículos adulterados, manteniéndolos luego bajo la esfera de su resguardo, conociendo o no pudiendo menos que conocer su origen ilícito y su posterior compraventa, participando directamente en las estafas de al menos cinco vehículos, siendo reconocido en algunos casos por las víctimas. Además, mantenía contactos con otros miembros de la asociación, algunos de los cuales prestaban servicios relativos a la modificación de los vehículos y el proceso de reinscripción con una identidad nueva, como por ejemplo Aimel Gavilán, encargado de modificar físicamente los vehículos, Roberto Bascur,

encargado de la creación de stickers de seguridad que se pegan en los bordes de las puertas, y Franco Cruz, que era el encargado del proceso de facturación de las empresas. Además de su contacto con otros miembros que tenían roles de liderazgo y administración, como Albano Silva y su hermana Claudia Sandoval, Tatiana Arana, Freddy Miranda e Ilich Chopa, entre otros. Finalmente, además, el acusado depositaba dineros a Claudia Sandoval y Daniela Espinoza en sus roles de tesoreras de la organización.

Otro brazo operativo era Juan Navarrete Vázquez, quien durante el tiempo de actividad de la asociación ilícita, mantenía comunicación directa con el líder Yerko Silva, y para demostrarlo, se incorporarán en el juicio parte de las comunicaciones que ellos mantenían encontrándose Yerko Silva privado de libertad. El acusado reclutaba y contactaba proveedores de vehículos robados, participaba también en algunos casos en su compra, reclutaba y contactaba testaferros para la inscripción de los vehículos, los mantenía bajo su esfera de resguardo, todo esto sabiendo o no pudiendo menos que saber cuál era el origen de los vehículos, y finalmente también participaba en el proceso de compraventa con víctimas de estas estafas, siendo reconocido al menos por una de ellas participando en este proceso con el acusado Albano Silva Toro.

Dentro de los sujetos reclutados, el acusado Navarrete Vázquez coordinaba y ejecutaba en la calle el plan de negocios diseñado por el líder, manteniendo contacto con miembros de la asociación, algunos de los cuales prestaban servicios relativos a la modificación de vehículos y el proceso de reinscripción con una identidad nueva, por ejemplo, al igual que en el caso de Camilo Sandoval, Aimel Gavilán, Sebastián Martínez y Franco Cruz.

Además, Navarrete tenía contacto con otros miembros que tenían rol de liderazgo y administración, como Albano Silva, Claudia Sandoval y Tatiana Arana, y realizaba los trámites notariales y otros necesarios dentro del proceso de blanqueo de los vehículos, siguiendo las instrucciones del acusado Yerko Silva. Paralelamente, durante los años comerciales 2018 - 2020, el acusado Navarrete contribuyó en la creación e inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos de las empresas Gildemeister Motor SPA., Brunno Fresh SPA, Automotriz Soliste SPA y Automotora Bilbao SPA, proporcionando a sabiendas datos y antecedentes falsos respecto de las empresas mencionadas ante el citado servicio.

Mencionó que el acusado Ilich Chopa Aldana es un ingeniero comercial que en el año 2016 conoció a Yerko Silva mientras ambos se encontraban recluidos, Chopa Aldana por su participación en una organización delictual dedicada a los mismos ilícitos. Por eso respecto de éste, pesa la agravante del artículo 12 número 16, la reincidencia específica.

Afirmó que este acusado, de acuerdo a los antecedentes que se acompañarán al juicio, entregó a Yerko Silva el know-how del sistema de negocios, ideado por el líder de la asociación, dándole además el contacto de algunos prestadores de servicios claves para el proceso, como Aimel Gavilán y Franco Cruz. Además, desempeñando sus funciones en la asociación ilícita, participó directamente en la constitución de las empresas Automotora Nueva Laredo SPA y Automotriz Portillo SPA, pagando en ambas las firmas electrónicas desde su cuenta vista del Banco BCI, a través de la cual además se exhibirán movimientos

bancarios con el acusado Camilo Sandoval Godoy, y con Jorge Salinas Uribe y Franco Cruz Iligaray, quienes están actualmente condenados por su participación en estos hechos.

Además, el acusado Chopa participó activamente en las estafas relativas al menos a dos vehículos comprados, adulterados y finalmente vendidos por la asociación.

Otros brazos operativos son Tatiana Arana Espinoza, Edith Silva Sánchez, Freddy Miranda Arana y Luis Astudillo Peña, quienes tuvieron una participación importante reclutando testaferros, participando en la inscripción de los vehículos y en la posterior venta de los mismos, por ello, sus nombres probablemente se escucharán a través de las víctimas de las estafas y de los funcionarios policiales, en múltiples oportunidades, así como en las pruebas documentales.

En otra fase del proceso productivo, están los prestadores de servicio de la asociación, entre ellos, Sebastián Martínez Zabala, quien a sabiendas de la actividad ilícita de la asociación y recibiendo pagos de la misma, constituyó las empresas de papel utilizadas por la asociación para blanquear los vehículos robados y posteriormente modificarlos. Una vez que realizaba este trámite, falsificaba poderes amplios a su nombre y los presentaba ante el Servicio de Impuestos Internos para obtener los permisos para después poder facturar y realizar la inscripción de los vehículos ante el Registro Civil. En su domicilio, se encontró en su poder, poderes amplios a nombre de miembros de la asociación, contratos vinculados a vehículos, fotocopias de cédula de identidad con timbres de firma de notaría, documentación de distintas automotoras materia de la acusación y timbres de agua de al menos dos notarías, que luego, durante el proceso de investigación, los notarios reconocieron como falsas.

Franco Cruz Iligaray, era quien confeccionaba las facturas de las empresas de papel que mantenía la organización, porque para pasar los vehículos como nuevos, era necesario generar una factura de primera venta a fin de que el vehículo apareciera ante los ojos de cualquier ciudadano como un vehículo comprado por una automotora traído desde el extranjero, y por lo tanto, eso daba mayor credibilidad y tranquilidad al momento de comprarlo.

Aimel Gavilán Caro, modificaba físicamente los vehículos, en términos simples, con una galleta borraba el número de chasis y número de motor, y luego les daba un número identificadorio nuevo, que se hacía calzar con la factura de primera venta, y por lo tanto, de esa forma se podía obtener una placa patente ante el Registro Civil. Este imputado mantenía contacto directo con miembros de la asociación, estaba registrado en el teléfono del acusado Camilo Sandoval, y también en el teléfono y en la libreta de pago de servicios del acusado Yerko Silva, que éste mantenía al interior del centro penitenciario.

En definitiva, el fiscal anunció que se probará que el acusado Yerko Silva reclutó a personas de su confianza y de su círculo más cercano, para la administración de la empresa y la ejecución del plan de negocios, a la vez que se hizo de los servicios de personas expertas en las áreas específicas de la creación de una nueva identidad para los vehículos robados. Sin embargo, en los demás eslabones de la cadena

productiva, para los cuales no se requería conocimientos o habilidades específicas, la asociación reclutó a sujetos que se fueron repitiendo en distintas funciones. Así las cosas, algunos sujetos miembros de la asociación, que figuraban como socios de las empresas ficticias creadas para inscribir los vehículos adulterados con factura de primera compra, en algunos casos también realizaron la función de solicitar ante el Registro Civil la primera inscripción de los vehículos con estas facturas, y finalmente participaron de una u otra forma en la venta de los mismos a aquellos terceros que los compraron de buena fe siendo estafados.

Esta confusión de roles o desprolijidad, fue lo que favoreció en algunos casos la identificación de las sociedades creadas y de los vehículos modificados y vendidos por la asociación.

El fiscal recordó que estas empresas ficticias eran creadas para inscribir vehículos y darles apariencia de legalidad, burlando de esta forma al sistema tributario y registral, y en el contexto de la organización, dicho rol fue desempeñado por los imputados William Orellana, Carla Sandoval, Claudio Tapia, Julián Martínez, Gustavo Viveros, Paula Astorga, Héctor Tapia, Miguel Pardo, Hans Bravo, Jaime Toro, Luis Beas, Alejandro Ruiz, Eduardo Sanhueza y Renán Huenteo, quienes siguiendo las instrucciones de otros miembros de la asociación con mayor rango y bajo el liderazgo de Yerko Silva, crearon las empresas señaladas en el auto de apertura.

El fiscal puntualizó que son relevantes estos nombres y los nombres de las empresas, porque a lo largo del juicio se irá observando cómo aparecen y se repiten estos nombres asociados a las sociedades y cómo las sociedades se repiten asociadas luego a los vehículos.

Reseñó que otros roles son los de inscriptores y falsos adquirentes de vehículos, así, desempeñando sus funciones en la asociación ilícita, por instrucción de los mandos medios que seguían las instrucciones de Yerko Silva, un gran número de personas fueron reclutadas para concurrir al Registro Civil con las facturas ideológicamente falsas obtenidas por la organización a través de las empresas de pantalla ya señaladas, con el fin último de solicitar la primera inscripción de dichos vehículos, o bien, registrarlos a su nombre como primer adquirente, de manera de obtener la placa patente con la cual se les otorgaba una nueva identidad con la que eran vendidos a terceros de buena fe. Entre estas personas se cuentan los imputados Nelson Méndez Moya, Jorge Salinas Uribe, Marco Supanta Aguilera, Nicolás Chacón Navarro, Carla Leal Leal, Sebastián Díaz Salinas, Sergio Calfuén Carrasco y Jonathan Pérez Pérez, todos ellos ya condenados por estos hechos por el Juzgado de Garantía.

Otro rol importante y que cobra relevancia a propósito de la finalidad de la asociación, es el de vendedores de vehículos. Entre otras funciones, los siguientes acusados e imputados, algunos ya condenados, desempeñaron este último rol clave para el desarrollo del plan de negocios de la asociación, siguiendo la instrucción de los miembros con mayor rango en la jerarquía de la organización, o bien, contactaron a terceros de buena fe para venderles los vehículos, o bien, participaron sólo en el acto de la venta, como supuestos dueños de los mismos o como trabajadores de automotoras, siendo relevante su participación, por cuanto dotaban con sus maniobras de engaño de la última dosis de credibilidad al proceso

de adulteración y reinscripción de los automóviles. Entre estos sujetos se encuentran los acusados David Millalén Llancao, quien obedecía instrucciones del acusado Juan Navarrete Vázquez, y bajo la dirección de Yerko Silva participó en la exhibición y venta de autos robados junto a otros miembros de la organización, siendo sorprendido, además, en enero del año 2020, conduciendo un vehículo que se encontraba adulterado de la forma ya señalada y que una vez periciado, mantenía encargo vigente por el delito de robo. Además, en esa oportunidad, ese vehículo se encontraba inscrito bajo una de las empresas de papel de la asociación y el acusado mantenía en su poder antecedentes de otra de las empresas. Es relevante también que durante la ejecución de entrada y registro en su domicilio se le encontraron los elementos por los cuales fue acusado por su participación en delitos contra la Ley de Armas.

Germán Duarte Pereira, también desempeñando funciones en la asociación ilícita, solicitó la inscripción y primera adquisición de diversos vehículos y participó activamente en una de las estafas cometidas por la asociación, junto a la imputada Tatiana Arana, quien a esa fecha coordinaba y ejecutaba el plan de negocios siguiendo las instrucciones de Yerko Silva. Vehículo que el acusado mantuvo en su poder y comercializaba, lo que realizó, sabiendo o no pudiendo menos que saber que éste mantenía encargo por robo, que había sido adquirido por la asociación, adulterado de la forma ya señalada y reinscrito por la misma organización.

El fiscal hizo hincapié en que la asociación ilícita sobre la que versa este juicio, adquiriría vehículos obtenidos mediante delitos de sustracción, casi en su totalidad, robos con intimidación o violencia, para posteriormente blanquearlos. En un lenguaje de negocios, el principal input de esta empresa era el robo de vehículos. Los acusados incentivaron a jóvenes primordialmente menores de edad, a ejecutar delitos de robos violentos que ocasionaron daño a algunas de las víctimas que declararán durante este juicio.

Es cierto que este juicio no se trata de los robos, pero consideró relevante que el tribunal conozca, a través de estas víctimas, la forma en que en su mayoría eran sustraídos los vehículos que posteriormente la asociación adquiriría. La modalidad de sustracción era importante porque de esta forma la asociación se hacía de automóviles sin daño en las puertas, sin daño en chapas y con sus respectivas llaves.

Puntualizó que se escuchará el relato de las víctimas de los robos, de los funcionarios que acogieron las denuncias y se incorporarán los encargos generados por estas denuncias.

Así partía el proceso productivo de esta asociación, con la compra y, a veces, incluso el encargo de vehículos robados. Así también se configuran los delitos de receptación reiterada en el libelo acusatorio.

Además, recalcó el fiscal, la asociación en este ímpetu por disfrazar de legalidad su plan criminal, usó y abusó de los mecanismos lícitos para la creación de empresas y para la inscripción de vehículos, defraudando a todo el sistema registral y financiero.

En relación con lo anterior, se podrá escuchar a los representantes de las entidades acreedoras, agentes del Servicio de Impuestos Internos y otros testigos respecto de la forma en que las empresas fueron

legalmente constituidas y cómo posteriormente se determinó que esta constitución se hizo sobre la base de antecedentes falsos, los que también quedarán expuestos durante esta audiencia.

Asimismo, se tomará conocimiento de diversa prueba documental asociada a las empresas y a cada uno de los vehículos inscritos, a través de esta, nuevamente, documentación obtenida de manera legal, pero sobre la base de antecedentes falsos, lo que se tradujo en la creación de vehículos con identidad falsa, inexistentes, adulterados por la asociación para estafar a los futuros compradores.

El fiscal sostuvo que, a través del testimonio de agentes del Registro Civil, sumado a la prueba documental ya señalada, se acreditará durante este juicio la existencia de una importante cantidad de vehículos que existen en nuestro sistema registral, pero que no existen en el mundo real, ya sea porque sus placas patentes se obtuvieron con la sola documentación falsamente creada por la asociación, a través de sus empresas de pantalla, ya sea porque estas placas se obtuvieron para autos robados, adquiridos por la asociación y finalmente modificados para su venta. El proceso así descrito culminaba, en cada caso, con un vehículo aparentemente nuevo y con existencia legal, es decir, un producto para la venta, lo que hacía que compradores de buena fe cayeran en el engaño del que fueron víctimas, adquiriendo los vehículos ofrecidos por la organización.

Con el testimonio de estas víctimas estafadas, se acreditará que, en cada caso, hicieron lo que cualquier hombre medio haría al comprar un vehículo nuevo o semi nuevo, e incluso fueron más allá en algunos casos, sin saber que, con el paso del tiempo, le sería arrebatado por personal policial por tratarse de un vehículo robado.

Respecto de lo anterior, no solo se escuchará los relatos de las víctimas y de los funcionarios policiales que recuperaron los vehículos, sino también se rendirá prueba documental, imágenes de publicaciones en portales de compraventa de vehículos, pantallazos de conversaciones donde consta la negociación para la adquisición de estos, comprobantes de pagos, transferencias, depósitos de dinero, todo lo cual permitirá acreditar las maniobras de engaño ejecutadas por la asociación a través de algunos de sus miembros, la forma en que estas maniobras hicieron a las víctimas incurrir en error y efectuar la respectiva disposición patrimonial en cada caso y, finalmente, el perjuicio económico que sufrieron y que, en algunos casos, aún sufren.

El fiscal hizo presente que durante la investigación se autorizaron múltiples medidas intrusivas, interceptaciones telefónicas, levantamiento de secreto bancario, entre otras. Asimismo, se incautó evidencia importante en manos de algunos imputados ya condenados y de algunos de los acusados en el presente juicio. De esta forma, se podrá escuchar de boca de los propios miembros de la asociación el plan de negocio y los procesos que lo conformaban de la manera que se ha expuesto.

De la misma manera, las cartolas bancarias, sumadas a los registros obtenidos de los teléfonos, cuadernos y libretas incautados a los acusados y a otros imputados, darán cuenta no solo del flujo de

importantes sumas de dinero que se iban generando a propósito de este rentable negocio, sino también de los pagos asociados al mismo.

En este juicio se hablará de las ganancias de los acusados, del dinero que ganaron con las actividades ilícitas y se probará, más allá de toda duda, que los acusados Yerko Silva Toro, Albano Silva Toro, Víctor Quezada Bravo y Carolina Cornejo Arriagada, junto a otros miembros de la asociación que ya fueron condenados, conociendo el origen ilícito del dinero o los bienes provenientes de la actividad ilícita de la asociación criminal, ocultaron o disimularon el origen ilícito de los mismos mediante diversas maniobras que han sido identificadas en nuestro país por la Unidad de Análisis Financiero, en base a las sentencias nacionales, como maniobras de lavado de activos.

Así, por ejemplo, durante esta investigación se identificó el uso de testaferros y la creación de sociedades de pantalla o de fachada. También se comprobará que usaron, poseyeron y utilizaron dichos bienes con conocimiento de su procedencia ilícita y evidente ánimo de lucro.

En este caso, los acusados no sólo utilizaban las ganancias ilícitas como es propio de quienes cometen delitos lucrativos, sino que idearon un sistema para ocultar su origen y así dificultar seguir la ruta del dinero, lo que justificaban con negocios en que mezclaban dinero lícito e ilícito.

El fiscal, para ilustrar cuáles de estas maniobras fueron realizadas por los acusados, sostuvo que, en primer lugar, existieron gastos injustificados.

En este caso, las personas condenadas por lavado de activos tenían gastos muy superiores a los ingresos lícitos y formales. Llama la atención la adquisición de bienes inmuebles. Existen al menos dos inmuebles comprados y adquiridos por miembros de la asociación al contado. Uno de ellos, ubicado en Pasaje San Eleuterio 542, comuna de Pudahuel, por un valor de 115 millones de pesos, y otro, en Los Robles 1034, comuna de Lo Prado, adquirido por la comercializadora SyB, que como ya se señaló, era la empresa de Yerko y Albano, a través de sus parejas, previo pago al contado de 80 millones de pesos. También la adquisición de vehículos y de caballos.

Por otra parte, se usaron cuentas bancarias de testaferros. Esta tipología consiste en usar cuentas de terceros para ocultar el origen del dinero ilícito. Existen movimientos de dinero relevantes entre las cuentas del acusado Yerko Silva Toro y su núcleo familiar. Entre enero del año 2017 y diciembre del año 2019 existen movimientos entre estas cuentas y el núcleo familiar del acusado, es decir, su hermana, su madre, las parejas de los acusados, por más de 30 millones de pesos en un caso, y por más de 40 millones de pesos, en otro caso. Sin que ninguna de las personas, que además fueron condenadas por delito de lavado de activos, tuviera alguna actividad lícita que les permitiera justificar esta cantidad de ingresos. A su vez, el acusado utilizaba la cuenta del imputado ya condenado, Jesús Gacitúa, para efectos de los movimientos propios de la asociación ilícita.

Por último, los acusados utilizaban a terceros quienes, conociendo el origen ilícito de los bienes, facilitaban sus cuentas bancarias para la realización de depósitos en las mismas, que posteriormente devolvían a las cuentas de los miembros de la organización, quedándose, a su vez, con parte del dinero, que es una tipología clásica de lavado de activos. En ésta se sitúa la participación de los acusados Víctor Quezada y Carolina Cornejo. Ellos conocieron e ingresaron a esta asociación, a través del acusado Albano Silva Toro, y Carolina Cornejo se vuelve contadora del local comercial que se administraba con los dineros ilícitos aportados por don Yerko y Albano. Mediante el alzamiento del secreto bancario de los acusados, se pudo determinar que Víctor Quezada recibió en sus cuentas bancarias, de Banco Estado y de Scotiabank, un monto total de más de 62 millones de pesos en el periodo 2017-2018, en depósitos efectuados por Albano Silva Toro y por el socio de este, Diego Sepúlveda. A la vez que transfirió desde su cuenta, hacia las cuentas de Albano Silva Toro, un total de aproximadamente 30 millones de pesos. En el caso de Carolina Cornejo, recibió en su cuenta del Banco Estado, un monto total de 21 millones de pesos aproximadamente, nuevamente en el plazo de un año, y se restituyeron hacia las cuentas de Albano Silva, aproximadamente 2 millones y medio de pesos. Esto se acreditará con las cartolas bancarias que se incorporarán durante el juicio. Depósitos, transferencias y saldos que no coinciden con los ingresos percibidos por los imputados Quezada y Cornejo, y que corresponden a dineros transferidos por Albano Silva Toro, ya sea desde su cuenta personal o de su empresa. Por estos antecedentes, se acusó a Víctor Quezada y Carolina Cornejo, como autores de un delito de lavado de activos, consistente en la tipología clásica de, en definitiva, recibir dinero y restituir parte quedándose con otra parte de ellos.

Finalmente, la utilización de empresas de fachada o de pantalla. Se trata del local ubicado en Avenida Gladys Marín 6106 en la comuna de Estación Central, que era utilizado como fachada por Yerko y Albano Silva Toro, en un primer momento como el restaurante “Alto Machu Picchu”, donde se realizaron maniobras de movimiento de dinero entre las cuentas de Albano y los acusados, Víctor Quezada y Carolina Cornejo, y en una segunda fase de mayor elaboración, a través del restaurante La Parilla del Gaucho, que corresponde al nombre de fantasía, de la Comercializadora SyB SPA, que registró como propietarias originalmente a Claudia Sandoval Godoy y Paula Becerra, ambas parejas de los acusados en ese momento.

Mediante escuchas telefónicas, debidamente autorizadas, se probará que el citado local comercial es de propiedad y administrado por los acusados Yerko y Albano Silva Toro.

Al culminar este juicio, aseguró el fiscal, que el Ministerio Público estará en condiciones de solicitar que se condene a cada uno de los acusados, por su participación en los delitos por los cuales se les acusó, a las penas que se señalaron en el libelo de acusación.

Por su parte, **el querellante Servicio de Impuestos Internos**, expuso que presentó acusación particular en contra de los acusados que incorporaron información falsa respecto a distintas empresas, aprovechándose del sistema administrativo tributario y afectaron con ello el orden público económico, y especialmente los bienes jurídicos que el legislador buscó resguardar a través de la figura del artículo 97

Nº23 inciso primero del Código Tributario, esto es, el correcto funcionamiento del sistema tributario y la hacienda pública.

Dio cuenta que durante los años 2016 a 2023 aumentaron en nuestro país de forma exponencial los ilícitos referidos al comercio de autos de origen ilícito, es decir, la llamada industria del portonazo. A la par aumentaron otros delitos, que generaron en el Servicio de Impuestos Internos y en el resto de la administración pública una constante preocupación para pesquisar la evasión y aumentar su capacidad de fiscalización y detección de irregularidades tributarias.

La evasión, el comercio ilícito, la falsificación de la información entregada, entre otros, son fenómenos que alteran el cumplimiento tributario y se busca permanentemente prevenir, investigar, identificar y sancionar.

Los acusados utilizaron en forma espuria instituciones lícitas que, por regla general, benefician nuestro sistema público y económico, para cometer ilícitos, vulnerando con ello la fe pública y el correcto funcionamiento de la administración tributaria. Ejecutaron un fraude a la hacienda pública a través de la entrega de información falsa, buscando burlar nuestro ordenamiento a través de dotar de una aparente licitud a la venta de vehículos de origen ilícito. Por este motivo ya se encuentran condenados tres de los querellados por este delito, Franco Cruz Iligaray, Freddy Miranda Arana y Sebastián Martínez Zavala.

La querellante sostuvo, en cuanto al marco legal y el delito tributario, los elementos que comprenden el delito tipificado y sancionado en el artículo 97 Nº23, inciso primero del Código Tributario, son los siguientes:

1) que el sujeto activo, que puede ser cualquier persona natural, debe obrar maliciosamente. En efecto, a diferencia de otros delitos tributarios, es tal la protección que el legislador ha puesto en esta conducta, que no se requiere para su configuración un sujeto activo especial, puede cometerlo cualquier persona natural que incurra en la conducta descrita de proporcionar al órgano administrativo fiscalizador información falsa, con el fin de obtener la autorización de documentación tributaria.

Esto lo señalan los profesores Jaime García y Rodrigo Ugalde en su obra “Delitos e Infracciones Tributarias”, quienes señalan que se refleja en el uso de la expresión “el que”, lo cual revela que el sujeto activo de este delito puede ser cualquier persona, contribuyente o no, a diferencia, de otros delitos del Código Tributario que, por ejemplo, el del artículo 97 Nº4 inciso primero, inciso segundo, etc.

Asimismo, el tipo penal comprende la expresión “maliciosamente”, que según el profesor Van Weezel, en su obra “Delitos Tributarios”, corresponde a un reforzamiento semántico para destacar la gravedad que los ilícitos de mera actividad acarrear en cuanto al cumplimiento de obligaciones administrativas accesorias a la obligación principal.

2) Un segundo elemento, es que el obrar malicioso debe concretarse en proporcionar datos o antecedentes falsos al Servicio de Impuestos Internos, esto es, datos engañosos o apartados de la verdad. El

verbo rector es proporcionar, que, de acuerdo a la Real Academia Española, se define como poner a disposición lo que se necesita o conviene. Y lo que se debe proporcionar son datos o antecedentes falsos, ya sea en la declaración inicial de actividades, que es una obligación que tiene todo contribuyente o persona natural, según lo comprendido en el artículo 68 del Código Tributario, en sus modificaciones, o en declaraciones exigidas con el objeto de obtener autorización de documentación tributaria.

3) El tercer elemento es que esto sea con el objeto de obtener autorización de documentación tributaria, ya sea facturas, boletas, notas de crédito, notas de débito, rollos de máquina, etc.

Afirmó la querellante que, a diferencia de otros delitos del Código Tributario, este tipo penal no exige una lesión al Fisco para consumarse, ya que es un delito de peligro y mera actividad. Esto es relevante porque este delito no se encuentra en los orígenes de nuestra codificación tributaria, sino que fue una de las figuras introducidas a partir de la modificación efectuada por la Ley 19.738, publicada el 19 de junio del 2001, que creó normas y dotó a la administración tributaria de distintos recursos y facultades, para combatir efectivamente la evasión tributaria y el comercio ilícito, y que facilitó la investigación de delitos tributarios.

Se trata de delitos de mera actividad y de peligro abstracto, que anticipan la persecución penal a ciertos actos que podrían estimarse preparatorios, porque pueden conducir a la comisión de un delito tributario posterior. Por ende, para que este delito en particular se entienda consumado, basta que se verifique la conducta de proporcionar datos falsos al Servicio de Impuestos Internos en las presentaciones, no exigiendo esta disposición la concurrencia de un perjuicio fiscal a diferencia de otros delitos tributarios. Igualmente, al ser un delito de mera actividad, no requiere de un elemento volitivo. Esto lo señala el profesor Silva Sánchez en su obra "Aproximación al Derecho Penal Contemporáneo". La idea del dolo como voluntad se enuncia en la ley, pensando exclusivamente en los delitos de resultado. Sin embargo, los delitos de simple actividad, llamados por algunos delitos formales, son aquellos que se consuman con un puro comportamiento humano, sin que sea necesario, además, que eso ocasione una alteración en el mundo exterior diferente de la actuación misma del sujeto activo. En dichos delitos, la conducta constituye el principio y el final de la realización típica.

Enfatizó lo anterior, porque podría plantear la defensa que sus representados solamente proporcionaron información falsa ante el Servicio de Impuestos Internos, no con la intención de defraudar la hacienda pública, sino que con la sola finalidad de vender los autos de origen ilícito. Pero ello no los exime de modo alguno de haber sabido que la entrega de información falsa ante una entidad pública, es en sí un ilícito, y que sólo mediante ello cometen el delito por el cual se les acusó. Es decir, conocían los elementos típicos de la figura penal y tenían además el control del hecho delictivo, que se encuentra en el grado de consumado respecto de los acusados Yerko Silva Toro, Camilo Sandoval y Juan Navarrete Vázquez, a quienes les corresponde la intervención en calidad de autores, de acuerdo a lo previsto en el artículo 15, N° 1 del Código Penal, habiéndose cometido en carácter de reiterado por los acusados Yerko Silva Toro y Juan Navarrete Vázquez, debiéndose aumentar por ende su pena en uno o dos grados de conformidad a la regla de

reiteración comprendida en el artículo 112 del Código Tributario, en relación con el artículo 351 del Código Procesal Penal.

Planteó que concurre, además, la agravante especial del artículo 111 inciso segundo del Código Tributario, que agrava la responsabilidad penal del delincuente que haya utilizado para la comisión del hecho punible, asesoría tributaria, documentación falsa, fraudulenta o adulterada, o que se haya concertado con otros para realizarlo. Esta agravante sólo exige que exista concierto del contribuyente con otros sujetos en orden en la comisión del hecho, independiente de que tales sujetos lleguen a realizar otros aportes a la configuración del comportamiento típico.

En cuanto a los hechos, puntualizó que la asociación adquiría vehículos robados, presentaban declaraciones de antecedentes falsos ante el SII, iniciaban actividades y obtenían facturas para realizar la primera inscripción de los vehículos como si estos fueran nuevos. Todas las operaciones que fueron referidas por el Ministerio Público en su acusación daban lugar a la venta de vehículos de origen ilícito e incluían la entrega de información falsa al Servicio de Impuestos Internos. Ese era un paso dentro de toda esta cadena delictiva. De esta forma, el acusado Yerko Silva Toro, en su rol de líder de la organización criminal, dirigió el proceso de inicio de actividades y la posterior autorización de documentación tributaria electrónica de carácter falso, todo ello considerando que tanto él como el resto de los miembros de la organización tenían pleno conocimiento de la falsedad de los antecedentes que se proporcionaban al ente fiscalizador. El señalado acusado también instruyó a terceras personas para presentar información falsa ante el Servicio de Impuestos Internos, lo cual será probado en el presente juicio.

Explicó que las sociedades creadas, en primer término, obtenían la autorización de folios de la emisión de documentos tributarios. Mencionó que todas las sociedades fueron constituidas a través del portal del Registro de Empresas y Sociedades de conformidad a la Ley 20.659, “empresa en un día”, así como también su inicio de actividades, el cual fue realizado a través de dicho portal. Además, los supuestos socios de las sociedades creadas no contaban con ingresos suficientes para la constitución de ellas, así como tampoco para desarrollar las actividades informadas al Servicio de Impuestos Internos. Las actividades informadas eran de una amplia variedad, pero básicamente se referían a la venta al por menor de vehículos. Sobre esto, ninguna de las sociedades presentó compraventa de vehículos de acuerdo con los documentos tributarios electrónicos que fueron emitidos durante el período comprendido entre enero de 2016 y junio de 2020. Ningún vehículo fue declarado o incorporado en las declaraciones de ingreso, las DIN respectivas, que eran cuentas de importaciones de cualquier clase. Por otra parte, los domicilios informados por las sociedades eran falsos, porque correspondían a domicilios virtuales, es decir, no tenían las condiciones de ser un lugar físico para el desarrollo de las actividades económicas que se habían informado, y no poseían dentro de los registros comerciales bienes raíces de su propiedad que pudiesen también ser utilizados para tales fines.

Precisó la querellante que, una vez constituidas las sociedades, efectuaron la declaración de inicio de actividades de éstas ante el Servicio de Impuestos Internos, proporcionando a sabiendas datos y antecedentes falsos.

En lo que dice relación con los brazos operativos de la asociación, Camilo Sandoval y Juan Navarrete, la querellante indicó que Camilo Sandoval proporcionó al Servicio de Impuestos Internos datos falsos en la iniciación de actividades de la Sociedad Automotora Bilbao, con el objeto de obtener autorización y utilización de documentación tributaria electrónica, de tal forma de generar esta apariencia de legalidad a la operación ilícita. Por su parte, Juan Navarrete Vázquez, durante los años comerciales 2018-2020, Juan Navarrete contribuyó a la creación e inicio de actividades de las siguientes empresas: Gildemeister Motor SPA, Brunno Fresh SPA y Automotriz Soliste SPA, y Automotora Bilbao SPA, representada legalmente por Gustavo Viveros, quien prestó declaración jurada ante funcionarios fiscalizadores del Servicio, en la instancia administrativa, indicando que él fue reclutado por Juan Navarrete Vázquez en conjunto con el condenado Martínez Zavala, lo que da cuenta de la amistad y coordinación delictiva que éste tenía con otros querellados. Además, Navarrete efectuó la verificación en notaría de las firmas digitales de los socios, requeridas para la creación de dichas sociedades, pagando por dichos trámites y el notario correspondiente le emitió la boleta de honorarios. De este modo, el encausado Navarrete efectuó la declaración de inicio de actividades a las sociedades mencionadas ante el Servicio de Impuestos Internos, proporcionando a sabiendas datos falsos respecto de las empresas mencionadas.

Respecto de la prueba, anunció que se valdrá de la testimonial de aproximadamente 69 personas, entre ellas, los funcionarios fiscalizadores, relevando la declaración de doña Carla Vildósola y un ex fiscalizador Carlos Moreno, quienes redactaron los informes de recopilación de antecedentes que corresponden a la información que tuvo el Servicio a la vista para la interposición de la acción penal, y la posterior ampliación en el procedimiento en contra de Juan Navarrete.

En cuanto a la prueba documental, refirió que se incorporarán alrededor de 418 documentos referidos a inscripciones de patente, primera inscripción, antecedentes de gestiones realizadas ante el SII, declaraciones juradas, informes de la PDI y otros organismos y, en especial, los informes de recopilación de antecedentes firmados por Carlos Moreno y Carla Vildósola. También incorporará cuadros de antecedentes sobre las condiciones patrimoniales que tenían los acusados, su actividad registrada, sus declaraciones de impuestos, sus patrimonios, entre otros antecedentes relevantes. Se incorporarán, igualmente, alrededor de 147 otros medios de prueba, tales como imágenes, cuadros demostrativos, capturas de inscripción, imágenes con direcciones IP desde donde se emitieron las facturas, imágenes que constan en los informes policiales y otras que ilustran el esquema organizacional que permitió a los acusados cometer los distintos ilícitos. También incorporará evidencia material, correspondiente a NUE que contiene las solicitudes de primera inscripción de las sociedades, facturas electrónicas, certificados de inscripción, interceptaciones telefónicas, etc.

Concluyó la querellante, que mediante todas estas pruebas e indicios se podrá demostrar, más allá de toda duda razonable, que los acusados participaron y conocieron de la ilicitud de la operación realizada ante el SII, y que no tuvieron otra voluntad o querer distinto, sabiendo que infringían las normas y pusieron con ello en peligro el bien jurídico protegido.

La Defensa del acusado Yerko Silva Toro, por su parte, expresó que su representado participó en hechos constitutivos de delito, pero no de la magnitud y en la cantidad que refiere el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos. También existieron ingresos no justificados, pero no de la magnitud a que refieren los acusadores.

Señaló que hubo varias personas que realizaron gestiones para obtener vehículos y venderlos en el mercado formal, por lo que, no todas las operaciones de blanqueo las hizo Yerko Silva, por eso, no existe una organización delictual como pretende acreditar el Ministerio Público y la querellante, ya que no se reúnen los requisitos mínimos para considerarla así.

Indicó que es posible que se hayan creado empresas no reales vulnerando la ley tributaria, pero no todas fueron creadas por su representado, ya que muchas las hicieron otras personas, luego de haberse “colgado” de los conocimientos de Yerko Silva para su propio beneficio y sin el conocimiento de éste.

Planteó la pregunta ¿Cuál es el inmenso caudal de dinero que movía este gestor de la industria del portonazo? ¿Dónde están los miles de millones que se movían? No se sabe, ya que la cuenta corriente en el Banco Estado de Yerko Silva en cuatro años no superaba los dos millones de pesos.

Estimó que no se podrá saber ni acreditar que todas las empresas las creó Yerko Silva, pues en varias sí participó, pero también hay complicidad o encubrimiento y no autoría.

Finalmente, refirió que se demostrará, más allá de toda duda razonable, que Yerko Silva no cometió todos los ilícitos que se le atribuyen, y que no era el jefe de una banda criminal. Lo único que espera su representado es una sentencia justa, con base sólida de su real participación ya sea como cómplice, autor o encubridor, pero no está dispuesto a aceptar actuaciones que no eran suyas y que escapaban a su dominio o esfera personal.

La Defensa del acusado Albano Silva Toro, a su turno, alegó, en síntesis, que tanto el Ministerio Público como la querellante se han referido a una “industria del portonazo” y, evidentemente, las palabras crean realidad por lo que estimó que los acusados ya están condenados por la opinión pública.

Advirtió que el Ministerio Público, en su alegato de apertura, dijo que su representado participó, por lo menos, en un delito de receptación y, por lo menos, de una estafa, por lo que, la reiteración en ese sentido cae con la misma alegación del persecutor.

En relación con la asociación ilícita, dijo que ésta no puede confundirse con la ejecución de un plan delictivo con una pluralidad de personas, que corresponde a una coparticipación delictiva, aun cuando ambos supuestos presenten ciertos rasgos y características comunes.

Así, la asociación lleva consigo, por su propia naturaleza, una distribución de cometidos y de tareas a desarrollar, una cierta jerarquización, el empleo de medios materiales, continuidad temporal del plan criminal, más allá de un simple u ocasional concierto para la ejecución.

Aseveró que, en este caso, Yerko Silva inició un cometido para beneficiarse él, y hay personas que se desplegaron y salieron de la asociación, de este núcleo planteado como una gran asociación por parte del Ministerio Público y empezaron a ejecutar estos conocimientos por cuenta propia. Es decir, este orden jerárquico, doctrinario y jurisprudencial, que se ha planteado en definitiva para que exista asociación, en este caso no se cumple.

Afirmó que su parte aportará prueba testimonial y documental para desvirtuar los cargos, e hizo presente que su representado prestó declaración en más de una oportunidad, encontrándose privado de libertad, se le pidió información y él trató de conseguirla en forma desesperada, para aportarla al Ministerio Público. Es este el juicio que trae el persecutor a estrados, con medios de prueba obtenidos bajo presión para que los acusados declarasen en uno u otro sentido.

En cuanto al delito de lavado de activos del artículo 27 letras a) y b), que dice relación con un restaurante que según la Fiscalía sería una fachada, por ser producto de inyecciones de dinero de un actuar ilícito, “La parrilla del gaucho” y “Alto Machu Picchu”, quedará en evidencia que este restaurante partió con anterioridad a los hechos y funcionaba como un local de comidas, respecto de lo que declarará el acusado y testigos.

En cuanto a los delitos de receptación y estafa, advirtió que controlará la prueba a rendir por el Ministerio Público.

La Defensa del acusado Ilich Chopa Aldana, manifestó, en lo atinente, que el Ministerio Público ha señalado en reiteradas ocasiones que estamos frente a imputados que elaboraron una “industria del portonazo” que parecía bastante rentable, pero no hay que dejarse llevar por lo grandioso o magnífico del nombre puesto, sino que se debe estar al presupuesto fáctico que la Fiscalía prometió acreditar en la acusación.

En el caso de su representado, hizo presente que se le atribuyeron básicamente dos supuestas conductas: ser un brazo operativo de la organización en el sur del país, en la ciudad de Los Ángeles, y a través de esta asociación ilícita, haber desempeñado conductas o maniobras de engaño para vender dos vehículos. De acuerdo con la acusación, esos mismos hechos constituirían también un delito de receptación reiterada.

Planteó que si bien efectivamente su representado conoció a Yerko Silva al interior de un centro penitenciario y estuvieron en comunicación, no se logrará acreditar, que éste obedecía a una estructura jerárquica, ni que Yerko Silva elaboró este plan y dio órdenes a miembros de esa supuesta asociación, ni tampoco el hecho que se le atribuye a su defendido de haber participado elaborando maniobras de engaño.

La acusación plantea que participó en maniobras de engaño para provocar una estafa con la venta de los vehículos que previamente habrían sido blanqueados, y que por esos mismos hechos, mantuvo en su poder dichos vehículos a sabiendas del origen ilícito. De lo anterior resulta imposible llegar a un veredicto condenatorio por ambos delitos respecto de un mismo hecho, por lo que desde ya solicita la absolución.

La Defensa de Camilo Sandoval Godoy, en su alegato de inicio, planteó, en lo sustancial, que en este juicio la prueba de cargo será insuficiente para alcanzar el estándar legal establecido en los artículos 297 y 340 del Código Procesal Penal, para poder tener por acreditada la participación punible que se le imputa a su representado, en cuanto a ser parte de una supuesta organización, o sea, que existiría una supuesta asociación ilícita, que se encontraría dirigida por el imputado Yerko Silva Toro, en la que su defendido sería uno de los supuestos brazos operativos, específicamente, la persona encargada de conseguir testaferros, conseguir los vehículos que habían sido sustraídos mediante robos con intimidación o violencia, ser el encargado de contactar a los compradores, hacer las publicaciones.

Además, el Ministerio Público señala que su representado supuestamente habría realizado todo este tipo de acciones, pero en el núcleo fáctico preciso de la imputación, éste solamente habría actuado respecto de cinco vehículos, respecto de los cuales habría existido un delito de receptación y, además, habría participado en maniobras engañosas. Sin embargo, quedará acreditado que su representado en ningún momento tuvo ni los vehículos en su poder y tampoco participó en la venta, ni contactó a ningún tipo de víctima, ni efectuó ningún tipo de publicación al respecto.

Expuso que únicamente no cuestionaría el delito de receptación de vehículo motorizado que se le imputa respecto del hecho ocurrido el 22 de abril del año 2019, donde su cliente fue detenido en una situación de flagrancia.

Respecto del delito de tenencia ilegal de arma de fuego de los artículos 9 y 2 de la Ley de armas, solicitó la absolución por falta de participación. Para este efecto, aportará un testigo que dará cuenta que al momento de la detención de su representado se encontraba en el domicilio otra persona, que era la legítima poseedora o dueña de esta arma.

Por último, en lo que dice relación con la imputación del artículo 97 N° 23 del Código Tributario, solicitará también la absolución, ya que su representado jamás proporcionó datos o antecedentes falsos con el objeto de obtener autorización para disponer de documentación tributaria. De hecho, de la propia acusación se lee que dichas funciones les correspondían a Juan Navarrete y a Sebastián Martínez.

La Defensa de Juan Navarrete Vásquez sostuvo, en lo atinente, que según se demostrará en el curso de este juicio, las imputaciones en contra de su representado por los delitos de asociación ilícita, receptación reiterada, estafa reiterada, apertura de giro con antecedentes falsos, y en relación con la acusación particular del Servicio de Impuestos Internos, que su defendido no tiene participación en la asociación ilícita, ya que la relación entre Juan Navarrete y el supuesto líder Yerko Silva, se inició en la

universidad y era una relación de amistad, la que se extendió a su hermano Albano Silva. Por lo que, en la supuesta asociación ilícita, que según el Ministerio Público data a lo menos del año 2016, su representado no participó, no formó parte de ninguna estructura jerárquica ni obedeció órdenes.

Respecto del delito de receptación reiterada, la Fiscalía sostuvo que fue al menos en una ocasión, por lo que cae la reiteración. Indicó que existe sólo una prueba en concreto, en donde se reconoció por una de las víctimas a Navarrete en compañía de Albano Silva, lo que no es suficiente para atribuirle participación en una receptación, sobre todo en calidad de reiterada. Lo mismo ocurre con la estafa reiterada, ya que el Ministerio Público refirió que, al menos en una oportunidad, y en el transcurso de este juicio se acreditará que su representado no tuvo participación alguna respecto de la estafa.

En cuanto al delito de apertura de giro con antecedentes falsos, según el Servicio de Impuestos Internos, en calidad de reiterado, tampoco se podrá acreditar que su representado haya efectuado dichos trámites respecto de la creación de las cuatro automotoras que se le imputan.

La defensa de David Millalén Llancao indicó, en síntesis, que la prueba de cargo será insuficiente para acreditar la participación que se le imputa a su representado. Si bien es cierto participó en algunos de los hechos ilícitos, no lo hizo de la manera que indicó el Ministerio Público.

Respecto de la asociación ilícita, planteó que no se ajusta el elemento típico para poder acreditar su participación. En cuanto a la receptación de vehículo motorizado, no existe el tipo subjetivo, aclarando que con eso se refiere al dolo de engañar que se le imputa a su defendido. Por último, señaló que según los antecedentes que aportará el ente acusador, se podrá acreditar ciertos delitos, pero no así la calidad de autor que se le está imputando a David Millalén.

La Defensa del acusado Germán Duarte Pereira indicó, en lo sustancial, que a su representado se le acusa específicamente de primera inscripción y adquisición de vehículos, y de participar activamente en maniobras de engaño que resultaron en la compraventa de un vehículo. Pero de la simple lectura del documento en que consta la inscripción de dicho vehículo, se puede ver que Germán Duarte no es quien la realizó. Sostuvo que el año 2018 su defendido vendió un emprendimiento que mantuvo durante 15 años, y para invertir alguien le recomendó el rubro de la compraventa de vehículos, para poder trabajar ese dinero y generar ingresos.

En este contexto, adquirió el vehículo por el cual se vio involucrado en la investigación y fue acusado, sin haber tenido conocimiento del origen delictual del móvil ni sospechar sobre esto. Tanto es así que hizo que se revisara su motor y la documentación, estando aparentemente todo en orden.

El mismo Ministerio Público sostuvo que los vehículos se modificaban de tal manera que muchas veces era imposible poder detectar alguna irregularidad, y eso ocurrió en la especie, porque su defendido fue la víctima, siendo injusto que se encuentre acusado el día de hoy, ya que prestó declaración en la Fiscalía en dos ocasiones, instó a que se periciara su celular, facilitando voluntariamente la clave, y en esas diligencias

se demostró que no conocía a los coimputados, que no los tenía como números de contacto, que nunca los había visto con antelación, y que tampoco recibió ni depositó dineros en alguna cuenta de los mismos.

Por lo anterior pidió desde ya la absolución y la condena en costas del Ministerio Público.

La Defensa de los acusados Carolina Cornejo y Víctor Quezada sostuvo, en síntesis, que sus representados se encuentran únicamente acusados por el delito de lavado de activos, por lo que, el propio Ministerio Público ha reconocido que ellos no formaron parte de la asociación ilícita cuya presunta existencia funda los hechos de este juicio.

Expuso que la imputación que se hizo a sus representados se basa en un hecho que es por esencia absolutamente legal, y es que en sus registros bancarios existen transferencias con otro de los acusados de este juicio, lo que no basta para configurar un delito.

En efecto, es la Fiscalía la que deberá acreditar no sólo que los movimientos de esas cuentas existieron, sino también que los fondos provenían precisamente de una acción delictual y no de la legítima explotación de un restaurante que en esa época ya existía y como es obvio, provocaba un flujo de dinero constante. Además, deberá acreditar que sus representados conocían el origen del dinero y que la finalidad de estas transferencias era disimular traspasos de dinero.

Hizo presente que Carolina Cornejo simplemente ejecutó sus labores de administradora de un restaurante, lo que inevitablemente llevó a que en sus cuentas bancarias y las de su marido, ingresara y egresara dinero, en función de las necesidades propias del negocio que administraba.

En ese marco, acreditará que Carolina Cornejo usó tanto las cuentas que estaban a su nombre como aquellas que formalmente estaban a nombre de su pareja, Víctor Quezada, ya que como ocurre en muchas familias, más allá del titular formal de las cuentas, era sólo una integrante de la familia la que administraba estos dineros, reiterando en este punto que es la Fiscalía la que deberá probar la ilicitud de las transacciones, instando desde ya por la absolución.

CUARTO: Declaración de los acusados.

Que el acusado, **Yerko Andrés Silva Toro**, renunció a su derecho a guardar silencio y decidió declarar señalando, en resumen, respecto de la forma en que inició el negocio ilícito, que en diciembre de 2016, llegó en comisión de la cárcel de Arica a Santiago 1, donde conoció a Ilich Chopa que venía de una comisión del sur, hicieron amistad y se fueron a vivir a la misma pieza, Ilich le comentó que venía por el delito de receptación de vehículo motorizado y blanqueamiento de autos. Luego pasó a la penitenciaría condenado, en abril de 2017, ya no tenía contacto con Ilich a quien le dejó su correo electrónico. Claudia Sandoval, su pareja, le dijo que Ilich lo estaba tratando de ubicar y este le propuso un trabajo, que él lo iba a guiar, sólo necesitaba plata, \$2.000.000 o \$2.500.000, que tenía que guardar un vehículo robado, buscar una persona para hacer la factura a su nombre, hacer la inscripción del auto en el Registro Civil y después sacar el permiso de circulación y cambiar los números de motor y chasis. **Entonces, se contactó con Camilo, en ese**

momento su cuñado, ya que tiene una hija con Claudia su hermana, le pidió si podía ayudarlo, es preparador físico y trabajaba en el Sename, y le dijo que le complicaba, pero **Tatiana Arana los podía ayudar, que era su pareja en ese momento** y más conocida en el mundo de “conseguirse personas”. Tatiana le consiguió a una persona, se inscribió el auto, se le hicieron las adulteraciones para que quedara en venta, Tatiana vendió el auto, luego se vendió otro más, con Camilo se enojaron y perdieron contacto en marzo o abril de 2017.

Luego, contó que **contactó a Edith, con quien era amiga de años**, a quien le explicó la operación, le pidió ayuda para conseguir gente y ella accedió. Agregó que con Edith hicieron un par de vehículos, pero después discutieron y no supo más de ella. Tatiana volvió a hablar con él, que se había separado de Camilo y lo quería ayudar, por lo que siguieron con el tema muy pausado y **después se involucró el hijo. Luego, apareció Franco Cruz Iligaray, quien era la persona que facturaba los vehículos y vendía las facturas, pero no creaba la empresa**, Franco le vendía la factura al 30% del valor de la misma y si se pagaba la factura. **Acotó que junto a Sebastián Martínez Zavala veían el tema de creación de empresas.**

Sin embargo, Yerko aseveró que esto no era una asociación, ya que todos los que hacían las funciones, como por ejemplo Aimel Gavilán, el que intervenía los números de chasis y motor, lo hacía solo mucho tiempo antes, y no bajo el mando de la supuesta asociación.

Con respecto a esto último, el acusado claramente se está refiriendo a un prestador de servicios de la asociación, al igual que Roberto Bascur que, como se verá, se dedicaba a confeccionar los stickers con el número de chasis.

Además, respecto a lo que señala sobre la compra de facturas a Ilich Chopa y Franco Cruz, el tribunal estimó que es inconsistente e inverosímil que Sebastián Martínez creara las empresas para Yerko y que Franco le cobrara el 30% del valor final de la factura, también es contradictorio con lo dicho por Ilich en orden a que él le compraba la factura a Franco y luego se la revendía a Yerko, sirviendo como un especie de bróker, ya que por el precio señalado, esa triangulación era totalmente inconveniente en lo económico, además, que no existe ninguna transferencia entre ellos –Yerko, Ilich y Franco- asociada a pagos de sumas elevadas de dinero compatibles con el 30% del valor de un vehículo o incluso el 10%, cuyo valor promedio era del orden de los \$15.000.000.

Ahora bien, respecto de la apertura de giro o inicio de actividades, Yerko Silva indicó que no las hizo de manera presencial, tampoco mandó a gente a hacerlo, esas empresas ya estaban creadas por terceros, quienes vendían las facturas, sí en algún momento se consiguieron personas para hacer inicio de actividades. Explicó que las empresas las formaba Sebastián Martínez Zavala, pero no todas las empresas tenían relación con él, cuando leyó la carpeta estaba apareciendo gente que desconocía, muchas empresas fueron involucradas en el grupo en que él venía, el delito sí lo cometieron pero no en esa magnitud, el Ministerio Público señala que son 16 empresas que se generaron bajo su mando, eso es falso, **porque las facturas fueron compradas y cuando conoció a Franco le bajó el precio porque Ilich le cobraba el 30%.**

Con respecto a Juan Navarrete, señaló que tiene una amistad de años, desde cuando estudiaban en un instituto en Santiago Centro, hay dos facturas que se le están imputando, sí se compró autos robados, se blanquearon y se vendieron pero no de la envergadura que señala el Ministerio Público.

Precisó que cuando partió el tema, en marzo de 2017, la primera empresa se creó en diciembre de 2016; Tatiana, la pareja de Camilo, lo ayudó hasta mayo de 2017 cuando se enojaron y perdieron contacto, luego llegó Edith a ayudarlo a “armar vehículos” y con ella estuvo desde junio de 2017 hasta marzo o abril de 2018.

El acusado explicó en qué consistía el “armar vehículos”, e ilustró que, primero, se compraba el vehículo robado, no sabía de qué forma se robaba, y el objetivo era poder facturarlos. Una persona a quien “ponerle” la factura y esperaba que fuera aceptado en el Registro Civil con el cambio de número de motor y chasis, luego armaban el permiso de circulación, después venía la publicación y venta, y todo el proceso demoraba como un mes y medio.

Narró que en el año 2018, detuvieron a Edith en un vehículo, que ella fue a mostrar con un amigo y la policía de investigaciones le pidió peritaje y se dieron cuenta que era clonado o reinscrito, pero a Edith no la pasaron a control de detención, le iba a llegar una citación, entonces, quedó asustada y no quiso seguir, pero nunca perdieron el contacto. Como no le guardó más vehículos buscó personas para poner autos a su nombre.

Posterior a eso, afirmó que Tatiana conversó con su pareja Claudia, porque necesitaba las lucas y ésta le comentó en visita que “Tati” quería volver, entonces volvió a ayudarlo e integró a su hijo de 16 o 17 años. Siguieron con el tema de los vehículos y ventas, pero era esporádico por la demora en armarlo y dejarlo en las condiciones para que su venta fuera realizada.

En el año 2019, Tatiana también fue detenida en un Kia Sportage en Quilín y lo mismo por la detención no quiso seguir y se estuvo molestando, porque él le dijo que no.

Luego, en mayo de 2019 salió “peloteado” por el tema de las celdas Vip y quedó sin comunicación, solo con visitas; y después se enteró que Sebastián Martínez Zavala tenía unas empresas que le había creado, entonces, Freddy Miranda llamó a Sebastián y le dijo que necesitaba los datos de la empresa, por las que le facturaba, porque él estaba incomunicado y Martínez le dijo que le podía dar las claves y firmas del SII, pero que tenía un costo de 30 o 40 mil. Accedió y le entregó las claves para el SII. Freddy se contactó con Franco, quien siempre le vendía las facturas por intermedio de Ilich, con quien perdió el contacto. Franco le ofrecía un mejor porcentaje, se las vendía a un 10%. Freddy le preguntó si podía facturar y Franco le dijo que sí, pero que no tenía ninguna empresa operativa, entonces le mandó todos los datos y se pusieron a crear vehículos entre Freddy, Franco y Tatiana. Sabían dónde se hacían los “tatuajes” que eran los cambios de número y conocían los contactos de los stickers.

En julio de 2019, fue trasladado a la cárcel de Puerto Montt y se puso en contacto con su hermano, le dijo que estaba mal de plata y que lo ayudara, que se repartirían la ganancia, entonces, le consiguió una persona e hicieron una Tucson, que él vendió. Añadió que cuando lo contactó, le dijo que estaba en el local Juan Navarrete, amigo de años, y quedaron en contacto, le pidió a Juan Navarrete si podía acompañar a su hermano y le dijo que sí, entonces fueron en su propio auto.

Después siguió en contacto con Juan Navarrete, quien le dijo que iba a Puerto Montt, entonces le pidió que lo fuera a ver a la cárcel y lo visitó dos veces. **Se comunicó con Juan Navarrete y le ofreció el negocio, porque llevaba varios años sin hacer nada y este lo ayudó en un par de vehículos y Tatiana hizo la venta.** Pasaron los meses y en el año 2020, le incautaron un celular que se fue a pericia, porque en la carpeta salían fotografías de los vehículos y distintas empresas e inscripciones que lo podían perjudicar. Esto ocurrió entre septiembre y octubre de 2020, le allanaron la pieza y cayeron los que estaban, porque las personas iban entrando y saliendo, estas personas no trabajaban para él, lo hacían por un pago en dinero.

Refirió que no son 211 vehículos, porque hubo algunos que no existieron, eran de prueba para ver si la empresa estaba operativa, además, Franco les vendía a otros, como a Tatiana o a Freddy, así se volvió tan masivo que Franco vendía las facturas a 700 o 800 mil pesos, ya que todos andaban “haciendo vehículos” y después de su causa aparecieron otras investigaciones y se masificó demasiado.

Reconoció la **evidencia material 256** que es el celular marca Motorola color dorado que le incautaron en Puerto Montt. Como contactos estaban “Daniela manita”, que es su hermana; “Juanito llaves”; “llaves originales”; “Franco”, su hermano. También había carpetas con fotografías de vehículos y carnés, facturas y primeras inscripciones. También había audios de whatsapp con su hermano Albano y Juan Navarrete sobre cómo se realizaba el inicio de actividades y se constituía una empresa.

Contó que Aimel Gavilán vendía las intervenciones de chasis y motor y cobraba cierta cantidad por la modificación. Él sabía a qué se dedicaba, incluso le presentó a Franco, quien después le vendió facturas.

Afirmó que le llegaban vehículos de todos lados y le subían 100 o 150 mil pesos del valor en que lo ofrecían. Por ejemplo, de la pieza del lado le decían “guatón te sirve este vehículo” y lo compraba si le servía. Señaló que le pagaba a la persona que inscribía el vehículo, pero no eran personas en situación de calle, se trataba de ver personas que no tuvieran mal aspecto. A las personas que inscribían los vehículos les decían “los gomas”.

El Ministerio Público incorporó con la declaración del acusado, una serie de **audios de whatsapp en OMP 208 e imágenes en OMP 209, contenidos en el celular incautado** y analizado, que daban cuenta de las instrucciones que Yerko impartía a los demás miembros de la organización. Como asimismo, se reprodujeron **audios de las interceptaciones telefónicas** que efectuaron a blancos investigativos, que fueron **incorporados en OMP 227**.

A modo ejemplar, en el audio WA0365, se escuchaba la voz de Yerko señalando “viene viajando, va a necesitar la camioneta y quién le va a pasar los documentos, las llaves en la mano”.

El acusado al respecto dijo que le daba instrucciones a Juan Navarrete para la venta de un vehículo.

Explicó que en esos audios Navarrete decía “mande patrón”, porque en su momento salió la serie de Pablo Escobar, por eso le decía patroncito, pero en general no se referían a él como patrón.

Además, preguntaba si ya habían llegado a Arauco, cuánto faltaba y si se habían contactado con la persona y por último, si se había vendido el auto blanqueado.

En otro punto, manifestó que la cuenta súper digital era de Jesús Gacitúa Candia, la cual abrió “online” sin que él supiera, porque tenía su cédula guardada en su celular y él pedía que le depositaran en esa cuenta.

Sostuvo que ofertaban los vehículos en redes sociales a un precio no muy distinto al precio real, porque se trataba de que fuese parecido al de las plataformas, para poder ganar lo más posible.

Respecto de los gastos o costos que tenía por vehículo, dijo que dependía del tipo vehículo porque no todos tenían el mismo valor, por ejemplo, por la Kia, costaba \$1.400.000, la factura en un principio costaba el 30% y después el 10%. Antes tenía que tener la persona a nombre de quien se inscribía en el Registro Civil. Tenía que pagar previamente un impuesto, que era el impuesto verde y dependía del valor del vehículo, pero era alrededor de 250 mil pesos, luego se iba al Registro Civil donde se pagaba 65 mil la inscripción, después se entregaban las placas patentes y, de ahí se compraba la homologación, que la vendía la misma persona de la factura, luego se pagaba el permiso de circulación y el seguro obligatorio. A continuación se esperaba de 10 a 15 días para que saliera aceptado en el Registro Civil y con la inscripción y el certificado de anotaciones vigentes, se procedía al cambio de número de motor y si el vehículo tenía mucho kilometraje, también se cambiaba y ahí quedaba en condiciones de ser publicado.

Advirtió que no tenía vinculación con la persona que inscribía el vehículo, ahí veían quién hacía la primera inscripción, muchas veces se inscribía a nombre de una persona y a veces a nombre de otra. Juan ubicaba personas y con Camilo en el año 2017 tenía contacto, cuando era pareja de Tatiana y, ella era quien le ayudaba a conseguir personas, pero en el año 2020 no tuvo relación con Camilo. Freddy también le ayudaba a buscar personas, contactaba amigos de 18 o 19 años y les mandaban los carné de identidad. Por ejemplo, Franco le decía que tenía la empresa bloqueada, entonces, le pasaba un carné y su beneficio era que le cobraba la factura más barato.

El que pagaba el impuesto verde era el que inscribía, pero no el permiso de circulación, porque a veces se pagaba a los 2 o 3 días o una semana más tarde y, generalmente esperaban que estuviera aceptado, que apareciera en el Registro Civil.

Advirtió que Tatiana aprendió el tema y sabía cómo se hacía y dónde se pagaba, por eso, ya no necesitaba instrucciones porque ella y Freddy ya sabían hacer sus labores, todo lo que comentó del “armado” de un vehículo. Por lo mismo, según su parecer, no había roles ya que ellos sabían lo que debían hacer. Él se los indicó desde un principio.

Contó que estaba en contacto con las personas que hacían las “pegas” de cambio de chasis y stickers, el contacto se lo dio Ilich, y él pagaba esos servicios. También le pagaba a quien se le inscribía el vehículo y después se pagaba la factura y lo que quedaba en ganancia se repartía.

Con respecto a las ganancias, aseveró que la ganancia por vehículo era relativa, dependía del vehículo, por ejemplo, por la inversión y pago de factura en un Kia Sportage quedaban unos 6 millones, porque se vendía como a 13 o 14 millones. En otros vehículos podía ser más. La plata la recaudaba quien vendía el vehículo en el momento. Acotó que ese dinero se gastaba en pagos generales, entonces, se quedaba con 3 millones la persona que lo ayudaba y él con los otros 3 millones.

Generalmente esas platas se pagaban en efectivo y no le rendían cuentas. Esa plata se depositó alguna vez en la cuenta de Claudia, pero generalmente el pago era en efectivo. Fue un depósito a nombre de Claudia Sandoval que lo hizo Edith. No se depositaban en las cuentas de su madre, su hermana o a la de Jesús Gacitúa.

Explicó que en un momento, cuando tenía la plata en efectivo la mandó a depositar a la cuenta de su hermana, porque le tenía que pagar la pensión a su hija y gastos de él, que estaba en Puerto Montt.

Respecto de la custodia de los vehículos, señaló que se guardaban en distintos lugares, en Cerro Navia, Quinta Normal o Lo Prado, pero esa misión no se encomendaba, las personas veían dónde guardarlo, a veces se arrendaba un estacionamiento.

Reconoció que en uno de los audios de whastapp exhibidos, conversaba con su hermano Albano, porque él no había pagado el impuesto verde en la Tesorería General de la República. Dijo que Albano sabía que los vehículos eran robados, a él le comentó cómo era el tema y aceptó ayudarlo. También lo ayudó a vender el vehículo blanqueado que parece él mismo armó.

Refirió que su hermano inscribió y vendió una camioneta Mahindra del año 2020, pero este no se dedicaba a esto, lo hizo solo en esa ocasión. En cuanto a la grúa horquilla, dijo que esta no era robada, no sabía de dónde salió y Albano le pidió una factura para poder pasársela al dueño del local (de Estación Central), porque estaba atrasado con los arriendos y con Ilich peleó el precio de la factura y se hizo la inscripción. Al dueño del local no sabía cuánto le pagaron, solo sabía que entregó la grúa como parte del arriendo que debía.

En el audio WA0165, se escuchaba “tengo listo el certificado digital que lo compré por internet, pero todavía no me aceptan lo de la dirección, si no vamos a tener que hacer un contrato de arriendo”.

El acusado al respecto, explicó que el certificado digital era para dejar la empresa habilitada para la facturación y en eso topaban, y como tenía la cuenta de Jesús Gacitúa, lo hizo por internet, por eso no iban que tener que ir a Providencia (A la Notaría).

Respecto de los audios WA0119, que señala “te mando los vehículos” y WA0110, “tengo lista la empresa, pero me falta una sola cosa para dejarla facturando”, explicó que le ofrecían un vehículo para blanquearlo, pero la empresa no estaba lista aun, entonces, no podía comprar si no estaba lista la empresa.

En otro audio 20129-WA0145, recibido por Yerko, se escucha “oye guatón el hombre las tiene legales y pasan por una máquina donde se le pegan los papelillos de seda y el hombre tiene alguien del servicio, las puede rellenar con los datos. Me va a mandar el precio”.

El acusado, sobre este audio, explicó que se trataba de los rellenados de las homologaciones (de revisión técnica) y le decían que tenían un contacto en el Registro Civil, pero ahí no se hacían estos documentos, por eso, al parecer, nunca le compró homologaciones.

En el audio WA00140, le preguntaban a Yerko ¿qué pasa después de las placas? Y en el audio WA00142, este contestaba “lo ideal sería ir a dejarlas, las que dicen Bastián del Rojo y las del plomo, que son de nosotros que se las instalamos a la camioneta. No sé si tenemos dónde guardar”.

El acusado, sobre esta conversación, explicó que hablaban de dos juegos de placas que se habían sacado y uno era de “ellos”, que era del auto plomo, y el otro se entregaba después con la factura a un tercero.

Con relación al audio WA0276 (cuando llegué a la notaría le decí que necesitai firmar una empresa, presentai al hueón con el carnet, les dai el número de atención 2792661, a ellos les va a aparecer la empresa ya constituida y la va a firmar el notario, de ahí te va a dar un rut, que si lo hací temprano en la mañana a primera hora yo te lo voy a alcanzar a dar para que vayai al SII a sacar las claves del rut de la empresa y las personales de los dos gomas, así que mañana tení que tirarte en la extrema con el carnet del hueón para alcanzar a hacerla, sino vamos a tener que hacer esta no más); el acusado admitió que daba claras instrucciones de lo que se tenía que hacer en la Notaría, dijo que estaba hablando con Sebastián Martínez. (A quien se le reprodujo este audio y negó que haya estado dándole instrucciones a él, por lo que es más probable que haya sido a Juan Navarrete que en esa época estaba involucrado con Yerko Silva en la constitución e iniciación de actividades de las sociedades)

Refirió que diferentes personas llevaban a los “gomas” (al Registro Civil o a la Notaría), como Tati, Freddy o Franco. **Respecto de Franco Cruz Iligaray, dijo que también constituía empresas, en los años 2017 y 2018** (al principio de su declaración dijo que solamente emitía facturas y se las vendía), **además de Sebastián Martínez, que desde el 2018 al 2020 lo ayudaba en esa labor.**

En el contexto de la reproducción de WA0003 (mano cuando me vaya pa allá pal SII ahí pido la clave personal y la clave de empresas y de ahí nada más o ¿tengo que hacer el trámite para la iniciación de

actividades?), el acusado manifestó que creía que era la voz de su hermano Albano, ya que a este le pedía favores y no le daba instrucciones. No recordaba la fecha de esta conversación, pudo haber sido el 2020, ya que desde fines de 2019 a principios de 2020 su hermano le prestó colaboración.

A propósito del WA0004 que es la respuesta al anterior (“nada más porque la iniciación de actividades la hago yo por el teléfono después”), el acusado insistió en que él no hacía la iniciación de actividades, pues los datos (de las sociedades) se los mandaba a Sebastián, quien creaba las claves. En este audio, dijo que él iba a hacer la iniciación de actividades, pero en realidad la hacía otra persona.

Con ocasión de la reproducción de los audios que son la continuación de los anteriores, WA0005 (al firmar la sociedad pide que te den el Rut de la empresa), WA0008 (exacto las puras claves y yo la dejo armada y compro las firmas, y deja a los gomas ubicables porque puede ser que la verificación se caiga y hay que hacerles un contrato de arriendo) y WA0010, se escuchó al acusado indicando “Gordo, hácele al tiro un poder amplio ante Notario al loco a nombre del Juanito para después no andar buscando al loco, voy a mandarle a pedir los datos al tiro”. Al respecto, manifestó que no sabía si le estaba explicando a Albano, o se le pedía el RUT a los que hacían la iniciación de actividades.

Al oír el WA0013, el acusado indicó que se refería a que se ingresaron los datos para que la empresa quedara facturando y no resultó. Por eso, le dijo a Juan si podía pasarle los antecedentes a su amigo contador para que lo ayudara. Explicó que algo pasaba con la dirección, que no servía para que la empresa quedara operativa, y por eso Sebastián no pudo dejarla funcionando.

El acusado acotó que antiguamente Sebastián Martínez compraba las firmas (electrónicas) y se las pasaba en un pendrive, después ya no era necesario porque éstas eran digitales.

Los WA0157 y WA0158, son explicados por el acusado en el sentido de que trató de comprar una firma digital para instalarla en el SII, y Franco le dice cómo tiene que hacerlo. Dijo que si se hizo por firma digital debió ser entre el 2019 o 2020, ya que con Franco nunca perdieron contacto, él era la persona que vendía las homologaciones. En este audio le está preguntando a Franco cómo se hace el trámite (de facturar con la firma digital) y éste último le respondió que solamente mediante un computador. No recordó si Franco le hacía facturas en esa época o no.

En otro punto, **se le exhibió el OMP 209**, específicamente, el WA0221 donde el acusado identificó el escritorio de la pantalla de su celular en el que aparecía el icono de “Chile Autos”. Luego, en el directorio del mismo, singularizó el contacto de Daniela manita, quien es su hermana Daniela Espinoza Toro; “Aimer”, corresponde a Aimel Gavilán, quien modificaba los números de motor y de chasis, aunque dijo que había otras personas que vendían ese servicio también, por eso, lo llamaba y le preguntaba y si podía hacía el servicio y, en caso contrario, buscaba a otra persona. Acotó que lo conoció por Ilich y fue Tatiana quien tomó contacto con él.

Continuando con los contactos que tenía en su teléfono, aparecía “Franco”, señalando que correspondía a Franco Cruz Iligaray; “Goldo”, es su hermano Albano Silva Toro; “Juanito”, no sabía si era Juan Navarrete Vásquez, pero sí lo tenía dentro de sus contactos; “llaves originales” correspondía al contacto de donde mandaba a hacer las llaves originales de los vehículos. Explicó al respecto que en los audios era a César a quien le consultaba si podía y si no, buscaba otras opciones y se pagaban en forma presencial con dinero que estaba en la calle, que tenían, por ejemplo, Claudia o Juan, o bien, se hacían transferencias desde la súper digital a la persona que tenía que pagar en efectivo. Con respecto al contacto “Luixin”, señaló que lo conoció estando preso, y después se quedó en libertad y llegó a fines de 2020 y lo ayudaba a guardar un vehículo o a sacar una patente.

Respecto de su relación sentimental con Claudia Sandoval Godoy, a quien tenía registrada como “enferma q1a”, indicó que retomaron su relación en el año 2017 hasta abril o mayo de 2019, ella lo fue a ver a Puerto Montt y le llevó a su hija, en agosto de 2019, en ese momento ya no estaba en una relación con Francisca.

Sostuvo que Claudia hacía lo que él le pedía, le guardaba y pasaba plata, pero ella en definitiva no tenía conocimiento de lo que pasaba, aunque sabía que la plata no venía de un buen lado. Ella era amiga y cuñada de Tatiana Arana. Dijo que Claudia tenía un Chevrolet Aveo, cuando estaban separados, y en el año 2013, le ofreció cambiarlo por algo más grande, lo compraron a crédito por 14 o 15 millones y él le ayudó a pagarlo, en 48 cuotas de \$260.000 con la plata que obtuvo de la venta de los vehículos blanqueados.

En relación con la imagen WA0235, indicó que era un pantallazo del escritorio correspondiente al ícono “civil digital”, de donde sacaban el certificado de nacimiento de las personas. En el ícono “Chile Autos” revisaba los vehículos que estaban publicados y más de una vez los publicó ahí, como en siete u ocho oportunidades. Eran dos los portales que se ocupaban para publicar vehículos, no había otros.

Pero insistió que no había una persona encargada de hacerlo, porque nadie cumplía roles específicos.

Dijo que en el ícono “Despegar”, buscaba pasajes para Francisca su pareja, para que viajara a Puerto Montt, en dos oportunidades, pagaba entre \$70.000 a \$120.000 de ida y vuelta, los compraba con el dinero de los vehículos.

Se le exhibieron carpetas, una denominada “firma”, y el acusado señaló que en ella guardaba las firmas digitales y que se las enviaba a Franco y Sebastián para que facturaran, tenía que ser a alguien que supiera ingresarlas, porque no es algo fácil.

Otra carpeta denominada “Hyundai Tucson”, dijo que en ella pudo haber tenido fotos de un vehículo que se estaba haciendo o de la inscripción y placas patentes.

En la carpeta “Carnet pegas”, reseñó que guardaba los carnet de mucha gente que le iban llegando para hacer empresas o para inscribir vehículos, él los revisaba y a veces le servían, ofrecía entre \$200.000 a

\$400.000, dependiendo en lo que se iba a ocupar, aunque no conocía a ninguna de esas personas a nombre de quienes se inscribieron los vehículos. Dentro de esta carpeta, había documentos guardados en archivos de inscripciones de vehículos, él las pedía para ver cómo habían quedado y las iba guardando en una carpeta, pero muchas veces no se las mandaban.

Refirió que hay carpetas con imágenes de caballos que se encontraban en el hipódromo y que el caballo de la imagen, fue comprado entre 4 socios, él tenía un porcentaje, costó como \$1.900.000 o 1.800.000 y explicó que se da mucho en la hípica la compra entre varias personas de un caballo. Si fue en el 2013 o 2014, su valor era relativo, de 3 millones o 1 millón y medio y años atrás, Albano también tenía caballos, eran muy “pegados” con la hípica.

Continuando con las carpetas de su celular, indicó que el video WA0188 es de la carpeta “Yerko”, que era la APP de la súper digital. Mencionó que en el video, se está explicando cómo centralizar la firma electrónica con el SII, desde su celular no podía hacerlo, por eso mandó ese video explicando cómo tenían que hacerlo, pero no se lo mandó a Albano, porque habían dos personas que facturaban, que eran Sebastián y Franco.

Indicó que en ese tiempo Sebastián era “a la antigua”, por lo que iba y compraba la firma (electrónica), se la entregaban en el pendrive y así se firmaba la factura. Después ese sistema desapareció, y las firmas eran digitales, pero había que instalarlas en el computador.

Respecto del RUT 18.980.065-7 que ingresó, el acusado dijo que no recordaba a quien correspondía, pero lo memorizaba, y el nombre “Renán Guenteo” lo tenía guardado en su celular pero no lo recordaba; además, la clave 1990 que ingresó, no la generó él, se la mandaron, era poco lo que podía hacer por el celular.

Sobre otro tema, puntualizó que a Claudia Sandoval cuando ya habían terminado su relación, le daba \$300.000 de pensión alimenticia y Daniela se los transfería, de una la plata que en su momento le transfirió que eran 5 millones de pesos de la venta de un vehículo. Pero aseguró que Daniela no sabía cuál era el origen del dinero, esto fue a fines de 2019 o principios de 2020 y desde el año 2016 que estaba privado de libertad, y ellas (refiriéndose a la hermana y a la madre) solamente le hacían el favor, no les comentaba nada ni ellas le consultaban.

Por otra parte, expresó que WA0078 se trata de un whatsapp con su hermana Daniela Espinoza, en el que se alude a la plata que le había transferido a ella, correspondiente a \$ 5.900.000, más \$ 100.000, con lo que se totaliza 6 millones de pesos.

Reiteró que la plata producto de la venta de los autos blanqueados podía llegar donde Claudia, que a veces se la guardaba y la pasaba a buscar Daniela, siempre haciéndole favores, también había plata en efectivo en la casa de su mamá, pero ellas nunca consultaron por el origen de esta.

En cuanto a la cantidad de plata que se cobraba por esas ventas, el acusado responde que era relativo, a veces \$ 5.000.000 y \$ 9.000.000 en otras oportunidades.

Con relación al mensaje “mándame la cuenta del banco Falabella de mi mamá”, el acusado cree que se la pidió porque iba a transferir dinero a su madre Jeannette Toro, quien recibía dinero que él le transfería a su hermana, no recordaba que le depositara directamente a su mamá, pero sí sale ahí, entonces, sí le depositó.

Con relación a una imagen de un cuaderno con anotaciones que se le exhibe, el acusado indicó que debía ser de las platas que tenía anotadas para tener las cuentas claras, de lo que se había gastado y de lo que les había mandado. Dijo que Daniela también le enviaba los gastos que ella había realizado y las transferencias a la cuenta de Jesús Gacitúa Candia, eran para comprarse cosas él.

Luego, expresó que al ingresar al contacto “Artuu” recordó que le estaban ofreciendo un auto, y él estaba pidiendo el certificado. Se trataba de vehículos robados a través de la modalidad de escáner, en el que estando el auto estacionado, le hacían una llave alternativa para echarlo a andar. Él le estaba indicando la dirección para que fueran a dejar el auto.

El contacto “Goldo”, refirió que le estaba remitiendo certificados de primera inscripción, que pedía una vez que se inscribían los vehículos, y “Goldo 2” correspondía al segundo teléfono de Albano.

La imagen WA0326, indicó que es una “e-factura” y era el ícono del SII.

Aclaró que “Yeyi” corresponde a Freddy Miranda Arana, el hijo de Tatiana Arana Espinoza. En un momento cuando pelearon con Tatiana, Freddy lo empezó a ayudar con lo que hacía, inscribió vehículos, no sabía si a su nombre, lo ayudaba a cambio de dinero, porque él necesitaba a alguien afuera que lo ayudara. También le mandaba encomiendas, pero no lo fue a visitar a la cárcel. Freddy era mayor de edad porque le mandaba encomiendas, y en algún momento también le guardaba vehículos, tenía conversaciones directas con Sebastián Martínez y Franco Cruz.

Expuso que tenía la imagen de la cédula de identidad de Jesús Gacitúa Candia, quien es la persona que abrió la cuenta del Banco Santander súper digital que él usaba. Conocía a Juan Navarrete y también inscribió vehículos. Él no sabía que usaba su cuenta, después supo porque se la bloquearon y tuvo que contarle, pero a través de un tercero, no directamente. No lo conocía, el carnet le llegó a través de otra persona, nunca lo fue a ver ni se enroló para encomiendas.

En relación con la cuenta de whatsapp de “Juanito”, señaló que él le envió la cédula de identidad de Jesús Gacitúa. Juan le dijo que era su pega salir a buscar “gomas” y algunos de estos se los facilitó él. También le envió la cédula de identidad de Marcos Supanta, el que inscribió vehículos a su nombre. Recordó que con Albano fueron a ofrecer un vehículo, y le pidió a Juan que lo acompañara para después traerlo en auto.

En cuanto a la cuenta de whastapp “Goldo 2”, explicó que el contexto de la conversación que se le exhibió era por un poder notarial, por si acaso se podía hacer con firma electrónica, no recordó para qué. Señaló que si las personas a nombre de quienes se inscribía el vehículo no estaban disponibles, se les hacía firmar un poder amplio, los que eran legales, no truchos, para poder vender los vehículos.

Con relación al contacto “Maulén” en su cuenta de whatsapp, dijo que se trataba de una conversación donde le dice, “oye, compa, háblale al Yerko que necesito los stickers del parabrisas y el de la vuelta del nuevo, porfa. Sí. Esta hueá con el sol se destiñeron, ah, no, porfa” Se refiere esa conversación, señaló el acusado, a que los stickers habían quedado mal. Por eso le envió una imagen.

El acusado adicionalmente señaló que hubo muchas veces que, como lo comentó en su declaración, los vehículos se vendieron a menor costo, pero listos, hechos, entregados, para que llegaran y se vendieran. Y uno de estos vehículos fue de estos en que los stickers habían quedado mal y le estaban pidiendo a él que se los pudiera mandar a hacer de nuevo.

En ese contexto, señaló que se seguía haciendo lo mismo, por ejemplo, les cobraba 6 millones, se los armaba y le quedaba una ganancia y ellos vendían. Le mandaban el contacto de Aimel.

Indicó que **WA0012 era la carpeta “WS business”**, donde guardaba depósitos del dinero de la venta de los vehículos, que él pedía y que le remitían la boleta para poder enviarlos. En ese contexto, se mostraron al acusado pantallazos de depósitos que él hacía.

Respecto de la foto de “HM Hernández” que se le exhibió, dijo que correspondía a una imagen que el descargó de internet, de una automotora con ese nombre, para ponerle un logo a una empresa que ya estaba creada de nombre “Hernández”.

El video WA0015 que se exhibió, refirió que era de un furgón Hyundai H1, pero no sabía si era el mismo al que se refería en un audio en que señalaba que necesitaba una H1 que partiera con patente L; y en relación con la patente LPHC-22, indicó que ese auto tenía facturación de las empresas que él manejaba para facturar, y que pidió el video para ver cómo había quedado el lavado del vehículo, porque para venderla el video estaba muy de cerca.

Con respecto a WA0103, dijo que era un video de un Peugeot rojo patente LGBS-99, que no sabe quién se lo mandó, pero se lo estaban ofreciendo para la venta, pero no lo compró. Acotó que todos los vehículos que le ofrecían eran robados de distinta manera.

En relación con la **fotografía OMP 1**, el acusado reseñó que en el costado izquierdo de la imagen se divisaba el vehículo patente LPHC-22 que estaba dentro del establecimiento de la Parrilla del Gaucho, que administraba su hermano Albano, el estacionamiento era súper grande y abierto (la reja se mantenía abierta a la entrada), por eso, abusaba de la confianza de Albano y metía vehículos ahí sin que éste último supiera.

Se le exhibió **OMP 9** y al respecto señaló que era una imagen que estaba en su celular, correspondiente a la **cuenta vista súper digital que tenía una tarjeta virtual para comprar por internet, número 700184335, del Banco Santander**, a nombre de Jesús Gacitúa Candia.

Y respecto de **OMP 12**, transferencias de dinero que se extrajeron de su celular, por \$70.000, \$130.000, \$85.000 y \$500.000, aclaró que en rigor no eran transferencias, sino “auto-atenciones”, ya que pedía que le mandaran una clave para girar en cajeros automáticos, y todas correspondían a dinero de la venta de los vehículos blanqueados.

En relación con **OMP 14 y 15**, indicó que eran, respectivamente, fotografías de homologaciones que le mandaba “Luxín” para que las revisara si estaban bien y las notas que iba guardando con los gastos que hacía, describiendo cada uno de los gastos.

Se le exhibió **OMP 17** y señaló que correspondía a las imágenes de un vehículo Hyundai, patente LPKZ-56, que se vendió en 13 o 14 millones de pesos. Explicó que siempre se hacían ofertas, después venían los descuentos de los gastos y le quedaba un margen de ganancia entre 5 a 6 millones, suma que se repartía con la persona que lo vendía por mitades iguales, es decir, 50 y 50%.

La imagen **OMP 20**, dijo que era de cuaderno con cantidades de dinero anotadas, “\$50.000” para el “goma”, es decir, para quien fue a inscribir. La imagen **OMP 21**, que era una conversación con el contacto “Watón Roro”, que estaba preso y le ofrecía un vehículo Toyota Rav 4 año 2020 a \$1.200.000, pero que él iba a conseguir rebaja

En cuanto a las imágenes **OMP 23, 24 y 26**, la primera, que correspondía a permiso, seguro y homologación de la patente LPHC-22, manifestó que las tenía en su celular porque tenía la mala costumbre de preguntar cómo quedó el plastificado y cómo quedó lavado; la segunda, solicitud de primera inscripción y factura de un vehículo, dijo que la Comercial Gildemeister SPA, era una de las empresas a las que le compraba facturas y con el nombre y el RUT de las personas, en este caso Jonathan, se podía hacer todo y la última, primera inscripción de un vehículo que posteriormente vendió, dijo que también la factura correspondía a Automotora Gildemeister.

Respecto de la imagen **OMP 27**, de un vehículo Hyundai I10 patente LRLJ-59, el acusado refirió que le ofrecieron pero no cree haberlo comprado, porque él compraba Hyundai Tucson, Kia Sportage, no vehículos city car.

Reiteró que tenía la mala costumbre, cuando se vendía un vehículo, de pedir fotos del vale vista, de la transferencia del mismo, etc.

Respecto de las fotografías de cédulas de identidad que mantenía en su celular, expuso que **OMP 110**, era la cédula de identidad de Eduardo Sanhueza Pérez, que se usó para constituir una empresa o era para inscribir un vehículo. (Único socio de Comercial Gildemeister SPA creada el 20.02.2020). **OMP 111**, era la cédula de identidad de Rernán Elías Guenteo Maliqueo, RUT N° 18.980.065-0 correspondiente a una

persona que creó una empresa, y fue este el Rut que ingresó en la página del SII para ver lo de la firma. (Único socio de Automotriz C. Hernández SPA creada el 30.02.2020). **OMP 112**, cédula de identidad de Jesús Diego Gacitúa Candia. (Titular de cuenta súper digital del Banco Santander usada por Yerko Silva). **OMP 115**, cédula de identidad de Leónidas Sebastián Hernández Concha, dijo que no sabía si le llamaban “gualata”, porque no lo conocía ni tenía contacto con él, este sujeto fue a Arauco para la venta de una camioneta, pero la persona interesada no le tincó, tal vez no lo vio decente y no se concretó.

Continuando con las fotografías de cédulas de identidad, indicó que **OMP 119**, era de Jonathan Pérez Pérez, que se usó para inscribir vehículos a su nombre. **OMP 123**, era de Sindy Arancibia Muñoz. **OMP 125**, era de Marcos Supanta Aguilera, dijo que parece que le inscribió un vehículo.

El acusado explicó que la mayoría de los vehículos que le exhibieron, no los vendió él sino que correspondían a facturas vendidas, y en el transcurso de las imágenes, recordó por qué tenía los pantallazos de los impuestos verdes, porque después ya las facturas se empezaron a vender y no a generar los vehículos como tal, sino que se les vendían a otras personas como a Aimel Gavilán, que compró varias facturas. Entonces, él le enviaba la factura, la foto del carnet, con el impuesto verde por un monto del cual se ganaba una comisión. No tenía los pantallazos, entonces iban quedando los archivos PDF en el teléfono.

Aseveró que en el año 2020, las facturas estaban demasiado baratas y la comisión que ganaba era entre \$300.000 y \$500.000. Dijo que la factura se la vendían en \$ 500.000 y él la ofrecía a un millón de pesos, pero entregaba la factura y el impuesto verde y después los siguientes gastos corrían por parte de quien compraba la factura. Por eso, aseguró que había muchos vehículos que no conoce y que tampoco él vendió.

Dijo que por whatsapp coordinaba la obtención de la factura para la posterior venta y que Franco y Sebastián le colaboraban en eso.

La fiscalía también reprodujo audios de whatsapp contenidos en su teléfono celular, a saber, los audios WA0121, WA0122, WA0123, WA0124, WA0125 y WA0126, en los cuales se puede escuchar una conversación entre Tatiana Arana y Yerko Silva, en que él le dijo que “se fueron a pérdida”, y ella le indicó “tú tenías un piso” y luego “perdimos, tú perdiste más que yo, yo te hago ganar plata a ti, y también yo te vendo tus hueás”.

El acusado aclaró al respecto que Tatiana Arana no le estaba rindiendo cuentas, porque fue una conversación cuando ella fue a mostrar un vehículo y fue detenida en el año 2020, después cuando salió del cuartel, conversó con ella y le preguntó qué había pasado, cómo habían sido los hechos, se los comentó, fue una discusión porque en definitiva él había invertido la plata del vehículo, y ella igual se sentía culpable, como se escucha en los audios.

Además, ella dijo “esto es parte del contrato”, aclarando Yerko que esos son términos que se ocupan en la jerga delictual, no quiere decir que ella haya tenido un contrato con él.

En el audio WA0037, la fiscal señaló que en esta reproducción Tatiana está tratando de cambiar el chip, porque Yerko le indicó que tenía que cambiar los teléfonos y el acusado contestó que en el audio lo está nombrando a él, pero no recordaba esa situación ni esa conversación.

Por otra parte, el Ministerio Público también reprodujo algunos audios de interceptaciones telefónicas incorporados como OMP 227.

Respecto del Progresivo 11227, el acusado señaló que esta es una conversación que tuvo con Tatiana, en que le preguntaba ¿qué tengo que hacer, dónde tengo que ir? Y aclaró que no recordaba el contexto en que fue ese llamado ni que hayan estado hablando sobre coordinaciones para vender autos blanqueados, porque no solamente hablaban de temas de vehículos o de vender autos, igual le veía el tema de las encomiendas y muchas otras cosas.

La fiscal insistió, en que al inicio de la conversación ella le dice, “no me retis más, si ya aprendí”, y el acusado señaló que era en relación a la discusión que habían tenido por lo de Quilín. Continúa señalando la fiscal, que se escucha hagamos las cosas bien, y ahí le dice, ¿dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer?

El acusado explicó que él la llamó y le preguntó si se le había pasado la lesera y por qué lo había bloqueado de whatsapp después de la discusión que habían tenido anteriormente, y la llamó porque no tenía a nadie más que le pudiera ayudar a hacer sus cosas, era la única persona que estaba disponible.

En relación con el Progresivo 5996, que es una conversación entre Freddy y Sebastián Martínez, el acusado explicó que cuando quedó incomunicado y pasó al módulo de máxima, ellos empezaron a ver por su parte y como querían seguir haciendo vehículos y ganar plata por las de ellos, Franco empezó primero a pedirle a Sebastián las claves para poder facturar, pero como no conocía a Franco, no se las pasó y como conocía al Freddy, Franco le pidió a éste que le pidiera las claves a Sebastián para que empezaran a trabajar ellos y Sebastián Martínez le dijo que le transfieran primero y le daba las claves al tiro. Eso lo supo mucho tiempo después.

Señaló el acusado que cuando Freddy le ayudaba, se conseguía las facturas con Sebastián, porque él tenía las claves, y como quedó incomunicado, Freddy tenía que tener a alguien que le facturara. Y en eso entró Franco, en una conversación, que se imaginaba también la iban a poner, entre Franco y Freddy, dicen que él (Franco) es el que hace todo, porque Freddy no sabía que Franco era quien facturaba también, quien hacía empresas, etc.

Indicó que como no tenían empresas, Freddy se comunicó con Sebastián Martínez y le pidió las claves de las empresas que él le había creado, y no sabe cuánto fue el monto que le transfirieron, pero accedieron a las claves de esas empresas (Se está refiriendo a Freddy y Franco).

De esta forma, como pudo advertirse, los asertos de Yerko Silva permitieron establecer que en la fecha en que fue trasladado al módulo de máxima seguridad por el tema de las celdas vip y quedó incomunicado, a mediados del año 2019, Freddy y Franco no tenían las claves de las empresas para facturar

y, como Yerko no se las podía pasar y Sebastián Martínez las mantenía, entonces, Freddy lo llamó para pedírselas y éste se las cobró, es decir, se las pasaría a cambio de una suma de dinero.

Consecuente con ello, este episodio reveló que quien monopolizaba el manejo de las claves para facturar a esa fecha era Yerko Silva y frente a una situación de emergencia, de no poder continuar el giro delictual, recurrieron a Sebastián Martínez quien había creado esas empresas y que por tanto también tenía las claves.

Por ende, el encausado aseveró que hay hartos vehículos que “ellos” (refiriéndose a Franco y Freddy) facturaron y que vendieron facturas o crearon vehículos, en los que él no tuvo participación.

En el Progresivo 6001, Claudia Sandoval hablaba con Freddy, ella tenía que transferir o depositar a Sebastián Martínez para acceder a las claves de las empresas (Es decir, quien pagaba para que Freddy obtuviera las claves era el propio Yerko).

El acusado dijo que en esa conversación hablaban de los “gomas”, se referían a una conversación que tuvo antes con Freddy, que tenían que entregar a Ilich Chopa si le preguntaban por alguien, más que nada porque a él no lo conocían. Explicó que Freddy lo llamó y le dijo que había llegado la PDI a la casa de una persona, y que no sabía qué hacer, entonces, ahí le dijo que dé el nombre de Ilich.

Agregó que esta conversación en que Claudia dice que ella hace lo que le dice Yerko, es posterior a cuando él quedó incomunicado.

En relación con el Progresivo 6336, que es una conversación entre Freddy Miranda y su madre Tatiana Arana, en que hablaban de un auto que tenía el parabrisas roto, Freddy se refiere a Yerko como “tío pollo”, que cuando se fue incomunicado, le mandó una nota que decía que le tenía que facturar Sebastián, y que siguieran trabajando, le pedía que no lo dejara botado y Freddy dijo que no. Además, hablaban de que respecto de ese vehículo Tatiana iba a ganar 2 millones y él una luca (1 millón). El acusado acotó que esta conversación ocurrió mientras él estaba incomunicado.

En el Progresivo 7028, conversaban Franco y Freddy, en la época en que Yerko Silva estaba incomunicado, y Franco le preguntó a Freddy cuánto le pagaba Yerko.

El acusado explicó que en un principio Freddy le ayudaba con el tema de las encomiendas y también le ayudaba a Tatiana en la venta de las camionetas a cambio de un porcentaje. Añadió que cuando él necesitaba un carnet, Freddy conseguía a las personas, amigos o conocidos.

La fiscal aseveró que cuando Franco le dice a Freddy que tiene que ir vestido sin Jordan y le dice por último, “le decimos al guatón que tiene que invertir plata para esto”, se está refiriendo al acusado y a que tenían que estar bien presentadas las personas que vendían los vehículos.

El acusado respondió que es efectivo que tenía que ir bien presentado, pero que Franco se refiriese a él como “guatón” no cree, porque con Franco, más allá de comprarle facturas y la homologaciones, no había un trato más de confianza como para que dijera eso.

La fiscal mencionó que después dicen que Franco debe tener contacto directo con Yerko, y Franco le explicó a Freddy que él es el que hace todo el tema y se sabe toda la pega en sí, pero que Freddy es el que tiene el contacto directo con Yerko.

El acusado contestó que sí, porque Freddy hablaba con él por whatsapp, porque le mandaba la encomienda y lo ayudaba, o bien le decía “anda a comprarme esto al mall”, o cualquier trámite que tuviera que hacer, comprarle ropa o lo que necesitara, él iba y le pagaba, 20 mil o 30 mil pesos, le pedía la camioneta a Claudia y le hacía las gestiones que necesitaba en la calle.

Se le exhibió como OMP 240, una publicación que él subió a Chile Autos de un Grand Cherokee Limited, en \$ 22.000.000. Al respecto, Yerko Silva indicó que era probable que haya tenido contacto con el comprador y también Tatiana.

Acto seguido se vinculó la fotografía anterior con el Progresivo 11.434, en que la fiscal refirió que Yerko señalaba que le había mandado un whatsapp a Tatiana con el número de teléfono porque estaban preguntando por el mismo vehículo, respondiendo Yerko que en el audio se dice que le había mandado un mensaje a Freddy y aclaró que le dijo a este que le había mandado un contacto por whatsapp a Tatiana. Y en el progresivo 11.435, Tatiana habló con la persona interesada de la cual Yerko le mandó el número por whatsapp y quedaron en juntarse en el mall de Maipú.

Sobre otro punto, el acusado relató que cuando volvió con Claudia, ella ya no estaba trabajando, estuvieron un tiempo y después la siguió ayudando con el pago de las cosas y de los gastos de su hija. En ese tiempo le daba \$500.000 o \$ 600.000, la ayudaba a pagar los gastos del departamento y a pagar las cuotas de un jeep, de \$ 290.000 o \$ 300.000.

Explicó que cuando se juntaron, en ese tiempo, todavía no estaba con el tema de la venta de los vehículos, ésta comenzó entre marzo y abril de 2017 y con ella se juntaron el año 2016; cuando cayó detenido le quedó plata “afuera” del tráfico de drogas, para los gastos de Claudia y su familia, no recordando el monto exacto, y la tenía guardada en otra parte. Acotó que durante los años 2018 y 2019 se fue ayudando con plata de las ganancias del blanqueo de los vehículos, de los cuales \$800.000 iban para los gastos de Claudia Sandoval.

En el Progresivo 4393, la fiscal planteó que era una conversación entre Claudia Sandoval y la madre de Yerko, Claudia le decía que “se tiene que hacer cargo de todas sus cosas” por eso no podía trabajar. Al respecto, Yerko explicó que se trata del tema de las encomiendas y también del cuidado de su hija, por eso más que nada no trabajaba.

En otro orden de ideas, se incorporaron los **OMP 191 a 200**, que guardan relación con la cuenta súper digital N° 71000184335 del Banco Santander cuyo titular era Jesús Gacitúa Candia y que usaba y manejaba Yerko Silva desde su celular. De este modo, OMP 191, es un correo electrónico remitido por el Banco Santander respecto de la cuenta súper digital, aperturada el 31 de diciembre de 2019, adjuntando las cartolas; en el OMP 192, se introdujo la cartola del 3 de enero al 24 de enero de 2020. Al respecto, Yerko Silva señaló que los dineros que transfería a su madre Jeannette Toro, provenían del blanqueo de los vehículos o a veces, de la venta de facturas y en el OMP 193, se incorporó la cartola de febrero de 2020, destacándose cada uno de los abonos a la cuenta de Jeannette Toro, y otra a un tal Arturo y a Renta Power SPA, señalando Yerko que todas fueron hechas con dinero de la venta de los vehículos blanqueados.

Aseveró que pedía a cualquiera que lo pudiera ayudar, Tatiana o Freddy, que le depositaran el dinero de la venta de los vehículos.

Con respecto a **OMP 194** que corresponde a la cartola de marzo de 2020, la fiscal destacó una transferencia de 4 de marzo, que es un depósito en efectivo por el monto de \$500.000 como abono a la cuenta, consultando si les pedía a las personas que trabajaban con él que le depositaran.

Yerko respondió que no necesariamente eran las personas que le ayudaban, porque de repente hasta a amigos les pedía que le pasaran a buscar plata, donde él la guardaba, en la casa de familiares y se la depositaran. Preciso que no guardaba plata en la casa de su madre y de su hermana, no mandaba a buscar nada a su casa y que el origen de ese dinero era de los vehículos.

Luego, expuso la fiscal el monto total de los movimientos registrados desde enero a marzo de 2020, que es de \$ 7.335.000. Pero el acusado señaló que no entendía cómo pudo llegarse a ese monto, porque el tope máximo de la cuenta era de 2 millones.

Acto seguido, se introdujeron los movimientos de la cuenta en examen, en OMP 195, de abril de 2020; OMP 196, de mayo de 2020; OMP 197, de junio de 2020; OMP 198, de julio de 2020; OMP 199, de agosto de 2020; y OMP 200: de septiembre de 2020. Y al respecto, el acusado reconoció que el origen de los dineros que recibió o transfirió en y desde esa cuenta, en esos períodos, correspondían a la venta de los vehículos blanqueados y que mantuvo la cuenta de marzo a septiembre de 2020.

Insistió en que esa cuenta tenía una capacidad para hacer abonos o transferencias de máximo 2 millones de pesos entonces, si se habla de marzo a septiembre, son 7 meses y 2 millones por mes, son 14 millones, ya que es como una cuenta RUT, y no deja hacer movimientos que sean mayores a 2 millones de pesos mensuales, y después hay que esperar al mes siguiente para poder hacer el nuevo movimiento.

La fiscal señaló que el total del flujo de los dineros, de abonos y transferencias, es de \$ 21.349.000, que desde enero a marzo los movimientos suman \$ 7.735.000 y en abril, el total es de \$ 2.745.000.

Respecto de la cuenta de Daniela Espinoza Toro del Banco Itaú, entre el 1 de enero del 2017 y el 1 de febrero del 2019, hizo presente la fiscal que el 1 de febrero de 2017 ella le transfirió desde esa cuenta a

Claudia Sandoval la suma de \$ 4.240.000, respondiendo Yerko que es probable porque con Claudia estaban juntos y que desde abril de 2017 en adelante, los dineros eran producto de las ventas de vehículos blanqueados. Acotó que antes de esa fecha era plata que tenía guardada.

La fiscal hizo presente que con esa otra plata hay un depósito el 1 de enero de 2017, por 30.000 pesos, ya que luego el próximo depósito es del 30 de abril de 2017, por 70.000 pesos y así sucesivamente, por tanto, Yerko señaló que desde el 30 de abril de 2017 al 1 de febrero de 2019, a los \$ 4.240.000 habría que restarle \$30.000, por lo que, sería \$ 4.210.000.

Luego la fiscal enumeró una serie de transferencias desde la cuenta de Daniela del Banco Itaú, tales como, el 21 de mayo de 2017 a Aimel por \$150.000, el 12 de mayo de 2017 a Edith Silva \$540.000; el 8 de mayo de 2017 a Albano \$10.000, el 8 de mayo de 2017 dos transferencias a Camilo Sandoval, una por \$60.000 y la segunda por \$100.000 y el 6 de mayo de 2017 a Camilo Sandoval por \$1.250.000.

El acusado reconoció todas estas transferencias y señaló que el vínculo que tenía con Camilo Sandoval es que fue su cuñado por años y es el tío de su hija y creía que el motivo de las transferencias era porque le había pedido plata prestada o le había encargado comprar algo, porque en mayo de 2017 no tenía vinculación con él por el tema de los vehículos.

Aseveró que el origen de esos dineros es probable que haya sido de la venta de los vehículos, porque su hermana transfería a donde él le pedía, pero ella sin tener conocimiento de dónde venía de la plata. (Los dineros que guardaba y se administraban en las cuentas de su hermana Daniela Espinoza y la súper digital provenían de la venta de los vehículos).

Se incorporó, además, el documento 938, consistente en oficio remitido por el Banco Itaú Corpbanca, de fecha 4 de septiembre del año 2019 que informa que la cuenta vista número 02-121-4792-3, de Daniela Espinosa Toro, fue aperturada el 19 de junio del año 2012, al cual se adjuntan las cartolas de enero de 2017 a agosto de 2019, con el detalles de las transferencias enviadas y recibidas en el mismo período.

La fiscal destacó el detalle de las transferencias de interés, respecto de Claudia Sandoval, Edith Silva, Aimel Gavilán, Camilo Sandoval y Albano Silva Toro.

Por otra parte, introdujo el **documento 3**, que es el informe de Gendarmería de 8 de junio de 2020, sobre personas enroladas respecto del acusado Yerko Silva Toro, para hacer visitas y/o para entregar encomiendas, respecto de todos los penales en que ha estado, en el cual aparecen las siguientes personas: en el número 2, Tatiana Arana Espinoza; en el número 4, Paula Becerra; en el número 9, Daniela Espinosa Toro; en el 8, Adrián Ignacio Espinosa Toro; en el número 13, Carlos Gómez Zúñiga; en el número 15, Freddy Miranda Arana; en el número 19, Juan Francisco Navarrete Vázquez; **en el número 21, Bernardo José Olguín Donoso**; en el número 27, Elvis Jesús Rioseco Leyton; en el número 30, Camilo Sandoval Godoy; en

el número 31, Claudia Sandoval Godoy; en el número 38, Edith Silva Sánchez; en el número 40, Albano Ariel Silva Toro; en el 41, Jeannette del Carmen Toro Brenet y también, Francisca Venegas Miranda.

Explicó Yerko que estas personas no necesariamente solicitaron enrolarse con él para ir a verlo, porque para poder entregar encomiendas también se tenían que enrolar, y se hace solamente un enrolamiento, por lo que, estando la persona enrolada puede entregar encomiendas o puede ingresar a visita.

Comentó que Bernardo Olguín Donoso tenía una constructora, Bernardo Olguín EIRL, que estaba en decadencia económicamente, en ese momento conversaron para que le prestara plata, en el año 2014 o principio de 2015, le prestó 10 millones y le iba a devolver 14 millones, cuando cayó detenido le empezó a cobrar la plata y en enero o febrero de 2016 llegó a Santiago 1, y le dijo que le tenía la suma total adeudada, se la entregó a Ingrid Opazo quien era su pareja de ese momento. Después no tuvo más contacto con él. (Albano supuestamente trabajó en la constructora de Bernardo Olguín, lo que no fue acreditado en la causa, y éste firmó el contrato de arrendamiento del local de Gladys Marín 6106 de Estación Central donde funcionaban los restaurantes, en consecuencia, ambos hermanos se encontraban involucrados con esta persona, no siendo una coincidencia que haya prestado su nombre para iniciar el restaurante Alto Machi Picchu, sino claramente es un indicio de que Yerko Silva también tenía participación en ese restaurante aun estando en la cárcel).

Refirió que Bernardo prestó la documentación de su empresa y cheques para poder arrendar el local donde se instaló Alto Machu Picchu y después la Parrilla del Gaucho, y también para comprar insumos, pero eso fue 7 o 10 meses antes de crear la primera empresa. Hizo presente que la primera empresa que se hizo fue el 26 de diciembre de 2016 y el contrato de arriendo del restaurante fue el año 2016 entre febrero y abril mucho antes de que se creara dicha empresa.

Respecto de Elvis Rioseco Leyton, dijo que es amigo de Edith y Carlos y conocido de él, en más de una oportunidad le mandó encomiendas y reconoció que el vehículo Mazda CX9 estaba blanqueado para su venta cuando los detuvieron junto con Elvis.

Se incorporó el **documento 2**, que es el informe de visitas que ingresaron al CP de Puerto Montt, desde julio de 2019 a febrero de 2020, en el cual figuran Claudia Sandoval, Albano Silva, Juan Navarrete Vázquez, Ingrid Opazo Cerda, Francisca Venegas Miranda.

El acusado afirmó que esas personas lo visitaron en Puerto Montt porque son su familia, está su tío, su tía, su papá, Claudia Sandoval también, Juan Navarrete Vázquez también se encuentra en dos oportunidades, él también lo fue a ver y a dejarle cosas para comer y útiles de aseo. Además, su hermano Albano también lo fue a ver en varias ocasiones porque lo extrañaba y le llevaba a su papá.

Se acompañó también el **documento 388**, informe de visitas de Yerko Silva Toro desde el 19 de junio de 2016 hasta el 3 de enero de 2019, en el cual aparecen Bernardo Olguín, su madre Jeannette Toro y su hermana Daniela Espinoza Toro, en reiteradas oportunidades, Elvis Rioseco Leyton, Edith Silva Sánchez,

en reiteradas oportunidades, Carlos Gómez Zúñiga, en más de dos oportunidades, Tatiana América Arana Espinoza, está en el número 122, en CP Arica, Camilo Sandoval está en el 130, en el CDP Santiago Sur, Claudia Sandoval, Albano Silva Toro, en reiteradas oportunidades en Santiago, Paula Becerra Leyton, su cuñada y María Angélica Silva Guzmán, su tía.

El acusado sostuvo que estas personas lo visitaban regularmente porque era su familia y respecto de Tatiana, como sale en este listado, lo fue a visitar solo una vez. Preciso, además, que hay que tener en consideración la fecha y el recinto donde estaba, porque cuando se nombra a Edith y a Elvis Rioseco, fue en septiembre de 2016, fecha en que estaba en Santiago 1.

En la misma línea, se incorporó el **documento 319**, informe de Gendarmería que da cuenta de las personas que se han enrolado para visita respecto de Yerko Silva Toro, mencionando a Claudia Sandoval, Tatiana Arana, Albano Silva Toro, Paula Becerra Leyton, Bernardo Olguín Donoso, Ilich Chopa Aldana, Camilo Sandoval Godoy, Freddy Miranda Arana, Kimberly Sepúlveda Espinosa y **Luis Felipe Astudillo Peña**.

Respecto de Ilich, el acusado señaló que se enroló para visitarlo, pero nunca concurrió a visita, a Kimberly Sepúlveda que no recordaba quién era y a Luis Astudillo que no lo conocía y que en el listado salía que era menor de 18 años y no sabe por qué se enroló a su nombre.

Sostuvo que su madre y su hermana Daniela aceptaron guardarle dinero en sus cuentas, para que después si lo necesitaba, Daniela se lo transfiriera, pero sin tener conocimiento del origen del dinero. Agregó que ellas sabían que estaba recluido y que no generaba dinero, de hecho lo iban a ver a las visitas.

Dijo que él ocupaba la cuenta de Claudia Sandoval para transferir dinero a terceros, ella le enviaba la clave dinámica y él transfería.

Se incorporó la prueba documental 445, de 20 de marzo de 2019, correspondiente a un memorando del Banco Estado, oficio 112018, en que se remite información de enero de 2016 a marzo de 2019 respecto de Claudia Sandoval Godoy, cuenta RUT 16.666.181, adjuntando las cartolas correspondientes.

La fiscal expuso que de esta cuenta cuyo titular es Claudia Sandoval, el 3 de mayo de 2017 le transfirió a Francia Cruz Iligaray que es hermana de Franco Cruz Iligaray, la suma de \$500.000.

El acusado indicó que era el pago de las facturas que le vendía Franco, en ese tiempo valían mucho más, así que eso era parte del pago.

Respecto de la transferencia de 12 de mayo de 2017, por \$45.000 a Edith Silva; de 29 de junio de 2017, por \$60.000 a Jeannette Toro; de 2 de agosto de 2018, por \$80.000 y de 9 de octubre de 2018, por \$10.000, a la misma persona; de 4 de diciembre de 2017, por \$10.000 a Carlos Gómez, y también de 5, 9 y 10 de diciembre de 2017, por \$80.000, \$10.000 y \$5.000, respectivamente, a la misma persona, el acusado indicó que esas transferencias debieron ser por encomiendas que le mandaban, ya que en ese tiempo llevaba un año preso y le quedaba plata de la que tenía.

Agregó la fiscal que el 3 de enero de 2018 hay una transferencia a Edith Silva por \$40.000 y el 4 de enero de 2018 por \$50.000.

El acusado mencionó que también le transfirió dinero a María Zavala Guzmán, pero era para Sebastián Martínez, su hijo, quien hacía las empresas y le vendía las facturas. Precisó que Sebastián creó Brunno Fritsch y Bilbao SPA, C. Hernández y Gildemeister las creó también él o Franco. Le transfirió el año 2018 \$10.000, \$15.000, \$30.000, \$30.000, \$20.000, \$15.000, \$15.000, \$145.000 el 6 de septiembre de 2018, \$25.000 el 24 de septiembre de 2018 y el 13 de noviembre de 2018 \$30.000. Los depósitos de 20 mil y 30 mil eran para crear empresas y los \$145.000 fueron por un trámite que le hizo a Claudia, explicando que Sebastián le dijo que tenía una movida para ingresarla a Fonasa. Acotó que el origen de este dinero era de la venta de los vehículos.

Refirió que también transfirió a Pablo Rojas Racabal en el año 2018, el 4 de mayo la suma de \$10.000; el 20 de mayo \$20.000, el 30 de mayo \$70.000, el 25 de junio \$53.000, el 8 de octubre \$40.000, el 9 de octubre \$10.000 y el 11 de octubre \$100.000. Asimismo, transfirió a Sindy Muñoz en el año 2018, el 1 de julio \$15.000; el 8 de agosto \$10.000, el 9 de agosto \$10.000, el 21 de agosto \$10.000, el 25 de agosto \$10.000 y el 30 de agosto \$20.000. También le transfirió a Adrián Espinoza Toro, su hermano, diversas cantidades en el año 2017 y 2018. Acotó que ese dinero era producto de la venta de vehículos.

Agregó que también le transfirió a Kimberlyn Sepúlveda Espinoza, durante el año 2018 diversas cantidades, y señaló que era la pareja de un amigo que estaba en su misma calle y muchas transferencias era dinero que él le regalaba a esa persona y la transferencia más alta (\$220.000) fue por una inscripción de un vehículo que ella realizó.

Por último, reseñó que le hizo las siguientes transferencias a Franco Cruz Iligaray en el año 2018, el 15 de febrero, \$10.000; 14 de marzo, \$40.000; 16 de agosto, \$15.000, 28 de agosto, \$10.000; 22 de octubre, \$ 30.000; 7 de noviembre; \$10.000, 13 de noviembre, \$ 200.000; 19 de noviembre \$ 50.000, todas hechas con dinero proveniente de la venta de los vehículos. (Como puede advertirse las transferencias de Yerko a Franco Cruz eran por montos menores que no se condicen con la compra de facturas al 30% o 10% del valor del documento, lo que es indiciario de que las empresas eran de Yerko y Franco emitía la factura y por esa labor le pagaba sumas menores o bien correspondían a pagos por las homologaciones falsificadas).

Por último, expresó que él usaba la cuenta de Claudia Sandoval y que no es posible realizar transferencias hacia la misma cuenta, por eso se explicaba por qué había transferencias hacia Claudia Sandoval. Puntualizó que todas las transferencias que se leyeron las hizo él, aunque Claudia también usaba la cuenta para hacer compras o pagos, pero le avisaba el dinero que iba a ocupar, y él le decía que transfiriera. Ella no trabajaba, así que la plata que estaba en esa cuenta era de él y también había gente que le depositaba a él en esa cuenta.

La fiscal hizo presente que el monto de las transferencias entre abril de 2017 a noviembre de 2018, fue de \$ 3.872.945 y el acusado señaló que él no sacó la cuenta pero que supone que sí.

Por su parte, la querellante SII, exhibió WA0188, y el acusado refirió haber efectuado inicio de actividades, ya que estudió 3 años de ingeniería comercial y se manejaba en internet e inició actividades con un servicio de lavado automotriz al parecer pero no le dio movimiento.

En WA0012 indicó que al inicio del video aparece un ícono “e-facturas”, que es una aplicación para no entrar por internet al SII e ingresar de forma más directa. Reprodujo los audios de OMP 208, WA0292 y WA0295, el acusado mencionó que era una conversación en que se iban a juntar con un contador y le pidió que si los podía ayudar porque Sebastián tenía un problema para la verificación, porque la dirección no tenía giro comercial. Eso tiene que ver con la verificación positiva y positiva condicional, términos de los que desconoce mayormente la diferencia. Al parecer la condicional requiere más documentos o que la empresa durara menos tiempo. Al señalar que había que asignarle un domicilio a la empresa, se refiere a una dirección, ficticia, real o de una oficina virtual, por eso pidió si le podían prestar una dirección para ponerle a la empresa.

En WA0305, dijo que un vehículo estaba detenido o se había perdido, y con ello iban a llegar a la factura y al nombre de la empresa, por eso, la empresa ya no iba a servir y se creaba otra.

En WA0307, indicó que habla en primera persona pero las empresas eran creadas por otras personas.

En WA0002, manifestó que la empresa de la que hablaban al parecer quedó con inicio de actividades. Explicó que una dirección tributaria acorde a la empresa es según el giro que tenía, como lavado de vehículos o venta de repuestos, por eso, tenía que ser un local acorde a lo que se iba a facturar. Acotó que después de creada la empresa se modificaba la actividad a venta de vehículos.

En WA0276, refirió que el número de atención se obtenía on line y le mandaban los pantallazos o archivos de la constitución de la empresa y eso se lo enviaba a la persona que lo ayudaba en el momento. Después de la constitución de la sociedad se tenía que ir a firmar a una Notaría, y los que lo ayudaban eran Sebastián y Franco pero también otras personas, nunca trabajó en paralelo con los dos. También lo ayudaba Ricardo y el Giggio.

Respecto de WA0005, WA0008, WA0010, dijo que compró firmas digitales por la página web y que los gomas eran los representantes legales de las sociedades que se creaban. Puntualizó que estas personas tenían que estar ubicables, porque si no salía la verificación y la empresa no quedaba funcionando, había que hacer un contrato de arriendo con una oficina virtual para poder obtener una dirección tributaria.

Sostuvo que Carlos Gómez Zúñiga lo iba a visitar cuando estuvo recluso y a él se le ocupó para crear empresas, concretamente, la empresa Valenzuela y Arce con la finalidad de blanquear vehículos.

Agregó que Nelson Méndez Moya está asociado a Méndez Moya SPA, pero no recordó que se haya creado esa empresa. La automotora Nova tampoco la recordó, la que estaría asociada a Miguel Ángel Pardo Cortés y Héctor Luis Tapia Paillaqueo, a quienes señaló no conocer.

En cuanto a Comercializadora Full Orión Ltda. y Compraventa de automóviles Orión limitada, sostuvo que esta fue la primera empresa con la que se partió, fue creada en diciembre de 2016 y él empezó con esto en marzo de 2017. Dijo no conocer al representante legal de esa empresa, Ignacio Zavala Hormazábal.

A la empresa Olímpica autos SPA refirió tampoco recordarla ni conocer a sus socios Luis Beas Riveros y Jaime Toro tampoco.

Señaló que la Automotora Bilbao la usaba para blanquear vehículos, pero no conoce a Gustavo Viveros.

Respecto de Automotriz Portillo SPA, manifestó que es probable que la haya creado Sebastián, pero a Julián Martínez no lo conoce.

Dijo que no conocía a ninguno de los representantes legales de las empresas.

Sostuvo que la Importadora Brunno Fritsch SPA la creó Sebastián y Automotora Kor SPA la creó Franco.

Añadió que Comercial Gildemeister SPA, Guillermo Morales SPA y C. Hernández SPA son empresas que se crearon.

Al defensor de Albano Silva Toro, expresó que en el negocio de blanqueamiento de vehículos muy pocas personas se conocían entre sí, entre ellos no se daban órdenes ni instrucciones, porque no estuvieron juntos al mismo tiempo, lo empezó marzo de 2017 y no siempre trabajó con las mismas personas.

Aseveró que estas personas no trabajaban para él ni recibían instrucciones directas suyas, tampoco tenían roles específicos, ya que ninguno era indispensable para el negocio.

Contrainterrogado por la defensa de Juan Navarrete y David Millalén, reiteró que a Juan Navarrete lo conoció el año 2013 en el Instituto Los Leones donde estudiaban, ambos eran de Cerro Navia y en ese tiempo tenía auto, así que lo llevó a su casa y ahí empezó una amistad. Reconoció que Juan participó el año 2020 en el blanqueamiento de unos tres vehículos, ayudándolo en algunas cosas, pero no constituyó ninguna empresa ni manejaba la facturación, fue Sebastián Martínez quien creó las empresas Brunno Fritsch, Bilbao y Gildemeister (Sin embargo, como se examinará en su oportunidad, esta última sociedad no aparecía en la evidencia incautada a Martínez Zavala y la escritura con códigos provisionales del SII fue encontrada en un vehículo blanqueado que estaba a cargo de Juan Navarrete).

Respecto de David Millalén, dijo que no tenía participación en el blanqueamiento de vehículos, a este lo detuvieron en una bomba de bencina, y según supo, PDI por una sospecha lo controló, pero reiteró que no sabía quién era David.

El tribunal, al ponderar la declaración del acusado, ha podido imponerse de que, según se desprende de sus propios dichos, Yerko Silva Toro aprendió el negocio ilícito del “blanqueamiento” o “clonación” de vehículos robados para su posterior venta, y fue paulatinamente instruyendo y formando a distintas personas de su círculo de confianza, por vínculos afectivos, de amistad o de parentesco, las que fueron asumiendo roles y funciones dentro de la planificación delictual, de la manera que él lo expuso claramente, primero, su cuñado Camilo Sandoval, quien como se verá más adelante, también estaba involucrado en los robos de vehículos y, su pareja Tatiana Arana, luego a su amiga Edith Silva Sánchez, a su hermano Albano Silva, al hijo de Tatiana, Freddy Miranda, a su amigo Juan Navarrete. Además, se puso en contacto con quienes realizaban una determinada prestación especializada, como Aimel Gavilán, y contactó también a Franco Cruz Iligaray y Sebastián Martínez Zavala que se incorporaron al conglomerado de manera permanente, en tareas de creación de empresas y facturación de los vehículos. Al igual que su pareja y madre de su hija, Claudia Sandoval Godoy quien recibía los dineros provenientes de las ventas, lo guardaba y administraba de acuerdo a sus instrucciones y directrices y además le facilitaba su cuenta del Banco Estado para manejar esos recursos, mismo papel o función que desempeñaron su hermana Daniela Espinoza, que le facilitó su cuenta del Banco Itaú y su madre, la del Banco Falabella.

A lo anterior se suma que, conforme a su declaración y a la prueba incorporada y reconocida por él, Yerko Silva pedía que le mandaran fotografías y videos del resultado de las labores o trabajos que realizaba cada uno de sus subordinados, y este guardaba los comprobantes de los depósitos y transferencias que recibía o que él hacía, las solicitudes de 1ª inscripción, los vehículos blanqueados, las homologaciones, el pago de impuesto verde, etc., de modo tal, que con esta forma o dinámica de trabajo, quedó de manifiesto que Yerko ejercía funciones de control y revisión de las tareas que hacían los miembros operativos de la organización y de parte de estos había una rendición de cuentas, lo que demuestra lógicamente que Yerko era el líder y ejercía funciones de jefatura respecto de las personas que trabajaban para él bajo sus reglas a cambio de un pago en dinero.

Además, quedó en evidencia que él tenía que aprobar y dar el visto bueno a sus colaboradores porque él era el jefe. Le mandaban fotos de todo, de los vehículos robados que le ofrecían, por ejemplo, y él decidía cuál comprar y cuál no, e incluso mencionó que compraba vehículos tipo Suv, como Hyundai Tucson y Kia Sportage, no city car. También, coordinaba y/o supervisaba las operaciones de publicación, exhibición y venta de los vehículos blanqueados, tales son los casos, en que le mandó el contacto de un comprador a Tatiana para que se comunicara a fin de mostrarle un vehículo; cuando iba a publicar un auto en la aplicación Chile Autos que tenía en su celular y a un precio cercano a los de la plataforma; y además hacía seguimiento al proceso de la venta, etc.

En ese mismo orden de ideas, el acusado dijo que no conocía a ninguno de los gomas que crearon las empresas como socios, salvo a Carlos Gómez Zúñiga, ni tampoco a la mayoría de los sujetos que inscribían vehículos a su nombre, aseveración que refuerza aún más su rol de líder, ya que como tal no se relacionaba con el último escalafón de los integrantes de la organización, es decir, “los gomas”, quienes eran reclutados por los miembros operativos con quienes se vinculaban directamente, para el cumplimiento del cometido ilícito y el pago de sus aportes.

Yerko Silva, además, reconoció que los dineros que guardaba y se administraban en las cuentas bancarias de su pareja de esa época Claudia Sandoval y su hermana Daniela Espinoza y en la súper digital de Jesús Gacitúa, provenían de la venta de los vehículos, recursos con los que pagaba a los miembros de la asociación por sus trabajos, como a Edith Silva, Franco Cruz, Carlos Gómez y Sebastián Martínez, y los servicios a los prestadores, o lo hacían las respectivas titulares de las cuentas bajo sus indicaciones y directrices, e incluso señaló que tenía dinero en efectivo guardado en la casa de Claudia Sandoval y de otros familiares y también ordenaba en qué ocuparlo.

Por último, es relevante señalar que no obstante alegar Yerko Silva que en este negocio muy pocas personas se conocían entre sí, porque no estuvieron juntos al mismo tiempo y no siempre trabajó con las mismas personas, lo cierto es que de sus propios dichos y de las evidencias incorporadas y exhibidas con su declaración y otras pruebas que serán valoradas más adelante, se estableció que hubo algunas personas que se mantuvieron estables durante el período de existencia de la asociación como, por ejemplo, Albano Silva, Tatiana Arana y su hijo Freddy Miranda, Franco Cruz, Camilo Sandoval e Ilich Chopa y otras que ingresaron después, como Juan Navarrete o se retiraron antes, tal es el caso de Claudia Sandoval porque terminó su relación con Yerko, Edith Silva, porque fue descubierta por la policía en un vehículo cloando con encargo por robo y Sebastián Martínez, porque en el último período el propio Yerko asumió la creación de empresas en conjunto con algunos de sus colaboradores, entre ellos, Albano y Juan Navarrete.

Asimismo, debe sumarse que Yerko también reconoció a las personas de la organización que estaban enroladas en las unidades penales donde estuvo y que lo iban a visitar frecuentemente, durante el período en que esta operó, destacándose Claudia Sandoval, Daniela Espinoza, Albano Silva, Edith Silva y Juan Navarrete, todos miembros de la cúpula de confianza de Yerko.

El acusado **Albano Ariel Silva Toro**, a su turno, comenzó su declaración relatando la historia previa al surgimiento del restaurante “Alto Machu Pichu” y se remontó a los años 2007 a 2013, período en que habría trabajado en la constructora Salfa Ltda. como subcontratista y tenía dos o tres obras por año y terminó contrato con ellos porque hubo una baja en las constructoras y cerraron muchas obras en Chile. Fue así como se reinventó y arrendó un local en Cerro Navia instalando una empresa de desechos industriales, con la cual tenía un contrato con la empresa Bravo Energy y duró un año con esta empresa hasta el 2014.

Precisó que los primeros meses del año 2015 se encontró con su amigo Bernardo Olguín (se refiere a Bernardo Olguín Donoso el mismo que iba a visitar a Yerko Silva a la cárcel y que firmó el contrato de

arriendo del restaurante), con el que trabajó en Salta, quien le ofreció trabajo y comenzó a trabajar en su oficina desde ese año, luego éste le dijo que iba a tomar un proyecto grande pero él no podía salir de Santiago, entonces, Bernardo le dijo que buscara un local de acopio de materiales céntrico y cerca de la oficina.

Contó que encontró un local de 1.230 metros cuadrados, con galpón y Bernardo le dijo que sólo lo ocuparan para el acopio. El dueño del local era Clodomiro Silva y el valor del arriendo eran \$4.200.000 aproximadamente. **De este modo, arrendaron el local y se dejaron los cheques de la constructora para el arriendo y la garantía, pero el local no se ocupó y le dijo a Bernardo que estaba bueno para poner un restaurante**, pero Bernardo le contestó que no era lo suyo y que lo hiciera solo. Indicó que había guardado algo de dinero de sus trabajos anteriores.

Narró que empezó a armar el restaurante los últimos meses de 2015, a pesar de que no conocía el rubro ni tenía contacto con proveedores. Fue comprando cosas con plata de sus años de trabajo y sacó adelante el restaurante, el que abrió en abril de 2016. Aseveró que habló con Clodomiro Silva porque el arriendo era un poco alto y le pidió unos meses de gracia, ya que la plata que tenía era para hacer arreglos, quien accedió y le dio plazo hasta marzo de 2016 para empezar a pagar el arriendo.

Cabe hacer presente que **Clodomiro Silva Núñez** declaró en estrados y desmintió la versión de Albano, pues señaló que le arrendó la propiedad ubicada en Avenida Gladys Marín 6106, Estación Central, que era un restaurante chino, y al momento de la entrega el local estaba impecable y en buenas condiciones y se arrendó completo, con el mobiliario, mesas y sillas, las máquinas de aluminio para bebidas, la refrigeración y otras cosas y agregó que Albano hizo pequeños arreglos, como el letrero que se lo dio la Cristal o la Coca Cola, además, las compañías entregaban las vitrinas en consignación y algún cambio mínimo en la oficina o detalles de pintura. Acotó que el local siguió siendo un restaurante y después lo cambió de chino a parrilladas.

Continuando con su testimonio, Albano Silva indicó que el local era muy grande y tenía unos 350 estacionamientos y el día de la inauguración, estaba lleno y tenía 80 mesas. Sostuvo que para el día de la madre también se llenó y vendieron 13 o 14 millones en un solo día y en los meses posteriores, tenían ventas de \$45.000.000 mensuales.

Indicó que para el estallido social (octubre y noviembre de 2019) tuvieron que cerrar el local, abrían solo dos veces a la semana, hasta que llegó la pandemia (abril de 2020) y el local venía muy bajo, estaba mal económicamente. Pensó que iba a perder toda la inversión, se le juntaron los meses de arriendo, adeudaba más de un año, unos 50 millones de pesos solo en arriendo.

Dijo que Clodomiro Silva le contaba que tenía interesados en el local, hasta que un día le comentó que tenía un motel y se lo mostró, quedaba en la Panamericana y llevaba cerrado como 4 años, le ofreció que lo trabajara y que con lo que ganara le fuera pagando.

Refirió que comenzó a trabajar el motel y todo lo que ganaba del restaurante iba hacia el motel, porque nunca dio ganancias, entonces, fue agrandándose el hoyo que tenía. Por ello, conversó con su

hermano Yerko y le comentó que quería vender el restaurante para recuperar la inversión, pero Yerko le dijo que no lo vendiera porque tenía una plata guardada producto de la venta de un restaurante que tenía y que lo podía ayudar, pero le propuso que hicieran una sociedad nueva a nombre de sus parejas para asegurarse que le devolviera la plata y fue así como constituyeron “SyB”.

Indicó que empezó a modificar el local, que ahora se llamaría la Parrilla del Gaucho y cambió la estructura peruana a comida chilena, para lo cual, Claudia Sandoval le iba pasando dinero paulatinamente para las modificaciones, el letrero, la cámara de frío, no le pasaron los \$25.000.000 de una vez.

Manifestó que vieron el tema de Transbank para que los pagos fueran hacia la sociedad “SyB” y abrieron las parrilladas, pero al poco tiempo comenzó la pandemia y el toque de queda y no pudo seguir funcionando. Luego, cuando pasó la pandemia volvieron a trabajar, hasta que en octubre de 2020 los detuvieron por esta causa.

Respecto del vehículo Porsche que estaba estacionado en el local, explicó que era de un amigo de nombre Patricio que le pidió guardarlo, ya que lo había dado por pérdida para cobrar un seguro, no tenía placas patentes y tenía un encargo por robo, por eso, lo están acusado por receptación.

Dijo que también está en el juicio por la inscripción de una camioneta Mahindra, explicando que un día Yerko lo llamó y le dijo si podían ver ese tema y la inscribió. Además, por la venta de una Hyundai Tucson, que la llevó con el dueño y Juanito lo fue a buscar en su auto y lo trajo de vuelta a Santiago.

Precisó que **el dinero que ganó entre los años 2009 y 2013** lo usó para el restaurante Alto Machu Picchu. Dijo que en Salfa obtuvo \$220.000.000, con los cuales tenía que mantener la casa, hijos, colegio, su esposa estaba embarazada, además de los gastos mensuales, más los viajes que debía realizar, y con lo que iba ahorrando iba comprando herramientas y una camioneta para el trabajo. También ahorró plata de cuando trabajó en la constructora Remanso en Lampa. Señaló que después de todos los gastos, le quedaron unos \$30.000.000 con los que inició el restaurante Alto Machu Picchu, con ese dinero pagó el arriendo y al personal, pero no le alcanzó y se fue endeudando con proveedores.

Reiteró que trabajó en tres empresas, Salfa, Remanso y desechos y, en ellas, le pagaban remuneración con impuesto, pero reconoció que no aportó los sueldos que le pagaron a la investigación, pero sí lo dijo en su declaración.

En este punto, relevante es destacar que los dichos de Albano, además, de no tener ningún sustento fáctico ni probatorio, fueron desvirtuados con la declaración del funcionario de OS7 sección lavado de activos de Carabineros, Felipe Meriño Orellana, quien realizó un informe patrimonial del acusado, y apoyándose en OMP 619, sostuvo que como persona natural y socio de alguna persona jurídica, solamente tiene los siguientes antecedentes: como persona natural, inicio de actividades el 29 de noviembre de 2007, que se encontraba vigente, en recogida de desechos no peligrosos, terminación y acabado de edificios y transportes por carretera; y que el último timbraje y emisión de boletas es del año 2010, el libro de compras es del año 2008 y otros libros del año 2010. Es decir, no tuvo movimientos registrados a contar del año 2010. En cuanto a la razón social Comercializadora de Productos Alimenticios Albano Silva Toro EIRL, indicó que se

constituyó el 8 de marzo de 2016, con el acusado como único socio y no registraba capital, inició actividades el 11 de abril del mismo año, el último timbraje de boletas es del año 2016, el libro de compras y ventas tiene como último timbraje el año 2017 y el último documento timbrado es del 2018.

Aseguró el acusado que el restaurante debía tener unos 400 m2, 200 abajo y 200 arriba y remodeló ambas plantas, además, invirtió en la alimentación, en carne, bebidas, licores, verduras y útiles de aseo, la contratación de personal fue al comienzo con 2 garzones, y en la medida que fueron aumentando las ventas, contrató a otros dos más hasta llegar a una planilla de 23 personas con **14 garzones, una cajera y 8 o 9 personas en la cocina**, porque había dos turnos, 4 personas en la mañana y 4 personas en la tarde, más un parrillero. A cada garzón le pagaba el sueldo mínimo y ellos ganaban propina. En la cocina el chef ganaba de 800 mil pesos a un millón, los ayudantes 400 o 450 mil pesos y los coperos, el sueldo mínimo más propina en partes con los garzones.

De esta manera, mencionó que después de los 6 meses se fueron viendo las ganancias, reiterando que ganaban **entre 50 y 60 millones** mensualmente (antes había dicho 45 millones), pero cuando se ordenó en el restaurante fue cuando llegó Carolina y **con el balance del mes de abril de 2017 le dijo que le había ido muy bien, pero tenía desorden, entonces, llegó un minuto en que se atrasaron los pagos de las imposiciones, no les pagaban a algunos proveedores, porque la plata del restaurante se iba a otro negocio**, pero ella lo ordenó bastante.

Luego, indicó que fue como al 5° mes que se empezó a notar la ganancia en el local, de a poco iban subiendo las ventas, y desde agosto en adelante las ventas eran de **45 a 50 millones** de pesos mensuales.

Insistió en que Carolina Cornejo ordenó todo, llevaba el balance, hacía planillas de liquidaciones, administraba el restaurante, tenía la facultad para pagar IVA, a los proveedores y hacer las compras. Acotó que ella hacía el pago mensual del IVA y los días miércoles llegaban los dineros de las tarjetas de crédito de Transbank, y se fue generando una confianza con ella porque veía todo.

Carolina ganaba alrededor de \$600.000 y después se empezaron a ordenar, y se le aumentó pero no más de \$200.000.

Por otra parte, respecto de las ganancias que obtuvo con el restaurante, señaló que la desconocía, porque era muy desordenado y **recién tuvo noción cuando entró Carolina e hizo el balance del año 2016 al 2017 y le señaló que fueron 550 millones en el año** (no especificó si de ventas o de utilidad), entonces, no era un mal negocio, pero había que ordenarlo, la ganancia mensual era de \$7.000.000 u \$8.000.000 vendiendo 350 millones. Agregó que tenía gastos caros, por ejemplo, 9 millones de pesos en trabajadores más el arriendo y los proveedores, entonces se llegaba a los 20 o 25 millones. Calculó que en un año habría obtenido \$96.000.000 de ganancias.

Cabe tener presente, en este punto, que el tribunal advirtió que existía una evidente inconsistencia e incongruencia entre los ingresos o utilidades que el declarante dice haber obtenido el restaurante, y la situación económica en que se encontraba a mediados de 2018, a dos años de haber abierto, por los gastos que demandaba y además la enorme deuda de renta de arrendamiento del local que se fue acumulando, todo

lo cual se vió corroborado con los análisis patrimoniales y tributarios de la comercializadora Albano Silva Toro IERL y de la sociedad “SyB”, como se examinará a propósito del delito de lavado de activos.

Precisó que en julio del año 2018 el arrastre de la deuda de arriendo, era superior a los 50 millones y Carolina a veces pagaba un mes, pero después se acumulaban. Además, tenía gastos altos de su hijo y de su otra familia.

Explicó que la ganancia de 96 millones correspondía a un año completo, pero el arriendo lo iba pagando en forma desfasada, por ejemplo, había dos meses que no pagaba y después sí, luego había un evento y le abonaba 10 millones.

En otro tema, señaló que conocía a Víctor Quezada por ser el esposo de Carolina Cornejo, su administradora que entró a trabajar en agosto de 2016.

La fiscal le consultó respecto del motivo por el cual **entre el 9 de enero de 2017 al 14 de mayo de 2018** le transfirió desde su cuenta personal a la de éste \$23.173.236, señaló que desconocía por qué se los transfirió, además, Carolina tenía las claves en ese momento y él no revisaba las cartolas, no sabía ni entrar al SII ni pagar un IVA, inclusive antes de Carolina lo hacía otro contador. Enfatizó que él nunca transfirió de su cuenta a Víctor Quezada. (Es inverosímil que Albano Silva no revisara sus cartolas ni recibiera ninguna información o notificación bancaria, si se considera que el dinero proveniente de Transbank ingresaba a su cuenta Rut. Además, resulta altamente sospechoso que Víctor Quezada diera exactamente la misma explicación para dichos trasposos entre sus cuentas, vale decir, desconocimiento absoluto por ser un tercero, Carolina Cornejo, quien las manejaba)

La fiscal hizo presente que fueron 50 depósitos en total e inclusive había más de uno en un mismo día; y también había 17 depósitos entre abril de 2017 a septiembre de 2018 donde transfirió de su cuenta personal a la cuenta de Carolina Cornejo \$2.765.084.

El acusado, sobre este punto, explicó que a veces no le llegaba la plata de Transbank, entonces, Carolina colocaba de su plata para comprar cosas y ella le decía a Paula y, después Paula le avisaba, como por ejemplo, carne por \$1.000.000.

Añadió que a veces Carolina pagaba en efectivo y después se transfería de su cuenta a la de ella y el registro eran las cuentas. (Albano está admitiendo que en el fondo no existía ningún registro, en contraposición a lo aseverado por Carolina Cornejo que señaló que quedaba registro en las facturas y en las compras y pagos a proveedores que realizaba con su dinero).

La fiscal hizo presente que Carolina señaló que trabajó en el restaurante hasta julio de 2018 y en septiembre de 2018 había transferencias cuando ya no trabajaba, respondiendo Albano que no lo recordaba.

Específicamente se le preguntó por las transferencias de 21 de agosto de 2018 y 17 de noviembre de 2018 por \$90.000 y \$150.000 a Víctor Quezada; y el acusado refirió que no recordaba cuándo se fue Carolina, porque el primer mes de funcionamiento de la Parrilla del Gaucho, aún estaba en el local.

Se hizo presente que desde noviembre de 2017 a febrero de 2018, período en que Carolina Cornejo trabajaba con él, Víctor Quezada desde la cuenta Banco Estado 4280005404 transfirió a la cuenta de la Comercializadora de la cual era representante Diego Sepúlveda, la suma de \$10.297.823, ante lo cual, el encausado dijo desconocer esas transferencias y a qué correspondían.

Como asimismo, refirió desconocer el monto transferido desde la cuenta vista personal a la cuenta de Quezada, y también desde la cuenta de Quezada a la cuenta de la comercializadora. Tampoco tenía claro los montos de dinero que se transfirieron a la cuenta de Carolina, porque ella hacía las transferencias y el respaldo estaba en las facturas, insistió en que no revisaba las cartolas, porque esto lo hacía Carolina con su señora, él ni siquiera tenía la aplicación del banco en su teléfono.

En relación con la explicación dada por Albano Silva, el tribunal consideró poco creíble y plausible que, una persona que siempre ha trabajado en negocios y empresas, en los rubros de la construcción, como subcontratista, y en servicios, compra y venta de bienes e incluso en la representación de jugadores de fútbol, como lo afirmó, no tenga conocimiento de nociones básicas de administración o de manejo de páginas web o aplicaciones, o bien no le interese revisar documentos bancarios, aunque sea por curiosidad para ver los resultados de sus negocios, más aun el restaurante, que era su principal fuente de ingresos y su gran proyecto comercial, en que supuestamente invirtió el dinero obtenido y ahorrado de muchos años de trabajo. Por otra parte, Paula Becerra Leyton, en ese entonces pareja de Albano, contradijo su versión en la medida que señaló, según la declaración del Subinspector Felipe Arriagada Fuentes, que Albano abrió un restaurante de nombre Machu Picchu en Estación Central y **fue quien se dedicó al 100% al tema económico y administrativo** y, luego de un tiempo de funcionamiento contrató a Carolina Cornejo, quien se encargó de la administración y del pago de los trabajadores y que Víctor Quezada, marido de Carolina, conocía a Albano por intermedio de ella.

De todo ello, se colige que Albano sí estaba en conocimiento de los movimientos, flujos y traspasos de dineros que se hacían entre las cuentas nombradas.

Por otra parte, Albano Silva señaló que, dentro de las personas que trabajaban en Alto Machu Picchu, no conocía a María Zavala Guzmán, Juan Navarrete, Tatiana ni a Aimel. Sin embargo, no recordaba por qué había una transferencia desde su cuenta Rut el **27 de abril de 2018 por \$40.000**, a María Zavala Guzmán (quien es la madre de Sebastián Martínez Zavala, coincidiendo la fecha con la creación de la empresa Méndez Moya Spa del socio “goma” Nelson Aníbal Méndez Moya, cuya cedula de identidad se encontraba en una carpeta de nombre “albano” en el computador usado en el restaurante, elementos que dan cuenta que el acusado se involucró directamente en la generación de esta empresa de papel, para el blanqueo de los vehículos robados)

Reconoció que en el caso de Juan Navarrete, le trasfirió el 4 de septiembre de 2017 la suma de \$270.000, el 6 de septiembre de 2017 la suma de \$300.000, el 3 de octubre de 2018 \$15.000 y el 6 de octubre de 2018 y explicó que podría ser por la venta de pescado, porque él tenía familiares en el sur y le ofrecía salmón, pero no quedó respaldo en ninguna factura y Carolina era quien le transfería.

También indicó que a Tatiana Arana no la conocía, pero sabía que era pareja de Camilo, el tío de su sobrina y reconoció que el 10 y 11 de mayo de 2017, le transfirió \$40.000 desde su cuenta vista y el 21 de octubre, \$37.000, probablemente porque su hermano le podía haber pedido un favor por alguna encomienda.

Reconoció además que conoció a Aimel porque un día tenía que hacer un trabajo en una Mahindra, el cambio de número de chasis y vin, su hermano le dijo que lo llamara, entonces, se juntaron y le hizo le trabajo.

La fiscal lo confrontó señalando que Aimel en su declaración dijo que Albano había ido 5 o 6 veces a solicitarle la modificación de números de vehículos, pero el acusado insistió en que fue solo una vez.

Respecto de la remodelación del restaurante, refirió que para la Parrilla del Gaucho sólo tenía el mobiliario, pero no dinero para invertir, entonces, lo compró con crédito, no recordando cuánto dinero tenía invertido, pero era como \$5.000.000 en cocina y \$10.000.000 en mobiliario. Agregó que el restaurante estaba completo cuando se constituyó la comercializadora “SyB”, cada señora aportó 25 millones, pero este aporte no fue pagado sino que fue ficticio.

Dijo que la plata que le dio su hermano era para el letrero que costó \$3.500.000, la parrilla \$5.500.000, la cámara de frío \$5.700.000, dinero que le pasaba Claudia en efectivo y se compró un toldo eléctrico de \$ 7.500.000 y se dieron dineros (cheques) de la cuenta de Claudia Sandoval.

Manifestó que Claudia Sandoval le pasaba la plata en efectivo y en cheques, que se iban a cubrir cuando comenzara a generar recursos el local, ya que ella manejaba las platas, pero no sabía qué plata manejaba su hermano.

La fiscal hizo presente que desde **agosto de 2018 a noviembre de 2019**, desde su cuenta Rut del Banco Estado a la comercializadora Rut 76.530.779-1, según la cartola bancaria, se transfirieron \$96.649.903, respondiendo Albano que no lo recordaba porque él no hacía las transferencias, las hacía Paula, porque ella fue la que quedó (¿a cargo del restaurante?). (Más adelante señaló que él también administraba el restaurante).

Se incorporó el **documento 839**, oficio de fecha 18 de agosto de 2022 del Banco Estado en relación a los productos registrados a nombre de Albano Silva Toro, entre ellos, chequera electrónica cuenta Rut 349-7-037313-8, fecha de apertura 18 de mayo de 2010 y estado vigente. **Remite cartolas de la cuenta Rut desde el 2 de enero de 2015 al 30 de julio de 2021.**

El **documento 445** acompañado, corresponde a los movimientos de la cuenta Rut de Albano Silva, en que consta que se en total transfirió a Víctor Quezada la suma de \$23.173.216 entre el 9 de enero de 2017 y el 17 de noviembre de 2018 y a Carolina Cornejo la suma de \$2.765.084 en 17 depósitos.

En relación con la sociedad “SyB”, el acusado explicó que Claudia Sandoval le facilitó su cuenta del BBVA, que después pasó a ser Scotiabank, para el establecimiento de la parrillada, pero solamente para pagar a los proveedores, debido a que las máquinas (de transbank) estaban asociadas al giro que ya venía de Alto Machu Picchu. Indicó que luego ocupó la chequera electrónica de la sociedad “SyB”.

La fiscal incorporó el documento 123, consistente en una copia de la escritura de constitución de la Comercializadora “SyB” Spa, RUT 76.893.612-9, en la cual comparecieron Claudia Paz Sandoval Godoy y Paula Inés Becerra Leyton y suscribieron el documento, que fue autorizado con firma electrónica de la Notario Zarella Elena Camerotto Moraga, con fecha **19 de julio de 2018. El nombre de fantasía era “La Parrilla del Gaucho Uruguayo SPA”**, domiciliada en Estación Central. La duración se extendía de manera indefinida desde su fecha de constitución. El giro era de restaurante, comercializadora, venta de alimentos fríos, calientes, etc. El capital social ascendía a 50 millones de pesos, divididos en 100 acciones nominativas de la misma serie, ordinarias y sin valor nominal. El capital, según la escritura, quedó totalmente suscrito y pagado, correspondiendo la administración social y representación ante el Servicio de Impuestos Internos, a Claudia Sandoval Godoy y Paula Becerra Leyton.

El acusado explicó que la Parrilla del Gaucho abrió en julio de 2018, aunque no recordaba hasta cuando estuvo funcionando, pero le parecía que fue hasta después de la pandemia, al parecer, hasta el año 2020. Sostuvo que en esa época Paula Becerra administraba el restaurante porque él viajaba mucho y no estaba al tanto de las ventas y utilidades, a veces preguntaba cómo le estaba yendo y le decían que iba subiendo y que algunos meses eran más bajos, pero no sabía de montos.

A propósito del dinero que le prestó su hermano Yerko, dijo que no se lo devolvió durante el tiempo en que funcionó el restaurante; y que en el mismo año 2018 tenía el motel que se estaba remodelando, pero no recordaba cuánto dinero invirtió en ello. Una vez que empezó a funcionar, llegó la pandemia y cerró mucho tiempo. Había eso si semanas en que ocupaba un millón de pesos, y otras que no sacaba nada de lo que obtenía del restaurante.

Estos asertos resultaron poco creíbles para los juzgadores, a menos que Albano fuera un dilapidador patológico, pues no es razonable que si el restaurante estaba decayendo económicamente y su hermano Yerko tuvo que prestarle plata para remodelar el local y cambiar la especialidad, el acusado se haya desligado o alejado de su administración, dejándolo en manos de su señora Paula, para ponerse a remodelar un motel, con los dineros que ingresaban al restaurante.

Señaló el acusado que entre los años 2018 y 2020 tuvo trabajos paralelos, como siempre los ha tenido, iba a remates, pero sin recordar los ingresos que obtuvo, en un remate ganaba un millón o un poco más, sin recordar cuantos remates se adjudicó y el dinero lo usaba para sus gastos. En ese contexto, señaló que él le daba a Paula los dineros para los gastos de la casa.

Con la prueba **documental 50.1**, se incorporó una carta respuesta de fecha 1 de diciembre de 2020, emanada de Banco Estado, relativa a los productos de Comercializadora “SyB” Spa, en la cual se adjuntan los productos y documentación de respaldo. Y con el **documento 50.2**, se ingresó la **cartola desde el 08.10.2020 hasta el 26.10.2020, correspondiente a la chequera electrónica de la Comercializadora SyB**, donde se gestionaban dineros relacionados con el restaurante la Parrilla del Gaucho.

Al efecto, la fiscal describió los depósitos en efectivo de fecha 15 de octubre de 2020, por 4, 6 y 6 millones de pesos respectivamente. Sobre tales depósitos, el acusado indicó que esa plata provenía de

ahorros que tenía con Paula y era para el pie de una casa, que estaban comprando con el banco para su señora, en ese contexto, se hicieron transferencias a la inmobiliaria Santa Rosa, para el pie de la casa.

El acusado dijo que Paula no tenía otro trabajo remunerado, salvo la administración del restaurante, con Carolina y un tiempo con Claudia, en Alto Machu Picchu, pero no tenía contrato de trabajo en este y respecto de la Parrilla del Gaucho no recordaba.

Con relación al dinero que ahorraban con Paula, el acusado precisó que provenía de las utilidades que daba el restaurante Alto Machu Picchu, ella fue guardando esta plata en efectivo en su casa para comprarse una propiedad. Y esa plata la depositó en la chequera electrónica del restaurante y se hicieron dos depósitos a la Comercializadora e Inmobiliaria Santa Rosa y quedaron 6 millones adentro.

En este punto, la fiscal refirió que Paula Becerra señaló en su declaración que había dado un pie de 10 millones de pesos a la inmobiliaria Santa Rosa, ante lo cual el acusado indicó que son los dineros que están reflejados en la cartola, los depósitos de 5 y 5 millones.

La fiscal destacó que desde una determinada fecha hay solo cargos en la cuenta y el acusado manifestó desconocer dónde se abonaban las utilidades del restaurante Parrilla del Gaucho, agregando la fiscal que en ese período predominaban los cargos.

En otro orden de cosas, la fiscal interrogó al acusado acerca de la adquisición de caballos el año 2017, respondiendo éste último que adquirió con unos amigos un caballo por \$ 4.690.346. Al efecto, explicó que sólo participó en un porcentaje de \$1.300.000, dinero que sacó de las utilidades del restaurante Alto Machu Picchu.

Con la incorporación de OMP 226, el acusado indicó que él tenía el 25% de la propiedad del caballo, que costó \$4.690.436 y no recordó cómo se llamaba, con qué colores corría ni el nombre del jinete que lo corría.

Aclaró que al 29.11.2018, aún era propietario de un porcentaje del caballo de nombre “Agua de Beber”.

Se incorporó OMP 144, consistente en el progresivo 12.559 de 12.05.2019. A propósito de ese diálogo, en lo que resulta pertinente, el acusado señaló que hablaba con un amigo de la hípica que trabajaba con algunos preparadores y que le decían “Leche”. Le preguntaba por el caballo Fast Line, de su hermano Yerko, si lo podía entrenar porque lo entrenaba otro preparador con el que no estaba conforme. Por eso le preguntaba si lo podía hacer él, ya que tenía más experiencia en la hípica. El acusado agregó que desconocía si en ese momento Yerko tenía un porcentaje del Fast Line y, además, le decía a “Leche” que hacía mucho tiempo que estaba desconectado de las carreras.

El acusado no recordó si en el año 2019 Fast Line corría y en cuanto a los preparadores, en general, se les paga entre 250 a 300 mil pesos, la alimentación iba incluida, las vitaminas y los analgésicos los compraba el dueño.

A propósito de este tema, el acusado manifestó que en el año 2017 cuando tenía el caballo “Agua de Beber”, el dinero para su mantención salía de Alto Machu Picchu y le pagaba en efectivo al preparador.

La fiscal mencionó que el **8 de julio de 2021**, ante el Ministerio Público, y en presencia de su abogado defensor, el acusado prestó declaración y señaló que le transfería dinero al futbolista Nicolás Higuera.

El acusado indicó que era como el representante de Nicolás Higuera, que lo apoyaba de manera económica, pero no con mucha plata, en la semana le transfería 50 mil pesos, era para locomoción ya que vivía y comía en su casa. Él estuvo en el club Unión Española y después entrenaba en el club Magallanes. Al efecto, y habiéndosele exhibido la cartola de la cuenta vista del Banco Estado, dijo que las transferencias fueron realizadas en los años 2017 y 2018 con dinero que salía de los ingresos de Alto Machu Picchu.

En otro tema, el acusado indicó conocer a Juan Navarrete de la comuna, pero que no lo acompañó a buscar testafierros. A lo más pudo haberlo acompañado en su camioneta, pero él nunca se bajó ni habló con ningún testafierro.

Frente a esta afirmación, la fiscal confrontó al acusado con su **declaración de 8 de julio de 2021 que continúa el 12 de octubre de 2021, ante el Ministerio Público**. En dicha declaración, el acusado afirmó que “en una ocasión Juanito, Juan Navarrete Vásquez, le dijo que lo acompañara y fueron a reclutar testafierros, fue porque él se lo solicitó”. Frente a ello, el acusado explicó que no fue a buscar testafierros, sino que solamente lo acompañó. En su declaración ante la fiscal habló de testafierros porque se sentía presionado por la fiscal, él colaboró y estaba en presencia de sus dos abogados.

Luego la fiscal consultó si fue con Franco Cruz a buscar una homologación, reconociendo el acusado que fue una sola vez porque Yerko le pidió el favor.

Expuso el acusado que Yerko y Juan Navarrete se conocieron cuando estudiaban en un instituto, no sabe si era la mano derecha de Yerko, a pesar de que en su declaración lo dijo, porque la fiscal le decía que “no le servía su declaración”.

Confrontado nuevamente por la fiscal con la declaración antedicha al tenor del artículo 332, el acusado aparece manifestando en la misma que “a Juan Navarrete lo conoce hace mucho tiempo, estudió con Yerko en un instituto, era como la mano derecha de Yerko por decirlo”. Sobre estos dichos, el acusado reiteró que sus declaraciones fueron presionadas. **Siguiendo con la confrontación de la fiscal con su declaración previa ya aludida**, en ésta se consigna que el acusado manifestó que “él recibía los vehículos recién robados, los llevaba a modificar, reclutaba a las personas para inscribirlos y le llevaba la plata a Claudia Sandoval”. Sobre este punto, el acusado precisó que se estaba refiriendo a Juan Navarrete.

Luego, el acusado dijo que a Aimel, le llevó solamente un vehículo para modificarlo. Sin embargo, **al confrontarlo nuevamente la fiscal con su declaración previa**, en ella se consigna que “le llevó dos vehículos a Aimel para que los modificara”. En el juicio, no obstante, insistió el acusado que fue solo en una oportunidad, agregando que cuando declaró, la fiscal le dijo que a ella no le servía un solo vehículo.

Preguntado por su defensa, indicó que uno de sus problemas es que no tenía cuenta corriente y tenía Dicom, así que los bancos no le dieron cuenta corriente, por eso, en un principio María Paz Gajardo, Juan Provoste, Paula Becerra, lo ayudaban con sus cuentas para poder funcionar.

Preciso que las primeras semanas del negocio, las ventas eran con efectivo y transferencias de los clientes, pero mucha gente se iba porque iban a pagar con Transbank. Conversó con Juan Eduardo Provoste y le contó cómo estaban funcionando, y él le dijo que debía tener una Transbank porque la mayoría de las personas pagaban con tarjetas. Le dijo que podía ayudarlo pero que tenía que hablar con su contador, habló con el contador y le dijo que ocupara su cuenta, pero **las transferencias llegaban a la cuenta de don Eduardo y él le transfería a la cuenta Rut.**

Sobre otro punto, indicó que Yerko le pedía enviarle encomiendas y hacer ciertas gestiones, como hablar con Aimel Gavilán o firmar algo. Lo hacía porque era su hermano y estaba privado de libertad, así que necesitaba ayuda, y no encontraba nada malo en eso. Dentro de las ayudas estuvo la inscripción de la Mahindra y acompañar a Juan Navarrete y a Supanta.

Preguntado por la defensa de Juan Navarrete y David Millalén, dijo que respecto del Hyundai Tucson, Juan Navarrete fue a buscarlo a él y a otro muchacho. Su hermano Yerko le pidió el favor de ir a vender ese vehículo y él accedió, explicando que estaban los tres, pero el que firmaba y vendía era Marcos Supanta.

Preguntado por la defensa de Carolina Cornejo y Víctor Quezada, manifestó que supo de las transferencias hacia Carolina y Víctor, por la fiscal y que a Carolina le pagaban en un principio \$600.000 y luego le aumentaron el sueldo a \$700.000 u \$800.000.

Refirió que Carolina hacía también los pagos a los proveedores desde su cuenta, de \$300.000 o \$500.000, no eran pagos grandes, y luego cuando llegaba la plata de Transbank ella descontaba los pagos que había hecho, pero no sabía si estos reembolsos los hizo hacia la cuenta de Víctor Quezada. (En este punto se desdijo, ya que antes señaló que Carolina pagaba en efectivo a los proveedores y después cuando se recibía el dinero de Transbank a su cuenta Rut se hacía el reembolso por transferencia a su cuenta).

Preguntado conforme al artículo 329 del CPP por el Ministerio Público, dijo que en abril de 2016 abrió el restaurante Alto Machu Picchu. Como no tenía Transbank, Juan Provoste le facilitó su Transbank y los dineros que entraban ingresaban a la cuenta de Provoste y luego él las transfería a sus dos cuentas, a su cuenta RUT Albano Silva Toro y a la de la empresa, pero en general era a la de la empresa Albano Silva Toro E.I.R.L. Esas transferencias fueron unos dos o tres meses. Explicó que en julio empezó con la Transbank de Juan Provoste, durante unos 4 o 5 meses. Dijo que la máquina Transbank era de la empresa Procar.

Respecto de la máquina de Transbank de Juan Provoste que usaba en el restaurante, mencionó que los montos de las transferencias que le hacía Provoste eran entre \$2.000.000 y \$3.000.000 semanales; y apenas caía la plata de Transbank Juan Provoste le transfería, porque había que pagarles a los proveedores. (Sin embargo, en este punto, Carolina Cornejo contradijo a Albano desde que declaró ante el tribunal que ellos, refiriéndose a Albano y Provoste, sacaban la cuenta de esos dineros y Albano llegaba con la plata en efectivo, y a veces se quedaba con parte de ella).

Reiteró que entre el año 2016 y 2017, Alto Machu Picchu tuvo ganancias de alrededor de \$7.000.000 mensuales. Las ganancias las pudo calcular por los gastos que tenía, de casa, colegio, lo que gastaba al mes en la familia, así lo iba calculando.

Parte de las utilidades las inyectaba hacia el motel, pero eso fue en el año 2019 a 2020, no fue en el 2016, eso fue de Alto Machu Picchu y después con Parrilla del Gaucho.

En relación con el Hyundai Tucson, reconoció que él recibió el precio de \$14.000.000, y se hizo llamar Álvaro Casanova, luego se los pasó a Juan Navarrete. Marcos Supanta entró, firmó en el Registro Civil, después fueron al banco y en el banco él recibió la plata y luego se la pasó a Juan.

El tribunal constató al valorar la declaración de Albano Silva que, a pesar de que intentó justificar que contaba con otros ingresos provenientes de negocios o actividades lucrativas paralelas al restaurante, lo cierto es que en definitiva tuvo que admitir que todos los gastos que tenía o bienes que adquiría, los costeara con el dinero proveniente del restaurante, respecto del cual sostuvo reiteradamente que tenía enormes ganancias, pero a la vez, estaba casi en quiebra por lo que Yerko Silva tuvo que inyectarle dinero y armar la sociedad "SyB" para salvarlo, lo que deja de manifiesto las inconsistencias de sus explicaciones que le restan credibilidad, así como las contradicciones en que incurrió con la declaración de Carolina Cornejo sobre los mismos tópicos.

Así las cosas, los antecedentes probatorios aportados por el Ministerio Público con la declaración de Albano Silva, conjuntamente con otros que se examinarán más adelante, permiten probar que los dineros que se traspasaban entre las cuentas vinculadas al restaurante provenían de los negocios ilícitos llevados a cabo por la asociación, más aun si se le suman las transferencias que se hacían de la cuenta Rut de Albano a los miembros de esta, durante los años 2017 y 2018, como Sebastián Martínez, Tatiana Arana, Aimel Gavilán, Franco Cruz y Juan Navarrete.

En tanto que **Ilich Alexis Chopa Aldana** comenzó su relato señalando que en el año 2010 se empezaron a crear empresas para facturar maquinaria y camiones que se traían del extranjero, pero como no eran vehículos robados nunca tuvo problemas, ya en el año 2012 se empezaron a facturar vehículos robados y se empezaron a blanquear. Dijo que llegaban los vehículos robados y se ocupaban números de chasis y motor de vehículos que no estaban registrados en Chile para darles una nueva identidad. Además, tenía muchos conocidos en Santiago que se dedicaban a los remates, por lo que, empezó a facturar vehículos que tenían embargos o problemas judiciales para blanquearlos. Entonces, comenzó a vender facturas para blanquear vehículos robados, entregaba las placas y les hacía la documentación. Añadió que por este tema, cayó detenido en una investigación del 9° Juzgado de Garantía de Santiago, en agosto del año 2016.

Luego de dar un contexto a su vinculación con Yerko Silva Toro, narró que le tocó ir en comisión a cada lugar en que se encontraban los vehículos, Talca, Chillán, Concepción, Valdivia, Puerto Montt y en una de esas entradas y salidas de unidades penales, a fines de diciembre de 2016 llegó al patio de tránsito y conoció a Yerko, se fueron al mismo dormitorio y empezaron a hablar del motivo por el que estaban detenidos

y le explicó cómo se obtenían las nuevas placas de los vehículos, que se hacía una empresa y se emitían facturas y le dio su correo electrónico.

Precisó que en marzo de 2017 seguía detenido, y tenía un compañero con el que estaba detenido **Jonathan González Queglas, que era el cuñado de Franco**, a quién no conocía en ese momento. Jonathan le dijo que generaran algunas lucas, que tenía una empresa que hizo Franco y que trataran de vender facturas sin involucrarse con vehículos robados. En ese período facturaron varios vehículos que se vendieron a distintas personas y la negociación la hizo Franco y Jonathan.

Expuso que un día se acordó de Yerko y le habló al número que le había dejado, al parecer de su señora, y le dijo que quería ubicar a Yerko, un rato después le habló de otro número, a quien le comentó del tema de los vehículos, que había que traer un vehículo robado, lo que salía un millón o un millón y medio, que había que pagar un impuesto verde que dependía del valor del vehículo, y le dijo que le cobraría el 30% del valor de la factura. Además, le explicó que había que pagar el permiso de circulación y la inscripción, que salía como \$60.000 y la homologación, para lo cual, hablaron con Franco y crearon la homologación con un gráfico. Indicó que la homologación la vendía en \$500.000 y a Franco le pagaba \$150.000 a \$200.000.

Continuó relatando que, a fines de abril Yerko le dijo que tenía un vehículo, por lo que le pidió la patente original para sacar los datos del vehículo y así poder hacer la factura con las mismas características y como no tenía computador, le mandaba la patente a Franco el que sacaba un certificado de anotaciones vigentes y hacía la factura.

Añadió que a partir del año 2008 las facturas son electrónicas, y por el año 2010 se generó una página web “empresa en un día”, donde se hacía la sociedad en línea, pero el socio tenía que ir a firmar presencialmente a una Notaría. Después de eso, había que ir al SII y abrir el giro comercial en forma presencial y comprar las firmas electrónicas, para lo que se entregaban unos pendrives que al ingresarlos al computador pedían una clave y ahí se podía ingresar al SII. Por eso, como en el año 2017 estaba detenido, esto lo hacía Franco. (En su declaración queda en evidencia el conocimiento y manejo magistral que tenía del procedimiento para el inicio de actividades y facturación en el SII).

Advirtió que este proceso no era tan rápido, porque había que tener el vehículo, facturarlo, inscribirlo, pagar el impuesto verde y se entregaban las placas, pero había que esperar unos 15 o 20 días para que apareciera aceptada la inscripción. Aceptada la solicitud, se cambiaba el número de motor y de chasis, por si había alguna observación del Registro Civil y salía rechazado por forma o solemnidad. Acotó que se esperaba porque se pagaban unos \$300.000 por cambiar el número de chasis y de motor, eso lo hacía Aimel, quien era un mecánico tatuador. Dijo que no lo conoció y llegó a él por una persona recluida en Santiago Uno, que le dio el contacto, entonces, lo llamó y le preguntó cómo lo hacía para cambiar los números y Aimel se lo explicó.

Refirió que con Aimel acordaron el precio en \$300.000 y a Yerko le cobró \$500.000, entonces, le dijo a Yerko dónde tenía que llevar el auto para tatuarlo y le pagó a él y él le pagó a Aimel. (Ilich se autodefine como un broker de la reinscripción de vehículos)

Así fue como se hizo el primer auto y se vendió, comentando Ilich que Yerko se dio cuenta que era un negocio real y agregó que hasta **octubre hicieron 4 o 5 vehículos más (entre abril y octubre de 2017), porque en noviembre de 2017 salió en libertad**, pero antes de eso le tocó ir a Chillán y quedó sin comunicación, por lo que le dio a Franco el número de Yerko.

Sostuvo que en ese período, como en julio de 2017, Yerko le dijo que tenía un vehículo, pero Franco le comentó que las primeras empresas se habían bloqueado, pero que si conseguía un par de “gomas” para hacer nuevas empresas le iba a avisar. Entonces, le contó este inconveniente a Yerko y le dijo que “tenían que generar una empresa nueva y para eso se necesitaban dos gomass”, a lo cual, este le contestó que vería qué podía hacer. Pasó un tiempo y Yerko le avisó que tenía a las personas, le mandó los carnet y él a su vez se los envió a Franco. Fue así como se hizo la empresa, le dijo a Yerko que estaba lista y que los socios tenían que ir a firmar a una Notaría, los que fueron a firmar, se constituyó la sociedad y luego le dijo que tenían que comprar las firmas electrónicas y que cuando tuvieran los pendrives le avisara. Yerko le avisó que tenía los pendrives, y le pidió que se los fuera a dejar; Franco los fue a buscar y los instaló, se hicieron un par de facturas de prueba, \$100.000 o \$200.000 para que en la primera inscripción no fuera la factura N° 1 y le avisó a Yerko. (Es decir, la empresa se constituyó con el dinero y con las personas que reclutó Yerko, por lo que resulta poco creíble que Ilich, además, le vendiera las facturas de su propia empresa y a un elevado costo como el 30% del valor de la misma, por ello, el relato de Ilich mas bien da cuenta de la incipiente sociedad que surgía entre él, Yerko y Franco Cruz para delinquir).

Aseveró que **entre mayo y julio de 2017** se generó la segunda factura que le vendió a Yerko, y así se fueron haciendo las facturas.

Especificó que Yerko le pidió una factura para una máquina Yale que era para su hermano y que tenía una factura original que era de Caterpillar, entonces, le mandó la factura a Franco y se inscribió esa máquina.

Continuando con su relato, señaló que cuando se fue en comisión a Chillán le dio a Franco el número de Yerko y ellos quedaron en contacto y; cuando salió en libertad se fue a Concepción y siguió en contacto con Yerko, quien le dijo que no le vendiera facturas a nadie más porque él se había conseguido los gomass, le contestó que sí, que no había problema, y esto se lo dijo a Franco. Pero Franco empezó a vender facturas porque tenía las claves, sin consentimiento suyo ni de Yerko. (Es importante destacar que Ilich aparte de instruir a Yerko Silva en el negocio ilícito del blanqueamiento de vehículos robados, le dio los contactos de colaboradores como Aimel Gavilán y Franco Cruz Iligaray que se mantuvo formando parte de la organización).

Refirió que un día lo llamó Yerko y le dijo que tenía “la cagada” porque llamaron del SII a los representantes legales de la empresa los que concurrieron y les dijeron que había muchas facturas y que no se había hecho la contabilidad. Entonces, habló con Franco y le contó que Yerko dijo que había más de 10 o 15 facturas y él no había facturado más de 4, pero Franco le dijo que él era un mercenario y que le vendía

facturas al que le pidiera y le pagara. Preciso que esto ocurrió a fines de noviembre o principios de diciembre de 2017, tuvo una fuerte discusión con Yerko y nunca más supo de él.

No obstante lo dicho por Chopa, cabe señalar que la prueba aportada por el Ministerio Público, que será analizada más adelante, demostró que Ilich continuó relacionado con Yerko Silva, pues participaron en conjunto en la creación dos sociedades el 7 de enero del año 2019 -Nuevo Laredo y Portillo Spa-, cuya facturas fueron usadas por ambos para blanquear y vender vehículos y la empresa Valenzuela y Arce fue creada el 29 de noviembre de 2017, por Sebastián Martínez, quien era un contacto de Yerko y emitía las facturas Franco Cruz, quien continuó participando activamente en las operaciones delictivas de la asociación durante los años venideros.

Indicó que él siguió por su lado, en contacto con Franco y vendiendo facturas a diferentes personas, pero se las pedía a Franco para no involucrarse tanto, comenzó a trabajar como en una especie de asesor financiero, a levantar personas naturales y empresas para generar créditos de consumo o leasing, para que aparecieran con más patrimonio ante los bancos y paralelamente seguía vendiendo facturas para blanquear vehículos a personas del sur, cobrando el 30% de la factura.

En lo que respecta a su relación con Camilo Sandoval, se remontó a la época en que estaban trabajando juntos con Yerko Silva y se encontraba recluido en Santiago 1, entre los meses de mayo o junio de 2017. Aseveró que no sabía quién le hacía todo a Yerko (se refiere a los trámites en el exterior), y un día le habló Camilo y le dijo que era el cuñado de Yerko, pareja de Tatiana que era la persona que le hacía todas las cosas a Yerko, que Tatiana había peleado con Yerko y le ofreció ayuda en lo que pudiera. Como necesitaba cosas o encomiendas, ellos se las hacían llegar.

Fue así como empezó a pedirle a Camilo que le pagara impuestos verdes o que le consiguiera personas para inscribir vehículos, ya que vendía esa documentación y los vehículos no pasaban por él, por eso, le hizo depósitos a Camilo.

En lo concerniente al planteamiento de Ilich Chopa, cabe destacar que en su declaración hay un evidente vacío de información, pues convenientemente omitió explicar de qué manera Camilo Sandoval supo de su existencia y obtuvo su contacto, y siendo Yerko Silva el único nexo entre ellos, según la lógica y máximas de experiencia, la única manera posible es que se conocieran a través de Yerko en el contexto de las actividades delictivas que ambos estaban desarrollando mientras se encontraban privados de libertad en el mismo lugar e incluso como compañeros de pieza. Además, debe tomarse en cuenta que el propio Yerko Silva declaró que desde un principio le pidió ayuda a Camilo y a Tatiana, lo que es concordante con lo declarado por Camilo Sandoval, cuyo testimonio fue introducido al juicio con la declaración del comisario Daniel la Regla, en orden a que entre los años 2017 y 2018, fue contactado por Yerko e Ilich, para inscribir unos vehículos en el Registro Civil, reconociendo en definitiva la inscripción de 3 o 4 vehículos a solicitud de Yerko Silva e Ilich Chopa, pero negando conocer que eran de origen ilícito.

En otro tema, expuso que se le acusa de la venta de algunos vehículos, específicamente, una camioneta Chevrolet Colorado y un Subaru XV del año 2018. Al respecto, sostuvo que solamente vendió las

facturas, pero no los vehículos. En un caso, le vendió facturas a un sujeto de nombre Julio Aranda, que estaba preso por tráfico en Concepción, se inscribieron vehículos y quien los recibía era la señora de Julio de nombre Joselyn Riveros.

Indicó que el vehículo Subaru no habían podido venderlo, y antes de que se les pasara el plazo Joselyn inscribió el vehículo a su nombre.

Respecto de la Chevrolet Colorado, dijo que la hizo Gabriela Fernández. Este vehículo era petrolero y pagaba mucho impuesto verde, por eso, para quedar liberada se inscribió a nombre de una empresa. Afirmó que él les generó varias facturas y después la vendieron a una persona de Los Ángeles, a través de un martillero público de nombre Ruperto, con una factura de remate. Agregó que les entregaron un cheque por \$17.000.000, el que le pasaron a él como pago de facturas que le debían, sin saber que era de la venta de un vehículo, lo cobró en el Banco Santander. Acotó que de esa suma, una parte era para él y \$4.000.000 se los tenía que pasar a Gabriela.

Añadió que pasaron unos meses y en el año 2019 se encontró en Concepción con un amigo que le dijo “te cagaste a mi primo” y le explicó que le vendieron una camioneta robada y que el cheque que cobró era producto de la venta de esa camioneta. Entonces, decidió no seguir haciendo esto porque se iba a meter en problemas.

Refirió que para el estallido social (octubre de 2019) tuvo problemas económicos y le dijo a Franco que iba a hacer un vehículo y éste le comentó que estaba trabajando con Tatiana, a la que conocía, entonces, habló con chico Julio que tenía un Ford Explorer que fue a vender a Temuco, indicando que fue condenado por ese hecho y puso término a su negocio de los vehículos.

Mencionó que un día le habló a Franco Cruz y le pidió una factura para una Dodge Ram para una empresa de Temuco y Franco le dijo que estaba sin empresas, porque las que tenía estaban bloqueadas y que ya tenía una persona, pero no tenía plata para comprar la firma electrónica, entonces, le envió \$100.000 y después Franco le dijo que se gastó la plata.

Manifestó el acusado que le dijo que no le enviaría más dinero, pero que le mandara los datos y que él iba a comprar la firma electrónica, lo que hizo mediante su cuenta personal del banco BCI. Después supo que Franco generó dos empresas, reiterando que su participación fue solamente pagar la firma electrónica para que Franco le vendiera la factura (Esto no es efectivo pues según Sebastián Martínez corroborado por los documentos incautados en su domicilio, él constituyó las empresas en que Ilich pagó las firmas electrónicas, a solicitud y bajo las instrucciones de Yerko Silva).

Preguntado por la fiscal, precisó que la primera factura que le vendió a Yerko fue en abril del año 2017 por un Nissan Xtrail o Qashqai y que las dos empresas nuevas en que Yerko aportó los gomas se crearon en el mes de junio de 2017.

Explicó que la “clonación” es de un vehículo que ya existe, que fue chocado o dado de baja por algún otro motivo, y se busca uno de las mismas características y se saca el número de chasis del vehículo que se da de baja para ponérselo al otro, que puede ser robado, con prenda, con embargo, o sea, un vehículo entra

y otro sale. El “gemeleo” consiste en que andan dos vehículos de las mismas características, con la misma patente, una de ellas falsificada. Y la “reinscripción” de vehículos es un único vehículo que sale a la calle, desaparece uno e ingresa uno nuevo al mercado, ya que el Registro Civil entrega una nueva identidad a un vehículo 0 kms.

Puntualizó que le vendía a Yerko las facturas en el 30% del valor de la factura, que era el valor real del vehículo como 0 kms. (Sin embargo, las transferencias o depósitos que existen de Yerko hacia Ilich no se condicen de ninguna manera con esos elevados montos de dinero, es mas, Ilich no recibía ningún monto compatible con las sumas que supuestamente cobraba por la venta de facturas).

Indicó haber declarado en Fiscalía en noviembre de 2020, en presencia de su abogada defensora, y **en esa declaración señaló que Yerko hacía negocios con Camilo Sandoval, que era su cuñado, y que cuando salió de la cárcel en noviembre de 2017, se fue en un taxi al departamento de Camilo Sandoval y este le dio plata que le había mandado Yerko**, pero en ese momento Camilo ya no tenía relación con Yerko.

Además, reconoció que en esa declaración dijo que cuando dejó de venderle facturas a Yerko, **Franco y Camilo siguieron trabajando con Tatiana, y esta trabajaba con su hijo y en ese momento ya estaba de vuelta trabajando con Yerko**. Acotó que aquello ocurrió a fines del año 2018 o 2019 y lo supo porque se lo contó Franco Cruz, porque con él siempre tuvo comunicación y eventualmente le seguía comprando facturas.

Reconoció también que en su declaración dijo que en el año 2017 le entregó a Camilo Sandoval facturas que había comprado a Franco para vehículos robados, y agregó que Camilo quería ganar dinero, por lo que facturaron un vehículo nuevo y lo aseguraron, era un Volvo que nunca existió y luego dieron aviso por robo, pero no supo después si la compañía pagó el auto o no.

Indicó que Tatiana era la que vendía los vehículos, y era pareja de Camilo, por lo que suponía que Camilo conocía el origen de esos vehículos.

Respecto de la camioneta Chevrolet Colorado, se incorporó el **documento 675**, que es la denuncia del Registro Civil por documentación posiblemente falsificada, relativa a la solicitud de primera inscripción del vehículo placa patente **KPYL.92**, que adjunta la solicitud de primera inscripción de 15 de febrero de 2019, con factura electrónica de Automotriz Portillo SPA.

Al respecto, el acusado expuso que la Automotriz Portillo SPA, es una de las empresas que creó Franco y que vendía sus facturas y que el vehículo correspondía al que le vendió la factura. Este documento fue incorporado como factura N°504 de la Automotriz Portillo SPA, emitida el 13 de febrero de 2019, por una camioneta marca Chevrolet modelo Colorado, año comercial 2019, gris grafito, por un monto total \$24.149.780.

Señaló el acusado que sobre el valor total de la factura cobraba el 30% (es decir, en el caso de la factura en cuestión sería \$ 7.244.934).

Respecto de OMP 588 que se introdujo, manifestó que era el cheque que cobró, por \$16.500.000, de fecha 2 de abril de 2019, a su nombre, reconociendo su firma cruzada en el documento que cobró por caja y además aparecía la imagen de su cédula de identidad.

Asimismo, indicó que había un documento en que él autorizaba la subasta y transferencia del vehículo Chevrolet Colorado patente KPLY92-2, de fecha 2 de abril de 2019. Sin embargo, desconoció ese documento, ya que dijo que la cédula de identidad adjunta, no era suya.

La fiscal confrontó al acusado, señalando que durante la investigación la persona que compró este vehículo, Cristian Silva Veloso, declaró en mayo de 2019, y dijo que fue Ilich Chopa quien le vendió el vehículo, a lo que contestó que esto era imposible porque nunca tuvo el vehículo, que solo le vendió la factura a Gabriela y era falsificado el documento que indica que él autorizó el remate y el carnet no era suyo.

Hizo presente la fiscal que Cristian Silva también dijo que le entregó el cheque a Ilich Chopa, a lo que contestó que posiblemente alguien se hizo pasar por él para que hicieran el cheque a su nombre.

Respecto de otra temática, refirió que dejó de tener contacto con Camilo Sandoval después del año 2018, y admitió que tenía una cuenta corriente en el banco BCI, y que entre julio a octubre de 2018 le transfirió \$ 810.000 a Franco Cruz, en distintos montos, pero no recordó a qué obedecían los depósitos, a él le compraba facturas y homologaciones y como eran montos pequeños, no cree que hayan sido por la compra de facturas.

Respecto del documento 450 que se incorporó, el acusado dijo que era un oficio de fecha 16 de octubre de 2018 del banco BCI, en relación a los productos que mantenía en la entidad bancaria, en concreto, la **cuenta vista N° 74679694**, la cual se abrió el 30 de diciembre de 2014.

En tanto que el **documento 449**, es un oficio del mismo banco que registra las transferencias enviadas y recibidas y depósitos, remitiendo **10 cartolas de la cuenta vista del acusado desde el 2 de abril de 2015 hasta el 26 de noviembre de 2018** e informe de las transferencias enviadas desde el 2 de enero al 29 de noviembre de 2018 y transferencias recibidas desde el 23 de febrero de 2017 al 16 de enero de 2018.

La fiscal incorporó, concretamente, la información de las transferencias enviadas a Camilo Sandoval en el año 2018, a saber, el 27 de enero, por 60 mil pesos; el 30 de enero, por 1 millón; el 3 de abril, por 1 millón; el 16 de abril, por 500 mil, 1 millón y 50 mil; el 29 de mayo, por 220 mil y 250 mil; el 4 de junio, por 100 mil; el 9 de junio, por 60 mil; el 11 de junio por \$1.150.000; el 15 de junio por 400 mil; el 15 de junio por 100 mil; el 5 de julio, por 70 mil; el 22 de julio por 500 mil; el 23 de julio, por 15 mil; el 29 de julio por 1 millón y por \$150.000; el 20 de octubre por 400 mil, el 23 de octubre, por 20 mil; el 26 de octubre por 100 mil; el 27 de octubre por 60 mil y el 28 de octubre, por 50 mil.

La fiscal hizo presente que entre enero y octubre de 2018, le transfirió a Camilo Sandoval la suma de \$ 5.595.000.

Además, incorporó información de una transferencia a Camilo Sandoval el 7 de julio de 2019, por 350 mil.

Asimismo, acompañó información de las transferencias enviadas a Franco Cruz en el año 2018, a saber, el 6 de julio, por 100 mil pesos; el 16 de julio, por 250 mil; el 17 de julio, por 150 mil; el 23 de julio, por 100 mil; el 30 de julio, por 200 mil y el 26 de octubre por 10 mil.

También se incorporó una transferencia enviada el 24 de abril de 2018, por 250 mil pesos, a Jorge Salinas Uribe.

Respecto de las transferencias descritas, Ilich Chopa indicó que era efectivo que transfirió ese dinero, pero no recordaba cada una con detalle, sin embargo, en términos generales, reconoció que las hizo en el contexto de las actividades delictivas de la asociación ilícita, al señalar que “si había 200 mil pesos era por homologaciones” y a Camilo “debía haber sido por la inscripción de un vehículo, pagar el permiso de circulación e impuestos”, porque él vendía el “paquete completo” a diferentes personas y por eso necesitaba el dinero en efectivo. Dijo que también podían ser gastos asociados a movilización y en general, a favores que le pedía a Camilo en relación con vehículos robados.

Insistió, una vez más, que también facturó vehículos que no eran robados sino que le pedían documentación para vehículos y él nunca preguntaba la procedencia, por ejemplo, le pedían para vehículos de renta car que después no entregaban.

Respecto de Jorge Salinas Uribe, dijo que lo más probable es que esa persona era un “goma” y le pagó para que fuera a inscribir un vehículo y explicó que tenía la cédula de identidad de Jorge Salinas porque la pedía para hacer la factura. (Esta declaración importó una confesión acerca de las vinculaciones que había entre Ilich Chopa y Camilo Sandoval, Franco Cruz y Jorge Salinas en el contexto de las actividades ilícitas y de su participación en la asociación ilícita materia del presente juicio).

Se incorporó, además, la información de las cartolas respecto de los depósitos en efectivo efectuados el año 2018: El 24 de mayo, por \$ 5.300.000, el 8 de junio, por \$ 9.980.000; el 4 de julio por \$ 2.000.000; el 9 de octubre, por \$1.300.000; el 17 de octubre, por \$1.000.000 y el 22 de noviembre, por \$1.000.000.

El acusado explicó que en ese tiempo se dedicaba a obras de ingeniería y en el año 2018, estaba en la construcción del hospital de Angol y él tenía el control de la cuenta de “Control Clima” y, sacaba de los estados de pago y depositaba en su cuenta personal. Pero esos dineros estaban debidamente justificados por la empresa Moller y Pérez Cotapo y en las cartolas anteriores y posteriores también había transferencias de las empresas donde trabajó. Acotó que los estados de pago eran de 35 a 40 millones, que se cobraban en efectivo y de ahí sacaba plata y la distribuía a su cuenta personal.

Respecto de **Daniela Opazo Sandoval**, contó que era una amiga que transfirió dinero a Camilo, Aimel, Franco, Claudia Sandoval y Tatiana Arana, entre abril y agosto de 2017, porque él estaba privado de libertad, entonces, como en ese tiempo les vendía las facturas a Yerko y otras personas, esas transferencias debían ser por pagos de inscripciones, homologaciones, permisos de circulación, etc. Aclaró que en el caso de Claudia Sandoval, podría ser que ella hubiese depositado a la cuenta de Daniela Opazo y no al revés.

Se incorporó el documento 808, que corresponde a oficio del Banco Santander de 29 de junio de 2022, respecto de Daniela Opazo, titular de la cuenta vista 7032611, cuenta de ahorro, sin respaldo, acompañando resumen de cartolas y de depósitos en efectivo.

Concretamente, se introdujo un comprobante de depósito por caja, de fecha 11 de agosto de 2017 a Daniela Opazo, realizado por Yerko Silva, por la suma de \$800.000.

El acusado explicó al respecto, que en esa fecha ambos estaban privados de libertad, por lo que alguien debió haber depositado a nombre de Yerko, por algún pago de homologación. (Anteriormente dijo que las homologaciones las hacía Franco, se las compraba a \$150.000 o \$200.000 y él a su vez se las vendía a Yerko a \$500.000, por lo que, el monto depositado no se condice con la justificación dada por el acusado)

El acusado alegó que Yerko jamás le encomendó algo, no era subordinado de él, sólo le vendía facturas y le explicó cómo hacer el negocio, además, ese depósito era por un monto menor, ya que le cobraba mucho más y los vehículos que facturaba no eran por menos de 15 millones, por lo que sospechaba que podía ser por el pago de un impuesto verde (Ahora pretendió explicar que Yerko le tenía que depositar a él para que a su vez él le encargara el pago del impuesto a un tercero, para la inscripción del vehículo, mecanismo de triangulación de dineros que no resulta razonable, pudiendo Yerko encargar directamente ese pago a sus colaboradores que estaban en el exterior, lo que ciertamente hacía de acuerdo a la dinámica llevada a cabo en el contexto de la reinscripción de los vehículos robados en el Registro Civil. Por el contrario, dicha suma depositada por Yerko a Ilich, así como otras que se verán, dan cuenta más bien de una distribución de ganancias de la operación ilícita).

La fiscal hizo presente que en las cartolas de Daniela Opazo se registraba el 17 de abril de 2017 una transferencia de Tatiana Arana por la suma de \$4.000.000 y el 4 de mayo de 2017, una transferencia de Camilo Sandoval, por \$ 3.250.000.

El acusado, al respecto, señaló que la transferencia de Tatiana debió ser por la primera factura que le vendió a Yerko, él no sabía con quién trabajaba y la segunda, probablemente Tatiana le pasó la plata a Camilo y él hizo la transferencia, porque en esa fecha mantenía negocios con Yerko.

Además, el 8 de junio de 2017, recibió \$ 3.330.000 de Claudia Sandoval, señalando, al respecto, que debía ser por una factura de Yerko.

El acusado manifestó que Daniela Opazo le facilitó su cuenta para recibir y enviar dineros, ella es la hija de un ex socio de una empresa forestal, ya que él tenía una cuenta que estaba bloqueada, entonces, los dineros quedaron ahí hasta que salió en libertad; y los dineros que se depositaban o transferían a la cuenta de Daniela provenían de las facturas que vendía.

Cabe señalar que **Daniela Opazo Sandoval, prestó su testimonio en el juicio** y corroboró parcialmente los dichos de Ilich Chopa, en el sentido que lo conoció en el año 2013, entablaron una amistad y compartió con él y su polola Vania, y en el año 2018 perdieron contacto. Dijo que los primeros meses del año 2017, Ilich la contactó por teléfono y le solicitó un favor, si podía transferirle a su cuenta \$ 2.000.000 porque tenía problemas legales y no podía tener cuenta, después le pidió que transfiriera ese dinero a otras cuentas,

después, otras personas, conocidos y amigos de Ilich, comenzaron a transferir sumas a su cuenta e Ilich le dijo que se habían equivocado, y que si podía traspasar ese dinero a otras personas, entre ellas, conocía a Cristian Flores e Ismael Pizarro.

Aseveró que esto lo realizó como un favor, nunca obtuvo un pago y siempre devolvió ese dinero, y el mismo año 2017, una ejecutiva del Banco Santander la llamó y le dijo que su cuenta iba a ser bloqueada por movimientos sospechosos, entonces, se contactó con Ilich y le dijo que no quería verse envuelta en problemas y no quería saber nada más de él, lo bloqueo en las redes sociales. **Acotó que recibió alrededor de \$ 79.000.000 en su cuenta que luego transfirió.**

Mencionó que de las personas a las que transfería, solamente conocía las dos que dijo, y **también le transfirió a Camilo Sandoval, a quien conoció después, en el año 2018, pues compartía con Gabriela Fernández, que era una amiga común,** pero no recuerda los montos que Camilo le transfirió y que ella tuvo que transferir.

Enfatizó que no le facilitó la cuenta a Ilich, solamente le pidió el favor de que le transfiriera \$ 2.000.000 y luego fueron errores y las personas a petición de él le transferían los montos, los cuales deben estar reflejados en su cartola del Banco Santander. Acotó que finalmente le cerraron la cuenta en el año 2018, pero después de haber terminado su amistad con Ilich.

Continuando con la incorporación de documentos adjuntos al oficio del Banco Santander, se acompañó un comprobante de depósito en efectivo de fecha 24 de julio de 2017 efectuado por Camilo Sandoval por \$10.600.000; y el acusado aseveró que podía ser por el pago de dos facturas, cuando él le pedía favores a Camilo, ya que en esa fecha Camilo ya no tenía relación con Yerko, porque entre junio o julio Camilo le ofreció ayuda y varias veces le pidió que le retirara dinero de personas a las que les vendía facturas. (Esta aseveración no encuentra sustento en la prueba de cargo ni tampoco fue corroborada por ningún elemento aportado por el acusado).

Se incorporó también un depósito en efectivo de fecha 9 de agosto de 2017, a nombre de Daniela y la depositante es Claudia, por la suma de \$ 5.350.000; señalando el acusado que si era Claudia Sandoval, debió haber sido por un pago de Yerko.

Cabe hacer presente que Yerko si bien corroboró esta versión en el sentido que en un principio le compró las facturas a Ilich –con las primeras empresas-, señaló que se le pagaba una vez que se vendiera el vehículo, por lo que, Ilich también se habría involucrado indirectamente en la venta de los vehículos, ya que era un pago condicionado que dependía de la materialización de los delitos fines de la asociación, participando en definitiva del producto de estos.

Se introdujo un depósito en efectivo a la cuenta de Daniela Opazo, de fecha **28 de julio de 2017**, depositante **José Paredes Quevedo** por la suma de \$ 14.350.000. Y el encausado sostuvo desconocer quién era esa persona y que lo más probable era que no fuera dinero de él.

En relación con el documento anterior, se incorporó el **otro medio de prueba 40**, y el acusado reconoció la fotografía de una cédula de identidad de José Alfredo Paredes Quevedo en su celular que le fue

incautado, pero señaló no recordar por qué la tenía en su teléfono y que probablemente era un goma al que se le facturó un vehículo. (Este reconocimiento implicó una confesión de su participación en la venta de un vehículo).

Además, como **documento 852** se acompañó la solicitud de primera inscripción del vehículo patente JSSD.29-3, de fecha 4 de julio de 2017, marca Ford, modelo Edge, año 2017, blanco metal, adquirente **José Alfredo Paredes Quevedo**, factura de primera venta de Comercializadora Full Orión Ltda. por \$ 23.510.000; la copia de factura N°8 de Comercializadora Full Orión Ltda. a nombre de José Paredes Quevedo y el comprobante de pago del impuesto en TGR.

La fiscal lo confrontó con la declaración de la víctima estafada con la venta de este vehículo, quien dijo que lo compró el 27 de julio de 2017 fecha que coincidía con el depósito en la cuenta Daniela Opazo.

Frente a ello, el acusado mencionó que no tenía nada que decir, porque en ese momento estaba detenido y no sabía por qué le depositaron esa cantidad de dinero, ya que esa factura era de 24 millones, entonces, le correspondía un pago de \$ 7.200.000; y reconoció que coincidía la fotografía de la cédula de identidad con los datos de las facturas exhibidas.

Agregó que en ese período le vendía facturas a Yerko, pero esa en especial se la vendió a Clarence Acuña, que también estaba detenido en Santiago Uno, donde todos querían vender vehículos blanqueados y, él hacía las facturas pero con el nombre de ellos le pasaba.

Los dichos de Ilich, en este sentido, fueron desmentidos por la declaración del comisario Daniel La Regla y la inspectora Forero, quienes reprodujeron el testimonio prestado por José Alfredo Pérez Quevedo durante la investigación, en el sentido de haber sido reclutado por Camilo Sandoval para inscribir y vender automóviles a cambio de un pago, lo que hizo con dos vehículos, una Toyota Hilux y un Ford Edge, y que sabía que habían dos vehículos más en que estaba involucrado, pero desconocía antecedentes porque en ellos no participó.

En otro orden cosas, se incorporaron como **otros medios de prueba 40**, las imágenes del teléfono celular de Ilich Chopa.

Específicamente, una captura de fecha 26 de octubre de 2017 de una hoja manuscrita donde aparecen un aserie de valores, por ejemplo, \$1.300.000 impuesto verde, \$50.000 inscripción; \$1.100 nave, etc., no recordando el acusado a qué correspondía, pero él enseñaba a otros los gastos de un vehículo.

Para efectos de refrescar memoria, leyó su declaración de fecha 5 de noviembre de 2020 que señalaba “esa hoja de cuaderno manuscrito la hice cuando estaba en Santiago 1 para explicarle a Yerko cómo funcionaba el negocio”.

Explicó que esa imagen no era del teléfono sino de una memoria que tuvo en algún momento y quedó perdida en el tiempo y cuando allanaron su casa sacaron hasta unos teléfonos antiguos, entre esos, una memoria de cuando estaba en prisión preventiva y cuando la fiscal le preguntó dijo que era del tiempo de Santiago 1 y pensaba que podía ser a Yerko o a otro, la hoja decía Clarence, entonces podía ser que se la hiciera a él.

Exhibidas otras imágenes, aparecía una captura de 29 de enero de 2018 de la cédula de identidad de Camilo Sandoval Godoy, que estaba en su celular, recordando que sacó esa fotografía en su oficina, porque Camilo quería regularizar su situación bancaria y necesitaba un contrato de trabajo para pagar imposiciones. También había una imagen de 20 de marzo de 2018 de él y Camilo Sandoval; y dijo que la tenía en su celular porque eran amigos.

El 30 de julio de 2017 había una imagen de solicitud de 1ª inscripción PPU JRSR.26, de fecha 12 de junio de 2017, correspondiente a un vehículo Kia, Frontier y el adquirente era Carlos Andrés Gómez Zúñiga, al respecto, el acusado señaló que era algo que mandó a hacer, porque él entregaba el “paquete completo”, y tenía el respaldo del trabajo efectuado, pero a Carlos Gómez no lo conocía y era a quien se le hizo la factura, ahora bien, si Carlos Gómez aparecía en las visitas que tuvo Yerko, entonces, era una factura que le hizo.

En la misma fecha, había una imagen solicitud de 1ª inscripción vehículo marca Chevrolet Sail de color rojo, PPU JRSS.55, de fecha 14 de junio de 2017, adquirente Carlos Gómez Zúñiga. Al respecto señaló que era una factura que probablemente le vendió a Yerko.

En la misma fecha, había imágenes de transferencias de Daniela Opazo a Camilo Sandoval, por el monto de \$600.000 y por \$260.000, de fecha 4 de julio de 2017; y por \$200.000 de fecha 14 de julio de 2017; también de una transferencia a Aimel, por \$370.000 de fecha 10 de julio de 2017. El acusado explicó que Aimel Gavilán era el tatuador y el motivo debe haber sido por la venta del producto.

Puntualizó que todas esas transacciones en la cuenta de Daniela Opazo eran del período en que estuvo privado de libertad en Santiago 1 el año 2017.

En la misma fecha 30 de julio de 2017, había una imagen de un depósito en efectivo a la cuenta de Daniela Opazo por \$6.600.000 y \$4.000.000 de 24 de julio de 2017, depositante Camilo Sandoval.

El acusado explicó que esos depósitos fueron por la venta de facturas, le pagaban en efectivo y seguro que Camilo fue a buscar ese dinero y, después lo depositó en la cuenta de Daniela.

Continuando con la incorporación de las imágenes contenidas en el celular incautado a Ilich Chopa, se exhibieron capturas de transferencias a Franco, solicitudes de 1ª inscripción de un Volvo V40 patente JTGR.48 de fecha 28 de julio de 2017, adquirente Carlos Latin Quezada; transferencias a Camilo; una transferencia de Claudia Paz a Daniela Opazo por \$500.000, de 9 de agosto de 2017; el acusado respecto de esta última dijo que sabía que Claudia era hermana de Camilo.

También había una imagen de fecha 14 de septiembre de 2017, correspondiente a la factura N° 6 de la Automotora Kor SPA, de fecha 8 de septiembre de 2017, a nombre de Felipe Luengo López, vehículo Chevrolet Captiva, color gris, monto \$16.990.000.

Sobre dicho documento, el acusado mencionó que había facturas de vehículos que no existían y creía que ese era el caso. Además, las empresas las creaba Franco con Jonathan González Queglas, que también estaba detenido en ese momento y, por eso pensaba que Franco hizo todo el movimiento, pero no sabía quién consiguió los gomas.

Vinculada con la factura anterior, había una imagen de solicitud de 1ª inscripción del vehículo patente JRZY.69 de fecha 11 de septiembre de 2017, de una Chevrolet Captiva, adquirente y solicitante Felipe Luengo López; e Ilich aseveró que se la mandaban como reporte de que efectivamente habían llevado los papeles al Registro Civil.

Finalmente, se exhibió una imagen de 20 de marzo de 2018, donde aparecía una clave inicial de recuperación del SII, a nombre de Jorge Salinas Uribe, era una solicitud de clave en el SII y se visualizaba la cédula de identidad. El acusado no recordó por qué estaba la imagen.

Se introdujeron dos imágenes de **otros medios de prueba 331**, de un correo de la cuenta excit@gmail.com de 27 de diciembre de 2018, destinatario scliente@EcertChile y en el asunto aparecía “comprobante de pago a nombre de Julián Martínez Arriagada” y el comprobante adjunto en el correo que era de su cuenta del BCI, por la suma de \$64.980.

Al respecto, el acusado reconoció que había pagado una firma electrónica, pero no sabía si era esa, ya que no era su correo, y probablemente era un correo de Franco que le dio para que le llegara la documentación; luego, se contradijo al señalar que Julián Martínez Arriagada era un goma que constituyó una empresa que hizo Franco, porque en ese tiempo las claves llegaban al correo electrónico y Franco le pidió que se la mandara.

Concatenado con la evidencia anterior, se acompañaron el **documento 373**, carta de empresa E-Certchile en que informó que Julián Jesús Martínez Arriagada obtuvo firma electrónica en esa entidad acreditadora y acompañó comprobante de pago de la firma electrónica por \$ 64.980, y adjuntó factura electrónica de E-Certchile a nombre de Automotora Nuevo Laredo SPA, por \$ 14.160; el **documento 383**, copia de escritura de constitución de Automotriz Portillo SPA, de 7 de enero de 2019, suscrita por Julián Jesús Martínez Arriagada como único socio; y el **documento 384**, escritura respecto de Automotriz Nuevo Laredo SPA, de la misma fecha y mismo socio.

El acusado, sobre los documentos exhibidos, se limitó a comentar que no sabía que con la misma firma se habían constituido dos empresas y se estaba enterando en el juicio. (La respuesta de Ilich Chopa no resistió análisis, pues con la experiencia que tenía en este rubro ilícito, sabía perfectamente qué estaba pagando y para qué efecto, cuando hizo la transferencia a la empresa E-Certchile).

Con respecto a Albano Silva Toro, expuso que no lo conocía pero reconoció que le vendió una factura a su hermano Yerko para la venta de una grúa horquilla de marca Yale. Relató que **entre abril y julio de 2017**, Yerko le pidió facturar una maquinaria que no tenía patente, que la tenía su hermano Albano con la factura, por un problema con un leasing que no se había pagado, entonces, Yerko le mandó la factura original de Caterpillar y al ver las características se las mandó a Franco, quien le generó la factura y él se la reenvió a Yerko. Agregó que no recordaba cuánto le pagó Yerko por esa factura, puede haber sido \$800.000 porque había un depósito en la cuenta de Daniela de Yerko Silva. (Pero esa cantidad no concordaba con el porcentaje que aseguró le cobraba por factura, ya que es considerablemente menor)

. Para corroborar el relato anterior, se incorporó el **documento 524**, que es la solicitud de 1a inscripción del vehículo Caterpillar patente HFX.33-K, adquirente Nelson Méndez Moya de fecha 4 de mayo de 2017, factura electrónica de primera venta N°3, de la Comercializadora Full Orión Ltda., de fecha 29 de abril de 2017 y la factura referida a nombre de Nelson Méndez Moya por el monto de \$ 27.880.236 (El 30% de este valor corresponde a \$8.364.070 que sería el costo de la factura en este caso, sin embargo, Ilich dijo que le cobró \$800.000 a Yerko, contradicciones que, en este punto, se han repetido a lo largo de su declaración, lo que sumado a que no existen trasposos de dinero por montos equivalentes a los porcentajes señalados, ni a Ilich ni a Franco que sería su proveedor, torna insostenible su tesis de que se limitaba a vender facturas o a los más el “paquete completo”).

El acusado reconoció que esa fue la factura que le vendió a Yerko por la grúa horquilla que era de su hermano Albano Silva Toro.

Por otra parte, se reprodujo el **Progresivo 10.396 de 23 de abril de 2019** contenido en **otros medios de prueba 144**: Voz de mujer: Aló? Voz de hombre: ¿Qué pasa?, mujer: voy pa onde el abogado ahora. Hombre: vai a ver la huea del Camilo? Mujer: no y lo mío también si ya saqué el pasaporte. Hablaste con el mimo? Hombre: no, no le he dicho nada Tati, o sea, es terrible problema pa mí. Mujer: pero todos sabíamos en lo que nos estábamos metiendo, si yo te dije como era la hueá, si hay que disfrazarle la hueá no más, hay que meterle un cuento, más rato vamos los dos. Hombre: y que cola puede ser pa él? Mujer: nada, puede ser que lo llamen a declarar si es que lo encuentran, que qué hueá es ese auto? y que él no sabía, que un hueón le ofreció y que nunca se iba a imaginar que esa hueá era flaiteá, y al Ilich, a ese hueón tenemos que mandar al choque, que es un amigo que vive en Conce y que de repente viene a Santiago, yo tengo ahí el descarte y el “pollo” también me dijo que le dijera que esa hueá tenía que decir, así que más rato hablamos los dos con él.

Oída la interceptación telefónica, el acusado señaló que en esa fecha no tenía contacto con ellos, pero lógico que era para “lavarse las manos”.

Tampoco sabía si Camilo Sandoval vendió directamente un vehículo, mientras él estaba en prisión preventiva, porque Tatiana era la que vendía, lo que sí hacía Camilo era depositarle la plata de los pagos de facturas de Yerko y también le depositaba cuando le vendía facturas a él (Ahora incluyó al propio Camilo en su listado de “clientes” en circunstancias que sostuvo sistemáticamente que este solo lo ayudaba con trámites que le encargaba).

Para efectos de evidenciar una contradicción, leyó su declaración de fecha 5 de noviembre de 2020, en la que señaló que “cuando Camilo vendía un vehículo una parte iba para él y otra para Yerko”. “Para Yerko el 50% y él con el 30% de la factura”. “Camilo hacía las ventas de los vehículos y hacía los depósitos a Yerko y en la cuenta de Daniela para él”.

Sobre el punto, señaló que pudo haber declarado eso porque no se acordaba mucho de la causa y estaban recién detenidos, entonces, no tenía muy claro el tema, pero por los audios supo que quien vendía

los vehículos era Tatiana y como ellos eran pareja, no le constaba si Camilo solo la acompañó o hizo alguna venta directamente.

A su abogada defensora, contestó que no recibía órdenes de Yerko ni de ninguna otra persona de las que están siendo investigadas en esta causa y que Franco al decir que “era un mercenario”, se refería a que vendía facturas a quien se las pidiera y añadió que él también hacía lo mismo.

Con respecto a las firmas electrónicas, aclaró que él las pagó, pero quien las compró fue Franco, ingresando con la clave de su cuenta vista para hacer el pago. Sin embargo, no tenía conocimiento que Franco iba a constituir dos empresas, sólo sabía que necesitaba facturar y pensó que haría sólo una empresa (En este punto, el acusado se contradijo, pues anteriormente declaró que le había mandado \$100.000 a Franco para que pagara la firma electrónica y se gastó la plata, por eso, él personalmente pagó la firma mediante transferencia desde su cuenta vista del Banco BCI).

En lo atinente al cheque que cobró de la Chevrolet Colorado y a la autorización para un remate, precisó que su cédula de identidad era de las actuales, con la cual cobró el cheque, pero el supuesto poder que entregó para hacer el remate tenía adjunto fue un carnet antiguo. Además, explicó que tampoco podría haber autorizado la venta, porque ese vehículo estaba a nombre de una empresa y él no era el representante legal de la empresa.

Al defensor de Navarrete y Millalén, indicó que a sus representados recién los conoció cuando llegaron a la primera audiencia hace unos días (lo que concordaba con la prueba inculpativa rendida en su contra, la que no está vinculada con ninguno de los dos, circunstancia que se condice con la tesis de que Navarrete se incorporó a la asociación en una última etapa cuando Ilich Chopa se había alejado).

Por su parte, el acusado **Juan Francisco Gabriel Navarrete Vásquez**, comenzó su declaración señalando que conoció a Yerko Silva en el año 2013 cuando estudiaron en el Instituto Los Leones, donde hicieron una amistad, lo iba a dejar a su casa y salían juntos, pero lo dejó de ver hasta fines del año 2019, además, contó que conocía a su hermano Albano porque eran de la misma comuna y a veces jugaban en la cancha.

Manifestó que un día fue a almorzar al restaurante de Albano, la Parrilla del Gaucho, como en octubre o noviembre de 2019 y hablaron por video llamada con Yerko, volviéndose a comunicar. Luego, viajó a Puerto Montt a trabajar y supo que Yerko estaba privado de libertad en esa ciudad, por eso lo pasó a ver, pero no hablaron nada de los vehículos, ya que a fines de 2019, Yerko le pidió ayuda, pues necesitaba un “goma” para inscribir vehículos, le dijo “tengo la mano para inscribir vehículos”.

Entonces, relató que tenía un amigo de nombre Jesús Gacitúa y habló con él, fueron con Albano a su casa y le sacaron una foto a su carnet y Albano envió la foto (se supone que a Yerko) y le dijo que estaba ok. Indicó que como a los 2 días (Yerko) le envió una factura en PDF y le dijo que fuera al Registro Civil con Jesús, pero que también fuera a buscar a Freddy, el hijo de Tatiana, quien cree que vivía en Pudahuel y

fueron juntos al Registro Civil de Conchalí e hicieron el trámite. Luego pasaron a dejar a Jesús. Acotó que Freddy se quedó con toda la documentación, y luego de un mes, Yerko le comunicó que estaba todo listo, que había sido aceptada, pero no supo qué vehículo era.

Agregó que después Yerko le pidió otro “goma”, entonces, Jesús lo contactó con Marcos Supanta, quien le envió la foto del carnet y a su vez él se la envió a Yerko. Luego, a los dos o tres días, con Freddy lo acompañaron al Registro Civil y tampoco supo de qué vehículo se trataba.

Manifestó el acusado que pasaron 2 o 3 meses y Yerko le pidió que llevara a su hermano y a Marcos Supanta a vender un Hyundai Tucson a la Ligua, los que con una pareja hicieron la venta en el Registro Civil. Luego, se fueron a la Parrilla del Gaucho y Yerko le dijo que sacara \$300.000 para la bencina y \$300.000 para Marcos y le pidió que le llevara la plata a su **tío Kiko**, se la llevó en una bolsa café, pero no supo cuánta plata era.

El acusado refirió que, al tiempo, Yerko le dijo que tenía una Nissan Qashqai y no tenía donde guardarla y él le ofreció dejarla afuera de su casa, tras lo cual llegaron Tatiana y Freddy a dejarla y el vehículo estuvo como dos semanas en su casa. En ese tiempo, expuso, llegó David Millalén y le pidió que lo acompañara a comprar un repuesto a la Avda. Brasil porque no podía ir con su auto, como el se iba al sur en avión, se le ocurrió pasarle la camioneta de Yerko que tenía en su casa, para ir a comprar el repuesto, pero no sabía el origen del vehículo. Acotó que a David lo tomaron detenido y rápidamente lo dejaron en libertad.

Continuando con la exposición cronológica de los hechos, refirió que en el año 2020 cuando empezó la pandemia, Yerko le pidió que le guardara la Hyundai H1 blanca y él accedió; y pasó como un mes y le pidió que le ayudara a venderla, pero al “goma” nunca lo conoció. Indicó que los chiquillos la iban a vender en Arauco y Yerko le pidió que los acompañara, le pagaría la bencina más \$500.000. El acusado accedió, pero no se vendió y no sabía qué pasó ese vehículo.

Manifestó que después de un tiempo, en agosto o septiembre de 2020, Yerko le dijo que “Luxín” había chocado un Fiat Argo plomo y le pidió si se lo podía guardar, a lo cual accedió y lo tuvo un mes. Luego, Yerko le pidió que lo mostrara, lo tenía ofrecido en \$2.000.000, y el acusado indicó que sabía que era un auto robado, pero llevaba 3 meses sin “pega”. Fue así como unas personas fueron a verlo a su casa, llegaron a un precio y lo vendió con Marcos en una Notaría, en \$1.500.000, y él sacó la mitad.

El acusado relató que siempre trabajó en construcción, con su padre, en el año 2017, trabajó en Copiapó remodelando laboratorios, en enero de 2018 remodelando los Bancos Santander y en el 2019 en la Cruz Blanca, pero cuando fue el estallido social y la pandemia, Yerko Silva le ofreció este tema y le pidió favores un par de veces y de todos los acusados en esta causa, sólo conoce a Yerko, Albano y David Millalén.

La fiscal reprodujo de los otros medios de prueba 208, los audios de whastapp WA0292, WA0295, ambos de 23.02.2020, WA0000, WA0002 y WA0057 de 24.01.2020.

En los WA0292 y WA0295 se escuchó: Oye compa estai ahí con el contador o no? Cuando llegue pregúntale si tiene una dirección para ponerle a una empresa para poder hacer la verificación de la actividad, para poder dejarla funcionando, es tu amigo, es de confianza.

Para eso necesitamos una dirección, con rut de la persona...

Mira hermano cuando te topis con tu amigo dile que tenemos una empresa ya con iniciación de actividades pero que queremos hacer la verificación de la actividad, para que quede operativa, pero no tenemos una dirección tributaria que se aporte a la empresa.

Entonces, si él tiene una dirección importante, que sea de Puerto Montt o de donde sea, si él nos puede prestar hasta que salga la verificación, que él mismo haga la verificación y una vez que salga positiva, yo cambio la dirección.

El tema de la verificación, yo sí me iba a dar el tema. Pero a nosotros se nos caen las empresas cuando lo van a verificar, hermano.

Pero si necesitai un domicilio, y lo voy a hacer un domicilio, yo tengo Rut. Todo lo puedo hacer. ¿Qué te piden?

Pueden hacer la verificación, lo voy a hacer. Pero nosotros, cuando nos van a verificar el domicilio, se nos caen, ahí cagamos.

Respecto de estos audios, el acusado señaló que conversaba con Yerko Silva. Indicó que no sabía cómo se creaban las empresas, es nulo en ese tema y no sabe por qué dijo eso, no lo recordaba. Agregó que él solamente hizo favores que le fueron pagados, pero nunca fue un trabajo.

En el audio WA0013: Yerko le dice que tiene la verificación positiva condicional de la empresa de "nosotros", instaló el certificado digital, lo subió a la página, pero no lo deja facturar, que el hombre les pegue una ayudaita, que lo vea en el computador, le mando las claves y todo, le podís preguntar al caballero, al amigo tuyo.

El acusado reconoció que en este audio también conversaba con Yerko Silva. Al respecto, expresó que se refería a un amigo contador de la universidad, pero éste dijo que no, que no se metía y que él nunca tuvo una empresa, que los gomas eran para inscribir los autos, específicamente, un Tucson a nombre de Marcos Supanta, por lo que, insistió en que no sabía por qué Yerko le dijo "la empresa de nosotros", pues él no tiene nada que ver ahí.

Respecto de la reproducción de los audios WA0316 y WA0321 del 23.01.2020, señaló que se referían a la detención de su amigo David Millalén en un servicentro, cuando se encontraba en un vehículo que le tenía guardado a Yerko Silva y que él le pasó. Explicó que era una Nissan Qashqai, que tenía estacionada afuera de su casa, porque vive en un pasaje cerrado, tenía las llaves, y de los otros vehículos que guardó, las llaves se las llevaba Tatiana y Freddy.

En el contexto del audio WA0129 de 25.01.2020, que señalaba “Juanito, ese hueón está tirao, porque no quiere transferencia, quiere poder amplio en Notaría tuvo que bajarse a 16 y medio y quedó en llamarlo, pero le interesó”, dijo que era Yerko, el cual se refiere a que no había que llevar al goma sino que hacer un poder para vender el auto y creía que se lo dijo para pedirle el favor de la venta del auto, agregando que Freddy era el que siempre iba a la Notaría para hacer el poder.

Expuso que hubo un lapso corto en que Yerko le comentaba el tema de los autos y le pedía ayuda porque a veces Tatiana, Freddy o Luxín no le contestaban, le decía cada 2 o 3 meses, que necesitaba a alguien que le ayudara a venderlo o mostrarlo, pero esto fue el año 2020, después de las fechas navideñas del año 2019, y dos veces le pidió el favor que le buscara a gomas.

Reconoció haber conocido a Freddy y Tatiana, los vio 3 o 4 veces, ellos les llevaron unos vehículos para que los dejara afuera de su casa que sabía que eran de origen ilícito. Dijo que Luxín era otra persona que mostraba vehículos para la venta, probablemente a petición de Yerko, ya que siempre peleaban y le pedía favores. Una vez llegaron con un vehículo a su casa, llamó a Yerko y él le dijo que ese vehículo no era de él y no aceptó dejarlo afuera de su casa.

Conforme a lo que se ha venido exponiendo, a juicio del tribunal, los asertos de Juan Navarrete Vásquez, en relación con la evidencia exhibida, dan cuenta de su participación como brazo operativo de la asociación, en contacto directo con Yerko y realizando importantes tareas como reclutar testaferros y llevarlos a reinscribir vehículos, guardar vehículos robados, mostrar y vender estos vehículos, en conjunto con otros miembros, tales como, Albano Silva, Tatiana Arana, Freddy Miranda y el tal Luxín que no fue identificado en la investigación; sin olvidar que también contribuía en las labores de constitución de sociedades y tal como quedará de manifiesto con las evidencias que se analizarán más adelante, recaudaba y administraba los dineros obtenidos del negocio ilícito según las directrices de Yerko Silva.

Se reprodujeron los audios WA0102 de 21.02.2020, WA0121, WA0073 y WA0074 de 22.02.2020, WA0020, WA0041, WA0043, WA0134 y WA0135 de 23.03.2020, WA0107, WA0111, WA0112, 113 y 114, WA0115 y 116, WA0120, WA0123, 125, 127, 135, 137, 139, 140, 142, 143, 144 y 145 todos de 24.02.2020 y se pudo escuchar el siguiente diálogo:

Juan: “Llamó un caballero recién que es de Arauco, 18 Lukas ofreció es jubilado de la municipalidad, quiere pagar al contado si se la podemos llevar porque a él se le complica, ahí mismo está la municipalidad y

el banco". Yerko: "Llamó el viejo de la blanca de Arauco, no vaya a ser el mismo que llamó en gran avenida y le encontró detalles, también dijo que si se le podía llevar". "Confirmado el lunes, mañana hay que pedirle la dirección". "Le dijo que se juntaran en la municipalidad de Arauco, está el Registro Civil y el banco para hacer todo al tiro". "Trata de ir a buscarla temprano, saca todo no más y yo le digo..." "Recién se la envié, sacó el padrón en el registro civil y el permiso pagado hasta 2021". Juan: "Lo mandé a cortarse el pelo y se hizo la barba le pidió \$15.000, mándame la cuenta". "Perdieron la factura, la imprimí y saqué la tesorería al tiro". Yerko: "Una copia de la factura y la documentación necesaria nada más". "Que tengan buen viaje no más, mañana en la mañana te estoy hablando a 1ª hora que salga todo bien". Juan: "Mande patrón, mande patrón". Yerko: "¿Dónde están, llegaron ya?". Juan: "Estoy llegando, a 10 minutos de llegar a Arauco". Yerko: Bakan, bakan. Juan: Si si Luxín llamó, lo dejé solo, estoy buscando el Banco Santander para mandarte la plata. Yerko: "Bakan me mandai la plata a la cuenta del Jesús y te dejai lo que dije ayer". "Había que pedir permiso, yo no hablo por hablar". Te pidió permiso... Juan: Hay que buscarle solución... hay que buscar un permiso... Voy a hablar con el caballero para ver qué onda... Hiciste la iniciación con este cabro igual, eso no me lo habías dicho. Yerko: No porque ese loco ya tenía giro. Pregúntale tú mismo al loco desde cuando tenía giro, yo no se lo hice. Juan: Por qué no pudimos transferírsela, si lo hicimos como persona natural y no como empresa. Yerko: Porque al ser minibús se ocupan como transporte, hay una ley que hay que avisar al SII para poder vender un vehículo, como el loco tenía giro quedó agarrado al giro de él. Juan: Ahora estamos claros, para vender la otra blanca hay que hacer el papeleo al tiro. Yerko: Por eso al meter el rut arroja si tiene giro y la dirección. Y si no le pide una dirección particular. "No si la otra blanca es del guatón, si tu querís venderla yo no me meto".

El acusado refirió que en estos audios conversaba con Yerko Silva, en esa oportunidad él tomó contacto con la persona interesada en comprar el vehículo, porque Yerko no tenía el teléfono, después Yerko habló con el caballero de Arauco y él viajó en el auto del Luxín a Arauco y ellos viajaron con el goma para vender el furgón.

Manifestó que "Gualata" era el goma, no recordaba su nombre porque lo trajo Tatiana y Freddy, pero sí él le pasó los \$15.000 y le dijo a Yerko que lo tenía listo.

En el otro medio de prueba 115, se incorporó la fotografía del reverso y anverso de la cédula de identidad de Leónidas Sebastián Fernández Concha; y el acusado lo reconoció como la persona llamada "Gualata", quien tenía que cortarse el pelo y hacerse la barba para verse más presentable.

WA0043 del 23.02.2020: "yo voy con el Luxín en su auto, porque le pasé el otro al guatón y él me pasó la porscheta".

Sobre esto, el acusado señaló que era imposible que fuera en una porscheta, que se está malinterpretando el audio porque él iba solo y el Luxín iba manejando adelante.

Además, en el audio le pidió a Yerko que le mandara la cuenta y toda la documentación necesaria, señalando que no recordaba si era la cuenta para transferir la plata y la documentación del vehículo. Luxín tenía los documentos y los había extraviado, por eso, fue a imprimir la factura y la tesorería al tiro, al respecto, explicó que se los mandaron en PDF y él los imprimió en un ciber.

Explicó que, en ese momento, le dijo “mande patrón” porque estaba viendo una serie de Pablo Escobar con su hijo y así se trataban porque les causaba risa.

Además, indicó que Yerko se refería a Jesús Gacitúa, quien era su amigo pero que no sabía nada respecto de la cuenta a su nombre; y que el gualata y Luxín no pudieron vender ese vehículo porque había que pedir un permiso, y cuando dijo “iniciación”, se refería a la iniciación de actividades

Por último, sostuvo que no tenía ningún manejo con el tema de la iniciación de actividades y giro y que solamente repitió lo que le dijo el Luxín.

En los audios WA0155, WA0156, WA0162, WA01666 de la misma fecha 24.02.2020, continuó la conversación sobre el mismo tema, en los siguientes términos: “Oye hay que hacer ese papelo, pero hay que hacerlo en Santiago porque el dueño del auto es contribuyente de Santiago”. “Así que me devuelvo y lo fome es que no nos alcanza la plata, habla tú con Juanito”. Yerko: “Dile al Luxín que llame al viejo y le diga que no pudieron hacer el trámite porque era contribuyente de Santiago y la única forma es hacerlo en notaría, la notaría puede pedir el servicio en línea, si no, en Santiago pero que la vaya a buscar a Santiago”. “Para mí son 600 mil, por eso te estoy diciendo que llame al viejo y que le explique lo mismo que te dije”.

El acusado explicó que en el 1er audio Yerko hablaba con Luxín, luego habló con él, pero este no dijo que tenía que hablar en persona con el caballero, solamente habló un día con él por teléfono, después Luxín habló con él, y no pudieron hacer el trámite y se devolvieron.

En el contexto de los audios anteriores, se incorporó como otro medio de prueba 209, el video WA0015, que correspondía a un furgón Hyundai H1 de color blanco patente LPHC.22, y al respecto, Juan Navarrete lo reconoció como el vehículo que intentaron vender en Arauco.

También se introdujo prueba documental respecto del minibús Hyundai H1, de color blanco, patente LPHC.22, concretamente, el **documento 766**, solicitud de primera inscripción de fecha 4 de febrero de 2020, adquirente y solicitante **Leónidas Sebastián Hernández Concha**; factura electrónica N°51 de fecha 3 de febrero de 2020, de Comercial Gildemeister SPA, a nombre de Leónidas Sebastián Hernández Concha, por un total de \$22.610.000; comprobante de transacción Tesorería, formulario 88, fecha 4 de febrero de 2020, total cero pesos; y el **documento 426**, certificado de inscripción y anotaciones vigentes, propietario Bruno Pedro Kevric Tavonatti, fecha de adquisición 17 de marzo de 2020, propietario anterior Leónidas Sebastián Hernández Concha.

En los audios WA0085, 0097, 0103 y 0104 de 23.02.2020, se incorporó lo siguiente: “Me llamó una vieja recién del sur, se escuchaba cortado, le interesó la camioneta, que tenía efectivo y viene mañana”. Yerko: “Hermano ofertó 17”. “Yo le dije que no 18.200 o tu sabís”. “No, vamos a buscar la plata si tengo el medio invento que dice ganar plata, vamos a buscarla, maneja, paqueate un rato, le dije al guatón que había ofertado 17”.

El acusado indicó que estas son conversaciones que tenía con Yerko Silva, lo había llamado una Sra. por el mismo furgón H1 y la dejó hablando con Yerko del negocio, pero no recordaba y dijo que era imposible que él la haya ofertado. Agregó que para ir a Arauco, le pasaron como \$600.000, que le hizo llegar a su casa, pero no sabía de dónde sacaba la plata, cree que de los vehículos (se estaba refiriendo a Yerko Silva).

Se reprodujeron los audios WA0146, 0147 y 0001 de 24.02.2020, WA0051, 0067 y 0099 de 25.02.2020, en que se escuchó: “Yo mañana voy a sacar las otras placas por mano, para esos cabros, porque la de nosotros ya las saqué”.

El acusado indicó que era una factura para un compañero de celda de Yerko en Puerto Montt, consiguió el goma, hicieron todo el paquete completo, es decir, le había vendido las facturas y los documentos, con las placas. Añadió que Marcos era el cuñado de Jesús Gacitúa y que la Sportage era para el amigo de Yerko, estaba guardada en los departamentos donde vivía Tatiana, que era un condominio.

Explicó que ya había sacado las placas patentes para un auto de Yerko y eran dos autos distintos, aclarando que Freddy fue con el goma a sacar las patentes, porque él los esperaba afuera, los que entraban siempre eran Tatiana y Freddy.

“Y el sportage ¿cuándo?”. “Oye hermano, porque esa tiene las patentes grabadas en todos lados, que la vengán a buscar los hueones, para que le den piso, porque la van a vender ellos”.

Señaló que él no entregaba vehículos, los hacían solamente Tatiana y Freddy, además, cree que esa camioneta no la entregaron y se perdió.

“Igual que después ya me van a pedir los certificados de inscripción de la Tucson de nosotros...” Con respecto a este audio, el acusado dijo que no recordaba por qué Yerko hablaba de “nosotros” porque nunca los autos fueron de los dos.

Refirió que la Sportage era para los amigos de Yerko que iba para el sur, recordó que una vez Yerko le comentó cómo hacerlo, pero no sabe cómo revisar en el Registro Civil si estaba inscrita y es probable que le haya mandado un certificado de inscripción de la Tucson.

“Nunca la he vendido esa, hermano. Nunca la he vendido, te mentiría. Siempre he vendido Mazda, Kia, Nissan, Toyota. Rápido, ¿cachai? Pero la que yo nunca he vendido es esa, hermano”.

“Para eso hay que tener las dos copias de llave y mandé la foto y no la tienen, si vai a 10 de julio, en Copiapó 616, el number one, habla con César dile que soy amigo mío él me hace todas las llaves de los vehículos”.

El acusado contó que Aimel es “el enano”, lo vio dos veces, una vez que hizo los números de la H1 y después cuando le fue a dejar una plata a su casa. Además, explicó que él tenía su trabajo y que Yerko le pedía un favor cuando pudiese, no que fuese de inmediato.

Continuando con la incorporación de los otros medios de prueba 208, se reprodujeron los siguientes audios:

WA0043 de 21.02.2020: “No tengo más espacio y no quiero que se pierdan más weas”.

El acusado dijo que se refería a los autos y que se perdió una kia sportage y que él guardó un Hyundai Tucson.

WA0045, 0051, 0052, 0053, 0059, 0076, 0138 todos de 21.02.2020: “Ya estoy llegando al registro, de Quinta Normal...” “Voy a ir a la sucursal de Cerro Navia, al tiro, porque el de Lo Pardo se lo pitieron”. “Ya hermano, voy a ir al tiro, para ver si están sacando placa, para ver si tienen placa o no”. “En 5 minutos está el tema de Lo Prado, 600 a la cuenta que me mandaste”. “Estoy en Cerro Navia y rebotaron... voy a ir a la central de Manuel Rodríguez”. “Yo fui a Conchalí y no inscribí nada, de hecho fui a Renca y Cerro Navia y no había sistema y después me fui a Conchalí, estaba repleto salí a las 14:30 y llegué a la 12:30 andaba con el Luxín”.

El encausado expresó que esos son audios que le envió a Yerko Silva y explicó que iba a las distintas oficinas del Registro Civil a acompañar a Tatiana, Freddy o Luxín, con los gomas, si no se podía hacer el trámite iban a otro. (Los mensajes que mandaba en estos audios eran en singular, lo que demuestra que andaba solo haciendo este tipo de trámite y no únicamente acompañando a otros miembros de la organización).

Cambiando de tema, señaló que en una oportunidad le depositó a Yerko, cuando fue a la casa de Aimel a buscar un millón de pesos, le depositó \$600.000 y los 400 le dijo que los dejara para gastos, como caja, para que les pasara a ellos por los favores que le hacían a Yerko, no para que les pagara (No obstante su propia apreciación, se está refiriendo claramente a las instrucciones que le daba Yerko acerca de la distribución del dinero obtenido con el negocio ilícito y al pago a los colaboradores) .

Con respecto al vehículo Fiat Argo, se le exhibió como **otros medios de prueba 128 y 129 (imágenes del celular de Yerko)**, fotografías de un Fiat Argo de color plomo, patente LPHC.30, indicando el encausado que era el vehículo que le pidió Yerko que guardara y que tuvo afuera de su casa, llegó chocado,

porque lo tenía el Luxín y él lo usaba. Reconoció que lo vendió a dos hombres pero no recordaba sus nombres.

La fiscal hizo presente que las personas que lo compraron, un padre con su hijo, José Sánchez Marinkovich y Rodrigo Sánchez Elorza, lo reconocieron y dijeron que se los vendió en \$2.800.000. Pero el acusado dijo que lo vendió en \$1.800.000, y que los \$2.800.000 puede que sea el precio publicado. Acotó que sacó \$300.000 para que Freddy le pagara al goma y de lo que quedó la mitad era para él y la otra para Yerko, y él sabía que era un vehículo ilícito.

La fotografía de la cédula de identidad de Jonathan Washington Pérez Pérez se incorporó como **otro medio de prueba 119**, el que fue reconocido por el acusado como el goma a nombre del cual se reinscribió el Fiat Argo, y señaló que él envió la foto a Yerko, pero este fue reclutado por Freddy, porque era un conocido de él. (Esto último fue contradicho por la inspectora Raquel Forero al incorporar el testimonio de **Jonathan Washington Pérez Pérez**, quien declaró que estaba en situación de calle y lo contactó un sujeto de nombre Juan que vivía en la comuna de Cerro Navia, quien le ofreció dinero por inscribir vehículos y él accedió, entonces fue dos veces acompañado por Juan, describiendo las características físicas de este que coinciden con el acusado).

Ahora bien, la fiscal hizo presente que Jonathan Pérez Pérez declaró durante la investigación que con el único que tuvo contacto fue con él, que en la notaría entró con él y a él le entregó el dinero. Ante lo cual, el acusado aclaró que no fue así, que había tres personas, Freddy, Jonathan y él, y que solo iba acompañándolos

Por último, la fiscal lo confrontó señalando que las víctimas estafadas declararon que solamente estaba él con el dueño del vehículo; pero el acusado insistió que también andaba Freddy, a quien le pasó \$300.000 para que le pagara al goma.

Se incorporaron los documentos referidos al Fiat Argo patente LPHC.30:

Documento 790, correspondiente a la solicitud de primera inscripción de fecha 07.02.2020, solicitante Marcos Supanta Aguilera y adquirente Jonathan Pérez Pérez; copia de factura electrónica N° 62 de la empresa C. HERNANDEZ SPA, de fecha 03.02.2020; formulario 88 de Tesorería General de la República a nombre de Jonathan Pérez Pérez, por \$108.893 y comprobante de pago Banco Chile de 07.02.2020; **documento 419**, certificado de inscripción y anotaciones vigentes en el R.V.M, del vehículo patente LPHC.30, Fiat Argo.

Además, se exhibió como otro medio de prueba 118, un certificado de homologación que corresponde a un vehículo de las mismas características, patente LFHJ-89, que es la patente original, contenida en el teléfono celular de Yerko. Al respecto el acusado negó haberle mandado a Yerko dicha fotografía.

Por último, indicó que era probable que Jonathan Pérez Pérez haya inscrito a su nombre otros autos más, pero a él no le consta.

Relacionado con lo anterior, se incorporó otros medios de prueba 117, imagen de solicitud de primera inscripción del vehículo patente **LPHC.23** solicitante Jonathan Washington Pérez Pérez, factura de Comercial Gildemeister SPA, contenida en la carpeta de imágenes del teléfono celular de Yerko Silva Toro. El **documento 765** también acompañado corresponde a la solicitud de primera inscripción de fecha 04.02.2020 del referido vehículo, solicitante Jonathan Pérez Pérez; copia de factura electrónica N° 52 Comercial Gildemeister SPA, a nombre de David Aguilera Villarroel, de fecha 03.02.2020, Hyundai H1 color blanco; y el comprobante de transacción TGR, formulario 88 de 04.02.2020, por la suma de cero. Por último, el **documento 418**, certificado de inscripción y anotaciones vigentes del minibús año 2020, Hyundai H1, blanco, patente LPHC.23, propietario David Alejandro Aguilera Villarroel.

Con respecto a otro vehículo vinculado con Jonathan Pérez Pérez, se incorporaron dos fotografías de un vehículo Hyundai Tucson, de color gris, patente **LPHC.69 como otros medios de prueba 632**; y sobre estas, Navarrete reconoció que tramitó los papeles para una Tucson del mismo color y le remitió la imagen de la solicitud de primera inscripción a Yerko después de obtenida, pero no puede asegurar que se trata de la misma,

Se introdujeron los documentos de la Hyundai Tucson patente LPHC.69: imagen de solicitud de primera inscripción, St. Wg. Hyundai Tucson, color plata patente LPHC.69, como **OMP 24**. Al respecto, el acusado reconoció la imagen como la que envió a Yerko, agregando que también le mandó la factura de Comercial Gildemeister SPA N° 108, de 3 de febrero de 2020, a nombre de Jonathan Washington Pérez Pérez, valor total \$ 16.685.000. El **documento 769** acompañado, corresponde a la solicitud de primera inscripción de 21.02.2020; copia de factura electrónica N° 108 de Comercial Gildemeister SPA; formulario 88 de Tesorería General de la República fecha 20.02.2020, por \$186.461; y comprobante del Banco de Chile de 21.02.2020. El **documento 421**, certificado de inscripción y anotaciones vigentes del vehículo Hyundai Tucson, color plata, patente LPHC.69.

En relación con el vehículo que se fue a vender a La Ligua, se incorporaron **otros medios de prueba 542**, correspondiente a una fotografía del vehículo Hyundai Tucson, de color blanco, patente **LJPX.58**. Al respecto, señaló que no recordaba haber visto ese vehículo porque él no fue a vender el vehículo a La Ligua, sólo fue a buscar a Albano y a Marcos cuando ya estaban listos.

La Fiscal lo contrastó con la declaración de las víctimas estafadas, quienes señalaron que Juan Navarrete había recibido el dinero de ese vehículo; sin embargo, el acusado insistió en que Albano y Marcos se contactaron con las víctimas, luego recibieron la plata dentro del Banco y Albano se la pasó cuando estaban almorzando, porque Yerko le había dicho que sacara \$300.000 para Marcos y para él y el resto se lo

llevara a su tío Kiko. (De igual modo reconoció que viajó a La Ligua acatando las instrucciones de Yerko para recibir el dinero de la venta del vehículo y distribuirla según sus directrices)

En el contexto del vehículo anterior, se incorporó el documento 778, correspondiente a la solicitud de primera inscripción de fecha 27.11.2019, Station Wagon, marca Hyundai modelo Tucson TL 2.0, CRDI MT, color blanco, patente **LJPX.58**, adquirente y solicitante **Marcos Fernando Supanta Aguilera**; copia de factura electrónica N° 22 de Automotriz Guillermo Morales SPA, fecha 23.10.2019, por el total de \$18.590.000; formulario 88 de Tesorería General de la República de 19.11.2019, por \$437.184; y comprobante de pago Serviestado de fecha 26.11.2019. Además, el **documento 425**, certificado de inscripción y anotaciones vigentes, datos del propietario, Víctor Hugo Jiménez Hugueño y Esther del Carmen Talamilla Rivera, fecha de adquisición 16.12.2019 y datos del propietario anterior Marcos Fernando Supanta Aguilera.

El testimonio de **Marcos Fernando Supanta Aguilera**, fue incorporado en las declaraciones de los oficiales de caso Daniel La Regla y Raquel Forero, quienes expusieron que Supanta conoció a Juan Navarrete a través de Jesús Gacitúa, el que le pidió hacer varias inscripciones de vehículos de empresas que él tenía y posteriormente, cuando tenía más confianza con Juan, éste le contó que todos los autos que se estaban inscribiendo en las empresas eran vehículos robados. Añadió que dependiendo del avalúo del auto, se determinaba lo que Juan le pagaba, que era entre \$20.000 y \$30.000 y si participaba en la venta recibía un monto más alto. Por último, señaló que **viajó a La Ligua con Juan y Albano a exhibir (vender) un vehículo** y puntualizó que inscribió entre cuatro o cinco, en su mayoría, Hyundai Tucson e incluso viajó a Puerto Montt por el día a vender un vehículo.

En lo atinente al vehículo Nissan Qashqai, el acusado mencionó que Yerko le dijo que la tenía “lista” pero no tenía donde guardarla, y le hizo el favor de dejarla afuera de su casa, luego, le pidió que la mostrara para la venta, pero él le dijo que no. Entonces, coincidió que su amigo David Millalén, le había pedido un vehículo porque había chocado, por lo que, se comunicó con Yerko para decirle que David podía mostrar el vehículo porque tenía que comprar unos repuestos, sin saber este la procedencia del vehículo.

Relató que el día 23 de enero de 2020, viajaba a Puerto Montt en avión y ese mismo día detuvieron a David Millalén. A Puerto Montt fue a trabajar y no recordaba si ese mismo día fue a la visita de Yerko.

Se le exhibió el OMP 182, que es el informe de Gendarmería de Chile, de visitas que han ingresado a ver al interno Yerko Silva Toro, en específico, el N°14 del listado donde figura Juan Navarrete Vásquez, el día 23 de enero de 2020, con ingreso a las 10:54:55 y salida a las 11:31:22, del Centro Penitenciario de Puerto Montt.

El acusado al respecto dijo en Puerto Montt se enteró de que habían detenido a David, y se lo comentó a Yerko, no se lo informó, indicando que la diferencia es que informar es como de trabajo, y él solo le hacía favores pagados a Yerko.

En el audio WA0305 incorporado en OMP 208 de 23 de enero de 2020, se escuchó, en síntesis: “No sabís nada lo que me pasó hoy día, yo andaba en visita porque vino mi compañero con el que trabajo a verme y mandó al primo a mostrar la camioneta a las 12 y se atrasó para las 13. Salgo de la visita a las 14:30, me comunico al tiro con mi compañero, le digo hermano ¿cómo le fue a tu primo? Me dice no me contesta, no me contesta, no me contesta. Cuando contestó estaba en la PDI en cana. Se me tiró la camioneta”.

Navarrete reconoció que él era el compañero que estaba en la visita, a quien se refería Yerko, y que David no es su primo, sino que trabajaba con su papá y vivía muy cerca de su casa, por eso, lo conocía desde hace mucho tiempo.

Pasando a otra temática, el encausado señaló que fue detenido por esta causa el 16 de octubre de 2020, en su domicilio de Tierra del Fuego N°2050 de Cerro Navia, y la policía se llevó varias cosas que tenía, como una agenda negra, un cuaderno y documentación de vehículos.

Se le exhibieron fotografías de su domicilio en OMP 63, y al respecto el acusado en la imagen N° 8, reconoció su casa, así como en la N° 9 y N° 10, es su habitación; la imagen N° 11 es un cuaderno suyo que estaba dentro de un cajón, la N° 12 es un cuaderno sobre un tocador, la N° 13 un papel blanco y la N° 14 una carpeta de la Notaría Baeza, al parecer un poder de un auto que había comprado a un amigo, dijo que el cuaderno es marca Colón y tiene la imagen de un tren. Imagen N°15, es un certificado de primera inscripción y un seguro obligatorio, se los dejó Tatiana para que los guardara y correspondían a un vehículo de los que blanqueaban. Fotografía N°16, es un seguro y una revisión técnica, al parecer ese seguro es de su auto. Fotografía N°17, es un certificado de anotaciones que también estaba en la carpeta. Imagen N°18 es un cuaderno color negro que era suyo y la imagen N°19 es un cuaderno negro Dodge que es suyo.

Al mismo tiempo, se incorporaron como evidencia material 59, las especies que aparecían en las imágenes exhibidas y descritas por el imputado.

Respecto de la carpeta de la Notaría Baeza con diversos documentos, el acusado sostuvo tenía un permiso de circulación y seguro obligatorio del vehículo Audi modelo A6TT, color blanco glaciar, patente JCFY.38, que él compró, era de su propiedad; un certificado de inscripción y anotaciones vigentes del mismo vehículo a nombre de Javier Parraguez, explicando que no estaba a su nombre porque no alcanzó a traspasarlo pues no terminó de pagarlo y lo devolvió y que Javier Parraguez es su amigo; un certificado de revisión técnica que estaba vigente, pero él ya había devuelto el auto a esa fecha, y se le olvidó devolver la documentación. También estaba el padrón, una consulta de revisión técnica del mismo vehículo, una carta poder sobre el vehículo que le hizo Javier Parraguez, para que solicitara ante el Juzgado de Policía Local correspondiente la devolución del vehículo. El acusado explicó que el poder se lo hizo cuando le quitaron el vehículo porque andaba con el permiso de circulación atrasado. Además, había un poder para administrar el mismo vehículo que le entregó Javier Parraguez, pudiendo efectuar cualquier diligencia ante diversos servicios, vender y ceder el vehículo, retirarlo de donde se encuentre retenido, pagar multas, pagar y solicitar TAG ante cualquier concesionaria, entre otras.

Comentó que Javier Parraguez también es amigo de Albano Silva Toro, que fue quien le ofreció el vehículo porque estaba chocado.

Con el testimonio de la inspectora Raquel Forero, el tribunal se pudo imponer que **Javier Parraguez Herrera**, dio cuenta de su intervención en un negocio respecto del vehículo distinto a la reinscripción fraudulenta del mismo, en la medida que señaló que conocía a Albano desde que era niño, por lo que mantenían una relación de amistad y que mientras se encontraba jugando en un club de fútbol del sur, Albano lo contactó y le comentó que iba a remates de vehículos y que había encontrado un automóvil marca Audi del año 2017, por un precio de \$8.000.000 aproximadamente, entonces, le ofreció realizar un negocio con ese vehículo y obtener ganancias con su venta.

Fue así como compraron el automóvil y él aportó \$6.000.000, mientras que Albano Silva aportó \$1.800.000, quedando a nombre del testigo. Contó que Albano supuestamente enviaría el vehículo a un taller para realizarle arreglos para venderlo, pero después no tuvo noticias del vehículo y Albano, en reiteradas ocasiones, cambió su número de teléfono, no pudiendo contactarlo para realizar la venta del automóvil. Dijo que pasado un tiempo lo contactó un amigo que tenían en común con Albano de nombre Pedro, quien le indicó que concurriera a una Notaría para firmar los documentos de venta del automóvil. Agregó que debido a la alta deuda en tag que tenía el vehículo, quería deshacerse pronto de este, por lo que, concurreó a la Notaría realizando la transferencia del automóvil a nombre de Carlos Siegel, a quien no conocía, haciendo presente que en esa oportunidad el que mantenía y usaba el vehículo era Juan Navarrete Vásquez. Además, desconoció su firma en el poder notarial amplio que se le exhibió, por cuanto señaló que sólo otorgó un poder notarial a Albano para retirar las placas patentes del vehículo.

El tribunal advirtió que el automóvil en comento no fue recuperado en la presente investigación ni se formularon cargos a su respecto, por algún delito en particular en contra de Juan Navarrete o Albano Silva, desconociéndose el destino de dicho vehículo, por lo que, no formando parte de la controversia no será considerado en lo sucesivo como objeto de análisis probatorio ni jurisdiccional.

Respecto de los demás documentos hallados en su domicilio, se exhibieron un formulario 88, una factura N°166, de 28 de agosto de 2020, de Comercial Portillo SPA, a nombre de **John Araya Jara**, vehículo Hyundai Tucson, año 2020, por \$16.660.000. Oficina Las Condes del Registro Civil, patente **LXFS-20** y la solicitud de primera inscripción, solicitante John Araya Jara.

Indicó el acusado que estos documentos se los entregó Tatiana el mismo día que la acompañó al Registro Civil con el joven John Araya, a este le pagó Tatiana \$50.000 con la plata que le había pasado Yerko (Navarrete una vez más reconoció que él guardaba el dinero de la caja chica y hacía los pagos a los testaferros).

En este caso, de igual modo, el tribunal constató que el automóvil inscrito patente LXFS.20, al que se referían los documentos exhibidos, no fue encontrado durante la investigación, ignorándose incluso su existencia material.

En relación con el cuaderno y libreta incautados, se le exhibió la siguiente evidencia:

Cuaderno marca Colón con la imagen de un tren, en que constaban una serie de cuentas de gastos y utilidades de vehículos blanqueados y vendidos.

Así en una de sus hojas había un listado con diversos montos, \$12.000.000 más \$700.0000, más \$4.000.000, luego se indica \$230.000 inscripción, \$70.000 impuesto, \$100.000 goma, \$160.000 pensión, \$50.000 vidrios, \$100.000 depósito, \$260.000 permiso, \$360.000 llaves, \$60.000 lavado y abajo dice \$1.390.000 menos \$1.300.000 menos \$1.000.000 menos \$500.000. Al respecto, explicó que correspondía a los gastos de los vehículos blanqueados. Indicó que eran de un vehículo que vendió Tatiana, y Yerko le pidió que le hiciera el favor de sacar la cuenta, de lo que había costado dejarlo listo. Los \$12.000.000 era el precio en que se vendió el auto. Los \$700.000 fueron de un favor que le pidió Yerko de ir a buscar una plata donde Aimel Gavilán y los \$4.000.000 eran por unas facturas que Yerko le pidió que fuera a buscar. De eso fue un \$1.000.000 para Tatiana y \$500.000 para Freddy. El total de gastos fue \$1.390.000. Lo que quedó se lo llevó al tío Kiko, porque él no recibió dinero, ya que a veces Yerko le pasaba \$50.000 u \$80.000 por el traslado y para la bencina.

Indicó saber que las facturas eran para vender vehículos y que Aimel se encargaba de la modificación de vehículos.

En la hoja siguiente se indica \$10.700.000 más \$600.000 lo que da un total de \$11.300.000, menos \$320.000 los logos, menos \$320.000 neta, menos \$50.000 depósito, menos \$200.000 depósito, menos \$150.000 omo, da un total de \$1.290.000 y se le resta a \$11.300.000, dando un resultado de \$10.060.000. El acusado explicó que esto también fue de un vehículo de “ellos” y que llegó Tatiana con el dinero, acotando que en este vehículo no tiene nada que ver Yerko, este lo hizo el Luxín, en esta ocasión conoció a Franco, porque Tatiana le dijo que andaba en la playa y si le podía recibir una homologación y Franco le entregó una hojita y, además, le pidió que anotara esos gastos para que Freddy viera que ella era transparente. Aseguró que en esta venta tampoco recibió dinero porque fue un favor.

Sostuvo que con Tatiana no tenía una relación estrecha, que la vio dos o tres veces.

En la hoja siguiente hay anotaciones que indicó no haber hecho él: \$8.900.000 más \$1.500.000 más \$750.000 más \$500.000, más \$500.000, da \$11.150.000. Luego se indica \$300.000 llaves, \$200.000 Mauri, \$160.000 Mauri, \$150.000 bencina, \$100.000 Jesús, \$50.000 depósito, \$100.000 depósito, \$320.000 tela, \$250.000 flete, \$200.000 telas, \$70.000 máquina, \$100.000 gastos neta, \$100.000 encomienda, total \$2.100.000, menos \$1.000.000 Fran, menos \$300.000 flete ida, menos \$50.000 depósito, queda \$8.650.000 más \$500.000.

El acusado dijo que estas anotaciones dicen relación con vehículos, pero reiteró que no es su letra, y que a Yerko le comentó que “ellos” (Tatiana y Freddy) vendían aparte y Yerko le dijo que Tatiana hacía lo que quería.

Señaló también que en otra hoja está lo del Fiat Argo que fue a mostrar, pero que no vendieron. Aparecía \$7.000.000 más \$500.000, más \$600.000, eso fue en lo que lo iban a vender, pero no lo vendieron. Luego se lee \$500.000, Fran; \$1.200.000, lata; \$70.000, placa pego; \$100.000 goma neto Peugeot; \$50.000

espacio pego, \$120.000 omo pego, \$220.000 impuesto Tucson, \$70.000 placa, \$220.000 permiso, \$10.000 chofer, \$100.000 goma, \$50.000 Marco. Total \$2.710.000, igual a \$4.900.000.

Aseveró que estos valores se los dio el Luxín para que le dijera a Yerko y no vendieron el automóvil porque antes de ir a mostrarlo se chocó. Acotó que lo iban a vender en \$8.100.000, pero Tatiana y Luxín le iban a decir a Yerko que lo habían vendido en \$7.000.000, a lo que él respondió que no se iba a meter en eso.

Respecto del “impuesto Tucson”, señaló que correspondía a otro vehículo, sin recordar si fue uno que vendió Marcos Supanta. En ese momento estaba Tatiana, Luxín y él sentados en el comedor de su casa y todas las anotaciones que leyó no se hicieron un mismo día, sino que en el lapso de una semana.

Además, se incorporó una libreta negra con la leyenda Dodge en la tapa, la cual fue reconocida por el acusado señalando que la tenía en su domicilio. En una de sus páginas dice “Arnaldo” \$2.000.000 y abajo \$1.500.000, luego \$1.315.000 y abajo \$660.000; Marco \$210.000; Albano \$624.000 dividido por 2 igual \$312.000.

El acusado señaló que esto último fue por salmón que le trajo a Albano, en el año 2017 o 2018 y Marco no es Marcos Supanta, es un maestro del trabajo al que se le debía dinero.

En otra hoja dice \$540.000 menos \$20.000, \$70.000 inscripción, \$100.000 Walata, igual \$350.000, indicando que es de un vehículo, al parecer corresponde al vehículo del audio en que dijo que le pasó \$15.000 para que se hiciera la barba, es la persona que fue a Arauco con el Luxín y este le pagó \$100.000 por inscribirlo. Dijo que lo anotó a solicitud de Yerko porque los chiquillos eran muy desordenados.

En la hoja siguiente habían otros montos, \$1.400.000 más \$2.000.000 más \$540.000, más \$400.000, más \$20.000 pa la inscripción, más \$30.000 depósito, más \$260.000 Fran, más \$210.000 pasajes, más \$30.000 Cripi, más \$60.000 omoluxín, más \$280.000 Sportage, más \$500.000 permiso grande; más \$100.000 pal goma, más \$20.000 del repuesto, más \$70.000 inscripción grande.

Refirió el acusado sobre dichos valores, que es la información de la Hyundai H1 y también anotó \$280.000 de una Sportage respecto a la que Yerko le pidió un favor. Dijo que “Fran” no era la pareja de Yerko y no recordó quién era ni tampoco a qué pasajes se refería.

Aseguró que él solo anotaba lo que le decían y la información se la entregaba Yerko, Luxín y Tatiana porque ellos llevaban las cuentas.

En otra hoja dice Yerko \$4.900.000, indicando que debe ser el total que le quedó, juntó la plata del Fiat Argo que vendieron con otros saldos que habían quedado y se lo llevó al tío de Yerko. Precisó que le llevó dinero en efectivo al tío de Yerko dos veces y en una le llevó como \$5.000.000.

En otra hoja dice Albano \$10.000.000, señalando el acusado que puede ser por la venta de la Hyundai Tucson, porque esa fue la única vez que Albano le pasó efectivo, en un bolso café como de pan, y se la entregó al tío Kiko, después se enteró por Yerko que le había llevado \$10.000.000 a su tío y que sacara \$300.000 para él.

El acusado manifestó que Yerko le pedía que anotara esas cuentas y después le mandaba fotos de esas sumas para que él las pudiera ver, entonces, Yerko, Tatiana, Freddy, Luxín, le decían lo que gastaban y él lo anotaba. Indicó que esto era esporádico, y lo hacía porque Yerko era su amigo y le pedía favores.

Para corroboración de lo dicho por Juan Navarrete, se incorporó **OMP 20**, que es una imagen de una de las hoja de la libreta negra con el logo Dodge, que le envió a Yerko.

En otro asunto, Navarrete insistió que solamente le hacía “favores pagados” a Yerko Silva y no hizo pagos para constituir empresas ni tampoco llevó a personas para que constituyeran empresas.

Sobre este tópico, la Fiscalía incorporó la prueba documental 837.1, que es un informe de recopilación de antecedentes del SII, informe 05 ARA-03 de la Subdirección Jurídica del Departamento de Delitos Tributarios del SII, de fecha 12 de julio de 2021, suscrito por Carla Vildósola Godoy y Carlos Moreno Solorza.

Concretamente, se acompañó la siguiente información:

1.- Contribuyente **Juan Francisco Gabriel Navarrete Vásquez**, sin inicio de actividad; sin domicilio informado; segmento: persona natural; riesgo: bajo intensidad de tratamiento preferente.

2.- Contribuyente **Brunno Fresh SPA, RUT 77.135.192-1, sin inicio de actividades**; representantes legales: Jonathan Andrés Carrión Muñoz; accionista: Jonathan Andrés Carrión Muñoz, (100%); domicilio: Santo Domingo 4535, Quinta Normal; régimen tributario: sin inicio de actividades; riesgo: medio intensidad de tratamiento preferente.

3.- Contribuyente **Gildemeister Motor SPA; RUT 77.135.184-0**; inicio de actividades: 9 de marzo de 2020; representante legal: Jonathan Andrés Carrión Muñoz; accionista: Jonathan Andrés Carrión Muñoz (100%); régimen tributario: Régimen Pro Pyme General (14d) con contabilidad completa; giro: Otras actividades de dotación de recursos humanos; segmento: microempresa; riesgo: medio intensidad de tratamiento preferente.

4.- Contribuyente **Automotriz Soliste SPA; RUT 77.178.321-K**; inicio de actividades: 30 de junio de 2020; domicilio: Morandé N°835, P 5, Of 518, Santiago Centro; régimen tributario: Régimen Pro Pyme General (14d) con contabilidad completa; representante legal: Víctor Manuel Solís Torres; accionista: Víctor Manuel Solís Torres (100%); giro: venta al por menor de vehículos automotores nuevos o usados (incluye compraventa); asesoría y gestión en la compra o venta de pequeñas y medianas empresas; segmento: microempresa; riesgo: medio intensidad de tratamiento preferente.

Se indica que el período auditado es del 1 de enero de 2016 al 31 de julio de 2020, describiendo los documentos tenidos a la vista.

Se señala que se analizó a Juan Francisco Gabriel Navarrete Vásquez RUT N°18.613.986-0 y a tres sociedades cuya constitución se encuentra vinculada con este, análisis luego del cual se concluye que estas fueron constituidas utilizando antecedentes falsos.

Según cartilla del Sistema Integrado de Cumplimiento Tributario de este Servicio (SICT), Juan Navarrete Vásquez es una persona natural chilena, nacida el 06.12.1993, sin inicio de actividades, ni emisión

de documentos tributarios de ningún tipo. Durante los últimos seis años tributarios, ha sido informado como beneficiario de sueldos para los años tributarios 2016 y 2015 con ingresos anuales por \$520.673 y \$323.204 respectivamente. También ha sido informado como beneficiario de intereses por depósitos, por un monto total de \$1.677 para los años tributarios 2015 a 2021. Y no ha presentado declaraciones de impuestos que dé cuenta de otros ingresos.

A continuación, se analizaron las sociedades cuya constitución se encuentra vinculada con Juan Francisco Gabriel Navarrete Vásquez, a través de la emisión de boletas de honorarios expuesta anteriormente.

Contribuyente: **Automotriz Soliste SPA, constituida el 30 de junio de 2020, misma fecha en que realizó inicio de actividades en los giros de “venta al por menor de vehículos automotores nuevos o usados (incluye compraventa)”**. Como domicilio informa la dirección **Morandé N°835, Oficina 518, en la comuna de Santiago Centro**.

Análisis de sus representantes legales y socios: el único accionista y representante legal es el Sr. Víctor Manuel Solís Torres, quien no posee, ni ha tenido, derechos sociales ni acciones en otros contribuyentes distintos de Automotriz Soliste SpA.

Durante los últimos 6 años tributarios el Sr. Víctor Solís Torres no habría recibido ingreso alguno y tampoco presentó declaraciones de impuestos que dieran cuenta de alguna renta. De tal forma, el contribuyente no contaba con ingresos suficientes para la suscripción de acciones que se declara haber efectuado en la escritura de constitución de Automotriz Soliste SpA, de aporte de capital suscrito y pagado por la suma de \$50.000.000 en efectivo a la fecha de la constitución.

Análisis de sus declaraciones de impuestos: La contribuyente no ha presentado declaraciones de impuestos mensuales desde su inicio de actividades y hasta la fecha de emisión del presente informe.

Otras diligencias: Se solicitó documentación al notario Hugo Emilio Cataldo Muñoz RUT N°10.388.185-4, quien autorizó la firma electrónica del Sr. Solís Torres en la escritura de constitución de Automotriz Soliste SpA, obteniéndose como respuesta, que la boleta de honorarios emitida por dicha autorización de firma fue pagada por Juan Francisco Gabriel Navarrete Vásquez RUT N°18.613.986-0, por lo que él habría intervenido en la constitución de la contribuyente. Dentro de la respuesta del notario, se incluyó la boleta de honorarios electrónica N°151696 emitida por el notario Nelson Eulogio Baeza Gutiérrez, una copia de la escritura de constitución de Automotriz Soliste SpA con la firma del representante legal de la contribuyente y una copia parcial de su cédula de identidad.

Mediante notificación N°759 de fecha 14.04.2021, se solicitó antecedentes al contribuyente Andrés Sebastián Nazar Massuh RUT N°13.067.383-k, señalado como dueño del inmueble ubicado en Morandé 835, oficina 518, con quien Automotriz Soliste SpA informó tener un contrato notarial para el uso de dicha dirección como su domicilio tributario. Sin embargo, el Sr. Andrés Nazar indicó que la oficina 518 ubicada en Morandé 835, comuna de Santiago, no ha sido arrendada por Automotriz Soliste SpA ni por Víctor Solís Torres.

Conclusión: De acuerdo con los antecedentes antes expuestos, Automotriz Soliste SpA emitió documentos tributarios electrónicos por operaciones que no tuvieron lugar, ya que no cuenta con facturas electrónicas de proveedor que den cuenta de adquisición de productos para una posterior venta, así como tampoco declaró importaciones a través de la cuales podría haber obtenido mercaderías para una posterior venta.

Respecto de la constitución e inicio de actividades de Automotriz Soliste SpA, se concluye que esta fue efectuada a través de la entrega de información falsa, debido a que Víctor Solís Torres no contaba con ingresos suficientes para la suscripción de acciones por \$50.000.000.- que habría tenido lugar a la fecha de la constitución, y que al menos en el proceso de constitución de la sociedad tuvo participación el Sr. Juan Francisco Gabriel Navarrete Vásquez y, además, en el proceso de inicio de actividades la contribuyente informó un domicilio ficticio, ya que aun cuando la dirección existe, su propietario indicó no tener ningún contrato de arriendo con Automotriz Soliste SpA ni su representante legal, por lo que no cuentan con autorización para utilizar dicho domicilio.

Contribuyente: Gildemeister Motor SPA, RUT 77.135.184-0, constituida con fecha 6 de marzo del año 2020, el domicilio registrado por la contribuyente es calle **Ahumada N°312, oficina 715, en la comuna de Santiago Centro**, Región Metropolitana. Informa como dirección de contacto la casilla electrónica jesusgacitua8@gmail.com.

Desde su constitución, se encuentra informado como único accionista y representante legal el Sr. Jonathan Andrés Carrión Muñoz. Por otra parte, Gildemeister Motor SpA no posee acciones ni derechos sociales en otros contribuyentes. **La contribuyente no presenta autorización de timbraje de documentos ni para la emisión de documentos tributarios electrónicos, debido a que no ha acreditado apropiadamente su domicilio.**

Análisis de sus representantes legales y socios: Jonathan Carrión Muñoz no contaba con ingresos suficientes para la constitución de la sociedad Gildemeister Motor SpA cuyo capital enterado declarado fue de \$30.000.000.

Citación para declaración jurada voluntaria y requerimiento de documentos: al requerir al notario Hugo Emilio Cataldo Muñoz documentación relativa a la constitución de la sociedad Brunno Fresh SpA, él respondió aportando también la escritura de constitución de Gildemeister Motor SpA, con la firma del Sr. Jonathan Carrión Muñoz y la boleta de honorarios electrónica N°141832, emitida por el notario Nelson Eulogio Baeza Gutierrez (de cuya notaría Hugo Cataldo es notario suplente) y a través de la cual se hizo el cobro por la validación de la firma electrónica de Jonathan Carrión Muñoz por la constitución de ambas sociedades. Cabe señalar que la mencionada boleta de honorarios fue emitida por \$16.000.- a nombre del Sr. Juan Francisco Gabriel Navarrete Vásquez RUT N°18.613.986-0, ya que él fue quien pagó por dicho trámite, quedando de manifiesto su intervención en la constitución de ambas sociedades.

Finalmente, se notificó a Carlos Andrés Lobos Pinochet, mediante cédula N°796 de fecha 26.04.2021, consultando por la existencia de un contrato de arriendo con el contribuyente, por el uso de la

dirección ubicada en Ahumada N°312, oficina N°715 en la comuna de Santiago Centro, obteniéndose como respuesta, que no tiene relación comercial ni de ninguna índole con Gildemeister Motor SpA ni con Jonathan Andrés Carrión Muñoz. Lo anterior, ni como persona natural, ni a través de su sociedad Neobiza SpA que es el contribuyente que se encuentra autorizado para el uso de dicha dirección.

Conclusión: Luego de lo antes expuesto, se visualiza que Gildemeister Motor SpA RUT N°77.135.184-0, fue constituida con la intervención del Sr. Juan Francisco Gabriel Navarrete Vásquez y en su escritura de constitución se declaró un capital suscrito y pagado de \$30.000.000, en circunstancias de que su único accionista y representante legal el Sr. Jonathan Andrés Carrión Muñoz no posee ingresos suficientes para haber podido efectuar la suscripción de acciones correspondiente.

Además, la dirección informada a este Servicio al momento del inicio de actividades, el contribuyente informó un domicilio falso debido a que, si bien la dirección existe, el propietario de la misma señaló no mantener ninguna relación con el contribuyente, por lo que este no tiene autorización para la utilización de dicho domicilio.

Contribuyente: Brunno Fresh Spa, RUT 77.135.192-1, constituida el 6 de marzo del año 2020. Registra como domicilio **Santo Domingo N°4535, comuna de Quinta Normal**. Su único accionista y representante legal es Jonathan Andrés Carrión Muñoz.

Análisis de sus representantes legal y accionistas: Jonathan Carrión Muñoz no contaba con ingresos suficientes para la constitución de la sociedad Brunno Fresh SpA cuyo capital enterado declarado fue de \$20.000.000.

Citación para declaración jurada voluntaria y requerimiento de documentación: se requirió documentación relativa a la constitución de la sociedad Brunno Fresh SpA al notario Hugo Emilio Cataldo Muñoz quien figura autorizando la firma electrónica de Jonathan Carrión Muñoz en la escritura de constitución de dicha sociedad. A lo que el notario respondió aportando una copia de la escritura de constitución con la firma del Sr. Jonathan Carrión Muñoz, una copia de la cédula de identidad del contribuyente y la boleta de honorarios electrónica N°141832, emitida por el notario Nelson Eulogio Baeza Gutiérrez (de cuya notaría Hugo Cataldo es notario suplente) y a través de la cual se cobró el servicio de validación de la firma electrónica de Jonathan Carrión Muñoz para la constitución de las sociedades Brunno Fresh SpA y Gildemeister Motor SpA, la que fue emitida por \$16.000.- al Sr. Juan Francisco Gabriel Navarrete Vásquez, debido a que fue él quien efectuó el pago del trámite.

Respecto de la dirección informada a este Servicio, Santo Domingo N°4535 en la comuna de Quinta Normal, esta fue buscada en los sistemas con que cuenta este Servicio, no encontrándose información asociada a dicha dirección.

Conclusión: De acuerdo con la información antes expuesta, se tiene conocimiento que Brunno Fresh SpA RUT N°77.135.192-1 fue constituida con la intervención del Sr. Juan Francisco Gabriel Navarrete Vásquez, indicando en su escritura de constitución que su capital pagado era de \$20.000.000.- en circunstancias de que su único dueño y representante legal el Sr. Jonathan Andrés Carrión Muñoz, no posee

ingresos suficientes para haber podido concretar dicha suscripción de acciones. Se indicó también en dicha escritura, que la dirección correspondiente al único accionista y representante legal de Brunno Fresh SpA era Santo Domingo N°4536, aun cuando los dueños de dicho domicilio señalaron no conocer a dicha sociedad ni a su representante legal, manifestando que no existen contratos de arriendo por el uso de dicho domicilio.

Por otra parte, respecto de la dirección informada a este Servicio respecto de Brunno Fresh SpA, Santo Domingo N°4535 esta no posee rol de avalúo fiscal ni información en los sistemas de este Servicio, por lo que no fue posible realizar validaciones sobre su existencia.

Conclusión: De acuerdo con los antecedentes recopilados, se verificó que existen a lo menos tres empresas en cuya constitución tuvo intervención directa el señor Juan Navarrete Vásquez, que son: Automotriz Soliste SpA RUT N°77.178.321-k, Gildemeister Motor SpA RUT N°77.135.184-0 y Brunno Fresh SpA RUT N°77.135.192-1, debido a que el trámite de verificación en notaría de las firmas digitales requeridas para la creación de dichas sociedades fue efectuado por el Sr. Juan Navarrete Vásquez, quien realizó el pago por dichos trámites y a quien el notario correspondiente emitió las boletas de honorarios asociadas a dichas validaciones de firmas electrónicas.

Además, se constató que las personas que figuran como accionistas y representantes legales de las sociedades nombradas, no contaban con ingresos suficientes para suscribir acciones por los montos señalados en las escrituras de constitución de cada una de ellas y que las direcciones informadas en sus escrituras de constitución y a este Servicio por dichos contribuyentes son falsas.

Por otra parte, de acuerdo con la declaración jurada de fecha 25 de febrero de 2021, prestada por el único accionista y representante legal de Automotora Bilbao SpA, este habría sido reclutado por Juan Navarrete Vásquez para la constitución de dicha sociedad, por lo que tuvo una intervención indirecta en su constitución.

Finalmente, la creación de sociedades mediante la utilización de antecedentes falsos, en la que ha intervenido el Sr. Juan Navarrete Vásquez de forma directa en las sociedades Automotriz Soliste SpA, Gildemeister Motor SpA y Brunno Fresh SpA y de forma indirecta en la Automotora Bilbao SpA, tuvo por objeto la presentación de inicios de actividades y la consecuente obtención de autorización de folios para la emisión de documentación tributaria electrónica, **la que fue obtenida exitosamente en el caso de Automotriz Soliste SpA y Automotora Bilbao SpA**, lo que permitió generar una apariencia de legalidad en la comercialización de vehículos de origen ilícito.

Adicionalmente, se acompañó el **documento 382**, que corresponde a la escritura de constitución de sociedad por acciones **Automotora Bilbao SPA, de fecha 21 de septiembre de 2018**, en la que comparece Gustavo Viveros Viveros, Rut 17.784.272-9 con domicilio en Quinta Normal en la Región Metropolitana ante el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Objeto: venta de repuestos y accesorios de vehículos, reparación y mantención. Capital social: 5 millones. Administración por representante legal Gustavo Viveros Viveros.

La Fiscalía además incorporó el documento 837.2, que es el cuaderno de antecedentes de fecha 12 de junio de 2021, destacando los siguientes documentos contenidos en él:

Declaración jurada N°35, tomada por la Subdirección Jurídica del Departamento de Delitos Tributarios, de **Gustavo Andrés Viveros Viveros**, RUT 17.784.272-9, en la cual relató que llegó a ser representante legal de la empresa Bilbao Spa, porque “yo estaba buscando trabajo, se me acercó un joven que no conozco, no sé ninguno de sus datos, me dijo que era abogado y me ofreció cierto dinero, eso hace un año, en septiembre del año pasado. Me ofreció 40.000 pesos. Me entregó el dinero de inmediato. Me llevó a la notaría de Teatinos 371. Después de eso me pidió el carnet. Hizo unos papeleos y firmé los papeles sin leer nada, y él me dijo que a él se los entregaban al día, al otro día y me dio un número. Yo lo llamé al día siguiente, me junté con él fuera de la notaría. Él retiró los papeles, yo pedí leer los papeles y ahí yo rompí los papeles frente a él. Quiero agregar que el mismo día que firmé él me llevó a un ciber con una hoja en blanco. Le sacó fotocopia a mi carnet por ambos lados y yo firmé esa hoja”. En relación con lo anterior se le consultó cómo adquirió el certificado digital que permitió la creación de la sociedad. De qué forma realizó el pago de dicha compra. Recibió asesoría. De ser afirmativa su respuesta cuál es el nombre de la persona. “No tengo respuesta, no tengo conocimiento al respecto **ya que solo le firmé los documentos que señalé antes a Sebastián**. Cabe indicar que en esa declaración indiqué no conocerlo, pero en realidad sí lo conocía”. **Se le exhibió una fotografía y se le consultó “conoce usted a la persona de la fotografía”. “Respuesta: él corresponde a Juan, la persona a la que me referí previamente por el contacto de Sebastián”**.

Además consta **declaración jurada** de 28 de junio de 2019, de Gustavo Viveros Viveros, en que reitera la declaración ya leída.

Otros antecedentes de respaldo son el correo respuesta del notario Hugo Cataldo Muñoz en que adjuntó las escrituras de **constitución de Sociedad por Acciones Gildemeister Motors S.P.A.**, objeto asesoría integral en terrenos y **Bruno Frech S.P.A.**; la **boleta 141.832** de Nelson Baeza Gutiérrez a nombre de Juan Francisco Navarrete Vásquez, RUT 18.613.986-0, por atención profesional correspondiente a firma electrónica, total honorarios: \$16.000, emitida el 6 de marzo de 2020 y **boleta de honorarios 151696** emitida por Nelson Baeza Gutiérrez a nombre del mismo Juan Navarrete Vásquez, por atención profesional, firma electrónica, total honorarios: \$8.000, emitida el 30 de junio de 2020; y la escritura de constitución de Sociedad por Acciones **Automotriz Soliste SPA**, de fecha 30 de junio de 2020.

Pasando a otro tema, **el acusado admitió que prestó declaración el 29 de septiembre de 2022 en el Juzgado de Garantía**, entonces, la fiscal lo confrontó en el sentido que **señaló en dicha declaración lo que hacían los integrantes de la “banda” del Yerko Silva**.

El encausado dijo que era efectivo, pero que el abogado que tenía en ese momento le hizo la declaración y le dijo que ya lo tenía hablado con la fiscal. Agregó que, en esa oportunidad, expuso que **Albano y Yerko eran casi la misma persona, uno estaba en libertad y el otro preso. Albano y Yerko eran las dos personas que manejaban todo el negocio**. A Yerko lo conoció cuando estudiaban y, en el

2019 conoció a Albano y supo que era el hermano. En junio de 2019 Albano le solicitó un “goma” y le dijo que era para hacer una empresa. En esa oportunidad contactó a Jesús Gacitúa.

Para efectos de refrescar memoria, leyó su declaración de la misma fecha y señaló que “ahí los contacté con Jesús Gacitúa y ahí fue cuando ellos le hicieron la empresa a Jesús”.

Indicó el acusado, al respecto, que no sabía si fue Yerko o Albano, porque él solo enviaba el carnet.

Señaló que en dos oportunidades fue a la Notaría de Eulogio Baeza y no recordaba si acompañó a Jesús a dicha notaría.

Para efectos de refrescar memoria, leyó su declaración de la misma fecha y señaló que “y ahí ellos le hicieron la empresa a Jesús y yo lo acompañé a la notaría de Eulogio Baeza a firmar la empresa por un día”.

Reconoció además que en dicha declaración, señaló que **con el tiempo supo que Albano y Yerko financiaban todo lo referido a las ventas de los vehículos que estafaban, que eran robados y, luego blanqueados**. Y explicó que esa información la obtuvo de Tatiana y Freddy, en una oportunidad llegaron a su casa o los acompañó al Registro Civil, y ahí le comentaron, pero a él no le constaba.

Respecto de su concurrencia a la Notaría de Eulogio Baeza, dijo que no conocía a la funcionaria de esa Notaría de nombre Patricia, pero después que se la presentó Albano, pero ella nunca lo atendió cuando fue a hacer los trámites de los vehículos. Acotó que Albano le dijo que los “gomas” a veces se perdían, pero ella solo con el carné les hacía el poder.

Admitió que fue a la casa del tío Kiko 2 o 3 veces y 2 veces más a buscar plata.

Para efectos de evidenciar una contradicción, leyó su declaración de la misma fecha y señaló que “el tío Kiko es el tío de Yerko y Albano y fue como en 5 oportunidades a dejarle plata ahí. Si po, pero yo le trasferí y no recuerdo si fue él, Marcos o Jesús, pero fue algo de 15 millones”.

Indicó que es efectivo que le transfirió un dinero que le dejó Tatiana por la venta de un vehículo blanqueado, que era de Jesús Gacitúa o Marcos Supanta, a nombre de quien estaba el vehículo.

Se incorporó el documento 20, que es el oficio de Banco Estado de 15 de abril de 2021, en que informa el producto contratado por Juan Navarrete Vásquez, cuenta 348-7-1082-38-5, fecha de apertura 11 de marzo de 2011 y fecha de último movimiento 14 de abril de 2021, remitiendo cartolas de 15 de febrero de 2019 hasta junio de 2020. Y como **documento 20.1, se exhibieron las cartolas y en particular los siguientes movimientos**:

1.- Transferencia de \$100.000 de 15 de enero de 2018, de la cuenta 13.656.296-7 que correspondía a Albano Silva Toro.

Al respecto, el acusado explicó que debía haber 3 o 4 transferencias más, porque le trajo salmón y locos de Puerto Montt. (Pero es un hecho de la causa que Navarrete viajó a Puerto Montt en enero de 2020)

La fiscal lo confrontó señalando que en su declaración ante el Juzgado de Garantía dijo que conocía a Albano desde el año 2019, y el acusado insistió en que su abogado le “armó la declaración”. Acotó que conocía a Albano de antes porque su papá y sus tíos le hicieron trabajos.

2.- Transferencias de 19 de agosto y 5 de octubre de 2020 por \$100.000 y \$200.000, respectivamente, a Francisca Venegas Miranda. Al respecto, señaló que era efectivo, porque ella era la pareja de Yerko y no sabía el motivo, pero debió ser un favor que Yerko le pidió y luego le devolvió el dinero. No recordó si lo transfirió o Tatiana o Freddy le pasaron el dinero y es probable que Yerko sacara plata de los vehículos blanqueados.

El tribunal advirtió que reiteradamente el acusado Navarrete ha hecho referencia a esta especie de intermediación entre Freddy y Tatiana, por un lado, que le entregarían el dinero y, por el otro lado, Yerko Silva, quien sería el destinatario y dueño de este, ya que él se encargaría de hacer pagos y en definitiva de la distribución de las platas de acuerdo a las instrucciones del mismo.

3.- Transferencias (o depósitos) a la cuenta de Jesús Gacitúa, de 10 de febrero de 2020, por \$10.000; 16 de marzo, por \$1.000 y \$99.000 en efectivo; de 8 de junio, por \$65.000; de 16, 18, 23 y 24 de junio, por \$100.000, \$50.000, \$100.000 y \$100.000, respectivamente; de 1, 2, y 8 de julio, por \$150.000, \$100.000 y \$50.000, respectivamente; de 15 de julio por \$100.000; 20 de julio, por \$100.000; de 30 de julio y 3 de agosto; 7 y 10 de agosto, por \$100.000.

En relación con cada una de estas transferencias o depósitos efectuados por él a la cuenta de Jesús Gacitúa entre febrero y agosto de 2020 (siendo un hecho de la causa que Yerko Silva usaba la cuenta súper digital del Banco Santander a nombre de Jesús Gacitúa Candia), respecto de las cuales fue consultado por la fiscal, el acusado Navarrete dio diversas respuesta y explicaciones inconsistentes entre sí y que no se condicen con los demás antecedentes probatorios, que le restan veracidad, quedando en evidencia los trasposos de dineros provenientes del negocio ilícito de la asociación entre este y su jefe Yerko Silva.

De este modo, primero, el acusado dijo que le prestaba plata a Jesús Gacitúa por amistad y además porque trabajaba con su papá. Luego, comentó que Jesús después se fue con otra persona que también vendía autos.

Después, dijo que transfería porque Yerko se lo pedía, pero no recordaba con exactitud el motivo, y que era probable que fueran transferencias al propio Yerko, porque éste tenía una cuenta a nombre de Jesús Gacitúa. También dijo que a veces Yerko le prestaba plata y si alguno de esos montos era de Jesús, le transfería porque directamente se lo pedía.

Finalmente, aseveró que ese dinero era producto de su trabajo, ya que en su cuenta nunca tuvo dinero que no fuera de su trabajo o de trabajos de su papá, ya que él se encargaba de pagarle a los maestros, porque su papá no sabía (Esta justificación también la ha dado Navarrete en más de una oportunidad, por ejemplo, refiriéndose al viaje a Puerto Montt cuando Yerko Silva fue trasladado a la unidad penal de esa ciudad y a la evidencia encontrada en su domicilio, en concreto, las cuentas de valores y montos que constaban en el cuaderno y agenda incautadas, pero que no tiene sustento probatorio ni fáctico, más que en sus propios dichos).

Por último, la fiscal confrontó a Juan Navarrete con la declaración que Jesús Gacitúa prestó ante la Fiscalía, el 13 de mayo de 2021, quien señaló que no recordaba haber recibido depósitos en su cuenta. Ante lo cual, el acusado insistió en que sí le transfirió un par de veces y también le pasó dinero por mano.

4.- Transferencia de 6 de agosto de 2020, a Ingrid Opazo por \$100.000.

Al respecto, el imputado señaló que estando en juicio supo que ella era familiar de Yerko, no sabía que era pareja de Yerko, solo conocía a “Fran”.

Interrogado por su defensa, puntualizó que supuestamente tuvo participación en 4 vehículos blanqueados, a saber, la Hyundai H1 blanca, la Nissan Qashqai blanca, la Tucson que llevó Marcos con Albano a La Ligua y el Fiat Argo, de los cuales, solo vendió este último y se dividió la plata con Yerko. Agregó que la Tucson y la H1 se vendieron, y en la última acompañó a “Luxín” y “Gualata” y la Nissan fue la que perdió David Millalén.

Explicó que le realizaba favores a Yerko y no era permanentemente, solo era la ayuda que daba cuando no estaba en el trabajo, además, él presentó a dos “gomas”, Marcos Supanta y Jesús Gacitúa.

Negó haber constituido alguna empresa, ya que por lo que ha escuchado, lo hacían Franco con Sebastián.

Sobre el tema de los depósitos a las cuentas de Jesús Gacitúa, explicó que la cuenta Rut era de este y la cuenta del Banco Santander eran los depósitos a Yerko, donde le prestaba plata.

Interrogado por la defensa de Yerko Silva, dijo que la primera vez declaró por Zoom y su abogado le ayudó a prestar la declaración, ya que en la visita lo vio desesperado por volver a su casa y le comentó que le habían ofrecido un abreviado, pero que tenía que inculpar a Yerko y a Albano, luego lo conversó con su familia y su abogado le dijo que era lo mejor y entre los dos hicieron la declaración, pero él le decía que debía cambiar y qué servía y que no. Acotó que como no prosperó el trato, cambió de abogado.

A la defensa de Albano Silva, respondió que su padre trabaja en la instalación de cerámicos y en el año 2017 vio a Albano, porque su papá y su tío Patricio Navarrete le hicieron algunos trabajos y reiteró que las transferencias de Albano eran por ventas de salmón o mariscos en 3 o 4 oportunidades, los años 2017 y 2018.

Aclaró que en la declaración que dio ante el Juez de Garantía, señaló cosas que su abogado le dijo, además llevaba varios meses privado de libertad y agregó que antes tuvo otro abogado, que le habló de colaborar, pero nunca lo quiso hacer porque estaba en libertad, entonces, cuando quedó preso se vio en la obligación, por eso, habló de “banda” y esa información se la había proporcionado Freddy o Tatiana.

Seguidamente, la acusada **Carolina Cornejo Arriagada** se presentó a estrados y comenzó su declaración haciendo una reseña del contexto en que conoció a Paula Becerra y Albano Silva, y contó que en el año 2015 su esposo Víctor Quezada fue trasladado desde Curicó a Santiago como oficial instructor y comenzaron a tramitar un crédito hipotecario en el Banco Estado para comprar un departamento en Santiago. En marzo de 2016, le entregaron el departamento y Víctor le entregó la cuenta, porque ella se iba a encargar del pago del dividendo, del colegio de sus hijos y los gastos de la casa.

Con el tiempo su hijo conoció en el condominio a José Tomás, hijo de Albano y Paula y así la conoció a ella y empezaron a conversar, ella le contó que su esposo había abierto un restaurante a dos cuadras de su departamento y en julio de 2016, Paula le dijo que estaban buscando un administrador para el restaurante y como ella le había contado a qué se dedicaba, le dijo que necesitaba hablar con Albano, porque tenía ciertas condiciones para trabajar ahí, como el horario, porque tenía que ir una vez a la semana a Curicó por su trabajo en Consorcio y por eso no podía estar todos los días ni todo el día en el restaurante. Agregó que él estuvo de acuerdo que lo administrara y que estuviera hasta las 15:30 horas, dependiendo del horario de sus niños.

Indicó que siguió trabajando en Consorcio y pasados unos meses vio que era una buena opción, porque se adaptaba a las necesidades de sus hijos y le quedaba cerca de su departamento, entonces, en octubre de 2016 decidió renunciar a Consorcio y su jefatura le dijo que iban a gestionar su término de contrato, por necesidades de la empresa y que la indemnizarían con \$5.000.000 por los 6 años que trabajó. (Según el informe de remuneraciones del SII y que fue incorporado con la declaración de la contadora Melissa Muñoz, señalaba que el año 2016 obtuvo \$7.907.456 y el año 2017 \$10.634.400, de la Cía. de Seguros Consorcio como remuneración).

Refirió que al llegar al restaurante, se dio cuenta de cosas importantes como que se caía el sistema eléctrico por la cantidad de máquinas, que pasaba a olor a comida, porque no había campana, que se llovía en invierno y había deudas por arriendo y con proveedores, pero lo urgente era cómo recibían los pagos de los clientes, ya que le dijeron que ocupaban la cuenta de don Eduardo Provoste, que era de la empresa Procar. Les comunicó que no correspondía, que se debía gestionar de forma inmediata una cuenta para recibir los pagos, entonces, se puso en contacto con Transbank, donde le dijeron que no servía la cuenta del socio, por lo que, empezaron a gestionar la cuenta empresa, lo que demoró unos meses.

Explicó que para respaldar los movimientos de dinero del restaurante y de Procar, porque Eduardo Provoste le entregaba el dinero a Albano, le dijo que se emitiera una factura, por ejemplo, si se recibieron \$7.000.000 en ventas, emitían una factura a Procar por esa suma y Eduardo Provoste entregaba un cheque que Albano iba a cambiar al Banco.

Hizo hincapié en que el problema era que Albano siempre se quedaba con parte del dinero y ella con Paula, que estaba en el restaurante, tenían que adaptarse a esas constantes salidas de dinero.

Dijo que lograron abrir una cuenta y llegaron las máquinas de Transbank, pero los efectivos se los llevaba Albano, por eso, le descuadraba los movimientos y en ese minuto había hartas deudas y si bien el restaurante tenía buenas ventas, porque le vendía a Kauffman, a la Escuela de la Policía de Investigaciones, hacía caterings a la Red, trabajaban con jardines infantiles, había varias empresas alrededor, además, estaba bien posicionado como restaurante, tenía buena comida y atención y ella y los trabajadores se preocupaban de eso, entonces, eso hizo que los clientes los prefirieran. Acotó que el restaurante tenía buenas ventas, pero también había que invertir para la luz, la campana, una terraza.

La acusada aseveró que a Albano se le olvidaban todos los gastos o inversiones y sacaba todo el dinero efectivo y ella jamás le preguntó para qué o que no sacara dinero, porque él era el dueño.

Fue así como relató que ella se vio, en ciertas ocasiones, con la necesidad de pagar a algún proveedor como el gas, porque sin gas no podían trabajar.

Como se percató de este problema, le comentó a su esposo que tenía ganas de independizarse y de hacer un negocio en Recoleta, concretamente, abrir un SPA en el barrio Bellavista, lo que también les comentó a Albano y a Paula. Por eso, para ese negocio le solicitó a Víctor que gestionara créditos de consumo, en los bancos BCI Nova, BBVA y Banco Estado por \$35.000.000 y además, ella tenía el dinero del finiquito.

Afirmó que a fines de 2016 obtuvieron el dinero y comenzó a hacer remodelaciones, a comprar maquinarias y en el año 2017 empezó a funcionar, pero la Municipalidad de Recoleta les dijo que no les iba a dar la patente definitiva, tenían sólo la provisoria, porque el local tenía subterráneos y cuando fueron a fiscalizar se dieron cuenta que debían darle más consistencia a los pilares o cimientos y le dijo a Víctor en junio o julio de 2017, que no siguieran, porque arreglar cimientos era un gasto enorme y ya habían ocupado dinero de los créditos. Además, le dijo que quedaba una cantidad de los préstamos y con eso podía solventar las cuotas pendientes y además iban a vender la casa de Curicó, para salir de esa deuda tremenda. Acotó que el hecho de haber cerrado su emprendimiento, la obligó a mantenerse en el restaurante porque debía hacer frente a las cuotas que venían. (Cerró su negocio porque le fue mal y perdió la inversión quedando con deudas que cubrir).

Aseveró que continuó en el restaurante ya que tenía un grado de compromiso con el equipo de trabajo, garzones, cocina y proveedores, entonces, el trabajo era bastante agradable y su compromiso aumentó con la necesidad de mantener su fuente laboral.

Explicó que las ventas más fuertes del restaurante Alto Machu Picchu eran los viernes, sábado y domingo, un viernes se podían vender \$10.000.000, por eso, para los fines de semana había que tener los insumos y a los garzones, pero el dinero de las ventas no caía en forma inmediata a la cuenta Transbank, en ese minuto era 48 hrs. hábiles después de la venta, por eso, ella tenía que tener el control de lo que iba a recibir el día martes, y entre 4 o 5 veces al mes prestaba de su dinero, pagaba a proveedores súper necesarios, por ejemplo, gas, bebidas, postres, los trabajadores le pedían anticipos por necesidades básicas, ella les pasaba dinero, y cuando llegaba el dinero de Transbank se lo cobraba a Machu Picchu.

La acusada dejó claro que nunca tuvo independencia completa con las cuentas del restaurante, a Paula le explicaba cuáles eran los movimientos, porque Albano nunca estaba. El restaurante después se lo devolvía.

Refirió que con Paula hizo muchas cosas para mantener el buen funcionamiento del restaurante y disminuir los costos, por ejemplo, iban a La Vega, al supermercado e hicieron eventos enormes, como

desfiles de moda, por eso, señal que les iba bien, pero siempre y cuando Albano no sacara el dinero en efectivo. De esa forma, aseguró que cuando le pagaba a los trabajadores y a los proveedores, Machu Picchu le devolvió los préstamos que hacía y ningún problema. El restaurante nunca le quedó debiendo dinero y siempre hubo documentos de por medio, ya que se pagaba directamente al proveedor y estaba en las cartolas. (Es decir, que el registro que quedaba de los pagos que ella hacía a trabajadores y proveedores con su dinero, eran las cartolas de su cuenta).

Manifestó que en marzo de 2018, se obtuvo el comprador de su casa y se recibió el pago en mayo de ese año, le entregaron un vale vista a su nombre, eso le dio la tranquilidad suficiente para renunciar al restaurante, porque la situación era insostenible con el desorden de Albano por la plata que sacaba.

Señaló que en mayo de 2018, giró el vale vista en efectivo en el Banco Estado y lo depositó a la cuenta corriente que ella administraba de Víctor, de la cual tenía el control absoluto, Víctor giró el dinero y fue a los bancos a pagar los créditos que había solicitado en diciembre de 2016. Luego, en julio de 2018, empezó a trabajar como gerente de administración en la empresa de telefonía CiTelecom, ya habían pagado los créditos y no tuvo más contacto con Paula ni Albano, excepto que Paula la llamó para pagarle \$250.000 que le debía. Posteriormente, en octubre de 2019, Víctor fue notificado de su traslado a Molina, volvieron a su ciudad y vivieron en el terreno de una herencia de su mamá. Acotó que no tuvo contacto con nadie y no conocía a nadie de la causa, hasta que en enero de 2022 Víctor la llamó y le comentó que estaban siendo investigados por unas transferencias con Albano y Alto Machu Picchu y que él estaba involucrado, porque tenía un dinero que no se condecía con su sueldo, pero a ella la tenía tranquila el respaldo de los créditos y le dijo que vieran qué hacer.

Contó que quedaron impactados y mal con la noticia, entonces, vinieron a tribunales a preguntar qué pasaba y qué podían hacer, pero le dijeron que el caso era reservado y fue otra bomba, porque quedaron peor parados, entonces, ella empezó a buscar antecedentes, a hacer memoria, a buscar los comprobantes de la venta de su casa y las solicitudes de los créditos y a averiguar qué pasaba, porque de su parte no había forma de comprender lo que pasaba.

Relató que el 2 de febrero de 2022 allanaron su casa y los fueron a buscar detenidos, les informaron la situación, Víctor quedó en prisión preventiva y ella fue a Curicó a ver cómo ayudar y ahí empezó la lucha por buscar información, respaldar los movimientos, entender qué había pasado y gracias a esa búsqueda de información se enteraron que la Fiscalía dijo que había depósitos de \$22.000.000 de ella a Alto Machu Picchu y transferencias del restaurante a ella por un monto superior, entonces, se dio cuenta que el análisis fue de datos cruzados, sin ver ningún tipo de otro movimiento, como a los proveedores, era solo un cruce de datos y no un análisis.

Aseveró que ella y su pareja, entregaron todo lo que tenían bajo su alcance, a través de su abogado, también se le ofreció por la Fiscalía un juicio abreviado, pero no iban a aceptar una responsabilidad que no tenían.

Estimó que fue una mala información, en su caso, no había responsabilidad, no sabía nada de lo que hacía Albano, él prácticamente no estaba en el restaurante y sólo sacaba dinero y lo único que sabía era que Albano era representante de futbolistas, iba Paredes, el presidente de Colo Colo y muchas personas del ámbito del fútbol, pero no sabía qué hacía en su vida privada. Su comunicación con él era limitada, porque ella hablaba con Paula.

En relación con los créditos que obtuvieron, la acusada manifestó que en marzo de 2016 solicitó un crédito hipotecario con la finalidad de comprar un departamento en Santiago, crédito que fue tramitado en el Banco Estado. Después, su cónyuge Víctor le entregó su cuenta N°42800005404 para los gastos de la casa y el pago del crédito referido, puntualizando que dicha cuenta la manejaba 100% ella.

Agregó que también manejaba la cuenta RUT del Banco Estado de su marido y, a veces, la cuenta del BBVA de Víctor. Explicó al efecto que éste trabajaba todo el día, por lo que en general si había que hacer algún pago, éste le decía que sacara de esa cuenta, pero normalmente ella manejaba la del Banco Estado y él la del BBVA, que después pasó a ser Scotiabank.

Luego, dijo la acusada que trabajó con Albano Silva desde agosto de 2016 hasta el 30 de junio de 2018. Cuando ingresó al restaurante, este era “Comercializadora María Paz Gajardo Silva EIRL”, pero no sabía que tenía una cuenta corriente, aunque tenía conocimiento que se trataba de la representante legal, una familiar de Albano, y que después cambió de razón social.

Reiteró que Albano iba donde Eduardo Provoste y ellos sacaban las cuentas de los dineros de Transbank, entonces, Albano hablaba con Eduardo Provoste, él llegaba con el dinero, pero siempre llegaba con menos, porque sacaba el dinero producto de las ventas. Era parte del desorden que tenía Albano, esto se extendió de agosto a octubre de 2016, aunque no recuerda bien. (Se contradijo con Albano ya que este declaró que los dineros de Transbank llegaban a su cuenta Rut antes de que el restaurante tuviera cuenta vista o chequera electrónica y no que Provoste le diera un cheque).

Indicó que el 85% de las ventas se recibían a través de tarjetas, y de ese porcentaje no recuerda cuánto entregaba Albano.

Expuso que ella como administradora, hacía una estimación de ventas y gastos para poder controlar y hacer gestión y que en el año 2017 recién trabajó con números y antecedentes objetivos, pero no hacía balances.

Al indicársele por parte de la fiscal que Albano declaró que cuando ella tomó la administración, el restaurante daba utilidades suficientes y que las ventas eran buenas, la acusada aclaró que ella siempre le dijo que las ventas eran buenas, pero él nunca consideró los gastos, pues siempre tuvo en su mente sólo las ventas.

Continuando con las modificaciones de razón social del restaurante, señaló que la comercializadora María Paz Guajardo Silva mutó a Albano Silva Toro EIRL y después, a Diego Sepúlveda Guzmán, quien era

el representante legal, aunque siguió con el mismo número de Rut, cambiando sólo el nombre. Recordó que el 5 de agosto de 2016 cambió de María Paz a Albano Silva Toro y que abrió chequera electrónica en octubre o noviembre de 2016.

A propósito de lo anterior, comentó la acusada que cuando una empresa está recién comenzando y para poder abrir línea de crédito con cualquier proveedor, si ésta no tiene una historia de ventas, le piden que el representante legal tenga cuenta corriente. Fue por eso que Albano colocó a Diego como representante legal, ya que él estaba “bancarizado” y podían darle crédito con los proveedores. Explicó que en ese tiempo los proveedores que había, de carnes, por ejemplo, si el restaurante no tenía cheques, exigían que éstos fueran del representante legal. Por eso se entregaban documentos de Diego Sepúlveda. Pero nunca se depositó dinero proveniente de utilidades en la cuenta corriente de Diego, sólo se le depositaba lo que le iban a cobrar por cheque a fecha que se daba.

Con relación a lo que dijo Albano en el sentido que el dinero de Transbank se depositaba en la cuenta de Diego Sepúlveda, la acusada manifestó que esos dineros llegaban a la chequera electrónica de la cuenta Rut de Albano, primero y, después, se cambió a la chequera electrónica. Luego, desde ahí, se derivaban a la cuenta corriente de Diego. Pero no recordó la acusada el período en que esto ocurría.

Dijo que en octubre o noviembre de 2016, Eduardo Provoste dejó de prestar su cuenta de Transbank al restaurante y que cuando ella llegó al restaurante no trabajaba 100% en este ni tenía el 100% del control, porque tenía que viajar a Curicó. Pero cuando los dineros de Transbank llegaban a la cuenta Rut y chequera de la comercializadora, ella verificaba por las cartolas, pues tenía acceso a las claves para revisar los movimientos de la cuenta Rut de Albano. Y después siguió revisando los movimientos de la chequera.

La fiscal hizo presente a la acusada lo que declaró Albano en el sentido de que le tenía plena confianza a ella, por lo que tenía el manejo de ambas cuentas, tanto de la cuenta Rut, como de la chequera electrónica. En tal sentido, ésta última refirió que siempre contó con la venia de Albano o Paula para hacer pagos o transferencias, nunca lo hizo por cuenta propia o de manera autónoma.

Con relación al respaldo de dichos pagos, mencionó que los pagos que hacía quedaban con respaldo, que eran las facturas y que esos documentos quedaron en el restaurante cuando ella se fue. (Cuando fue allanado el local el 16 de octubre de 2020 no se encontraron documentos ni antecedentes contables). Además del pago a proveedores, puntualizó, que tenía a su cargo a los trabajadores, la organización, horarios y gestión del restaurante.

Indicó no saber si Albano también le pagaba a los proveedores.

Ante la aseveración de la fiscal en el sentido de que Albano declaró que ella le transfería dinero para pagar a proveedores, (como, por ejemplo, la verdura en Lo Valledor), ésta dijo que era efectivo, al principio, en el año 2016, Albano a veces se hacía cargo, pero después Paula y ella iban a Lo Valledor, al tiempo que Albano iba en ocasiones muy puntuales, pues prácticamente no estaba en el restaurante.

Con relación al cierre del año en diciembre de 2016, la acusada indicó que el restaurante no tuvo utilidades, ya que había que hacer gastos en arreglos, es decir, lo que quedaba se ocupaba muchas veces en el mismo restaurante.

Respecto de la afirmación de Albano en orden a que él usaba parte de ese dinero para remodelar un motel a fines de 2016 que le había arrendado a don Clodomiro, la acusada aclaró que no sabe cuándo comenzó el motel, pero por lo que ha escuchado en el juicio, esa situación habría empezado después de que ella se fue. Sin embargo, no tiene información. Lo concreto es que Albano siempre sacaba plata de las ventas, no de las utilidades. Por lo general, sacaba en efectivo, iba a veces en la noche a sacar o le decía a la cajera que le guardara. Muchas veces también sacaba plata de la chequera electrónica y la ocupaba. Esto, dijo la acusada, sucedía periódicamente durante todo el tiempo que ella estuvo en la administración del restaurante. En cuanto a los montos que retiraba, el efectivo diario era de \$300.000 o \$400.000 pesos, que por lo general eran para él, aunque sin considerar las propinas, las que nunca se tocaron.

Ella como encargada de la administración le comentaba a Paula, explicándole que al sacar Albano dinero, no iban a poder pagar cosas. Paula le decía que hablaría con él, pero no hubo cambios en su comportamiento. Además, los dineros que retiraba no los reembolsaba al restaurante.

Aseveró que el restaurante en el período en que trabajó no tuvo utilidades y se lograba mantener porque en la medida que iba entrando el dinero se iba trabajando, descontando lo que sacaba Albano. El dinero alcanzaba, pero siempre se mantuvo deuda de arriendo, que eran \$4.500.000. Al principio pagaba el arriendo Albano, y después se hizo mediante transferencia.

La acusada manifestó que su responsabilidad era mantener la administración del restaurante, por lo que cuando había un ingreso extra se le abonaba o, cuando don Clodomiro presionaba, se iba abonando todos los meses (en el período en que ella trabajó ahí), para mantener tranquilo a don Clodomiro que había compromiso de pagarle.

Con relación a su vínculo laboral, dijo que al principio se hizo un contrato de trabajo, pero no se pagaban las cotizaciones. De hecho, a todos los trabajadores se les quedó debiendo cotizaciones. Al principio recibía un sueldo de \$800.000 y después se lo subieron a \$1.000.000 (en este punto existe contradicción con Albano ya que este señaló que en un principio fue de \$600.000 y después subió a \$800.000, además, nunca se informó al SII). En todo caso, la acusada reconoció que el 3 de marzo de 2022, cuando prestó declaración en la fiscalía, efectivamente dijo que partió ganando \$600.000 y terminó en \$800.000, que fue lo mismo que dijo Albano.

Sobre el punto, aclaró que cuando trabajaba de lunes a jueves, ganaba \$600.000, luego subió a \$800.000 y al final del período le subieron y quedó en \$1.000.000 y que el pago de su remuneración se hacía por transferencia desde la chequera de Alto Machu Picchu a la cuenta que tenía su marido Víctor, en el Banco Estado, que era la que ella utilizaba.

En relación con los trabajadores del restaurante, señaló que tenía alrededor de 15 personas a su cargo, a los garzones se les pagaba el sueldo mínimo, al jefe de cocina se le pagaba más, entre \$600.000 u \$800.000, y al jefe de garzones también un poco más. Ella pagaba las remuneraciones, mediante transferencia de la chequera electrónica. Sin embargo, a veces cuando le pedían anticipos y no había dinero, ella les transfería desde la cuenta del Banco Estado de Víctor, lo que era más o menos común, y cuando transfería de la cuenta de Víctor con su dinero, también le decía a Paula, porque ella estaba toda la mañana en el restaurante. No quedaba registro del dinero que ella le iba facilitando al restaurante, pues Paula lo manejaba en un cuaderno. (La acusada está reconociendo que ella no llevaba un registro donde quedara constancia del dinero que le prestaba al restaurante por este concepto, los anticipos al personal)

En cuanto a los gastos básicos, como luz, agua, gas o algún tipo de arreglo, dijo que se pagaba con el dinero de la cuenta del Restaurante. Indicó que se arregló el techo, la luz, aire acondicionado, la campana, se compró refrigerador, etc. Y no sabe los montos que se gastaron en todo eso, ya que los arreglos estructurales y la campana los vio Albano, que se hacía cargo de los arreglos más grandes. Explicó que cuando se refirió a que el restaurante no tenía utilidades, quiso decir que se iba trabajando sobre la marcha, pero si había que arreglar el tema de la luz, se dejaba de pagar a un proveedor, y se le pedía que esperara o diera más plazo para el pago. Acotó que como Albano sacaba plata, esto no permitió que pudiera proyectarse con el restaurante.

En cuanto a los préstamos que le hacía al restaurante, aseveró que eran flujos de dinero, pues cuando pagaba una factura, luego le devolvían el mismo monto.

En el contexto de este tema, en su declaración de 3 de marzo de 2022 ante la Fiscalía, la acusada refirió que le prestó \$20.064.889 a Albano y le devolvieron \$83.000.000 en total.

Al respecto explicó que, en ese monto total, están incluidos el pago de trabajadores, proveedores y su sueldo.

En tal sentido, aclaró que esa es la suma de múltiples transferencias que se hicieron, por lo que en rigor lo que quiso decir en su declaración en Fiscalía fue que ella prestaba “tanto” y el restaurante le devolvía “tanto”. Al efecto, explicó que el cruce de información fue de ella a Machu Picchu, ella pagaba y el restaurante le devolvía, por lo que esos montos se pueden mal interpretar.

Confrontada en este punto con su declaración de 3 de marzo de 2022 para refrescar memoria, la acusada insistió y reiteró que en dicha declaración ella aludió a una suma de dinero, pues hay depósitos de su cuenta al restaurante de \$29.000.000 y, a la inversa, por \$80.000.000, pero se trata de una suma de movimientos que es un flujo de dinero, ella presta y ellos le devuelven. (Pero la acusada no respondió la pregunta subyacente a la notable diferencia entre los montos supuestamente prestados y los devueltos, vale decir, ¿por qué tiene más dinero transferido desde el restaurante?).

Respecto de las transferencias desde la cuenta de Víctor Quezada a la comercializadora Albano Ariel Silva Toro, que en el año 2017, alcanzaron a \$3.692.824, explicó que las hizo para que la comercializadora hiciera frente a ciertos tipos de pago y compras y para que esos pagos salieran de la chequera electrónica. Preciso que a veces iba a comprar Paula y le transfería a la chequera para que ella pagara, pero dijo que sería difícil ahora indicar los motivos. En cualquier caso, era para la compra de algo puntual.

Respecto de las transferencias a Diego Sepúlveda Guzmán, representante legal del restaurante durante un tiempo, por un total \$6.844.500, desde la cuenta de Víctor Quezada, señaló la acusada que fue para cubrir cheques, ella prestaba ese dinero y después la comercializadora se lo devolvía. Agregó que en el año 2018, el total transferido de \$3.453.323 a la cuenta de Diego Sepúlveda Guzmán, fue por el mismo motivo ya indicado.

En relación con lo transferido a la cuenta Rut de Albano, por un total \$2.059.500, en el año 2017, explicó que lo hizo en general porque Albano iba a comprar la verdura cuando Paula y ella no podían. Si bien, la fiscal le hizo ver que Albano en el año 2016 se hacía cargo, pero no en el 2017, la acusada insistió en que cuando ellas no podían ir a la Vega, iba Albano a comprar, pero era algo poco usual. Añadió que en el año 2018, la transferencia por \$500.000 a la cuenta Rut de Albano, fue por el mismo motivo.

Luego de que la fiscal mencionara en su interrogatorio que en el año 2017, desde la cuenta del Banco Estado de su marido, la acusada le transfirió a él mismo \$22.841.843, ésta última explicó que habría que revisarlo porque no tiene el número de la cuenta a la que se transfirió. Con todo, señaló que si hay una transferencia que sale de la cuenta del Banco Estado de Víctor a otra cuenta de Víctor, debe haber sido a la de BBVA. Sobre el particular, dijo que pudo ser para pagar el crédito de consumo que se pidió en el año 2016, ya que pidieron créditos al BBVA, al BCI Nova y tenían el crédito hipotecario del Banco Estado, que era el que ella pagaba.

Los créditos de consumo, afirmó, los solicitó Víctor para su emprendimiento y cree que fueron \$7.000.000 en el BBVA y \$13.000.000 en el BCI Nova.

Al refrescársele la memoria con su declaración de 3 de marzo de 2022 ante el Ministerio Público, dio cuenta en la misma –y ratificó en el juicio- que del Banco del Desarrollo recibió \$7.000.000 depositados en la cuenta de BBVA, lo cual fue para un proyecto personal, siendo el total de créditos de consumo \$27.000.000.

Adicionalmente, le hizo ver la fiscal en el contexto de su interrogatorio, que transfirió en el año 2018, desde la cuenta del Banco Estado de Víctor, la suma de \$38.028.061 (para pagar los créditos), a la cuenta de Víctor, y en el año 2019 \$9.146.525; en el año 2020, \$680.108; y, en el 2021, \$87.300. Explicó la acusada que esas transferencias fueron disminuyendo debido a que vendió su casa en el año 2018 cuando salió del restaurante y dejó de pagar las cuotas. No recordó a cuánto vendió el inmueble en el año 2018, pero fueron

aproximadamente \$30.000.000 y le depositaron una parte directamente a la cuenta de Víctor, como 4 o 5 millones de pesos.

Interrogada acerca de que en el año 2016 no hizo transferencias desde su cuenta del Banco Estado a Víctor. En cambio, entre el 2017 y 2018, le hizo un total de transferencias por \$60.000.000 y fracción. Sobre ese punto, dijo la acusada que la cuenta se abrió en marzo del año 2016, con el crédito hipotecario. En diciembre de 2016 solicitaron los créditos y en el año 2017 se empezaron a pagar, lo que explica que no haya transferencias antes. Los dividendos se pagaban en forma directa de la línea del crédito hipotecario del Banco Estado, es decir, se cargaban a la cuenta corriente del mismo Banco.

La fiscal, siguiendo con la cuenta de Banco Estado de Víctor, le hizo ver a la acusada que ella declaró que, en los años 2016, 2017 y 2018, en el mismo estado de cuenta, en el año 2016, según dice en el ítem pago de crédito hipotecario, \$283.083; en el año 2017, \$2.563.800; y, en el año 2018, \$2.066.689. La acusada explicó que era un dinero aparte de los montos que le transfería a Víctor Quezada, para que pagara los otros créditos de consumo.

Los abonos, le preguntó la fiscal, a la cuenta del Banco Estado de Víctor que ella manejaba, fueron en el año 2016, no se transfirió dineros de la cuenta del BBVA, en el año 2017 \$19.702.573, en el año 2018 \$11.142.657, en el año 2019 \$6.791.200 y en el 2020 \$4.005.100.

La acusada refirió que a lo mejor esas transferencias eran para pagar algo, el crédito hipotecario tal vez, tendría que revisar la fecha de la transferencia. Agregó que ella estaba con su emprendimiento, por lo que pudo también haber platas provenientes de éste.

Con relación al sueldo de Víctor, dijo que principalmente se destinaba a pagar cuentas cuando decidieron cerrar el SPA, por lo que, entonces, es flujo de dinero.

Indicó la acusada que el sueldo de Víctor (promedio \$1.300.000 en el año 2017) se usaba para pagar los gastos de la casa y los gastos que había generado el emprendimiento. El colegio de sus 2 hijos costaba en total \$600.000, y además había que pagar los créditos, por lo que decidieron vender la casa y se vio obligada a mantenerse trabajando en el restaurante donde recibía \$800.000. (Es decir, entre los dos juntaban un ingreso por sueldo de \$2.100.000 y con esa suma debían costear dividendo, gastos de la casa, colegio por \$600.000 y cuotas de créditos, es evidente, que el presupuesto daba cifras negativas).

La fiscal le refirió a la acusada que, en la cuenta del Banco Estado de Víctor, el año 2016, no hubo transferencias desde la cuenta de la comercializadora Albano Silva; en el 2017 las hubo por \$22.059.830 (explicando en este punto la acusada que a dicho monto hay que restarle su sueldo, de \$800.000 mensuales); en el 2018, \$15.993.435, totalizando un momento de \$38.056.255. Ese monto, la acusada dijo, corresponde al dinero que se le devolvía y que ella había previamente facilitado al restaurante.

Luego, la fiscal la interrogó por los siguientes traspasos: De Albano como persona natural a la cuenta de Víctor en el año 2017, por un monto de \$15.257.135; en 2018, \$4.769.977, haciendo un total de

\$20.017.112. La acusada frente a ello explicó que esos montos también se debían a la restitución de los dineros que ella había facilitado al restaurante, aclarando que era un “flujo de dinero”.

Acotó en tal sentido que lo del 2017 debe haber sido más, porque Albano aun recibía los pagos de Transbank en su cuenta Rut.

Frente a la observación de la fiscal en orden a que esos dineros en 2017 y 2018, en la cuenta del Banco Estado, de ser producto de la devolución del dinero que prestó -descontado los \$800.000 de su sueldo, que son \$9.000.000 anuales-, ascienden a la suma total \$48.470.377, la acusada insistió que es un flujo de dinero, \$2.000.000 y \$2.000.000 entran.

En la misma línea, la acusada indicó que la fiscal está haciendo el cruce de información de lo que ella le deposita a la comercializadora y lo que ellos le van devolviendo.

Con relación a otra temática, la acusada corroboró que, en su declaración del 3 de marzo de 2022 en la Fiscalía, en la que afirmó que los dineros que salían de su cuenta y entraban a las de Albano, estaban todos cuadrados y que haría llegar la documentación necesaria. Al efecto, explicó que a través de su abogado de la época entregó a la Fiscalía las tablas de amortizaciones de créditos, sus sueldos, pagos de créditos hipotecarios, pago de trabajadores, informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), cuando se pagaron estas deudas, la venta de su casa, etc.

Refirió que la venta de su casa se hizo en el tiempo en que aun trabajaba en el restaurante, y cuando tuvo la seguridad que tenía el vale vista del precio, se fue del restaurante en el año 2018.

Además dijo, respecto del total de los préstamos, por \$27.000.000 para su emprendimiento, que sacó dinero de allí para el restaurante. Y en relación con el emprendimiento, que era la instalación de un SPA, aseveró que pagó \$9.222.500 por concepto de arriendo, entre mayo y septiembre de 2017, a través de cheques, los que acompañó a la Fiscalía y también había usado dinero para remodelar y comprar maquinarias, por un monto de \$10.000.000. (Es decir, \$20.000.000 de inversión en arriendo y maquinaria, restándole \$7.000.000, pero sin considerar otros gastos como remuneraciones de personal, insumos, consumos básicos del local, etc.)

Aseguró que el Spa estuvo abierto desde mayo a julio o agosto de 2017. Luego, fueron a hablar con el arrendador para terminar el contrato y él les dijo que les iba a cobrar un mes más. Le devolvieron los demás cheques, y por eso se pagaron arriendos desde mayo a septiembre de 2017. En ese negocio estaba su cuñado. Tenía un trabajador a honorarios, al que se le pagaba de las ventas que se hacían y el dinero en efectivo que llegaba. Ella estaba en el horario que podía.

Refirió que un negocio que recién empieza no tiene el público necesario, por lo que las ventas eran para darse vuelta.

El ítem pagos diarios de Transbank, desde Transbank a la cuenta de Víctor Quezada, explicó la acusada que eran los pagos del Spa correspondientes al período en que estuvo abierto.

Con relación a Claudia Sandoval Muñoz, dijo que sabía que era la cuñada de Albano y que le transfirió en el año 2017 desde la cuenta de Víctor la suma \$250.000, y que no le llamó la atención que Albano se lo haya pedido, para pagar algo. A Claudia Sandoval la veía muy poco, la vez que la vio ella fue a buscar comida.

Su marido, indicó la acusada, tenía una cuenta corriente en el BBVA (Scotiabank), que era manejada por ambos. En ese contexto, la fiscal mencionó que, en el año 2016, desde esa cuenta de Víctor se transfirió a Víctor la suma de \$9.129.369; en el 2017, \$18.235.573; en el año 2018 \$7.706.493, en el 2019; \$6.000.000 y \$4.000.000 el 2020; y, el 2021, \$445.000. Explicó la acusada que ella hizo esas transferencias. La del 2016 debe haber sido el avance en efectivo y la del año 2017 corresponde al sueldo y viáticos de Víctor. En esa cuenta recibía solamente su sueldo. Él se quedaba con su sueldo, después ella se fue a trabajar a una empresa y no era necesario que le transfiriera a ella, por lo que él usaba su plata.

En el año 2017, continua la fiscal, en la cuenta de Víctor hay una transferencia a la comercializadora de Albano por la suma de \$4.000.000, aclarando la acusada que ella hizo esa transferencia para pagarle el arriendo a don Clodomiro y que fue algo puntual.

En el año 2016, la transferencia a la cuenta Rut de Albano por \$500.000, cree la acusada que fue para pagar a proveedores. (Triangulaba los dineros, de la cuenta de su marido a la cuenta rut de Albano y de ésta al proveedor)

Luego, con relación al año 2018, en que desde la cuenta BBVA de Víctor hay un retiro en efectivo por \$21.666.000, la acusada explicó que corresponde a la venta de su casa.

Recibió un vale vista por el pago del saldo de la casa, el cual giró en el Banco Estado. Ya que no lo podía depositar en la cuenta Rut, lo depositó inmediatamente en la cuenta del Banco Estado de Víctor, para que pagara los créditos que él había solicitado en el año 2016. Cree que Víctor lo giró y lo fue a depositar al Banco BBVA.

La unidad de análisis financiero, prosiguió, entregó una información de \$4.000.000 en efectivo. Por eso, aseveró que ese movimiento a que alude la fiscal es un error, pues su marido debe haber transferido a su cuenta del BBVA para pagar los créditos.

Continuando con la cuenta del BBVA de Víctor, la fiscal hizo ver que ahí ingresaba el sueldo y los viáticos de Víctor, mencionando que Albano desde su cuenta Rut transfirió a dicha cuenta \$1.900.000 el 2016; y, el 2017 \$3.600.000, totalizando \$5.500.000. Luego, ingresaron desde la comercializadora de Albano en el año 2017, \$800.000. Respecto de este último traspaso dijo que ese es un sueldo de ella, que lo pagó a la cuenta de Víctor de BBVA para pagar algo.

Explicó la acusada que Víctor depositaba desde una cuenta distinta, porque se transfiere a la del BBVA, pues se trata de la línea de crédito que se carga de manera automática. No sabe el monto que tenía en la línea de crédito.

En consecuencia, esos montos que refirió anteriormente la fiscal (\$1.000.000 del año 2016; \$10.020.300 el 2017; \$12.102.050 el 2018; \$1.235.000 el 2018; y, \$375.266 el 2020), corresponden a transferencias que hizo Víctor Quezada a la cuenta del BBVA.

La fiscal incorporó la prueba documental N° 833:

Es un Informe de 29.10.2021 del Banco Estado, of. 7681, sobre los productos contratados por Víctor Quezada Bravo y Carolina Cornejo Arriagada. Específicamente respecto de esta última, el informe consigna los siguientes productos:

Chequera electrónica, subtipo cuenta Rut N° 4287001671-3, aperturada el 3 de noviembre de 2008, vigente.

En ese contexto, la fiscal indicó que, en el año 2017, transfirió desde su cuenta Rut a comercializadora Albano la suma de \$1.240.280 y el 2018 y \$1.288.000, sin registrar transferencias el 2016. Los montos totalizan 2 millones y fracción. La acusada, sobre este punto, indicó que el motivo de tales transferencias fue para el pago de proveedores. (Nuevamente alude a una triangulación de dineros).

El año 2017, transfirió \$200.000 a Daniela Opazo, a quien la acusada dijo no conocer, pero cree que Albano o Paula le pidieron que hiciera dicha transferencia y que ellos después le devolvían el dinero. Recién en este juicio se enteró que era amiga de Ilich.

En el año 2017, transfirió a Marilyn Becerra, la suma de \$50.000 y en el 2018 \$40.000. La acusada dijo que es hermana de Paula y que probablemente ésta última se lo pidió.

En el año 2018, desde su cuenta Rut le transfirió a Cavanillas Crespo \$50.000, indicando la acusada que pudo ser por la compra de pescado o de anticipos.

Respecto de los dineros que ingresaron a su cuenta Rut del Banco Estado, la fiscal reseñó que la comercializadora Albano en el año 2017, le transfirió \$5.398.829; en el año 2018, \$12.969.036; en el año 2016 no le hizo transferencias, totalizando un monto de \$18.367.865.-, la acusada indicó que siempre las transferencias de dinero correspondían a la devolución del dinero que ella le había facilitado al restaurante.

Sobre la razón por la cual le prestaba su dinero al restaurante, la acusada manifestó que había un compromiso de su parte, pero en el año 2018 se dio cuenta que Albano no iba a cambiar y comenzó a disminuir su apoyo y participación.

Frente a la afirmación de la fiscal de que en el año 2018, la comercializadora le transfirió a la acusada \$12.969.036, ésta insistió en que si ella no prestaba plata, no podía funcionar el restaurante, porque había que comprar gas, por ejemplo.

Dijo que los gastos del restaurante eran del 50% de las ventas, es decir, si se vendían 40 millones, 20 millones eran para gastos. Ella prestaba el dinero porque veía el empeño de Paula por sacar adelante el restaurante.

Sobre la transferencia a su cuenta desde la cuenta Rut de Albano en el año 2017 por \$1.842.028 y el 2018 por \$823.056, con un total de \$2.665.084.-, manifestó que esos dineros fueron por el mismo concepto, o sea, devolución de la plata facilitada.

En el año 2018, la acusada recibió una suma de \$25.000 transferida por Claudia Sandoval, explicando al respecto que probablemente ella compró algo, como un almuerzo, y que Albano o Paula le dijeron que lo transfiriera a su cuenta, pero no sabe por qué.

La acusada puntualizó que las transferencias las hacía con la venia de Paula o de Albano, desde la cuenta Rut de Albano o de la Comercializadora.

Al recordarle la fiscal que Albano declaró que ella hacía las transferencias y concretamente a Juan Navarrete, la acusada dijo que fue por la compra de un pescado, pero no recordaba y si ellos le decían que le pagara a tal persona por la compra de pescado, ella lo hacía. Eran como 60 kilos de pescado, pues en un restaurante se come mucho ceviche.

Respecto de las transferencias a Tatiana Arana, según la fiscal, Albano dijo que él no manejaba las cuentas, pero la acusada indicó que Paula sí hacía transferencias, y ella no era quien para preguntarles por qué ni quienes eran.

Albano hacía trasferencias de su cuenta Rut, pero cuando llegó la chequera electrónica del restaurante, él puede que no supiera hacer transferencias y también Paula pudo ayudarlo, para que él lo validara.

Por otra parte, la acusada precisó que a su abogado defensor le entregó imágenes de los 5 cheques cobrados del arriendo del local del SPA, también, los detalles de movimiento del Banco Estado de la cuenta de Víctor Quezada, documentación de la casa de Curicó que señaló que vendió en el año 2018 cuando salió del restaurante.

Acotó que a su abogado además le entregó un listado de los pagos de proveedores y pago de trabajadores, por eso, asumió que se lo entregó a la Fiscalía, pero ella no verificó.

En cuanto al respaldo de pago de proveedores y trabajadores, aseveró que tenía el respaldo de las transacciones que habían ingresado y egresado.

La fiscal indicó que no se acompañaron los documentos, particularmente, el listado de pago a proveedores y trabajadores, por lo que, le consultó si por otra vía la había hecho llegar al Ministerio Público

La acusada sostuvo que ella y su abogado enviaron ese informe, donde la fiscal estaba viendo los cheques, el listado de los proveedores y trabajadores a los cuales se les pagó, el informe de la casa, el respaldo de los créditos, cómo fue todo este movimiento. Pero si la fiscal se refiere a si ella pudo haber enviado el documento o la factura, el número de la factura, el proveedor, no los tiene porque esos

documentos quedaron en el restaurante y no tenía acceso tampoco a la página del Servicio de Impuestos Internos, por lo tanto, no tiene acceso a los registros de compra y venta del restaurante.

Por eso, indicó que en el documento ya sale el Rut y el nombre del proveedor, el monto y la fecha del pago, lo que obviamente, se sacó de las cartolas.

Dijo que en la declaración que prestó ante el Ministerio Público tuvo a la vista imágenes del notebook que usaba cuando trabajaba en el restaurante.

Se incorporaron algunas imágenes de OMP 35, que correspondían a cuadros gráficos demostrativos de análisis de imágenes y archivos encontrados en el Notebook HP incautado a la imputada Paula Becerra Leyton

Al respecto indicó que, la imagen 2, son una serie de carpetas, “sueldo Machu Picchu 2018” es un archivo que ella creó, pero no sabía si después fue modificado, donde introdujo la información de los sueldos de los trabajadores, no recordó si ella estaba incluida. Agregó que Paula no tenía contrato de trabajo y recibía \$ 300.000 de sueldo, pero ella muchas veces no se pagó sueldo.

Manifestó que Paula siempre estuvo buscando la forma de que el restaurante funcionara lo mejor posible, si quedaba plata se le pagaba, esa era su postura. Dijo no saber si Paula tenía otro trabajo remunerado, ellos tenían un hijo y cuando llegaron al condominio con su familia, ellos vivían en un edificio y después se cambiaron al edificio de al frente, que cree también era de don Clodomiro, el arriendo de ese dpto. siempre se pagó con la plata del restaurante, le consta porque ella hacía las transferencias a don Clodomiro, al parecer de \$400.000 a \$500.000, y esto era aparte de los dineros en efectivo que Albano retiraba del restaurante.

Insistió que en el año 2017, los fines de semana ingresaban como \$10.000.000 diarios en ventas, por lo que, si Albano no hubiese sacado dinero, el restaurante era rentable. En el escenario que había, alcanzaba el dinero, trabajaban sobre la marcha, el jueves se preparaban, había que pagar el gas, ella lo pagaba, luego se recibía el dinero el martes y ahí lo recuperaba, ella siempre pensaba que Albano no iba a sacar más dinero y éste le decía que no lo haría.

Respecto de los gastos que tenía Albano, de su familia y de su hijo, ella suponía que también salían del restaurante, bajo su perspectiva, no eran gastos tan elevados, asumía que ellos vivían con la plata que sacaba Albano. Marilyn Becerra Leyton es la hermana de Paula que le ayudaba con las labores de la casa, se le pagaba a ella también, cada vez que Paula podía sacar dinero del restaurante, se imaginaba que era para sus gastos.

Sostuvo la acusada que tenía anotadas y registraba todas estas salidas de dinero, pero no recordó si lo registraba en el notebook.

En la imagen 3, reconoció archivos en Excel, denominados “cheques”, “control de stock”, “cuentas básicas del local”, “cuentas cobradas de albano”, “facturas por cobrar”. Agregó que también habían archivos

denominados “gasto Rony”, “libro compra 2018”, “libro compra 2017”, “Carolina 2”, “pago proveedores”, “pedido almacén”, “proveedores” y “resumen de venta”.

Indicó que algunos de estos archivos fueron creados por ella, no recordaba bien porque son de los años 2017 y 2018.

“Resumen de venta 2018”, la fiscal hizo presente que coincidía con el último día en que ella trabajó en el restaurante.

“Gastos Rony”, la acusada dijo no recordar pero le parecía que era un caballero que hacía arreglos en el local, en las maquinarias.

“Libro de compra Carolina 2” y “Libro de compras 2018”, suponía que contenía las facturas de compra. Explicó que descargaba del registro de compra y venta del Servicio de Impuestos Internos, un archivo donde venían todas las compras del mes. Entonces, puede ser que haya ingresado eso, obtenido desde el SII.

La Fiscal le hizo ver que la última modificación del Excel, era del período en que la acusada se encontraba trabajando en el restaurante, donde descargaba del Servicio de Impuestos Internos la información de las facturas de las compras que se iban haciendo. Entonces, le preguntó si esa información la descargó y no recordaba que la dejó en este ítem, ¿dónde la guardó?

Contestó la acusada que asumía que en el computador, pero tendría que ver lo que sale en ese archivo, para decir si fue descargado del Servicio o fue llenado de forma manual. Añadió que tiene que haber sido ella quien le puso la individualización a cada Excel.

Respecto a imagen 4, que correspondía a una planilla Excel denominada “Eduardo Provoste”, dijo que de acuerdo a su contenido, podría corresponder a consumos y creía que por el registro pudo haberlo comenzado ella.

Respecto de la imagen 5, en la parte superior, aparecía “gastos Rony”. La acusada reconoció la información y dijo que tenía las siguientes columnas: mes, ventas, compras, sueldos, cotizaciones, arriendo, músicos, luz + agua, IVA, Marilyn + arriendo y la última columna no tiene nombre pero sí valores numéricos, de enero a julio y suponían que ella la confeccionó.

La acusada indicó que si se tomaba el mes de enero, y se restaba a las ventas todos los gastos mencionados, el valor numérico de la columna K, correspondía al resultado y que era posible que ese hubiese sido el resultado para los demás meses, que corresponden al período en que ella trabajó en el restaurante. Entonces, con esas utilidades, explicó por qué ella tenía que prestar dinero al restaurante, en el sentido que había que pagar antes, por ejemplo el gas, comprar antes el marisco, la carne, los pasteles, los postres, para poder enfrentar el fin de semana, y se trabajaba sobre la marcha. Adicionó que si Albano no hubiese sacado el dinero, fácilmente podría haber dado esa utilidad.

Advirtió que en ninguna columna colocó el dinero en efectivo que sacó Albano, no lo registró porque la planilla era un macro.

Aseveró que las compras que ella pagó, los proveedores y los trabajadores a los que pagó, están incluidos en esas compras y en esos sueldos, no están aumentando la deuda, porque dijo que era un tema de cuadratura.

Explicó que ella no inventó una factura o no pagó una factura que no estuviera registrada en el Servicio de Impuestos Internos. Dentro de los \$10.522.116, que en la columna C2, correspondía a enero, seguramente ella pagó 2, 3 o 5 facturas. Pero después el restaurante se lo devolvía, por lo que no estaba haciendo crecer la compra, está considerado lo que ella pagó.

La fiscal insistió en que considerando que está incorporada esta plata, con esta utilidad, por ejemplo, de \$2.000.000, le consultó de dónde obtenía dinero Albano para pagarle lo que le facilitaba al restaurante.

Reiteró que esto era una rueda, se iba pagando en la medida que iba llegando la plata, se iba dando vuelta, era un flujo de dinero. Acotó que su sueldo está incluido en el ítem sueldo, de \$6.806.500.

Puntualizó que esta información, de alguna u otra forma, pudo haberla utilizado para decirles a Albano y Paula: “miren, las ventas de este mes fueron esto, las compras de este mes esto, los sueldos estos, las cotizaciones estas, el arriendo esto, los músicos, la luz, etc”. “Y al final del período, si sacáramos las cuentas de todo, les quedaría para vivir o para retirar de forma transparente \$2.475.420”.

Pero aclaró que de esa utilidad no quedaba nada, porque esa plata la sacaba Albano como quería.

Enfatizó que no se le pagaba de esa utilidad, sino que lo que le devolvían estaba registrado en el total de las compras. Acotó que las compras no se pagaban de forma inmediata, ya que a algunos proveedores se podía pagar hasta a 30 días.

Pero como Albano sacaba dinero, insistió, se iba pagando y se iba tapando el hoyo, en su afán de que el restaurante funcionara y de demostrarle a ellos: “oye, aquí tienen una muy buena fuente de trabajo, el restaurante es exitoso, le puede ir bien”.

Continuó señalando la acusada, que les decía “fíjate en esto, o sea, si ahí estoy pagando el arriendo más la niña que les ayuda, la utilidad hubiese sido mayor”, pero este es un cuadro gráfico.

La acusada aclaró que este era un cuadro quizás para decirles a los dueños, “fíjate de que si fuésemos ordenados, esto quedaría”. Acotó que es un cuadro explicativo, con datos reales y el dinero para pagarle a ella se sacaba de la misma venta, es decir, de la plata que ingresaba ella tenía que sacar su plata.

Respecto de la imagen 6, que era una planilla que la acusada descargó del SII, explicó que era una tabla Excel con registro de compras, donde figuraba carne, albano, carne, papas pre-fritas, licores. Agregó que en la parte superior de la imagen al medio dice “libro de compras 2018”.

La acusada detalló que los datos numéricos que están en la columna E, debía ser el total; la columna F el neto; la columna A el número de la factura; la columna B la fecha de la factura; la columna C el nombre del proveedor; la columna D, el RUT del proveedor; la E el monto neto; la F el IVA; la G impuestos adicionales; la H el total y la I el detalle.

Dijo que este listado correspondía solamente a una compra, a una factura, que podía traer varios productos, en este caso carne, por eso, pudo haber sido el listado de un día.

La acusada aseveró que estos son proveedores que también, en alguna oportunidad, utilizando la cuenta de su marido del Banco Estado o su cuenta Rut, les transfirió. Aclaró que, por lo general, de la cuenta corriente del Banco Estado de Víctor, que ella ocupaba, por eso, si se revisaba la cartola, quizás debiera aparecer la transferencia hacia algún proveedor de los que están en este listado.

Respecto de la imagen 7, correspondiente a planilla “libro de compras 2018”, la acusada indicó que era un registro de compra y venta que contenía todas las facturas registradas en el SII por concepto de compras del restaurante.

Explicó que cuando ingresó esa información, descargando la información que aparece en el registro de compra y venta del Servicio de Impuestos Internos, hizo un análisis de todas las compras y fue distribuyendo para sacar un “centro de costo” y decir: “mira, gastamos en esto, gastamos en esto otro, gastamos aquí, esto es lo que se está gastando más o este mes se disparó tal u otra compra, etc.”

También reconoció la imagen 9, y señaló que probablemente la confeccionó, se trataba de una planilla de sueldos, en que los amarillos eran garzones, los demás trabajaban en cocina, y aparecían Paula y ella.

Manifestó que la columna L se titulaba “anticipo”, ella salía al auxilio de estos anticipos cuando no había plata del restaurante, y ella también pedía anticipos cuando había plata.

Dijo que ella pagaba los anticipos por transferencia de la cuenta del Banco Estado de su marido, en las cartolas debieran aparecer estas con los nombres de alguno de estos trabajadores.

Respecto de la imagen 24, dijo que correspondía a una declaración jurada, firmada por Albano el 27 de septiembre de 2016, que declaraba que era el único dueño de la comercializadora Albano Silva Toro EIRL, y autorizaba a cambiar la cuenta de depósitos de movimientos Transbank a la cuenta de Carolina del BBVA.

Explicó la acusada, que el objetivo de ese documento era poder generar el pago de Transbank, para que esta empresa les abriera una cuenta, pero no se llevó a cabo. Al principio Transbank dijo que la cuenta Rut del socio no servía porque aceptaban hasta \$2.000.000 y posteriormente dijo que sí servía y se usó la cuenta Rut de Albano.

Explicó que la imagen 27, correspondía a una fotografía tomada el 3 de octubre de 2016, con un curso de su marido cuando fueron de gira a México, esta estaba respaldada en el notebook.

Con respecto a Claudia Sandoval, dijo que conoció a la madre y hermana de Albano, no sabía que su hermano Yerko estaba privado de libertad y sabía que Claudia era la madre de la sobrina de Albano. Recordó una sola vez que ella fue a buscar comida y no recordó otra oportunidad en que la haya visto.

En otra temática, relató que el 2 de febrero de 2022 ingresaron funcionarios de la Policía de Investigaciones a su domicilio, incautaron teléfonos y computadores de ella y de su marido, previo a ser detenida se enteró que había una investigación sobre la administración de Alto Machu Picchu, su marido fue notificado en su trabajo y le comentó. Sostuvo que en el notebook de su propiedad había registros de conversaciones por telegram.

Se incorporó **OMP 615**, consistentes en imágenes de una conversación levantada desde la aplicación Telegram, denominada "Chat N°18", del 20 al 23 de enero de 2022, que señala lo siguiente:

From: Carolina Arriagada el 21.01.2022, hola amor

From: Víctor Quezada. Existe en la unidad un plan de enlace o de emergencia.

Víctor: Donde sale todo actualizado de nosotros

Ella: Ya

Él: Domicilios, teléfonos, etc.

Víctor: resulta que pidieron ese plan de Santiago de la Inspección General.

Ella: ya

Víctor: por lo que ellos tienen los domicilios de todos

El: en especial el mío

Ella: ya

Ella: eso que significa

El: o sea los locos quieren seguirme o seguir a cualquiera de la unidad

El: o sacarle fotos a la casa

Ella: Que nos sigan no más

Víctor: o cualquier cosa.

Ella: no tenemos nada que ocultar.

Ella: que investiguen para que se aclare todo.

El: por la chuca Carolina déjate de ser inocente

El: Ten ojo con eso entonces

El: y que te sigan

Ella: ok

El: que me carga que seas tan inocente

El: ya filo.

Al respecto, la acusada indicó que era una conversación con su marido acerca de la investigación, su marido le dijo que le cargaba que fuese tan inocente, eso lo dijo por la investigación por asociación ilícita y lavado de dinero de Albano. Preciso que el 17 de enero de 2022, notificaron a su marido en su unidad policial donde él firmó y el documento decía que podían pedir su orden de detención.

Acotó que Víctor le comentó que había quedado la “cagá”, le contó y ella le dijo que se quedara tranquilo porque estaban todos los respaldos, porque ellos no tenían nada que ver en esto.

Explicó que en esa conversación él le dijo que tuviera ojo porque iban a ir a la casa a sacar fotos o los iban a seguir y ella es así, no tiene nada que esconder ni ocultar, le dijo que investiguen no más, porque pensaba, en su inocencia, que la iban a llamar, la institución de su marido, para que explicara, inocentemente pensaba que investigaban bien.

Entonces, relató que le escribió al tiro a Paula por Instagram y le pidió el número de su abogado, lo llamó y le preguntó qué pasa, a propósito de la notificación que le hicieron a su marido.

Continuando con la misma conversación del 21 de enero de 2022:

21:06 ella: hola cómo te fue con el abogado, amor?

21:07 ella: la abogada de ayer me dio el dato de un especialista

El: que bueno

Él: A mí el abogado de hoy me dijo que iba a revisar todos los antecedentes

El: le mandé todo, todo, todo.

El: incluso las declaraciones de Albano y de la Paula.

La acusada explicó que el abogado de Paula le mandó las declaraciones de ellos, y ella se las reenvió a su marido y al parecer Víctor le pudo haber enviado al abogado también la notificación formal de la institución.

Con fecha 22 de enero de 2022, constaba otra conversación:

Víctor: que dijo

Ella: le explicó el caso y la carpeta

Ella: lo que está buscando la fiscalía

El: la carpeta de nosotros?

El: entiendo que todo lo que te explicó es lo de nosotros

Ella: me dijo que me recomendaba un abogado que es un ex Policía de Investigaciones

El: y que te explicó

El: tengo que ver quién es?

El: primero eso?

El: pero que te dijo de la carpeta de nosotros

Ella: que no es complejo

Ella: solo soy una persona que trabajó con ellos

El: que pasa con la asociación ilícita y el lavado de activos

Ella: la fiscalía quiere aclarar si el restaurante se usó por Albano para lavar dinero

Ella: la asociación ilícita es de Albano no nuestra, específicamente, mía.

El: tuvo acceso a la carpeta de nosotros?

Ella: le dijo que la investigación es lavado de dinero y asociación ilícita, pero por parte de Albano ya que es hermano de Yerko.

Ella: Albano incluso está casi descartado del caso (eso me dijo él)

Respecto del contenido de estas conversaciones, la acusada explicó que el día que fueron notificados buscaron información y las noticias decían que Albano era hermano de Yerko, la notificación de Víctor hacía referencia a los antecedentes del caso y ahí aparecía mencionado Yerko Silva Toro.

Por último, manifestó que su profesión es contador auditor, especialista en tributario y además docente de contabilidad internacional y contabilidad financiera, y en el período en que prestó servicios para el restaurante ya tenía el título de contador auditor.

Interrogada por su defensor, que no realizó un balance propiamente tal para Alto Machu Picchu, lo que le exhibieron era un análisis o registro de compras y gastos para poder hacer gestión.

Puntualizó que no había ningún tipo de relación entre Albano y su marido, más allá de un saludo y que el notebook estaba siempre en el restaurante y era de éste no de su uso exclusivo. Las planillas que ella creó, las llenaba ella, pero no exclusivamente, también Paula.

Dijo que Albano era su jefe, no sabía si éste tenía otros ingresos, sabía que veía el tema de los futbolistas. Nunca tuvo alguna noción de venta de vehículos cuando ella trabajó en el restaurante, por lo que ha escuchado esto empezó después que ella se fue del restaurante.

Respecto de los anticipos, aclaró que no todos se pagaban desde sus cuentas, solamente cuando no había dinero en el restaurante ella iba en apoyo de los chicos, de los trabajadores, la mayoría se pagaron a través de las cuentas de Albano o del restaurante.

Su defensor le consultó respecto de las ocasiones en que se traspasaba dinero a las cuentas de Albano o del restaurante para que desde ahí se hicieran pagos, ¿Por qué hacía eso? La acusada contestó porque esa siempre era la idea, añadiendo que había ocasiones en que había que hacer un pago y no estaba ni Paula ni Albano y ella tenía que pagar urgente. Entonces tenía que pagar desde su cuenta. (Es decir, ahora está aclarando que en general le prestaba dinero al restaurante, a través de transferencias a las cuentas de Albano o de la Comercializadora, para desde ahí transferir para pagar a los proveedores o los anticipos a los trabajadores y, excepcionalmente, ante una emergencia ella transfería directamente de su cuenta o de las de su marido para pagar directamente a un proveedor o trabajador).

Insistió el defensor, que a veces no se pagaba directo de su cuenta, sino que traspasaba primero, por ejemplo, a la cuenta de Albano sociedad y de ahí se pagaba. ¿Por qué se hacía eso? Dijo que si ella depositaba a la cuenta de Albano, para poder transferir al proveedor, iba a necesitar la tercera clave que tenía Albano o Paula y necesitaba comunicarles que estaba haciendo tal pago, ¿me puedes dar la tercera clave? Pero a veces ellos no estaban, entonces, tenía que pagarlo también desde su cuenta, porque no necesitaba autorización.

Por tercera vez el defensor le consultó ¿por qué alguna vez ocurrió que traspasó plata a la cuenta de Albano o del restaurante, que también era una cuenta de Albano, y de ahí se pagó, es decir, fuimos de su cuenta a la del restaurante y de ahí al proveedor? El defensor insistió que necesitaba entender el motivo de operar de esa forma.

La acusada respondió porque no había plata en la cuenta (se refiere en la de la comercializadora o en la cuenta Rut de Albano) y necesitaba hacer algún pago y esa era la idea, eso en el mundo ideal.

Por último, aseguró que Víctor trabajaba desde la 8:00 a las 23:00 hrs., estaba a cargo de 3 cursos en la escuela de la Policía de Investigaciones, por lo que él nunca hizo una transferencia desde su cuenta para los pagos del restaurante.

Interrogada por el defensor de Albano Silva, dijo que se iba llevando un control en el restaurante, no tanto de los egresos que Albano hacía, pero sí del movimiento de la caja, para entregarles a ellos.

Aseveró que no recibió una suma grande de dinero de Yerko a quien no conocía ni de Albano, éste jamás inyectó o ingresó dinero al restaurante.

Luego el acusado **David Enrique Millalén Llancao**, declaró que hace como 4 años, le pidió un favor a Juan Navarrete quien vive como a una cuadra, necesitaba ir a comprar los focos traseros de su auto Volkswagen, le pidió que lo acompañara pero éste le dijo que no podía porque tenía que viajar a Puerto Montt. Dijo que pensaba ir a Avda. Brasil en locomoción colectiva.

Agregó que como a las 22:30 Juan lo llamó y le preguntó si se había conseguido un auto, le dijo que no, y etse le pidió un favor, que le iba a pasar un vehículo que tenía estacionado afuera de su casa, y que una persona necesitaba ver ese vehículo, él le contestó que esa persona tendría que ir donde iba a estar él, en avda. Brasil en una bomba de bencina.

Señaló que fue a buscar el vehículo en la mañana, como a las 10:30 hrs. y las llaves se las entregó su abuela. Dijo que llegó al servicentro, estacionó el auto y se fue al local preguntó por los focos, en ese transcurso le habló Juanito y le dijo que la persona vivía cerca, que estaba muy cerca la oficina de él y que venía llegando en 15 minutos, pero no llegó.

Agregó que esperó 45 minutos y cuando se iba, Juan lo llamó de nuevo y le dijo que esta persona iba para allá, se devolvió y se estacionó al costado del servicentro, se quedó con el motor andando. Dijo que el hombre lo llamó, le preguntó cómo andaba vestido y el color de la camioneta que era blanca, le dijo que estaría en 15 minutos para ver la camioneta, pero no llegó. Indicó que él lo llamó de vuelta y le dijo que sí iba, entró a la bomba y se estacionó, se bajó para que lo viera cómo andaba vestido, se paró en una esquina y se devolvió, lo esperó un buen rato, y en ese instante llegaron los funcionarios de la Policía de Investigaciones.

Continuó relatando que lo hicieron salir del auto y le dijeron que estaba detenido. Luego, comenzaron a revisar el vehículo, habían unos papeles de una automotora que estaba en el mismo maletero, y lo trasladaron a la unidad que está cerca de la estación Mapocho. Le preguntaron de quien era la camioneta y explicó que le pidieron un favor, la persona que quería ver el auto no llegó pero tenía su número.

Indicó que le dijeron que se podía ir, tenía muchas llamadas perdidas de Juanito y otras de un número privado, dejaron la camioneta en la unidad y le dijeron que el dueño la fuera a buscar. Salió y lo llamó Juanito y le contó lo que había pasado, también le llamó otra persona, le contó pero con los nervios no supo quién era.

Reseñó que pasó el tiempo y no le dio importancia, hasta que un día como a las 2:00 de la mañana llegaron funcionarios de Policía de Investigaciones, le preguntaron ¿dónde están las armas? Refirió que él tiene armas y les dijo dónde estaban, en una caja, que no estaban inscritas, le gustan las armas porque hizo el servicio militar en Arica y siempre ha sido aficionado a ellas.

Aseveró que son armas viejas, las compró en ferias informales hace como 10 años, era un arma corta de bolsillo y una 38 Taurus brasileña, y las mantuvo en la casa, su población es muy mala y las tenía por seguridad para él y su familia, porque vivía en un sector rojo. Agregó que la otra arma también la compró en el persa Bío Bío, no sabe si es una PT 9 mm o una Jericó, pero era un arma plateada.

Repecto del vehículo Nissan de color blanco, refirió que le pareció que era un vehículo del año. A Juanito lo conocía de niño y le tiene mucho cariño, jugaba a la pelota con su padre, cuando no tenía trabajo se acercaba a él.

Aseveró que le vio un Mercedes y un Audi que era del futbolista, además, conocía bien a su padre y Juanito con él lo tenía todo, por eso, no le extrañaba que anduviera en vehículo, para él era normal, ya que según su opinión nació en “cuna de oro” y sabía que se lo daba su papá.

Agregó que tiene una relación cercana con él y su familia, por lo que no pensó que tenía algo malo o que le podía causar daño a él, Juan no le dijo de quien era el vehículo y no sabía si era de él.

Afirmó que aceptó conducir un vehículo sin saber quién era su dueño, por comodidad y pereza de no querer tomar una micro.

Además Juanito no le dijo nada sobre los documentos del vehículo, por lo que asumió que estaban en la guantera del auto. Y la Policía de Investigaciones cuando lo detuvieron, ellos abrieron la maletita del auto y ahí había unos papeles que él no había visto, porque no registró el auto.

Señaló que dio por sentado que el auto era lícito y que los documentos estaban en regla, ya que no le pide vehículos a cualquier persona o a toda la gente, lo hizo con una persona que conocía y estimaba y era amigo de su familia. (Pero habpía señalado fue Juan Navarrete quien le pidió el favor a él, que le mostrara la camioneta a una persona determinada e incluso le dio su número telefónico a ésta para que se coordinaran).

En las fotografías de OMP 73, describió su vivienda de Sara Gajardo N°6449 y las armas y municiones incautadas.

Se incorporó el documento 953, Oficio de la Dirección General de Movilización Nacional, Ministerio de Defensa, que señala que no registra inscripción de armas de fuego, no permiso de porte ni autorizaciones de compra de municiones.

Y se acompañaron los documentos 117, 118, y 119, oficios de la Dirección General de Movilización Nacional, sobre información de cada una de las armas de fuego incautadas a Millalén.

Finalmente, prestó declaración en la audiencia de juicio, el acusado **Germán del Carmen Duarte Pereira**, quien señaló que trabajó 12 años en panadería y pastelería en el Supermercado Monserrat, y cuando se retiró con el finiquito inició un emprendimiento, una amasandería tipo mini market en el que trabajaba con su hermano y su esposa. Ahí trabajaron 8 años y decidió con su esposa vender ese departamento y comprar una casa más grande en un lugar más estratégico, para poder hacer un local más grande. Manifestó que vendieron el departamento en 22 millones y pidieron un crédito en Falabella de 30 millones, con eso compraron la casa de Santa Amalia N° 641 de La Florida, que es una casa esquina con más patio, más grande. La modificaron y pusieron un local más grande, con carnicería, fiambrería, y en ese local estuvieron más de 8 años, pero tenían mucho desgaste.

Añadió que cuando su hijo se tituló, pusieron en venta el local, y se vendió a mediados del año 2018. Le pagaron la mitad de inmediato y la otra se fue a un crédito hipotecario. Compró una camioneta Ssangyong y se hizo amigo del vendedor, quien le aconsejó que era rentable vender vehículos, le enseñó a

sacar autofact, revisar números de motor y de chasis, y de ahí empezó a comprar vehículos, pero no del año porque todavía no recibía el total de la venta de la casa.

Aseveró que en ese período compró alrededor de 6 a 7 autos. Y cuando recibió el total de la casa empezó a ver autos más caros, del año. Compró una Mazda CX-5 y una Kia Sportage, que fueron los dos vehículos con los que tuvo problemas.

Relató que el Mazda la vio por Yapo, le envió un correo a Carolina Gallegos, que era la dueña, la tenía publicada en \$14.500.000 y él le ofreció \$13.000.000 a lo que ella le respondió que no tenía problemas. Indicó haberle dicho que él no salía a ver vehículos a la calle y que siempre los citaba a su casa por seguridad.

Dijo que revisó el vehículo, sacó un autofact, revisó el motor y el chasis, no tenía partes, estaba todo ok. También le pidió a Carolina Gallegos quien andaba con su hijo, si podían ir a la Comisaría para mostrar el autofact a carabineros para confirmar que no había sido robado. Con el certificado de anotaciones que sacaron ese día fue a carabineros, los que vieron la patente y no tenía encargo por robo.

Mencionó que después de eso fueron a la Notaría Camus que está en Puente Alto. Le pidió una carta poder para luego revenderla y le dijeron que ningún problema. Después fueron al Banco Falabella del Mall Tobalaba, pero como era más de las 14:00 horas no pudo girar plata de su cuenta corriente, entonces transfirió de su cuenta corriente a su cuenta vista y giró \$5.000.000 que le pasó en sus manos al hijo de Carolina Gallegos y por el resto hizo un cheque del mismo Banco Falabella, por los \$8.000.000 restantes.

Contó que publicó el auto en los mismos portales, Yapo y Chile Autos y empezó a usar el vehículo y a su familia le gustó, por la comodidad decidieron quedarse con el vehículo, así que fue a la Notaría Camus y lo inscribió a su nombre.

Luego, señaló que comenzó a ir al gimnasio donde iba su hijo y conoció a dos chicos, Martín y Rodrigo, a los que les contó que se dedicaba a comprar autos y que al mes compraba uno o dos, dependiendo de si hacía un buen negocio. Ellos se dedicaban a comprar terrenos en el sur, y le dijeron que era mucho más seguro comprar terrenos, y más rentable. Les preguntó cuánto había que tener para comprar un terreno, le dijeros que entre 60 y 100 millones. Entonces, decidió comprar un terreno y para eso tenía que vender su camioneta para hacer más caja.

Así fue como Martín y Rodrigo publicaron el vehículo, también lo publicó él y como dos personas más, y le resultó a Martín, quién le dijo que había un interesado y que el tío tenía una automotora e iban a llevar personas para verlo, así que Martín lo mostró y la ofreció con una carta poder.

Expuso que el día que se iba a vender la camioneta, Martín le dijo que estaba listo para ir a venderla, a lo que le contestó que fueran todos. Martín fue a vender el Mazda a Vitacura. Se hizo la carta poder y se vendió la camioneta, indicando que él estuvo presente todo el tiempo, y de hecho conversó con el caballero al que se le vendió la camioneta, y le contó que su sueño era comprar un terrenito, hacer su casa e

irse de Santiago. Fueron al banco y la camioneta se le pagó al contado, y de ahí se fueron a Marchigüe a ver un terreno que se compró.

Expresó que pasó el tiempo y llegó la PDI a su casa diciéndole que estaba acusado por una estafa de la venta de la Mazda CX-5. Le dieron un correo para prestar su declaración y ahí mandó con lujo de detalles todo lo que había pasado.

Añadió que pasó el tiempo y nuevamente llegó la PDI diciendo que también había una Kia Sportage, de la que también mandó la documentación.

Preguntado por el Ministerio Público, precisó que vendió la CX-5 en \$13.000.000 y la compró a ese mismo precio.

Indicó que los amigos de su hijo, le cobraron por la venta del vehículo \$500.000 cada uno, dinero que les pagó en efectivo, porque la venta del Mazda fue en efectivo. A Martín le hizo la carta poder para vender el vehículo, pero el vehículo lo publicó Martín, Rodrigo y otro amigo del gimnasio, Juan Aceitón. Dijo que con la carta poder los chiquillos, Martín, Rodrigo y Juan ofrecieron la camioneta, y cuando Martín le dijo que había encontrado un comprador, fueron los tres con el caballero al Registro Civil, al banco e hicieron todo el trámite, porque nunca pensó que el vehículo era clonado. Reiteró que fue personalmente pese a la carta poder y los \$13.000.000 se pagaron en efectivo y se los entregaron a los chiquillos, pero el comprador sabía que él era el dueño, reiterando que conversó con él y este señor le dijo que era arquitecto o ingeniero.

Respecto de la Kia Sportage de color rojo guinda, indicó que le escribió a Juan Pablo Olivares y le contestó que iba a esperar una oferta mejor. Estaba publicado en \$13.990.000 y le ofreció \$12.000.000. Esta persona lo llamó y le dijo que no tuvo una oferta mejor así que aceptaba la suya. Luego, llegó a su casa, sacaron el certificado de anotaciones, estaba todo cuadrado y con la documentación. Fueron a la Comisaría del paradero 18 y consultaron la patente y los carabineros le dijeron que estaba bien, por lo que se sintió seguro. Fueron a la Notaría Camus, hicieron una carta poder, hizo un vale vista por \$11.000.000 y le pasó un millón en efectivo, lo que hizo el total de \$12.000.000.

Señaló que lo publicó a los dos días y apareció un señor de La Serena Ricardo Zepeda que le hizo una oferta, indicando que en todas sus publicaciones señalaba que recibía un auto en parte de pago.

Acotó que Ricardo Zepeda le ofreció un Kia Cerato y dinero.

No recordó dónde hizo la publicación, lo contactó Ricardo Zepeda y le pidió que se juntaran en el estacionamiento del carnicero de Puente Alto, llevó la Kia y Zepeda llegó con su señora y un mecánico. Les pasó la llave para que lo revisaran, mientras él revisó el Cerato de esta persona, que tenía la revisión técnica vencida.

Manifestó que fueron a una planta de revisión técnica, pero lo rechazaron por una ampolleta que estaba quemada. Cambiaron la ampolleta en un taller y volvieron a la planta de revisión. Conversaron hartos, le mostró fotos de su familia y este señor también a él.

Dijo que este señor le entregó el Cerato con una carta poder y el efectivo, que no recordó cuánto era el efectivo. El Cerato se vendió a la semana, sin recordar la fecha.

Indicó que Ricardo Zepeda lo llamó a los meses después diciéndole que no podía pagar el permiso de circulación, y le dijo que lo hiciera por internet, y después lo solucionó.

Por el Sportage recibió en parte de pago un Kia Cerato y efectivo, sin recordar cuánto. La ganancia por la venta de la camioneta más lo que recibió por el Kia fueron \$700.000. No recordó en cuánto vendió el Cerato.

Preguntado por su defensa, dijo que para comprar autos enviaba correos por Yapo o Chileautos y ofrecía un 10% menos del valor en que se ofertaba. Pedía que se lo llevaran, iba a la Comisaría del paradero 18 a verificar que no tuviera encargos y si estaba todo bien pagaba desde su cuenta Falabella. Ahí lo hizo con unos 6 a 7 vehículos y nunca tuvo problemas.

Entregó todos los antecedentes que tenía a la Fiscalía. Los contratos, los vales vista, su cartola, su celular que además desbloqueó. No hizo ninguna primera inscripción, indicando que a raíz de esto su vida cambió totalmente.

Por el Mazda CX-5 patente LCPX-63 y por el Kia Sportage patente KVTB-46, ofreció un valor que era un precio de mercado. Tiene respaldo de todos los pagos que realizó.

Reiteró no conocer a ninguno de los acusados.

No efectuó la primera inscripción ni del Mazda ni del Sportage.

QUINTO: Prueba del Ministerio Público.

Que a fin de acreditar los hechos punibles y la participación que se les imputó a los acusados, el Ministerio Público incorporó efectivamente en el juicio la siguiente prueba:

I. TESTIMONIAL

Para facilitar el examen y ponderación de sus testimonios, se agrupará a los numerosos testigos que comparecieron a deponer ante el tribunal, en las siguientes categorías: funcionarios de la Policía de Investigaciones; funcionarios de Carabineros de Chile; víctimas estafadas; víctimas de robo de vehículos y otros testigos.

I.1.- Funcionarios de la Policía de Investigaciones:

1.1) Pedro Olivares Cuevas, Subcomisario, oficial de caso.

1.2) Larry Caro Arroyo, Comisario, oficial de caso.

1.3) Daniel La Regla Mella, Inspector de la B.I.R.O., Metropolitana, Centro Norte, oficial de caso.

1.4) Álvaro Pino Saavedra, Subcomisario de la B.I.R.O., Metropolitana, Centro Norte, oficial de caso.

- 1.5) Bastián Guzmán Retamales, Inspector de la B.I.R.O., Metropolitana, Centro Norte.
- 1.6) Joaquín Paz Domínguez, Subinspector de la B.I.R.O., Metropolitana, Centro Norte.
- 1.7) René Juárez Maureira, Subcomisario de la B.I.R.O., Metropolitana, Centro Norte.
- 1.8) Cristóbal Soto Figueroa, Subcomisario de la B.I.R.O., Metropolitana, Centro Norte.
- 1.9) Jorge Durán Necuñir, Subcomisario de la B.I.R.O., Metropolitana, Centro Norte.
- 1.10) Francisca Núñez López, Detective de la B.I.R.O., Metropolitana, Centro Norte.
- 1.11) Alejandro Hermosilla Reyes, Inspector de la B.I.R.O., Metropolitana, Centro Norte.
- 1.12) Paulina Norambuena Sepúlveda, Comisaría de la B.I.R.O. Oriente.
- 1.13) Raquel Forero Villarroel, Subinspectora de la B.I.R.O., Metropolitana, Centro Norte, oficial de caso.
- 1.14) Diego Danilo Caroca Donoso, Comisario de la B.I.L.A, Metropolitana.
- 1.15) Leonardo Nicolás Colipán Bravo, Detective de la B.I.R.O., Metropolitana, Centro Norte.
- 1.16) Francisco Javier Saavedra Cerda, inspector de la B.I.R.O., Metropolitana, Centro Norte.
- 1.17) Inés Valentina Solans Roa, Subinspectora de la B.I.R.O., Metropolitana, Centro Norte, oficial de caso.
- 1.18) Carlos Andrés Riveros Gallardo, Subcomisario de la B.I.L.A, Metropolitana.
- 1.19) Víctor Gonzalo Contreras Pacheco, Inspector de la B.I.R.O., Metropolitana, Centro Norte.
- 1.20) Eduardo Rafael García Briones, Comisario de la B.I.L.A, Metropolitana.
- 1.21) Cristian Ricardo Álvarez Cabión, Comisario, BRILAC Metropolitana.
- 1.22) Eric Salvador Rojas Barrera, Comisario, BRILAC Metropolitana.
- 1.23) Ángelo Bustos Díaz Comisario, BRILAC Metropolitana.
- 1.24) Bogarett Amayo Cepeda, Oficial Dpto. V Asuntos Internos.
- 1.25) Scarlet Cornejo Gómez, Oficial Dpto. V Asuntos Internos
- 1.26) Adolfo Cesar Avalos Sarmiento, Oficial, Dpto. V Asuntos Internos.
- 1.27) Felipe Andrés Arriagada Fuentes, Detective de la B.I.R.O., Metropolitana Centro Norte.
- 1.28) Rodolfo Andrés Olave Arellano, BICRIM San Miguel.
- 1.29) Fernando Patricio Vásquez Guerra, Inspector de la B.I.R.O., Metropolitana, Centro Norte.
- 1.30) Mauricio Andrés Camousseight Illanes, Comisario de la B.I.R.O., Metropolitana, Centro Norte.

I.2.- Funcionarios de Carabineros de Chile:

Entre estos testigos se encuentran quienes declararon acerca de los procedimientos y diligencias de incautación de vehículos, los que realizaron inspecciones físico técnicas a los mismos y en un gran número aquellos que recibieron las denuncias de las víctimas de los robos de vehículos.

- 2.1) Fabián Aravena Romero, Suboficial Mayor, Dpto. S.E.B.V., Independencia.
- 2.2) Elvis Isla Flores, Cabo segundo de la Subcomisaria, Lo Velázquez.
- 2.3) Nelson Núñez Cornejo, Sargento segundo, Dpto. S.E.B.V., Independencia.
- 2.4) Náyade Carolina Madrid Vargas, Capitana, del Dpto. OS7, Providencia.
- 2.5) Felipe Andrés Meriño Orellana, Cabo primero, Dpto. OS7 sección de lavado de activos.
- 2.6) Melissa Jacqueline Muñoz Ibarra, Contadora Auditora, Dpto. Lavado de activos Sección OS7, Providencia.
- 2.7) Rodrigo Salazar Pacheco, Capitán del Dpto. S.E.B.V., Independencia.
- 2.8) Sebastián Andrés Silva Moraga, Capitán del Dpto. S.E.B.V., Independencia.
- 2.9) Verónica Giselle Aguayo Leal, Capitán del Dpto. S.E.B.V., Independencia.
- 2.10) César Antonio Gajardo Obinu Sargento primero del Dpto. S.E.B.V., Independencia.
- 2.11) Francisco Antonio Cárdenas Calderón, Suboficial mayor del Dpto. S.E.B.V., Coquimbo.
- 2.12) María Javiera Aravena Núñez, Capitana, jefa regional del Dpto. S.E.B.V., Valparaíso.
- 2.13) Alejandro Esteban Osses González, Suboficial mayor del Dpto. S.E.B.V., Rancagua.
- 2.14) Adolfo Andrés Aravena Orellana, Suboficial mayor del Dpto. S.E.B.V., Concepción.
- 2.15) Elio Florentino Campos Leiva, Suboficial Mayor del Dpto. S.E.B.V., Concepción.
- 2.16) Mario Cesar Domínguez Valenzuela, Suboficial del Dpto. S.E.B.V., Antofagasta.
- 2.17) Luis Orlando Moya Villaseca, Capitán jefe del Dpto. S.E.B.V., Iquique.
- 2.18) Rodrigo Ignacio Herrera Donoso, Capitán del Dpto. S.E.B.V., Santiago.
- 2.19) Hardy Alexis Huenul Carrasco, Capitán cuando era jefe del Dpto. S.E.B.V., Santiago.
- 2.20) Rodolfo Aquiles Ríos Crisóstomo, Suboficial del Dpto. S.E.B.V., Concepción.
- 2.21) Sebastián Arnaldo Ramírez Cerda, Cabo primero del Dpto. S.E.B.V., Coquimbo.
- 2.22) Felipe Andrés Novoa Díaz, Cabo Segundo, 51ª Comisaría, Pedro Aguirre Cerda.
- 2.23) Ayline Andrea Salomé Ulloa Garrido, Cabo Segundo de la Subcomisaría, Peñalolén.
- 2.24) José Emilio Huilipán Molina, Sargento Segundo de la 40ª Comisaría, Lo Espejo.
- 2.25) Diego Felipe Sandoval Olave, Teniente del Dpto. OS9, Ñuñoa.

- 2.26) Joaquín Ignacio Foster Ruiz, Teniente de la 62ª Comisaría, San Bernardo.
- 2.27) Pablo Felipe Garcés Martínez, Cabo Segundo de la 2ª Comisaría, Quinta Normal.
- 2.28) Felipe Andrés Gómez Encina, Cabo Segundo de 25ª Comisaría, Maipú.
- 2.29) Yesenia Anette Calcumil Antivil, Cabo Primero de 34ª Comisaría Vista Alegre de Cerrillos.
- 2.30) Patricio Mauricio Mora Espinoza, Cabo Primero de OS7, Lo Espejo.
- 2.31) Fernanda Belén Cerda Sanhueza, Teniente de la 3ra Comisaría, Santiago.
- 2.32) Giovanni Enrique San Martín Matus, Suboficial de la 25ª Comisaría, Maipú.
- 2.33) Roberto Carlos Salazar Ruiz, Cabo primero de Escuela de suboficiales, Macul.
- 2.34) Walter Mitchel Carrasco Cornejo, Sargento Segundo de la 34ª Comisaría Vista Alegre, Cerrillos.
- 2.35) Javier Ignacio Gómez Mora, Cabo Segundo de la S.I.P., 22ª Comisaría, Quinta Normal.
- 2.36) Mauricio Alejandro Uribe Espinoza, Sargento Primero de la Subcomisaría, Peñalolén.
- 2.37) Nicolás Ignacio Flores Fajardo, Teniente de la Segunda Comisaría, Temuco.
- 2.38) Matías Ignacio Palacios Silva, Teniente de la duodécima Comisaría, San Miguel.
- 2.39) Luis Andrés Romero Henríquez, Cabo Primero de la Cuarta Comisaría, Hualpén.
- 2.40) Rodrigo Ernesto Sáez Ramírez, Sargento Segundo de la Subcomisaría, Requínoa.
- 2.41) Leonardo Vilches Sepúlveda, Teniente Coronel de la 38ª Comisaría, Puente Alto.
- 2.42) Gabriel Contreras Bahamondes, Sargento Primero de Prefectura de Radiopatrullas.
- 2.43) Javier Ignacio Cajales Cid, Asistente policial 44ª Comisaría, Lo Prado.
- 2.44) Manuel Hernán Salazar Muñoz, Sargento Primero de la 38ª Comisaría, Puente Alto.
- 2.45) Javier Eduardo Rivas Padilla, Funcionario de la catorceava Comisaría, San Bernardo.
- 2.46) Carolina Aurelia Allende Gómez, Sargento Segundo de la 55ª Comisaría, Pudahuel Sur.
- 2.47) Cristian David Monsalves Lagos, Teniente de la Comisaría de Hualpén.
- 2.48) Javier Alejandro Gutiérrez Concha, Cabo Primero de la Segunda Comisaría, Graneros.
- 2.49) Cristófer Andrés Cáceres Maldonado, Cabo Primero de la 5ta Comisaría, San Javier.
- 2.50) Cristian Andrés Moyano Aguilera, Sargento Primero del Retén Catapilco.
- 2.51) Javier Alonso Gamboa Bahamondez, Cabo Primero de la Primera Comisaría, Viña del Mar.
- 2.52) Esteban Ignacio González González, Cabo Primero del Retén Vivanco.

- 2.53) Maite del Carmen Navarro Farías, Cabo Segundo de la Primera Comisaría, Curicó.
- 2.54) Camilo Nicolás Ulloa Escobar, Cabo Primera del Dpto. OS7, Limarí Ovalle.
- 2.55) Javier Alejandro Díaz Díaz, Sargento Primero Labocar, Concepción.
- 2.56) Luis Andrés Fuentes Ibañez, Sargento Segundo de la Unidad Especializada S.I.A.T., Carreteras Cautín Norte de Lautaro.
- 2.57) Milton Alejandro Pérez Peña, Cabo Segundo del Dpto. Antidrogas OS7.
- 2.58) Pablo Ignacio Escobedo Aravena, Teniente del Dpto. S.E.B.V., Coquimbo.
- 2.59) Juan Andrés Faundez Hormazábal, Cabo Segundo 38° comisaría de Gabriela Mistral, Puente Alto
- 2.60) Efraín Baldomero Manosalva Peña, Sargento Primero de la Cuarta Comisaría de Río Bueno.
- 2.61) Nelson Andrés Alvarado Díaz, Cabo Primero de la 3ª Comisaría Padre Las Casas.
- 2.62) Manuel Segundo Inostroza Paredes, Cabo Primero de la Subcomisaria de Calera de Tango.
- 2.63) Francisco Angulo Palacios, Teniente de la 21ª Comisaría, Estación Central.
- 2.64) Lucía Daniela Mancilla Ruiz, Teniente de la Cuarta Comisaría, Santiago Centro.
- 2.65) Camila Paz Beltrán Gutiérrez, Cabo Segundo de la 4ª Comisaría, Santiago Centro.
- 2.66) Hernán Samuel Puentes Huenulao, Sargento Primero de la 8va Comisaría de Colina.

1.3.- Víctimas de estafa (o que se vincularon con la compraventa del respectivo vehículo):

- 3.1) Marcela Cristina Pereira Bonilla, respecto de la adquisición del vehículo, Hyundai Accent, gris, JHFW-91.
- 3.2) Ricardo Antonio Reinoso Hurtado, vehículo Kia Frontier, blanco, LKKL.67.
- 3.3) José Zenón Sepúlveda Bustamante, vehículo, Mahindra Scorpio, blanco, LPHD-24.
- 3.4) Cristian Roberto Fornes Fornes, vehículo, BMW plateado, LJSF.50.
- 3.5) Jessica de la Mercedes Aguilera Pavez, vehículo, Hyundai Tucson, blanca, LJLD-71.
- 3.6) Jorge Adolfo Rodríguez Valderrama, vehículo, Peugeot 2008, rojo, LXVS 35.
- 3.7) Solange de Dios Sepúlveda Veas, vehículo, Mahindra Scorpio, blanco, LPHD-24.
- 3.8) Juan Emilio Guiñez Aranguéz, vehículo, Suzuki Vitara, blanco, LDLS.12.
- 3.9) Jenny Silvia Kovacs Araya, vehículo, Nissan Kicks, gris, LBCZ-92.
- 3.10) Melissa Lissette Solar Ramos, vehículo, Peugeot 301, gris, JHFW.67-4.
- 3.11) Diego Robin Sandoval Navarrete, vehículo, Kia Sportage, plateado, 2020, LJLJ.18.

- 3.12) Jeannette Lorena Cartes Espinoza, vehículo, Ford Explorer, 2017, LRCH.64.
- 3.13) Josué Marcel Díaz Meléndez, vehículo, Kia Sportage, patente LRHC-64.
- 3.14) Víctor Hugo Jiménez Hugueño, vehículo, Hyundai Tucson, blanco, LJPX-58.
- 3.15) Ricardo Flavio Parra Dosque, vehículo, Mazda CX9, JPPW.84.
- 3.16) Elsa Myrna Beltrán Novoa, vehículo, Subaru New XV, plateado, KDVY-76.
- 3.17) René Rodrigo Vidal Sánchez, vehículo, Camioneta Ford, Ranger, blanco, HSWJ.63.
- 3.18) Joselyn Jimena Martínez Rivas, vehículo, Subaru XV, plateado, KJCT.68.
- 3.19) Mireya del Carmen Sepúlveda Vilchez, vehículo, Ford Edge, blanco, JSSD.29.
- 3.20) Carmen Gloria Sandoval Contreras, vehículo, Hyundai Creta, gris, HYDG.43
- 3.21) Víctor Eduardo Sandoval Contreras, vehículo, Hyundai Creta, gris, HYDG.43.
- 3.22) Miguel Ángel Briones Canio, vehículo, Hyundai Tucson, blanco, HYFL.43.
- 3.23) Simón Alejandro Espinoza Herrera, vehículo, Nissan Xtrail, plateado, KLHJ.79.
- 3.24) Rodrigo Alexis Oróstica Ortiz, vehículo, Chevrolet Sail, plateado, KKYG.90.
- 3.25) Néstor Erik Dilas Albitres, vehículo, Chevrolet Versa, gris, JXRD.74.
- 3.26) Carlos Andrés Retamal Portflitt, vehículo, Peugeot 3008, blanco, KGFC.33.
- 3.27) Gabriela Paz Carolina Herrera Godoy, vehículo, Mitsubishi Outlander, negro, KBWV.94.
- 3.28) Francisco José Olea González, vehículo, Mitsubishi Outlander, negro, KBWV.94.
- 3.29) Víctor Hugo Pino Cortés, vehículo, Nissan Sentra, blanco, KHGR.40.
- 3.30) Juan Carlos Rodríguez Bravo, Mazda 6, blanco, JVPV-39.
- 3.31) Rocío Kettlun Poblete, vehículo, Honda WRV, gris plata, KZTP.55.
- 3.32) Tomás Mauricio Moraga Faundez, vehículo, Hyundai New Tucson, gris, KBSR.10.
- 3.33) Oscar Mauricio Vásquez Hernández, vehículo, Kia Cerato, plateado, JZKY-32.
- 3.34) Ricardo Iván Zepeda Trigo, vehículo, Kia Sportage, rojo fuego, KVTB.46.
- 3.35) Guillermo Eduardo Ramírez Witto, vehículo, Nissan Murano, gris grafito, JPSD.56.
- 3.36) Juan Carlos Rodríguez Vera, vehículo, Nissan Kicks, negro, JJLL.87.
- 3.37) Claudio Andrés Duque Rodríguez, vehículo, Audi A4, blanco, GKWP.19.
- 3.38) Claudio Alfonso Rodríguez Witto, vehículo, Nissan Murano, gris grafito, JPSD.56.
- 3.39) Wilfred Rodrigo Arenas Peñaloza, vehículo, Nissan Kicks, gris metálico, KWVF.56.

- 3.40) Rosa Herminia Meza Riveros, Nissan Kicks, gris metálico, KWVF.56.
- 3.41) Hernes Funier Ríos Rubilar, vehículo, Grúa horquilla Caterpillar, patente HFXX.33.
- 3.42) Claudia Alejandra Arrieta Arriagada, vehículo, Nissan Kicks, gris metálico, KWVF.56.
- 3.43) Mario René Pérez Pérez, vehículo, Hyundai Accent, rojo, HYDG.53.
- 3.44) José Alfredo Acuña Ahumada, vehículo, Kia Sportage, rojo, LFGB-76.
- 3.45) Alan Sebastián Swinburn Población, vehículo, Nissan NP 300, blanco, KHTC-73.
- 3.46) Pedro Patricio Alejandro Garfias González, vehículo, Nissan NP 300, blanco, KHTC-73.
- 3.47) Ronald Steve Cohn Karger, vehículo, Mazda CX5, blanco, LCPX-13.
- 3.48) Cristopher Leandro Arbuch Pavez, vehículo, Hyundai Tucson, azul marino, LDCR.89.
- 3.49) Máximo Antonio Contreras Pinilla, vehículo, Grúa Horquilla Caterpillar, HFXX.33.
- 3.50) David Aarón Arias Herrera, vehículo, Ford Edge, gris, LBCY-63.
- 3.51) Claudio Esteban Lemoine Rodríguez, vehículo, Kia Sportage, plateado, KKLL.10.
- 3.52) Jorge Luis Trigo Álvarez, vehículo, Ford Mustang, gris metálico, LKKL.73 y Hyundai Accent, blanco, LCXS.73.
- 3.53) Maggie Cristina Ávila Alonso, vehículo, Dodge Journey, plateado plata, JCCJ.30.
- 3.54) Cristian Salvador Gacitúa Salgado, vehículo, Fiat Argo, gris, LPHC.30.
- 3.55) Dony Castillo Chumacero, vehículo, Kia cerato, gris metálico, KPFT.53.
- 3.56) Igor Cristóbal Román Marambio, vehículo, Volkswagen Tiguan, rojo, LCFR.33.
- 3.57) Gladys Carmen Aravena Jara, vehículo, Hyundai Tucson, plateado, LPKZ.56.
- 3.58) Erik Andrés Álvarez Contreras, vehículo, Jac S 3, gris, GYPP-92.
- 3.59) Bruno Pedro Kevric Tavonatti, vehículo, Hyundai H1, blanco, LPHC.22.
- 3.60) Mario Hernán Mora Morales, vehículo, Mazda New 6 blanco, JYPV.39.
- 3.61) José Ignacio Sánchez Marinkovic, vehículo, Fiat Argo, gris, LPHC.30.
- 3.62) Pablo Andrés Bahamondes Moraga, vehículo, Hyundai Grand I10, LGCC.49.
- 3.63) Jhonson Mauricio Salgado Villar, vehículo, Audi A4, blanco, GKWP-19.
- 3.64) Gloria Isabel Galvez Galaz, vehículo, Hyundai Creta, blanco, año 2017, JHFV.67.
- 3.65) Rodrigo Osvaldo Arriagada Díaz, vehículo, Renault Koleos, año 2018, KKTR.36.

I.4.- Víctimas de robo de vehículo:

4.1) Hans Josef Schuhmacher Teillery, respecto del vehículo, Chevrolet Colorado, gris grafito, patente original KXHZ.32

4.2) María Constanza Angélica Teillery Bravo, vehículo, Chevrolet Colorado, gris grafito, KXHZ.32.

4.3) Yuanglong He, vehículo, Mazda CX 9, azul, JYDZ-78.

4.4) Jessica Katherine Ramírez Véliz, vehículo, Kia sportage, azul mercurio, LBWL.64.

4.5) Miguel Ángel Rodríguez Soto, vehículo, Mahindra Scorpio, blanco, LZJV-17.

4.6) Estefany Lisbeth García Estay, vehículo, Peugeot 2008, rojo, LGBS.99.

4.7) Alex Fernando Becerra Sepúlveda, vehículo, Nissan Sentra, blanco, JWGG.76.

4.8) Marcia Andrea Doña Molina, vehículo, Ford Edge, gris metálico, KKZL.22

4.9) Pedro Andrés Gallardo Flores, vehículo, Ford Edge, gris metálico, KKZL.22

4.10) Gabriel Antonio Martínez Marabolí, vehículo, Kia Sprotage, rojo, KXJD-98.

4.11) Dania Valentina Mena Alemany, vehículo, Mazda CX5, gris grafito, KVKR.63

4.12) Josefina Yabar Barros, vehículo, Nissan Kicks, gris, pte original KPCL.32.

4.13) Óscar Eduardo de las Riberas Córdova, vehículo, Hyundai Tucson, azul, LBYV-73.

4.14) Claudia Marcela Barría Castillo, vehículo, Nissan Xtrail, blanco, KFXZ.56.

4.15) Patricio Andrés Zavala Hidalgo, vehículo, Kia Sportage, plateado, JBFH.38.

4.16) Pablo Enrique Soto Cañupán, vehículo, Ford Eco Sport, rojo, JCFD.77.

4.17) Alejandro Esteban Vásquez Morales, vehículo, Nissan versa, gris, JRPT.36.

4.18) Anita Karina Mockridge Villar, vehículo, Suzuki Vitara, blanco, KLWR.85.

4.19) Vicente Antonio Ascencio Meneses, vehículo, Kia Cerato, plata suave, KTZY.48.

4.20) Cristóbal Torm Valenzuela, vehículo, Volkswagen Golf, gris, JGXZ.72.

4.21) Lorena Alejandra Marchant Mella, vehículo, Hyundai Santa fe, blanco, KFLF.91.

4.22) Jorge Antonio Correa Arraño, vehículo, Hyundai Santa fe, blanco, KFLF.91.

4.23) Hosmer José García Marcano, vehículo, Nissan Qashqai, blanco, KYDV.97.

4.24) Mario Patricio Inostroza Medina, vehículo, Audi Q7 blanco, JRSD.38.

4.25) Valentina Andrea Duarte Bazan, vehículo, Chevrolet Cavalier del año 2018, KRHZ.80.

4.26) Manuel Alejandro Rivas Pacheco, vehículo, Hyundai Tucson, plateado plata, KXYX.37.

4.27) Erika del Carmen Yañez Urrea, vehículo, Kia Sportage, blanco, LSJW.26.

- 4.28) Marcelo Enrique Billault Aedo, vehículo, Kia Sportage, gris, LGCS.54.
- 4.29) Rodrigo Alejandro Lagos Bastidas, vehículo, Peugeot 301, gris, JHFW.67.
- 4.30) Luis Marcelo Galaz Flores, vehículo, Kia Sorento, plateado, JKfV.63.
- 4.31) Yolanda Adriana Mella López, vehículo, Nissan Xtrail, blanco, nuevo sin patente.
- 4.32) Francisco Vladimir Lara Acevedo, vehículo, Toyota Hilux, gris oscuro, JKfY.35.
- 4.33) Luis Humberto Díaz Caroca, vehículo, Hyundai creta, blanco, JCLZ.35.
- 4.34) Carmen Consuelo Aravena Aljaro, vehículo, Subaru XV, gris, KBYT.41.
- 4.35) Manuel Esteban Muñoz Ahumada, vehículo, Subaru XV, blanco, KCRD.11.
- 4.36) Carlos Jorge Barra Urrutia, vehículo, Nissan NP300, rojo, JHFS.98.
- 4.37) Raimundo Arturo del Corazón Fuentes Ibarra, vehículo, Kia Frontier, blanco, JBFP.11.
- 4.38) María Francisca Abusleme Marzuca, vehículo, Mitsubishi Outlander, negro, KDTK.87.
- 4.39) Jaime Jesús Robles Errickson, vehículo, Hyundai Tucson, gris, JSYK-96.
- 4.40) Denise Valeska Ramírez Farfán, vehículo, Subaru Impresa, blanco, PPU KBFL-56.
- 4.41) Rodrigo Andrés Michea Riquelme, vehículo, Mercedes Benz C180 coupe, azul, JCRV-62.
- 4.42) Bruno Ignacio Blaschke Arregui, vehículo, Nissan Xtrail, año 2018, KBHT.91.
- 4.43) Jorge Antonio Villarroel Chanqueo, vehículo, Hyundai Tucson, gris grafito, LSVF.92.
- 4.44) Manuel Alejandro Novoa Toloza, vehículo, Hyundai Tucson, blanco, LCSF.36.
- 4.45) Marco Antonio Mancilla Gallardo, vehículo, Chevrolet Sail, plateado, KJCP.13.
- 4.46) Claudio Miguel Calderón Severino, vehículo, Hyundai Tucson, rojo, LFRS.98.
- 4.47) Jonathan Manuel Burgos Jara, vehículo, Hyundai Tucson, plateado, KSXC.56.
- 4.48) Rosa María Valencia Torres, vehículo, Kia Sportage, gris LLTS.76.
- 4.49) Leticia del Carmen Olivares Urquiza, vehículo, Kia Sportage, plateado, LJKF.43.
- 4.50) Luis Ricardo Chávez Vásquez, vehículo, Kia Sportage gris, LPBH.69.
- 4.51) Miguel Ángel Riquelme Riquelme, vehículo, Mazda 3, negro, JRY Y.81.
- 4.52) Luis Miguel Caicedo Senador, vehículo, Honda WR, plateado, KTYZ.18.

I.5.- Otros testigos:

5.1) Cristopher Andrés Artigas Cuevas, Jefe de la Unidad de detección y denuncias Registro Vehículos Motorizados del Registro Civil, Santiago.

- 5.2) Clodomiro Silva Núñez.
- 5.3) Diego Andrés Sepúlveda Guzmán.
- 5.4) David Andrés Barahona Abarca, víctima de robo de las placas patentes LDHP.37, correspondientes al St. Wg. Nissan Qashqai de color blanco.
- 5.5) Daniela Valezka Opazo Sandoval.
- 5.6) Priscila Evelyn Pérez Vega, Ingeniero informático, funcionaria de E-Cert Chile.
- 5.7) Zarella Elena Camerotto Moraga, Abogada jefe y notaria suplente de la 50ª Notaría de Santiago de Claudia Gómez Lucares.
- 5.8) Lorena Elisa Quintanilla León, Notaria pública de la 39ª Notaría de Santiago.
- 5.9) Miguel Ángel Robles Aguayo, Jefe de operaciones en empresa informática Certinet SA.
- 5.10) Nancy de la Fuente Hernández, Notaria titular de la 37ª Notaría de Santiago.
- 5.11) Roberto Antonio Bascur Arancibia.
- 5.12) Sebastián Andrés Martínez Zavala.

II.- PERICIAL

- 1) Luis Álvaro Serrano Sandoval, Perito en sonido del Laboratorio Criminalística Central Policía de Investigaciones de Chile, Pudahuel.
- 2) Roger Patricio Quilodrán Jerez, Sargento Segundo del Dpto. S.E.B.V., Concepción.
- 3) Sandra Edith Felipe Oyarzún, Cabo Primero del 1º Dpto. S.E.B.V., Independencia.
- 4) Hugo Enrique Araya Pacheco, Perito mecánico del Laboratorio de Criminalística Central, Pudahuel.
- 5) Rafael Sebastián Flores Espinoza Perito mecánico Laboratorio Criminalística Central, La Serena.
- 6) Diego Segundo Telles Villanueva, Sargento Segundo del Dpto. S.E.V.B., Temuco.
- 7) David Alejandro Olivar Beltrán, Perito Químico del Laboratorio de Criminalística Central, Pudahuel.
- 8) Julio Cristian Fuentes Miranda, Perito mecánico del Laboratorio Criminalística Central, Temuco.
- 9) Felipe César Achurra Bravo, Perito mecánico Laboratorio Criminalística Central, Pudahuel.
- 10) Daniel Andrés Espinoza Reyes, Perito mecánico Laboratorio Criminalística Central, Pudahuel.
- 11) Eduardo Aaron Vásquez Moya, Perito del Departamento S.E.V.B., Sección encargo y búsqueda de vehículos, Independencia.

12) Cristian Marcelo Melo Reinoso, Perito químico, sección química y física, Laboratorio Criminalística Central, Pudahuel.

13) Edwin Silvano Letelier Durán, Perito mecánico Laboratorio Criminalística La Serena.

14) Gina Rosa Torres Lillo, Perito mecánico del Laboratorio Criminalística Central, Pudahuel.

15) Marcela Jacqueline Rivera Donoso, Perito químico del Laboratorio Criminalística, Pudahuel.

16) Carla Marcia Ayala Torres, Perito químico del Laboratorio de Criminalística Central, Pudahuel.

17) Karina del Carmen Muñoz Arellano, Perito en huellografía y dactiloscopia, Laboratorio Criminalística, Pudahuel.

18) Perito Alejandro Molina Sepúlveda, Sargento Segundo del Departamento S.E.V.B., Independencia.

19) Nelson Alberto Casas Vergara, Perito mecánico, Laboratorio Criminalística La Serena.

20) Patricio Ariel Vera Tisandie, Perito mecánico Laboratorio Criminalística Central, Pudahuel.

21) Roberto Alejandro Veliz Rain, Perito mecánico Laboratorio Criminalística Central, Pudahuel.

22) Cecilia Verónica Catalán Pantoja, Perito químico Laboratorio Criminalística Central, Pudahuel.

23) Fabiola Hermosina Galaz Barrales, Perito químico, sección química y física, Laboratorio Criminalística Central, Pudahuel.

24) Esteban Moraga Rojo, Perito químico Laboratorio Criminalística Central Pudahuel.

25) Pablo Cesar Durán Moraga, Perito mecánico, Laboratorio Criminalística Central Pudahuel.

26) Sergio Andrés Andrade Barrientos Perito mecánico del Laboratorio de Criminalística Central, Pudahuel.

27) José Eliecer Ascencio Mora y de reemplazo del perito Ramón San Martín Inostroza, Suboficial del Dpto. S.E.B.V., Independencia.

28) Juan Pablo González Bahamondez perito mecánico del Laboratorio Criminalística Central, Temuco.

29) Carlos Mauricio Herrera Riquelme, Perito mecánico del Laboratorio Criminalística Central, Pudahuel.

30) Gonzalo Ignacio Román Muñoz reemplaza a perito Juan Moreno Morales perito mecánico del Laboratorio Criminalística, Temuco.

31) Francisco Alejandro Pérez Nilo, Perito mecánico del Departamento S.E.V.B., Rancagua.

Para efectos orientativos y de comprensión, los documentos, otros medios de prueba y evidencia material que fueron incorporados en el juicio, serán enunciados bajo los mismos números con los que aparecen indicados en el auto de apertura.

III.- DOCUMENTAL:

- 1) 2.- Informe de visitas que han ingresado a ver al interno Yerko Andrés Silva Toro, al C.P de Puerto Montt, desde el día 14-07-2019 a 29-02-2020.
- 2) 3.- informe de las visitas que se enrolaron al acusado Yerko Silva Toro remitido por Gendarmería de Chile.
- 3) 8.- Acta depositario provisional del vehículo marca Kia, modelo Frontier patente LKKL.67, a nombre de Ricardo Reinoso Hurtado.
- 4) 9.- 9.1.- Copia de permiso de circulación, copia de certificado de inscripción, patente LKKL-67, copia de certificado de homologación; 9.2.- Declaración de transferencia, patente LKKL-6.
- 5) 10.- tres certificados de homologación, certificado de permiso de circulación, patente LJLD.71-2.
- 6) 11.- Documentos de la patente LPHD.24.
- 7) 14.- Documentos del vehículo patente JHFW.91.
- 8) 15.- Solicitud de transferencia PPU JHFW.91.
- 9) 16.- Certificado de inscripción PPU JHFW.91.
- 10) 17.- Aviso recibo impuesto verde vehículo JHFW.91.
- 11) 18.- Factura electrónica de primera venta a nombre de Daniela Andrea Carrasco Pérez.
- 12) 20.- Informe respuesta de BancoEstado sobre productos de Juan Navarrete Vásquez y remite documentación de respaldo.
- 13) 20.1. Cartolas de Cuenta Rut N°348-7-108238-5, desde el 15.02.2019 hasta junio de 2020, adjuntas a Informe respuesta de 15.04.21.
- 14) 21.- Ord. DAF N°2352/2021 de fecha 24 de marzo de 2021, de la I. Municipalidad de Ñuñoa, respecto de empresa Automotora Bilbao SPA.
- 15) 22.- Copia de escritura pública "Renuncia de usufructo vitalicio y compraventa", respecto de inmueble ubicado en Pasaje Papa San Eleuterio N°542, comuna de Pudahuel.
- 16) 23.2. Cuaderno de antecedentes referido al Informe de Recopilación de Antecedentes N°17 ARA 3, de fecha 13 de octubre de 2020, compuesto de 1681 fojas.

17) 23.3. Cartillas computacionales del Sistema Integrado de Cumplimiento Tributario (SICT), correspondientes a algunos imputados y sociedades automotoras.

18) 23.19.- Escrituras de constitución de las sociedades automotoras VALENZUELA Y ARCE SPA, MENDEZ MOYA SPA, AUTOMOTORA NOVA, FULLORION LIMITADA, COMPRAVENTA DE AUTOMOVILES ORION LIMITADA, OLÍMPICA AUTOS SPA, AUTOMOTORA ASTORGA SPA, AUTOMOTORA BILBAO SPA, AUTOMOTRIZ PORTILLO SPA, AUTOMOTRIZ NUEVO LAREDO SPA, IMPORTADORA BRUNNO FRITSCH SPA, AUTOMOTORA KOR SPA, COMERCIAL GILDEMEISTER SPA, AUTOMOTRIZ GUILLERMO MORALES SPA, C. HERNÁNDEZ SPA.

19) 24.- 24.1. Oficio Secreto N°33 del Departamento de Defensa Judicial Penal del Servicio de Impuestos Internos, que adjunta 2 archivos Excel y pdf con información sobre documentos electrónicos emitidos por Comercial Portillo Motors SPA, Automotriz Soliste SPA y Portillo Comers SPA.

20) 24.3.- 95 facturas electrónicas emitidas por Automotriz Soliste SPA.

21) 24.6.- 3 notas de crédito electrónicas emitidas por Automotriz Soliste SPA.

22) 26.- Constitución de sociedad por acciones "AUTOMOTRIZ SOLISTE SPA.

23) 28.- Ord. N°1132 de 25 de febrero de 2021 de la Dirección Nacional de Aduanas que informa inexistencia de operaciones de importación o exportación de AUTOMOTORA SOLISTA SPA y COMERCIAL PORTILLO MOTORS SPA.

24) 48.- 48.1. Carta respuesta de 01.12.20 de Banco Estado sobre productos de YERKO SILVA TORO.

25) 48.2. Cartola de la cuenta RUT N°363-7-053199-9 de Yerko Silva Toro, de 25.11.20, anexo a carta respuesta de 01.12.20 de Banco Estado.

26) 50.- 50.1. Carta respuesta de 01.12.20 de Banco Estado sobre productos de COMERCIALIZADORA SYB SPA.

27) 50.2. Cartola de la cuenta vista N°261-7-011583-9 de Comercializadora SyB.

28) 53.- Encargo policial SEBV_201606_1370, vehículo PPU HXKK.72 y certificado de inscripción y anotaciones vigentes en RVM.

29) 54.- Encargo policial SEBV_201707_5417, vehículo PPU JHFS.98 y certificado de inscripción y anotaciones vigentes en RVM.

30) 55.- Encargo policial SEBV_201705_1651, vehículo PPU JBFP.11 y certificado de inscripción y anotaciones vigentes RVM.

31) 56.- Encargo policial SEBV_201710_4915, vehículo PPU JYFS.53.

- 32) 57.- Encargo policial SEBV_201706_5030, vehículo PPU HPSD.93 y certificado de inscripción y anotaciones vigentes en RVM.
- 33) 58.- Encargo policial SEBV_201705_5241, vehículo PPU JGXZ.72 y certificado de inscripción y anotaciones vigentes en RVM.
- 34) 59.- Encargo policial SEBV_201705_2995, vehículo PPU JKFY.35.
- 35) 60.- Encargo policial SEBV_201706_5696 fecha 28-06-2017 vehículo PPU JSCW.44.
- 36) 61.- Encargo policial SEBV_201704_3873, vehículo PPU JLWT.34 y certificado de inscripción y anotaciones vigentes en RVM.
- 37) 62.- Encargo policial SEBV_201704_4786, vehículo PPU JLFK.15 y certificado de inscripción y anotaciones vigentes en RVM.
- 38) 63.- Encargo policial SEBV_201705_3510, vehículo PPU JPLL.25 y certificado de inscripción y anotaciones vigentes en RVM.
- 39) 64.- Encargo policial SEBV_201705_0588, vehículo PPU JDFR.87 y certificado de inscripción y anotaciones vigentes en RVM.
- 40) 65.- Encargo policial SEBV_201703_5036, vehículo PPU JCLZ.35 y certificado de inscripción y anotaciones vigentes en RVM.
- 41) 66.- Encargo policial SEBV_201705_2860, vehículo automóvil, patente PPU HVHJ.40.
- 42) 68.- Ord. Alc. N°1800/94, respuesta de la Ilustre Municipalidad de Peñalolén, de fecha 30 de octubre de 2020.
- 43) 76.- Ord. N°65/2020, respuesta de la Ilustre Municipalidad de Quinta Normal, de fecha 17 de noviembre de 2020.
- 44) 79.- Of. N°018 respuesta de la Ilustre Municipalidad de La Cisterna, de fecha 13 de noviembre de 2020.
- 45) 81.- Ord. N°404/188/2020 respuesta de la Ilustre Municipalidad de Cerrillos, de fecha 09 de noviembre de 2020.
- 46) 86.- Oficio de Registro Vehículos Motorizados Ord. N°10943 de fecha 30 de septiembre de 2020, que remite documentos. 86.1.- De la PPU KJCT.68-7.
- 47) 86.5.- Solicitud de primera inscripción PPU KCPT.44-6.
- 48) 86.6.- Copia de Factura Electrónica N°217.
- 49) 86.7.- Copia de Formulario 88, Oscar Renato Emerson Rodríguez Silva.
- 50) 86.8.- Copia de comprobante de pago Servi Estado.

- 51) 86.9.- Solicitud de primera Inscripción PPU KCPT.36-5.
- 52) Factura electrónica primera venta N°216.
- 53) 86.11.- Copia de comprobante de transacción Tesorería General de la República, fecha 30-6-2018.
- 54) 86.12.- Copia declaración de transferencia patente KJCT.68-7.
- 55) 88.- Oficio N°4826 respuesta de la Ilustre Municipalidad de Providencia, de fecha 31 de octubre de 2020.
- 56) 89.- Ord. N°10/321: Respuesta de la Ilustre Municipalidad de Vitacura, de fecha 02 de noviembre de 2020.
- 57) 90.- Documentos relativos a la patente KPGW.13-7.
- 58) 91.- Copia solicitud de primera inscripción, PPU KLJK.79-4.
- 59) 91.2.- Copia de comprobante de transacción Tesorería General de la República, fecha 01-6-2018 pago \$0.
- 60) 92.- Copia Solicitud de primera Inscripción PPU KLJK.76-K.
- 61) 92.2.- Copia de comprobante de transacción Tesorería General de la República, fecha 01-6-2018, pago \$0.
- 62) 93.- Certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes en el R.V.M., patente KJCT.68-7.
- 63) 95.- Certificado de Inscripción KCPT.36-5.
- 64) 96.- Certificado de Inscripción KPGW.13-7.
- 65) 97.- Certificado de Inscripción KLJK.79-4.
- 66) 98.- Certificado de Inscripción KLJK.76-K.
- 67) 99.- Oficio respuesta de Banco Santander, relacionado con cliente Jesús Gacitúa Candia, que adjunta:
 - 68) 99.1.- Cartola de cuenta vista super digital Banco Santander desde 1-1-2020 a 31-01-2020, a contar del 99.2 al 99.9, detalles de movimientos desde febrero a septiembre de 2020.
 - 69) 101.- Requerimiento de información a Director Nacional del Servicio Nacional de Aduanas, de fecha 6 de octubre de 2020.
 - 70) 102.- Respuesta a requerimiento de información en Oficio N°8238 Servicio Nacional de Aduanas, respecto de las personas jurídicas individualizadas.

71) 103.- ORD. N°662 de 27 de octubre de 2020 del Departamento de Asesoría Técnica de la Policía de Investigaciones.

72) 104.- ORD: N°661 de 27 de octubre de 2020 del Departamento de Asesoría Técnica de la Policía de Investigaciones.

73) 107.- Documentos de vehículo patente GYLH.70.

74) 108.- Copia de hoja de estado de cuenta corriente N°22058010, Banco de Chile, desde 31-08-2017 hasta 29-09-2017.

75) 110.- copia de cheque endoso a nombre Gabriela Fernández Fernández y documentos de patente KDYY.76-1.

76) 111.- Documentos de la patente KBVV.94-7.

77) 112.- Documentos de la patente JHFV.67-8.

78) 113.- 4 hojas de conversaciones de whatsapp aportadas por la víctima Jeannette Cartes.

79) 114.- Documentos del vehículo PPU HSWJ.63-1.

80) 115.- Documentos del vehículo patente JHFX.82-4.

81) 116.- Documentos patente KZTP.55-K.

82) 117.- Reporte de armas de 16.10.20 de la DGMN correspondiente a un revólver marca Taurus.

83) 118.- Reporte de armas de 16.10.20 de la DGMN correspondiente a una pistola, marca CZ.

84) 119.- Reporte de armas de 16.10.20 de la DGMN correspondiente a una pistola marca Brevette.

85) 120.- Detalle de inventario del local "La parrilla del gaucho".

86) 123.- Copia de constitución de Comercializadora SYB SPA.

87) 125.- Sistema de consulta tributaria integrada del SII de Comercializadora SYB SPA.

88) 129.- Encargo policial SEBV_201802_5208 fecha 01-03-2018 del vehículo PPU KDTK.87 y certificado de inscripción y anotaciones vigentes en RVM.

89) 130.- Encargo policial SEBV_201802_2114 fecha 11-02-2018 vehículo PPU KFLJ.46 y certificado de inscripción y anotaciones vigentes en RVM.

90) 131.- Encargo policial SEBV_201801_1245, vehículo PPU JRPT.36 y certificado de inscripción y anotaciones vigentes.

- 91) 132.- Encargo policial SEBV_201803_0241 fecha 02-03-2018 vehículo PPU HSDR.84 y certificado de inscripción y anotaciones vigentes en R.V.M.
- 92) 133.- Certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes patente JSSD.29-3.
- 93) 136.- Encargo policial SEBV_201804_1283 fecha 07-04-2018 vehículo PPU KCRD.11 y certificado de inscripción y anotaciones vigentes en RVM.
- 94) 137.- Encargo policial SEBV_201804_3585 fecha 19-04-2018 vehículo PPU KBYT.41 y certificado de inscripción y anotaciones vigentes en RVM.
- 95) 138.- Certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes en el R.V.M, vehículo patente HYFL.43-1.
- 96) 143.- Certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes vehículo patente LDHP.37-9.
- 97) 144.- Encargo policial Departamento SEBV_201805_4923 fecha 27-05-2018 vehículo PPU KJKW.70 y Certificado de inscripción y anotaciones vigentes en RVM.
- 98) 145.- Of. Ord. N°420/2019 de 10 de enero de 2019, suscrito por el Sr. Alcaide del Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, remite información sobre visitas del acusado Yerko Silva Toro en dicho Centro.
- 99) 145.2.- Informe sobre Registro de visitas del interno Yerko Silva Toro.
- 100) 149.- Encargo de vehículo N°1365-10-2017 solucionado, Hyundai blanco sin PPU.
- 101) 152.- Encargo de vehículo N°3532-11-2017 solucionado, PPU JLKW.95.
- 102) 153.- Encargo de vehículo N°3495-06-2017, PPU HPCW.34 y certificado de inscripción.
- 103) 155.- Encargo de vehículo N°2235-11-2017 solucionado, PPU JLGW.41 y Certificado de inscripción y anotaciones vigentes en RVM.
- 104) 156.- Encargo policial SEBV_201711_5020, vehículo PPU JSYK.96 y Certificado de inscripción y anotaciones vigentes en RVM.
- 105) 157.- Encargo policial SEBV_201805_2961, vehículo PPU KCDK.72, y certificado inscripción.
- 106) 158.- Encargo policial SEBV_201805_5363, vehículo PPU KBHT.92 y certificado de inscripción y anotaciones vigentes en RVM.
- 107) 159.- Encargo policial vehículo PPU KFXZ.56 y certificado de inscripción y anotaciones vigentes en RVM.
- 108) 160.- Encargo policial SEBV_201807_4468 vehículo PPU KJCP.13-4.
- 109) Certificado de inscripción y anotaciones vigentes en RVM, cancelada por destrucción, de fecha 20.04.2021.

- 110) 161.- Encargo policial SEBV_201801_5938 vehículo PPU KFLF.91 y Certificado de inscripción y anotaciones vigentes en RVM.
- 111) 163.- Encargo policial SEBV_201712_2910 vehículo PPU JZHT.13 y Certificado de inscripción y anotaciones vigentes en RVM.
- 112) 164.- Encargo policial SEBV_201805_4925 PPU KHRS.38 y certificado de inscripción y anotaciones vigentes en RVM.
- 113) 165.- Encargo policial SEBV_201806_3215, vehículo PPU KFLK.8-4 y certificado de inscripción.
- 114) 166.- Encargo policial SEBV_201805_2398 PPU JWVG.95 y certificado de inscripción y anotaciones vigentes en RVM.
- 115) 170.- Ord N°8477-11279 de 13 de septiembre de 2017 del Subdepartamento de RVM adjunta información sobre vehículos inscritos con facturas Automóviles Orión Limitada: a) PPU JHHR.66. b) PPU GYKK.46. c) PPU GYKK.56. d) PPU JHFV.67. e) PPU JHFW.67. f) PPU JHFW.87. g) PPU JHFW.91. h) PPU GKWP.15. i) PPU HFXX.32. j) PPU JPPW.84.
- 116) 173.- Ord N°13950 de 09 de noviembre de 2017 del Registro de Vehículos Motorizados del Registro Civil, que adjunta información sobre vehículos inscritos con facturas de Automotora Kor SPA: a) PPU JRZY.69-2, b) PPU GYPP.92-7c) PPU JCCJ.30-2. e) Documentos respecto de la PPU JPSD.56-7, f) PPU GYLH.70-3.
- 117) 176.- Certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes en el R.V.M, vehículo patente KBWV.94-7.
- 118) 177.- Encargo policial SEBV_201806_032, vehículo PPU JCRV.62 y certificado de inscripción y anotaciones vigentes.
- 119) 178.- Encargo policial SEBV_201811_0509 PPU KFLK.57 y certificado de inscripción y anotaciones vigentes en RVM.
- 120) 179.- Encargo policial SEBV_201901_2994, vehículo PPU KKZL.22 y certificado de inscripción.
- 121) 181.-Encargo policial SEBV_201808_1301, vehículo PPU KRPC.90 y certificado de inscripción y anotaciones vigentes en RVM
- 122) 183.- Encargo policial SEBV_201812_2192, vehículo PPU original KTYZ.18 y certificado de inscripción.
- 123) 184.-Encargo policial SEBV_201904_1262 PPU JHWT.51 Y Certificado de inscripción y anotaciones vigentes en RVM.

- 124) 185.- Encargo policial SEBV_201910_2431 PPU LGCS.54 Y Certificado de inscripción y anotaciones vigentes en RVM.
- 125) 186.1- Encargo policial SEBV_201709_1713 fecha 09-09-2017 vehículo PPU JWDL.37 Y Certificado de inscripción y anotaciones vigentes en RVM.
- 126) 187.- Encargo policial SEBV_201708_1525, vehículo PPU JFSD.71 y certificado de inscripción.
- 127) 189.- Encargo policial SEBV_201801_0247 PPU KBFL.56 Y Certificado de inscripción y anotaciones vigentes en RVM.
- 128) 190.- Encargo policial SEBV_201712_5636 PPU JTJX.38 Y Certificado de inscripción y anotaciones vigentes en RVM.
- 129) 191.- Encargo policial SEBV_201712_2907 PPU JRYY.81 Y Certificado de inscripción y anotaciones vigentes en RVM.
- 130) 192.- Encargo policial SEBV_201712_2192 PPU JRZX.92 Y Certificado de inscripción y anotaciones vigentes en RVM.
- 131) 193.- Encargo policial SEBV_201710_0140, vehículo PPU JWZT.57, y Certificado de inscripción.
- 132) 207.- Certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes en el R.V.M, vehículo patente HSWJ.63-1.
- 133) 208.- Certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes en el R.V.M, vehículo patente GZTH.48-4.
- 134) 209.- Certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes en el R.V.M, vehículo patente JHFX.82-4.
- 135) 214.- Documentos respecto del vehículo patente PPU KBWK.63-6.
- 136) 215.- Encargo de vehículo N°3644-03-2018, PPU JWGG.76. Y Certificado de inscripción y anotaciones vigentes en RVM.
- 137) 216.- Encargo de vehículo N°4254-01-2018, solucionado patente JYDZ-78. Y Certificado de inscripción y anotaciones vigentes en RVM.
- 138) 220.- Certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes en el R.V.M, vehículo patente JYFS-53.
- 139) 221.- Documentos respecto del vehículo patente JYPV.39-K.
- 140) 222.- Documentos del vehículo PPU JYPV.39.

- 141) 225.- Memorándum Dact. N°2498, Servicio de Registro Civil e Identificación, resultado de pruebas dactiloscópicas de documentación de placas patentes LDLS.15-3; LFVW.14-7; LFVW.16-3; LFGB.76-5; LCFR.74-0; LDLR.97-1; LCFR.41-4; LCXS.80-8; LDLS.25-0.
- 142) 228.- Solicitud de primera inscripción placa patente LFVW.14-7.
- 143) 230.- Solicitud de primera inscripción placa patente LFVW.16-3.
- 144) 233.- Certificado de Inscripción patente LFGB.76-5.
- 145) 234.- Solicitud de primera inscripción placa patente LCFR.74-0.
- 146) 238.- Solicitud de primera inscripción placa patente LCFR.41-4.
- 147) 240.- Solicitud de primera inscripción placa patente LCXS.80-8.
- 148) 242.- Solicitud de primera inscripción placa patente LDLS.25-0.
- 149) 265.- Encargo de vehículo N°0912-07-2018 solucionado, PPU JDKT.73. Y Certificado de inscripción y anotaciones vigentes en RVM.
- 150) 267.- Encargo de vehículo N°0435-08-2018 solucionado, PPU JCDT.81.
- 151) 269.- Encargo de vehículo N°1301-08-2018 solucionado, PPU KRPC90. Y Certificado de inscripción y anotaciones vigentes en RVM.
- 152) 272.- Encargo policial SEBV_201802_0846 PPU JJZD.17. Y Certificado de inscripción y anotaciones vigentes en RVM.
- 153) 278.- Solicitud de transferencia N°2836 de la municipalidad de San Miguel.
- 154) 279.- Contrato de compraventa repertorio N°3271 de 07.05.18 entre Osvaldo Lagos Millar y Yesenia Caldas Medrano.
- 155) 280.- Comprobante N°6651 del Parque Automotriz Bicentenario N°6651 sobre transferencia de vehículo PPU HYDG-53.
- 156) 281.- Carta de responsabilidad sobre vehículo PPU HYDG-53 de 26.03.18.
- 157) 285.- Encargo policial SEBV_202002_1359 PPU LFHJ.89 y certificado de inscripción.
- 158) 286.- Encargo policial SEBV_201904_2402 vehículo PPU KLWR.85.
- 159) Certificado de inscripción y anotaciones vigentes en RVM.
- 160) 287.- Encargo policial SEBV_201904_4924, PPU LCJD.99 y certificado de inscripción.
- 161) 289.- Encargo de vehículo N°4254-01-2018 PPU JYDZ-78. Certificado de inscripción y anotaciones vigentes en RVM de la misma patente, inscripción cancelada por destrucción.

- 162) 298.- Encargo policial SEBV_ 202001_6557, vehículo PPU LZJV.17 y certificado de inscripción.
- 163) 303.- Contrato de compraventa vehículo PPU GYPP-92 entre Erick Álvarez y José Raiman Cordero.
- 164) 306.- Copia del contrato de compraventa entre Nelson Méndez Moya y Sociedad Agrícola Comercial Bermex Frut Limitada, correspondiente a grúa horquilla marca Caterpillar PPU HFX-33.
- 165) 307.- Certificado de inscripción RVM del vehículo marca Caterpillar PPU HFX-33.
- 166) 308.- Copia de cheque serie 0012087 de la cuenta N°32000001217 del Banco BBVA.
- 167) 309.- Copia de cheque serie 0012075 de la cuenta N°32000001217 del Banco BBVA.
- 168) 310.- Copia de vale vista serie 1112080 de la cuenta N°26700000017 del Banco BBVA.
- 169) 311.- Copia de contrato de arrendamiento de 01.03.2016 entre Silva Hnos. Ltda. y Construcciones Bernardo Olguín Donoso EIRL.
- 170) 314.- Certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes en el R.V.M, vehículo patente KKTP.99.
- 171) 319.- Oficio N°14.30.30.176/2019, de fecha 27 de agosto de 2019, Gendarmería de Chile, remitiendo informe de visitas con el interno Yerko Silva Toro y listado de personas enroladas con Yerko Silva Toro e información de la misma naturaleza.
- 172) 321.- Documentos relativos a PPU KWVF-56.
- 173) 332.- Documentos respecto del vehículo PPU KHTC-73.
- 174) 341.- Certificado de inscripción vehículo patente KZTP.55.
- 175) 353.- Certificado de inscripción patente LJLD.71.
- 176) 366.- Constitución de sociedad Valenzuela y Arce SPA de 29 de noviembre de 2017.
- 177) 367.- Constitución de Automotora Tap motor Limitada.
- 178) 368.- Carta respuesta de 14 de agosto de 2019 remitida por Certinet respecto de personas de interés que obtuvieron firma electrónica ante esa entidad acreditadora.
- 179) 369.- Constitución de Automotora Kor SPA de 28 de julio de 2017.
- 180) 370.- Documento "Resumen de consulta por RUT" aportado por la entidad acreditadora ACEPTA.COM.
- 181) 371.- Constitución de Automotora Nova SPA de 19 de enero de 2018.
- 182) 372.- Constitución de Comercializadora Best Car Limitada de 13 de enero de 2018.

- 183) 373.- Carta respuesta de 16 de agosto de 2019 remitida por E-CertChile respecto de personas de interés que obtuvieron firma electrónica ante esa entidad acreditadora.
- 184) 374.- Constitución de Comercializadora Full Orión Limitada de 31 de diciembre de 2016.
- 185) 375.- Constitución de "Compraventa de automóviles Orión Limitada" de 27 de diciembre de 2016.
- 186) 376.- Constitución de Automotriz Moya SPA de 25 de abril de 2018.
- 187) 377.- Constitución de Automotriz Méndez Moya SPA de 25 de abril de 2018.
- 188) 378.- Constitución de Automotora Sobreruedas SPA de 11 de abril de 2018.
- 189) 379.- Constitución de Olímpica Autos SPA de 19 de agosto de 2018.
- 190) 380.- Constitución de Automotora Astorga SPA de 22 de marzo de 2018.
- 191) 381.- Constitución de Astorga Maq SPA de 22 de marzo de 2018.
- 192) 382.- Constitución de Automotora Bilbao SPA de 21 de septiembre de 2018.
- 193) 383.- Constitución de Automotriz Portillo SPA de 07 de enero de 2019.
- 194) 384.- Constitución Automotriz Nuevo Laredo SPA de 07 de enero de 2019.
- 195) 385.- Constitución de Importadora Brunno Fritsch SPA de 27 de marzo de 2019.
- 196) 388.- Informe de visitas que han ingresado a ver al interno Yerko Silva Toro emitido por el CDP Santiago Sur, período 19.01.16-03.01.19.
- 197) 401.- Certificado de Inscripción patente KWPV.96 cancelada por destrucción, 12 de agosto de 2018.
- 198) 403.- Certificado de Inscripción vehículo patente KSCV.55.
- 199) 404.- Certificado de Inscripción vehículo patente JCDT.81.
- 200) 406.- 01 Certificado de Inscripción vehículo patente KYDT.90. Y certificado de Inscripción patente KYDT.90 Cancelada por destrucción.
- 201) 409.- Certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes en el R.V.M, vehículo patente KKTR.36.
- 202) 414.- Certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes en el R.V.M, vehículo patente LPSW.53-9.
- 203) 415.- Certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes en el R.V.M, vehículo patente LPSW.24.

- 204) 416.- Certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes en el R.V.M, vehículo patente LXJY.28-4.
- 205) 417.- Certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes en el R.V.M, vehículo patente LPHC.70.
- 206) 419.- Certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes en el R.V.M, vehículo patente LPHC.30.
- 207) 422.- Certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes en el R.V.M, vehículo patente LVGC.77.
- 208) 423.- Certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes en el R.V.M, vehículo patente LRCH.64.
- 209) 424.- Certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes en el R.V.M, vehículo patente LPHC.80.
- 210) 425.- Certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes en el R.V.M, vehículo patente LJPX.58.
- 211) 426.- Certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes en el R.V.M, vehículo patente LPHC.22.
- 212) 428.- Certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes en el R.V.M, vehículo patente LXVS.35.
- 213) 430.- Certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes en el R.V.M, vehículo LPSW.43.
- 214) 431.- Certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes en el R.V.M, vehículo LYDH.25.
- 215) 432.- Certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes en el R.V.M, vehículo LPKZ.56.
- 216) 434.- Certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes en el R.V.M, vehículo LRLJ.59 y certificado de inscripción PPU LRLJ.59 cancelada por destrucción.
- 217) 436.- Certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes en el R.V.M, vehículo LPHD.24.
- 218) 437.- Certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes en el R.V.M, vehículo JKXX.88.
- 219) 445.- Oficio respuesta Banco Estado, 20 de marzo de 2019, adjunta información de cuentas vigentes, cerradas y motivo del cierre, detalle de todos los movimientos efectuados en dichas cuentas, giros, depósitos, transferencias, copia de cartolas de los siguientes clientes que se indican.
- 220) 449.- Oficio respuesta Banco de Crédito e Inversiones, de fecha 5 de diciembre de 2018, adjuntando información, cartolas de cuenta corriente, cuenta vista, transferencias enviadas y recibidas, depósitos, respecto de las personas que indica.

221) 450.- Oficio respuesta Banco de Créditos e Inversiones de fecha 6 de noviembre de 2018 referente productos de personas que se indican.

222) 456.23.- Certificado de inscripción y anotaciones vigentes PPU KCPT.44-6.

223) 470.- Constitución de sociedad por acciones Automotriz Guillermo Morales SPA de 27.09.2019.

224) 471.- Constitución de sociedad por acciones Comercial Gildemeister SPA de 20.01.2020.

225) 472.- Constitución de sociedad por acciones C. Hernández SPA de 30.01.2020.

226) 483.- Documentos de patente LCXS.73.01.

227) 487.- Certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes en el R.V.M, vehículo patente KLWR.85.

228) 490.-Encargo policial SEBV_ 202001_0740 PPU LSJW.26 Y Certificado de inscripción y anotaciones vigentes en RVM.

229) 493.- Parte 1307 de 19.03.18 de la 33ª Comisaría de Ñuñoa.

230) 494.- Documentos patente KHKW.72.

231) 509.- Certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes en el R.V.M, vehículo patente LKKL-67.

232) 516.- Correo electrónico de fecha 28 de septiembre de 2020, Banco Santander, adjuntando información de la persona que indica.

233) 517.- Oficio respuesta banco Scotiabank de fecha 11 de agosto de 2020 que informa los productos que Claudia Sandoval Godoy.

234) 519.- ORD. N°15744 de 13.11.18 del Subdepartamento del Registro de Vehículos Motorizados del Registro Civil, documento que adjunta copia de los antecedentes sobre las PPU que se indican en el mismo.

235) 520.- Documentos de PPU JGYD.61.

236) 522.- Documentos de PPU GZTH.48-4.

237) 524.- Documentos respecto a la patente PPU HFXX.33-K.

238) 525.- Documentos de PPU JJLL.87-K.

239) 526.- Documentos de PPU GKWP.19-9.

240) 528.- Documentos de PPU JYPV.39-K.

241) 529.- Documentos de PPU JZKY.32-K.

- 242) 530.- Documentos relativos al vehículo PPU JXRD.74.
- 243) 531.- Documentos PPU KGFB.18-3.
- 244) 532.- Documentos PPU KBWW.94-3.
- 245) 533.- Documentos de PPU KJLJ.52-8.
- 246) 534.- Documentos de PPU KHKY.11-7.
- 247) 535.- Documentos de PPU KHPB.88-7.
- 248) 536.- Documentos de PPU GYKK.86-7.
- 249) 537.- Documentos de PPU HYZD.81-3.
- 250) 538.- Documentos de PPU KCPT.20-9.
- 251) 539.- Documentos de PPU HYDG.53-8.
- 252) 540.- Documentos de PPU HYDG.38-4.
- 253) 541.- Documentos de PPU GKWP.22-9.
- 254) 542.- Documentos de PPU GKWP.23-7.
- 255) 543.- Documentos de PPU KJPX.90-1.
- 256) 544.- Documentos de PPU KDVY.76-1.
- 257) 545.- Documentos de PPU JRZZ.79-6.
- 258) 546.- Documentos de PPU JRZZ.96-6.
- 259) 547.- Documentos de PPU KHSW.68-0.
- 260) 548.- Documentos de PPU KHSW.93-1.
- 261) 549.- Documentos de PPU KHSW.94-K.
- 262) 550.- Documentos de PPU HSG.054-2.
- 263) 551.- Documentos de PPU KHGR.40-6.
- 264) 552.- Documentos de PPU KJST.23.
- 265) 553.- Documentos de PPU KJCT.95-4.
- 266) 554.- Documentos de PPU KLLT.68-4.
- 267) 555.- Documentos de PPU KGFC.20-1.
- 268) 556.- Documentos de PPU KGFC.33-3.
- 269) 557.- Documentos de PPU KHPC.38-7.

- 270) 558.- Documentos de PPU HYDG.43-0.
- 271) 559.- Documentos de PPU KBSR.10-0.
- 272) 560.- Documentos de PPU HYFL.43-1.
- 273) 561.- Documentos de PPU JJLG.46-7.
- 274) 562.- Documentos de PPU GPCH.74-1.
- 275) 563.- Documentos de PPU JXRD.49-0.
- 276) 564.- Documentos PPU KBKR.44-2.
- 277) 565.- Documentos PPU HHBL.28-2.
- 278) 566.- Documentos PPU JZLP.77-4.
- 279) 567.- Documentos PPU KCFD.17-4.
- 280) 568.- Documentos PPU KHSW.99-0.
- 281) 569.- Documentos PPU KPFT.53-8.
- 282) 570.- Documentos PPU KHSD.85-1.
- 283) 571.- Documentos PPU KPFR.79-9.
- 284) 572.- Documentos PPU KPFT.54-6.
- 285) 573.- Documentos PPU KKYG.90-7.
- 286) 574.- Requerimiento de información a Director Servicio Registro Civil, solicitando información sobre el histórico de vehículos registrados a nombre de 78 personas individualizadas.
- 287) 575.- Ordinario N°12784 de Registro Vehículos Motorizados, de fecha 29 de octubre de 2018, adjunta información requerida.
- 288) 576.- Correo electrónico remitido por Comisario Larry Caro a Registro Civil e Identificación, solicitando información.
- 289) 577.- Correo electrónico enviado por Registro Civil e Identificación, adjunta información requerida.
- 290) 586.- Documentos de PPU KKYG-90.
- 291) 597.- Documentos de PPU KGFC.33
- 292) 604.- Parte policial N°1734 de fecha 11 de abril de 2019 patente LDHP.37.
- 293) 605.- Certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes en el R.V.M, vehículo patente KHCR.97.

- 294) 613.- Encargo policial de vehículo N°1686-04-2019, patente KHCR-97.
- 295) 614.- Parte denuncia N°890 de la Subcomisaría Carrascal, de 12.04.2018, vehículo PPU JCFD.67.
- 296) 615.- Parte denuncia N°4846 de la 25° Comisaría de Maipú, de 09.06.2018, vehículo PPU JYXD.81.
- 297) 616.- Declaración de transferencia PPU HYDG.43.
- 298) 617.- Documento "Recibo de dinero" PPU HYDG.43.
- 299) 618.- Documento titulado "Pacto" del vehículo PPU HYDG.43.
- 300) 619.- Documento que contiene 38 llamadas entrantes extraídas del teléfono celular incautado Camilo Sandoval Godoy.
- 301) 620.- Documento que contiene 146 llamadas salientes extraídas del teléfono celular incautado Camilo Sandoval Godoy.
- 302) 622.- Correo electrónico de fecha 17 de octubre de 2020, enviado por Felipe Carvajal Tadres, Jefe Sección Recepción de Antecedentes y Archivos, municipalidad de las Condes.
- 303) 623.- Certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes en el R.V.M. vehículo patente KPYL.92.
- 304) 626.- Captura de pantalla de certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes en el R.V.M, vehículo patente KXSP.88.
- 305) 628.- Documentos patente LGCC.49.
- 306) 629.- Documentos de PPU LKKL.73.
- 307) 636.- Parte denuncia N°2819 de 27.03.17 25ª Comisaría de Maipú, robo vehículo PPU JCLZ.35.
- 308) 647.- Copia parte denuncia N°2514 de 21.03.17 de la 36° Comisaría de Puente Alto, robo vehículo PPU JLFK.15.
- 309) 653.- Memorándum Dact. N°5655 de 04.12.18 de la Unidad de Dactiloscopia del Servicio de Registro Civil e Identificación, que da cuenta de pruebas dactiloscópicas.
- 310) 654.- 13 solicitudes de primera inscripción adjuntas a Memorándum Dact. N°5655.
- 311) 657.- PPU JCCJ.30-2: Copia Solicitud de primera inscripción N°2434 de 13.11.17.
- 312) 658.- Declaración de transferencia de vehículos motorizados N°1747-7 de 13.11.17 PPU JCCJ.30.
- 313) 659.- Certificado de homologación individual N°4889820, PPU JCCJ.30.

- 314) 660.- Parte denuncia N°2079 de 08.06.16 de la Subcomisaría Los Jardines, sobre robo de vehículo PPU HXKK.72.
- 315) 661.- Parte denuncia N°2232 de 28.05.17 de la 37A Comisaría de Vitacura, sobre robo de vehículo PPU JGXZ.72.
- 316) 665.- Denuncia Ord N°215 de 13.12.19 del Servicio de Registro Civil, sobre documentación falsa presentada para inscripción del vehículo PPU LGHS.14 que adjunta documentos.
- 317) 669.- Certificado de inscripción y anotaciones vigentes en el RVM, del vehículo Audi Q7 patente LRBS.44.
- 318) 672.- Contrato de compraventa de vehículo motorizado patente LRBS.44.
- 319) 675.- Copia denuncia ORD 263 de fecha 20 de diciembre de 2019 relacionada con vehículo patente KPYL.92-2 y adjunta documentos.
- 320) 676.- Documentos relativos al vehículo patente LFVW.16.
- 321) 677.- Copia de guía de despacho electrónica N°398167 de fecha 9 de junio de 2017, Automotora Gildemeister.
- 322) 678.- Copia de certificado de Inscripción en R.V.M. vehículo patente KWVF.42-5.
- 323) 679.- Documentos de patente LCFR.33.
- 324) 681.- Documentos patente KKLL.10.
- 325) 682.- Documentos patente LJLJ.18.
- 326) 683.- Documentos relativos al vehículo placa patente KXSS.27.
- 327) 684.- Documentos relativos al vehículo patente LDCR.89.
- 328) 685.- Documentos de patente LCCH.86.
- 329) 686.- Documentos patente HCHC.21.
- 330) 687.- Documentos patente KXSG.95.
- 331) 688.- Documentos respecto del vehículo patente LDLR.97.
- 332) 689.- Documentos patente KWVF.42.
- 333) 690.- Documentos patente LCHC.53.
- 334) 692.- Documentos de patente JKXX.66.
- 335) 693.- Documentos de patente LFVW.63.
- 336) 694.- Documentos patente KXSP.88.
- 337) 695.- Documentos patente KPYL.49.

- 338) 696.- Documentos patente KXSJ.24.
- 339) 698.- Documentos patente KZTP.55.
- 340) 699.- Documentos patente KRWC.41.
- 341) 700.- Documentos patente KVTB.46-9.
- 342) 701.- Documentos patente LCFR.74.
- 343) 702.- Documentos patente LDLS.15.
- 344) 703.- Documentos patente LCXS.80.
- 345) 704.- Documentos patente KWVF.69.
- 346) 705.- Documentos patente KWVF.56.
- 347) 706.- Documentos relativos al vehículo patente LFGB.76.
- 348) 707.- Documentos patente LCXW.22.
- 349) 708.- Documentos patente KTXP.57.
- 350) 709.- Documentos patente LDLS.25.
- 351) 710.- Documentos patente LFVW.14.
- 352) 711.- Documentos relativos al vehículo patente LBCY.63.
- 353) 712.- Documentos patente LBCV.61.
- 354) 713.- Documentos patente KZZR.17.
- 355) 714.- Documentos relativos al vehículo patente LBCY.57-3.
- 356) 715.- Documentos patente LCFR.41.
- 357) 716.- Documentos patente LBCX.22.
- 358) 717.- Documentos patente LBCZ.86.
- 359) 718.- Documentos relativos al vehículo patente LCPX.13.
- 360) 719.- Documentos patente LCFR.33.
- 361) 720.- Documentos patente KXST.97.
- 362) 722.- Documentos relativos al vehículo patente LBCZ.92
- 363) 723.- Patente LFZS.17 Denuncia ORD. N°199, de fecha 12 de diciembre de 2019, mediante la cual adjunta documentación posiblemente falsificada , suscrito por Gabriel Alarcón Jaldin, jefe de unidad de Detección y Denuncias Registro de Vehículos Motorizados, Registro Civil; 01 N° de inscripción LFZS.17 Resolución exenta N°33015 fecha 10 de septiembre de 2019;Solicitud de primera inscripción N°4400 de

fecha 19-07-2019 ;Copia de Factura electrónica N°520 Automotriz Portillo SPA, fecha 27-06-2019;Nota de crédito electrónica N°0012 de fecha 18-07-2019 Automotriz Portillo SPA; Formulario 88 Tesorería General de la República fecha 15-07-2019.

- 364) 724.- Documentos patente LCXJ.40.
- 365) 725.- Documentos patente LCPX.63.
- 366) 726.- Documentos patente KXHV.23.
- 367) 727.- Documentos patente KRWC.51.
- 368) 728.- Documentos patente KRWC.50.
- 369) 729.- Documentos patente KRWC.52.
- 370) 730.- Documentos patente KXHK.17.
- 371) 731.- Documentos patente JKXX.64.
- 372) 732.- Documentos patente JCDJ.56.
- 373) 733.- Documentos patente JPTP.98.
- 374) 734.- Documentos patente JCYK.95.
- 375) 735.- Documentos patente JCYK.94.
- 376) 736.- Documentos patente JCYK.86.
- 377) 737.- Documentos patente GWZD.31.
- 378) 738.- Documentos patente KYDX.56.
- 379) 739.- Documentos patente KYBZ.61.
- 380) 740.- Documentos patente KTFG.93.
- 381) 741.- Documentos patente KRWC.17.
- 382) 742.- Documentos patente KRWC.39.
- 383) 743.- Documentos patente KTXK.84.
- 384) 744.- Documentos patente KSWY.32.
- 385) 745.- Documentos patente KRWC.37.
- 386) 746.- Documentos patente KRWC.53.
- 387) 747.- Documentos patente KSSC.67.
- 388) 748.- Documentos patente KVLB.29.
- 389) 749.- Documentos patente KTFG.97.

- 390) 763.- Documentos patente KDYY.76.
- 391) 764.- Documentos patente LCXW.20.
- 392) 766.- Documentos patente LPHC.22.
- 393) 767.- Documentos patente LRCH.64.
- 394) 768.- Documentos patente LBVY.80.
- 395) 770.- Documentos patente LPHC.70.
- 396) 771.- Documentos patente LVGC.77.
- 397) 772.- Documentos patente LPHC.80.
- 398) 773.- Documentos del vehículo patente LXVS.35-4.
- 399) 774.- Documentos patente LPKZ.19.
- 400) 775.- Documentos patente LRBS.44.
- 401) 776.- Documentos patente LPKZ.56.
- 402) 777.- Documentos patente JKXX.88.
- 403) 778.- Documentos patente LJPX.58.
- 404) 779.- Encargo policial SEBV_ 201912_3805 vehículo PPU KYDV.97. Y Certificado de inscripción y anotaciones vigentes en RVM.
- 405) 780.- Documentos patente LBVX.82.
- 406) 782.- Documentos patente LDLS.13.
- 407) 783.- Documentos relativos al vehículo patente LJSF.50.
- 408) 784.- Documentos patente LBVX.85.
- 409) 785.- Documentos patente LJTK.43.
- 410) 786.- Documentos patente LJLD.71.
- 411) 787.- Documentos patente LJJD.43.
- 412) 788.- Documentos patente LKKL.67.
- 413) 790.- Documentos patente LPHC.30.
- 414) 791.- Documentos patente LVPD.14.
- 415) 792.- Documentos patente LXJY.28.
- 416) 793.- Documentos patente KKWC.35.

- 417) 794.- Documentos patente KLHJ.79.
- 418) 795.- Documentos PPU HHBL.28.
- 419) 797.- Documentos patente KKTR.11.
- 420) 798.- Documentos patente KKTR.26.
- 421) 799.- Documentos patente KKTR.36.
- 422) 800.- Documentos patente KKTR.44.
- 423) 801.- Documentos patente KSCV.55.
- 424) 802.- Documentos patente KPSD.13.
- 425) 803.- Documentos patente KPSD.14.
- 426) 804.- Documentos patente KRVV.61.
- 427) 805.- Documentos patente KPYJ.33.
- 428) 808.- Oficio Banco Santander Chile, remite información de la cuenta correntista DANIELA VALESKA OPAZO SANDOVAL, remitiendo productos y documentación de respaldo.
- 429) 809.- Documentos PPU HYFL.43.
- 430) 810.- Documentos del vehículo patente GPCH.74.
- 431) 813.- Vale vista N°20089561 de 25.01.18, cuenta 022900-2, tomador Tomás Moraga Faúndez.
- 432) 816.- Liquidaciones de sueldo del ex subcomisario Víctor Quezada Bravo.
- 433) 817.- Documentos vehículo PPU KPFT.53.
- 434) 818.- 3 planillas Excel cartolas de movimientos, transferencias efectuadas y transferencias recibidas, todo relativo a la cuenta corriente del titular VÍCTOR QUEZADA BRAVO.
- 435) 833.- Informe de 29.10.21 de Banco Estado, sobre los productos contratados por Víctor Quezada Bravo y Carolina Cornejo Arriagada.
- 436) 833.1.- Cartolas de movimientos y detalle de transferencias para el periodo 2016-2021, de los productos vigentes de Víctor Quezada y Carolina Cornejo Banco Estado.
- 437) 834.1 a 834.5. Órdenes del día septiembre de 2016 a mayo de 2017 suscrito por Christian Lucero Villarreal, prefecto inspector Jefe de Educación Policial.
- 834.6.- Copia de Libro 1-A "Novedades de la guardia" de la Escuela de investigaciones.

837.1.- Informe de Recopilación de Antecedentes N°05 ARA 03, de fecha 12 de julio de 2021; 837.2.- Cuaderno de antecedentes adjunto a Informe de Recopilación de Antecedentes N°05 ARA 3, de fecha 12 de julio de 2021.

438) 840.- 01 copia de presupuesto N°460, de la empresa Crea Publicidad de fecha 27.11.2018, respecto de La Parrilla del Gaucho.

439) 841.- 01 copia de presupuesto N°7050, de la empresa Crea Publicidad, de fecha 02.03.2020, respecto de La Parrilla del Gaucho.

440) 842.- 01 copia de Orden de Trabajo N°000040, sin fecha, de comercial ANDRES FRIGO, a nombre de "Albano local".

441) 843.- 01 copia Orden de Trabajo N°000047, de fecha 18.07.2019, de comercial ANDRES FRIGO, a nombre de "Motel La Montaña".

442) 844.- Certificado de defunción de doña Tatiana Arana Espinoza.

443) 846.- Documentos patente LXFR.60.

444) 847.1.- Documentos patente LXFS.16.

445) 847.2.- Documentos patente LXFS.20.

446) 847.3.- Documentos patente GYKL.45.

447) 847.4.- Documentos patente LVHZ.96.

448) 848.1.- Documentos patente KTZB.43.

449) 848.2.- Documentos patente KTZB.44.

450) 848.3.- Documentos patente KTVV.28.

451) 850.- Documentos patente LKKL.73.

452) 851.3.- Certificado de Inscripción y anotaciones vigentes en el R.V.M.

453) 852.- Documentos patente JSSD.29.

454) 854.- Patente LBVY.80, certificado de inscripción y anotaciones vigentes en RVM.

455) 855.1.- Documentos patente HCHC.40.

456) 855.2.- Documentos patente LBVY.68.

457) 855.3.- Documentos patente LJLV.85.

458) 855.4.- Documentos patente LPSW.31.

459) 855.5.- Documentos patente LXTY.25.

460) 855.6.- Documentos patente LJLV.73.

- 461) 856.1.- Patente LBVX.85: Certificado de inscripción y anotaciones vigentes en RVM.
- 462) 856.2.- Patente LJTK.43: Certificado de inscripción y anotaciones vigentes en RVM.
- 463) 856.4.- Patente LDLS.13: Certificado de inscripción a anotaciones vigentes en RVM.
- 464) 857.- Documentos patente KPTT.73.
- 465) 858.- Documentos patente HYDG.45.
- 466) 859.- Documentos patente KLJL.40.
- 467) 861.- Documentos patente HYDG.48.
- 468) 862.- Documentos patente KRWC.10.
- 469) 863.- Documentos patente KGFC.48.
- 470) 864.- Documentos patente KRKD.59.
- 471) 866.- Encargo vehículo vigente N°5036-03-2017, patente JCLZ.35.
- 472) 868.- Certificado de registro de vehículo placa patente JKfV.63. Y Certificado de registro de vehículos motorizados placa patente JKfV.63. Cancelada por destrucción
- 473) 876.- Copia de sentencia condenatoria, ejecutoriada, dictada por el 5° Juzgado de Garantía en causa RIT 3098-2018, contra AIMEL OSIEL GAVILAN CARO, de 12.08.2021.
- 474) 881.- Copia de sentencia condenatoria, ejecutoriada, dictada por el 5° Juzgado de Garantía en causa RIT 202-2021, contra CLAUDIA PAZ SANDOVAL GODOY, de 20.01.2021
- 475) 882.- Copia de sentencia condenatoria, ejecutoriada, dictada por el 5° Juzgado de Garantía en causa RIT 3098-2018, contra EDITH NELIDA SILVA SANCHEZ, de 11.03.2021.
- 476) 883.- Copia de sentencia condenatoria, ejecutoriada, dictada por el 5° Juzgado de Garantía en causa RIT 3098-2018, contra FRANCO ARNALDO CRUZ ILIGARAY, de 16.09.2021.
- 477) 884.- Copia de sentencia condenatoria, ejecutoriada, dictada por el 5° Juzgado de Garantía en causa RIT 3098-2018, contra FREDDY ALEJANDRO MIRANDA ARANA, de 28.07.2021.
- 478) 885.- Copia de sentencia condenatoria, ejecutoriada, dictada por el 5° Juzgado de Garantía en causa RIT 3098-2018, contra HANS ALEJANDRO BRAVO RIVEROS, de 07.09.2021.
- 479) 888.- Copia de sentencia condenatoria, ejecutoriada, dictada por el 5° Juzgado de Garantía en causa RIT 3098-2018, contra JEANNETTE DEL CARMEN TORO BRENET, DANIELA ESPINOZA TORO Y LUIS FELIPE ASTUDILLO PEÑA, de 22.04.2018.
- 480) 889.- Copia de sentencia condenatoria, ejecutoriada, dictada por el 5° Juzgado de Garantía en causa RIT 3098-2018, contra JESUS GACITUA CANDIA, BERNARDO OLGUIN DONOSO Y SEBASTIAN MARTINEZ ZAVALA, de 23.07.2021.

481) 893.- Copia de sentencia condenatoria, ejecutoriada, dictada por el 5° Juzgado de Garantía en causa RIT 3098-2018, contra MARCOS FERNANDO SUPANTA AGUILERA, de 12.01.2022.

482) 895.- Copia de sentencia condenatoria, ejecutoriada, dictada por el 5° Juzgado de Garantía en causa RIT 3098-2018, contra NICOLAS SEBASTIAN CHACON NAVARRO, de 14.10.2021.

483) 896.- Copia de sentencia condenatoria, ejecutoriada, dictada por el 5° Juzgado de Garantía en causa RIT 3098-2018, contra PAULA BECERRA LEYTON Y JOSE ALFREDO PAREDES QUEVEDO, de 02.05.2022.

484) 901.- Encargo policial SEBV_201706_2811 vehículo PPU JCZW.85. Y Certificado de inscripción y anotaciones vigentes en RVM.

485) 902.- Encargo policial SEBV_201702_0230, vehículo PPU HSWX.64. Y Certificado de inscripción y anotaciones vigentes en RVM.

486) 903.- Encargo policial SEBV_202002_3857 vehículo PPU LGBS.99 y certificado de inscripción.

487) 904.- Encargo policial SEBV_202002_3351 vehículo PPU LBWL.64. Certificado de inscripción y anotaciones vigentes en RVM, cancelada por destrucción 27.09.2021.

488) 905.- Encargo policial SEBV_202001_4170 vehículo PPU KXYX.37. Y Certificado de inscripción y anotaciones vigentes en RVM.

489) 906.- Encargo policial SEBV_201905_2840 vehículo PPU original JRSD.38 y certificado de inscripción y anotaciones vigentes.

490) 907.- Encargo policial, vehículo PPU LCSF.36 y certificado de inscripción y anotaciones vigentes en RVM, inscripción cancelada por destrucción 17.09.2021.

491) 908.- Encargo policial vehículo PPU LSVF.42 Y certificado de inscripción y anotaciones vigentes en RVM.

492) 909.- Encargo policial vehículo PPU LFRJ.49 Y certificado de inscripción y anotaciones vigentes en RVM.

493) 910.- Encargo policial vehículo PPU LJKF.43.

494) Y certificado de inscripción y anotaciones vigentes en RVM.

495) 911.- Encargo policial vehículo PPU KTZY.48 Y Certificado de inscripción y anotaciones vigentes en RVM.

496) 912.- Encargo policial vehículo PPU LPBH.69 Y certificado de inscripción y anotaciones vigentes en RVM.

- 497) 913.- Encargo policial vehículo PPU LLTS.76 Y Certificado de inscripción y anotaciones vigentes en RVM.
- 498) 914.- Encargo policial vehículo PPU LHDV.11.
- 499) Certificado de inscripción y anotaciones vigentes en RVM.
- 500) 915.- Encargo policial vehículo PPU KSXC.56 Y Certificado de inscripción y anotaciones vigentes RVM.
- 501) 916.- Encargo policial vehículo PPU LFRS.98.
- 502) Certificado de inscripción y anotaciones vigentes RVM.
- 503) 917.- Encargo policial vehículo PPU LRLJ.59 Y Certificado de inscripción y anotaciones vigentes en RVM.
- 504) 918.- Encargo policial PPU KPZL.25.
- 505) 919.- Encargo policial vehículo PPU KLRY.99 Y Certificado de inscripción y anotaciones vigentes en RVM.
- 506) 920.- Encargo policial vehículo PPU KPCL.32. Además, certificado de inscripción y anotaciones vigentes en RVM, inscripción cancelada por destrucción.
- 507) 921.- Encargo policial vehículo PPU KWPV.96.
- 508) 922.- Encargo policial vehículo PPU KVKR.63-7 y certificado de inscripción y anotaciones vigentes en RVM, inscripción cancelada por destrucción el 14.12.2021.
- 509) 923.- Encargo policial vehículo PPU original KXHZ.32 y anotaciones vigentes en RVM, cancelada por destrucción.
- 510) 924.- Encargo policial PPU LBYV.73 y certificado de inscripción.
- 511) 925.- Encargo policial vehículo PPU KWDD.29 y certificado de inscripción y anotaciones vigentes en RVM.
- 512) 926.- Encargo policial vehículo PPU JJRS.14. Además, el certificado de inscripción.
- 513) 927.- Encargo policial PPU KXRF.65, y certificado de inscripción y anotaciones vigentes.
- 514) 928.- Encargo policial vehículo PPU LGSJ.21. Además, el certificado de inscripción.
- 515) 929.- Encargo policial PPU LDLX.74. Certificado de inscripción y anotaciones vigentes.
- 516) 931.- Encargo policial PPU HDJH.38. Además, certificado de inscripción.
- 517) 932.- Encargo policial PPU KXJD.98 y certificado de inscripción.
- 518) 933.- Encargo policial PPU JBFH.38. Además, certificado de inscripción.

- 519) 934.- Encargo vigente PPU JKfV.63. Y Certificado de inscripción y anotaciones vigentes en RVM
- 520) 938.- Oficio respuesta banco ITAU-Corpabanca, fecha 4 de septiembre de 2019, relacionado con los productos que mantiene Daniela Espinoza Toro.
- 521) 941.- Certificado de inscripción vehículo patente LPHB.53.
- 522) 942.- Certificado de inscripción vehículo patente KYDV.97.
- 523) 945.- Encargo vigente vehículo PPU LJCG.80 Y certificado de inscripción y anotaciones vigentes en RVM.
- 524) 946.- Copia comprobante depósito Banco Estado, fecha 3 de noviembre de 2020 cuenta N°441457 Ministerio Público Rut 61.935.400-1, monto \$40.919.000.
- 525) 947.- Acta de recepción de dineros incautados Nue 6194736, monto \$1.180.000.
- 526) 948.- Acta de recepción de dineros incautados Nue 6194543, monto \$336.000.
- 527) 949.- Acta de recepción de dineros incautados relacionado con la Nue 6194544 monto \$1.000.000.
- 528) 950.- Acta de recepción de dineros incautados Nue 6194519, monto \$940.000.
- 529) 951.- Acta de recepción de dineros incautados Nue 6194733, monto \$75.000.
- 530) 952.- Encargo policial PPU GXPD.55 Y Certificado de inscripción y anotaciones vigentes en RVM.
- 531) 953.- Oficio N°12414 Dirección General Movilización Nacional.
- 532) 957.- Resolución Exenta N°32810 del Servicio de Registro Civil que rechaza inscripción del vehículo PPU LJVD.19 ante la oficina Til Til.
- 533) 958.-Resolución Exenta N°841 del Servicio de Registro Civil, que rechaza inscripción del vehículo PPU LJVD.24 ante la oficina Til Til.
- 534) 961.- Certificado de Inscripción patente KPZL.25 cancelada por destrucción.
- 535) 967.- Certificado de Inscripción patente HSWX.64, cancelada por Destrucción.
- 536) 974.- Certificado de Inscripción patente JCFD.77 cancelada por destrucción.
- 537) 980.- Certificado de Inscripción patente JYXD.81-6 cancelada por Destrucción, el 08.02.2020.
- 538) 988.- Certificado de Inscripción patente KFXZ.56 cancelada por S/exp causa.
- 539) 989.- Certificado de Inscripción patente LGCS.54 cancelada por Destrucción.
- 540) 993.- Certificado de Inscripción patente JDKT.73 cancelada por S/exp causa.

- 541) 994.- Certificado de inscripción y anotaciones vigentes en el RVM PPU KTFG.98.
- 542) 995.- Certificado de inscripción y anotaciones vigentes en el RVM PPU LXCS.51.
- 543) 996.- Certificado de inscripción y anotaciones vigentes en el RVM PPU LVHZ.96.
- 544) 997.- Certificado de inscripción y anotaciones vigentes en el RVM PPU LFXR.60.
- 545) 998.- Certificado de inscripción y anotaciones vigentes en el RVM PPU LSBF.24.
- 546) 999.- Certificado de inscripción y anotaciones vigentes en el RVM PPU LTJV.87.
- 547) 1.000.- Certificado de inscripción y anotaciones vigentes en el RVM PPU LXFR.82.
- 548) 1001.- Certificado de inscripción y anotaciones vigentes en el RVM PPU LXCD.80.
- 549) 1002.- Certificado de inscripción y anotaciones vigentes en el RVM PPU LXFR.78.
- 550) 1003.- Certificado de inscripción y anotaciones vigentes en el RVM PPU LJVD.54.
- 551) 1004.- Certificado de inscripción y anotaciones vigentes en el RVM PPU LTJV.81.
- 552) 1005.- Certificado de inscripción y anotaciones vigentes en el RVM PPU LXCD.14.
- 553) 1006.- Certificado de inscripción y anotaciones vigentes en el RVM PPU LVFY.80.
- 554) 1007.- Certificado de inscripción y anotaciones vigentes en el RVM PPU LXCB.61.
- 555) 1008.- Certificado de inscripción y anotaciones vigentes en el RVM PPU LVFZ.69.
- 556) 1009.- Encargo policial PPU JCFD.67. Certificado de inscripción.
- 557) 1010.- Documentos que registran la declaración de la testigo Tatiana América Arana Espinoza.

IV.- OTROS MEDIOS DE PRUEBA:

- 1) 1.- Un cuadro gráfico relacional compuesto por capturas de pantalla de Facebook y el vehículo patente LPC-22 marca Hyundai.
- 2) 5.- Imagen nombre de archivo 20200124-WA0157.jpg, de fecha 24-01-2020 relacionado con una imagen de comprobante de transferencia.
- 3) 6.- 05 imágenes nombre de archivo 20200124-WA0195.jpg; 20200124-WA0198.jpg; 20200124-WA0199.jpg; todos de fecha 24-01-2020 20200125-WA0077.jpg de fecha 25-01-2020, 20200128-WA0126.jpg de fecha 28-01-2020. NUE 5828096.
- 4) 7.- Imagen nombre de archivo 20200128-WA0135. jpg, de fecha 28 de enero de 2020 relacionada con una imagen de WhatsApp. NUE 5828096.
- 5) 8.- Imagen nombre de archivo 20200126-WA0049.jpg, de fecha 26-01-2020. NUE 5828096.

- 6) 9.- 03 Imagen nombre de archivo 20200126-WA.jpg; 20200126-WA0099.jpg; 20200126-WA0100.jpg todos de fecha 26-01-2020. NUE 5828096.
- 7) 10.- Imagen nombre Archivo 2200127-WA0406.jpg, de fecha 27 de enero de 2020. NUE 5828096.
- 8) 11.- Imagen nombre de archivo 20200129-WA0274.jpg de fecha 29-01-2020, relacionado con 02 imagen del sitio web www.tuempresaenundia.cl. NUE 5828096.
- 9) 12.- 04 imágenes nombre de archivo 20200205-WA0052.jpg;20200205-WA0053.jpg;20200205-WA0057.jpg;20200205-WA0055.jpg, todos de fecha 5-02-2020. NUE 5828096.
- 10) 14.- 01 imagen nombre de archivo 20200205-WA0366, de fecha 5-02-2020, relacionado a una captura de pantalla de WhatsApp.
- 11) 15.- 02 imagen de archivo 20200207-WA0112.jpg; 20200207-WA0123.jpg, ambos de fecha 7-2-2020, relacionados con 02 capturas de pantalla de WhatsApp de teléfono incautada a Yerko Silva Toro. NUE 5828096.
- 12) 16.- 02 imágenes nombre de archivo 20200207-WA0202.jpg, y 20200207-WA0203.jpg de fecha 7 de febrero de 2020. NUE 5828096.
- 13) 17.- 06 Imágenes 20200208-WA0020.jpg; 20200208-WA 0022; 20200208-WA0023.jpg; 20200208-WA-0024.jpg; 20200208-WA-0025.jpg;20200208-WA0026.jpg, todos de fecha 8 de febrero de 2020. NUE 5828096.
- 14) 18.- 01 imagen nombre de archivo 20200209-WA0180.jpg, de fecha 9 de febrero de 2020. NUE 5828096.
- 15) 19.- 1 imagen nombre de archivo 20200210-WA028.jpg, de fecha 10 de febrero de 2020. NUE 5828096.
- 16) 20.- Imagen nombre de archivo 20200211-WA0090.jpg, de fecha 11-02-2020. NUE 5828096.
- 17) 21.- 01 Imagen nombre de archivo 20200214-WA0250.JPG, de fecha 14-02-2020.
- 18) 22.- 01 imagen nombre de archivo 20200221-WA003.jpg, de fecha 21-02-2020. NUE 5828096
- 19) 23.- 8 Imágenes nombre todas de fecha 23 de febrero de 2020. NUE 5828096.
- 20) 24.- Imagen nombre de archivo 20200225-WA0069.jpg, de fecha 25-02-2020, vinculado a 2 imágenes. NUE 5828096.
- 21) 26.- Imagen nombre de archivo 20200225-WA0111.jpg, de fecha 25-02-2020. NUE 5828096.
- 22) 27.- Imagen nombre de archivo 20200226-WA0303.jpg, de fecha 26 de febrero de 2020. NUE 5828096.

- 23) 30.- Imagen nombre de archivo 20200227-WA0064.jpg de fecha 27 d febrero de 2020. NUE 5828096.
- 24) 31.- Imagen nombre de archivo 20200227-WA0084.jpg, de fecha 27-02-2020.
- 25) 32.- cuadros gráficos demostrativos de fotografía vehículo PPU LPHD.24.
- 26) 35.- Cuadros gráficos demostrativos de análisis de imágenes de notebook y archivos encontrados en el Notebook HP NUE 6194734 incautado a la imputada Paula Becerra Leyton.
- 27) 38.- Cuadros gráficos demostrativos de 12 fotografías del vehículo PPU HVHJ.40.
- 28) 39.- cuadros gráficos demostrativos que vinculan análisis morfológico de 11 imágenes correspondientes a los imputados Camilo Sandoval y Luis Astudillo.
- 29) 40.- Cuadros gráficos demostrativo de capturas de imágenes correspondientes a extracción y análisis de celular marca Nokia TA-1105 5.1 plus NUE 6133877 incautado al imputado Ilich Chopa.
- 30) 42.- Cuadros gráficos demostrativos de imágenes de la bandeja de entrada del correo electrónico graficabascur@gmail.com NUE 6134943 incautado al imputado Roberto Bascur Arancibia.
- 31) 43.- Cuadros gráficos demostrativos de imágenes de análisis contenidas en CPU NUE 6194560 incautada al imputado Roberto Bascur Arancibia.
- 32) 45.- Cuadro con direcciones IP adjunto a correo electrónico de 18.02.2021, enviado por el inspector Fernando Vásquez a VTR.
- 33) 46.- Cuadro con imágenes de direcciones IP desde donde se emitieron las facturas de Automotora Valenzuela y Arce SPA.
- 34) 47.- Cuadros gráficos demostrativos de análisis de imágenes del celular NUE 6194565 incautado al imputado Sebastián Martínez Zavala.
- 35) 48.- Cuadros gráficos demostrativos de imágenes de análisis de contactos del celular NUE 6194565 incautado al imputado Sebastián Martínez Zavala.
- 36) 51.- Cuadros gráficos demostrativos compuesto por 24 fotografías anexas a Informe policial N°1886 de 16.10.20 BIROCN sobre ejecución de entrada y Registro y detención del imputado Sebastián Martínez Zavala.
- 37) 53.- Cuadros gráficos demostrativos correspondientes a 20 fotografías de especies incautadas en Avda. Gladys Marín 6421, torre 1, dpto. 402, Estación Central, a los acusados Albano Silva y Paula Becerra.
- 38) 56.- 13 fotografías que forman parte de cuadros gráficos demostrativos de sitio de suceso y especies incautadas en Avda. Costanera 7488, Torre B, dpto. 204, San Pedro de la Paz, al acusado Ilich Chopa Aldana.

39) 57.- 08 fotografías que forman parte de cuadros gráficos demostrativos de sitio de suceso y especies incautadas en Callejón Las Conejeras S/N, parcela 24, María Pinto, al imputado Roberto Bascur Arancibia.

40) 61.- Cuadros gráficos demostrativos que contiene 15 fotografías de sitio de suceso y especies incautadas en calle El Esterillo N°1883, Pudahuel, al imputado Juan Provoste Salgado.

41) 63.- Cuadros gráficos demostrativos que contiene 21 fotografías de sitio de suceso y especies incautadas en Pasaje Tierra del Fuego 2050, Cerro Navia, imputado Juan Navarrete Vásquez.

42) 73.- Cuadros gráficos demostrativos que contienen 16 fotografías de las especies incautadas y del inmueble ubicado en Sara Gajardo N°6449, Cerro Navia, imputado DAVID MILLALEN LLANCAO.

43) 80.- Cuadros gráficos demostrativos que contienen 04 fotografías de sitio de suceso y especies incautadas en Los Arrayanes 6850 Lo Prado, imputado Camilo Sandoval Godoy, específicamente un arma y sus municiones.

44) 81.- Cuadros gráficos demostrativos que contienen 73 fotografías de sitio de suceso y especies incautadas en Los Arrayanes 6850 Lo Prado, imputado Camilo Sandoval Godoy.

45) 85.- Cuadro gráfico demostrativo "OPERACIÓN TAP MOTORS", describe las sociedades ilícitas constituidas, fecha de constitución, número de vehículos inscritos y socios, todos vinculados al líder Yerko Silva Toro.

46) 86.- Cuadro gráfico demostrativo "OPERACIÓN TAP MOTORS", describe la vinculación entre los imputados, funciones dentro de la asociación.

47) 92.- cuadros gráficos demostrativos que contiene 11 imágenes de referentes al imputado Albano Silva Toro.

48) 96.- Cuadros comparativos que contienen imágenes contenidas en la carpeta de imágenes del teléfono celular de Camilo Sandoval Godoy.

49) 99.- Cuadros comparativos de imágenes contenidas en la carpeta de imágenes del teléfono celular de Camilo Sandoval Godoy NUE 4036356. Imagen de Registro de vehículo motorizado patente KHCR.97 e imagen de Registro vehículo motorizado patente LDHP.37.

50) 100.- Cuadros comparativos que contiene 2 imágenes; imagen vehículo color blanco con capot abierto y motor a la vista contenida en la carpeta de imágenes del teléfono celular de Camilo Sandoval Godoy, marca Samsung, modelo Galaxy NUE 4036356; 02 imágenes perfil público facebook correspondientes a Aimel Gavilán Caro.

51) 101.- Cuadros comparativos de imágenes, todas contenidas en la carpeta de imágenes del teléfono celular de Camilo Sandoval Godoy, marca Samsung, modelo Galaxy NUE 4036356.

52) 102.- Cuadros comparativos de imagen contenidas en la carpeta de imágenes del teléfono celular de Camilo Sandoval Godoy, marca Samsung, modelo Galaxy NUE 4036356.

53) 103.- Cuadros comparativos de imágenes contenidas en la carpeta de imágenes del teléfono celular de Camilo Sandoval Godoy.

54) 104.- 01 Imagen que contiene un esquema del plan delictual sobre el que versa la acusación.

55) 108.- 01 fotografía del teléfono celular marca Motorola, modelo Moto E4, color dorado, NUE 5828096.

56) 109.- 01 imagen de cédula de identidad y nombre del archivo 1580304143565.jpg fecha 29-01-2020 10:22:23 horas de Matías Daniel Molina Daza, contenida en la carpeta de imágenes del teléfono celular correspondiente a Yerko Silva Toro, marca motorola. NUE 5828096.

57) 110.- 01 imagen de cédula de identidad y nombre del archivo 158014060824.jpg fecha 27-01-2020 12:56:48 horas de Eduardo Hernan Sanhueza Pérez, contenida en la carpeta de imágenes del teléfono celular correspondiente a Yerko Silva Toro, marca motorola. NUE 5828096.

58) 111.- Imágenes de nombre de archivo 1580343187710.jpg, y 1580343187945.jpg, de fecha 29-01-2020 21:13:07, y fecha 29-01-2020 21:13:08 horas respectivamente e imágenes de anverso y reverso de cédula de identidad de Renan Elías Guenteo Maliqueo, contenida en la carpeta de imágenes del teléfono celular de Yerko Silva Toro, marca Motorola NUE 5828096.

59) 112.- Imagen de nombre de archivo 1580424393063.jpg, de fecha 30-01-2020 a las 19:46:33 horas, e imagen de cédula de identidad de Jesús Diego Gacitua Candia, contenida en la carpeta de imágenes del teléfono celular de Yerko Silva Toro, marca Motorola NUE 5828096.

60) 114.- Imagen contenida en archivo 1580424901488.jpg, se observa un vehículo color gris con capot abierto contenida en la carpeta de imágenes del teléfono celular de Yerko Silva Toro, marca Motorola NUE 5828096.

61) 115.- Imágenes de de reverso y anverso de cédula de identidad de Leonidas Sebastián Hernández Concha, imágenes de de anverso y reverso de cédula de identidad de Renan Elías Guenteo Maliqueo, contenidas en la carpeta de imágenes del teléfono celular de Yerko Silva Toro, marca Motorola NUE 5828096.

62) 117.- Imágenes contenida en la carpeta de imágenes del teléfono celular de Yerko Silva Toro, marca Motorola NUE 5828096.

63) 118.- Imagen nombre de archivo 1581045164844.jpg, de fecha 07-2-2020 e imagen certificado de homologación individual para el vehículo patente LFHJ-89.

64) 119.- Imágenes, entre ellas, de reverso y anverso de cédula de identidad de Jonathan Washington Pérez Pérez, contenida en la carpeta de imágenes del teléfono celular de Yerko Silva Toro, marca Motorola NUE 5828096.

65) 123.- Imagen nombre de archivo 1581508100487.jpg de fecha 17-02-2020 a las 18:35:40 horas, e imagen de cédula de identidad de Sindy Amada Arancibia Muñoz, RUT 16.116.834-3, contenida en la carpeta de imágenes del teléfono celular de Yerko Silva Toro, marca Motorola NUE5828096.

66) 124.- Imagen nombre de archivo 1581530209726.jpg de fecha 12-02-2020 a las 14:56:49 horas, e imagen de comprobante de depósito de fecha 12-02-2020, por monto de \$20.000, portador Jesús Diego Gacitua Candia, destinatario Yasmin Reyes Reyes, Rut 18.051.325-6 a su cuenta Banco Estado contenida en la carpeta de imágenes del teléfono celular de Yerko Silva Toro, marca Motorola NUE5828096.

67) 125.-Imagen nombre de archivo 1581542913982.jpg de fecha 12-02-2020 a las 18:28:34 horas, e imagen de cédula de identidad de Marcos Fernando Supanta Aguilera, RUT 20.433.091-3, contenida en la carpeta de imágenes del teléfono celular de Yerko Silva Toro, marca Motorola NUE 5828096

68) 128.- 3 Imágenes contenidas en nombre de archivos, 1582303038701.jpg; 1582303039014.jpg; 1582307964607.jpg todos de fecha 21-02-2020 corresponde a imágenes del vehículo marca Fiat, patente LPHC-30, contenida en la carpeta de imágenes del teléfono celular de Yerko Silva Toro, marca Motorola NUE 5828096.

69) 129.- 9 imágenes del vehículo marca Fiat, color gris, patente LPHC-30, perteneciente a la empresa C HERNANDEZ SPA., inscrito a nombre de Jonathan Pérez Pérez, contenida en la carpeta de imágenes del teléfono celular de Yerko Silva Toro, marca Motorola NUE 5828096.

70) 130.- Imagen nombre de archivo 1582677964425.jpg de fecha 25-02-2020 e imagen de una placa patente LP.HC.70, corresponde a un vehículo marca Hyundai, modelo Tucson, empresa Gildemeister S.P.A, contenida en la carpeta de imágenes del teléfono celular de Yerko Silva Toro, marca Motorola NUE 5828096.

71) 131.- 2 Imágenes nombre de archivo 1582753473707.jpg; 1582753474472.jpg, ambos de fecha 26-02-2020 y dos imágenes del vehículo marca Peugeot color rojo patente LG.BS-99 contenida en la carpeta de imágenes del teléfono celular de Yerko Silva Toro, marca Motorola NUE 5828096.

72) 132.- 2 imágenes nombre de archivo 1582773103985.jpg y 1582773104298.jpg, ambas de fecha 27 de febrero de 2020, y dos imágenes del vehículo marca Toyota, modelo Rav 4, patente LDSJ-53 contenida en la carpeta de imágenes del teléfono celular de Yerko Silva Toro, marca Motorola NUE 5828096.

73) 133.- Imagen nombre de archivo 20200127-WA0180.jpg de fecha 27-01-2020 e imagen de comprobante de depósito de fecha 27-01-2020, por monto de \$60.000, portador Jesús Diego Gacitua Candia, destinatario Francisca Miranda Rut 19.572.119-k a su cuenta banco Estado, Banco Santander, Superdigital, contenida en la carpeta de imágenes del teléfono celular de Yerko Silva Toro, marca Motorola NUE 5828096.

74) 134.- Imagen nombre de archivo 20200201-WA0131.jpg, de fecha 01-02-2020, vinculado a la consulta de estado de solicitud del vehículo, oficina Pirque N° de solicitud 407, año 2020, placa patente LYDH-25, estado aceptada. contenida en la carpeta de imágenes del teléfono celular de Yerko Silva Toro, marca Motorola NUE 5828096.

75) 136.- 01 imagen nombre de archivo 20200219-WA0312.jpg, de fecha 19-02-2020, vinculada a 01 captura de pantalla de conversación de WhatsApp "edita_silva" contenida en la carpeta de imágenes del teléfono celular de Yerko Silva Toro, marca Motorola NUE 5828096.

76) 141.- Imagen de scanner efectuada al vehículo patente LJLD-71, en dependencias de Automotora Gildemeister, ubicado en Avenida Américo Vespucio N°570, comuna de Pudahuel, arrojando que número de chasis corresponde al vehículo patente LCJD-99.

77) 142.- 02 fotografías de la NUE 6194529: 02 cartuchos calibre 12 sin percutir, uno marca FLOCCHI y uno marca REMINGTON, incorporadas en el Informe Pericial Balístico N°86/021, de fecha 18.01.21.

78) 143.- 23 fotografías de las NUES 6194548, 6194554, 6194532 Y 6194533, incorporadas en Informe pericial balístico N°49/021 de 12.01.21.

79) 144.- 213 archivos de audio correspondientes a las escuchas fundantes de solicitud de OD que constan en Infopol 1669 de 02.09.19 BIROCN. Escuchas que corresponden a copia de los audios que constan en NUE 6194403 con la totalidad de las interceptaciones (NUE 6208104).

80) 145.- Imagen adjunta a correo electrónico de 22.02.21 remitente "Oficios VTR", con la información de las direcciones IP 200.83.60.130 y 200.83.60.198, ambas asociadas a Franco Cruz Iligaray.

81) 147.- Dos archivos de audio, uno PTT-20200123-WA0282 correspondiente a audio de WhatsApp levantado desde el celular del acusado Yerko Silva Toro, y uno 232434026_106 correspondiente a interceptación telefónica del N° +56996148739 del acusado Juan Navarrete Vásquez. ambos levantados bajo NUE 6398107, para Informe pericial de sonido N°462/021 (fecha recepción 22-12-2021 15:58:46)

82) 153.- 01 imagen correspondiente a pantallazo de consulta vía WhatsApp respecto de JORGE JARA QUIROGA, durante ejecución de orden de entrada y Registro en el inmueble ubicado en Los Arrayanes N°6850, Lo Prado, aportada por el inspector Francisco Saavedra Cerda, durante declaración telefónica de 06 de enero de 2021.

83) 155.- 80 capturas de imágenes de videos ubicados al interior del teléfono celular marca Motorola, incautado a Yerko Silva Toro NUE 5828096, contenidas en el informe policial N°1603 de fecha 3 de septiembre de 2020.

84) 173.- Set de 18 imágenes anexas a Informe policial N°3857 de 29.10.20 de la BICRIM Independencia, sobre compraventa del vehículo PPU LJJ-18 por parte de la víctima Diego Sandoval Navarrete, vendedor Rodrigo Sepúlveda Jiménez.

85) 177.- Imágenes Reporte de armas de 16.10.20 de la DGMN, anexo N°11 de informe policial 1889, correspondiente a 01 revólver marca Taurus, calibre .38 especial, serie N° 1562991, incautada al imputado DAVID MILLALEN LLANCAO.

86) 178.- Imágenes Reporte de armas de 16.10.20 de la DGMN, anexo N°12 de informe policial 1889, correspondiente a 01 pistola marca CS, modelo 75, calibre 9mm, serie N°XB2412, incautada al imputado DAVID MILLALEN LLANCAO.

87) 179- imágenes Reporte de armas de 16.10.20 de la DGMN, anexo N°13 de informe policial 1889, correspondiente a 01 pistola marca Brevette SGDГ serie N°176438, incautada al imputado DAVID MILLALEN LLANCAO.

88) 183.- Una imagen informe de las visitas que se enrolaron al acusado Yerko Silva Toro, cédula de identidad N°16.868.083-8, contenido en el oficio N°14[LA1] .30.30.211/2020, fecha 10 de junio de 2020, remitido por Jefe departamento De Investigación Criminal Gendarmería de Chile, Oscar Luna Mella, Coronel de Gendarmería.

89) 185.- 3 imágenes de captura de pantalla de WhatsApp, aportado por la víctima estafada Jorge Rodríguez Valderrama, correspondiente a la publicación en YAPO.CL fecha 25 de julio de 2020, vehículo marca Peugeot 2008 en \$11.000.000, marca Peugeot, patente LXVS.35, publicado por ANTONIA BASTIAS. incorporado en el informe policial N° 1708 de fecha 21 de septiembre de 2020, Brigada de robos metropolitana Centro Norte.

90) 188.- 06 imágenes de captura de pantalla de conversaciones de WhatsApp entre el teléfono de la víctima "JOSUE" y el vendedor "AUTO MACHALI" del vehículo Kia Sportage patente LRHC-64, incorporados en el informe policial N°1706 de fecha 21 de septiembre de 2020 Brigada de Robos Metropolitana Centro Norte.

91) 189.- 01 captura de imagen correspondiente a anverso y reverso del cheque Banco Santander, número de cuenta 000070607905, número de serie 000000007 por la suma de \$12.150.000 de fecha 5 de agosto de 2020 incorporados en el informe policial N°1706 de fecha 21 de septiembre de 2020 Brigada de Robos Metropolitana Centro Norte.

92) 191.- 01 captura de imagen oficio respuesta Banco Santander, cliente Jesús Gacitua Candia, que informa que sólo es cliente de Súper digital con una cuenta vista activa, número 71000184335, fecha de apertura 31-12-2019 y desde los números 192 a 200, se adjuntan capturas de imágenes de cartolas y movimientos de dicha cuenta desde el enero a septiembre de 2020.

93) 203.- 03 imágenes aportadas por la víctima estafada Gloria Gálvez Galaz a funcionarios de la Brilac incorporadas en el informe policial 227 de fecha 15 de octubre de 2020, relacionada con Camilo Sandoval Godoy, como el sujeto que le mostró y vendió el vehículo marca Hyundai, modelo Creta patente JHFV.67-8.

94) 207.- Set de 18 fotografías que forman parte de la ampliación del informe pericial de revenido químico N° 610-2017, relacionado con el vehículo patente JHFX.82

95) 208.- Audios extraídos con autorización judicial del teléfono celular incautado a Yerko Silva Toro, marca Motorola NUE 5828096, contenidos en CDS levantados con cadena de Custodia NUE 6396000.

96) 209.- Videos extraídos con autorización judicial del teléfono celular incautado a Yerko Silva Toro, marca Motorola NUE 5828096, contenidos en CDS levantados con cadena de Custodia NUE 6396000.

97) 210.- Capturas de imágenes de WhatsApp “transferir a terceros” y conversaciones de WhatsApp entre comprador y vendedor, incorporados en el informe policial 227 de fecha 15 de octubre de 2020 Brigada de Lavado de Activos.

98) 211.- Cuadro resumen de capturas de imagen que contiene fecha de constitución de sociedad Comercializadora SyB SPA, RUT 76.893.612-9, Socios, iniciación de actividades, representante legales; socios; actividades económicas; bienes raíces adquiridos; documentación timbrada ejercicio comercial 2019 según SII; Protestos Morosidades; listado de declaración mensual conforme formulario N°29 en los periodos de octubre y noviembre de 2018; enero, febrero junio septiembre noviembre año 2020; base imponible por periodos, ingreso brutos de dicho periodo agosto a diciembre de 2018 y de enero a octubre de 2019.

99) 215.- Cuadro resumen del año 2017 y 2018 de traspaso a cuenta vista a Comercializadora de productos alimenticios Albano Ariel Silva Toro EIRL y traspasos enviados de cuenta vista a Comercializadora de productos alimenticios Albano Ariel Silva Toro EIRL

100) 219.- Captura de imagen de vale vista emitido por banco Santander por la suma de \$115.000 (115.000.000.-) registrado como beneficiario Albano Silva Toro, Rut 13.56.296-7, tomador Automotora Procar Limitada Rut 76.439.261-2, fecha de emisión 29 de junio de 2017, cuenta 020370236667.

101) 220.- Cuadro resumen de imágenes respecto del inmueble adquirido por Albano Silva Toro en el año 2017 ubicado encalle Papa San Eleuterio N° 542, comuna de Pudahuel, que contiene fojas, número, año, nombre de quien está inscrito, dirección y comuna, naturaleza- fecha de escritura o inscripción, antecedentes de la inscripción, precio de adquisición cesión de derechos o transferencia.

102) 221.- Cuadro resumen de imágenes de transferencias de Daniela Espinoza Toro, cuenta 0212147923 banco Itau.

103) 223.- Cuadro resumen de imágenes de transferencias recibidas por Daniela Espinoza Toro de Jeannette Toro Brent.

104) 226.- cuadro resumen de imágenes patrimonio en caballos de Albano Silva Toro y Yerko Silva Toro.

105) 227.- Conversaciones audio interceptadas con autorización judicial correspondiente a Camilo Sandoval Godoy, Tatiana Arana Espinoza; Claudia Sandoval Godoy; Yerko Silva Toro; Freddy Miranda Arana; Albano Silva Toro; Sebastián Martínez Savala, Franco Cruz Iligaray; Aimel Gavilan Caro.

106) 228.- Conversaciones audio interceptadas con autorización judicial correspondientes a Camilo Sandoval Godoy; Claudia Sandoval Godoy, Albano Silva Toro; Aimel Gavilan Caro; Freddy Miranda Arana contenidas en el informe policial n°01197 de fecha 2 de julio de 2020 ingresada en carpeta digital con 2 de julio de 2020 a las 13:01 horas.

107) 232.- Imágenes de Transcripciones de conversaciones telefónicas intervenidas previa autorización judicial, que constan en Informe policial N°3 de 23 de enero de 2019 de la Brigada Investigadora de Robos Centro Norte.

108) 235.- 15 imágenes incorporadas en el informe pericial fotográfico N°844/2018 de fecha 10 de abril de 2018.

109) 237.- 22 imágenes incorporadas en el informe pericial con aplicación de revenido químico N°006-2018, de fecha 12 de enero de 2018.

110) 238.- 01 imagen de cheque de Banco de Chile N°6544853 por la suma de \$500.000, corresponde al abono de reserva del vehículo placa patente JVPV-39, depositado por Juan Carlos Rodríguez Bravo en la cuenta corriente 171.06039-03 del banco de Chile.

111) 239.- 01 imagen de publicación en portal Chile Autos del vehículo placa patente JVPV-39, en la suma de \$13.480.000.

112) 240.- Imagen de publicación de vehículo Jeep Grand Cherokee 3.6. Limited, \$22.000.000.-

113) 244.- 33 fotografías anexas a informe pericial fotográfico N°2072/2018 de 26.09.18, vehículo PPU GKWP-19.

114) 245.- 06 fotografías en cuerpo de informe pericial químico N°678/2018 de 28.08.18, vehículo PPU GKWP-19.

115) 246.- 01 imagen correspondiente a pantallazo de conversación vía WhatsApp de 26.03.18, chat con contacto "Juan Audi A4".

116) 250.- 51 fotografías anexas a informe pericial fotográfico N°1837/2018 de 24.08.18, vehículo PPU HYDG-53 y patente HHBL.27

117) 258.- 03 fotografías del vehículo marca Nissan. modelo Kicks, color negro placa patente JJLL.87, enviada por José Raiman Cordero a la víctima estafada Juan Carlos Rodríguez.

118) 259.- una imagen de google maps y una imagen de Avda. Las Torres N°1040, comuna Lo Prado, Región Metropolitana, domicilio vinculado a Camilo Sandoval Godoy.

119) 260.-una imagen de google maps y una imagen de calle Los Arrayanes N°6850, comuna de Lo Prado., Región Metropolitana, domicilio vinculado a Camilo Sandoval Godoy.

120) 262.- 55 imágenes incorporadas al cuerpo del Informe policial N°83 de 31.10.18 BIROCN.

121) 266.- 09 hojas de imágenes que contienen comunicaciones vía WhatsApp entre Juan Carlos Rodríguez y José Raiman, proporcionadas a la investigación por Rodríguez Vera, incorporadas en el informe policial N°7 de fecha 12 de febrero de 2019.

122) 267- Set de 9 fotografías, contenidas en el Informe Pericial mecánico N°120/2018 de fecha 18 de diciembre de 2018 del vehículo JPSD.56, suscrito por el perito mecánico Juan Gonzalez Bahamondez.

123) 273.- Set de 25 fotografías contenidas en el informe pericial fotográfico N°2067/2018 de fecha 25 de septiembre de 2018, suscrito por la perito Marjorie Valdivia Muñoz.

124) 277.- 01 imagen en cuerpo informe pericial 261/2019 de 06.03.19.

125) 279.- 01 imagen incorporada en cuerpo de Infopol 43 de 25.07.19 JENACROF.

126) 282.- Imágenes de documentos de block de notas correspondiente a dos páginas de conversación vía WhatsApp entre el comprador del vehículo PPU LCPX-13 Ronald Cohn y el vendedor Emmanuel Sanhueza.

127) 283.- Imágenes de copia de “captaciones a la vista” N°00446974 de Banco de Chile, cuenta N°2600100, fecha de emisión 06.02.2019, tomador Ronald Cohn Karger, beneficiario Emmanuel Sanhueza Iturra, por monto de \$14.000.000.- La testigo señaló que era el vale vista tomado por la víctima, en la oficina de Providencia.

128) 284.- Imágenes Copia de “depósito a la vista” N°026386-0 de Banco de Chile, cuenta N°2600100, fecha de emisión 06.02.2019, a nombre de Emmanuel Sanhueza Iturra, por el monto de \$14.000.000.-

129) 285.- 02 imagen incorporada en cuerpo de Infopol 44 de 25.07.19 JENACROF.

130) 292.- Imágenes Informe Autofact PPU KHTC-73.

131) 298.- 1.- Fotografía que se tomó en el domicilio de la propiedad, 2.- red social de Tatiana Arana “tatita_jacob”; 3.- pantallazo de una foto de Tatiana, posando con el vehículo referido LBCY.57, en la parte derecha se ve el usuario “tatita_Jacob”; 4.- red social de Fredy Miranda “freddy_yy_mf”; 5.- fotografía encontrada en este perfil, se ve la camioneta Nissan, a la derecha aparece el usuario “freddy_yy_mf”, ubicación

en Laguna Verde Valpo; 6.- fotografía del mismo perfil, en la misma ubicación, se aprecia la camioneta de frente y el blanco investigativo Fredy Miranda, se aprecia parte de la placa patente terminada en 7.

132) 302.-Imágenes de Transcripciones de conversaciones telefónicas intervenidas previa autorización judicial, que constan en Informe policial N°47 de 29 de julio de 2019 de la Brigada Investigadora de Robos Centro Norte.

133) 303.- Set de 5 fotografías que contiene imágenes del vehículo KZTP.55 y su documentación, contenido en el informe policial N°47 de fecha 29 de julio de 2019, Brigada de Robos Metropolitana Centro Norte.

134) 304.- 17 imágenes correspondientes a conversación de WhatsApp entre David Arias Herrera y Hernán Sanhueza, respecto de compraventa de vehículo PPU LBCY-63.

135) 313.- Una Captura de imagen de red social abierta Facebook, correspondiente a Taty Espinoza, contenida en el informe policial N°42 de fecha 22 de julio de 2019, Brigada de Robos Metropolitana Centro Norte.

136) 314- Set 19 fotografías, referentes a vigilancias a Freddy Miranda; Carla Leal Leal y Franco Cruz Iligaray de fecha 13 de junio de 2019; comparativas con imagen de facebook abierto e Instagram de Freddy Miranda, Factura N°124 de fecha 13 de junio de 2019, importadora Brunno Fritsch SPA; formulario N°88 Tesorería General de la República y comprobante de pago.

137) 330- Imágenes de Transcripciones de conversaciones telefónicas intervenidas previa autorización judicial, que constan en Informe policial N°1669 de 02.09.19 de la BIRO Centro Norte.

138) 331.- 84 imágenes que constan en el cuerpo del Informe policial N°1669 de 02.09.19 de la BIRO Centro Norte.

139) 361.- 19 fotografías contenidas en 01 CD anexo al Informe pericial fotográfico N°1201/2019 de 11.04.19 Lacrim.

140) 362- 04 imágenes incorporadas en el cuerpo del Informe pericial químico N°243/2019 de 27.03.19 Lacrim.

141) 376.- 01 set con 18 fotografías, contenidas en el informe pericial fotográfico N°366/2019 de fecha 11 de febrero de 2019, suscrito por la perito fotográfico LACRIM, Paulina Silva Molina. referente vehículo patente KKTR-36.

142) 379.- 19 capturas de imágenes contenidas en el informe policial N°01588 de fecha 2 de septiembre de 2020, Brigada de Robos Metropolitana Centro Norte.

143) 392.- 19 fotografías contenidas en el informe pericial fotográfico N°281/2019 de fecha 5 de febrero de 2019, vinculado al vehículo patente KSCV-55, suscrito por la perito Beatriz Arraño Estay.

144) 417.- 39 fotografías adjuntas en cuerpo de Informe pericial con aplicación de revenido químico N°6338 de 31.12.18, correspondiente a vehículo PPU falsa KHKW.72, original KFXZ.56.

145) 427.- 16 fotografías incorporadas al cuerpo del informe pericial con aplicación de revenido químico N°5212 de 06.11.18, vehículo PPU PPU KKYG.90.

146) 433.- 24 fotografías incorporadas al cuerpo del informe pericial con aplicación de revenido químico N°357-2018 de 12.09.18, vehículo PPU PPU KGFC.33.

147) 438.- 24 fotografías incorporadas al cuerpo del informe pericial con aplicación de revenido químico N°349-2018 de 11.09.18, vehículo PPU KJLJ.52.

148) 439- 17 fotografías incorporadas al cuerpo del informe pericial de revisión físico y técnico N°4099 de 28.08.18, vehículo PPU KJLJ.52

149) 445.- 19 fotografías incorporadas al cuerpo del informe pericial con aplicación de revenido químico N°340-2018 de 03.09.18, vehículo PPU HYDG.43.

150) 446.- 22 fotografías incorporadas al cuerpo del informe pericial de revisión físico y técnico N°4100 de 28.08.2018, vehículo PPU HYDG.72

151) 457.- 23 fotografías incorporadas al cuerpo del informe pericial de revisión físico y técnico N°4098 de 28.08.18, vehículo PPU KCPT.44

152) 458.- set 02 fotografías del vehículo placa patente LDHP.37 contenido en el informe policial N°381 de fecha 12 de febrero de 2020.

153) 464.- 24 fotografías incorporadas al cuerpo del informe pericial con aplicación de revenido químico N°337-2018 de 07.09.18, vehículo PPU JXRD.74.

154) 465.- 15 fotografías incorporadas al cuerpo del informe pericial de revisión físico y técnico N°4097 de 28.08.18, vehículo PPU JXRD.74.

155) 466.- 18 fotografías incorporadas al cuerpo del informe pericial con aplicación de revenido químico N°362-2018 de 07.09.18, vehículo PPU KBWV.94.

156) 467- 14 fotografías incorporadas al cuerpo del informe pericial de revisión físico y técnico N°3868 de 14.08.18, vehículo PPU KBWV.94

157) 469.- Imágenes contenidas en la carpeta de imágenes del teléfono celular de Camilo Sandoval Godoy, marca Samsung, modelo Galaxy NUE 4036356.

158) 470.- Imágenes contenidas en la carpeta de imágenes del teléfono celular de Camilo Sandoval Godoy, marca Samsung, modelo Galaxy NUE 4036356.

159) 471.- Imagen de nombre de archivo IMG20190418-WA0022.jpg, de fecha 18-04-2019; imagen de adhesivo identificador del vehículo marca Ford motor Co, todas contenidas en la carpeta de imágenes del teléfono celular de Camilo Sandoval Godoy, marca Samsung, modelo Galaxy NUE 4036356.

160) 472.- Imagen de nombre de archivo IMG20190409-WA0136.jpg, de fecha 9-04-2019; imagen certificado de homologación individual, número de Registro 5430225 asociado a la patente KTVL.98, todas contenidas en la carpeta de imágenes del teléfono celular de Camilo Sandoval Godoy, marca Samsung, modelo Galaxy NUE 4036356.

161) 473.- Imagen de Registro de Vehículos motorizados vehículo patente KTVL.98-3; imagen de documento de encargo vigente del vehículo patente KTVL.98-3, fecha encargo 8 de abril de 2019.

162) 474.1.- Imagen de nombre de archivo 20190417-143448.jpg, de fecha 17-04-2019, imagen Camilo Sandoval Godoy, contenida en la carpeta de imágenes del teléfono celular de Camilo Sandoval Godoy, marca Samsung, modelo Galaxy NUE4036356.

163) 474.2.- Audios extraídos con autorización judicial del teléfono celular incautado Camilo Sandoval Godoy marca Samsung, modelo Galaxy NUE 4036356.

164) 476.- Set de 11 capturas de imagen extraídas de videos contenidos del teléfono celular incautado Camilo Sandoval Godoy marca Samsung, modelo Galaxy NUE 4036356.

165) 479.- Imágenes de Declaración de transferencia de vehículo motorizado y giro y pago de impuesto, N°5445-3, correspondiente a PPU HYDG.43, vendedor Vanesa Marín Conejera, comprado Carmen Sandoval Contreras.

166) 480.- Imágenes de Documento "Recibo de dinero" suscrito con fecha 09.07.18 entre Vanesa Marín Conejera y Carmen Sandoval Contreras, ante la Notaría Jaime Bernal Larraín, por concepto de abono a futura venta del vehículo PPU HYDG.43.

167) 481.- Imágenes de Documento titulado "Pacto", suscrito con fecha 09.07.18 entre Vanesa Marín Conejera y Carmen Sandoval Contreras, ante la 38° Notaría de Santiago, relativo a compraventa del vehículo PPU HYDG.43.

168) 490.- Imágenes de Copia certificado de homologación N°4801030 de 08.04.17 PPU JHFV.67.

169) 491.- Imágenes de Copia certificado de inscripción RVM folio 31815224 PPU JHFV.67.

170) 492.- Imágenes de Copia póliza SOAP póliza N° 22327616 PPU JHFV.67.

171) 493.- Imágenes de Copia comprobante de pago de permiso de circulación N° 390987 PPU JHFV.67, a nombre de Jorge Salinas Uribe.

172) 494.- Imágenes de Copia de informe Autofact respecto PPU JHFV.67.

173) 496.- imágenes de Copia solicitud de transferencia N° 6412 de 03.05.17, PPU JHFV.67

- 174) 498- Solicitud de inspección asociada a propuesta para seguro automotriz HDI N°57493392, PPU JHFV.67
- 175) 500.- Imágenes de- Certificado de inscripción RVM asociado a PPU JHFV.67
- 176) 501.- Imágenes de Declaración de transferencia de vehículos motorizados y giro y pago del impuesto F/23 N° ilegible, PPU JHFV.67.
- 177) 502.- Imágenes de Registro de conversación entre Mauricio Zamora y Jorge Salinas Uribe mediante plataforma yapo.cl, respecto de vehículo PPU JHFV.67.
- 178) 505.- Imágenes de conversación vía WhatsApp entre Mauricio Zamora y vendedor de vehículo PPU JHFV.67.
- 179) 507.- Imágenes de Fotografía de WhatsApp correspondiente a vehículo PPU JHFV.67.
- 180) 509.- imágenes de Copia comprobante de giro por caja de 17.04.17 emitido por Banco Santander a nombre de Cleber Serdeira.
- 181) 512.- Imágenes de 12 fotografías adjuntas en cuerpo de Informe pericial con aplicación de revenido químico N°280-2017 de 02.08.17, vehículo PPU HFXX.32, original JLFK.15.
- 182) 513.- 12 fotografías adjuntas en cuerpo de Informe de revisión física y técnica N°3392 de 02.08.17, vehículo PPU HFXX.32, original JLFK.15.
- 183) 514- 12 fotografías adjuntas en cuerpo de Informe de revisión física y técnica N°4782 de 23.10.17, vehículo PPU JHFX.82, original JKFY.35.
- 184) 515- 15 fotografías adjuntas en cuerpo de Informe pericial con aplicación de revenido químico N°560-2017 de 04.12.17, vehículo PPU JHFW.91, original HVHJ.40.
- 185) 519- 15 fotografías incorporadas en el cuerpo de Informe pericial mecánico N°3020 de fecha 03.07.17, relacionado con el vehículo placa patente JHFV.67.
- 186) 523.- 27 fotografías incorporadas en el cuerpo de Informe pericial con aplicación de revenido químico N°170-2018 de 01.06.18, vehículo PPU GYKK.56.
- 187) 523.1.- 20 fotografías incorporadas en el cuerpo de Informe pericial con aplicación de revenido químico N°144-2017 de 02.05.18 SEBV relacionado con vehículo PPU JSSD.29.
- 188) 525- 15 fotografías incorporadas en el cuerpo de Informe pericial con aplicación de revenido químico N°132-2018 de 02.05.18 SEBV relacionado con vehículo PPU GYKK.46.
- 189) 526.- 12 fotografías incorporadas en el cuerpo de Informe pericial con aplicación de revenido químico N°624-2017 de 08.01.18 SEBV relacionado con vehículo PPU HHBL.12.
- 190) 530.- 55 fotografías incorporadas en cuerpo del Informe SEBV 2974 de 20.06.18.

191) 531.- 13 fotos incorporadas en cuerpo de informe Pericial químico N°510-2017 de 21.11.17 SEBV en relación a vehículo PPU GYLH.70.

192) 533.- 11 fotos incorporadas en cuerpo de informe Pericial químico N°571-2017 de 07.12.17 SEBV relacionado con vehículo PPU JCCJ.30.

193) 534.- 10 fotos incorporadas en cuerpo de informe de revisión físico y técnica N°4939 de 03.11.17 SEBV relacionado con vehículo PPU GZTH.48.

194) 535.- 21 fotos incorporadas en cuerpo de informe Pericial químico N°538-2017 de 22.11.17 SEBV relacionado con vehículo PPU GZTH.48.

195) 536.- 19 fotos incorporadas en cuerpo de informe Pericial químico N°173-2018 de 17.03.18, vehículo PPU JHFW.67.

196) 540.- Set de 12 fotografías, correspondiente al vehículo patente LPHB.53 Y documentación incautada.

197) 541.- Set de 6 fotografías correspondientes al vehículo PPU LJLV.85

198) 542.- 01 fotografía vehículo patente LJPX.58, la testigo indicó que corresponde al que Víctor Jiménez Bugueño adquirió en la comuna de la Ligua.

199) 545.- 21 imágenes de captura de pantalla del vehículo patente JP SL.56.

200) 546.- 08 hojas que contienen imágenes y conversaciones en red social Facebook entre un sujeto YANPIER EDDIEL y víctimas estafadas.

201) 547.- 4 hojas de conversaciones por WhatsApp entre el número +56994257644 y el vendedor de la camioneta marca Kia entre el 15 de enero hasta el 23 de enero de 2019 relacionado con la permuta de los vehículos patente KKLL.10 Y CCPB.23.

202) 548.- 10 fotografías del vehículo patente KKLL.10: 4.- corresponde al St. Wg. Kia Sportage, la parte trasera y la 5.- corresponde a la parte delantera.

203) 549.- 03 capturas de pantalla de conversaciones por WhatsApp entre los teléfonos +56994257644 y +56982512453 e imagen del vehículo patente CCPB.23.

204) 550.- 02 captura de pantalla red facebook de fecha 2 de octubre de 2018 publicado por Rodrigo Stark, Renault Koleos 2018 “vendido” y 8 imágenes del vehículo.

205) 551.- Set 12 fotografías contenidas en el informe N°0379 de fecha 30-01-2020, vinculado a los vehículos patente LJLJ.18 Y LGCS.54, suscrito por Alejandro Araya Espinoza, sargento segundo, SEVB de carabineros.

206) 552.- 11 fotografías contenidas en Informe de revisión físico y técnico N°1742 de 24.04.18 del vehículo PPU HHBL.28, del SEBV.

207) 553.- 16 fotografías contenidas en informe pericial con aplicación de revenido químico N°162-2018 de 23.05.18, PPU HHBL.28.

208) 554.- 22 fotografías contenidas en informe pericial con aplicación de revenido químico N°336-2018 de 24.08.18 PPU KCFD.67.

209) 555.- 12 fotografías contenidas en Informe de revisión físico y técnico N°3775 de 08.08.18 del vehículo PPU KCFD.67, del SEBV.

210) 559.- 19 fotografías contenidas en informe pericial con aplicación de revenido químico N°121-2018 de 13.04.18 PPU JXRD.49.

211) 560.- 16 fotografías contenidas en informe pericial con aplicación de revenido químico N°092-2018 de 23.03.18 PPU JZLP.77.

212) 561.- 9 fotografías contenidas en Informe de revisión físico y técnico N°1022 de 15.03.18 del vehículo PPU JZLP.77.

213) 562.- Imágenes de relacionadas con el vehículo PPU JZLP.77.

214) 564.- 46 fotografías contenidas en Informe pericial de Sitio del Suceso N°2000-2018 de 04.07.18, correspondiente a recuperación del vehículo PPU JZLP.77.

215) 566.- 11 fotografías contenidas en Informe de revisión físico y técnico N°1197 de 26.03.18 del vehículo PPU HYFL.43.

216) 567.- 13 fotografías contenidas en informe pericial con aplicación de revenido químico N°99-2018 de 05.04.18, PPU HYFL.43.

217) 568.- 18 fotografías contenidas en informe pericial con aplicación de revenido químico N°98-2018 de 02.04.18, PPU GPCH.74.

218) 569.- 12 fotografías contenidas en Informe de revisión físico y técnico N°1200 de 26.03.18 del vehículo PPU KBSR.10.

219) 570.- 12 fotografías contenidas en informe pericial con aplicación de revenido químico N°100-2018 de 05.04.18, PPU KBSR.10.

220) 571.- 13 fotografías contenidas en Informe de revisión físico y técnico N°1292 de 02.04.18 del vehículo PPU JJLG.46.

221) 572.- 13 fotografías contenidas en Informe de revisión físico y técnico N°1291 de 02.04.18 del vehículo PPU JXRD.49.

222) 574.- 19 fotografías contenidas en informe pericial con aplicación de revenido químico N°125-2022 de 25.04.22, PPU falsa KPFT.53, original KTZY.48.

223) 575.- Tres planillas Excel, consistentes en cartolas de movimientos, transferencias efectuadas y transferencias recibidas, todo relativo a la cuenta corriente del titular VÍCTOR QUEZADA BRAVO. CI. 15.998.069-3 en Banco Scotiabank. Planillas remitidas mediante Carta respuesta de 13 de mayo de 2022 de esa entidad bancaria, suscrita por Gustavo Jullian Matta, abogado de la gerencia legal de riesgo.

224) 576.- Imágenes de Registro de transacción art. 5° Ley 19.913 folio N°1572 suscrito por Albano Silva Toro y Money Global EIRL, documento tributario N°1774 correspondiente a operación de compra de dólares de 15.10.2020.

225) 577.- Imágenes de Copia de factura de compra electrónica N°1774 emitida por Money Global cambios EIRL a nombre de Albano Silva Toro, de fecha 15.10.2020, con copia delantera de cédula de identidad del acusado Albano Silva Toro.

226) 579.-08 capturas de imagen de conversaciones de WhatsApp, relacionadas con la compra del vehículo marca Fiat modelo Ergo, color gris, proporcionadas por la víctima estafada Ignacio Sánchez Marinovic. contenidas en Cd NUE 6388961.

227) 580.- 02 capturas de imagen de publicación de la red social facebook a nombre de Andrés Belmar que contienen 5 fotografías cada una del vehículo marca Fiat, modelo Argo, año 2020. proporcionadas por la víctima estafada Ignacio Sánchez Marinovic. contenidas en CD.

228) 581.- 04 audios contenidos en el CD, correspondientes a conversaciones entre la víctima estafada y el vendedor.

229) 587.- 02 fotografías del vehículo PPU KPFT.53.

230) 588.- 10 imágenes contenidas en informe policial N°59 correspondientes a publicación para compraventa, cheque emitido a nombre de Ilich Chopa Aldana, copia de cédula de este último y documento firmado por el mismo, todo en relación con el vehículo PPU KYPL.92

231) 599.- 03 imágenes contenidas en informe policial N°1373 de 29.07.20 BIRO Centro Norte, correspondientes a publicación para compraventa en Chileautos, en relación con el vehículo PPU LKKL.73.

232) 600.- 14 imágenes incorporadas en el cuerpo del Informe de Info-ingeniería N°10-2022 de fecha 16.03.22 suscrito por Javier Cárdenas Loaiza (Lacrim).

233) 602.- 17 imágenes del vehículo PPU LPHC.22 y documentación del mismo, aportadas por el testigo Patricio Asún, correspondiente a compraventa fallida del automóvil.

234) 603.- 17 tablas incorporadas en el cuerpo de Informe policial N°4 de 07.01.22 del Departamento V de Asuntos Internos de la PDI.

235) 605.- 12 fotografías anexas a Informe policial N° 4 de 07.01.22 del Departamento V de Asuntos Internos de la PDI, correspondientes a imágenes obtenidas desde el computador incautado a Paula Becerra.

236) 606.- 01 imagen anexa a Informe policial N°4 de 07.01.22 del Departamento V de Asuntos Internos de la PDI, correspondiente a Declaración jurada firmada por Albano Silva Toro.

237) 607.- 05 fotografías de especies incautadas bajo NUE 1196146, 1196147 y 1196148, anexas a Informe policial N°20 de 03.02.22 del Departamento V de Asuntos Internos de la PDI

238) 608.- 04 fotografías de especies incautadas bajo NUE 1196144 y 1196145, anexas a Informe policial N°20 de 03.02.22 del Departamento V de Asuntos Internos de la PDI.

239) 609.- 20 fotografías del sitio del suceso correspondiente a la detención de los imputados Víctor Quezada y Carolina Cornejo, anexas a Informe policial N°19 y 20 de 03.02.22 del Departamento V de Asuntos Internos de la PDI.

240) 610.- 07 imágenes y/o tablas incorporadas en el cuerpo del Informe pericial de sonido N°462/021, de fecha 30.06.21, de LACRIM Central.

241) 614.- 50 imágenes incorporadas en el cuerpo de Informe policial N°2061 de 08.07.22 del Departamento OS7 sobre análisis de dispositivos incautados a los acusados Víctor Quezada y Carolina Cornejo.

242) 615.- Imágenes de Conversación levantada desde la aplicación Telegram, denominada “Chat N°18”, correspondiente al período 20-23.01.22, anexa al Informe policial N°2061 de 08.07.22 del Departamento OS7 sobre análisis de dispositivos incautados a los acusados Víctor Quezada y Carolina Cornejo.

243) 616.- Imágenes de Conversación levantada desde la aplicación Telegram, denominada “Chat N°19”, correspondiente al período 20-21.01.22, anexa al Informe policial N°2061 de 08.07.22 del Departamento OS7 sobre análisis de dispositivos incautados a los acusados Víctor Quezada y Carolina Cornejo.

244) 617.- Imágenes de 01 copia de declaración de Albano Silva Toro de 08.07.21, 01 copia de comprobante de transferencia a Carolina Cornejo Arriagada correspondiente a remuneración de noviembre 2021, 01 copia de declaración de Paula Becerra Leyton de 13.04.21 y 01 copia de comunicado de separación de investigación y solicita RIT, correspondientes a hallazgos en los dispositivos incautados a los acusados Víctor Quezada y Cornejo.

245) 618.- Imágenes de 01 copia de fotografías de la declaración de Albano Silva Toro de 08.07.21, correspondientes a hallazgos en los dispositivos incautados a los acusados Víctor Quezada y Cornejo, anexas al informe policial N°2061 de 08.07.22 del Departamento OS7.

246) 619.- 105 imágenes incorporadas en el cuerpo de Informe policial N°2206 de 20.07.22 del Departamento OS7 sobre análisis patrimonial de las personas naturales y jurídicas individualizadas en dicho informe.

247) 620.- Imágenes de Análisis patrimonial N°067-2022 de Víctor Quezada Bravo, anexo a Informe policial N°2206 de 20.07.22 del Departamento OS7.

248) 621.- Imágenes de Análisis patrimonial N°068-2022 de Carolina Cornejo Arriagada, anexo a Informe policial N°2206 de 20.07.22 del Departamento OS7.

249) 622.- Imágenes de Análisis patrimonial N°071-2022 de Comercializadora de Productos Alimenticios Albano Silva Toro, anexo a Informe policial N°2206 de 20.07.22 del Departamento OS7.

250) 623.- Imágenes de- Análisis patrimonial N°096-2022 de Comercializadora SyB Spa, anexo a Informe policial N°2206 de 20.07.22 del Departamento OS7.

251) 624.- Imágenes de Análisis patrimonial N°079-2022 de Sociedad Quezada y Cornejo Spa, anexo a Informe policial N°2206 de 20.07.22 del Departamento OS7.

252) 625.- Imágenes de Análisis patrimonial N°072-2022 de Sociedad Agua Bendita, anexo a Informe policial N°2206 de 20.07.22 del Departamento OS7.

253) 626.- Imágenes de- Análisis financiero N°069-2022 de Comercializadora de Productos Alimenticios Albano Silva Toro, anexo a Informe policial N°2206 de 20.07.22 del Departamento OS7.

254) 627.- imágenes de- Análisis financiero N°070-2022 de Comercializadora SyB Spa, anexo a Informe policial N°2206 de 20.07.22 del Departamento OS7.

255) 628.- 1.- Set con 27 fotografías contenidas en el informe pericial de revenido químico N°266-2020 de fecha 6 de agosto de 2020, correspondiente al vehículo con placa patente falsa JKXX.88, suscrito por Sargento Segundo SEVB Alejandro Molina Sepúlveda

256) 629.- Set con 29 fotografías contenidas en el informe pericial de revenido químico N°539-2018 de fecha 31 de diciembre de 2018, correspondiente al vehículo con placa patente falsa KLHJ.79, suscrito por Sargento Segundo SEVB Alejandro Molina Sepúlveda

257) 632.- Set de 14 fotografías, contenidas en el informe físico técnico N°2775 de fecha 31 de agosto de 2020, suscrito por funcionario policial SEVB Rodrigo Muñoz Pantoja. relacionado patente LPHC.69.

258) 633.- Set de 31 fotografías contenidas en el informe pericial con aplicación de revenido químico N°48 del vehículo patente LBVY.68, de fecha 18 de enero de 2021, suscrito por Cabo 1 Roger Quilodrán Jerez, funcionario SEVB Concepción.

259) 634.- Set de 4 imágenes contenidas en el informe pericial mecánico N°1198/021 de fecha 19.11.21, del vehículo patente LPHD.24, suscrito por perito Roberto Veliz Rain, de LACRIM Central.

260) 637.- Set de 2 imágenes contenidas en el informe pericial químico N°166/022 de fecha 04.02.22, del vehículo PPU LPHC.30, de LACRIM Central.

261) 638.- Set de 10 fotografías contenidas en el informe pericial fotográfico N°18/022 de fecha 14.03.22 del vehículo PPU LPHC.30, de LACRIM Central.

262) 645.- Set de 81 fotografías, anexo a Informe Pericial Fotográfico N°377-019 de 01.07.19, de los vehículos PPU LBCY-63, PPU JKXX.66 y PPU KPYL.92.

263) 654.- Set de 4 fotografías, anexo a Informe Pericial químico N° Informe pericial químico N°269/020 de fecha 27.03.20, del vehículo patente LRBS.44.

264) 656.- Set de 21 imágenes contenidas en el informe pericial fotográfico N°162/019 de fecha 01.07.19, respecto de los vehículos patente KXSJ.24 y PPU KVTB.46. (Germán Duarte 27.05) (Exhibidas el 11.06, Nos 1, 2 y 11)

265) 657.- Set 15 imágenes contenidas en el informe físico técnico N°3379 de fecha 23 de octubre de 2020, referente al vehículo patente LVCG.77, suscrito por el sargento 1 de SEVB Rodrigo Muñoz Pantoja.

266) 659.- Set de 19 imágenes contenidas en Informe patrimonial N°3127 de 19.10.22 del Departamento Antidrogas OS7, consistentes en consultas a fuentes abiertas, tablas de transacciones bancarias, imágenes satelitales y fotográficas de inmuebles, conversaciones vía telegram.

267) 670.- Set de 14 imágenes de informe pericial con aplicación revenido químico N°117-2018 de fecha 19 de abril de 2018 suscrito por el perito Sebv. David Ramírez P. referente al vehículo patente JJLG.46.

268) 671.- Set de 18 tablas contenidas en Análisis financiero N°199-2022, correspondiente a Víctor Quezada Bravo, anexo a Informe patrimonial N°3127 de 19.10.22 del Departamento Antidrogas OS7.

269) 672.- Set de 18 tablas contenidas en Análisis financiero N°200-2022, correspondiente a Carolina Cornejo Arriagada, anexo a Informe patrimonial N°3127 de 19.10.22 del Departamento Antidrogas OS7.

270) 673.- Set de 02 imágenes y 04 tablas contenidas en Análisis financiero N°205-2022, correspondiente a la sociedad Te Asesora SPA, anexo a Informe patrimonial N°3127 de 19.10.22 del Departamento Antidrogas OS7.

271) 674.- Set de 01 imagen y 01 tabla contenidas en Análisis financiero N°206-2022, correspondiente a la sociedad de inversiones Arriagada y Fuenzalida Ltda., anexo a Informe patrimonial N°3127 de 19.10.22 del Departamento Antidrogas OS7.

272) 675.- Set de 01 imagen y 01 tabla contenidas en Análisis financiero N°207-2022, correspondiente a la sociedad Antonio Quezada SPA, anexo a Informe patrimonial N°3127 de 19.10.22 del Departamento Antidrogas OS7.

273) 677.- Set de 32 imágenes contenidas en el informe pericial físico técnico N°900 de fecha 7 de noviembre de 2020 relacionado con la PPU LJLV.73, suscrito por ELIO CAMPOS LEIVA, Sargento 1 de carabineros, Departamento SEVB, Sección encargo y búsqueda de vehículos, Concepción

274) 678.- Set 19 fotografías contenidas en el informe pericial aplicación revenido químico de fecha 31 de julio de 2018, N°841, relacionado con la PPU KLLT.68 suscrito por funcionario Sevb Roger Quilodrán Jerez.

275) 679.- Set 21 fotografías contenidas en el informe pericial aplicación revenido químico de 679.- fecha 31 de julio de 2018, N°842, relacionado con la PPU KJCT.95 suscrito por funcionario Sevb. Roger Quilodrán jerez.

276) 680.-Set 17 fotografías contenidas en el informe pericial aplicación revenido químico de fecha 31 de julio de 2018, N°843, relacionado con la PPU KJCT.68 suscrito por funcionario Sevb. Roger Quilodrán Jerez.

277) 681.- Set 19 fotografías contenidas en el informe pericial aplicación revenido químico de fecha 31 de julio de 2018, N°844, relacionado con la PPU KD.VY.76 suscrito por funcionario Sevb. Roger Quilodrán Jerez.

278) 684.- Set 20 fotografías contenidas en el informe pericial revenido químico N°438 de fecha 27-08-2020, suscrito por Suboficial mayor SEVB Coquimbo Francisco Cárdenas Calderón.

279) 685.- Set 26 20 fotografías contenidas en el informe pericial revenido químico N°437 de fecha 26-08-2020, suscrito por Suboficial mayor SEVB Coquimbo Francisco Cárdenas Calderón.

280) 686.- Set 15 fotografías contenidas en el informe pericial N°011-2020 SEVB Antofagasta, suscrito por Sargento 1 Marco Domínguez Montecinos, relacionada con PPU LPHC.22.

281) 688.- Set de 22 fotografías contenidas en Informe pericial fotográfico N°686/020 de fecha 30.03.20, vehículo LXTY.25, de Lacrim Central.

282) 689.- Set de 7 fotografías contenidas en informe pericial fotográfico N°876/020 de fecha 30.03.20, del vehículo PPU LPHB.53, Lacrim Central.

283) 690.- Set de 11 fotografías contenidas en Informe pericial fotográfico N°996/020 de fecha 06.04.20, respecto del vehículo patente LJLV.85, Lacrim Central.

284) 692.- Set de 23 fotografías contenidas en Informe pericial fotográfico N°1609/019 de fecha 23.05.19, del vehículo PPU LFGB-76, Lacrim Central.

285) 693.- Set de 8 fotografías contenidas en Informe pericial fotográfico N°2358/19 de fecha 26.08.19, relacionado con el vehículo patente LBCZ-92, Nissan Kicks; Lacrim Central,

286) 694.- Set de 10 fotografías contenidas en Informe pericial fotográfico N°2357/19 de fecha 26.08.19, del vehículo PPU LCFR-33, Lacrim Central.

287) 695.- Set de 9 fotografías contenidas en Informe pericial fotográfico N°2356/19 de fecha 26.08.19 del vehículo PPU LCPX-63, Lacrim Central.

288) 696.- Set de 4 fotografías contenidas en Informe pericial fotográfico N°279/20 de 04.02.20, relacionado al vehículo PPU KGFC.48, Lacrim Central. (26.06)

289) 697.- Set de 4 fotografías contenidas en Informe pericial fotográfico N°276/20 de 04.02.20, relacionado al vehículo PPU LCXH.92, Lacrim Central, 1.- Mercedes Benz, placa patente KJFC-48, de color gris grafito, 3.- el mismo vehículo observado del lado del conductor.

290) 698.- Set de 4 fotografías contenidas en Informe pericial fotográfico N°275/20 de 04.02.20, relacionado al vehículo PPU LKKL.73, Lacrim Central.

291) 699.- Set de 4 fotografías contenidas en Informe pericial fotográfico N°274/20 de 04.02.20, relacionado al vehículo PPU LJLD.71, Lacrim Central, se exhiben dos fotografías.

292) 700.- Set de 4 fotografías contenidas en Informe pericial fotográfico N°273/20 de 04.02.20, relacionado al vehículo PPU LJSF.50, Lacrim Central.

293) 701.- Set de 11 fotografías del vehículo PPU KWVF-42.

294) 702.- Set de 12 fotografías contenidas en Informe pericial fotográfico N°2353/19 de fecha 26.08.19, del vehículo PPU KHTC-73, Lacrim Central.

295) 703.- Set de 10 fotografías contenidas en Informe pericial fotográfico N°2352/19 de fecha 26.08.19, del vehículo PPU LBCZ.86, Lacrim Central.

296) 704.- Set de 13 fotografías contenidas en Informe pericial fotográfico N°2354/19 de fecha 26.08.19, del vehículo PPU LDCR.89, Lacrim Central.

297) 718.- Set de 5 fotografías contenidas en Informe Pericial Químico N°717/19 de fecha 02.09.19 del vehículo LGCC.49.

298) 720.- Set de 2 fotografías y 2 imágenes contenidas en Informe Pericial Químico N°191/20 de fecha 24.02.20, del vehículo PPU LPHB.53.

299) 721.- Set de 13 fotografías del vehículo PPU HFXF.33.

300) 724.- Set de 29 imágenes y tablas contenidas en Informe de revisión física y técnica de vehículo N°3238 de fecha 08.07.19, vehículo patente LDLR.97.

301) 727.- Set 19 imágenes contenidas en el informe físico técnico N°785 de fecha 23-09-2020, suscrito por Rodrigo Díaz Mena SEBV Santiago.

302) 728.- Set 24 imágenes contenidas en el informe pericial físico técnico con aplicación de revenido químico N° 764 de fecha 7 de septiembre de 2020, suscrito por perito Francisco Pérez Nilo SEBV Rancagua.

303) 729.- 01 planilla excel compuesta por 02 hojas de cálculo, con nombre de archivo "Industria del portonazo", con detalle de los vehículos objeto de la acusación, empresa vinculada, datos del o los

inscriptores y propietarios, información de cada vehículo y de su inscripción, placa patente adulterada y original, propietario del vehículo original en su caso, e información sobre si estos fueron o no recuperados durante la investigación,

304) 730.- 102 imagen vista de dos imágenes 1.- correspondiente a impresión dígito pulgar derecho de Juan Pablo Oses Pereira y 2.- impresión dactilar ID-33.

305) 738.- Cuadro comparativo correspondiente a imagen de N° de chasis vinculado al vehículo patente LCZC.63, original, e imagen adulterado N° de chasis vinculado al vehículo patente LFVW.14.

V.- EVIDENCIA MATERIAL:

- 1) 1.- NUE 5916690 dos placas patentes LJSF.50.
- 2) 2.- NUE 5916691 de 4.12.2019 que corresponde a 4 documentos del vehículo patente LJSF.50
- 3) 4.- NUE 6396070 especies incautadas a José Sepúlveda Bustamante respecto documentos patente LPHD-24.
- 4) 12.- NUE 6194529: 02 cartuchos calibre 12 sin percutir, uno marca FLOCCHI y uno marca REMINGTON (Informe Pericial Balístico N°86/021, de fecha 18.01.21).
- 5) 17.- NUE 6194548: 01 revolver marca Taurus Brasil serie N°287041 calibre .32 con 06 cartuchos en su interior mismo calibre, 01 vainilla percutida con su respectivo proyectil calibre .32 largo obtenido de la prueba de funcionamiento del arma, 04 cartuchos calibre .32 largo, 02 vainillas percutidas con sus respectivos proyectiles calibre .32 largo, obtenidos de la prueba de funcionamiento de la munición.
- 6) 18.- NUE 6194554: 01 escopeta marca Huglu modelo 104A serie N°04S1978 calibre .12, 02 vainillas percutidas calibre .12 obtenidas de la prueba de funcionamiento del arma.
- 7) 19.- NUE 6194532: 01 revolver marca Taurus serie N°1562991 calibre .38 especial, 01 vainilla percutida con su respectivo proyectil calibre .38 especial obtenido de la prueba de funcionamiento del arma, 04 cartuchos calibre .38 especial, 02 vainillas percutidas con sus respectivos proyectiles calibre .38 especial obtenidos de la prueba de funcionamiento de la munición; 01 pistola marca CZ modelo 75 calibre .9 serie N°XB2412 con un cargador, 01 vainilla percutida con su respectivo proyectil calibre 9x19mm obtenido de la prueba de funcionamiento del arma, 10 cartuchos calibre 9x19mm, 02 vainillas percutidas con sus respectivos proyectiles calibre 9x19mm obtenidos de la prueba de funcionamiento de la munición; 01 pistola marca Brevete SGDГ serie N°176438 calibre .32 auto con un cargador, 01 vainilla percutida con su respectivo proyectil calibre 32 auto obtenido de la prueba de funcionamiento del arma, 05 cartuchos calibre .32 automático, 02 vainillas percutidas con sus respectivos proyectiles calibre .32 auto obtenidos de la prueba de funcionamiento de la munición.

8) 20.- NUE 6194533: 23 cartuchos calibre .38 especial, 02 vainillas percutidas con sus respectivos proyectiles calibre .38 especial obtenidos de la prueba de funcionamiento de la munición, 02 vainillas percutidas con sus respectivos proyectiles calibre .357 mag número obtenidos de la prueba de funcionamiento de la munición, 02 vainillas percutidas de escopeta calibre .16 obtenidos de la prueba de funcionamiento de la munición, 01 vainilla percutida de escopeta calibre .20 obtenidos de la prueba de funcionamiento de la munición.

9) 22.- NUE 6398107: 02 archivos de audio, uno PTT-20200123-WA0282 correspondiente a audio de WhatsApp levantado desde el celular del acusado Yerko Silva Toro, y uno 232434026_106 correspondiente a interceptación telefónica del N°+56996148739 del acusado Juan Navarrete Vásquez

10) 26.- NUE 6194565, levantada el 16.10.2020 en el dom José Manuel Balmaceda 4594, block 6 dpto. 41 renca, en poder del imputado, correspondiente a un celular marca Huawei, modelo STK-LK3 incautado al imputado SEBASTIÁN MARTINEZ ZAVALA.

11) 32.- NUE 6194563, de 16.10.2020, que corresponda a documentación incautada a Sebastián Martínez Zavala.

12) 34.- NUE 6194566 levantada por Sebastián Acosta de la Biro, tripulante de los dos carros que conformaron el procedimiento, en la dirección indicada, de fecha 16 de octubre de 2020, que corresponde a un maletín de tela color negro, 01 notebook HP modelo 240G7 gris con su respectiva funda, 01 pendrive sin marga rojo/gris, 01 pendrive marca Phillips blanco/verde.

13) 35.- NUE 6194562, levantada el 16.10.2020, en José Manuel Balmaceda 4595, block 6 dpto. 41, comuna de Renca.

14) 40.- NUE 6194732: 01 documento de declaración de transferencia de vehículo motorizado y giro y pago de imputado N° declaración 204-6 PPU KHTC-73, 01 solicitud de primera inscripción PPU LJPX-58, certificado de inscripción y anotaciones vigentes R.V.M. patente LJPX.58.

15) 43.- NUE 6133876 levantada el 17.10.2020 en el domicilio de Ilich Chopa, levantada por él, se obtuvo del dormitorio: Dos placas patentes LFVG-22, una baliza portátil, un dispositivo TAG de la empresa Costanera Note Serie N°14041125288.

16) 45.- NUE 6133878 de fecha 17.10.2020, levantada en el domicilio de Ilich Chopa.

17) 48.- NUE 6194735: 01 documento detalle de pago, inmobiliaria Santa Rosa de Apoquindo, 01 carpeta Enaco con documentación en su interior incautados a Paula Becerra Leyton.

18) 58.- NUE 6194720 de fecha 16.10.2020, levantada en el Esterillo 1883 de Pudahuel, entregada por Juan Edo. Provoste Salgado: dos celulares marca Samsung modelo SM-G950F y A107M, respectivamente.

19) 59.- NUE 6194525 levantada el 16.10.2020 incautada a Juan Navarrete Vásquez.

20) 66.- NUE 6194521, levantada por el testigo, el 16.10.2020 a las 2:35 hrs. en domicilio el Club Hípico 5163, de la comuna PAC, es un celular Samsung J7 Prime color negro incautado a Gustavo Viveros.

21) 67.- NUE 6194522, levantada por el testigo, misma fecha, 02:30, mismo domicilio, que corresponde a documentación del SII y de una Notaría de Santiago, El testigo agrego que corresponde a la 50° Notaría de Santiago de Claudia Gómez Lucarez. Es un documento de estatuto actualizado de una sociedad constituida el 24.09.2018, Automotora Bilbao SPA, con timbre de la notaría mencionada.

22) 76.- NUE 6194557, 16.10.2020 a las 10:40 hrs, en Los Castaños 1289, comuna Maipú, sobre escritorio de dormitorio: 3 cuadernos de Banco Santander y 1 libreta de notas, de color rojo, con anotaciones relacionadas a la recaudación de dinero y pago a testaferros y miembros de la asociación, incautados a Daniela Espinoza

23) 77.- NUE 6194738, de fecha 16 de octubre, levantada en primer piso sector cajas, por Cristian Álvarez su compañero con quien iba a cargo de la diligencia, que da cuenta de un cuaderno marca Proarte, color rojo, contenedor de detalles de ventas diarias y formas de pago más propinas desde el 28.09.2020 al 15.10.2020, del Restaurante "LA PARRILLADA DEL GAUCHO", y 01 cuaderno marca Proarte, tapa con imagen de lince, contenedor de detalles de ventas y formas de pago desde el 11.02.19 al 12.05.19.

24) 84.- NUE 6194541: 01 mochila negra con leyenda "JUMP MAN", con 01 baliza color negro, 01 alicate color negro amarillo, 79 antenas color negro y 03 guantes color negro en su interior; 01 inhibidor de señal color negro; 03 walkie talkie marca motorola color negro azul, ID K7GSX900, incautado a Camilo Sandoval Godoy.

25) 97.- NUE 4351724 levantada 23.02.2018 documentos patente KBWK-63.

26) 99.- NUE 260764: documentos de la PPU GKWP.19.

27) 100.- NUE 260765: 02 PPU GKWP.19.

28) 101.- NUE 260755: Permiso de circulación del municipio de La Pintana serie N°7514. Certificado de homologación individual N°4999933. Seguro obligatorio BCI, póliza N°39610447-4. Certificado de inscripción RVM automóvil Hyundai Accent.

29) 103.- NUE 260771, de fecha 04.09.2018, dos placas patentes GYPP-92.

30) 104.- NUE 260772 documentos del vehículo PPU GYPP-92.

31) 105.- NUE 5917205: Documentos originales de las constituciones de sociedades por acciones de las empresas AUTOMOTRIZ MOYA SPA, AUTOMOTRIZ MENDEZ MOYA SPA, AUTOMOTRIZ BILBAO SPA, IMPORTADORA BRUNNO FRITSCH SPA. Notaria Claudia Gómez Lucarez.

32) 106.- NUE 5917208: Documentos originales de la constitución de sociedad por acciones de la empresa AUTOMOTORA SOBRERUEDAS SPA.

33) 107.- NUE 5916695: placas LPHB-53 correspondientes a vehículo en que fue detenido el acusado David Millalén por receptación flagrante.

34) 108.- NUE 5916696: 01 certificado SOAP folio N°92780649, 01 certificado de homologación N°5640371, 01 permiso de circulación de la Ilustre Municipalidad de Quinta Normal serie N°13160, Certificado de estatutos de la empresa Comercial Gildemeister SPA, 03 boletas de código provisorio del SII, contratos al portador, boleta de presupuesto de vehículos N°74199, boleta de honorarios N°135624.

35) 111.- NUE 5004478, documentos del vehículo PPU JYPV.39.

36) 113.- NUE 5004480: 02 PPU JYPV.39 01 sello verde de vehículo.

37) 114.- NUE 260800 04.12.2018 a las 16:00, documentos de la PPU JJLL.87 levantada por el testigo: dos placas patentes únicas metálicas JJLL.87.

38) 115.- NUE 260799, permiso de circulación de Municipalidad de Temuco, serie N°0567105; SOAP de la empresa Zenit seguros póliza N°2077462-2; Certificado de homologación N°4999927, de 19.11.2017, emisor Automotora Kor, hasta el 10.2020, de la Municipalidad de Lo Prado; Certificado de inscripción (Padrón) del vehículo folio N°41918195, a nombre de Juan Carlos Rodríguez Vera.

39) 116.- NUE 260795, levantada el 04.12.2018 a las 17:10 en Temuco, por el testigo, son dos placas patente únicas JPSP-56 del vehículo Nissan Murano.

40) 120.- NUE 5917219, de fecha 24.04.2019, levantada por el testigo en PDI La Serena: dos PPU KVTB-46.

41) 121.- NUE 5917220, documentos patente KVTB-46.

42) 126.- NUE 5917235, documentos patente LFGB-76.

43) 127.- NUE 5917234 de fecha 06.05.2019 en unidad de Borgoño Independencia, levantada por el testigo: Dos PPU LFGB-76.

44) 128.- NUE 5917240, levantada por su colega Raúl Villagra y recibida por ella el 09.11.2019, correspondientes a dos PPU LCPX-13, de la camioneta incautada Mazda CX 5 a Ronald Cohn.

45) 130.- NUE 5917180, levantada por la testigo al momento de la incautación del auto, 25.07.2019, en el cuartel policial de Gral. Borgoño. Corresponde a dos PPU KHTC-73

46) 131.- NUE 5917181: documentos patente KHTC-73.

47) 132.- NUE 5917238, levantada el 9 de mayo de 2019 en cuartel de Gral. Borgoño, correspondiente a dos PPU LBCY-57 y una llave de fantasía con el logotipo Nissan

48) 134.- NUE 5917170, levantada por la testigo el 14.05.2019 en el cuartel policial de Los Ángeles, corresponde a dos PPU LBCY-63

49) 135.- NUE 5917169, documentación del vehículo PPU LBCY.63.

- 50) 136.- NUE 5917200, corresponde a dos PPU LDCR-89
- 51) 137.- NUE 5917201 documentos que mantenía el tenedor del vehículo PPU LDCR.89.
- 52) 141.- NUE 5917217: 02 PPU KKLL-10.
- 53) 142.- NUE 5916668 documentos PPU KKLL-10.
- 54) 144.- NUE 5917187, documentación del vehículo PPU LBCZ.86.
- 55) 146.- NUE 5917177, documentos del vehículo patente JKXX-66.
- 56) 147.- NUE 5917171; 01 declaración de transferencia de vehículos motorizados y giro y pago de impuesto F/23,declaración 18.968-5; 01 Solicitud de transferencia N°40643; 01 Solicitud de primera inscripción N°14.546;01 Certificado de homologación N°5000922 500922, permiso de circulación ilustre Municipalidad de Maipú N°1.323.282; certificado de seguro obligatorio, póliza N°26422823; certificado de inscripción en el R.V.M., folio 57576909; fotocopia de Tesorería General de la República ; factura de la empresa Automotriz Méndez Moya SPA N°652.
- 57) 148.- NUE 5917262, 02 Placas patentes KSCV.55.
- 58) 149.- NUE 5917184 02 PPU LCFR-33.
- 59) 150.- NUE 5917182: Certificado de homologación individual N°5210025, Formulario Permisos de circulación municipio Lo Prado serie N°462954, Certificado SOAP póliza N°57841827-K, Certificado de inscripción RVM folio N°500214347038, 07 boletas Servipag; 01 CD con grabaciones de 08.05.19 Servipag sucursal José Joaquín Pérez N°6035, Quinta Normal.
- 60) 152.- NUE 5917223: documentos vehículo placa patente KXSJ.24.
- 61) 153.- NUE 5917222: 02 Placas patente vinculadas al vehículo PPU KXSJ.24.
- 62) 154.- NUE 5202306 documentos vehículo PPU KKTR.36
- 63) 156.- NUE 5202308, 02 placas patentes KKTR.36.
- 64) 157.- NUE 5202307: 01 contrato de compraventa repertorio N°31622, de fecha 11 de octubre de 2018 entre Rodrigo Andrés Stark Redondo y Rodrigo Osvaldo Arriagada Diaz y solicitud de transferencia N°10739 de fecha 28-05-2019; vendedor Roberto Esteban Aravena Morales.
- 65) 166.- NUE 5917189 dos placas patentes únicas metálicas LBCZ-92.
- 66) 167.- NUE 5917190 Un certificado de inscripción (padrón) de vehículo folio 63854205; a nombre de Jenny; un seguro obligatorio N°57899568; Un permiso de circulación de la Municipalidad de Pudahuel N°5209104, a nombre de Francis; Un certificado de homologación N°5210034 de 22.01.2019, a nombre de la empresa Automotriz Portillo, valido hasta mayo de 2021.
- 67) 170.-NUE 4196863: 02 PPU KBWV.94.

68) 171.- NUE 4196879 incautadas el 04.08.2018, a Carmen Gloria Sandoval contreras por el sargento Núñez, corresponde a dos PPU HYDG.43, delantera y trasera.

69) 172.- NUE 4196881, 06.08.2018 a las 17:10 hrs. Avda. Concha y Toro 1340 puente alto, correspondiente a dos PPU KJLJ.52.

70) 173.- NUE 4196888, dos PPU JXRD.74.

71) 174.- NUE 4196890, dos PPU KCPT.44.

72) 175.- NUE 4196898 de 22.08.2018 dos PPU KGFC.33 y un sello verde.

73) 176.- NUE 5004539, levantada por el testigo de fecha 28.09.2018 a las 09.10 hrs. en Pasaje Juanita Fernández 171 comuna de San Joaquín, correspondiente a dos PPU KKYG.90 y un sello de homologación o sello verde N°4078788.

74) 205.- NUE 5917174, documentación grúa horquilla patente KPYL-92.

75) 207.- NUE 5916711 documentos PPU KXSP.88.

76) 208.- NUE 5916713, dos placas patentes únicas KXSP.88.

77) 209.- NUE 5917215 documentos del vehículo PPU LGCC.49.

78) 210.- NUE 5917214 dos placas patentes únicas LGCC.49

79) 213.- NUE 6388958 documentos patente LPHC.30.

80) 229.- NUE 5778559 documentos vehículo LJLJ.18.

81) 250.- NUE 5775051: 02 ejemplares patentes KPFT.53 una de ellas duplicado "D1"

82) 251.- NUE 5775052, PATENTE KPFT.53: contrato de compraventa de vehículo repertorio N°3205; 01 certificado de anotaciones vigentes; 01 certificado de Registro de multas pagadas; 01 certificado de emisión de contaminantes; 01 seguro obligatorio póliza 5481129; certificado de inscripción vehículo; 01 permiso de circulación, Municipalidad de Antofagasta.

83) 256.- NUE 5828096, 01 celular marca Motorola, gris plata.

84) 259.- NUE 5916683, 03 certificados de homologación individual N°510066; 01 certificado de permiso de circulación 2882, certificado de seguro obligatorio póliza N°58423907-7; certificado de inscripción en el Registro de Vehículos Motorizados folio 69190526, 01 factura Bruno Fritsch N°124 a nombre de Carla Francisca Leal Leal.

85) 262.- NUE 6134644, levantada 2 de marzo de 2020 levantada por él, corresponde a una declaración de transferencia (formulario 33) de vehículo motorizado N°422, Registro Civil oficina de Yumbel, vehículo placa patente LKKL.67

86) 263.- NUE 5916682, 02 placas patentes LSLD.71.

87) 268.- NUE 6194538, levantada por el testigo el 16.10.2020 a las 02:35 hrs en calle Solar 8973, Dpto. 707 B: 2 notebook marca Samsung incautados a Franco Cruz Iligaray.

88) 274.- NUE 5917203, 25.06.2019, unidad policial de Independencia, levantada por el testigo: Dos PPU KWVF-42.

89) 275.- NUE 5917204, documentos respecto de la PPU KWVF-42.

90) 279.- NUE 2237448; 02 Placas patentes únicas LYDH.25 y documentos.

91) 280.- NUE 2237449, documentos patente LJPX.58.

92) 281.- NUE 2237451-02 placas patentes LJPX.58.

93) 282.- NUE 577899 documentos patente LVGC.77.

94) 283.- NUE 5778890 documentos patente LPHC.69.

SEXTO: Prueba de las defensas.

La defensora de **Germán Duarte Pereira** rindió prueba testimonial, e hizo comaprecer a estrados a su esposa, Cristina Piña Muñoz y a su hijo, José Ignacio Duarte Piña. Además, incorporó los siguientes documentos:

1) Conversaciones en plataforma Chile Autos de 5 de enero de 2019, respecto del vehículo PPU LCPX.63.

2) Certificado de inscripción y anotaciones vigentes del vehículo PPU LCPX.63, copia de primera inscripción y copia factura de compra.

3) Consulta de autofact del vehículo PPU LCPX.63, de fecha 18 de abril de 2019.

4) Carpeta tributaria de Germán Duarte Pereira con inicio de actividades en el año 2005.

5) Inscripción de dominio del inmueble de Santa Amalia N°641, comuna de La Florida, de octubre de 2018.

6) Certificado de inscripción y antaciones vigentes del vehículo PPU KKKL.68.

7) Copia de vale vista del Banco Falabella de enero del año 2019, y movimientos del primer trimestre de 2019, cuenta vista N°5513-002780-7, Banco Falabella.

8) Copia de compraventa de vehículo PPU KKKL.68 de fecha 26 mayo de 2020, vendedor Germán Duarte y comprador Juan Benedicto Muñoz Ramírez.

El defensor de **Albano Silva Toro** rindió prueba testimonial, e hizo comaprecer a estrados a los testigos Gonzalo Karel Meyervon Schauensee Espinoza, cocinero y Francisco Lillo Antil, maestro en obras menores, e incorporó cinco facturas de la Comercializadora de Alimentos Albano Ariel Silva Toro EIRL, a saber:

1) Factura electrónica N°110 de fecha 28.04.2017, a Ingeniería, Maquinaria y Construcción Ltda., giro obras de ingeniería, monto neto \$4.427.500, total \$ 5.149.725.

3) Factura electrónica N°108 de fecha 25.04.2017, a nombre de la misma empresa anterior, monto total \$13.094.164.

4) Factura electrónica N°107 de fecha 27.04.2017, a nombre de la misma empresa anterior, monto total \$12.850.215.

13) Factura electrónica N°58 de fecha 11.10.2016, a Servicios Integrales Blas Spa, monto total \$3.355.681.

15) Factura electrónica N°61 de fecha 22.10.2016, a la misma empresa anterior, por un monto total de \$6.828.458.

Por último, el defensor de **Camilo Sandoval Godoy**, rindió la testimonial del padre de su representado, Pedro Juan Sandoval Arriagada.

SÉPTIMO: Alegatos de clausura.

El Ministerio Público, en su alegato de cierre, expuso que después de casi seis meses de juicio, es necesario recordar una frase que logra subrayar la sensación que queda, una vez rendida toda la prueba. La víctima de robo de vehículo, doña Estefany García, declaró que venía a hablar de “el día en que le robaron su tranquilidad...”

Mencionó que es relevante iniciar sus alegaciones con esa frase, porque sitúa el debate en el delito por el cual fueron acusados los imputados presentes, un delito contra la seguridad, asociándose con el fin de cometer de manera permanente cierta categoría de delitos con los que fueron capaces de vulnerar la tranquilidad.

Al iniciar este juicio oral, recordó el fiscal, se adelantó que este versaría sobre una investigación denominada policialmente como “LA INDUSTRIA DEL PORTONAZO”, y que conocería de una organización delictiva empresarial, dotada de procesos de trabajo, constituida como una estructura jerarquizada, compuesta por personas con distintos perfiles de cargo; entre ellos, funciones de administración del dinero, encargados de tareas operativas y apoyo técnico y logístico, todos ellos bajo la subordinación y dependencia de un líder, la que se posicionó al menos entre los años 2016 y 2020, a través de la creación de sociedades, con antecedentes falsos, en el negocio de la compraventa de vehículos robados, la adulteración física de estos y el blanqueo de su origen a través del uso y abuso perverso de nuestro sistema financiero y registral, generando facturas falsas para hacerlas coincidir con los números identificatorios modificados a los vehículos, de tal forma de inscribirlos con estos antecedentes ante el Registro Civil y obtener placas patentes con las que vendían –a terceros de buena fe– automóviles aparentemente nuevos, en circunstancias que eran vehículos legalmente inexistentes, originalmente robados.

Estimó el persecutor que, rendida la prueba, con fundamento en las declaraciones de funcionarios y peritos de ambas policías, testigos institucionales del Registro Civil y Servicio de Impuestos Internos, testigos expertos de empresas certificadoras y notarías, testigos civiles y víctimas de robo y estafa, apoyadas en múltiples escuchas telefónicas y vaciado de dispositivos debidamente autorizados, profusa prueba documental y apoyo audiovisual, el tribunal pudo conocer a cabalidad el funcionamiento de esta asociación, de cómo se originó con el contacto de dos cabezas pensantes, de cómo el líder de la misma, don Yerko Silva, se fue haciendo de los contactos de prestadores de servicios que requerían expertis en determinadas labores y oficios, y durante el funcionamiento de esta empresa delictual, se apoyó en personas de su confianza, leales, que realizaron en la calle las tareas necesarias para la ejecución del plan delictual, reclutando finalmente a terceros fungibles para la creación de automotoras falsas y blanqueamiento de vehículos robados, con el fin último de -a través de estafas a compradores de buena fe- venderlos como nuevos y generar importantes ingresos, todos de origen ilícito, los que permitieron al líder y a su grupo familiar, aun estando este privado de libertad, el pago de vehículos y viajes, la compra de inmuebles y el levantamiento e inyección de recursos a un negocio lícito, administrado por Albano Silva, mediante el cual se disimuló el origen ilícito de las ganancias del plan delictual, a través de, entre otras figuras, el flujo de dineros entre las cuentas utilizadas por el propio Albano y las de los acusados Carolina Cornejo y Víctor Quezada.

Refirió el fiscal que el delito de asociación ilícita está inserto en nuestro ordenamiento, en el título de aquellos que atentan contra el orden y la seguridad públicos, cometidos por particulares. Y el orden público no es otra cosa que la “confianza en el normal y pacífico desenvolvimiento de las actividades ciudadanas”, esto es, la tranquilidad pública, entendida como una percepción general que posibilita el ejercicio de los derechos individuales a los miembros de la comunidad y tiende al fortalecimiento de las relaciones sociales. En suma posibilita el desarrollo del plan de vida de quienes forman parte de una sociedad.

La asociación constituida por don Yerko Silva y los miembros reclutados por éste o por sus brazos operativos, generó un plan de negocios cuyo principal input era el robo de vehículos con intimidación y/o violencia. Así se pudo escuchar conversaciones entre el acusado Camilo Sandoval y terceros que le ofrecían vehículos robados, incluso al propio acusado siendo invitado a cometer este tipo de ilícitos. También se pudo observar hallazgos en los teléfonos de Yerko Silva y Camilo Sandoval, que corresponden a imágenes de vehículos recientemente robados o de sus documentos. Esto sin contar con las innumerables diligencias de recuperación de vehículos de que dieron cuenta los funcionarios policiales y las propias víctimas estafadas, vehículos inscritos por esta asociación a través de las empresas creadas al efecto, tratándose en su totalidad, una vez efectuadas las pericias o las consultas a las automotoras mediante scanner, de vehículos originalmente robados, acompañándose en cada caso el relato de las víctimas de dichas sustracciones o del funcionario policial que acogió la respectiva denuncia, además de los encargos policiales, los que dieron cuenta de un altísimo porcentaje de robos violentos, y también de no pocos robos desde estacionamientos, vehículos que posteriormente fueron recuperados sin daños, probablemente sustraídos utilizando inhibidores como los que fueron incautados al acusado Camilo Sandoval.

Continuó señalado que, una vez con los vehículos en su poder, según se acreditó también con la documentación que se incorporó respecto de cada automóvil inscrito, declaración de don Christopher Artigas y de doña Carla Vildósola, así como notarios y empresas certificadoras afectadas, pericias dactiloscópicas del Registro Civil, información de Aduanas y de los municipios aportada en juicio, antecedentes sobre facturación aportada por el Servicio de Imputados Internos y las compañías telefónicas, hallazgos en los teléfonos incautados a Yerko Silva, Ilich Chopa y Camilo Sandoval, computadores de don Roberto Bascur, cuadernos y dispositivos de don Sebastián Martínez, libretas, cuadernos y documentos incautados al propio Yerko Silva, Juan Navarrete, Daniela Espinoza y David Millalén, y en último caso también con las pericias que se incorporaron en juicio respecto de cada vehículo incautado y el relato de los oficiales de caso, el líder de la asociación y sus miembros abusaron de un sistema creado para facilitar los negocios lícitos de grandes empresas y de emprendedores, para delinquir desde la impunidad. En efecto, como se pudo comprobar, entregaron antecedentes falsos para crear sociedades a través del portal “tú empresa en un día”, para poder obtener firma digital a través de las empresas certificadoras y notarías, y así poder facturar ante el Servicio de Impuestos Internos, y para reinscribir vehículos robados y adulterados como si fueran nuevos. Vulnerando de esta forma cada sistema o proceso vinculado a su plan criminal, y afectando la confianza puesta por la ciudadanía en estas instituciones, y en último término, la tranquilidad pública.

Por último, aseveró el fiscal que, una vez blanqueados los vehículos, la asociación, abusando de la buena fe y de las plataformas de compraventa de vehículos entre particulares, vendió más de 80 vehículos adulterados de la forma señalada, algunos incluso a automotoras, la mayoría a particulares que veían en esta compra el cumplimiento de un sueño o la satisfacción de una necesidad, muchos de los cuales, una vez que la policía los contactó e incautó los automóviles, siguieron por mucho tiempo pagando créditos. El tribunal pudo escuchar el relato de las víctimas estafadas por esta asociación, quienes se respaldaron antes de la compra, consultaron autofact, talleres mecánicos, incluso Carabineros, y en esa confianza, creyeron las historias de viajes al sur o al norte, de separaciones, de segundas llaves perdidas u olvidadas, mentiras elaboradas por el líder y sus brazos operativos, y llevadas a cabo por quienes participaban en la exhibición y venta, como los acusados David Millalén y German Duarte, para darle credibilidad al negocio y que se pudo escuchar en las interceptaciones debidamente autorizadas, y en las conversaciones respaldadas por las víctimas a través de redes sociales o por teléfono, y que corroboraron en este juicio, al igual que los funcionarios policiales a cargo de cada diligencia. Derrumbado el sueño, perdida la inversión e incluso la familia, en algunos casos, resulta evidente que a estas víctimas la asociación ilícita sobre la que versa este juicio, les quitó todo, incluida su tranquilidad.

En definitiva, con la prueba rendida, se ha demostrado que existe una pluralidad de sujetos, organizados, con objetivo común, con distribución de funciones que bajo el liderazgo de los acusados presentes lograron realizar con éxito su plan criminal durante un extenso período de tiempo. Todos estos son los elementos objetivos propios del tipo penal de asociación ilícita, los que han sido reiteradamente expuestos en sentencias de los Tribunales orales, las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema, a modo ejemplar, este

último Excmo. Tribunal, en el fallo del caso conocido como “Eterna”, Rol 37965/2015, de 24 de febrero de 2016, señaló que “El delito prevé la integración de dos o más personas en el cometimiento de los hechos. A la par de la permanencia y del acuerdo de voluntades tendiente a la ejecución de planes para cometer delitos determinados, resulta importante analizar el grado de pertenencia que tienen hacia la sociedad criminal todos y cada uno de sus miembros. Ello no exige por sí una actividad material, sino la de estar intelectualmente en el concierto delictivo que se forma o unirse al ya formado; o sea coincidir intencionalmente con los otros miembros sobre los objetivos asociativos... La participación como coasociado presupone la conciencia del objeto del pacto y la voluntad de ligarse con él”.

El fiscal manifestó, en la misma línea, que en la apertura del juicio, el Ministerio Público se comprometió a rendir prueba suficiente respecto de la participación de la asociación ilícita liderada por Yerko Silva en la constitución de múltiples empresas vinculadas en su mayoría al rubro del negocio vehicular, las que fueron constituidas mediante la entrega maliciosa de datos falsos en las declaraciones de iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos, con la única finalidad de obtener autorización de documentación tributaria y así dar una apariencia lícita a la inscripción de los vehículos previamente sustraídos y adulterados; sociedades con domicilios inexistentes o no correspondientes, que no desarrollaron las actividades del giro declaradas ante dicho organismo.

Indicó que respecto de todas las empresas incorporadas en el auto de apertura:

- El SII informó, mediante prueba testimonial y los informes incorporados como prueba documental, que se acreditó que estas no tenían domicilio en la dirección que fijaron, ya sea en terreno en fiscalizaciones, o vía respuesta de los supuestos arrendadores y que sus constituyentes no contaban con ingresos formales que justificaran su aporte al capital social.

- Esto fue corroborado por los diversos municipios que, consultados, respondieron mediante carta u oficio, que tales empresas no tenían vínculo con dirección alguna asociada a la comuna.

- Asimismo, Aduana informó que ninguna de las empresas registra importación de vehículo, según respuesta incorporada en juicio.

- Información esta que fue corroborada por funcionarios policiales de SEBV y PDI que estuvieron a cargo de la investigación, en distintos momentos.

- Lo anterior sumado a las declaraciones de Christopher Artigas del Registro Civil, Carla Vildósola del SII, los funcionarios de las empresas certificadoras y de las notarías que dieron cuenta de la participación directa de los socios de las empresas investigadas en la constitución y obtención de firma digital de las mismas, permite tener por acreditado que estas fueron creadas con antecedentes falsos y que, a su vez, la documentación emitida por ellas, que fue presentada ante el Registro Civil para la obtención de patentes nuevas, era también falsa. Información que fue incorporada también por los oficiales de caso, entre ellos Raquel Forero respecto de la creación de las empresas y la facturación electrónica, Pedro Olivares respecto

de los contactos con Registro Civil y la creación de material de apoyo para una investigación de estas dimensiones, y Larry Caro respecto de la forma en que se fueron construyendo las “mallas societarias” que permitieron recrear el entramado de la asociación ilícita sobre la que versó el presente juicio.

- Esto también encuentra sustento en la declaración de Sebastián Martínez, así como la evidencia incautada desde su domicilio y el análisis de la misma, de lo que dieron cuenta los funcionarios Víctor Contreras, Raquel Forero, Fernando Vásquez y los notarios cuyos timbres y/o membrete (según relato de doña Nancy de la Fuente, y de los funcionarios Carlos Riveros que entrevistó a los notarios y Fernando Vásquez que analizó la evidencia y particularmente el contenido de un pendrive incautado), en cuanto se logró acreditar la confección de documentación material e ideológicamente falsa con la que se crearon algunas de las empresas investigadas. Asimismo, mediante la información aportada por VTR y el SII, se pudo establecer que al menos las facturas de la empresa Valenzuela y Arce, comprobadamente falsas, fueron emitidas desde las direcciones IP de Franco Cruz, lo que fue corroborado por los oficiales de caso. Esto, sumado a la evidencia material incautada a Roberto Bascur, análisis de la misma y de los teléfonos incautados a los acusados Yerko Silva, Camilo Sandoval e Ilich Chopa, todo esto corroborado por los funcionarios que efectuaron tales diligencias (Alejandro Hermosilla detención e incautación Bascur), permitió acreditar, tanto la confección artesanal de stickers de seguridad y la modificación física de los vehículos, para hacerlos coincidir con la documentación creada u obtenida fraudulentamente, como las vinculaciones de estos sujetos especialistas en su área con los acusados y con la asociación, de tal manera de que esta, a partir de este proceso, obtenía vehículos con origen ilícito, y los transformaba en un producto para la venta.

- La basta prueba incorporada en este juicio, escuchas telefónicas, análisis de dispositivos incautados a las acusados, vigilancias, imágenes y documentos incorporados con las víctimas y funcionarios policiales, y el propio relato de las víctimas estafadas y de los oficiales que participaron en la incautación de los vehículos adulterados por la asociación, permitió acreditar la participación de distintas personas con diversos roles, desde la constitución de las sociedades hasta la venta de los vehículos, pasando por la sustracción del vehículo, adulteración, reinscripción y ofrecimiento de estos en portales o directamente, personas que fueron reclutadas por algunos brazos operativos de la agrupación, todos los cuales rindieron cuenta en su momento a Yerko Silva, y ejecutaron el plan de negocios ideado por éste, quien lo aprendió de Ilich Chopa. Nombres como Edith Silva, Tatiana Arana y los propios acusados Juan Navarrete, Camilo Sandoval y Albano Silva se escucharon repetidamente a lo largo del juicio, quienes participaron personalmente en las distintas fases del proceso, o bien reclutaron a terceros para que ejecutaran los diversos roles necesarios para el blanqueamiento de los vehículos robados y su venta a compradores de buena fe.

De este modo, aseguró el fiscal, el tribunal pudo escuchar el relato de las víctimas estafadas, sustentado en la documentación que ellos mismos recabaron al momento de comprar los vehículos o con posterioridad a enterarse de que habían sido estafados, y también a los propios acusados y otros miembros

de la asociación, respecto de la forma en que debían llevar a cabo cada uno de los pasos para concretar la venta, incluyendo instrucciones sobre cómo vestir, cómo presentarse, qué nombre decir y qué historia contarle a los compradores, esto en las interceptaciones y vaciados de teléfonos debidamente autorizadas, que dan cuenta de los relatos libres y espontáneos que estos sostenían en la confianza de sus comunicaciones privadas y que vienen a ratificar todo lo expuesto en este juicio. Todo esto respaldado, además, con las fotografías que le enviaban a Yerko Silva Toro a su teléfono celular, a su solicitud, tal como él señaló en su relato ante el tribunal y en los audios de whatsapp, puesto que “tenía la costumbre de revisar todo cómo había quedado”.

En específico, manifestó el fiscal, que al desglosar la prueba rendida aparecen antecedentes que permiten vincular a todas y cada una de las empresas de la acusación fiscal, con la asociación investigada, ya sea directamente a través de su líder, o de alguno de sus brazos operativos.

Respecto de la sociedad VALENZUELA Y ARCE, ésta constituida por su socio Carlos Gómez, quien registra visitas a Yerko Silva y transferencias desde la cuenta de Claudia Sandoval. Además, es reclutado por Edith, quien ingresa con él a las visitas (según documento de Genchi) y que además de los dichos del acusado (incorporados por la funcionaria Raquel Forero), quedó acreditado que tienen un vínculo de amistad (pues son amigos en redes sociales donde también mantienen saludos, y ella está ingresada como contacto en el teléfono de Yerko) y “laboral” (pues también registra transferencias desde y hacia otros miembros de la asociación).

Además, el pago de la firma electrónica en E-cert es en diciembre de 2017, coincidente con transferencia desde la cuenta de Claudia Sandoval a Carlos Gómez.

Según consta en prueba documental correspondiente a consulta de direcciones IP de facturación al Servicio de Impuestos Internos y a VTR, existen múltiples facturas emitidas por esta sociedad, relacionadas con vehículos reinscritos, adulterados y vendidos por la asociación, desde la dirección IP de don Franco Cruz, respecto del cual se acreditó en juicio -mediante declaraciones de oficiales de caso y de los propios acusados, respaldado esto en escuchas y otros medios de prueba incorporados- su relación laboral con Yerko Silva, los primeros trabajos para este mediante el contacto con Ilich Chopa a través de su cuñado, las vinculaciones con otros brazos operativos como Tatiana Arana, Freddy Miranda y Claudia Sandoval con quien mantuvo conversaciones telefónicas que se pudieron escuchar y donde resulta evidente el trabajo al que se dedicaban y el liderazgo de Yerko Silva; con Sebastián Martínez, quien incluso lo tenía registrado como Franco (Yerko) en sus cuadernos y libreta; con testaferros como Carla Leal quien declaró en la etapa investigativa, según dio cuenta en juicio el inspector Daniel La Regla, que fue reclutada por él, y que fue fijada en una vigilancia mientras inscribía un vehículo en su compañía y de Freddy Miranda, según se incorporó con la inspectora Inés Solans, esto respaldado en material audiovisual de los imputados en el banco y registro civil realizando los trámites para la inscripción de dicho vehículo con factura de otra de las empresas utilizadas por la asociación.

De esta manera, precisó los vehículos inscritos por esta empresa, los cuales son los siguientes:

1.- Patente KBWK.63 MAZDA CX9 inscrita el 26-01-2018 solicitante y adquirente ELVIS RIOSECO quien tiene visitas a Yerko junto y por separado con Edith Silva. Vehículo que da inicio a la investigación. Al momento del control, Edith Silva estaba acompañada por Alan Lidid y Avelino Tapia. Posterior a ello, se inicia la investigación con las consultas a Registro Civil, lo que permite construir un esquema de sociedades, personas naturales y vehículos de interés, como dieron cuenta los funcionarios de la BIRO Álvaro Pino, Pedro Olivares y Larry Caro. Lo anterior, corroborado por Christopher Artigas. Sumado a esto, con posterioridad se identificó a Claudia Sandoval compartiendo fotos con este auto en sus RRSS (se exhibieron las fotos y se incorporaron con Olivares y Caro OMP 131). Asimismo, Larry Caro declara que, al consultar por su procedencia, Edith manifiesta que el auto se lo había pasado Camilo Sandoval.

2.- Patente KBSR.10 HYUNDAI TUCSON inscrita el 07-12-2017, solicitante CARLOS GÓMEZ.

3.- Patente JJLG.46 MAZDA NEW 3 inscrita 19-12-2017, solicitante y adquirente EDITH SILVA.

4.- Patente KBKR.44 AUDI Q7 inscrito el 26-01-2018, adquirente y solicitante JOSE RAIMÁN CORDERO, condenado por estos hechos y comprobadamente testaferro reclutado por Edith Silva Sánchez y participe en diversas inscripciones y ventas, según se pudo acreditar durante el juicio mediante declaraciones de oficiales de caso y víctimas, con respaldo en los antecedentes aportados por ellas durante la investigación e incorporados en juicio.

5.- Patente HHBL.28 MAZDA 3 inscrito el 03-01-2018, adquirente y solicitante AVELINO TAPIA, testaferro reclutado por Edith Silva Sánchez.

6.- Patente JZLP.77 Kia Sorento respecto del cual, una copia de la factura con que se inscribió fue encontrada en el computador de Paula Becerra, conforme al análisis del inspector La Regla.

Respecto de la sociedad KOR SPA, constituida en agosto de 2017 por Carla Sandoval y Claudio Tapia, cuyo correo en acepta.com para la constitución y firma electrónica, según información entregada por la propia empresa certificadora e incorporada en juicio, es edita_a@hotmail.com, asociado a Edith Silva, quien es reclutadora de Yerko. Además, Claudio Tapia se encuentra como contacto en el teléfono de Yerko.

Según informe del SII, esta empresa tiene facturación con la empresa Méndez Moya, también constituida y utilizada por la asociación.

Mencionó que dentro de los vehículos inscritos por esta empresa, están los siguientes:

1.- Patente GYPP.92 JACK S3 inscrito el 10-08-2017, adquirente RAIMÁN CORDERO solicitante EDITH SILVA, éste resulta clave puesto que se incautó un comprobante de depósito efectuado por Edith Silva a la cuenta de Claudia Sandoval, con el que se llega a Yerko Silva, documento que fue exhibido como evidencia material, y que además coincide con cartolas de Claudia. La Víctima Erik Álvarez, que incluso les

pagó el pasaje en bus de regreso a Santiago, reconoció a Edith, Raiman y Manuel Astorga en la venta, corroborado por la víctima en el juicio oral y por Olivares y Larry Caro.

2.- Patente JCCJ.30 DODGE JOURNEY inscrito el 31-08-2017 solicitante CARLOS GÓMEZ, respecto del cual la rercia dactiloscópica N° 5655 del Registro Civil establece que la huella de la solicitud es efectivamente de él.

3.- Patente JCKK.31 HYUNDAI TUCSON inscrita el 12-09-2017 solicitante RAIMÁN CORDERO, adquirente EDITH SILVA. La víctima Ricardo Ruiz reconoció a Edith Silva, Alan Lidid (que conducía la Mazda CX9 con que parte la investigación) y José Raiman en la venta, de lo que da cuenta el funcionario de la BIRO Álvaro Pino.

4.- Patente JPSD.56 NISSAN MURANO inscrita el 16-08-2017 adquirente JORGE SALINAS, solicitante Carlos Latín. La Víctima Claudio Ramírez Witto, relató en el juicio que la venta fue con Camilo Sandoval en diciembre de 2017, a quien depositó y transfirió diversos montos por este concepto, documentación que se incorporó con la víctima, concretamente comprobantes de transferencia y cartolas bancarias que acreditan estas transacciones, directamente a la cuenta de Camilo Sandoval. Información apoyada también en el relato de Olivares. Esto último, los dineros transferidos o depositados por la víctima a Camilo, es corroborado por Larry Caro (OMP 545), quien además señaló que Jorge Salinas tenía contacto directo con Camilo. Sobre esto, la investigación arrojó que eran medio hermanos, y se exhibieron escuchas donde Camilo hablaba con Tatiana respecto del uso de Salinas como “goma”; además, Claudia Sandoval en su declaración señaló este parentesco.

5.- Patente JJLL.87 NISSAN KICKS inscrita el 20-11-2017, solicitante y adquirente RAIMÁN CORDERO. La víctima Juan Rodríguez reconoció a Raiman y Edith que se hizo pasar por su hija en la venta. Además, acompañó la conversación de whatsapp y fotos enviadas por la misma vía por Raiman a la víctima durante la negociación, fotos que se pudo establecer que fueron sacadas a escasos metros de la casa de Camilo y Claudia Sandoval. De todo esto dio cuenta Larry Caro, se incorporaron las imágenes (OMP 258, 259, 260 y 266), quien también ratificó el reconocimiento certero de la víctima respecto de Raiman y Edith. Información corroborada por la víctima en el juicio.

5.- Patente GKWP.19 AUDI A4 inscrito el 30-11-2017, solicitante PAREDES QUEVEDO (reclutado por Camilo según su declaración incorporada en juicio por los oficiales La Regla, Forero y Vásquez). Resulta relevante que, en el correo de Roberto Bascur, según análisis incorporado mediante imágenes con La Regla, constan tres stickers confeccionados por éste y remitidos a Camilo Sandoval, que coinciden en marca y número de chasis con este vehículo ya adulterado, lo que necesariamente da cuenta de la participación de Camilo en el proceso de modificación.

6.- Patente HHBL.12 KIA FRONTIER inscrito el 17-08-2017 adquirente Nelson MÉNDEZ MOYA, quien fue reclutado por Edith Silva, como ya se ha señalado.

7.- Patente HHBL.27 HYUNDAI H1 inscrito el 29-12-2017 adquirente Nelson MÉNDEZ MOYA, quien participó en la venta y es reconocido por la víctima Alejandro Guajardo, según relato del Comisario Olivares, quien expuso sobre la recuperación del auto y se contactó con la víctima del robo, que fue la propia Gildemeister, a través de Edgardo Berger, quien también declaró en el juicio y corroboró este relato.

8.- Patente JYPV.39 MAZDA 6 inscrito el 27-11-2017, adquirente y solicitante AVELINO TAPIA ROSAS, “goma” reclutado por Edith Silva, quien la acompañaba a bordo de la Mazda CX9 con que inicia la investigación.

9.- Patente JZKY.32 KIA CERATO inscrito el 22-11-2017 solicitante JOSE PAREDES QUEVEDO, adquirente Oscar Vásquez, reconocido este último por la víctima representante de Laguna SPA, de lo que dio cuenta el funcionario de la BIRO Álvaro Pino. Relevante es que José Paredes declaró durante la investigación, que quien lo reclutó, quien lo acompañó y quien le pagó siempre fue Camilo Sandoval, declaración de la que dio cuenta La Regla en juicio.

10.- Patente GYLH.70 Nissan NP300 inscrita el 11.08.2017, solicitante y adquirente Chris Gálvez. La víctima Jorge Vera reconoció a la propietaria y a Camilo Sandoval como quien la acompañaba, mostró el vehículo y lo vendió, y entregó documentación fundante de la venta, lo que es incorporado en juicio por el funcionario BRILAC Carlos Riveros. Además, la pericia dactiloscópica N° 5655 del Registro Civil estableció que la huella de la solicitud es efectivamente de Chris Gálvez.

Con respecto de la sociedad NOVA SPA, los socios Miguel Pardo y Héctor Tapia además lo son de Best Car, sin autos inscritos, ambos condenados por esta investigación.

Señaló que entre los vehículos inscritos por esta empresa, se encuentran los siguientes:

1.- Patente KJCT.68 SUBARU NEW XV inscrito el 27-04-2018, solicitante y adquirente JORGE SALINAS, conocidamente testaferro reclutado y utilizado por Camilo Sandoval y Tatiana Arana. A través de la víctima Joselyn Martínez se establece vinculación con Ilich Chopa, el cual es reconocido por esta en la venta, según relato del funcionario BRILAC Cristian Álvarez, corroborado por la propia víctima en el juicio oral.

Además, Jorge Salinas participa como solicitante y adquirente del vehículo patente KJCT.95 y como solicitante del vehículo patente KLLT.68, mientras que otros testaferros de la asociación, Sergio Calfuén y Sebastián Díaz Salinas, registran como adquirente y/o solicitante respecto de los vehículos PPU KCPT20, GKWP23, KLJK79, KPFT53, KHSD85 y KPFR79. Todos ellos, condenados respectivamente por su participación en estos hechos, como miembros de la asociación liderada por Yerko Silva.

Asimismo, Nicolás Chacón, también condenado en esta investigación, registra como solicitante de primera inscripción de los vehículos PPU JRZZ96, KHSW93, KHSW94 y KHSW99, HYDG48, KPTT73 y KRWC10. Relevante es que Chacón aparece también como socio de la empresa SOBRERUEDAS, la que se constituyó en abril de 2018, coincidente con transferencias efectuadas desde la cuenta de Claudia Sandoval a

la madre de Sebastián Martínez Zavala, cuenta en que éste recibía el pago por la constitución de las empresas de Yerko, según su propia declaración en juicio oral.

2.- Patente HYDG.53 Hyundai Accent inscrito el 07-02-2018, respecto del cual se obtuvo su identidad por el representante de la víctima Laguna SPA, que indicó que Oscar Vásquez también les ofreció este auto cuando ellos le compraron el Kia patente JZKY.32; de esto dio cuenta el funcionario BIRO Álvaro Pino, información corroborada por el propio testigo Oscar Vásquez en juicio oral.

En relación con la sociedad FULL ORION, constituida en diciembre de 2016 por William Orellana e Ignacio Zavala, ambos condenados por esta investigación.

Entre los vehículos inscritos por esta empresa, están los siguientes:

1.- Patente JSSD.29 FORD Edge inscrito el 04-07-2017, adquirente José PAREDES QUEVEDO (participó en la venta) y solicitante Luis Astudillo o RAPERITO, este último testaferro conocidamente reclutado por Tatiana y Camilo, quien conoció a este último como profesor en el SENAME según su declaración aportada por Daniel La Regla en el juicio y del cual, se pudo escuchar conversaciones desde el teléfono de Camilo que dan cuenta de que se dedicaba al robo de vehículos; quien además acompañó a Tatiana el día en que ella, por instrucción de Yerko, sacó todo lo comprometedor de su casa y pasó la noche en un hotel, tras la detención flagrante de Camilo a bordo del vehículo por cuya receptación está acusado en esta causa, de todo lo cual se exhibieron escuchas, corroborado esto por el libro de registro del hotel. Según el relato de la víctima Mireya Sepúlveda, fue el mismo José Paredes quien participó en la venta, testaferro cuya cédula de identidad se encontró en el teléfono de Ilich Chopa, además de una transferencia por \$14.350.000 de pesos al propio Ilich, lo que fue corroborado con las cartolas de Daniela Opazo. Relevante es que José Paredes declaró que quien lo reclutó, quien lo acompañó y quien le pagó siempre fue Camilo, declaración de la que dio cuenta La Regla, Vásquez y Raquel Forero; esta última agregó que Paredes manifestó que el primer contacto con Camilo, por una solicitud de inscripción, fue mediante reunión en el Mall Arauco Maipú, lugar que se repite en un número importante de las estafas ventiladas en este juicio. Por último, la pericia dactiloscópica 5655 del Registro Civil establece que la huella de la solicitud corresponde efectivamente a Luis Astudillo.

Indicó el fiscal respecto de este caso, que resulta también relevante el relato del comisario Olivares, quien dio cuenta de la detención de Ilich e incautación de evidencia, entre ella placas patentes, una solicitud de primera inscripción de un vehículo, y una hoja cuadriculada donde hay un desglose de los gastos asociados al blanqueamiento de un auto. También detalló la declaración de Daniela Opazo, cuya cuenta es usada por Ilich para las transacciones propias del negocio, todo esto corroborado por esta misma testigo en el juicio.

2.- Patente JHFX.82 TOYOTA Hi Lux inscrita el 30-06-2017, adquirente PAREDES QUEVEDO comprobadamente testaferro reclutado por Camilo, y solicitante TATIANA ARANA, respecto de quien la pericia dactiloscópica 5655 del Registro Civil establece que la huella de la solicitud es suya.

4.- Patente JTGR.48 VOLVO V40 inscrito el 28-07-2017, solicitante JORGE SALINAS URIBE.

5.- Patente HSWJ.63 FORD Ranger inscrita el 05-07-2017 adquirente JORGE SALINAS y solicitante Luis Astudillo o RAPERITO.

6.- Patente HFXX.33 Grúa CATERPILLAR inscrita el 04-05-2017, adquirente NELSON MÉNDEZ y solicitante MATÍAS MOLINA DAZA, cuya cédula de identidad se encontró en el teléfono de Yerko. La venta de esta máquina a la empresa estafada BERMAX fue gestionada por Albano Silva Toro y utilizada para el pago de una deuda por concepto de arriendo del restaurante, a la víctima Clodomiro Silva. Copia de la factura y de la cédula de Nelson Méndez por ambos lados se encontró en el computador incautado a Paula Becerra, según dio cuenta en juicio el inspector La Regla, apoyado en las imágenes que se exhibieron del análisis del dispositivo. También es relevante que los propios acusados en estrados declararon que la factura para este vehículo fue gestionada a través de Ilich Chopa. De acuerdo con el relato del comisario Olivares, con esto se inicia una fase investigativa que tiene que ver con el ingreso de dinero ilícito en el restaurante, el cual fue utilizado también para guardar vehículos. Esto último, se corroboró con videos e imágenes de una Hyundai H1 PPU LPHC.22 en el teléfono de Yerko, con los propios dichos de Yerko ante el tribunal y con el resultado del allanamiento en el local, donde se encontró un Porsche PPU GXPD.55 en poder de Albano, con encargo (según declararon Olivares y personal Brilac a cargo de ese allanamiento). De acuerdo con el relato de Larry Caro, las víctimas Bernardo Campusano y Máximo Contreras (BERMAX) adquirieron la máquina a través de Albano Silva Toro, de manos de Clodomiro Silva; a su vez, Clodomiro Silva les señaló que Albano gestionó esa venta y que con el producto de la misma le pagó parte de las deudas por arriendo de la parrillada. Se exhibieron fotos de la grúa incautada en poder de BERMAX. Esto fue ratificado por Bernardo y Clodomiro en el juicio oral. Luego Larry relató que se llegó hasta la parrillada, donde se entrevistaron con Albano y él les señaló que la grúa junto a otro vehículo se los había entregado Ilich Chopa Aldana; esta información la entregó informalmente, es citado a la unidad policial donde llegó con un abogado y manifestó su deseo de no declarar. En ese momento de la investigación Albano aún no era blanco investigativo; con posterioridad a esta diligencia, sumada la incautación del depósito a Claudia Sandoval y a los dichos informales de Edith durante la incautación de la Mazda CX9 donde señaló que el auto se lo pasó Camilo Sandoval, es que se llegó al clan Silva Toro. Es importante que Albano haya sindicado a Ilich, ya que esto es ratificado por múltiples escuchas exhibidas a oficiales de caso y acusados, en que estos señalan que en caso de ser consultados, deben incriminar a Ilich.

Por su parte, durante el desarrollo de la investigación, con las diversas diligencias efectuadas dentro de las cuales se encuentran los levantamientos de secretos bancarios de los imputados, fue constatado que Albano Silva Toro, efectuaba transferencias a miembros de la organización, como Tatiana Arana, Juan Navarrete, Franco Cruz, Francia Iligaray, familiar de Franco, Aimel Gavilán, Juan Provoste entre otros.

Asimismo, a solicitud de Yerko Silva, Albano le enviaba comida, sobre 10 raciones aproximadamente, la cual era preparada en los diversos restaurantes administrados por Albano, alimentos

que eran transportados por Claudia Sandoval Godoy, la que, además, declaró expresamente que recibía dineros de la venta de vehículos de Tatiana, Albano y Freddy.

Del mismo modo, quedó de manifiesto en conversación de Yerko Silva con su Hermano Albano, que el primero es el que tiene “la mano”, haciendo referencia a que Yerko tiene el contacto para inscribir vehículos y Albano no se puede meter, dando a entender que Albano no puede hacer nada sin su autorización. Según el Progresivo 1850, que fue interpretado por el comisario Caro.

De acuerdo al relato de Franco Cruz Iligaray, declaración reproducida por el inspector La Regla, éste manifestó que en relación a la venta de facturas y homologaciones, primero, tuvo contacto con Ilich Chopa y luego con Yerko, y finalmente cuando trasladaron a Yerko a un penal en la ciudad de Puerto Montt, con Albano Silva Toro. Antecedente que además quedó corroborado con la exhibición de visitas enroladas con Yerko Silva en la ciudad de Santiago y Puerto Montt, en la que se encontraba Albano y Juan Navarrete.

Finalmente, Renán Guenteo al prestar declaración expuesta en el juicio por La Regla, refirió que Albano Silva Toro es el que lo contactó, llevó al Registro Civil y al SII, a fin de obtener claves las cuales serían administradas por Albano, obteniendo una retribución económica de parte de éste último. Todo lo cual permite acreditar la participación del acusado Albano Silva en múltiples fases del plan delictual, siempre, eso sí, a la sombra de su hermano Yerko.

En lo que respecta a la empresa ORION, también constituida en diciembre de 2016 por William Orellana e Ignacio Zavala, condenados por esta investigación, el fiscal expuso que los vehículos inscritos por esta son los siguientes:

1.- Patente JHJV67 Hyundai Creta, solicitante Camilo Sandoval y adquirente Jorge Salinas, inscrita en abril de 2017 y recuperada en noviembre de 2017. La víctima Gloria Gálvez reconoció a Camilo como vendedor, y la pericia dactiloscópica 5655 del Registro Civil establece que la huella de dicha solicitud es efectivamente de Camilo. El comisario Olivares dio cuenta de las diligencias y se incorporaron con él las imágenes entregadas por la víctima donde aparece el auto ofrecido en un portal, y tanto a un costado del mismo como en su interior, Camilo Sandoval, de cuerpo completo primero y sólo su rostro reflejado en la pantalla luego, indicando además el funcionario, que la víctima reconoció a este como quien llevaba adelante la compraventa en todo momento. Este relato fue ratificado por la víctima en el juicio oral y por el funcionario BRILAC Ángel Bustos Díaz y el teniente Sebastián Silva del SEBV de Carabineros.

2.- Patente JHFW67 Peugeot 301, solicitante Edith Silva y adquirente Carlos Gómez, inscrito en mayo de 2017 y vendido en junio del mismo año. Según el relato de la víctima Melissa Solar en juicio, el pago del vehículo lo hizo en una transferencia a la cuenta Banco Estado de Edith Silva, y dos transferencias a la cuenta BBVA de Claudia Sandoval. Esto fue corroborado con el relato del funcionario BRILAC Carlos Riveros, y particularmente con la documentación correspondiente a las cartolas de Edith y Claudia, donde aparecen reflejadas las transferencias desde la cuenta del marido de la víctima, Luis Concha. Lo que resulta relevante,

puesto que confirma los dichos de Claudia Sandoval en la etapa investigativa e incorporados en el juicio por la inspectora Raquel Forero, en cuanto era ella quien recibía la plata, que sabía que su origen era la venta de vehículos adulterados, todo esto mucho antes de la creación de la sociedad “SyB”, en la época en que el restaurante seguía siendo un local de comida peruana administrado por Carolina Cornejo.

3.- Patente JHFW.87 Ford Explorer, cuyo solicitante es Camilo Sandoval y adquirente Daniela Carrasco. Este vehículo fue inscrito en mayo de 2017 y la víctima Jeannette Cartes reconoció en la venta a Camilo y Tatiana Arana, según relato del funcionario BRILAC Cristian Álvarez, corroborado por la propia víctima en el juicio. Además, la pericia dactiloscópica 5655 del Registro Civil establece que la huella de la solicitud es de Camilo.

4.- Patente JHFW.91 Hyundai Accent, solicitante Camilo Sandoval y adquirente Daniela Carrasco, inscrita en mayo de 2017. El vehículo es vendido por el propio Camilo, reconocido por la víctima Marcela Pereira. Se incorporaron fotos de Camilo y Luis Astudillo o Raperito junto al vehículo, aportadas por la víctima y sacadas por su ex pareja mientras el propio Camilo exhibía el vehículo para su venta. Además, la pericia dactiloscópica 5655 del Registro Civil establece que la huella de la solicitud es de Camilo Sandoval. Por último, la víctima y el inspector La Regla confirmaron la búsqueda del vehículo, negociación, exhibición, forma de obtención de la fotografía en que aparece el acusado y los reconocimientos en juicio, además del funcionario BRILAC Cristian Álvarez.

5.- Patente JPPW.84 Mazda CX9, solicitante y adquirente Tatiana Arana, inscrita en mayo de 2017. La víctima Ricardo Parra reconoció en la venta a Tatiana, según relato del funcionario BRILAC Cristian Álvarez corroborado por la propia víctima en juicio. Además, la pericia dactiloscópica 5655 del Registro Civil establece que la huella de la solicitud es de la señora Arana.

Por último, en relación con esta empresa, el fiscal destacó su relevancia en cuanto a que el acusado Yerko Silva, a pesar de negar su vinculación con ella, declaró en estrados que el primer vehículo que ellos inscribieron fue una Nissan Xtrail, de la empresa ORION, PPU HFXX.32, cuya solicitante y adquirente fue precisamente quien se constituyó en uno de los más leales brazos operativos de Yerko en la calle, como se pudo escuchar de su propia boca en conversaciones con Claudia Sandoval, vale decir, doña Tatiana Arana.

En relación con la sociedad MENDEZ MOYA SPA, el socio constituyente es Nelson Méndez Moya, goma reclutado por Edith Silva, constituida en abril de 2018, coincidente con transferencia de Claudia Sandoval a la madre de Sebastián Martínez Zavala.

Esta empresa aparece en el cuaderno de anotaciones de Sebastián Martínez, con el logo de la Universidad Santo Tomás, y encabezando los datos de la misma, aparece el nombre Yerko entre paréntesis, confirmando Martínez sus dichos en juicio, y la conversación sostenida con Freddy Miranda que fue reproducida.

Además, la sociedad registra el mismo domicilio ante el SII que Nueva Laredo, Portillo y Brunno Fritsch (al igual que Brunno Fresh y Gildemeister Motors que son empresas cuya constitución pagó Navarrete en la Notaría, corroborado con las boletas respectivas). Además un borrador de contrato de arriendo del inmueble se encontró en el pendrive incautado a Sebastián Martínez y que se incorporó con el Subcomisario Vásquez, contrato falso en cuanto a la información del domicilio porque no existía arriendo alguno, y en cuanto a su origen, específicamente por tratarse de un documento word, de confección artesanal, que tenía un membrete falsificado de la notaría Alberto Mozzo, también de confección artesanal.

Por otra parte, la firma electrónica se gestionó en la Notaría de Claudia Gómez, igual que las empresas Bilbao y Brunno Fritsch, todo esto corroborado por la propia notaria, por Sebastián Martínez y ratificado por Pedro Olivares.

Asimismo, se incorporó un documento titulado “Contrato de arrendamiento Yerko” en el pendrive incautado a Sebastián Martínez, entre Servicios Integrales R-6 y Nelson Méndez, por el mismo domicilio que posteriormente Servicios Integrales informa al SII que no conoce a las empresas y no tiene arriendos, lo que fue incorporado en el juicio por doña Carla Vildósola, apoyada en los correos informativos de la empresa supuestamente arrendadora.

También en el pendrive ya señalado, se encontró un documento correspondiente a un estatuto actualizado de esta empresa, la que además estaba incorporada en ese dispositivo, en un documento titulado “listado clientes empresas (yerko)”, así como dos poderes amplios sin firma, titulados Nelson (yerko) y Mendez Moya (yerko), por esta empresa y por la empresa Moya SPA, que no fue incorporada en la acusación, pero que se encuentra en idéntica situación que esta sociedad, lo que es coincidente con lo relatado por Sebastián Martínez en juicio, en cuanto generalmente se creaban dos empresas con cada “goma” o testafarro.

Por último, en el cuaderno Santo Tomás de don Sebastián Martínez, había una frase escrita que señalaba: “Yerko crear 2 empresas representante Nelson Méndez Moya”.

El fiscal manifestó que entre los vehículos inscritos por esta empresa, se encuentran los siguientes:

1.- Patente KSCV.55 Kia Sportage, solicitante y adquirente Alejandro Yáñez Recabal, quien es reconocido por una víctima estafada como el vendedor de vehículo PPU KHKW.72 inscrito por la empresa Astorga SPA, respecto del cual se encontró también los datos de la factura fundante en uno de los cuadernos de Sebastián Martínez.

2.- Patente KPYJ.33, cuyo solicitante de primera inscripción es Kimberlyn Sepúlveda, quien tiene visitas a Yerko Silva en la cárcel, y transferencias desde la cuenta de Claudia Sandoval.

En cuanto a la empresa OLIMPICA, constituida por Luis Beas y Jaime Toro en agosto de 2018, fecha que coincide con transferencias desde Claudia a la madre de Martínez y a Franco Cruz.

Mencionó que dentro de los vehículos inscritos por esta empresa, el solicitante en la casi totalidad corresponde a Nicolás Chacón, vinculado a la empresa SOBRRUEDAS constituida en abril de 2018, coincidente con transferencias desde Claudia a la madre de Martínez Zavala.

Respecto de la empresa ASTORGA, constituida por Paula Astorga en marzo de 2018, el fiscal aseveró que esta empresa está incorporada tanto en el cuaderno Santo Tomás de Sebastián Martínez con el encabezado (Yerko), como en su pendrive, en el documento titulado “listado clientes empresas (yerko)”. Además, según el informe del SII incorporado en el juicio esta empresa tiene facturación con la empresa Méndez Moya.

Refirió que los vehículos inscritos por esta empresa, son los siguientes:

1.- Patente KHKW.72, que es relevante porque los datos de la factura fundante de la inscripción de este vehículo, estaban en uno de los cuadernos de Sebastián Martínez, escritos a mano por éste, siendo coincidentes la marca, modelo, año, color, números de chasis y de motor, lo que deja en evidencia la confección de estos documentos, los que antes o después, según el caso, se hacían coincidir con la modificación física del vehículo. Además, el solicitante y adquirente es Alejandro Yáñez Recabal, quien es reconocido por la víctima Sara Tupper como vendedor.

2.- Patente KKLL.10, cuyo solicitante es NELSON MENDEZ, comprobadamente testaferro reclutado para la asociación por Edith Silva, y cuyo adquirente es JUAN CASTILLO MANSISIDORO, quien aparece como “goma” de Yerko en los cuadernos incautados a Sebastián Martínez, para constituir otras empresas. Además, hay un borrador de contrato de compraventa en el pendrive de Martínez, documento titulado “compraventa camioneta (Yerko)”.

3.- Patente KHTC.73, cuyo solicitante y adquirente es Juan Castillo Mansisidoro, “goma” de Yerko según los registros de Sebastián Martínez. Relevante es que la víctima Alan Swinburn compró el vehículo en una sucursal de Pompeyo Carrasco, la que a su vez lo había adquirido de Juan Castillo, habiendo incluso revisado el vehículo en detalle (lo que constó en documento de revisión de compra incorporado en el juicio), lo que habla del perfeccionamiento en el proceso de trabajo de la asociación. A esto hacen mención en su relato Inés Solans y el propio Alan Swinburn.

En lo que concierne a la automotora BILBAO SPA, constituida en septiembre de 2018 por Gustavo Viveros, coincidente con transferencia a la madre de Sebastián Martínez, desde la cuenta de Claudia Sandoval, hizo presente el fiscal que una fotografía de la cédula de identidad de Viveros fue hallada en el teléfono de Yerko Silva. Además, Gustavo Viveros declaró ante el SII que lo reclutó Navarrete y lo puso en contacto con Sebastián Martínez, misma cosa que declaró ante el Ministerio Público, según dio cuenta La Regla en el juicio.

Refirió que en la escritura de constitución, aparecía en manuscrito un correo asociado, sebitauc24@gmail.com, que es de Martínez, información incorporada con el Subcomisario Vásquez; y en el

pendrive que se le incautó, se encontraron un borrador de la constitución, un borrador de contrato de arriendo, y dos poderes amplios titulados Viveros (yerko) y Bilbao (yerko). Además, los datos de la empresa estaban incorporados en el cuaderno Santo Tomás de Martínez, donde también aparece el correo sebitauc24.

Por último, indicó que durante la entrada y registro, se incautó desde el domicilio de Viveros una carpeta con documentación de la empresa, según dio cuenta Joaquín Paz, funcionario de la BIRO.

Detalló que los vehículos inscritos por esta empresa son los siguientes:

1.- Patente KZTP.55, solicitante Tatiana Arana. La víctima Rocío Kettlum, reconoció en la venta a Tatiana y señaló además que se le solicitó una transferencia a una cuenta del banco Falabella que resultó ser de Jeannette Toro, madre de Yerko y Albano. De lo anterior dio cuenta el funcionario BIRO Alejandro Hermosilla, funcionario BRILAC Diego Caroca, y el Comisario Olivares, y se incorporaron imágenes que lo corroboran, información que es ratificada también por la víctima en el juicio.

2.- Patente KPYL.49, solicitante JORGE SALINAS y adquirente Alejandro Yáñez, quien es reconocido por una de las víctimas como vendedor del vehículo PPU KHKW72 inscrito por Astorga SPA con una factura cuyos datos estaban en uno de los cuadernos de Sebastián Martínez, es solicitante en el vehículo KRWC41 y solicitante y adquirente en el PPU LDCR89; siendo reconocido en la venta de este último por la víctima Cristopher Arbuch, de lo que dio cuenta el funcionario BIRO Bastián Guzmán.

3.- Patente KVTB.46 Kia Sportage inscrito el 18.12.18, adquirente y solicitante Juan Pablo Olivares Fuentes. El fiscal afirmó que vendió este vehículo el acusado Germán Duarte y la víctima lo reconoció a él y a Tatiana Arana. Según su relato, Duarte señaló que Tatiana era su esposa y que él era cuñado de Juan Pablo Olivares. De esto dio cuenta el Inspector Bastián Guzmán, Larry Caro y Pedro Olivares; este último refirió las características que entregó la víctima, que son distintas a la esposa del acusado que declaró en el juicio. El Comisario Caro incorporó que Duarte le señaló a la víctima ser cuñado del dueño del auto, que estaba nervioso, que alguien le preguntaba constantemente por el resultado del negocio, y que finalmente le exhibió la foto de su “esposa” a quien posteriormente la víctima reconoció como Tatiana.

4.- Patente KWVF42 Mahindra inscrita el 31.10.18. En este caso, expresó el fiscal que la víctima Marcelino Zamorano reconoció a Tatiana Arana y a la dueña registrada en la venta del vehículo.

5.- Patente KXSP.88 Mazda CX5 inscrita el 28.12.18. En el mismo sentido, dijo que la víctima Christian Cuellar reconoció en la venta a Tatiana Arana, Freddy Miranda y la dueña registrada Nathalie Manríquez.

6.- Patente KXSJ.24 Kia Sportage inscrita el 20.11.18. De igual modo la víctima Gonzalo Pizarro reconoció al dueño Ismael Díaz en la venta, quien andaba con Tatiana a quien también reconoció como quien lo acompañaba y se quedó con el dinero. Se incorporaron conversaciones de whatsapp con el registro del contacto y las negociaciones.

7.- Patente KWVF.56 Nissan Kicks, solicitante Tatiana Arana. Reseñó el fiscal que la venta fue efectuada a través de una automotora, de la dueña Eliana Basaure a la víctima Claudia Arrieta. Según las características aportadas en la declaración del empleado de la automotora, Eliana fue acompañada por Tatiana en el trámite (sin perjuicio que no se hizo reconocimiento). Posteriormente la víctima encontró copia de la solicitud de inscripción al interior del auto. El comisario Olivares, además, señaló que la víctima les declaró que le llamó la atención que estaba a nombre de una “vedette” el auto, y que la hija de la víctima recordó que en el maletero había una carpeta, que contenía una cotización de una cirugía plástica a nombre de Tatiana, lo que coincide con el relato de víctimas y oficiales de caso.

8.- Patente KXSS.27 JEEP GRAND CHEROKEE, adquirente Claudia Astudillo Pineda y solicitante Luis Astudillo Peña. El fiscal explicó que este vehículo coincide con escuchas donde hablan de la tía del Raperito, para una inscripción, además, se encontró documentación en el teléfono de Camilo, así como una foto del auto en un sector residencial, de lo cual dio cuenta La Regla. Relevante son los progresivos 11434 y 11435 de 27.04.2019, donde “Yeyi” y Tatiana hablan de que están vendiendo la Jeep, ella señala que se hace llamar Paula y que indica que la camioneta está a nombre de su prima Claudia. Todo esto incorporado con La Regla, quien se refirió a la declaración de Raperito, quien confirmó que el negocio lo llevaba Yerko con Camilo, junto a Tatiana, y que su tía inscribió una Grand Cherokee.

En este punto, estimó el fiscal, que resultaba relevante el relato de La Regla respecto de los antecedentes relativos a la receptación flagrante del vehículo Nissan Qashqai PPU LDHP.37 por la que fue detenido y acusado Camilo Sandoval. Se pudo escuchar el relato del funcionario Elvis Isla respecto de la detención del acusado a bordo del citado vehículo. A este respecto, con el oficial La Regla se incorporaron imágenes halladas en el teléfono incautado al acusado, así como audios y otros antecedentes que permiten acreditar la participación de Camilo en la receptación, y como miembro activo de la asociación. Así, en su teléfono se encontraron fotografías del vehículo, posterior al robo y previo a su adulteración, incluido su número de chasis, y del proceso de modificación física realizado por don Aimel Gavilán, del que también constan fotografías en el teléfono del acusado. Seguidamente, en el mismo teléfono se encontró una fotografía del chasis ya adulterado, coincidente con el número asociado a la patente LDHP.37 que portaba el vehículo al momento de ser detenido el acusado, a bordo de este y que también habían sido previamente sustraídas. Todo esto fue incorporado con La Regla, al igual que los audios de whatsapp donde consta cómo un tercero le ofrece a Camilo este vehículo sustraído, y cómo el acusado gestiona la adulteración, incluido chasis y stickers. Asimismo, agregó que luego de ser detenido el acusado, se pudo escuchar conversaciones judicialmente interceptadas donde Tatiana habla con Claudia y su hijo Freddy de esta detención, de la cual Yerko ya tomó conocimiento, instruyéndoles que saquen todo del domicilio de Tatiana y se vayan a otro lugar, lo que obedece Tatiana, pasando una noche en un hotel en Santiago, según consta en el libro de registro que también se exhibió en este juicio. Finalmente, el testigo La Regla dio cuenta del análisis del computador y los correos incautados a Roberto Bascur, donde constan algunos trabajos realizados para el acusado Camilo, entre los cuales se pudo observar stickers confeccionados por Bascur que son coincidentes con el vehículo

LDHP.37 ya adulterado por Aimel Gavilán, además, de otros stickers que coinciden con distintos vehículos adulterados por la asociación, entre ellos uno marca Ford Explorer cuyo proceso de adulteración también consta en el teléfono del acusado según relató el oficial La Regla con sustento en las imágenes del análisis de ambos dispositivos, lo que fue corroborado en el juicio por Roberto Bascur. Además de los respectivos encargos policiales incorporados en juicio en que consta la sustracción del vehículo y la patente.

Todo esto sumado a diversos audios que fueron reproducidos durante el transcurso del juicio quedando de manifiesto la participación de Camilo Sandoval en la asociación.

Sobre lo anterior, hizo presente, que el comisario Olivares dio cuenta de escuchas donde queda en evidencia la participación de Camilo y Tatiana bajo las directrices de Yerko. Se exhibieron múltiples progresivos que relevan este hecho. Asimismo, se incorporó el progresivo 7732 de 15.02.2019 donde un tercero señala que Camilo le pasó una pistola que no percutaba, lo cual llama la atención que en conversación libre y espontánea en el progresivo 6101 de 27.02.2019, Tatiana conversando con Claudia le manifestara que Camilo llevaba a su hijo Ángel donde personas delincuentes y donde hablaban de fierros y vehículos robados.

También en el progresivo 001 de 4.6.2019, entre Claudia y Yeyi, donde queda claro que las operaciones de la asociación son previa consulta a Yerko, lo que necesariamente se debe complementar con el audio de whastapp WA0149 de 08.04.2019 incorporado con La Regla, donde Camilo invita a un tercero a robar unas máquinas, indicando que él lleva los inhibidores. Todo esto es relevante respecto de la flagrancia del delito de tenencia ilegal de arma de fuego, por el que se encuentra acusado Camilo, imputación que es además sustentada en las fijaciones de la entrada y registro, relato de los funcionarios Paulina Norambuena, Francisco Saavedra y Diego Caroca, agregando este último en su testimonio en estrado que “al consultar en esa oportunidad a quién pertenecía dicha arma de fuego, Camilo espontáneamente nos señaló que era de él”; medios con que se acredita que el acusado mantenía en su poder estos elementos, junto a los inhibidores y otros instrumentos utilizados comúnmente en los delitos sobre cuya base se levantó esta asociación, los que estaban en un espacio común del segundo piso independiente donde residía el acusado, específicamente el arma sobre la mesa del living, mientras la mochila con otra evidencia se encontraba a un costado de la misma, en el suelo, según se pudo observar en las fotografías de la diligencias incorporadas con los funcionarios Saavedra y Norambuena, y el relato del comisario Diego Caroca lo que no coincide con lo relatado por el padre del acusado en estrados, quien dijo que la mochila y la evidencia estaba encima de la mesa. Sobre este punto, con la prueba documental incorporada y la exposición del perito armero Jaime Olgún, se pudo acreditar que el acusado mantenía en su poder un arma de fuego tipo revolver calibre 32, con 6 cartuchos, elementos aptos para el disparo y para ser disparados, sin contar con las autorizaciones correspondientes.

Continuando con la exposición de los progresivos, el fiscal enfatizó que otro relevante es el 5671 de fecha 30.11.2018, conversación de Camilo con Tatiana, referente a que les había llegado una “nave” y que

había que pedirle dinero a Claudia Sandoval. Lo que se corroboró con la declaración de Claudia Sandoval, expuesta por Raquel Forero y los dichos en estrado del propio acusado Yerko Silva cuando refiere que usaba la cuenta Rut de Claudia, su pareja, para el negocio.

Asimismo, los progresivos 7328, 5377, 7370, 7432 todos de fecha de fecha 5 de diciembre de 2018, dieron cuenta de conversaciones entre Camilo y Tatiana manifestándole este que “ande despabilada como él le enseñó”, lo que significa que entre los dos también se fomentaban la forma de cómo hablar para la venta de los vehículos.

Por último, el progresivo 12167 de fecha 20 de diciembre de 2018 donde Camilo le pregunta a Tatiana “si había quedado bien hecha la pega”.

Por su parte, acotó, fueron reproducidos reiterados whastapp y progresivos vinculados al robo donde sin mediar confusión Camilo llamaba a sujetos no identificados para preguntarles si estaban listos para ir a robar, como por ejemplo, el progresivo 5781 de fecha 7 de febrero de 2019 a las 22:00 horas.

Continuando con las empresas, el fiscal manifestó que con respecto a las sociedades NUEVA LAREDO y PORTILLO, fueron constituidas en enero de 2019 por el socio Julián Martínez, pero cuyo pago de la firma electrónica fue realizado por Ilich Chopa, esto sustentado en la documentación aportada por E-Cert e incorporada en el juicio, corroborado por la testigo Priscilla Pérez y el oficial de caso Pedro Olivares.

En relación con estas empresas, en el pendrive de Sebastián Martínez se encontraron tres poderes amplios a nombre de Julián (yerko), Nuevo Laredo (yerko) y Portillo (yerko), todos conferidos al propio Martínez. Además, ambas empresas están incorporadas en el cuaderno Alquimia y en la libreta de Martínez, con el nombre (YERKO) en el encabezado.

Finalmente, ambas empresas tienen el mismo domicilio que las sociedades Méndez Moya, Moya SPA y Brunno Fritsch, y según el informe del SII, tienen facturación entre ellas. A su respecto, acotó, que resultaba relevante el progresivo 6001 entre Claudia Sandoval y Yeyi, dónde este le pregunta “qué pasó con las empresas nuevas y Portillo...”

El fiscal refirió que los vehículos inscritos por estas empresas, son los siguientes:

1.- Patente LFGB.76 de Nuevo Laredo, solicitante Pablo Rojas que tiene transferencias de Claudia Sandoval. La víctima José Acuña reconoció a Pablo Rojas en la venta, de esto da cuenta el funcionario de la BIRO Bastián Guzmán. Además, la pericia dactiloscópica 2498 del Registro Civil establece que la huella de la solicitud es de Pablo Rojas.

2.- Patentes LCFR.41 y LSLS.25 de Nuevo Laredo, siendo en ambas la solicitante Sindy Muñoz, quien tiene transferencias desde la cuenta de Claudia Sandoval. La pericia dactiloscópica 2498 del Registro Civil establece que la huella de la solicitud es de Sindy Muñoz.

3.- Patente LFVW.14 Ford Explorer de Nuevo Laredo, respecto de este vehículo el fiscal indicó que se encontró una copia de la solicitud en el teléfono de Camilo (OMP 470), imagen que por latitud/longitud fue capturada en el domicilio de este, según relató La Regla. Además, en el teléfono de Camilo hay un sticker que corresponde al auto LCZC.63 con encargo por robo, que coincide con el vehículo posteriormente blanqueado. Finalmente, en el correo de Roberto Bascur, según análisis incorporado mediante imágenes con La Regla, consta un sticker que coincide con marca y número de chasis de este vehículo ya adulterado, lo que necesariamente da cuenta de la participación de Camilo en el proceso de modificación.

LFVW.16 NLaredo Chevrolet Tracker: De igual manera, que en el anterior, en el correo de Bascur consta un sticker que coincide con marca y número de chasis de este vehículo ya adulterado, enviado por don Roberto a Camilo.

4.- Patente LCXS.80 de Nuevo Laredo, Hyundai Tucson inscrito el 29.04.2019 a nombre de Carla Leal, testaferro de Tatiana, Franco y Freddy, en que el solicitante es el propio Freddy Miranda. La pericia dactiloscópica 2498 del Registro Civil establece que la huella de la solicitud es efectivamente de Miranda, lo que viene a corroborar una conversación telefónica entre Freddy y Franco, en que el primero le reconoce que tanto su madre como él mismo.

5.- Patente LBCV.61 de Portillo cuya solicitante es Tatiana Arana.

6.- Patente LCHC.53 de Portillo cuya solicitante es Claudia Astudillo Pineda, tía de Luis Astudillo, lo que coincide con escuchas entre Tatiana y Freddy donde hablan de la tía del Raperito, para una inscripción, en cuya venta Tatiana se haría pasar por prima de doña Claudia.

7.- Patente LBCY.57 de Portillo inscrito el 15.01.2019, se trata de una Nissan Qashqai con la que suben fotos a redes sociales Tatiana y Freddy. Además, la víctima Eliana Mena declaró ante oficiales de caso y reconoció en la venta a Tatiana quien se hizo llamar Paula, y a Freddy quien se presentó como el hijo de esta última. Declaración, reconocimientos y fotografías de redes sociales incorporados con Inés Solans.

8.- Patente LCHC.53 de Portillo, Chevrolet DMax que como en casos anteriores, en el correo de Roberto Bascur consta un sticker que coincide con marca y número de chasis de este vehículo ya adulterado, enviado por don Roberto a Camilo.

9.- Patente LBCY.63 de Portillo, solicitante Tatiana Arana, en este caso, expresó el fiscal, la víctima David Arias reconoció al dueño Hernán Sanhueza, a Tatiana como Paula, quien le mostró el auto, y a Freddy como quien acompañaba al dueño en la venta. Los antecedentes de esta venta y los reconocimientos es incorporada por Inés Solans, y ratificada en el juicio por la propia víctima.

10.- Patente LCPX.63 de Portillo, Mazda CX5 inscrito el 18.02.2019, adquirente y solicitante Carolina Gallegos y Germán Duarte participó en la venta. De este procedimiento da cuenta el funcionario de la BIRO Álvaro Pino, y la inspectora Forero, que expuso la declaración de las víctimas estafadas, quienes señalaron haber realizado toda la negociación con Rodrigo Vásquez, sin perjuicio de lo cual el día de la venta

llegó acompañado del acusado Germán Duarte, quien exhibía un poder notarial, concretando la compra y entregando el dinero a este último. Información corroborada en el juicio por don Simón Díaz, y que difiere de lo señalado en estrado por el acusado Duarte, quien señaló no haber recibido el dinero de la venta de Martín Álvarez.

11.- Patente KPYL92 de Portillo, inscrito el 15.02.2019, se trata de una camioneta Chevrolet Colorado respecto de la cual la víctima aportó antecedentes, entre ellos un cheque a nombre y cobrado por Ilich Chopa, a quien reconoció como vendedor. Importante es que de acuerdo con el relato aportado por Olivares e Inés Solans, cuando contactaron a la víctima y expusieron el caso, esta entregó directamente el nombre de Ilich. Solans dio cuenta del reconocimiento en set fotográfico de Ilich por parte de la víctima. Además, este es un caso especial por cuanto se utilizó también un martillero, y según el relato que la víctima Cristian Silva entregó a los oficiales, cuando el negocio se vio entrampado, finalmente llegó Ilich y solucionó todo, y es a él a quien se le pagó con un cheque a su nombre, quien además llegó con un poder para la venta.

El fiscal enfatizó que se incorporaron en el juicio imágenes del cheque por \$16.500.000 y el poder, todo con copia de la cédula de Ilich. Finalmente, resultó relevante que en el correo de Roberto Bascur, según análisis incorporado mediante imágenes con La Regla, constan dos stickers confeccionados por éste y remitidos a Camilo Sandoval, que coinciden en marca y número de chasis con este vehículo ya adulterado, lo que necesariamente demuestra la participación de Camilo en el proceso de modificación. Ratificado además por medio de fotografías en las cuales se encontraba Ilich con Camilo.

En lo que concierne a la empresa BRUNNO FRITSCH, constituida en abril de 2019 por el socio Hans Bravo, que está en los cuadernos de Martínez como “Hans goma Yerko”, quedando también registrado el teléfono de “Sebastián” en la escritura. La firma electrónica se obtuvo en la Notaría Claudia Gómez, igual que Bilbao, todo esto corroborado por la propia notaria, por Sebastián Martínez y ratificado por Pedro Olivares.

Añadió que en el pendrive de Martínez se encontraron documentos titulados “poder amplio Hans (yerko)” y “poder amplio Brunno (yerko)”. Además la empresa está incorporada en el cuaderno “Alquimia” con encabezado (YERKO) y registra el mismo domicilio que Méndez Moya, Moya, Nuevo Laredo, Portillo y Gildemeister.

Indicó que en este caso es relevante el progresivo 5996 de 4.6.2019 entre Sebastián Martínez y Yeyi, donde el primero le señala tenerlo registrado como Hans, el goma, y luego hablan de las empresas que ha constituido para Yerko.

El fiscal detalló que los vehículos inscritos por esta empresa, son los siguientes:

1.- Patente LJLD.71, solicitante y adquirente CARLA LEAL, quien en vigilancias fue vista en el Registro Civil con Freddy y Franco, y además en escuchas, Tatiana se refiere a ella como “La Chelsea”. Por

su parte, la misma Carla Leal declaró que quien le pagaba por los trámites era Franco, y que los realizaba con él, Yeyi y Tatiana; de sus dichos dio cuenta La Regla. Del seguimiento y la recuperación del vehículo declaró Olivares, e Inés Solans con detalle del seguimiento y fotos en el Registro Civil y en el banco, todo esto acompañado de las imágenes que corroboraron estos hechos, así como confirmó la veracidad de las escuchas que también fueron incorporadas y que permitieron realizar dicho seguimiento.

2.- Patente LDLS.12, Suzuki Vitara inscrito el 16.04.2019, adquirente Roberto Aravena y fue vendido por Camilo Sandoval. En este caso, la víctima Juan Guíñez reconoció a Camilo y Roberto Aravena, de lo que dio cuenta el funcionario de la BIRO Alejandro Hermosilla. Reconocimiento incorporado también por Inés Solans, y ratificado por la propia víctima en el juicio.

3.- Patente LGCC.49 Hyundai Grand i10 inscrito por Cristian Herrera como adquirente y Sebastián Álvarez como solicitante, quienes son reconocidos por la víctima Pablo Bahamondez en la venta, según relato del funcionario de la BIRO Bastián Guzmán.

4.- Patente LKKL.73 Ford Mustang, cuyo adquirente es Bernardita Allende. Respecto de este vehículo, el fiscal sostuvo que Ilich Chopa recibió en su cuenta transferencia de véndenos tu auto (Latam Group), por aproximadamente \$16.000.000, por la venta del vehículo. Larry Caro expuso en el juicio las diligencias, declaración de José Camus que adquirió el auto en “véndenostuauto”, declaración de Jorge Trigo de dicha empresa que indicó que un sujeto de nombre Marcelo Leal actuó en representación de la dueña del auto Bernardita Allende, quien solicitó que el pago fuera mediante transferencia a “Alexis Saldana” porque él tenía problemas en su cuenta, entregando datos de cuenta y cédula de identidad que son de Ilich Chopa. Jorge Trigo declaró en el juicio y ratificó lo declarado por Caro, se exhibieron documentos donde consta la compraventa y la transferencia, reconoció su letra en el comprobante de transferencia donde aparece escrito “preguntar por Ilich Chopa”. Relevante es que en el correo de Bascur, según análisis incorporado mediante imágenes con La Regla, consta un sticker que coincide con marca y número de chasis de este vehículo ya adulterado, lo que necesariamente demuestra la participación de Camilo en el proceso de modificación.

En relación con la empresa GILDEMEISTER, constituida en enero de 2020 por el socio Eduardo Sanhueza, cuya cédula de identidad se encontraba en el teléfono de Yerko. Además, él declaró durante la investigación, señalando que fue reclutado para este efecto por Juan Navarrete, según relato incorporado con la inspectora Raquel Forero. Copia de la constitución de esta empresa fue encontrada en la Nissan Qashqai incautada en poder del acusado Millalén con fecha 23.01.2020, durante su detención flagrante.

Puntualizó que relevante es el audio 20200123-WA0307, donde luego de contarle Yerko a un tercero que un primo de su socio andaba mostrando la camioneta y la había incautado personal policial, le manifiesta: “...menos mal que me adelanté a la jugada y me puse a hacer una empresa el día lunes...”, esto es, el 20.01.2020, fecha coincidente con la constitución de la empresa Gildemeister, la que además registra ante el SII el mismo domicilio que Guillermo Morales y C. Hernández.

Ahora bien, respecto de los vehículos inscritos por esta empresa, estos son los siguientes:

1.- LPHC.22 Hyundai H1, inscrita el 04.02.2020, y a su respecto, existen videos del mismo en la parrilla del Gaucho en el teléfono de Yerko y fotografías de éste en el mismo dispositivo, además, el adquirente y solicitante es Leonidas Hernández Concha, conocido como Walata, cuya cédula de identidad está en el celular de Yerko; también, audios whatsapp entre Yerko y Juan Navarrete dieron cuenta de que Walata es un goma reclutado y utilizado por ellos. Por otra parte, la factura de este vehículo está en teléfono de Yerko (con logo diseñado por él mismo) y hay conversaciones de whatsapp y antecedentes aportados por Patricio Asún (concretamente lo que dice relación con un vale vista por \$17.000.000) que dieron cuenta de negociaciones para la venta del vehículo realizadas directamente por Yerko.

2.- Patente LPHC.23, solicitante Jonathan Pérez. En este caso, la solicitud, factura y cédula de identidad de Jonathan se encontraron en el teléfono de Yerko. Además, él declaró durante la investigación, señalando que fue reclutado para este efecto por un sujeto de nombre Juan, según relato incorporado con la inspectora Raquel Forero.

3.- Patente LPHC.70 Hyundai Tucson inscrito el 25.02.2020, respecto del cual, se encontró una foto de la placa patente y de la factura fundante de la inscripción en el teléfono de Yerko y Leonidas Hernández Concha o Walata es el solicitante.

4.- Patente LXVS.35, a cuyo respecto es importante que se encontró una foto del auto original PPU LGBS.99 en el teléfono de Yerko; también el video archivo de nombre "VID-20200226-WA0113". La víctima estafada Jorge Rodríguez reconoció a Tatiana como la vendedora, quien se hizo llamar Antonia Bastías y se hizo pasar por madre del dueño del auto (a quien también reconoció). Las imágenes del vehículo original halladas en el teléfono de Yerko fueron incorporadas con los oficiales de caso y además con la víctima del robo, Estefany García, quien señaló que ese día "le robaron su tranquilidad". De la incautación del vehículo adulterado y reconocimiento de Tatiana como vendedora, dio cuenta la inspectora Forero, diligencias corroboradas por la víctima estafada Jorge Rodríguez Valderrama.

5.- Patente LRCH.64 Kia Sportage inscrita el 18.02.2020 solicitante Marco Supanta y la factura con que se inscribió estaba en el teléfono de Yerko, al igual que la cédula de identidad de Supanta.

5.- Patente LBVY80 Mazda CX5 inscrita el 02.03.2020, solicitante Marco Supanta y al igual que en el caso anterior, la factura con que se inscribió estaba en el teléfono de Yerko.

6.- Patente LPHC.69 Hyundai Tucson inscrita el 21.02.2020, solicitante y adquirente Jonathan Washington Pérez Pérez. En este caso también tanto la factura con que se inscribió como la cédula de identidad de Jonathan estaban en el teléfono de Yerko.

7.- Patente LVGC.77 HYUNDAI GRAND i10, inscrito el 29-02-2020, solicitante Marcos Supanta, adquirente Sindy Arancibia Muñoz quien recibió transferencias de Claudia Sandoval y cuya cédula de

identidad estaba en el teléfono de Yerko. Además, una fotografía del automóvil original PPU LRLJ.59 estaba en el teléfono de Yerko, momentos después del robo.

8.- Patente LPHD.24 MAHINDRA SCORPIO, inscrito el 21-04-2020, a este respecto, se encontró la factura en el teléfono de Yerko, siendo el solicitante es ALBANO SILVA TORO y quienes participaron en la venta, el mismo Albano y Juan Navarrete. La víctima José Sepúlveda Bustamante y su hija Solange declararon en el juicio, confirmaron los reconocimientos de los acusados y, además, señalaron que quien realizó las negociaciones y se hizo pasar por abogado, fue Albano, según la declaración de La Regla.

En relación con la sociedad GUILLERMO MORALES, constituida en septiembre de 2019 por el socio Alejandro Ruiz, con el mismo domicilio que Gildemeister y C. Hernández.

El fiscal refirió que los vehículos inscritos por esta empresa son los siguientes:

1.- LPHB.53 Nissan Qashqai que mantenía en su poder el acusado David Millalén; de esta detención dio cuenta Olivares y se incorporó los documentos de Juan Navarrete y de la constitución de esta empresa, Gildemeister, incautados dentro de este vehículo.

Asimismo, se incorporó el audio 20200123-WA0295: “se me tiró la empresa y se me tiró una camioneta hoy día...”, el que es relevante porque Yerko le cuenta a un tercero que su socio había mandado a su primo a mostrar el auto, esto coincide con el relato de Olivares, quien indicó que al momento del control, Millalén manifestó que le habían pedido el favor de mostrar el vehículo. Añadió el fiscal, que estos antecedentes también se vinculan con un documento de Genchi donde consta la visita de Navarrete a Yerko ese día, lo que coincide con el audio y con la detención de Millalén de 23.01.2020.

En este caso, en opinión del fiscal, estaría acreditado que ese día 23.01.2020, el acusado David Millalén mantenía en su poder el vehículo PPU LPHB.53, inscrito con factura de la empresa Guillermo Morales SPA, el que había sido previamente adulterado, correspondiendo al original PPU KYDV.92 con encargo vigente por el delito de robo, y que el acusado trasladó con objeto de exhibir a un posible comprador de buena fe, previo reclutamiento de Juan Navarrete para estos efectos y por instrucción de Yerko Silva, lo que coincide con el audio WA0307 de esa fecha, lo anterior con la prueba documental del vehículo original y el reinscrito, esto es, certificados y encargo, sumado a las pericias y las fotografías incorporadas, audios ya reseñados y la declaración en juicio de los oficiales de caso y de la víctima del robo Hosmer García.

Asimismo, con la prueba documental incorporada y la exposición del perito armero Jaime Olguín, se pudo acreditar que el día 16.10.2020 el acusado Millalén mantenía en su poder tres armas de fuego, un revolver calibre.38 especial, con 6 cartuchos en su cargador, una pistola marca CZ calibre 9mm con 12 cartuchos en su cargador, y una pistola marca Brevete con 7 cartuchos en su cargador, además de 27 municiones de distintas marcas y calibres, elementos todos aptos para el disparo y para ser disparados, sin contar con las autorizaciones correspondientes. Esto también sustentado en las declaraciones de los

funcionarios Cristóbal Soto y René Juárez que ejecutaron la diligencia, con apoyo de las respectivas fotografías, y corroborado por el propio acusado en estrado.

2.- Patente LPKZ.56, solicitante Sindy Arancibia, quien, como ya se señaló, registra transferencias y además su cédula de identidad está en el teléfono de Yerko, junto a fotografías del auto.

3.- Patente LJPX.58 HYUNDAI TUCSON, inscrito el 27-11-2019, solicitante y adquirente Marcos Supanta y el vendedor fue Albano Silva quien se hizo llamar Álvaro Casanova junto con Juan Navarrete que también participó en la venta. En este caso, acotó el fiscal, la víctima es Víctor Jiménez Hugueño, quien reconoció a Albano, Juan Navarrete y Supanta. Declaración y reconocimientos incorporados por la inspectora Forero y corroborados por la propia víctima en el juicio.

4.- Patente LPKZ.56 HYUNDAI TUCSON, inscrito el 08-10-2019 adquirente Sindy Arancibia Muñoz, quien, como se ha mencionado en varias ocasiones, registraba transferencias de Claudia Sandoval y su cédula de identidad estaba en el teléfono de Yerko.

5.- Patente LPSW.24 HYUNDAI H1, inscrito el 04-12-2019, adquirente Jesús Gacitúa que fue reclutado por Navarrete, su cédula estaba en el teléfono de Yerko y su cuenta bancaria era utilizada por éste, además, el solicitante es Renán Guenteo, cuya cédula de identidad estaba en el teléfono de Yerko, quien es el socio de la empresa C. Hernández y que, según su declaración, que fue expuesta por La Regla, quien lo reclutó fue Albano, pagándole \$40.000 por la gestión.

6.- LPSW.43 HYUNDAI H1, inscrito el 07-01-2020, solicitante Jesús Gacitúa y adquirente Abdón Lorenzo Aguilera Chávez, cuya cédula de identidad estaba en el teléfono de Yerko.

7.- LPSW.53 HYUNDAI H1, inscrito el 20-01-2020, adquirente Matías Molina Daza y adquirente Marcos Supanta Aguilera que fue reclutado por Navarrete, y respecto de ambos, sus cédulas de identidad estaban en el teléfono de Yerko.

8.- Patente LYDH.25 Kia Sportage, de la cual se encontró una imagen de “Consulta estado solicitud” en el teléfono de Yerko.

Con respecto a la sociedad C. HERNANDEZ, constituida en enero de 2020 por el socio Renán Guenteo, cuyo carnet de identidad estaba en el teléfono de Yerko y como se señaló, según su declaración, quien lo reclutó fue Albano Silva. Además, esta empresa registra el mismo domicilio que Guillermo Morales y Gildemeister.

Hizo hincapié el fiscal, que en el teléfono de Yerko se encontraron facturas de esta empresa, una imagen correspondiente al logo diseñado y confeccionado por el propio Yerko (OMP 155) y una imagen de constitución en la plataforma “tuempresaenundia”. Además, destacó el N° atención 2792661 que coincidía con el audio 20200129-WA0276 donde Yerko dice: “Mira tú cuando llegues a la notaria, le dices que necesitas firmar una empresa, presentai al weon con el carnet y a donde dice 25 constitución número de atención les dai el número de atención 2792661, ellos lo van a ingresar y les va aparecer la empresa ya constituida cachai,

entonces van a ir, el notario va a firmar, y va a firmar al tiro, de ahí te va a darte un rut, cachai, que si lo haci mañana temprano a primera hora, yo te lo voy alcanzar a dar pa que vaya al servicios de impuestos internos, a sacar las claves del rut de la empresa y la clave personal del weon, de ambos, de los dos gomas, mañana en la mañana teni que tirarte a la extrema con el carnet del weon pa alcanzar a hacerla, sino vamos alcanzar a hacer esta no más”. Número de atención que está estampado en la copia de la constitución aportada por el SII en el cuaderno de antecedentes incorporado como Documento 837.

Además, hay un video explicativo de Yerko, denominado VID-20200130-WA0188, donde en el minuto 00.53 éste ingresó con el RUT de Renán Guenteo a la aplicación del SII.

El fiscal precisó que los vehículos inscritos por esta empresa son los siguientes:

1.- Patente LPHC.30 Fiat Argo, respecto del cual se incorporó un documento del auto original PPU LFHJ.89 hallado en el teléfono de Yerko. En este caso, el vehículo fue inscrito por Marco Supanta y Jonathan Pérez, con factura que también se encontró en el teléfono de Yerko. La venta la realizaron Albano Silva y Juan Navarrete haciéndose llamar Andrés Belmar, conjuntamente con Marco Supanta. Por último, el fiscal explicó que las víctimas Cristian Gacitúa y José Sánchez declararon en juicio y confirmaron las circunstancias de la compraventa del referido vehículo y el reconocimiento a Andrés Belmar, esto corroborado por las funcionarias de la BIRO Francisca Núñez y Raquel Forero.

En lo atinente a la sociedad SOLISTE, constituida por el socio Víctor Solís, con boleta de honorarios de la notaría Hugo Cataldo para escritura de constitución, pagada por Juan Navarrete (quien también pagó en el caso de Gildemeister Motors y Brunno Fresh, de las que es socio Jonathan Carrión). Esto confirmado por el notario Cataldo en declaración tomada y expuesta por La Regla, así como correo respuesta del notario y copia de las boletas de honorarios respectivas, emitidas por el notario Nelson Baeza a nombre de Juan Navarrete, por concepto de “firma electrónica”, incorporados en cuaderno de antecedentes del SII (Documento 837).

Sostuvo el fiscal que esta empresa emitió facturas a nombre de Marco Supanta, quien fue reclutado por Navarrete, según declaración de La Regla y Raquel Forero en juicio. Esta última expuso que Supanta en su declaración señaló que a través de Jesús Gacitúa lo contactó Navarrete, y que para que se aprobara su participación en este negocio, debía reunirse con una persona de nombre Albano, quien se movilizaba en un porsche negro.

Además, en la prueba documental correspondiente a los informes del Servicio de Impuestos Internos, constan múltiples facturas entre Víctor Solís y Marco Supanta, dos testaferros reclutados por Juan Navarrete, quien de acuerdo a los audios de whatsapp incorporados en juicio, actuaba por instrucción y bajo el liderazgo constante de Yerko Silva.

Finalmente, en lo que respecta a las empresas, el fiscal se refirió a las sociedades GILDEMEISTER MOTOR SPA Y BRUNNO FRESH SPA, constituidas por el socio Jonathan Carrión, con boleta de honorarios de la notaría Hugo Cataldo para escritura de constitución, pagada por Juan Navarrete.

Además, acotó, Gildemeister Motor registra domicilio en Ahumada 312 of. 715 y Brunno Fresh registra domicilio en Santo Domingo 4535, mismos domicilios de otras de las empresas constituidas y utilizadas por esta asociación, y que conforme a la información del Servicio de Impuestos Internos, no mantienen vínculo alguno de arriendo o propiedad.

Por otra parte, en lo que concierne a la participación de Juan Navarrete en los delitos que se le imputan, señaló que el inspector La Regla en su declaración ante el tribunal respecto de este acusado expuso las siguientes declaraciones:

De Gustavo Viveros Viveros, quien manifestó que es contactado por Juan Navarrete, quien le presentó a Sebastián Martínez Zabala y junto a este último fue a la notaría a constituir empresas.

De Marcos Supanta, quien indicó que conoce a Juan Navarrete por medio de Jesús Gacitua, solicitando el primero la inscripción de vehículos a cambio de pago de dinero.

Del notario Hugo Cataldo, quien indicó que en su notaría se constituyeron empresas de las consultadas pero las boletas fueron a nombre de Juan Navarrete Vásquez que no era socio, incorporando al tribunal las respectivas boletas.

De Franco Cruz, quien señaló que Juan Navarrete trabajaba con Yerko.

A su vez, la inspectora Raquel Forero reprodujo las siguientes declaraciones:

De Freddy Miranda, quien dijo que acompañaba a Juan a vender y que Claudia le pasaba dinero a Juan Navarrete, producto de la venta de los vehículos.

De Claudia Sandoval, quien señaló que Juan Navarrete era la mano derecha de Yerko Silva, afirmación también señalada por Albano Silva y Freddy Miranda en sus respectivas declaraciones ante los fiscales de la causa y presenciada por Raquel Forero y Daniel La Regla.

Corroborando lo anterior se exhibió al tribunal con la testigo Raquel Forero el listado entregado por Gendarmería en el cual consta que Juan Navarrete iba a visitar a Yerko Silva donde se encontraba recluso en la ciudad de Puerto Montt.

Pasando a otro punto, respecto del destino de los dineros obtenidos mediante este negocio ilícito, el fiscal planteó que se pudieron acreditar durante el presente juicio oral, maniobras de lavado de activos cometidas por un grupo de expertos, tales como, creación de empresas de fachada, emisión de facturas ideológicamente falsas, compraventa de bienes muebles e inmuebles, domicilios falsos informados al SII, adquisición de caballos y vehículos de alta gama, cuentas de testaferros, incluso con funcionarios policiales involucrados.

Sostuvo el fiscal que estas maniobras realizadas son de manual, las que proporcionaron importantes ganancias a través de la inyección de capital proveniente de los vehículos adquiridos mediante delitos de robo con violencia, y provocando la apariencia lícita del dinero a través de la compra y venta de vehículos robados, dejando a cientos de familias con el pesar, con el miedo de haber sido estafadas vislumbrando como en muchos casos, los ahorros de toda una vida se perdieron en cosa de días.

Precisó que respecto de Yerko Silva Toro, en lo que se refiere al delito de lavado de activos, la evidencia ha demostrado claramente el sofisticado esquema utilizado por el acusado para ocultar y legitimar el dinero ilícito proveniente de la organización criminal.

De este modo, durante el juicio se logró acreditar que el acusado, a sabiendas del origen del dinero, ejecutó las siguientes maniobras constitutivas de lavado de activos:

1.- Adquisición de caballos: El imputado Yerko Silva Toro registra un patrimonio asociado a la compra y venta de equinos, por un monto de \$1.285.200, según se acreditó con la información del SII. Esto fue corroborado por las declaraciones del propio acusado, quien reconoció su participación en el mundo de la hípica, así como por la declaración de los funcionarios BRILAC Carlos Riveros y Cristián Álvarez y el comisario Larry Caro, sustentada en diligencias efectuadas en el club hípico, interceptaciones telefónicas que dan cuenta de la adquisición de ejemplares (progresivo 5550) e imágenes relacionadas que fueron levantadas desde el teléfono del acusado, lo que incluso derivó en la incautación de dos caballos durante esta investigación.

2.- Adquisición de vehículos: se trata de la camioneta Jeep Renegade PPU KKGL.19, adquirida a nombre de Claudia Sandoval, cuyas cuotas fueron pagadas por el acusado Yerko Silva mientras se encontraba privado de libertad, según incorporó en su declaración la inspectora Raquel Forero, esto corroborado por las propias conversaciones interceptadas de doña Claudia Sandoval. A este respecto, hizo presente el fiscal que, según declaró la funcionaria Paulina Norambuena, durante la entrada y registro ejecutada en el inmueble de Camilo y Claudia Sandoval, se incautó el citado vehículo, el cual fue objeto de comiso por esta investigación.

3.- Adquisición de inmuebles: El inmueble ubicado en Los Robles N° 1034, comuna de Lo Prado, fue adquirido por la sociedad "Comercializadora SyB SPA" por \$80.000.000, sociedad de propiedad del acusado y su hermano Albano, según se acreditó con diversa prueba testimonial y de la propia boca de los acusados, en conversaciones intervenidas judicialmente, así como la declaración de Claudia Sandoval que incorporó Forero en juicio, esto corroborado por la evidencia incautada a Sebastián Martínez, donde aparecen borradores de contratos relativos a la comercializadora y al arriendo del inmueble donde estaba ubicada, todos ellos vinculados al rótulo "YERKO".

4.- Movimientos financieros entre testaferros: Entre enero de 2017 y septiembre de 2019, Daniela Espinoza, hermana de Yerko Silva, realizó 91 transferencias por un total de \$27.997.842 a su madre,

Jeannette Toro, y 14 transferencias por \$4.240.000 a Claudia Sandoval. Asimismo, Daniela Espinoza recibió 132 transferencias por parte de Jeannette Toro por un total de \$39.960.510. Asimismo, durante el año 2018 el acusado, utilizando la cuenta del Banco Estado de Claudia Sandoval, realizó al menos 10 transferencias a **María Zavala Guzmán, madre de Sebastián Martínez**, por un total de \$345.000; **7 transferencias por un monto total de \$293.000.- a Pablo Rojas Recabal**, testaferro que efectúa, entre otras, la solicitud de primera inscripción del vehículo adquirido por la víctima estafada Rocio Kettlum; **6 transferencias por un monto total de \$75.000.- a Sindy Muñoz Aranibia**, cuya cédula de identidad estaba en el teléfono de Yerko y quien además participa en diversas solicitudes de vehículos inscritos por las empresas utilizadas por la asociación; 13 transferencias por un monto total de \$1.043.945.- a Adrian Espinoza Toro entre 2017 y 2018, hermano de Yerko y Albano; **11 transferencias por un total de \$380.000.- a Kimberly Sepúlveda**, cuya cédula de identidad estaba en el teléfono de Yerko y quien participa en diversos trámites de inscripción de vehículos; **8 transferencias por un total de \$365.000.- a Franco Cruz o su hermana Francia**, durante el período de investigación; así como otras transferencias desde y hacia las cuentas de Jeannette Toro, Daniela Espinoza, **Edith Silva, Tatiana Arana, Ilich Chopa, Camilo Sandoval, Albano Silva, Aimel Gavilán**, incluidos depósitos en efectivo que en algunos casos se pudo acreditar que correspondían al pago realizado por víctimas estafadas, todo lo cual fue acreditado por la prueba documental correspondiente a las cartolas bancarias de los distintos involucrados, así como con las propias declaraciones de estos, incorporadas en juicio por los oficiales de caso o por ellos directamente como el caso de Sebastián Martínez, y prueba aportada por las víctimas e incorporada con ellas.

El fiscal aseveró que los movimientos reseñados no tienen justificación alguna en actividades lícitas del acusado Yerko, quien tiene iniciación de actividades ante el SII según documentación de dicho servicio, pero sin ingresos que permitan solventar este flujo, y de cuyo origen además quedó acreditado que quienes prestaban sus cuentas lo conocían, como resulta evidente de la declaración de Claudia incorporada en juicio y por la conversación entre Daniela y Jeannette, en momentos que se enteran de las posibles órdenes de detención en esta causa, donde se preguntan por las platas de Yerko.

5.- Facilitación de cuentas bancarias: Jesús Gacitúa Candia, otro de los imputados condenado por esta investigación, facilitó su cuenta del Banco Santander N°71000184335 para que se depositaran dineros provenientes de las actividades ilícitas de la asociación, así como para pagar a otros miembros de la asociación, lo que fue acreditado por la declaración de los oficiales de caso, del propio Yerko en juicio y por los diversos comprobantes de transacciones efectuadas desde dicha cuenta, que se encontraban en el teléfono incautado al acusado.

6.- Uso de empresas fachada: El local ubicado en Avenida Gladys Marín N° 6106, comuna de Estación Central, fue utilizado por los imputados Yerko y Albano Silva Toro bajo las razones sociales "Alto Machu Picchu" y luego "La Parrilla del Gaucho", en la sociedad "Comercializadora SyB SPA", con la participación de Claudia Sandoval y Paula Becerra; hechos acreditados mediante las declaraciones de los

oficiales de caso, de Felipe Meriño de OS9, de personal del Dpto. V, así como la evidencia incautada en poder de Sebastián Martínez y el relato de Claudia Sandoval entregado por la inspectora Raquel Forero.

Continuando con el delito de lavado de activos, el fiscal mencionó que en relación con Albano Silva Toro, se acreditó que junto a su hermano Yerko mantuvieron dos restaurantes denominados Alto Machu Picchu y La Parrilla del Gaucho, en los cuales se inyectaba dinero proveniente de los ilícitos. A su respecto, se acreditó que realizó las siguientes maniobras de lavado de activos:

1.- Adquisición de caballos, con un valor declarado de \$4.690.346, una inversión desproporcionada respecto de sus ingresos lícitos, según declaración de Carlos Riveros y el propio acusado, y la información del SII incorporada en el juicio.

2.- Con la prueba documental incorporada y declaraciones de personal BRILAC, OS9 y los oficiales de caso, se acreditó que el acusado compró el 1 de agosto de 2017 un inmueble, ubicado en calle Papa San Eleuterio N° 542, comuna de Pudahuel, por un valor de \$115.000.000. Este monto coincide con un vale vista, emitido el 29 de junio de ese mismo año por la Automotora PROCAR, de propiedad de Juan Provoste Salgado y cuyo beneficiario fue el imputado Albano Silva Toro. Posteriormente, el 18 de junio de 2018, el acusado vendió dicho inmueble a Casane Inmobiliaria y Transportes Spa por un valor de \$60.000.000. Cabe destacar que esta empresa fue constituida sólo 2 meses antes de la transacción, por socios que aportaron un capital de \$35.000.000 en efectivo, sin contar con ingresos formales que justifiquen tales aportes. Asimismo, la compra de este inmueble fue la única realizada por la citada inmobiliaria, lo que indica que la operación fue realizada con el único propósito de ocultar y blanquear los fondos de origen ilícito.

3.- Relevante es también la compra de dólares efectuada por Albano el 15.10.2020, por un total de U\$25.100.-, según se acreditó con Francisca Núñez y los documentos de Money Global Cambios, dinero respecto del que el acusado no tiene justificación alguna.

Respecto de acusado Víctor Quezada Bravo, funcionario de la Policía de Investigaciones, el fiscal aseveró que su conducta constituye una grave violación a la confianza que su cargo público implica, ya que en su calidad de funcionario policial, tenía una posición privilegiada que le permitía no solo acceder a información confidencial, sino también influir en las decisiones dentro del ámbito policial.

Según se acreditó con las cartolas bancarias incorporadas, y declaraciones de Bogarett Amayo, Scarlett Cornejo, Felipe Meriño, Nayadeth Madrid y Melissa Muñoz, puso a disposición de la asociación ilícita sus **cuentas bancarias del Banco Estado y Scotiabank, recibiendo en ellas un monto total de \$62.510.377 entre los años 2017 y 2018**, en depósitos que fueron realizados en 184 ocasiones desde las cuentas de Albano Silva Toro, la empresa de éste y su socio, Diego Sepúlveda Guzmán.

El fiscal enfatizó que el acusado no actuó como un simple receptor pasivo de estos fondos, sino que por el contrario, **él transfirió desde su cuenta bancaria la suma de \$26.562.609 en 71 depósitos a las cuentas vinculadas a Albano Silva Toro**, lo que demuestra que no solo facilitaba el movimiento del dinero

sino que también formaba parte integral de la operación de lavado de activos al devolver parte de los fondos y quedarse con una fracción para sí mismo.

Además, se pudo observar que en los meses de enero y febrero de 2017, el acusado mantuvo saldos en su cuenta de Banco Estado que ascendían a aproximadamente 20 millones de pesos, un monto que fue disminuyendo en los meses posteriores. Hizo hincapié en que esos movimientos de dinero no se condicen de ninguna manera con los ingresos lícitos que Víctor Quezada percibía como funcionario de la PDI, lo que evidencia que los fondos manejados provenían de actividades ilícitas.

Indicó que el señor Quezada inicialmente declaró no conocer a Albano Silva Toro, sin embargo, plenamente consciente de la naturaleza ilícita de los fondos que gestionaba, no solo facilitó sus cuentas bancarias para los movimientos de dinero provenientes de la asociación, sino que además aprovechó su acceso privilegiado a los sistemas de la PDI para verificar si él, su pareja, Carolina Cornejo, y el acusado Albano Silva estaban siendo investigados, tal como se demostró con la prueba rendida referente a conversaciones levantadas desde la aplicación telegram entre los acusados Víctor Quezada y Carolina Cornejo (OMP 615 y 616).

Para el Ministerio Público, con esta revisión Víctor Quezada se aseguró de que sus actividades y las de la organización se mantuvieran fuera del radar de las autoridades, permitiendo que las maniobras de lavado de activos continuaran sin obstáculos, además, demuestra no solo su participación activa y consciente en el esquema delictual, sino también un grave abuso de la confianza y el poder que le confería su cargo como funcionario público.

Por ello, indicó que el acusado no solo traicionó la confianza de su cargo como funcionario policial, sino que también actuó de manera consciente y deliberada para facilitar el blanqueo de activos ilícitos, afectando así la integridad del sistema financiero y el bienestar de las víctimas de los delitos asociados.

Por último, hizo presente que con esta misma prueba, respecto de la acusada Carolina Cornejo Arriagada, su participación en el esquema de lavado de activos ha quedado claramente demostrada, ya que, bajo la apariencia de una relación laboral con Albano Silva Toro, administraba el local "Alto Machu Picchu" el cual no era más que una empresa fachada utilizada para disimular el origen ilícito de los fondos obtenidos por la asociación ilícita, de manera tal que durante el período comprendido entre los años 2017 y 2018, la acusada recibió en su cuenta del Banco Estado un total de \$21.032.949 provenientes de 120 depósitos efectuados desde las cuentas de Albano Silva Toro y de la empresa vinculada a éste. Esta serie de transacciones financieras no tienen ninguna correspondencia con los ingresos lícitos que la imputada pudo haber percibido como administradora de un restaurante, lo que refuerza el carácter ilícito de los dineros obtenidos. Además, no solo recibió estos depósitos, sino que también realizó transferencias desde su propia cuenta bancaria hacia las cuentas asociadas a Albano Silva por un monto total de \$2.447.280, distribuidos en 16 depósitos realizados en el mismo período. Aseveró que estos movimientos de dinero forman parte del

esquema de blanqueo de activos que permitió a la organización criminal ocultar el verdadero origen de los fondos, dándoles una apariencia de legalidad.

Asimismo, recalcó que Carolina Cornejo Arriagada era pareja del imputado Víctor Quezada, funcionario de la PDI en ese entonces, por lo que, esta relación no solo refuerza la vinculación entre ambos imputados dentro de la asociación, sino que además permitió que Víctor Quezada, aprovechándose de su posición privilegiada como funcionario público, utilizara los sistemas internos de la PDI para verificar si él, Carolina Cornejo, o Albano Silva estaban siendo investigados. De esta manera, Carolina Cornejo actuó plenamente consciente de que sus acciones eran ilícitas, pues sabía que contaba con la información privilegiada que le proporcionaba su pareja para asegurar que sus maniobras no fueran detectadas por las autoridades. Este hecho agrava aún más su participación en el esquema de lavado de activos, dado que no solo facilitaba sus cuentas bancarias para los movimientos de dinero ilícito, sino que lo hacía con total conocimiento de la naturaleza ilegal de los fondos y de las consecuencias de sus acciones.

Mencionó que cabe recordar el testimonio de **Melisa Muñoz, contadora de OS7**, quien mediante su declaración sobre la Comercializadora (utilizada para el blanqueo de los capitales) de Albano Silva EIRL, Carolina Cornejo y Víctor Quezada; corroboró un flujo inestable del dinero, principalmente de las actividades financieras y patrimoniales de Albano Silva Toro y Víctor Quezada Bravo. En el caso de Albano Silva, la inestabilidad se observaba en las fluctuaciones de sus compras y ventas, la diferencia significativa en la compra y venta de bienes raíces, y los movimientos en sus cuentas bancarias, donde no parece haber consistencia entre las transacciones comerciales y sus reportes de actividad económica.

Por otro lado, en el caso de Víctor Quezada Bravo, la inestabilidad de ingresos se apreciaba en las grandes diferencias en los montos de sus remuneraciones, inversiones y rescates de fondos mutuos, junto con retiros de cuentas de ahorro y la compraventa de vehículos. Además, había un aumento considerable de movimientos financieros en algunos años, como en 2017 y 2018, en contraste con los años anteriores y posteriores, lo cual generaba dudas sobre la consistencia de sus ingresos y el origen de ciertos montos de dinero.

En definitiva, se acreditó con la prueba ofrecida, que los imputados Yerko y Albano Silva Toro mantuvieron un local comercial ubicado en Avenida Gladys Marín N° 6106, comuna de Estación Central, **como fachada para llevar a cabo las actividades ilícitas**, ya que este restaurante no era más que **una pantalla utilizada para justificar movimientos de dinero entre los miembros de la organización**.

Posteriormente, continuó el fiscal, en una fase más elaborada del plan delictivo, los imputados Yerko y Albano Silva Toro utilizaron el mismo local ahora bajo el nombre de fantasía "La Parrilla del Gaucho", operado por la sociedad "Comercializadora SyB SPA", constituida formalmente por Claudia Paz Sandoval Godoy y Paula Inés Becerra Leyton, parejas de los acusados. Sin embargo, es importante señalar que tanto la propiedad como la administración real del local estaban en manos de Yerko y Albano Silva Toro, quienes orquestaron estas operaciones con el claro objetivo de ocultar el verdadero origen ilícito de los fondos.

Para finalizar, el fiscal sostuvo que la asociación ilícita es el delito base de las hipótesis de lavado acreditadas con la prueba rendida y que al respecto, resulta relevante el relato de Claudia Sandoval entregado por la inspectora Raquel Forero, en el sentido de que recibía dinero de los autos por parte de Albano, Tatiana y Freddy (quien señala que en las últimas oportunidades le entregaba el dinero a Juan Navarrete, según su relato también incorporado mediante la inspectora Forero), que el restorán peruano quebró y en ese momento Yerko le pidió hacer una sociedad con la pareja de Albano, Paula Becerra, para cambiar el giro a parrillada, en que Yerko realizó una inversión de 30 millones de pesos aproximadamente, que los dineros eran en su mayoría recibidos por ella, administrados en general por Daniela y Jeannette, y que el dinero que ella recibía en sus cuentas era invertido en la parrillada, con conocimiento que provenía de la venta de vehículos clonados. Su relato debe vincularse con el progresivo 1093 de 07.10.2020, entre Daniela y Jeannette, incorporado con el comisario Camousseight, donde estas hablan de las platas de Yerko y el uso que éste hace de sus cuentas, al momento de verse apremiadas por las órdenes de detención decretadas en esta causa. Además, otro progresivo relevante para entender la posición de Yerko en la asociación y su vínculo con la parrillada, es el progresivo 10300 de 18.06.2019 en que TATIANA ARANA llama a su hijo FREDDY pero habla con Claudia Sandoval, quien le dice que habló con Yerko, quien a propósito de una situación con una camioneta, le había parado los carros a Albano y le había avisado que le quitarían el vehículo en cuestión. Es aquí donde TATIANA le dice pero que se vendan, yo quiero mi plata, yo pagué el arreglo, el Yerko igual me tiene una cola de tres gambas, más la camioneta que se vende puedo pagar el arriendo. CLAUDIA le dice imagínate que yo gasté toda mi plata para inscribir la tuya. Y TATIANA le responde pero el Yerko tiene el restorán, por lo menos el weón no está pato...", terminando la comunicación con la interrogante de qué van a hacer ahora...

Con esto quedó en evidencia que quienes ejercen funciones operativas en la calle, entraron en pánico cuando el líder de la asociación quedó incomunicado, puesto que es él quien manejaba todo el proceso, como quedó claro en otros audios y del relato de los oficiales de caso. Por eso es que Tatiana le pregunta a Claudia qué van a hacer... Es importante recordar otra escucha en que Tatiana le manifestó a Claudia su agradecimiento con Yerko por haber confiado en ella y haberle dado este trabajo, agregando que ella "ha dado cara" en la calle por él, misma lealtad que se pudo escuchar cuando Freddy Miranda, hablando con su madre, le dice que él se quedará con el tío pollo hasta el final. Por último, este audio revela que Yerko era el verdadero dueño de la parrillada junto a su hermano, lo que fue corroborado con el relato de Claudia Sandoval, por la evidencia material encontrada en el pendrive de Sebastián Martínez e incorporada con el oficial Fernando Vásquez, donde aparecen borradores de la constitución de dicha sociedad y del contrato de arriendo con el dueño del inmueble, todo asociado al nombre de "Yerko", documentación que fue hallada en la casa de Martínez durante la entrada y registro ejecutada en esta causa en el año 2020.

Por último, enfatizó que también están los audios de whatsapp, uno de ellos en que el acusado Juan Navarrete trata a Yerko de patrón, haciendo una aparente analogía con Pablo Escobar. Pero por sobre todo, se pudo oír de boca del propio acusado Yerko Silva, en uno de los audios que fueron incorporados Fernando

Vásquez, específicamente el audio WA0083 de 27.01.2020, donde éste le indica a un tercero “yo soy la mente en esta hueá hermano, yo corto el queso para la calle. Yo soy el hueón que manda la platas, que dice que hagan esto o lo otro, toda la huea. Yo soy el que manda las platas. Yo soy el que factura. Yo soy el que vende. El que manda la gente para allá. El que hace los partes, toda la huea compañero”.

En la réplica, el Ministerio Público, indicó que se iba a referir, en primer lugar, a la discusión entre asociación ilícita versus coautoría y, en segundo lugar, al tipo penal de receptación de vehículos. Primero por cada acusado y luego discusiones comunes.

Luego, indicó que Yerko no decía “te ordeno tal cosa”, pero sí decía “yo soy la mente en esta hueá”. También dijo que reclutó a Edith y después a Tatiana, que Ilich vendía facturas y también Franco, lo que no hacía era materializar estas acciones porque estaba preso.

Ahora bien, sostuvo que Yerko no conocía a los gomias porque esa misión se las encargaba a sus brazos operativos, lo que se logró acreditar con las cédulas de identidad de estos en el celular incautado.

Respecto del ingreso de los dineros a las arcas de Yerko, Claudia Sandoval declaró y el mismo Yerko lo dijo, que la plata ingresaba a la cuenta del Banco Estado de Claudia y la cuenta de Jesús Gacitúa que él manejaba. Además, en la libreta de Daniela Espinoza, su hermana, que fue incautada, aparecía las “cuentas Yerko”.

Con respecto al lavado de activos, advirtió que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) señala 10 tipologías en la página 11 en su informe, entre las cuales, empresas de fachada, ingresos patrimoniales injustificados, empresas de pantalla, pitufeo, que es la transferencia de dinero en pequeñas cantidades, por eso, señalar que solo el testafiero es un lavado de activos, es desconocer el tipo penal y asimismo el informe de la UAF.

Además, el tipo penal no requiere montos determinados ni inversiones y frente a la propia declaración de Yerko, dijo que con el dinero de la venta de los automóviles, pagaba el arriendo, los pasajes a su actual pareja, pagó las cuotas del jeep de Claudia Sandoval.

También se acreditó, refirió la fiscal, que los pagos por la venta de los vehículos ingresaban a las cuentas de Claudia Sandoval y de su madre del Banco Falabella, además, Claudia declaró que pasaba dinero a Albano para mejorar el restaurante.

Respecto del orden jerárquico, estimó que está clara la jefatura que ejercía Yerko Silva, y conforme al artículo 292 del Código Penal, se determina el marco para regular la pena.

La fiscal destacó que la defensa señaló que para que se cumpla el requisito de estabilidad en el tiempo, la asociación debe tener una prolongación determinada, no respecto a uno o más miembros de la asociación (sino que respecto de todos), puntualizó que lo relevante es que la asociación tenga su propia estructura e identidad. Por lo mismo, los miembros son fungibles, entran y salen de la asociación.

Respecto de Yerko Silva, señaló que reconoció las estafas pero no las receptaciones, ya que ésta sería detentar materialmente el vehículo en sus manos, no obstante de acuerdo al Art. 15 N° 2 de Código Penal, hay participación de autor aun cuando no se cometa el delito de propia mano.

Indicó que según la sentencia dictada en causa Rit 2-2024 del 2do Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, refirió a las modalidades de comisión del delito de receptación y consideró que basta que el agente compre, venda y comercialice, lo que no se satisface con la tenencia material del objeto.

Respecto de Albano Silva Toro, la fiscal manifestó que Yerko pedía rendición de cuentas, la defensa aseveró que se engañaban entre ellos mismos, pero no existe ningún medio de prueba que acredite aquello. También señaló la defensa que Yerko hacía todo, por eso no era una asociación sino una coautoría, ya que ideaba, era la mente. Sin embargo, Yerko lo decía desde el punto de vista del “liderazgo” porque entregaba directrices para que los demás materialicen sus ideas, el mismo declaró que “tenía la mala costumbre de que me mandaran todo para ver que había quedado bien”, esto es una rendición de cuentas.

Respecto del lavado de activos, destacó la fiscal, que el acusado vendió la grúa horquilla como abono a la deuda millonaria por arriendo que tenía con a Clodomiro Silva, y la factura la negoció con Ilich Chopa, de la empresa Kor.

Aclaró la fiscal que el restaurante que en principio fue “Alto Machu Picchu” y después cambió de nombre a “La parrilla del gaucho” funcionaba, no era de “fachada” sino que de “pantalla”, porque efectivamente funcionaba y además ingresaban dineros ilícitos para ser insertos en el mercado formal, tal como lo declaró Raquel Forero.

Respeto de los malos resultados del restaurante y la mala administración, la fiscal se preguntó, ¿cómo estuvo tanto tiempo funcionando incluso después que se fue Carolina Cornejo y Albano no sabía nada de administración?, de dónde se obtuvo el dinero para pagar los insumos, trabajadores, proveedores y gastos básicos. Claudia Sandoval dijo que nunca ingresaron dineros al restaurante pero el propio Yerko, declaró que a través de ella le pasó dinero a Albano para modificaciones y comprar parrillas, etc.

Indicó que la información del SII en relación con el inicio de actividades de Albano Silva, en el período previo, no se condice con los movimientos que están obligadas las empresas y personas naturales a informar al SII. Por eso, si la defensa tenía pruebas diversas, ¿por qué toda la documentación soportante de los dichos de la defensa no fueron acompañados a la investigación? Acotó que no existe coincidencia entre los dichos de Albano y la información proporcionada por el SII.

Respecto de la Grúa Horquilla que fue entregada como pago del arriendo, aseguró que ésta sí estaba adulterada, según la declaración del perito. Pero no se logró establecer su real identidad, la cual fue inscrita con una factura obtenida por Ilich y entregada a Albano.

Volvió a enumerar la fiscal las maniobras de lavado de activos y señaló que Rivero tomó declaración a Provoste, quien refirió que le prestó su cuenta de transbank a Albano, y que éste le pidió el favor de tomar un vale vista y llegó con el dinero en efectivo.

Hizo presente que Albano hacía transferencias a miembros de la organización, por montos bajos, lo que corresponde a la tipología del “pitufeo” de lavado de activos.

Ahora bien, pasando al punto de las receptaciones y estafas, advirtió que el vehículo Porsche que Alabano mantenía en el estacionamiento del restaurante, según la declaración del funcionario que tomó la denuncia, tenía encargo por robo, y además el vehículo no tenía patente, no tenía las llaves porque no lograron sustraérsela a la víctima, estaba tapado porque no tenía patente, y es el mismo Albano quien señala que se dedicaba a la compra y venta de vehículos, por lo tanto, tenía un conocimiento superior al hombre medio.

En relación con lo señalado por la defensa acerca de que algunas empresas no fueron creadas por Yerko ni la asociación, la fiscal refirió nuevamente con detalle las vinculaciones existentes de la asociación con las facturas de todas estas empresas cuya constitución se niega.

Respecto del acusado Ilich Chopa Aldana, refirió que es el propio Yerko el que señaló que los primeros trabajos que realizó, usó los contactos que le entregó Ilich Chopa, tal como Franco Cruz. Además, los documentos levantados en su domicilio, el uso de la cuenta de Daniela Opazo en los términos que declaró, también Yerko declaró que le compró facturas a Ilich por la grúa horquilla, entonces, le compraba facturas y homologaciones primero a Ilich y luego a Franco.

En cuanto específicamente a la camioneta Chevrolet Colorado, hizo hincapié en que la detective Solans hizo diligencias levantando evidencia y le tomó declaración a la víctima, y es muy probable que haya Ilich haya tenido un carnet nuevo y uno antiguo, por lo que no hay prueba para desacreditar su participación en este hecho.

Además, recalcó la información que fue encontrada en los correos electrónicos y en el computador de Bascur, en los que coinciden los números de los stickers con los que tenían los vehículos de Ilich, y a Bascur lo contactó Camilo y le encargaba los sticker.

Otros elementos de su participación en la asociación, es que Ilich hacía y recibía transferencias y depósitos con miembros de la asociación, también pagó las firmas electrónicas de dos empresas usadas por Yerko, creadas por Sebastián Martínez.

Respecto del acusado Camilo Sandoval, la fiscal manifestó que existen reiterados audios de vinculación entre Tatiana, Camilo y Yerko. No era necesario que todos hablaran con Yerko, éste lo hacía a través de Tatiana, cuando querían vender un auto y necesitaban bajar el precio, por ejemplo, Camilo dice que le pregunte a Yerko si está de acuerdo. Por lo que quedó de manifiesto que existe una relación de causa efecto entre la orden y el resultado.

La prueba rendida en el juicio demostró que con la única persona con la que se relacionaba Bascur era Camilo Sandoval, y los stickers que él confeccionaba estaban en los vehículos que vendieron Ilich y Tatiana. De igual modo, Camilo participó en la solicitud de 1ª inscripción de los vehículos y también como adquirente y en modificaciones de vehículos.

Respecto del acusado Juan Navarrete, puntualizó la fiscal que por la prueba ofrecida y por la declaración de los propios imputados, quedaron establecidas las funciones que cada uno de los miembros realizaba en la organización, pero no es un requisito del tipo penal que todos se conozcan o que no puedan realizar otras labores o variadas funciones.

Invocó el fallo de la “Operación Desierto, que es el Rol 32.695 del año 2018 de la Corte Suprema, respecto de una sentencia del 4to Tribunal Oral, que versa sobre trata de personas, en el cual traían del extranjero personas que formaban parte de una asociación. El que enviaba las personas desde el extranjero a Chile no se conocía con el que las recibía y viceversa. Y no obstante, el tipo penal es asociación ilícita, porque el artículo 292 en parte alguna señala que los integrantes deben conocerse entre sí, no obstante que sí deben tener ánimo de asociarse, ese es otro punto (Puede ser importante, REVISAR).

Sostuvo la fiscal que Navarrete cumplió la función que le fue enseñada al pie de la letra, no es necesario tener una expertis para ingresar a una asociación, tal como quedó de manifiesto en el viaje a Arauco, el viaje a La Ligua, el acusado seguía al pie de la letra las demás instrucciones.

Recordó que Juan fue a visitar a Yerko cuando estaba en la cárcel de Puerto Montt, en reiteradas oportunidades, así lo confirmó el audio de 23.01.2020 en que Yerko se refería al primo de su socio... y las vistas coincide con este audio y con la detención de Millalén.

Además, Juan Navarrete mantenía dinero de la asociación para pagos, era como la caja chica de Yerko, hay audios en ese sentido. Este acusado indicó que autorizaba a Yerko a dejar autos afuera de la casa de su abuela, pero que no se hacía responsable, sin embargo, le prestó la Nissan Qashqai a Millalén, Yerko también lo declaró, pero no coincide con el audio ya señalado, pues ahí sí Navarrete le pasó las llaves (su abuela se la entregó según su declaración) a Millalén, donde además tenía documentos personales, por lo que sí tenía la tenencia y posesión de los vehículos.

Respecto del acusado David Millalén, hizo presente que el auto estaba estacionado afuera de una bomba de bencina, el audio de 23.01.2020 es claro, las personas conversan espontáneamente, si él iba a mostrar el vehículo tenía que ser con un objetivo, que no es otro que la venta y nadie va a mostrar algo que no conoce.

Respecto de Germán Duarte, cuestionó lo declarado por este acusado y sus dos testigos, porque si fue tan precavido antes de comprar los vehículos, ¿por qué carabineros o la automotora no lograron establecer la verdadera identidad de ellos?, por eso pone en duda que se haya efectuado esas gestiones, porque de lo contrario el resultado habría sido distinto.

Finalmente, admitió la fiscal que si bien Duarte no era solicitante ni primer adquirente de vehículos, igualmente participó en la segunda parte, como vendedor de los mismos y señaló que no hay que olvidar que Yerko declaró que Duarte compraba vehículos más baratos para revenderlos.

Respecto de Carolina Cornejo y Víctor Quezada, aclaró que ellos nunca fueron formalizados por asociación ilícita, sino que solamente por lavado de activos y respecto a la pregunta de la defensa de ¿cómo tenían conocimiento del origen ilícito y de dónde provenían los dineros? Indicó la fiscal que es parte del tipo penal doloso de lavado, pero el legislador también incluyó un tipo penal culposo, que se sanciona como lavado negligente.

Ahora bien, continuó exponiendo la persecutora, la prueba del origen ilícito de los dineros ha sido una prueba claramente no directa, porque si se supiera la trazabilidad concreta no estaríamos frente a un lavado ni a prueba indiciaria. O sea, desde varios hechos conocidos se hace el proceso de inferencia hasta llegar a lo desconocido.

Es indiciario de ese conocimiento, los dineros ingresados en las cuentas corrientes de Carolina Cornejo y de Víctor Quezada, que Yerko Silva se encontrara preso, la falta de liquidez que tenía el restaurante, los trasposos que había sin justificación alguna, entre otros indicios. Aun así, la defensa insistió que no hay transacciones que permitan determinar la trazabilidad. Al respecto, aseveró que este delito es un delito en el cual se generan ganancias y luego se ocultan, de eso se trata el lavado de activos, por lo que, si se pudiera hacer la trazabilidad completa no se estaría frente a este delito, en cambio, en este caso, precisamente no se puede establecer la trazabilidad completa.

Sostuvo que lo que se puede determinar es que hay un delito base y hay maniobras de ocultamiento, todo esto respaldado con prueba documental, testimonios y otros medios de prueba. Además, al considerar las tipologías de la UAF, existió en este caso no una empresa de fachada, sino que una empresa de pantalla, tipología de lavado de activos que consiente en constituir sociedades legales con existencia física y que cumplan con la actividad económica señalada en su giro, usadas por los lavadores para mezclar sus fondos ilícitos con ganancias obtenidas a través del giro de las empresas. Esto lo señala el informe de tipologías de la UAF en la página 10. Ese es el tipo de empresa que fue constituida por los hermanos Silva Toro.

Por otra parte, la defensa preguntó ¿por qué no se investigaron los bienes previos de sus representados? La fiscal señaló que una de las máximas de las investigaciones patrimoniales es establecer un período de tiempo determinado, en el cual se establece el origen de los bienes, no es ilimitado. Por eso, lo que se pudo establecer durante el desarrollo del juicio, a través tanto de la información obtenida del Servicio de Impuestos Internos, y de los funcionarios de la BRILAC de la PDI, las remuneraciones que tenía el señor Víctor Quezada y los ingresos de la señora Carolina Cornejo. Así también, hubo otros antecedentes que se pudieron aportar en su momento y no se lograron verificar los incrementos patrimoniales aseverados por doña Carolina Cornejo en estrados.

En otro punto, la señora Carolina Cornejo fue clara, como señaló también su defensa, ella cambiaba el dinero de ida y de venida con Albano, usando la cuenta de ella y la cuenta de don Víctor Quezada. Incluso señaló que su marido ni siquiera tenía conocimiento, por lo que es innecesario saber quién hacía la transacción para imputarle a ambos el delito, ya que se estableció en el juicio, que, como se dice en Telegram, “no seas ilusa”, ambos tenían perfectamente claro los movimientos y las transacciones que había entre ellos y las transacciones que venían de Albano Silva Toro e iban hacia él. La pregunta es, ¿de dónde sacaban esos montos? Porque la propia señora Carolina dice que tenían deudas por créditos.

Ella declaró que de las cuentas de Albano le pasaban dinero, y ella le pagaba a los proveedores o pagaba los insumos o le transfería dinero a don Diego Sepúlveda para pagar los cheques, etc.

Pero ¿hubo documentación que acreditara que efectivamente esos pagos se efectuaron? Partiendo de la base que Albano Silva dijo que no tenía contrato con Carolina Cornejo y que ganaba \$600.000. Pero ¿cómo se puede corroborar si efectivamente no hay imposiciones pagadas, no hay información en el Servicio de Impuestos Internos, ningún otro antecedente que lleve a determinar que efectivamente ella tenía un contrato y recibía mensualmente dinero? No se debe olvidar lo que declara Paula Becerra en cuanto a que Carolina Cornejo sacaba plata del negocio para pagarse. En definitiva la pregunta es, con los flujos de dinero que fueron creciendo y luego notoriamente en descenso, de acuerdo a la información entregada por doña Melisa, en la cuenta de don Víctor que estaba siendo utilizada por doña Carolina, cómo se pueden justificar los ingresos que ellos tenían y que además tenían una disposición patrimonial para poder prestarle dinero al negocio para que éste pudiera subsistir siendo que no estaba obteniendo ganancias, estaba en mala situación ¿de qué forma?

Ahora bien, la defensa sostuvo que don Víctor era un funcionario policial y solamente podía ver las órdenes de detención, el punto es que, no debió haber visto nada, tal como lo señaló el funcionario La Regla, ellos al no tener investigaciones no tienen por qué estar consultando nada si no hay una justificación. Explicó que el acusado solamente podía revisar si tenían órdenes o no, porque no tenía acceso a las otras claves. Por tanto, ¿cuál fue su intención al consultar a su mujer, a Paula Becerra, a Albano Silva? ¿Con qué finalidad lo hizo? Con la finalidad de tener todos los blancos alerta, lo cual coincide con el Telegram, “no sea ilusa Carolina”.

Cambiando de tema, la fiscal dijo que se referiría al concurso medial entre receptación y estafa.

Manifestó que son tipos penales distintos, que el objeto de la estafa es aparentar licitud, lo que se refleja en las facturas que contienen información falsa, lo que conlleva a cometer un error, las víctimas fueron constreñidas a pagar dinero, que es la disposición patrimonial y el perjuicio. Sostuvo que los documentos de los vehículos eran falsos y si bien las patentes eran originales, habían sido obtenidas con documentación falsa; y que los vehículos no eran el objeto materia del delito de estafa, sino que fueron el medio de cambio del delito.

Recalcó que a diferencia de la receptación, en que el objeto del tipo penal es tener, considerando todos los verbos rectores que señala 456 bis A del Código Penal, un vehículo previamente que tenga un origen ilícito. Entonces, el vehículo se sustraía, estaba en poder de la asociación, pero el engaño no fue a las víctimas estafadas vinculadas con la sustracción del vehículo, sino que en relación a la información entregada en las facturas que contenía información falsa respecto de estos vehículos. La receptación per se no es la forma de acreditar el engaño, éste no se obtiene por la receptación, sino por la documentación presentada a la víctima estafada, lo que le hace incurrir en error, que es una documentación que tiene apariencia de legalidad de la transacción, lo que genera disposición patrimonial de la víctima que compró el auto y que tuvo su perjuicio patrimonial

Para finalizar, la fiscal advirtió que se haría cargo de la coautoría planteada por las defensas v/s la asociación ilícita. Indicó que los elementos de esta última, son pluralidad de sujetos, objetivo común, un plan criminal o varios planes criminales, distribución de funciones con liderazgo o jefatura y permanencia en el tiempo. ¿Bajo qué tipo penal podrían castigarse organizaciones que cumplen con estos requisitos en Chile, que el antiguo 292 o el actual 293 del Código Penal? ¿Y alguien podría asegurar que todos los miembros de las organizaciones criminales se conocen?, ¿Que todos permanecen todo el tiempo en que ellos operan dentro de la organización? ¿Que todos conocen todos los planes criminales? ¿Que todos conocen a él o los jefes?

Planteó que justamente en una simple coautoría la gente sí se conoce, sí sabe el plan completo, si no, no se compartiría el dominio del hecho. Todo lo que la defensa menciona como argumento en contra de la existencia de una asociación ilícita es justamente al revés.

Aseveró que las sentencias de la Corte Suprema, Rol 24.818 del año 2024, Rol 75.716 del año 2022, Rol 24.818 del año 2024, y la Rol 657 del año 2024, sostienen los mismos argumentos que acaba de señalar. En Chile la asociación ilícita tanto en la literatura como en la jurisprudencia, ha sido tratada como delito de peligro contra bienes jurídicos colectivos. Encontrando desde la tesis del profesor Mañalich, del injusto autónomo, hasta la del profesor Medina, del injusto compartido con los delitos fines. El asunto es que en cualquiera de estas tesis y en cualquiera de las que ha sostenido la jurisprudencia relacionada con la seguridad pública, el orden público, derechos de asociación, es absolutamente irrelevante si los miembros eran familiares, si se conocían todos o no, si todos se mantuvieron todo el tiempo o si todos hacían o no caso a quien se proclamaba líder.

Respecto de lo que señalaron las defensas sobre la necesidad de un orden jerárquico para la existencia de una asociación ilícita, la fiscal manifestó que esto está completamente superado por la doctrina y la jurisprudencia nacional y opera como norma de sanción. En este caso es indiferente porque es claro el liderazgo de don Yerko Silva Toro. También las defensas señalaron que la organización debe tener estabilidad en el tiempo, debe tener una prolongación determinada, no respecto a uno de sus miembros, sino respecto a todos. Al respecto, destacó que lo relevante es que la organización o asociación tenga su propia

estructura e identidad, por lo mismo, los miembros son fungibles, entran y salen de la asociación y ésta continúa. Por otro lado, el *afectio societatis* tiene relación con el ánimo de asociarse, e influye en la tesis de Echeverry de que solo se requiere dos, igual que en una sociedad lícita, de ser parte de una asociación, de conocer y tener la intención de aportar al objetivo común de este grupo, cada uno desde su perspectiva o desde su posición, cada uno respecto de lo que se le solicitó y le correspondió hacer.

Añadió la fiscal que toda asociación de sujetos, a simple vista parece un requisito fácil, pero además se debe incorporar lo que se llama el afecto, por eso, hay una pluralidad objetiva y una pluralidad subjetiva.

En cuanto al *afectio societatis*, deben existir sujetos interesados en su participación, en su intención de pertenecer a una sociedad. Para constatar que hay un delito autónomo de asociación ilícita, en definitiva, hay que constatar si el acuerdo de voluntades de dos o más personas es celebrado para cometer delitos indeterminados, en cuanto al modo, tiempo y lugar. Además, hizo presente que en cuanto a la organización, el artículo 292 del Código Penal, no hace referencia en ninguna parte a la jerarquía, ésta no forma parte de los elementos del tipo penal, no obstante eso, con la prueba rendida en este juicio se pudo acreditar con creces y más allá de todo lo razonable que efectivamente hubo un orden de prelación o hubo líderes, brazos que dependían del líder y así sucesivamente.

En consecuencia, concluyó, estando incluso en el artículo 292 o en el 293 actual, pensando en las dos hipótesis, la prueba ofrecida durante el desarrollo del juicio abarca a ambos tipos penales.

Respecto de lo señalado que los delitos de la asociación eran delitos continuados, expresó que el Ministerio Público difiere de la continuidad, ya que son víctimas distintas, hechos distintos, por lo que hay una reiteración de delitos, no una continuidad respecto de una misma persona, sino que hay distintas víctimas, tanto de robo como de estafa.

La querellante **Servicio de Impuestos Internos, en sus alegaciones de cierre**, afirmó que el bien jurídico protegido del delito tributario por el cual acusó, previsto y sancionado en el artículo 27 N° 23 del Código Tributario, es el orden público económico y el buen funcionamiento del sistema tributario; y que la asociación buscó operar en un verdadero mercado de facturas ideológicamente falsas, realizaron maquinaciones fraudulentas, acciones conscientes que buscaban engañar, defraudar, en este caso, a quienes adquirirían vehículos de buena fe.

Dijo que la idea matriz era crear las sociedades en la página de empresa en un día, realizar la iniciación de actividades, verificar ante el SII el domicilio y luego obtener la autorización de folios. Y una vez que no se seguía autorizando la obtención de folios, creaban otras sociedades. Por ejemplo, la empresa Orión funcionó 7 meses, Valenzuela y Arce, funcionó 3 meses, etc. Esto se constató en las planillas Ciste incorporadas como documental.

Luego de contextualizar el alegato, ilustró que, primero, se referiría al marco legal del delito tributario y el tipo penal y, en segundo lugar, cómo se probó en este juicio.

Respecto del marco legal y delito tributario, señaló que el sujeto activo puede ser cualquier persona, no es necesario que haya hecho inicio de actividades como persona natural. El verbo rector es proporcionar antecedentes falsos, es decir, se debe poner a disposición del SII dichos antecedentes, esto quedó de manifiesto con las declaraciones de funcionarios policiales y Carla Vildósola y el testigo Sebastián Martínez Zavala. Además, de las escrituras de las sociedades, cartillas Ciste, las facturas, etc.

Luego, la norma señala, con el objeto de obtener autorización para documentación tributaria.

Este requisito del tipo se probó con la obtención del certificado digital, respecto de lo cual, se refirieron los testigos Priscila Pérez y Miguel Robles Aguayo, jefes de las empresas de firma electrónica. Asimismo, las cartillas Ciste consignan las facturas emitidas por cada automotora, y las facturas y solicitudes de 1ª inscripción, que se encontraron en el celular de los acusados Yerko Silva y Camilo Sandoval.

Respecto de la faz subjetiva, indicó que la norma exige que sea “maliciosamente”, lo cual significa un reforzamiento semántico para establecer la ilegalidad.

Puntualizó que este es un delito de mera actividad, no requiere perjuicio fiscal y es de peligro abstracto, el conocimiento solo está referido a la acción típica, es suficiente que el sujeto sepa los elementos que integran el tipo penal.

Sostuvo la querellante que el conocimiento cabal de don Yerko Silva de la mecánica tributaria, quedó de manifiesto con la instalación de la aplicación para facturar que tenía en su celular, el número de atención para ir a la Notaría que transmitía a sus brazos operativos, los pantallazos de la empresa en un día y las cédulas de identidad de los palos blancos o “gomas”. En el caso de don Juan Navarrete, como brazo operativo también contaba con conocimiento del tipo penal tributario al reclutar representantes legales o testaferros, realizar el pago a notarios públicos por servicios brindados en las escrituras de constitución, solicitud de claves provisorias de las automotoras a fin de realizar trámites ante este Servicio, tal como da cuenta de la evidencia incautada en el automóvil Nissan Qashqai, placa patente LPHB.53, en el que transitaba el señor David Millalén y que fue facilitado el acusado Juan Navarrete Vázquez. Y finalmente, don Camilo Sandoval Godoy, como brazo operativo de esta organización criminal, es quien participó en la mayor cantidad de etapas dentro de esta organización, se encontraron documentos emitidos por Automotora Bilbao, en su celular incautado en esta investigación.

Respecto de la manera en que la prueba rendida en juicio logró acreditar los elementos de la faz objetiva del delito, indicó que el testigo Pedro Olivares, señaló que los socios de las empresas falsas eran personas en situación de calle; Larry Caro, dijo que a las empresas le ponían nombres parecidos a las lícitas; Daniel la Regla, Bastián Guzmán, declararon que eran empresas de fachada creadas en la plataforma “empresa en un día” y con nombres parecidos a las reales; Fabián Aravena Romero, trabajó con la automotora Nova, concurrió al domicilio que informó, dijo que existía pero que no correspondía, lo que fue corroborado por su subalterno Nelson Núñez Cornejo; Raquel Forero, elaboró un informe sobre las empresas

automotoras investigadas donde se indica cuáles eran estas empresas y explica su forma de constitución, también hizo diligencias para verificar los domicilios de estas empresas y sus giros eran vinculados a vehículos, el que no se podían ejecutar en estos domicilios.

Por otra parte, doña Carla Vildósola Godoy, declaró que a través de los sistemas informáticos del SII es posible verificar la veracidad de las sociedades, los socios no contaban con recursos económicos para formarlas, se ofició a los dueños de los domicilios quienes indicaron no conocerlas, a través de las cartillas Cigte, se verificó que no tenían sueldos, además, señaló que las facturas eran de vehículos nuevos y sin uso pero no tenían importación de estos. A su vez, el testigo Bogaret Amayo Cepeda, mencionó que las facturas tenían números bajos, fue uno de los primeros indicadores para dar con ellas. Lo reafirmó el testigo Sebastián Silva Moraga, quien se refirió a empresas determinadas, pues investigó lo mismo con respecto a ellas y aseveró que las automotoras reales, en noviembre de cada año, ya tenían facturas números 10.000 o más, en cambio, estas tenían numeración muy baja. Por último, Fernando Vásquez Guerra también declaró lo mismo, y que en jerga de los acusados, “se nos cayó una empresa” significaba que había sido descubierta, además, los domicilios eran falsos, que incluso una vez se llegó y se percató que había una empresa de extintores, también había una casona por ejemplo donde los moradores nunca habían tenido conocimiento de que existía una automotora. Finalmente, se contó con la declaración de Sebastián Martínez Zavala, a quien Yerko le pidió crear 5 o 6 empresas automotoras, con los datos que éste le enviaba, de socios, capital, razón social, todas en la modalidad de sociedades por acciones (SPA), las que eran más fáciles de crear porque se requería solamente un solo socio.

Por otra parte, hizo presente que el testigo Miguel Robles Aguayo, jefe de Certinet, reseñó que los usuarios utilizaban la firma electrónica para emitir facturas, que era el objetivo final. En el mismo sentido declaró Priscila Pérez Vega, jefe de operaciones de E-cert.

Por último, destacó que a la víctima estafada doña Rocío Kettlum, no le llamó la atención la factura de Bilbao, ingresó a internet y tenía página web porque el nombre era muy parecido al de la empresa real.

En cuanto a la acreditación de la faz subjetiva del delito, nombró la confesión autoinculpatoria y prueba de indicios, ya que el dolo es un proceso normal y no psicológico psiquiátrico.

Afirmó que Yerko confesó la perpetración de este delito, así quedó en evidencia en la medida que reconoció los audios de whatsapp contenidos en su celular, que se le exhibieron en el juicio, por ejemplo, el WA0144, en que indica que las facturas pasaban siempre por él, WA0272 de 29.01.2020, donde en una conversación con Juan Navarrete expresamente señala “ingresé, guardé, instalé el certificado digital”, cuestión que tenía por objeto realizar diversos trámites, entre ellos la emisión de factura y el audio WA0138; en el audio WA0326, Yerko explicaba cómo centraliza la firma electrónica con el SII para facturar, tenía E-factura para ingresar directamente a facturar y no ir a la página del SII, además, tenía la cédula de identidad de los gomas que eran los socios de las empresas.

La querellante afirmó que el acusado Yerko Silva sabía perfectamente qué información se requería para iniciar actividades y dar vida a un negocio, toda vez que declaró en juicio que ya había realizado la iniciación de actividades como persona natural, que había estudiado tres años de ingeniería comercial y señaló que “yo sé cosas contables y sé manejar trámites”. Agregó que Yerko también demostró tener conocimiento de las acciones necesarias para realizar la verificación de actividades de las empresas, con lo cual lograba que estas pudieran emitir facturas.

Así incluso explicó en términos propios de la jerga de un funcionario fiscalizador de este servicio, refiriéndose a la verificación de actividades condicionales, que significaba que la empresa facturaba hasta cierta cantidad de tiempo, dado que no está confirmado por el ente fiscalizador si el domicilio era real. Cuando se le exhibió el audio WA00305 indicó claramente que la expresión “se le haya tirado una empresa” significaba que esta no podía seguir facturando. Y como no servía, había que crear otra. Frente al audio WA0276, fue más allá aún y señaló que el número de atención para ir a la notaría y crear la empresa lo hacía él mismo online. O bien se lo enviaba con los pantallazos de la constitución a la persona que reclutaba al testaferro.

Indicó que también fue enfático en señalar que no solamente Sebastián Martínez y Franco Cruz Iligaray reclutaban testaferros, sino que también otras personas que eran integrantes de la organización. Frente a los audios WA0130, WA0008, WA0010, don Yerko también señaló expresamente que se compraron firmas digitales por la página web y que era importante que las personas que fueran representantes legales se mantuvieran ubicables, con el fin de retirar las firmas digitales en forma presencial y después iniciar actividades ante el servicio y emitir facturas, por cierto, dejando en evidencia que el problema es que el servicio solo autorizaba una cierta cantidad de facturas, cuando no le constaba un domicilio verídico.

Por último, la querellante detalló los indicadores de dolo respecto de Yerko Silva que emanaban de la prueba rendida, y destaca la declaración de Raquel Forero quien señaló que Yerko era el líder que daba instrucciones a sus brazos operativos, a Martínez y Franco Cruz para crear empresa y emitir facturas.

Ahora bien, respecto del acusado Juan Navarrete Vásquez, indicó que en su declaración, le fue exhibido por el Ministerio Público, el audio WA00162, en que Yerko le indica que llame al viejo y le diga que fuiste al servicio, frente a lo cual, Juan Navarrete, aduciendo desconocimiento de las operaciones, dijo que era un audio que escuchó con el Luchín.

Navarrete dijo en su declaración que no conocía cómo utilizar una factura, pero esto no se condice con las declaraciones de los numerosos testigos en juicio que indicaron que tenía un rol preponderante en la constitución e inicio de actividades de las empresas. En especial en el reclutamiento de gomas para que fuesen representantes legales. Se refirieron a este tópico los testigos Fernando Vázquez Guerra, quien señaló que este acusado también tenía un conocimiento cabal de los trámites que se hacían ante el SII, ya que junto con la escritura de constitución de la empresa Gildemeister en la Nissan Qashqai ya mencionada, se encontraban las claves provisionales solicitadas del servicio.

Por otra parte, en evidencia material 256 y en los audios de WhatsApp 0292 de 23 de enero del 2020, WA0295 de la misma fecha, WA0000, WA0002 y WA0057, todos de 24 de enero del 2020, Navarrete Vázquez hablaba en la jerga propia de don Yerko y señalaba “se me caen las empresas”, necesito un domicilio para una empresa para cumplir con las instrucciones solicitadas por Yerko.

Asimismo, Juan Navarrete declaró que jamás ingresaba a la página del servicio, que no sabía lo que es el inicio de actividades, sin embargo en los audios WA0132 de 24 de febrero de 2020, hablaba precisamente del inicio de actividades y en el audio WA0139 de la misma fecha le dice a Yerko “ese hueón ya tenía giro, cuando yo meto el RUT me sale al tiro si tiene o no giro” (el tribunal advirtió que esto lo dijo Yerko Silva y no Juan Navarrete). Por lo tanto, sí sabía ingresar a la página web del Servicio de Impuestos Internos.

Por otra parte, la prueba documental 1010 incorporada durante la declaración de doña Raquel Forero, registra la declaración de la testigo Tatiana Arana Espinoza, de 14 de diciembre del 2020, quien señaló “yo hacía todo el trámite en la calle, desde que recibía los autos y los vendía. De Juanito, yo sabía que vendía IVA, me ofreció vender IVA en pandemia, me dice que después me va a explicar”.

La querellante enfatizó que de acuerdo a lo narrado por doña Tatiana Arana, declaración presenciada por la testigo Raquel Forero, Juan Navarrete le señaló que vendía IVA, cuestión que tampoco se condice con la declaración prestada por este, dado que se requieren conocimientos tributarios específicos para la comisión del delito tributario de facilitación de facturas falsas. Inclusive, este es hasta más complejo que la creación e inicio de actividades con antecedentes falsos que es el delito por el cual está en este juicio.

Finalmente, indicó que la declaración de la testigo Carla Vildósola Godoy resultaba bastante conteste con lo señalado por doña Tatiana Arana, ya que la funcionaria fiscalizadora de este servicio señaló que en los casos de facilitación de facturas es muy usual ver la figura del reclutador, en donde se ofrece dinero a distintas personas de escasos recursos para poder crear empresas. Rol precisamente que cumplía el señor Navarrete.

En lo que respecta a don Camilo Sandoval, el testigo Daniel La Regla, indicó a su respecto que como brazo operativo de esta organización criminal, participó en la mayor cantidad de etapas, en el proceso de la adquisición, transformación de un vehículo robado y también respecto de los documentos de automotora Bilbao incautados en su celular.

En cuanto al dolo específico asociado a cada acusado, aludió a que a Yerko se le encontró las cédulas de identidad de los gomos, y otros documentos; a las evidencias 32 y 34 levantadas en el domicilio de Martínez Zavala.

Respecto de Juan Navarrete, enumeró el cuaderno de recopilación de antecedentes de Vildósola, dos boletas de honorarios por la firma electrónica de la formación de 3 empresas, la evidencia material 108 exhibida a Fernando Vázquez, la escritura de la empresa Gildemeister y los códigos provisorios, levantados

del Nissan Qashqai y la declaración del acusado Millalén, en cuanto dicho auto se lo había prestado Juanito, y en el maletero se encontró dicha documentación.

En cuanto a Camilo, precisó que se le encontró la factura 382 de Automotora Bilbao en su teléfono.

Respecto del conocimiento situacional aseveró que los tres acusados se encontraban en una posición en donde necesariamente tenían conocimiento desde la situación en que actuaban. Conocían que proporcionaban datos falsos al servicio en el inicio de actividad, conocían la mecánica tributaria, conocían que el giro, capital social, socio, representante legal y domicilio de las automotoras eran falsos y también conocían que la finalidad de proporcionar datos falsos era emitir facturas ideológicamente falsas para el proceso de blanqueamiento de los vehículos. Los tres conocieron los diversos elementos del tipo exigido por el 97 número 23, y la existencia de un riesgo penalmente relevante, y pese a ello, tuvieron la voluntad de realizar la conducta de proporcionar datos falsos en el inicio de actividades de las sociedades. También pusieron objetivamente con su conducta en peligro el bien jurídico protegido. Entonces, a modo de conclusión, es posible observar la voluntad de los acusados como el control del hecho, así queda de manifiesto en la declaración de Yerko Silva en juicio, en la que reconoció que es obvio que tiene que hacer indicaciones.

Reflexionó la querellante que Yerko lo ve como algo obvio, dijo “le enseñé todo lo que sé primero a Edith, luego a Tatiana y después a Juanito, porque Juan en principio no sabía nada”. Le decía a Juanito, este papel tú lo presentas en un lado, tú vas para allá, tú vas para acá. Por eso le daba indicaciones de cómo inscribir los vehículos con la factura en el Registro Civil, entre otras funciones. Entonces, él señaló expresamente que todo su conocimiento fue transmitido de manera individual a cada uno, todo lo cual acredita que don Yerko Silva tenía el control del hecho.

Y eso involucra todas las funciones llevadas a cabo al interior de la organización, incluida la constitución de sociedades, inicio de actividades y posterior emisión de facturas. Enseñándole, como él mismo admitió, todo a don Juan Navarrete Vázquez, como quedó en evidencia en los innumerables medios de prueba rendidos en este juicio.

Replicando, el querellante SII, señaló, respecto de Yerko Silva, que el testigo Sebastián Martínez Zavala indicó que los datos falsos de las empresas que creaba se los entregaba Yerko, lo cual se vio reflejado en los cuadernos incautados a este. Y claramente, habían etapas que Yerko no podía realizar por su propia mano, porque estaba privado de libertad.

Por otra parte, reiteró que la doctrina mayoritaria se ha inclinado en considerar al delito en examen, como delito común, o sea, aquellos que los puede cometer cualquier persona y no solamente el contribuyente.

Respecto de Juan Navarrete, enfatizó que hay innumerable prueba en su contra, como un informe de Vildósola que está dedicado a él, y los documentos incautados en la Nissan Qashqai, declaraciones de

Gustavo Viveros y de Eduardo Sanhueza, la sociedad Bilbao se encontraba en la libreta de Sebastián Martínez.

La Defensa del acusado YERKO SILVA TORO, en sus alegaciones de término, señaló que, al inicio del presente juicio, se escucharon palabras como asociación, estructura, orden jerárquico, una jerarquía predeterminada, se escuchó a los investigadores policiales, principalmente el señor Olivares, el señor Larry Caro, el señor Vázquez, la señorita Forero, que esta asociación corresponde a una organización bien determinada en cuanto a funciones que tendría como cabeza o como líder, a don Yerko Silva Toro, quien distribuía funciones, daba órdenes, en razón de la figura penal del artículo 292 del Código del Ramo, que señala que la asociación se forma con el objeto de atentar contra el orden social, contra las buenas costumbres, contra las personas, contra las propiedades.

Expuso que esta estructura debe cumplir ciertos requisitos de existencia, porque no basta simplemente que dos o más personas se asocien con el fin de atentar contra el orden público, contra el patrimonio de otro, sino que requiere necesariamente que esta estructura tenga claramente, en primer término, un orden jerárquico que está dado en razón de quien dirige directamente, quien distribuye las funciones, los brazos operativos y otros que van a aportar a las actividades de esta asociación. Otro requisito de existencia es la estabilidad en el tiempo, la asociación debe tener necesariamente una prolongación determinada, no respecto de algunos de sus miembros, sino que de todos y cada uno de los que formaron aquella asociación.

Sin embargo, indicó que en este juicio se ha visto que existe una figura central, que es don Yerko Silva Toro, persona a la cual se le está imputando ser el líder de esta organización, quien determina quiénes son los brazos operativos, como en este caso determinó en algún instante que su brazo operativo más importante era su hermano, don Albano Silva Toro, y otros como don Juan Navarrete, doña Edith, como en algún instante fue doña Tatiana Arana. Pero, insistió el defensor, para que exista asociación necesariamente la estabilidad en el tiempo requiere, por una parte, que los integrantes en sí se conocieran, o tuvieran, de alguna u otra manera, algún tipo de vinculación más allá de un grado de parentesco, o algún tipo de afectio.

Es por ese motivo, dijo entender, que lo que se produjo en este caso no fue una idea de asociación, sino que la idea de preparación de delitos determinados y de coautorías en distintos tipos de delitos y no de asociación.

Añadió que para que se satisfaga precisamente este delito de peligro, se requiere determinar el elemento subjetivo del tipo penal, que en algunas partes la doctrina lo menciona como este mal llamado “affectio societatis”, la idea de querer pertenecer a una sociedad para tener fines comunes. No obstante, el profesor Labatut y el profesor Echeverry, han sostenido que esta fase subjetiva del tipo penal, se satisface no solamente con la afiliación del sujeto a este grupo o asociación, sino que debe estar consciente de los hechos en los que va a participar y las acciones claras que va a realizar. Cuestión que en ninguna etapa de este juicio se logró probar.

El defensor puso de ejemplo al testigo Sebastián Martínez, quien declaró que constituyó una serie de sociedades para Yerko Silva, a quien conocía hace tiempo, pero de su parte no hay una *afectio societatis*, si bien era un colaborador, tampoco tenía un conocimiento claro a qué se dedicarían estas sociedades, ya que dijo que no sabía que se dedicaban a blanquear vehículos robados, para después venderlos, sino que pensó que se dedicaban a la venta de IVA.

Enfatizó que en ninguna de las declaraciones de los investigadores policiales, el señor Guzmán, la señorita Forero, el señor La Regla, el señor Olivares, al señor Vázquez y otros, han indicado o lograron demostrar cuántas veces precisas y directas haya dado don Yerko Silva a alguna persona para realizar acciones determinadas, salvo, como aquella que acaba de mencionar la colega del Servicio de Impuestos Internos, cuando le explica a una persona qué hacer con un código para poder activar estas sociedades en un día.

Por otra parte, la asociación para que pueda existir debe también tener otros fines importantes como por ejemplo la distribución de los ingresos. En este caso nadie ha podido probar que los ingresos de esta mal llamada asociación hayan ingresado a las arcas propias de Yerko Silva o de Albano Silva o de algún otro miembro de la organización. Así lo dejó claramente demostrado la funcionaria de Carabineros, oficial contable, quien señaló que al estudio de la información que le proporcionaba el Ministerio Público, al análisis de las cartolas de ingresos, de fluctuación de dinero, tanto del restaurante Machu Picchu como de la Parrilla del Gaucho, logra justificar los ingresos y los egresos. Puntualizó el defensor que si se hace un estudio detallado, es casi la misma cantidad que ingresa que la que sale. Por tanto, ¿qué dinero hay de ganancia? Y más aún, si estas fueron las ganancias, ¿cómo se distribuyeron estas ganancias? Un elemento que tiene que ser primordial dentro de lo que es esta asociación.

Manifestó que el profesor Echeverry señala que para la perpetración de la asociación ilícita necesariamente se requiere la perpetración de delitos, pero en este caso, los delitos no fueron ordenados ni perpetrados por Yerko Silva, de acuerdo a las propias declaraciones de Yerko Silva y de los investigadores policiales, cuando indagaron en el teléfono incautado a aquél, indicaban que a Yerko Silva le ofrecían vehículos ya robados, a éste le ofrecían cosas que él podía o no podía comprar, por tanto, nunca ordenó la perpetración de estos delitos.

Ahora bien, atendido lo expuesto, si son una asociación donde dos o más se han puesto de acuerdo para delinquir, para llevar adelante un proyecto de delitos para tener un lucro, la gran pregunta es, ¿qué vinculación tiene el señor Millalén con don Yerko Silva? ¿Qué relación tiene él con el señor Martínez? Ninguna. No tenían conocimiento dentro de esta misma organización, y así también lo hizo ver la policía al momento de prestar declaración, sobre todo el señor Vázquez, al indicar que existían negocios paralelos dentro de esta misma organización. El defensor hizo hincapié en que hay audios y progresivos, existen declaraciones de policías y también de los propios imputados, en las cuales señalan que ellos realizan negocios apartes. Prueba de ello es el audio en el cual don Camilo Sandoval planifica el robo o posible robo

de unas máquinas grúas que se encontraban botadas para negocio propio, no para un negocio de la supuesta asociación, no se cumplen con todos y cada uno de sus requisitos, por sobre todo lo que dice razón a la fase subjetiva del tipo penal.

Por otro lado, acotó, en relación con el delito tributario, que se ha hecho ver en este juicio que quien proporcionaba toda la información y quien realizaba todo era don Yerko Silva Toro, cuestión nada más alejada de realidad, porque si fuera así podría haber prescindido desde el comienzo, desde la primera factura o de la primera sociedad creada, de la ayuda de don Franco o del señor Martínez. Lo que ocurrió es que uno hacía actividades de contador y el otro, hacía actividades de factura, por lo que su representado solamente pedía lo que necesitaba. Y son ellos, en definitiva, quienes se dedicaban a establecer cuáles eran las actividades de los socios o el socio, cuál era el giro comercial de la sociedad y en general los datos. Son los imputados condenados los que indican estos datos, como el caso del señor Martínez, quien era el que tenía todo listo. Por tanto, es él quien aporta los antecedentes falsos, no es Yerko Silva, pues de haber sido él, hubiese prescindido de todas estas personas. Y él no ejecutó dichas actividades porque no estaba dentro de sus facultades ni posibilidades.

Sostuvo que quien comete este tipo de delitos es el contribuyente, en ese sentido, así lo ha estimado el profesor Pablo Mazzone Paroni, al indicar en su libro de infracciones tributarias que precisamente es el contribuyente el que hace necesariamente los procedimientos dolosos encaminados a los fines ilícitos que indica el código. Es el propio contribuyente el que le entrega los datos, que hace la presentación, el responsable. Así también lo ha dicho Van Weezel en sus diferentes obras.

Por tanto, señaló que entendía que el delito tributario por el cual se le acusó a su representado no se configura.

Respecto del delito de lavado de dinero, indicó que la norma fue creada con un fin preventivo, en definitiva, de evitar que el dinero que provenga de acciones ilícitas logre ingresar al mercado formal como si fuese obtenido de manera lícita. Para este efecto, existen las figuras de los testaferros en dos formas, como aquellos que tienen o guardan cosas a su nombre, o aquellos que prestan su nombre para ocultar estos bienes o dinero respecto de aquellos ingresos ilícitos de don Yerko Silva. El Ministerio Público ha hecho parecer en este juicio que aquellos dineros que don Yerko Silva lograba obtener con la venta de algunos vehículos, no de los 183 que fueron mostrados en la panilla Excel, fueron necesariamente invertidos, primero, en “Alto Machu Picchu” y después en “La parrilla del gaucho”. Pero ello no fue así, porque con anterioridad, a pesar de estar detenido, tenía el local de sushi llamado Mano Santa, el cual logró vender recuperando dinero.

Aseveró que la funcionaria de Carabineros, contadora auditora, indicó una serie de operaciones que solamente interpreta respecto de la información que le entregó el Ministerio Público, sobre los dineros que fluctúan en las cuentas de Alto Machu Picchu, Carolina Cornejo y Víctor Quezada, donde hay unos ingresos de dinero que dan vuelta, pero en ninguno de ellos hay un blanqueamiento de dinero. No existe ningún testaferro por ninguna parte que haya puesto ningún elemento o ningún bien a nombre de don Yerko Silva. Es

más, hasta ahora no se le conocen bienes a éste, a parte de un caballo de carrera que compró entre cuatro personas, por tanto, cabe preguntarse ¿Dónde está el dinero que logró conseguir Yerko Silva con la venta de estos vehículos? El dinero fue consumido en el tiempo medio.

Aseguró el defensor que según la propia declaración de su representado y la declaración de los otros imputados, los negocios en los cuales participó directamente Yerko Silva no son más de cuatro o cinco, con generosidad, son ocho vehículos en distintos lapsos de tiempo, desde el año 2016 hasta el año 2020. Por tanto, tenía que mantener a su familia y mantenerse él mismo porque estaba en prisión, con ese dinero no logró hacer ninguna inversión ni guardarlo, sino que inmediatamente lo fue aprovechando y consumiendo porque era necesariamente fungible.

En cuanto a los delitos de estafa, tal como el propio Yerko Silva lo indicó en su declaración, subía cierto tipo de publicaciones en las cuales podría inducir a error al sujeto pasivo, sus conductas cumplían todos y cada uno de los elementos del tipo penal de la estafa. Hay una puesta en escena porque ponía la foto con un nombre de aquello que quiere que el sujeto pasivo logre comprar para hacer un desprendimiento de su patrimonio, que le provoca un daño.

Sostuvo que su representado cometió delitos de estafa, pero no en la forma que el Ministerio Público lo está planteando, porque acá no existe una reiteración, sino que delitos aislados y distintos en el tiempo. Insistió en que existen delitos que fueron cometidos y vehículos que fueron vendidos, en los cuales Yerko Silva no tiene ninguna participación.

En cuanto al delito de receptación, indicó que su representado no tiene participación en ninguna receptación de vehículo motorizado, porque tal como lo señala la norma, aquel que recepciona y tiene en su poder y a su disposición cosas robadas. Por tanto, las personas que realizaban las receptaciones fueron aquellas que materialmente tuvieron la posibilidad de tener el vehículo en sus manos, que efectivamente guardaron vehículos, que los manejaron.

En la réplica, la defensa de Yerko Silva Toro, en lo que respecta al delito tributario, insistió en que su conducta, no se condice con el tipo penal descrito en el artículo 97 N°23 del Código Tributario. Existe un condenado, que es el señor Martínez Zavala, que se relaciona con el servicio, y es él, y quizá otras personas o sujetos, quienes proporcionan los datos al Servicio de Impuestos Internos. Don Yerko nunca se relacionó con el Servicio, más allá de las pretensiones que refiere la representante de dicho Servicio, que sabía la operatoria y basándonos en los dichos del señor Zavala, que sabía en definitiva más que él, pero el director del Servicio incluso puede saber más que todos, pero no comete ningún delito directo con el Servicio, si es que no actúa e interactúa con éste.

En relación con espacios comunes, en cuanto a la asociación ilícita, mencionó que hay varios hitos importantes de destacar. La fiscal compara este grupo, y desde ya cree que en ese punto le da la razón que esto no es una asociación ilícita, con dos entidades históricas, novelescas quizás, que son el Tren de Aragua

y la Cosa Nostra. De los audios se concluye, dice la fiscal, que Yerko entregaba directrices, indicaba al señor Navarrete cómo realizar una u otra gestión. Bueno, lo que hace y lo que escuchamos, en definitiva, fue quien le da ciertas indicaciones para explicarle cómo operaba, en definitiva, un sistema. Y en ese orden de ideas es distinto a dar instrucciones precisas, bajo una orden, bajo una jerarquía, bajo un imperio de decir si no haces esto, va a pasar esto otro. Le explica una situación puntual como, por ejemplo, ocupar un computador u ocupar un sistema, más no directrices jerarquizadas, imperativas, propias de una asociación.

La fiscal también planteó que en una continuidad de asociación los miembros pueden entrar y salir y volver a entrar y volver a salir. Entonces, bajo esa lógica de estructura de asociación, don Camilo y doña Tatiana salieron y nunca más volvieron. Por lo tanto, desde ahí ya empieza a disgregarse tal cual se planteó en el alegato principal esta asociación. Acá, insistió, lo que hay son actividades puntuales, don Yerko evidentemente tiene una responsabilidad, don Illich cuando se inicia en definitiva le proporciona ciertos datos para efecto de la factura y desde ahí son situaciones puntuales de algunos acusados, más no forman parte de una asociación.

La Defensa del acusado ALBANO SILVA TORO, alegando en la clausura, luego de hacer un repaso de las imputaciones fácticas de la acusación en contra de su representado, indicó, respecto del delito de asociación ilícita, que, de acuerdo a nuestra jurisprudencia, sentencias de la Excelentísima Corte Suprema Rol 2747 del año 2009, Rol 5576 del año 2007, y el autor Grisolia, “Delito de asociación ilícita”, en Revista Chilena de Derecho, página 82, requiere para su configuración la concurrencia estricta y nítida de diferentes factores, y en caso de faltar uno o más de ellos, el tribunal deberá considerar que se está solo frente a una mera concurrencia de sujetos para la comisión de crímenes o simples delitos, en cuya virtud lleva a aplicar las reglas generales del artículo 15 del Código Penal.

Señaló que el primer elemento es un mínimo de organización, y en este caso, hay relaciones familiares, por un lado, está don Yerko, está su hermano, está su madre, está su hermana. Son relaciones de origen y así lo ha determinado la doctrina. Es una vinculación familiar, no delictual. Así se forma este grupo de personas que el Ministerio Público los quiere transformar en una asociación.

Un segundo elemento es que en la organización logre apreciarse nítidamente una estructura jerárquica, como una jefatura. Sin embargo, doña Tatiana Aranda, don Freddy, su hijo, y Camilo, al poco andar, actuaban de manera paralela, es decir, se disgregaron de don Yerko, y así se suscitaron una serie de situaciones respecto del actuar de estos acusados en relación a don Yerko. Es decir, no existe en esta organización una estructura jerárquica.

Además, vinculado con lo anterior, deben existir relaciones de subordinación entre los miembros con la aceptación de reglas comunes. Hay personas que dan órdenes a otras que las ejecutan, donde las primeras están normalmente más apartadas del objeto del delito. Aseguró que, en este caso, no se escucharon las órdenes, sino que indicaciones, instrucciones o más bien don Yerko enseñándole al señor Navarrete respecto de una operatoria.

Refirió que otro elemento es que la organización sea de carácter permanente y, respecto de este punto, se remite a lo dicho respecto de doña Tatiana y otros miembros que se fueron disgregando y armando sus propios focos delictivos, alejados de don Yerko, que partió, en definitiva, con este actuar.

El siguiente elemento es que la organización tenga por objeto la comisión de delitos y, por otro lado, la existencia de comunicaciones o instrucciones concretas, vigilancia, control de acciones, distribución de tareas y empleo de medios materiales.

En este caso, y así lo han refrendado varios intervinientes, don Yerko lo hacía todo, ideaba, publicaba, negociaba, cobraba, hacía toda la operatoria respecto de este negocio ilícito. Es decir, no existe comunicación o instrucciones concretas de vigilancia y distribución. Él hacía todo, era el núcleo.

Respecto del elemento de existencia de reglas vinculantes para todos los miembros con respecto a la formación de la voluntad social, señaló que tampoco existen pues los mismos miembros se engañaban entre sí. Cuando don Yerko pedía rendición de cuentas, le faltaba dinero en esas liquidaciones. Por lo tanto, es una estafa o un engaño entre los mismos miembros. Por lo tanto, este elemento evidentemente no existe.

Por último, respecto del tipo subjetivo del delito, el dolo debe abarcar la convergencia de voluntades entre todas las partes, pero en este caso hay participaciones distintas.

Reflexionó que si este grupo de personas se puede calificar como asociación ilícita, con todas las consecuencias procesales penales que ello implica, sin duda esta sería la peor asociación delictual del mundo, donde el supuesto líder, don Yerko, ejecuta la labor completa, confecciona, recibe, estructura los negocios, hace todo. Tan mala es esta supuesta asociación, que casi al inicio de este entramado delictual los propios miembros, doña Tatiana y don Camilo, siguieron una estructura y una línea separada, se disgregaron y armaron su propio negocio, lejano a Yerko. Además, al supuesto líder, lo engañaban con la entrega de dineros y luego las cuentas y números no cuadraban.

Aseveró el defensor que estas son las características de la supuesta asociación, sumamente mal organizada, trabada, donde existe un ejecutor único y donde los propios participantes se disgregan a mitad de camino.

Por ello, afirmó que esto no es una asociación delictual, acá de lo que se trata es de una simple coautoría, es un actuar delictual ordinario, más allá de las ensalzadas pretensiones del persecutor, no existe orden, jerarquía, organización, estructura, permanencia, son participantes puntuales en hechos puntuales.

En ese sentido, ¿qué se le puede reprochar a don Albano Silva? Indicó el defensor que ser hermano de Yerko Silva, haber ido a visitar en tres o cuatro oportunidades a un recinto penitenciario a su hermano, enviarle comida en una oportunidad estando preso, costillar para 10 personas, formar una sociedad entre su señora y la de su hermano, ya que no podían hacerlo ellos ante un sistema comercial bancario, estaban en Dicom y tenían registros comerciales empañados, haber pedido ayuda para que administrara el restaurante en calidad de contadora a doña Carolina Cornejo, que estuvo unos meses trabajando en el

restaurante. Es decir, se tiene que concluir en esta línea que doña Carolina Cornejo llegó al restaurante a lavar activos y luego se fue. Esa es la posición que plantea el Ministerio Público respecto a doña Carolina y consecuentemente en contra de don Víctor, su marido.

Enfatizó que la conducta del autor asociado para delinquir, deriva en que se sujeta a la voluntad de un grupo y de este modo se inserta en la organización, siendo necesario que haya existido al menos una exteriorización de la conducta de sus integrantes, que permita a todos ellos conocerse entre sí, como pertenecientes a un conjunto que comparte objetivos comunes. Acá muchos de los acusados se conocieron en la audiencia de control de detención, y de ahí en adelante.

Respecto del delito de lavado de activos, manifestó que la Fiscalía sostiene que “Alto Machu Picchu” y “La parrilla del gaucho”, que es el mismo restaurante, ya que existió continuidad con los mismos miembros, espacio físico, giro, personal, etc., sería una estructura de fachada para lavar dinero. En consecuencia, los flujos del restaurante, las facturas acompañadas por esta defensa del año 2016-2017, el testimonio de don Albano en este juicio, dando cuenta del funcionamiento del restaurante, el origen, los flujos de dinero y demás, el testimonio de don Clodomiro Silva, los mismos funcionarios policiales dando cuenta del funcionamiento del restaurante, el testimonio de los testigos de esta defensa, dando cuenta de la actividad del restaurante, flujos, pedidos, etc., no existen para la Fiscalía.

El persecutor sostiene que este negocio del rubro alimentos, se formó para defraudar. Sin embargo, ello no es así, ya que el restaurante funcionaba como tal, con flujos importantes de dinero, clientes, insumos, con deudas declaradas por el dueño de la propiedad, don Clodomiro Silva. Es decir, se trata de una estructura de lavado casi caricaturesca. El restaurante no pudo estar al día en sus obligaciones nunca, nunca salió de las deudas, siempre con deuda hasta el día de hoy. Un sin sentido, un lavado de dinero bastante sui géneris. Para reforzar este punto, hizo presente que en la cuenta de la comercializadora o en la cuenta de Albano Silva, nunca ingresó dinero de Daniela Espinoza, su hermana, o de doña Claudia Sandoval, ni de ninguno de los acusados que hoy se encuentra en este juicio.

Advirtió que la investigación referente al lavado de activos fue deficiente. En primer lugar, no existe pericia contable que permita al tribunal concluir con absoluta certeza el lavado referido. No se investigaron los flujos de origen de don Albano, el origen de sus negocios. No se investigó la venta, por ejemplo, de este restaurante de sushi “Mano Santa”, de don Yerko, que realiza antes de caer detenido, dinero que invirtió parceladamente en el restaurante. Tal cual lo refirió en la declaración doña Claudia, pero también lo refirió don Yerko.

Además, enfatizó que la primera inscripción del primer vehículo es en marzo de 2017 y el restaurante “Alto Machu Picchu” venía hace un año ya funcionando. En definitiva, no es coincidente la génesis del restaurante con los hechos descritos en la acusación.

Planteó que su representado es un emprendedor, un comerciante, un gestor de negocios, su motivación es generar recursos por eso adquirió un caballo, que como él explicó, no era un 100% de su propiedad, sino que compartía, como se dicen en la hípica, las patas. Cada pata tenía un dueño. Y si ganaba, se repartían el premio. Luego de unos meses tuvo que vender este caballo, porque nunca ganó. Asimismo, representaba a futbolistas. Se inició en el negocio de la construcción. En esa época conoció al padre de Sebastián Martínez Zavala como contador, cuando trabajaba en la empresa Salfa. Luego se inició con este capital en el negocio de alimentos que derivó en los restaurantes y hasta antes de su detención un motel, que se lo había entregado el mismo Clodomiro Silva. Esta misma inquietud empresarial, mas no el conocimiento, sumado al desorden, la falta de educación y de herramientas técnicas hizo que se apoyara en personas como doña Carolina Cornejo, para que realizara gestiones de orden contable en el restaurante. Ella declaró y aclaró cómo funcionaba el restaurante, cuáles eran los flujos, utilidades y pérdidas.

Señaló que en esta línea de confianza, pueden existir montos de traspaso de doña Carolina desde la cuenta del restaurante o de la cuenta personal de Albano a su cuenta y la que compartía con el señor Quesada. Y luego llegando los dineros, y esto es de conocimiento público, que los dineros de los restaurantes se requieren los lunes pero se ingresan los martes a los negocios, ella en definitiva reembolsaba.

En el ámbito comercial, su representado tenía una amistad casi paternal con el fallecido imputado en esta causa, don Eduardo Provoste, dueño de la automotora Procar. En este contexto, se generan situaciones que en el ámbito jurídico llaman la atención a la Fiscalía. Pero la realidad comercial no siempre va de la mano con la realidad judicial, el ser y el deber ser. Y no significa que se hayan cometido delitos, así se explica el préstamo de la máquina Transbank de don Eduardo Provoste a Albano para que funcionara en los primeros meses del restaurante. También lo relativo a los dólares, don Albano no fue a comprar como lo refiere el fiscal, fue a cambiar dólares que tenía por plata chilena, este encargo se lo hizo el señor Provoste, eso lo declara y así él lo refiere. Así también lo relativo a la propiedad, donde el señor Provoste le pide que realice esta compra y esa gestión.

Respecto a estos puntos, y que resultan determinantes para la Fiscalía, son actividades comerciales habituales, ordinarias, que muchos pseudo-empresarios en definitiva ejecutan, personas que van funcionando, tratando de generar recursos lícitos, mas no implica una actividad delictual.

Tal es así que, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos no lo cita, no se querella ni hace mención alguna a su actividad, porque efectivamente esta actividad puede resultar desordenada, poco prolija, pero no son delitos.

En cuanto a los delitos de estafa y receptación, el actuar concreto de su defendido, respecto a la camioneta Hyundai Tucson, se encuadra dentro de un delito de estafa, pero reiterada en ningún caso. Aún más, es la propia acusación que al describir la conducta refiere al menos en un caso. Pues bien, eso mismo es lo que declara su patrocinado, que efectivamente fue acompañado y luego percibió parte del dinero. En ese sentido, no cuestiona esa conducta.

En relación a la camioneta Mahindra, placa patente LPHD.24, la inscribió a petición de don Yerko, por lo que evidentemente no cuestiona ese actuar. Lo refirió el mismo acusado en su declaración, en este caso de agotamiento del delito de estafa, existe una relación concadenada entre engaño, error, disposición y perjuicio. En ese orden de ideas, la conducta reprochable a don Albano es por el delito de estafa y no de receptación, ya que de un mismo acto no se puede acusar por receptación y por estafa. Un mismo actuar con dos figuras penales distintas, eso no corresponde.

Ahora bien, en esa misma línea, respecto a la grúa horquilla patente HFXX.33, no hay receptación, ya que su chasis y su patente no estaban adulterados. Lo refiere el mismo propietario que viene a declarar y tenedor actual de la grúa. En ese caso se realizó un negocio, se pagó con cheques esta operación, los cheques no tenían fondos y se genera esta incidencia. Pero no se trata ni de una receptación ni de una estafa, se trata de una operación comercial fallida, en el peor de los casos, un giro doloso de cheque. Así también lo refiere el funcionario que vino al juicio y declaró en esa línea.

En cuanto al Porsche que fue incautado el día que se ingresó al restaurante, aclaró que en ese momento don Albano no estaba en el restaurante, no tenía dominio del estacionamiento ni de los vehículos que ahí se aparcaban.

Precisó que el vehículo Porsche, y lo refieren los funcionarios, lo sacaron con grúa desde el restaurante el día que se ingresó. Las llaves no las tenían en el restaurante ni don Albano, las tenía el dueño, el que luego fue a la unidad policial y retiró con las mismas llaves el vehículo, por lo que don Albano no tenía por qué saber que era robado, de hecho estaba tapado y no a la vista de todas las personas, e ingresaban muchas personas a ese lugar. Por otro lado, con respecto a la H1, se mostraron una serie de fotografías de esa camioneta, pero lo que hacía esa camioneta, era ingresar al restaurante para retirar alimento, enviada por don Yerko, y se iba. En ese momento don Albano no estaba en el restaurante, más allá de la pretensión que quiera hacer valer el Ministerio Público en relación a que él sabía que esa camioneta era robada.

En cuanto a la línea de inconsistencia en la investigación, destacó que hay empresas que no forman parte de este grupo. Existe un sinnúmero de empresas que no formaron parte de este actuar ni de esta causa. A saber, Nova, Olímpica Autos, Orión, Full Orión, Sobreruedas, Martínez Zavala declaró que él iba anotando todo en un cuaderno y en una libreta, donde no aparecen dichas empresas por lo que él no las creó, las crearon otras personas. Pues bien, no pertenecen a esta causa y en ese orden, existe otro problema con la acusación, ya que habla de 16 empresas, y al menos 7 no forman parte de este grupo de acusados, que son las referidas. En consecuencia, las facturas, ventas de vehículos y demás, derivadas de estas empresas no resultan imputables a los acusados.

En cuanto a las transferencias, hizo presente que el Ministerio Público hace mención a algunas transferencias, desde la cuenta de don Albano, a cuentas de algunos coacusados y otras personas. Pues bien, hay transferencias de \$3.000, \$40.000, entre otras. Transferencias de don Albano al señor Navarrete por una venta de salmón, tal cual lo refirió, por \$400.000, que puede ser la que llama más la atención. El

persecutor entró nuevamente en una visión de túnel, y se aleja de la objetividad de este tipo de persecución penal.

Puntualizó que no existe ninguna transferencia o depósito a don Albano de montos que hagan referencia a flujos de dinero como los escuchados en este juicio, por supuestas ventas de vehículos o derivados.

En este sentido, no existe más allá de hacer un favor en el caso de la Mahindra, porque don Yerko le pidió que fuera y la inscribiera, ese es el actuar de don Albano, y por otro lado vender la Hyundai Tucson. No existe otra participación de don Albano, que en estos hechos, que fueron reconocidos evidentemente desde el alegato de apertura.

Respecto de los dichos y declaraciones de otros coacusados, es cierto que otra coacusada, habla de que don Yerko está salvado porque tiene un restaurante, pero son dichos que se alejan del principio de corroboración. Y se pregunta ¿Cómo se va a corroborar aquello, con personas privadas de libertad que evidentemente en ese momento lo que buscaban era acceder a la libertad y prestaron declaración buscando ese objetivo?

En conclusión, su defendido reconoció respecto de la camioneta Mahindra, la primera inscripción, mas no venderla, no gestionó ningún negocio ni la ofertó. La testigo Solange Sepúlveda Beas, testigo 8 de la Fiscalía, que declara don Albano se la vendió y otros detalles de esta operación, mintió en este juicio y se encuentra aún más denunciada ante el Ministerio Público por mentir, diciendo que no conocía a Marcelo Farías, quien es su marido y tiene una hija en común. Es decir, ningún valor probatorio puede tener el único testimonio en ese sentido, pero sí, don Albano reconoció la primera inscripción de esa camioneta.

Finalmente, en lo que respecta a los testimonios de las víctimas que vinieron a declarar, manifestó el defensor que llama la atención, porque todos somos padres, hermanos, hijos, pero acá no estamos para conocer y juzgar a estas personas por delitos de robo con violencia o intimidación, hasta acá no se rindió prueba que demostrara que don Yerko u otro acusado encargara algún vehículo, participara en algún robo, aún más don Yerko declaró que a él le llegaban los vehículos y en ese orden generaba su negocio

En la réplica, señaló que la Fiscalía cuestionó a los testigos aportados por esta defensa, porque no se le hicieron preguntas y no aportaron antecedentes, que no tenían contrato, pagos de sueldo o cotizaciones. Pues bien, ellos depusieron ante el tribunal en qué periodo habían trabajado, qué actividad tenían, si conocían a ciertas personas y particularidades precisas respecto del restaurante, cómo funcionaba, si había un restaurante antes. Si tenían contratos, cotizaciones, sus remuneraciones, era parte del trabajo de la Fiscalía que no hizo, no es carga de esta defensa en definitiva preguntar en una línea distinta que no le interesa aclarar a este defensor. La prueba testimonial se rindió con el objeto de dar cuenta que efectivamente ese restaurante funcionaba como tal.

Cuestionó también la Fiscalía de dónde se obtuvo dinero si al restaurante le iba tan mal y tenía tan mala administración. Pues bien, las cosas son como son y no como uno quiere que sean. Los negocios funcionan de la siguiente manera, en este caso, entran clientes, ingresan, pagan un servicio, se costean las deudas con los ingresos y finalmente se va produciendo un camino comercial de todo negocio. Es lo que se llama en definitiva la bicicleta. No es que existieran acá sumas que permitieran ahorrar o cubrir otras obligaciones. Lo que se iba haciendo con el restaurante era bicicletear para ir manteniendo el mismo restaurante, el personal, los insumos, la estructura, pero evidentemente no había un flujo chorreante de dinero.

Tal es así que luego de pandemia, el restaurante se dedica al delivery y luego ya quiebra. Importante destacar que Claudia Sandoval efectivamente en el periodo intermedio, en la etapa investigativa, declara que iba pasando dinero al restaurante producto de los dineros que le entregaba Yerko, pero doña Claudia dice que era el producto de la venta del sushi Mano Santa que tenía en Maipú su ex pareja, y producto de eso le iba pasando parceladamente, don Yerko, estos dineros a doña Claudia, para poder inyectarle dinero al restaurante pero esa arista, no se investigó, existiendo ese restaurante y su venta, elemento no investigado por la Fiscalía y nuevamente planteó esta situación de la visión de túnel, y lo mismo declaró Yerko, que tenía un restaurante Mano Santa y que se le iba pasando parceladamente, no le pasa los 30, 25 o 20 millones sino que parceladamente se los iba pasando a Claudia para que se los pasara a Albano.

Otra arista importante que cuestionó el Ministerio Público, son los flujos de Albano, porque no aparecen movimientos ante el Servicio de Impuestos Internos. Pero él inicia su actividad comercial en el año 2007, en Salfa, el año 2010, con el tratamiento de desechos industriales y es de público conocimiento que los documentos, facturas, etc., inicio de actividades, en esa época eran de papel. Es decir, la Fiscalía podría haber ido a las oficinas donde se iniciaron estas actividades, se abrió la actividad y obtenerla. Eso lo declara también don Albano ante el fiscal en el periodo de investigación y acompaña la documentación, pero también refiere que él parte sus actividades en el año 2007 en Salfa, luego en definitiva con desechos industriales. Tan es así que a las preguntas del señor Martínez Zavala por parte de este defensor, si su padre era contador, dice sí. Bueno, ¿y cómo conoce a don Albano? el primero deslizó una respuesta en el sentido de que un amigo en común los había presentado. Sin embargo, el señor Martínez Zavala conoce a don Albano por su padre desde el año 2007, y así se lo refiere este defensor, porque le hacía la contabilidad a esta empresa. Y con eso corroboró que efectivamente la actividad de don Albano viene de mucho antes.

Por otra parte, manifestó que la Fiscalía habla de dineros en la cuenta de la madre de Yerko y Albano. Hay una persona, doña Rocío Kettlun, que dice que compró un vehículo Honda y que transfirió dineros a esa cuenta. Eso se ve controvertido con el testimonio de su marido, quien refiere que no pudo hacer transferencias, ya que era un monto muy alto. La señora Kettlun dice que hicieron varias transferencias, mas nunca se exhibieron esos comprobantes. Aquí existe un evidente problema de prueba. Respecto a la camioneta Mahindra, José Sepúlveda es el primer adquirente de esa camioneta, en su declaración se le

pregunta si conocía a don Albano Silva, dice que no, que nunca lo había visto. Luego comparece la hija, doña Solange Sepúlveda, y dice que Albano les vendió la camioneta. Es ahí que se le pregunta por su marido, Marcelo Farías. La señora responde que no lo conoce y ahí se materializa el delito y la denuncia que hace esta defensa, ya que ambos son marido y mujer, tienen hijos en común y en definitiva viene a mentir al tribunal. Si se suprime hipotéticamente esta testigo, queda entonces su padre, el señor Sepúlveda, que declara que no conoce ni se relaciona con don Albano. Es un problema de prueba nuevamente.

Por último, respecto de lo planteado por esta defensa que dice relación con el delito de receptación y estafa, en que existiría un concurso ideal de delitos, aseveró que es importante distinguir entre concurso homogéneo y heterogéneo. Parte de la doctrina menciona también un tercer grupo que se conoce como unidad de acción por efecto de abrazadera.

Respecto del concurso heterogéneo, que es el que nos ocupa, indicó que cuando la acción única o las acciones unilateralmente consideradas configuran al mismo tiempo dos o más delitos de distinta clase o naturaleza, se da un concurso heterogéneo. Por ejemplo, aborto seguido de muerte de una embarazada, lesionar, por ejemplo, a un magistrado en ejercicio de sus funciones, con un disparo herir a una persona y destrozar una pieza de colección valiosa, etc. La doctrina discute si este concurso se extiende al caso en que un hecho, siendo típico, está parcialmente comprendido en otro más amplio, como sucede en la estafa perpetrada mediante una falsificación de un documento público, donde el engaño en que consiste la falsedad queda abarcado por ser inherente a la estafa, en el caso que nos ocupa la receptación como un elemento o un camino en un delito más grande que es la estafa y se agota, evidentemente, como en el delito de estafa el tipo requiere que se cause un perjuicio en el patrimonio de la víctima, que no es elemento del tipo de la falsedad documental hay opiniones en el sentido que se estaría en una hipótesis de concurso medial como el caso que planteamos reglado en el artículo 75, pero se considera también en la medida que requiere un concurso real, que en la especie no concurriría particularmente.

Lo anterior según lo ha entendido la doctrina en Derecho Penal, parte general, tomo 2, nociones fundamentales de la teoría del delito, páginas 349, 350, 351, del profesor Garrido Montt.

Para concluir, solicitó que se acoja esta tesis, porque además existe otro problema, que dice relación con que la fiscal indicó que el problema no es la receptación, sino los documentos, las facturas falsas que se aportaron al sistema, y ese sería el gran problema de este caso, ya que los imputados no fueron acusados por el delito de falsificación de facturas.

En el alegato final, la defensora de ILICH CHOPA ALDANA, indicó que, básicamente, esta investigación al parecer se inició por una casualidad, donde los funcionarios policiales hicieron un control policial en la vía pública, encontraron unos papeles en la maletera de este vehículo que al parecer tenía algunas irregularidades, posteriormente, se trasladó al cuartel policial y así se da inicio a esta gran investigación.

Durante el desarrollo del juicio se pudo escuchar a don Pedro Olivares que señaló le llamó la atención que apareciera el nombre de don Ilich Chopa en esta investigación. A su juicio, fue así porque esta investigación básicamente se trata de interceptaciones telefónicas, y no hay ninguna donde se pueda escuchar a su representado comunicándose con alguno de los otros acusados, ya sea los que están en este juicio o los que ya fueron condenados anteriormente.

Opinó que solo se cuenta, entonces, con la supuesta declaración informal de don Albano Silva Toro que lo relaciona con la venta de una grúa horquilla y una escucha entre dos acusados que señalan que ante cualquier problema deben culpar o deben nombrar a don Ilich Chopa porque él ya había sido condenado por hechos parecidos.

Entonces, se preguntó si la prueba rendida durante este juicio es suficiente para acreditar la promesa fáctica que propuso el Ministerio Público en la acusación, porque a su juicio con tanta prueba o durante tantos días quizás es fácil perderse de los hechos.

La defensora mencionó que entendía que a su representado se le atribuyó participación en una supuesta asociación ilícita que se habría iniciado a lo menos en el año 2016. Se señala en el auto de apertura que esto es bajo la organización o liderazgo de don Yerko Silva, contando con roles y tareas definidas, con el objeto de vender vehículos robados como si fueran lícitos y para esto crearon 16 empresas y han comprado y vendido a lo menos 211 vehículos.

Si bien es cierto que don Ilich, incluso en su declaración, señala haber conocido a don Yerko Silva cuando se encontraban privados de libertad en Santiago 1, en el año 2016, donde le comenta el motivo de su detención, que decía relación con la creación de facturas falsas para reinscribir vehículos, y entonces le cuenta a don Yerko cómo funcionaba o cómo había operado él con un auto anteriormente.

Aseveró que don Yerko, entonces, toma esta forma de operar y a través de sus contactos en libertad comienza a realizar sus propias operaciones. Acá no hay ningún antecedente que permita acreditar que don Ilich Chopa, en alguna oportunidad, recibió alguna orden directa de don Yerko o de alguna otra persona relacionada con don Yerko.

Coincidiendo con los demás defensores, sostuvo que, brevemente, los requisitos de la asociación ilícita son la estabilidad o permanencia en el tiempo. En relación con este elemento se logró acreditar que Ilich Chopa conoció a don Yerko el año 2016, posteriormente, se le vincula con la compra de una firma electrónica con las que posteriormente se crean unas sociedades en el año 2019 y algunos depósitos y el cobro de un cheque del que se hará cargo más adelante. Aseveró que estas son actuaciones aisladas en el tiempo, son actuaciones precisas que más bien darían cuenta de una coautoría tal como lo han analizado sus colegas pero en ningún caso dan cuenta de la existencia de una jerarquía entre ellos o que su representado obedeciera a algún líder, a una jerarquía o a un orden directo, lo único que se comprobó es que se conocen lo

que es insuficiente para tener por acreditados los requisitos de esta asociación ilícita sino más bien pareciera ser que claramente se está frente a un caso de coautoría.

En definitiva, afirmó que no hay una funcionalidad ni una habitualidad, no hay permanencia en el tiempo, tampoco el elemento subjetivo, que dice relación con el sentido de pertenencia a esta asociación, el compartir este plan común.

En este caso, expresó que, una vez que su representado recupera su libertad, nunca más tuvo contacto con don Yerko o con algún otro miembro, salvo hechos específicos y puntuales que él mismo reconoce en su declaración y posteriormente se dedicó a vender algunas facturas.

Por otro lado, refirió que tampoco se logró acreditar por parte de la Fiscalía todos los vehículos que no fueron incautados, y que constan en esta famosa planilla que prácticamente fue el centro de este juicio, porque eran vehículos que no existían, que se inscribieron por personas individuales con la finalidad de obtener beneficios bancarios. Por ello, indicó que desde un comienzo la Fiscalía fue quizás ambiciosa en entender que todos los vehículos que habían sido facturados existían, que eran producto de un delito y que posteriormente habían sido reinscritos.

En conclusión, la asociación que se le atribuye a su representado no existe, no se dan los requisitos ya señalados, no se da el plan común ni el sentido de pertenencia a este grupo. No se logró acreditar la existencia de los 211 vehículos.

Posteriormente, aparecen en la acusación una serie de hipótesis que no dice relación con su representado y luego se le atribuye a don Ilich Chopa ser el brazo operativo de esta organización en el sur del país, específicamente, en la ciudad de Los Ángeles y respecto de las automotoras Nueva Laredo SPA y Automotriz Portillo SPA, haber pagado en ambas la firma electrónica mediante transferencia desde su cuenta vista del banco BCI. Aseguró la defensora que es tan poco efectivo que su representado fuera un brazo operativo en el sur del país que incluso a través de la declaración de los funcionarios policiales y de los propios coimputados, cuando estos quisieron mostrar un vehículo, en particular un Hyundai H1 en el sur del país, es otro de los coimputados el que viaja a mostrarlo con la finalidad de poder venderlo.

Enfatizó que su representado no tiene ninguna actuación en el sur del país que permita vincularlo con esta supuesta asociación. Si bien es cierto que Nueva Laredo y Portillo se crearon el 8 de febrero del año 2019 con un único socio, don Julián Arriagada. Esto se contradice con el mismo presupuesto fáctico de la Fiscalía, que más adelante, cuando analiza las sociedades constituidas, señala que Automotriz Portillo SPA y Automotriz Nueva Laredo se constituyen ambas mediante firma electrónica avanzada gestionada personalmente por su único socio, Julián Martínez Arriagada.

Sin perjuicio, no puede desconocer que, mediante la misma declaración de don Ilich Chopa y también el levantamiento del secreto bancario, se estableció que él paga a través de su cuenta del Banco BCI la firma. También quedó claro que no es el usuario ni el beneficiario de esta firma, por tanto, don Ilich en ese

minuto se aleja del plan de la persona que tiene esta firma y no se logró acreditar un concierto previo o algún tipo de conocimiento o participación de su representado una vez que paga esta firma. Por tanto, incluso más, él se encontraba privado de libertad a la fecha en que se constituye esta sociedad y de ahí, en ese punto, él se aleja de los planes de la persona titular de esta firma. Solo participa en la etapa, entonces, del pago de la firma a través de una transferencia electrónica y a juicio de la defensa, esto es solo una etapa de un supuesto delito de estafa.

Desde la misma cuenta vista, señala la acusación, información obtenida mediante el levantamiento del secreto bancario, efectuó depósitos a diferentes miembros de la asociación, se señala, a Camilo Sandoval, a Jorge Salinas y a Franco Cruz Iligaray. Claramente su representado conocía a algunos acusados. Él mismo declaró que una vez recuperada su libertad, efectuaba la venta de facturas, pero era algo que él hacía por su cuenta. También hay otro tipo de trámites que pagó y que dicen relación con un monto total a don Camilo Sandoval de \$5.595.000, a don Franco Cruz Iligaray por un monto de \$810.000.

Le parece que en este punto, la prueba del Ministerio Público ha sido bastante deficiente, ya que no acreditó como le correspondía hacerlo que esos montos se pagaron para hacer operaciones específicas que decían relación con esta supuesta asociación ilícita.

Por otra parte, la Fiscalía ha acusado a su representado por los delitos de estafa y receptación respecto de dos vehículos, sin embargo, no se logró acreditar que su representado en algún minuto mantuviera en su poder alguno de estos vehículos, no así que hubiese participado en alguna maniobra de engaño propio de la estafa, respecto de la venta de estos dos vehículos.

Es así como el vehículo Subaru XV, la víctima es Jocelyn Martínez, quien no reconoce a su representado en el juicio como el vendedor, como lo señaló en su clausura el Ministerio Público, la tuvimos declarando vía Zoom, se le preguntó si reconocía a alguna de las personas vendedoras y no reconoció a don Ilich Chopa. Por tanto, no es efectivo que a través de esta declaración se establezca un vínculo con su representado. Es solo la declaración del funcionario de apellido Álvarez que afirma aquello. Pero en juicio, ella no lo relacionó con la venta de este vehículo.

Respecto del Chevrolet colorado patente KPYL-92, la víctima presentó un cheque a nombre y cobrado por don Ilich Chopa, a quien reconoció como vendedor. No se presentó en estrados esta víctima, por lo tanto, solo la declaración de la inspectora Solans, la que no se ve corroborada por otro antecedente, que haya sido la víctima que reconoce a don Ilich Chopa como el vendedor.

No podemos negar el hecho que él cobró este cheque, pero a juicio de la defensa esto también tiene relación con una etapa de consumación de un delito de estafa, es decir, es una maniobra más dentro de este engaño o de esta puesta en escena. Este vehículo además se vende por martillero público y se exhibe un supuesto mandato de su representado que este niega. Es más, la foto de su carnet de identidad no es la misma que la exhibida para cobrar el cheque ¿Cómo es posible que una persona que no sea dueña de un

vehículo pueda entregar una autorización para una venta de un vehículo por martillero público? Eso no es posible y la fiscalía no da una explicación suficiente para que esto hubiese ocurrido de aquella manera. Por lo tanto, se debe concluir que esto no es efectivo, que esto no ocurrió de esa manera. Mi representado, por tanto, nunca tuvo la posesión material o la disposición material de ninguno de estos dos vehículos por los que se le acusa a título de receptación.

En subsidio, si el tribunal estimara que la prueba del Ministerio Público ha sido suficiente para acreditar el delito de receptación y estafa como delitos independientes, alegó que se estaría claramente frente a la figura de un concurso. En este caso un concurso medial entre la receptación y la estafa. Indicó que las normas de concurso constituyen una manifestación del principio de proporcionalidad, de la prohibición de la valoración non bis in ídem o la doble valoración en el sentido de considerar dos veces un mismo hecho o más exactamente la misma propiedad de un hecho para fundamentar o agravar la punibilidad. Y en ese caso, su señoría, su señoría estima que se configuran ambos delitos.

En ese sentido, sostuvo que disponer de la cosa o haber participado en la venta de estos vehículos, que podría ser la única acción atribuible a título de receptación, es una etapa necesaria para poder consumir la estafa, por lo tanto, es un medio necesario para la concreción del delito que sí estaba en el plan de mi representado, cuál era el vender este vehículo como nuevo habiendo sido reinscrito. Así los delitos se encuentran unidos de forma tal que uno de ellos es la condición necesaria para el otro, por lo que se entiende que hay un menor disvalor de esta acción y que conforman una unidad delictiva.

Refirió que así también lo ha resuelto la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, a propósito de la usurpación de nombre y la falsificación de instrumento público, señalando que una constituye el medio necesario para la realización de una serie de defraudaciones. En tanto, la doctrina exige que entre las distintas conductas exista una relación de necesidad objetiva, no siendo solamente necesaria la perspectiva del autor, pero en este caso se entiende que tanto vender el vehículo, mostrar el vehículo o exhibir el vehículo es un acto necesario para la concreción del delito de estafa. Por lo tanto, aquí sí existe una relación objetiva de necesidad entre las diversas acciones, por eso, en subsidio solicitó que se considere el concurso medial entre el delito de estafa y receptación en cuanto a los vehículos por los cuales ha sido acusado su representado.

Replicando la defensora de Ilich Chopa Aldana, reiteró que para poder estar frente a la figura de la asociación ilícita necesariamente debe concurrir la jerarquía y la permanencia en el tiempo. La Fiscalía cuestionó aquello señalando que no era necesaria una orden directa, que no era requisito la permanencia en el tiempo, que las instrucciones sean entregadas por una persona, sino que también por los brazos operativos. Y señaló en este punto que Yerko había declarado que en los primeros trabajos utilizó los contactos que le dio Ilich Chopa. Al respecto, la defensora mencionó que sus alegaciones se encuentran reforzadas con el texto legal del artículo 292, incluso el vigente a la fecha de los hechos, legislación que fue modificada el año 2023. Esta norma es clara al señalar, incluso al diferenciar la penalidad que se le aplica a

cada delito en relación a la función que la persona podría ejercer dentro de esta asociación en cuanto a si es una jefatura, ejercer mando en ella, financiarla, proveerla de recursos o haberla fundado. Claramente aquí estamos hablando de un requisito de jerarquía. Por tanto, no es efectivo que esto no sea un requisito del tipo penal ni que esto tampoco haya sido aplicado por la doctrina vigente. En este caso, aún más la modificación al artículo 292 viene a reforzar aquella idea de la permanencia en el tiempo, porque señala que se entenderá por asociación delictiva toda organización formada por tres o más personas con acción sostenida en el tiempo. Entonces, ¿qué prueba se rindió en el juicio para poder acreditar estos requisitos respecto de la supuesta participación de don Ilich en esta asociación ilícita?

Aseveró que el hecho de haber conocido a don Yerko Silva cuando se encontraban privados de libertad, más bien pareciera ser que don Ilich Chopa le entrega cierto manejo, cierta forma de cómo realizar algún tipo de operaciones, pero dista bastante del hecho de haber sido él quien recibía órdenes o que estaba bajo una relación de subordinación respecto del mismo. Dijo que se puso como ejemplo a estas grandes organizaciones como el Tren de Aragua y otras, señalando que la Fiscalía tiene razón en orden a que no es necesario que todos los miembros de una asociación se conozcan, pero sí es necesario que cada uno de los miembros tenga este sentido de pertenencia y conozca las consecuencias de no obedecer las órdenes directas o indirectas de la jefatura.

Por otra parte, se han señalado dos vehículos a título de receptación, una Chevrolet Colorado y un automóvil Ford, cobrado por su representado, cuestión que no fue cuestionada ni siquiera por él durante su declaración, pero no es efectivo que la víctima lo reconociera a él como el vendedor. La víctima declaró, insistió en este punto, y ella no lo reconoció como el vendedor, incluso dio el nombre de otras personas que no son enjuiciadas. Respecto de un Ford mustang, se señala que el adquiriente, doña Bernadita Allende, y que don Ilich habría recibido una transferencia de 16 millones de pesos. Pero se pregunta si efectivamente recibió esta transferencia tan grande o llamativa cuando se levanta el secreto bancario, cuando se exhiben las cartolas del banco BCI, de la cuenta de su representado, ¿por qué entonces no se acreditó por parte de la Fiscalía si había existido esta transferencia? y la prueba se limitó a señalarla como un hecho probable relacionándolo con la declaración del señor Bascur y con la declaración de la señora Bernadita Allende, es un hecho fácil de comprobar. La transferencia queda en el registro bancario y ese registro no se acompañó en el juicio.

Manifestó que, para vincular a su representado con esta asociación, se hizo valer también la declaración de doña Daniela Opazo Sandoval, quien señala que su representado habría utilizado sus cuentas para realizar distintas transferencias bancarias a propósito de operaciones relacionadas con la venta de vehículos. Pero doña Daniela Opazo señaló que su padre tenía una sociedad con don Ilich, por lo que, no se puede concluir únicamente que dichas transferencias correspondieran a algún negocio ilícito o algún negocio relacionado con la venta o la reinscripción de autos robados. La propia Daniela Opazo no pudo dar razón de

que efectivamente todos los movimientos bancarios que le exhibieron y que decían relación con la cuenta de don Ilich correspondieran a operaciones ilícitas.

El defensor de CAMILO SANDOVAL GODOY, alegando en la clausura, expuso que el Ministerio Público, luego de varios años de investigación, ha basado sus acusaciones en presunciones y asociaciones indirectas que no cumplen a su juicio con los estándares exigidos por los artículos 297 y 340 del Código Procesal Penal para efectos de poder establecer la culpabilidad de su representado más allá de toda duda razonable, es decir, que Camilo Sandoval sería un brazo operativo clave en esta asociación, sin pruebas sólidas que lo ubiquen en la posesión o control de los vehículos supuestamente sustraídos. La principal imputación se basa en la participación que habría tenido don Camilo Sandoval en la compra y venta de vehículos adulterados. Sin embargo, la evidencia presentada en juicio no ha logrado acreditar que los vehículos pasaran por las manos de su representado o que haya tenido la posesión o la capacidad de disponer de los mismos, o un control directo sobre estos vehículos.

Respecto del delito de asociación ilícita, la acusación del Ministerio Público insiste en que Camilo Sandoval formaba parte de una supuesta organización criminal dedicada a la adulteración y venta de vehículos robados, liderada por el señor Yerko Silva Toro. Sin embargo, durante el desarrollo del juicio, ha quedado claro, a juicio de esta defensa, que don Camilo Sandoval no tenía un papel jerárquico en esta estructura, ni participó tampoco directamente en la toma de decisiones claves de la organización, ni menos siguió en algún momento instrucciones del supuesto líder Yerko Silva. De hecho, las declaraciones de los testigos y del propio imputado Yerko Silva refieren que su relación con Camilo fue circunstancial y que tras una disputa personal perdió todo contacto con él. En lo que dice relación con uno de los roles que habría cumplido también don Camilo Sandoval, particularmente captar testaferros, lo cierto es que el único antecedente que se mencionó por parte de testigos de oída, es que uno de los imputados, particularmente, el señor Paredes Quevedo, que se encuentra condenado esta causa, habría indicado que el señor Sandoval lo habría reclutado. Ese es el único antecedente que existe respecto de una posible participación de su representado en conseguir o captar testaferros. Añadió que ante las preguntas de contra interrogatorio que fueron realizadas por esta defensa, se indicó que lo que realmente mencionó el señor Paredes Quevedo es que fue reclutado por un amigo de él de nombre Oscar Araneda, no por el señor Camilo Sandoval.

Por otra parte, indicó que para efectos de saber si realmente se está frente a una asociación o en su defecto, como han dicho los demás codefensores, con una coautoría se referirá brevemente respecto de los elementos típicos los cuales son, en primer lugar, la existencia de una organización jerárquica, se requiere de algún grado de organización por lo menos incipiente. Esto es, que los esfuerzos de los asociados que tienden a un fin deben estar debidamente coordinados por un ente superior o jefatura, para los efectos de alcanzar adecuadamente ese objetivo, debiendo dicha jefatura ser reconocida por los afiliados. Respecto a este requisito en particular, aseveró el defensor, que no se ha acreditado por parte del Ministerio Público que don Camilo Sandoval haya recibido siquiera una sola vez algún tipo de instrucción de parte de esta supuesta

jefatura, que sería el señor Yerko Silva. No existió ningún audio de WhatsApp ni interceptación telefónica que dé cuenta que su cliente haya seguido en algún momento algún tipo de instrucción por parte del señor Yerko Silva. Hizo presente que la persona que efectivamente sí seguía instrucciones por parte del señor Yerko Silva era doña Tatiana Arana, y que únicamente le solicitaba a su pareja en ese momento, que era justamente el señor Sandoval, que le acompañara a realizar trámites ordenados por Yerko, pero en ningún momento fue el señor Sandoval el que recibía instrucciones de ningún tipo.

Agregó que el segundo elemento es la permanencia en el tiempo, la consumación de la asociación ilícita se prolonga en el tiempo, por la creación permanentemente de un estado delictivo, este elemento está ligado a la disposición en el tiempo de la asociación ilícita para efectos de cometer los delitos planeados por ella ya sea a corto o largo plazo. Tal como lo ha señalado reiteradamente la jurisprudencia, que también fue señalado por sus codefensores, tiene que ver con alguna especie de estabilidad en el tiempo para efectos de poder cometer sus fines.

Respecto a este requisito y la participación que haya tenido don Camilo Sandoval, los únicos antecedentes es que habría intervenido en ciertas ventas que fueron imputadas por el Ministerio Público en tiempos absolutamente desconectados. Son participaciones que no dicen relación y que no son permanentes dentro de esta supuesta organización.

En tercer lugar, la existencia de una división de funciones. Este requisito también es incorporado por la jurisprudencia y tiene relación directa con el modo en que operaría esta supuesta asociación ilícita, pero como ya se señaló, debe existir justamente una estructura jerarquizada, lo que significa que haya jefes o superiores que planifiquen los delitos a cometer mediante dos elementos. Por un lado, las comunicaciones y o instrumentos, y a través de la distribución de tareas entre sus asociados. A juicio de esta defensa, el Ministerio Público no aportó ningún antecedente que diera cuenta que el señor Sandoval recibiera comunicaciones por parte del supuesto líder, ni menos que haya existido instrucciones en las cuales se le indicara un rol específico o una tarea que debía cumplir. Debe existir una relación de causa y efecto entre la orden y el resultado que se efectúa y no se aportó ningún antecedente que diera cuenta de una orden directa, siquiera una, por parte del señor Yerko Silva, a su cliente y que este mismo la haya ejecutado.

Respecto al último requisito que dice relación con el elemento subjetivo, conocido como el *afectio societatis*, no hay duda que se requiere un dolo y el carácter de directo de este no es una cuestión discutida ni por la doctrina ni por la jurisprudencia. Los miembros de la asociación deben tener la directa intención de pertenecer a ella para cometer sus fines ilícitos. Es lo que se conoce como la pertenencia, el sentido de pertenecer a esta asociación.

Respecto de este requisito, sostuvo que su representado en ningún momento tuvo contacto con miembros de esta supuesta organización. Por lo que no existió por su parte ningún sentido de permanencia a esta supuesta organización. En este sentido es necesario destacar el audio en el cual su representado hace

referencia justamente a unas grúas y tractocamiones que no son objetos de la presente causa, dice relación con hechos diversos que no pertenecen a esta supuesta organización.

Incluso Yerko Silva indicó que si bien Camilo tenía escuchas telefónicas, eso era Camilo Sandoval Godoy, no tenía que ver con él, ya que jamás le compró o encargó algún vehículo. Reconoció que en un momento trabajó con Tatiana que era pareja de Camilo, pero en ese tiempo estaba enojado con Camilo. Señaló que lo conocía de mucho tiempo porque fueron cuñados, pero estuvieron separados por mucho tiempo. Afirmó que Tatiana era quien lo ayudaba y cuando habló con ella le dijo que no tenía buena relación con Camilo y que todo era entre Yerko Silva y ella.

El oficial Fernando Vázquez, además, indicó que de las interceptaciones telefónicas no se puede dar cuenta que Camilo vendiera un auto, Tatiana le está pidiendo que la acompañe, no es Camilo el que está participando en esta venta, únicamente prestó esta labor de acompañarla.

Por último, hizo presente el audio de fecha 27 de enero, donde don Yerko señala, “yo soy la mente, yo hago todo, yo reparto la plata”, y donde además indica que es él el que tiene el contacto directo con Aimel, que sería este supuesto tatuador que efectúa las modificaciones de motores y chasis.

En lo que dice en relación con el delito de tenencia ilegal de arma de fuego, insistió en solicitar la absolución por falta de participación, puesto que se presentó el testimonio del padre de su representado, que acredita la existencia de un tercer individuo que se encontraba en el segundo piso del domicilio, quien sería el verdadero responsable del arma encontrada en dicho domicilio. Respecto de los verbos rectores, debe entenderse que poseer o tener un arma es incorporarla a la esfera potestativa de una persona, sin importar si esa situación se ha producido con arreglo o no a derecho. Lo relevante, es que el arma esté en poder de una persona y que de hecho pueda disponer de esa cosa.

En relación con el punto anterior, todos los testimonios que fueron presentados por parte del Ministerio Público, ninguno indicó en qué parte del segundo piso se encontraba su representado, puesto que es perfectamente posible que a la hora de la detención, haya estado o en su habitación y esta tercera persona, efectivamente, encontrarse en posesión del arma.

Añadió que por ser un delito de acción, el delito de tenencia ilegal de arma de fuego, requiere un mínimo de continuidad en la posesión, que implica no sólo la relación material del agente con tal instrumento, sino que también la conciencia que haya tenido supuestamente su representado y la voluntad de tenencia y que no se produzca de manera esporádica y circunstancial, puesto que la tenencia fugaz y momentánea, queda excluida del tipo penal.

Respecto del delito tributario, que se encuentra sancionado en el artículo 97, número 23, esto es, el inicio de actividad mediante antecedentes falsos, señaló que el Servicio de Impuestos Internos omite un antecedente bastante importante y que de acuerdo al artículo 6 del Código Tributario, que regula la actuación del mismo Servicio, existe la circular número 63 del mes de septiembre del año 2021. Y dentro de sus

materias, regula justamente el actuar del Servicio respecto en particular de este hecho, señalando que el 97 número 23, tiene dos incisos, el primero sanciona a quienes proporcionen datos o antecedentes falsos en distintas declaraciones presentadas al Servicio, inicio de actividades, declaraciones juradas y modificaciones también de inicio de actividad. El elemento subjetivo, tal como lo mencionó, es maliciosamente, en este caso, y lo señala la misma circular, se deberá acreditar que quien incluyó los datos o antecedentes falsos en las declaraciones presentadas al Servicio, lo hizo con conocimiento de la falsedad de la información y que pese a ello, tuvo la intención de incluir tales datos o antecedentes.

Por otro lado, el inciso segundo, que es un delito distinto, sanciona a quienes concertadamente faciliten los medios para que las declaraciones de inicio de actividad y sus modificaciones o demás declaraciones exigidas, incluyan maliciosamente datos o antecedentes falsos. El sujeto activo, respecto de este delito, que puede ser cualquier persona natural como lo dijo la querellante, lo cierto es que respecto de este inciso se tiene que tratar de una persona distinta a aquella de la que presenta la declaración respectiva y aquí toma lugar lo que establece el artículo 99 del Código Tributario, quiénes son los sujetos activos de los delitos establecidos en el 97. Y señala, el contribuyente, en primer lugar, en caso de tratarse de personas jurídicas, los directores, gerentes, o en su defecto aquellos que actúen como administradores de hecho. A ellos resulta aplicable el inciso primero. Respecto del inciso segundo, a cualquier persona natural que previo concierto haya facilitado los medios para efectos de poder cometer el delito.

Hizo presente el defensor que el Servicio de Impuestos Internos, en su clausura, hizo alusiones a que ha existido abundante prueba, que con esta causa se afectó a la hacienda pública, que existieron un sinnúmero de facturas ideológicamente falsas. Pero lo cierto es que, al parecer, estamos ante la presencia de un elefante blanco, que en realidad nadie sabe, pero desde el día 1, hace 6 meses, hemos hablado de facturas falsas, de que efectivamente los procesos de recopilación de estas empresas no tenían existencia y el Servicio Impuesto Interno, que es el titular de la acción penal tributaria, no presentó que había facturas falsas.

Añadió que la querellante dio lectura prácticamente a toda la evidencia que fue presentada en el juicio pero, de todos estos medios de prueba, ninguno señala el nivel de participación de mi representado, ni siquiera lo menciona. Además cuando el servicio hace referencia al elemento subjetivo de este delito destaca la participación de Yerko, Albano, Juan Navarrete, pero tampoco menciona al señor Camilo Sandoval. Finalizando su alegación el servicio indicó que se le imputa a este tipo penal a Camilo Sandoval debido a que se encuentra una factura de la automotora Bilbao en su celular. De ser así, todos y cada uno de los vendedores de automóviles que exhibieron facturas tendrían que ser autores del delito del artículo 97 número 23. Además, puntualizó que este delito, como fue señalado, sanciona únicamente el inicio de actividades o autorizaciones para facturar. O sea, actos previos a la facturación. Este delito se comete para efectos de poder facturar, no para tener la factura.

Por último, en lo que dice relación con el delito de receptación, solicitó la absolución por falta de prueba suficiente para efectos de lograr el estándar de convicción que exige nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 340.

En relación con los demás supuestos delitos de receptación de vehículos motorizados que habría cometido don Camilo Sandoval, en virtud de la prueba rendida, no se cuenta con ningún antecedente que dé cuenta que su representado haya estado, como lo exige el tipo del artículo 456 bis A, en posesión de un vehículo con encargo por robo.

Advirtió que el tipo objetivo requiere justamente la acción por parte del sujeto activo para que tener en su poder, comprar, vender o comercializar a cualquier título cosas muebles, robadas y en este caso vehículos motorizados. De los medios de prueba que fueron aportados al juicio respecto a estas receptaciones, su representado jamás estuvo en posesión de ningún vehículo, ni tampoco pudo haber dispuesto de ellos, toda vez que don Camilo Sandoval nunca mantuvo uno de estos vehículos bajo su esfera de cuidado o resguardo ni pudo tener la disposición material. No podría cometer un delito de receptación de vehículos motorizados si jamás comercializó un vehículo receptado.

Además, en la acusación, se le imputa haber participado en la venta de al menos 5 vehículos cuyas patentes se señalan en ella. Respecto de este punto, realizará solicitud principal y otra solicitud subsidiaria. En lo que dice relación con la solicitud principal, solicitó la absolución por el delito de estafa, toda vez que las probanzas que fueron presentadas en juicio, particularmente, lo que dice relación con la placa patente JHFB-67, que corresponde particularmente a la víctima Gloria Galvez, quien dio cuenta, a diferencia de lo que mencionó la Fiscalía en su alegato de clausura, que la persona que contactó, que la persona que firmó junto con ella, a quien le realizó el pago y quien le mostró el vehículo no era Camilo Sandoval Godoy, y que únicamente lo reconoce porque lo estaba acompañando, aun cuando en ningún momento ni siquiera la fiscalía hizo el ejercicio de un eventual reconocimiento respecto a don Camilo Sandoval.

En subsidio, tal como lo mencionó su colega defensora, lo que existe entre ambos delitos de receptación y estafa es la existencia de un concurso ideal de carácter medial, que a la luz del artículo 75 del Código Penal, no resultan aplicables las disposiciones del artículo 74 cuando uno de estos delitos es el medio para cometer el otro. En este sentido, el delito de receptación es el medio para cometer el delito de estafa. No se trata de figuras penales independientes, toda vez que sin la receptación no se podrían haber cometido los delitos de estafa, puesto que uno de los elementos típicos del delito de estafa, es el engaño, en este caso, dado por la ocultación de la real identidad del automóvil que se estaban vendiendo, puesto que no sería posible cometer el delito de estafa sin estar en posesión del vehículo receptado. Así las cosas, su representado no podría haber cometido el delito de estafa sin haber contado con el vehículo receptado, debido a que el vehículo receptado es el objeto material del delito de estafa, toda vez que se ocultaba la identidad del vehículo.

Por último, a juicio de la defensa, el delito que no sería reiterado, sino que tendría el carácter de continuado. Esta es una situación que si bien no se encuentra consagrada normativamente, es reconocida tanto por la doctrina y jurisprudencia. Dentro de estos requisitos, obviamente, es la pluralidad de actos, la unidad del propósito, la homogeneidad delictiva, la conexión temporal. Las imputaciones que realiza el Ministerio Público cumplen con todo y cada uno de estos requisitos. La acción que despliega su representado implica justamente la realización de múltiples acciones delictivas que generalmente afectan el mismo tipo penal durante un periodo de tiempo determinado. También existe la unidad de propósito, que es la conexión o propósito común que une los diferentes actos delictivos.

En la réplica, la defensa de Sandoval Godoy, expresó que no hay ningún antecedente que permita acreditar que su representado haya reclutado a Luis Astudillo. Después se mencionó que también está vinculado a la asociación porque conoce al señor Bascur y le solicitaba los stickers. Pero éste también prestó testimonio e indicó que el señor Camilo Sandoval efectivamente le había solicitado la confección de ciertos stickers, pero al ser preguntado más o menos por cuántos, indicó que no recordaba muy bien, pero que no fue más de 7 u 8 stickers. De los cuales, agregó, en virtud de toda la prueba que fue presentada por el Ministerio Público, uno solo de esos stickers, dice relación con automóviles que se encuentran en el listado de los 211 por los cuales se encuentra acusado.

Respecto de la receptación del día 22 de abril del año 2019, la fiscal señaló que no había cuestionamientos, que esto se trató de la existencia de un delito flagrante donde el imputado fue detenido y apercibido conforme al artículo 26, que declararon en el juicio tanto el dueño del vehículo, como también el dueño del vehículo del cual las patentes fueron robadas, indicó que efectivamente declaró el carabinero que tomó ese procedimiento, donde se dio cuenta que el vehículo era receptado porque tenía justamente sus números de chasis y motor adulterados. Sin embargo, el defensor señaló que don Elvis Isla señaló que se detuvo primero a un vehículo donde se revisa y efectivamente ese vehículo sí contaba con su número de chasis y motor adulterados, mas no el vehículo que conducía supuestamente el señor Camilo Sandoval, porque no tenía el número de chasis y de motor adulterados, sino lo que existía en este caso era que portaba placa patente de otro vehículo. Además, respecto de la corroboración, efectivamente el único testimonio con que pudo contar el tribunal para efectos de considerar que su representado haya estado o no conduciendo ese vehículo, es la declaración del señor Elvis Isla.

Respecto del delito tributario, la querellante hizo un análisis del sujeto activo, dijo que la defensa básicamente estaba utilizando el artículo 99 cuando no tenía nada que ver. Lo cierto, es que el código del ramo, en el artículo 99 señala expresamente quiénes son las personas que cometen y que son sancionadas por los delitos del artículo 97, e indica que no son solamente los representantes legales, los administradores de hecho, sino que también sanciona a aquellos que incurren personalmente. E indica a aquellos que hayan tomado parte en la ejecución del hecho de una manera inmediata y directa, aquellos que hayan impedido o procurado impedir que se evite. Pero ese es el régimen que da el marco para quienes pueden ser autores de

los delitos tributarios. Ahora, la participación que hayan tenido ellos en el respectivo delito tributario, por supuesto que se encuentra regulado en el artículo 15 y siguientes del Código Penal.

Para finalizar, respecto de la existencia de un concurso medial entre la receptación y estafa, dijo que la fiscal señaló que estos delitos son figuras penales independientes y que el engaño de la estafa, se encontraría determinado no por la receptación de los vehículos, sino que por la exhibición de facturas falsas, por eso, se produce un error, disposición patrimonial y perjuicio. La fiscal insistió que el engaño no se obtiene por el automóvil, sino que por la documentación aportada. Eso induce a un error a las víctimas.

El defensor manifestó que, en definitiva, lo que plantea la fiscal es que el engaño se inicia con la presentación de un documento tributario que supuestamente tendría el carácter de falso y que por lo tanto se engaña al Registro Civil por medio del cual figura la primera inscripción, pero lo cierto es que el tribunal no puede determinar que ese documento sea falso porque no existe respecto de ese documento tributario denuncia o querella por parte del Servicio de Impuestos Internos que es el titular de esta acción ni tampoco formalizaciones respecto a un delito de falsificación de factura, jamás ha existido la imputación del artículo 97 número 4 inciso final y que por lo tanto, el tribunal no puede determinar la falsedad de un documento tributario que da principio de ejecución al elemento típico del engaño. El tribunal, no puede declarar que un documento tributario es falso si no ha sido ni siquiera investigado, no ha sido objeto de litigio en este juicio. Sostuvo que no se sabe al día de hoy si tanto las facturas son falsas como también respecto del resto de la documentación. Acá tampoco se formalizó por falsificaciones de instrumentos públicos o privados.

La Defensa de JUAN NAVARRETE VÁSQUEZ, alegando en el cierre, advirtió, en primer lugar, que no se iba a referir a los elementos de la asociación ilícita, en atención a que sus colegas codefensores ya lo han hecho latamente. Luego, indicó que se presentó la acusación relacionada con una planilla Excel con aproximadamente 211 vehículos relacionados con los acusados. Sin embargo, en su alegato de clausura, la Fiscalía señaló que eran 87 vehículos, por tanto, no se ha podido probar que todos estos vehículos tengan relación con los acusados, vehículos algunos que nunca existieron, vehículos que incluso llegaron a tener inscritos menores de edad. Expresó que este gran Excel que se presentó en realidad fue perdiendo fuerza solo.

En cuanto a la asociación ilícita, sostuvo que ésta no existe, lo que se ve reflejado en la falta de estructura, en como los mismos dineros provenientes de estas estafas desaparecieron, no llegaban a sus lugares, se vendieron facturas por fuera, hubo personas relacionadas a esta misma causa, que nunca tuvieron vinculación con ninguno de los otros acusados, haciendo o clonando vehículos por fuera, entregando cuentas mal sacadas e incluso vehículos desaparecidos que los mismos acusados no tienen conocimiento de qué ocurrió con ellos o cuál fue su paradero final. Por ello, a juicio de la defensa, se está en presencia de una coautoría, mas no de una asociación ilícita.

Enfatizó que muchos de los acusados, como ya se dijo, se conocieron en el control de detención, muchos no sabían quién era, nadie, por ejemplo, conocía a David Millalén. Hubo otros acusados, ya

condenados por esta causa, que dijeron que conocieron a Juan Navarrete recién en la audiencia de control de detención. Muchos de los acusados no tenían ni siquiera claridad de qué funciones en específico cumplían. Afirmó que, tal como se dijo anteriormente, don Yerko era quien se encargaba de todos los actos. Esto se vio reflejado en uno de los últimos audios que se escuchó, donde el mismo Yerko refiere que él es quien tiene que hacer absolutamente todo para que esto salga de la manera correcta.

En lo que respecta a Juan Navarrete, en los mismos audios de WhatsApp e interceptaciones telefónicas, consta que Yerko Silva tuvo que enseñarle cómo realizar ciertos actos porque aquél no sabía cómo realizarlos. No teniendo más conocimiento que un hombre medio puede tener respecto a todo esto relacionado al Servicio de Impuestos internos, facturar o creación de sociedades.

Respecto de la estabilidad o permanencia en el tiempo, consideró que son acciones aisladas en el tiempo, pero que no dan cuenta de una jerarquía establecida, no existe una habitualidad del elemento subjetivo, como ya se mencionó, con el sentido de pertenencia, de compartir un plan común.

Ahora bien, si el tribunal considerara que existe una asociación ilícita, se le imputó a su representado, ser un brazo operativo de esta supuesta asociación, pero lo cierto es que Juan Navarrete tiene una participación mucho menor en estos hechos. Si bien existen bastantes escuchas telefónicas entre Juan Navarrete y Yerko Silva y audios de WhatsApp, en éstas queda demostrado que el conocimiento sobre cómo llevar a cabo estos trámites tan sencillos como la transferencia de un vehículo, Juan Navarrete no sabía hacerla, por lo que, tiene un conocimiento mínimo. No como se intenta categorizarlo como un brazo operativo.

Aseveró que más bien es alguien que tiene una función de ayuda a realizar algunas labores menores, como acompañar a acusados a la venta de vehículos y simplemente traer el dinero de vuelta, como queda demostrado en la venta del vehículo Hyundai Tucson, patente LJPX.58.

El Ministerio Público quiso atribuirle mayor responsabilidad de la real a su representado, así quedó de manifiesto, en la declaración de don Albano Silva Toro, prestada ante la fiscal con fecha 8 de julio de 2021, y que refrendó en el juicio, así, se le preguntó si era Juan Navarrete quien recibía los vehículos robados, si solo era él quien los llevaba a modificar, que él le pagaba a las personas para inscribirlos y que también él trabajaba con el tema de las facturas. Don Albano Silva Toro en razón de la verdad respondió negativamente, lo que dejó en evidencia que se intentó entregarle una mayor responsabilidad a Juan Navarrete de la que realmente le corresponde en estos hechos, ya que su representado jamás recibió vehículos robados directamente de los ilícitos, no llevaba los vehículos a modificar, ni trabajaba con el tema de las facturas y esto no se pudo comprobar.

Esto también ocurrió con las declaraciones de otros imputados condenados en esta causa, como lo son Freddy Miranda y Claudia Sandoval. Lo único que se pudo demostrar y que fue confirmado con la propia declaración del acusado Navarrete, fue reclutar a don Jesús Gacitúa, lo que por lo demás hubo otras personas ya condenadas que también lo hicieron. Insistió en que la participación de Juan Navarrete no es

fundamental, es más bien útil, pero bajo ninguna circunstancia era alguien crucial dentro del objeto de este juicio.

Puntualizó que Juan Navarrete no aportó de ninguna manera algún elemento determinante para que el objeto de esta estafa pudiera llevarse a cabo. Su presencia no fue ni determinante ni fundamental. Se le intenta dejar como uno de los cabecillas, como un brazo operativo, pero lo cierto es que Juan Navarrete sí tiene responsabilidad en estos hechos, pero no de la envergadura que se le intenta atribuir.

Hizo presente, además, que Juan Navarrete no fue parte de la investigación que partió en el año 2018. Por otra parte, el Servicio de Impuestos Internos aludió a que don Yerko Silva Toro en su segunda declaración prestada en juicio dejó en evidencia que tuvo que traspasar sus conocimientos, que primero fue a Edith, posteriormente a Tatiana y después a Juan Navarrete.

¿Y por qué se le intentó dar tanta relevancia en estos hechos a Juan Navarrete? Para poder encajarlo dentro del tipo penal y justificar la solicitud de pena del Ministerio Público. Pero lo cierto es que la relevancia de Juan Navarrete es menor y posterior al inicio de la investigación con la fiscalización del vehículo Mazda CX-9. Tan es así, que ni los mismos oficiales de caso tenían claridad de cuándo Juan Navarrete entró a participar en estos hechos, en efecto, Pedro Olivares mencionó que Juan Navarrete tuvo participación desde mediados del año 2020, Daniel La Regla lo sitúa desde 2019 hasta 2020. Además, se intentó abundar la participación de su representado con otros elementos externos a la misma causa, que si bien tienen relación, no van en el mismo sentido de la investigación. Indicó que se refería principalmente al Audi perteneciente al futbolista Javier Parragués, que fue latamente mencionado en este juicio, sin embargo, no fue posible probar por parte del Ministerio Público algún delito respecto de este vehículo, ya sea robo o receptación. Agregó que lo mismo ocurrió con el vehículo Hyundai H1, patente LPHC.22, que tuvo varios intentos de venta fallidos, para posteriormente desaparecer de la esfera de protección de esta organización y no se supo su destino ni paradero. Así las cosas, sostuvo que el Ministerio Público intentó encajar a su representado dentro de una jefatura o ejercer mandos en ella, financiarla, proveerle medios, y en función de esto solicitó una pena de cinco años y un día, ya que, de no ser así, la pena solicitada, eventualmente, en caso de que el tribunal considerase que existe una asociación ilícita, respecto de Juan Navarrete, en este caso en particular, es muy distinta.

Respecto del delito de receptación, don Juan Navarrete en su declaración respecto del vehículo Nissan Qashqai, patente LPHV.53, es bastante claro en que don David Millalén no tenía conocimiento de cuál era el origen de este vehículo, él asume su responsabilidad y va más allá, señalando que Millalén no tiene ninguna relación con los hechos investigados.

Respecto de otros vehículos, el Hyundai Tucson, patente LJPX.58, quedó establecido con la declaración de don Albano Silva Toro, prestada en juicio, que don Juan Navarrete no tuvo relación con él ni participó en su venta. Su única acción fue recibir el dinero una vez finalizada la venta. En este caso, si bien la víctima reconoció haberlo visto, Juan Navarrete no efectuó ningún tipo de engaño, por lo que, tampoco tiene

participación en el delito de estafa. Incluso don Albano, como ya lo señaló anteriormente, declaró en juicio, que Juan Navarrete no participó en la venta, sino que es él con Marcos Supanta, quienes entraron al Registro Civil, quienes entraron al banco, quien recibió el dinero fue don Albano, para posteriormente entregárselo a Juan Navarrete, por ello, su representado no fingió tener un nombre, no se atribuyó ningún poder o influencia o créditos supuestos, comisión o empresa o negociación imaginarios ni hizo valer cualquier otro engaño similar para poder obtener el resultado típico.

En relación con el vehículo Fiat Argo, don Juan Navarrete en estrados reconoció haberlo vendido, por lo que es un hecho no controvertido por esta defensa.

En función de lo solicitado por el Ministerio Público, no es posible tener por acreditado que este delito sea reiterado, ya que, la estafa y la receptación a criterio de esta defensa, forman un concurso medial donde la receptación es la etapa previa para el engaño, más no el fin particular. Sostuvo que hay un concurso medial, porque disponer de la cosa o haber participado en la venta de este vehículo, es una etapa necesaria para poder consumir la estafa, es decir, la receptación es necesaria para que pueda existir la estafa. Una acción constituye el medio necesario para la otra, por lo que no es posible juzgar estos delitos de manera independiente. Y sin la receptación no se pudo haber cometido engaño, eventualmente se podría estar dentro de un delito continuado, por la pluralidad de actos, homogeneidad delictiva y la conexión temporal.

Por último, expresó respecto del delito de apertura de giro con antecedentes falsos del artículo 97, número 23 del Código Tributario, en relación con el artículo 351 del CPP, lo único que se pudo demostrar es que Juan Navarrete pagó una firma electrónica avanzada en notaría.

Concluyó que ni el Ministerio Público ni el Servicio de Impuestos Internos han podido demostrar, más allá de toda duda razonable y bajo ninguna circunstancia, que los hechos descritos en el tipo penal hayan ocurrido, por lo que, solicitó la absolución por este delito. Es el mismo Sebastián Martínez, que en su declaración señaló que todas las sociedades que se encargaba de constituir, las anotaba en una libreta o un cuaderno, como se pudo observar en el juicio, donde estaba anotada, entre otras, la Automotora Bilbao y además tenía la documentación de ésta. Por lo que, el simple conocimiento de algún hecho no es constitutivo de delito ni la simple tenencia de facturas lo hace culpable del delito indicado.

En la réplica, el defensor de Juan Navarrete reiteró que se intentó endosar a su representado mayor responsabilidad de la que tiene. En este mismo sentido, Freddy Miranda también lo responsabiliza porque su intención era perjudicarlo con el fin de eludir su responsabilidad. Lo mismo ocurre con Claudia Sandoval. Se mencionó a Marcos Supanta, pero éste en su declaración dijo que fue él quien se acercó a Juan Navarrete ya que estaba escaso de dinero, su representado no lo reclutó.

Manifestó que se le intentó imputar un delito tributario a Juan Navarrete solo por el hecho de que en la camioneta Nissan Qashqai, que efectivamente estuvo en la esfera de resguardo de Juan Navarrete, se encontró cierta documentación, pero esto no quiere decir que solamente él haya utilizado dicha camioneta y

no se pudo establecer, si alguna otra persona relacionada a esta supuesta organización haya podido tener acceso al vehículo. Además, a su juicio, por el simple hecho de que la escritura de constitución de la sociedad haya estado en el maletero, no es posible atribuirle responsabilidad a su representado respecto del delito tributario, tampoco respecto de las otras empresas, como por ejemplo Soliste, por el hecho de haber pagado alguna firma a un notario, cuestión que lo podría haber hecho cualquier persona, no es necesario incluso tener una relación con la sociedad para poder hacer el pago, porque el delito tributario dice relación con proporcionar datos o antecedentes falsos en la declaración inicial de actividad con el objeto de obtener autorización de documentación tributaria.

En el alegato de clausura, el defensor de DAVID MILLALÉN LLANCAO, expuso que ninguna información se ha podido verter en este juicio respecto de la participación de don David Millalén en los delitos de asociación ilícita y receptación. Distinto es el tema de las armas, delito en que don David Millalén asumió su responsabilidad una vez que prestó declaración en el juicio.

Respecto de la asociación ilícita y los demás delitos que se le están imputando, indicó no existe ninguna escucha telefónica ni audio de whatsapp, no existe ningún elemento que pueda vincular a David Millalén a esta investigación. El único error de éste fue haber aceptado un vehículo ajeno del cual no tenía conocimiento de su origen, lo que don Juan Navarrete dejó bastante claro en su declaración, que le pidió un favor de poder mostrarle el vehículo a alguien, no como se mencionó finalmente por parte del último oficial de caso que su representado iba a vender un vehículo. Por lo que, respecto de los delitos de asociación ilícita y de receptación, solicitó que a don David Millalén se le absuelva.

Replicando la Defensa del acusado Millalén Llancao, indicó que lo único que lo vincula a esta situación es la Nissan Qashqai y otra mención al nombre de David. En relación con su declaración judicial, señaló que su relato de cómo ocurrieron las cosas, que es a él quien se le prestó el vehículo a cambio de otro favor, para que lo exhibiera a un tercero, para que pudiera comprar los repuestos que necesitaba para su vehículo; no ha sido controvertido ni siquiera por los funcionarios de la Policía de Investigaciones. La camioneta, tal como dice David Millalén en su declaración, fue fiscalizada en una bomba de bencina del barrio Brasil, la cual está ubicada específicamente en Avenida Brasil con Agustinas. Ahora bien, respecto del audio WA0307 del 23 de enero de 2020, donde Yerko Silva dice que el vehículo lo va a mostrar el primo de la un tercero, queriendo el Ministerio Público dar a entender que detrás de esto, su representado tenía conocimiento de las estafas que se estaban realizando con estos vehículos. En circunstancias, que el vehículo a simple vista era un vehículo normal, que no tenía alguna apariencia de haber sido forzado o adulterado. Finalmente se intenta vincular a David Millalén porque solo en una escucha, se menciona el nombre de David. Envíe al David a lavar la camioneta. El mismo inspector Fernando Vázquez dice que se trata de David Millalén, porque es el mismo nombre, pero al ser consultado por este defensor de si existe algún otro elemento o diligencia investigativa que permita saber que efectivamente se refiere a David Millalén, la respuesta de don Fernando Vázquez es clara e inequívoca, que no se pudo corroborar. Por ello, sostuvo

que no se puede condenar a David Millalén por el delito de asociación ilícita y receptación solo con estos dos hechos ya descritos anteriormente.

La Defensa de Germán Duarte Pereira, en su alegato de clausura, en primer lugar, se refirió específicamente a los dos vehículos que se le imputan a su representado, el Mazda CX5 y el Kía Sportage.

Indicó que no se acreditó que el Sr. Duarte haya solicitado o inscrito a su nombre ningún vehículo. Además, acompañó los documentos que acreditaron las compras de los dos vehículos señalados, los autofact que solicitó antes de ellas, las conversaciones de las tratativas para las compras. Es más, la misma prueba documental que rindió en este juicio y los testimonios fue aportada a Fiscalía hace más de 3 años.

Hizo hincapié que los acusados no lo conocen, Yerko indicó que se recuerda del nombre porque por correo hizo ofertas por vehículos y que al comprar los vehículos era imposible determinar que estaba adulterado.

Con respecto al comprador Ricardo Zepeda Trigo, que habría reconocido a Tatiana Arana, señaló que se le exhibió en una foto, habiendo transcurrido 4 meses, y con una foto de rostro en blanco y negro.

Con respecto a una supuesta estafa, su representado no conocía el origen ilícito de los vehículos por lo que tampoco concurre engaño. Aseveró que era una víctima, sometido a 4 años de medidas cautelares y a un juicio de seis meses.

Además, en cuanto al delito de asociación ilícita, manifestó que la prueba presentada no es congruente con la acusación, su representado no es mencionado en ninguna de las escuchas y audios, los coimputados indicaron que no lo conocían, no hay transferencias ni depósitos con los supuestos miembros de la organización o de los investigados.

En la réplica reiteró los mismos argumentos.

El defensor de los acusados CAROLINA CORNEJO ARRIAGADA y VICTOR QUEZADA BRAVO, en sus alegatos finales, sostuvo la total inocencia de sus representados, en su momento la Fiscalía desestimó considerarlos parte de la asociación ilícita, lo que también algo dice respecto del dolo y otras cuestiones que va a explicar más adelante. Para ser condenados por lavado de activos lo primero que se necesita son bienes, servicios, en este caso, dineros, que se puedan tasar, desde la producción de un delito específico hasta su eventual aprovechamiento por parte de los acusados. Sin embargo, aseveró que no hay ninguna suma de dinero proveniente de delitos específicos que haya sido entregada y haya terminado en poder de don Víctor Quezada y doña Carolina Cornejo. Añadió que en el juicio se habló mucho de vehículos con patentes falsificadas, de cuál de estos vehículos se obtuvieron, por ejemplo, 5 millones de pesos que se los traspasaron al señor Albano, por ejemplo, y que posteriormente el señor Albano los trasladó y fueron administrados por doña Carolina.

Se preguntó el defensor, ¿De cuál de estos delitos? ¿Hay alguno del que podamos decir en estos seis meses de investigación que pasó eso? Puntualizó que tiene que haber certeza de estas cuestiones, ya

que el artículo 27 letra B, exige específicamente conocimiento del delito respecto del cual se están aprovechando los recursos. Y eso acá no existe, no hay absolutamente nada respecto a esto. Pero ¿cómo se vincula a sus representados con estos hechos? Efectivamente doña Carolina trabajó en un restaurante como administradora, no como contadora, de nombre Alto Machu Picchu, en el año 2017 hasta mayo del año 2018. Y a partir de ahí la Fiscalía señaló que prestó las cuentas y que junto con el señor Albano aparentemente empezaron a mover dineros. Y hasta ahí llegó, porque no se sabe, cómo se llega de los dineros de Albano, por lo menos en esa época, dineros de esta asociación ilícita, ¿cómo habría obtenido dinero? Que posteriormente trasladó al restaurante. No hay ninguna trazabilidad del dinero. Pero, además, no solamente no hay trazabilidad sino que hay problemas de falta de prueba en general respecto de sus representados.

Manifestó que lo mismo que otros imputados, nadie los conoce, don Yerko tiene algún conocimiento muy general de ellos, que doña Carolina trabajaba con su hermano. No figuran en ninguna escucha telefónica. O sea, nadie dice, “oye, no te preocupes, está la Carolina en el restaurante, con ella solucionamos el tema de la plata”. No están en ningún correo electrónico. Se incautaron incluso los computadores de sus representados y sus teléfonos y no se encontró ninguna conversación de verdad incriminatoria respecto de ellos.

La Fiscalía hizo mucho hincapié en una conversación por Telegram donde destaca una frase “no seas ingenua”, le dice don Víctor a doña Carolina y esa frase se produce luego que doña Carolina le dice algo así como, oye, el que nada hace, nada teme.

Pero esta falta de prueba en general, arguyó el defensor, además, aterriza en una cuestión que es necesario probar, aunque sea un ánimo interno, que es el dolo.

En este caso, porque hay una exigencia del propio tipo, que es el conocimiento de los delitos, e insistió en que no hay un solo medio de prueba, en seis meses de juicio que dé un indicio de cómo sus representados podrían haberse enterado de que se estaban haciendo estafas, que se estaban clonando vehículos, y que de ahí se estaban ocupado las cuentas de Alto Machu Picchu.

Entonces, la Fiscalía señaló que Machu Picchu era una empresa de fachada, sin embargo, desde ya parece que el Servicio de Impuestos Internos no comparte esos dichos, porque a propósito de documentación falsa, se querelló por 16 empresas de fachada y no incluyó a Alto Machu Picchu o bien no hay ningún documento de Alto Machu Picchu que haya sido cuestionado por ser una factura falsa, por ejemplo.

Hizo presente que se incautó un computador que se mostró en el juicio exhibiéndose, entre otras cosas, por ejemplo en el año 2018, con 20 trabajadores. Esta es la primera empresa de fachada que tiene 20 trabajadores y que se encuentra documentación de ese año, como listas de proveedores, planillas Excel de pagos a proveedores.

Dijo también la Fiscalía en el alegato de clausura, que doña Carolina en realidad lo que tenía era una apariencia de relación laboral con Alto Machu Picchu, pero nunca se explicó por qué ella habría empezado supuestamente a colaborar con este lavado de activos.

Por otra parte, sostuvo el defensor que se cuestionó mucho las numerosas transferencias que había entre cuentas relacionadas con Albano y con la sociedad de Alto Machu Picchu y las cuentas de doña Carolina y don Víctor, pero doña Carolina explicó que ella era la administradora de Alto Machu Picchu y evidentemente don Albano no era una persona muy ordenada, por lo tanto, muchas veces había problemas de flujo de caja, concepto que le costó mucho entender a la Fiscalía, y pagaba pero ¿cómo pagaba? Evidentemente porque era más ordenado y ella era contadora auditora, entonces, trasladaba dinero a las cuentas de Alto Machu Picchu y de ahí se pagaba, y después eso se devolvía, y eso generaba un flujo, y además muchas veces ella pagaba, por lo que, se trasladaba dinero de Alto Machu Picchu a sus cuentas para que a su vez ella pagara a proveedores. Pues bien, esa es una explicación razonable, plausible y que además es absolutamente concordante con la lógica de estas transferencias, que se hacían varias veces en el mes, algunas de cantidades bien pequeñas, otras de cantidades altas, que da cuenta de un flujo bastante inestable propio de la administración del local comercial. Advirtió que había una transferencia de 15 mil pesos, que según se indicó podría ser incluso una vez que ella compró una botella de pisco sour, todo ese tipo de cosas la verdad que la Fiscalía ni siquiera hizo un esfuerzo por investigarlas.

Ahora bien, otros puntos que desea destacar a propósito también de que era un trabajo real, que tenía un movimiento real, hizo presente que declaró don Felipe Meriño, presentado por la Fiscalía, quien logró contactar por lo menos a tres trabajadores de Alto Machu Picchu, quienes reconocieron a doña Carolina como la administradora del negocio. Además, se mencionó por un oficial de apellido Forero, la declaración de doña Claudia Sandoval, que le relató que el negocio cambió de alguna manera cuando quebró Alto Machu Picchu.

Además, se hizo una investigación patrimonial respecto de sus representados absolutamente básica, ya que se revisaron en determinados periodos cortados, ingresos y egresos de cuentas bancarias, pero no se investigó qué otros negocios trataron de emprender, ya que se trata de un oficial de la Policía de Investigaciones con más de 15 años y de una contadora auditora, evidentemente tienen una vida comercial más amplia, incluso, señaló el persecutor que don Víctor realizó una serie de transferencias pese a que doña Carolina explicó que ella era quien manejaba las cuentas de don Víctor. Afirmó el defensor que aquello es bastante normal y bastante razonable, si se tiene en cuenta que es un policía, que pasaba el día en la calle investigando y su mujer, madre de dos hijos, es contadora auditora.

Pero además su representada declaró ante la Fiscalía en febrero de 2022, señalando lo mismo y la Fiscalía no realizó ninguna diligencia para comprobar la veracidad de sus dichos. Podrían haber conversado con los policías que trabajan en el cibercrimen, que ocupan las mismas técnicas que se ocupan, por ejemplo, en pornografía infantil y les piden la información a los bancos, detecten las direcciones IP, hubiesen sabido así desde dónde se hacen las transferencias.

Aseveró que su representado estaba en un curso en el extranjero y aparece haciendo cuatro traspasos ese día. Eso no lo podía hacer la defensa, lo tendría que haber hecho el Ministerio Público. Podrían haber conversado con los ejecutivos de cuentas para determinar ¿quién se relacionaba con ellos? ¿De quién tiene correos a propósito de estas cuentas? ¿Quién vino al banco a preguntar por estas cuentas? Eso también es una diligencia que era básica.

Por otra parte, se levantó contra don Víctor el hecho de que habría realizado consultas a algunas personas, especialmente a don Albano, pero estas consultas se realizaron antes de que empezaran los hechos relativos a estos delitos. No tienen ninguna relación con un supuesto lavado de activos. Ahora bien, lo que más extraña es que se le realizan 5 o 6 consultas a una persona que es el jefe de su señora. Probablemente hay alguna infracción de tipo administrativo, pero esto es tan común, que incluso la Policía de Investigaciones lo ha regulado, ya que la orden general 2828 del 12 de enero de 2024 de la Policía de Investigaciones de Chile, permite expresamente las consultas a terceros cuando han contratado con un funcionario policial. De manera tal, que no parece ser una cuestión que sea claramente indicativa de nada. Y es más, el registro que don Víctor revisó es un registro que solamente permitía ver si una persona tenía orden de detención. Además, como lo señaló don Felipe Meriño, existían otros registros, relativos a una persona investigada que forma parte de una organización, y don Víctor no consultó ninguno de ellos de manera tal que a partir de esas consultas no se tiene ningún elemento adicional.

Por último, concluyó que no se tiene movimientos de flujos de dinero tasables y hay huecos gigantes en la investigación, se cuenta con una explicación absolutamente razonable, plausible, para los movimientos de dinero que se están invocando y que el Ministerio Público no se tomó la molestia de investigar, y finalmente una falta de prueba absoluta de un elemento tan importante como es el dolo ¿Cómo iban a saber doña Carolina Cornejo y don Víctor Quezada de estas supuestas actividades paralelas, en que la inmensa mayoría de ellas ocurre después de que termina el vínculo entre ella y Alto Machu Picchu. No se entregó una pista siquiera en el juicio. Por eso, estimó que existe una duda razonable gigante pues solo hay inferencias que no dicen relación alguna con el resto de la prueba y que se basan en una mirada absolutamente sesgada, en una visión de túnel, que no dio para investigar las otras múltiples posibilidades que había, todas las cuales razonables y debiesen ser consideradas.

En la réplica, el defensor de Carolina Cornejo y Víctor Quezada, precisó que forma parte de su teoría del caso, el hecho que por más que la cuenta haya sido del titular don Víctor Quezada, quien realizaba y quien administraba la cuenta era doña Carolina. ¿Y qué responde la fiscalía al respecto? Que no interesa quién realizaba las transferencias, porque el titular de la cuenta era Víctor Quezada. Entonces, reflexionó que si a la Fiscalía no le interesa quién realizaba materialmente las transferencias, que es quien tiene el dominio del hecho, por lo tanto quien tomaba decisiones respecto a ellas, entonces, se aparta del derecho penal.

Insistió en que invocó como argumento la falta de trazabilidad del dinero, es decir, que las transferencias que realizó doña Carolina no hay forma de relacionarlas con dinero supuestamente obtenido

en estos actos, de los cuales evidentemente ella no formaba parte. La Fiscalía lo reconoció y señaló que en realidad nunca hay trazabilidad completa, que por algo es lavado de activos, y que se puede llegar a determinarlo mediante indicios.

Enfatizó el defensor que todavía está esperando cuáles son esos indicios. Se intenta algo diciendo que Alto Machu Picchu tenía problemas, que aparentemente le iba mal y que cómo es posible que se mantuviera. Y eso se le trata de elevar al nivel de un indicio que permitiría suponer que hay inyección de dinero proveniente de estas clonaciones y estafas con vehículos. La verdad es que hay varios saltos lógicos en eso y los huecos están ahí y no son llenados por ninguna parte, porque además tampoco se realizaron peritajes contables, levantamientos patrimoniales, para por lo menos reducir estos saltos lógicos. Y esto trae una complicación adicional, en su opinión, para la Fiscalía, que estas supuestas inferencias no son unívocas, no conducen unívocamente a un resultado. Pueden tener diversas explicaciones y de hecho son más plausibles las explicaciones de sus representados, entre otras cosas, porque son reales.

Por último, reiteró que más allá que ni siquiera está probado que fuera dinero ilícito, no hay ningún elemento de prueba que demuestre que a partir de ahí, doña Carolina y don Víctor, tenían que haber deducido que el dinero provenía de las clonaciones de vehículos y de estafas que se hacían con los vehículos. La Fiscalía solamente respondió que también está el tipo culposo del artículo 27, número 2, que exige negligencia inexcusable, y tampoco señaló cuál sería esa negligencia inexcusable en este caso.

OCTAVO: Antecedentes contextuales y definición del marco probatorio.

El Ministerio Público señaló en su acusación, con la adhesión en este punto de la querellante, que la asociación ilícita fue formada por los acusados desde al menos el año 2016, luego en las alegaciones de clausura, que lo fue al menos entre los años 2016 y 2020, período en el cual, crearon 16 empresas y compraron y vendieron a lo menos 211 vehículos, según se lee en la acusación; y en el alegato de apertura, el persecutor señaló que inscribieron más de 200 vehículos, de los cuales, al menos 100 fueron vendidos a terceros de buena fe, para culminar en el alegato de clausura, reduciendo el número a 80 vehículos vendidos.

Atendidas estas imprecisiones en aspectos relevantes como son los objetos materiales de los delitos fines de la asociación ilícita que, evidentemente, inciden en la pertinencia y utilidad de la actividad probatoria del Ministerio Público, se hace necesario un “rayado de cancha” previo por parte del tribunal, que defina y delimite desde una perspectiva temporal y cuantitativa, el objeto de la prueba rendida por la Fiscalía, que sea atingente a acreditar únicamente las premisas fácticas de los delitos imputados, contenidas en el libelo acusatorio.

El tribunal constató que el Ministerio Público incorporó medios probatorios, principalmente documentos, respecto de 239 vehículos, de los cuales la gran mayoría no fueron recuperados e incluso es probable que no hayan existido materialmente, y que la inscripción del vehículo haya respondido a otros fines, tales como, acrecentar patrimonio para obtener créditos en el sistema financiero, burlar limitaciones al

dominio que pudieran haber gravado al vehículo, defraudar a las compañías de seguro dando por perdido un automóvil que nunca existió, así como también para aumentar los números de las facturas emitidas por las empresas falsas. Lo anterior quedó en evidencia conforme a la declaración de los acusados Yerko Silva e Ilich Chopa, ratificado por los oficiales de caso de la PDI.

El acusado Yerko Silva señaló en juicio que la Fiscalía le estaba imputando 211 vehículos, pero aclaró que algunos no existieron, porque eran de prueba para ver si la empresa estaba operativa. A su vez, Ilich Chopa, dijo que las facturas las vendía no solo a Yerko, también a otras personas, y que las vendía con las patentes y el permiso de circulación. Añadió que junto a Camilo Sandoval facturaron un vehículo de marca Volvo como nuevo y lo aseguraron, pero el vehículo Volvo nunca existió y luego dieron aviso por robo. También dijo que le compraba facturas a Franco Cruz, y se convirtió en una especie de asesor financiero, levantaba personas naturales y empresas para generar créditos de consumo o leasing, para que las personas aparecieran con más patrimonio ante el banco. Puntualizó que había muchas patentes inscritas que no correspondían a automóviles reales, pues se trataba sólo de documentación, la que se obtenía con la finalidad de generar estados de situación nuevos para terceros para efectos bancarios.

En su declaración, el comisario Pedro Olivares, corroboró estos dichos y explicó que no todos los vehículos fueron ubicados, porque no tuvieron más transferencias, ya que monitoreaban en la base del Registro de Vehículos Motorizados del Registro Civil, si estos habían sido transferidos y así poder ubicar a la víctima estafada. Afirmó además que conforme a varias declaraciones que se tomaron posteriores a la detención y, también por información que tenían como grupo investigativo, tomaron conocimiento que se utilizaban facturas para acrecentar patrimonio a ciertas personas, ya que al contar con vehículos se hacía más fácil la tramitación de un crédito bancario y que la venta de IVA era otra forma de defraudar al sistema.

El comisario Álvaro Pino, por su parte, en sintonía con lo anterior y también confirmando lo declarado por los acusados, indicó que no se logró incautar la totalidad de los vehículos que estaban inscritos, ya que había vehículos que nunca circularon; ya que estos sujetos usaban las facturas ideológicamente falsas para obtener las placas patentes, y si no podían obtener el vehículo se quedaban con ellas (refiriéndose a que se encargaba el robo de ciertos vehículos, después de la inscripción y obtención de las placas patentes). Acotó que simplemente algunos vehículos a la fecha no han sido encontrados. Explicó, también, que había vehículos “recuperables” ya que tenían un segundo dueño o habían sido vendidos, y con eso podían determinar que efectivamente el vehículo en cuestión existía. Pero solamente con la placa patente no podían determinar si el auto existía o no, ya que tenían solo un primer propietario y era probable que no contaran con un vehículo sustraído al que colocarle las placas patentes, ya que no podía ser cualquiera sino que coincidiera con las mismas características de marca, modelo, año, color, etc.

En resumen, el testigo Pino, señaló que en la planilla Excel que confeccionaron para ordenar la información que arrojaba la investigación, los vehículos que estaban en color blanco correspondían a los que no se recuperaron, pues era probable que nunca hayan sido vendidos o nunca hayan existido, ya sea porque

los sujetos no encontraron un vehículo con las mismas características, ya sea porque se inscribieron vehículos con el único fin de hacer la denuncia por robo para cobrar el seguro. Preciso que tales hipótesis se levantan conforme a la expertiz del equipo investigador.

Por otro lado, también el persecutor rindió prueba respecto de vehículos cuya transferencia se realizó con posterioridad a la fecha de desarticulación de la asociación ilícita del presente juicio, esto es, el 16 de octubre de 2020, fecha en que se ejecutaron las órdenes de detención, entrada y registro de los miembros de la asociación, lo que marcó evidentemente el término de la organización y el cese de sus operaciones, en consecuencia, aquellos vehículos vendidos con posterioridad a tal fecha, que tampoco se aclaró si fueron o no recuperados, no serán tomados en cuenta para efectos probatorios.

En ese orden de ideas, es menester descartar aquellos vehículos respecto de los cuales se rindió prueba en exceso por parte del Ministerio Público, porque excedió los márgenes temporales y del objeto material de los delitos fines contenidos en la acusación, como ya se señaló, y centrar el análisis y valoración de los medios de prueba aportados en juicio a los vehículos que fueron recuperados.

De manera tal, que el tribunal pueda abocarse a lo pertinente, que no es otra cosa que determinar si se acreditaron con el estándar legal exigido los elementos del tipo de los delitos materia de la acusación, principalmente, los de asociación ilícita, receptación de vehículo motorizado y estafa.

En ese sentido, el tribunal ha considerado impertinentes e inútiles los abundantes medios de prueba rendidos que se refieren a vehículos no hallados y que se ignora si efectivamente existieron, a la luz de los hechos ilícitos imputados que deben ser objeto de la prueba y, por ende, todos ellos serán desestimados. Sin perjuicio que los mismos hayan servido como elementos de contexto para ilustrar al tribunal acerca de la actividad o giro usado por la asociación para generar ilícitos, desde la perspectiva de la utilización de las empresas y facturas falsas y la forma en que operaban con ellas.

En esta condición se encuentra la siguiente prueba que se enunciará, con la misma numeración ofrecida en el auto de apertura, y asociada a la placa patente respectiva:

1) JHHR.66, documento 170 letra a); 2) JGYD.61, documento 520; 3) GKWB.15, documento 170 letra h); 4) JRSR.26, otro medio de prueba 40 y documento 170 letra k); 5) JRSS.55, otro medio de prueba 40 y documento 170 letra l); 6) JTGR-48, otro medio de prueba 40 y documentos 523 y 212; 7) JRZY.69, otro medio de prueba 40 y documento 173 letra a); 8) KBKR.44, documento 564; 9) JRZZ.79, documento 545; 10) HSG.054, documento 550; 11) GKWP.22, documento 541; 12) GKWP.23, documento 542; 13) HYZD.81, documento 537; 14) KCPT.20, documento 538; 15) KHSW.68, documento 547; 16) HYDG.38, documento 540; 17) KJPX.90, documento 543; 18) KHKY.11, documento 534; 19) GYKK.86, documento 536; 20) KHPB.88, documento 535; 21) KHSW.94, documento 549; 22) KJST.23, documento 552; 23) KHSW.93, documento 548; 24) KHSW.99, documento 568; 25) KGFC.20, documento 555; 26) KLJK.76, documentos 92, 92.2 y 98; 27) KLJK.79, documentos 91, 91.2 y 97; 28) KPGW.13, documentos 90 y 96; 29) KPFT.54,

documento 572; 30) KCPT.36, documentos 86.9, 86.11 y 95; 31) KPFR.79, documento 571; 32) KHSD.85, documento 570; 33) KPYJ.33, documento 805; 34) HYDG-48, documento 861; 35) KPTT-73, documento 857; 36) KRWC.10, documento 862; 37) KKTR.11, documento 797; 38) KPSD.13, documento 802; 39) KPSD.14, documento 803; 40) KLJL-40, documento 858; 41) KRKD.59, documento 864; 42) KKTR.44, documento 800; 43) KKWC-35, documento 793; 44) KSWY.32, documento 744; 45) KRWC.17, documento 741; 46) KTXK.84, documento 743; 47) KTZB.43, documento 848.1; 48) KTZB.44, documento 848.2; 49) KSSC.67, documento 747; 50) KRWC.53, documento 746; 51) KVLB.29, documento 748, 52) KTVV.28, documento 484.3; 53) KXHV.23, documento 726; 54) JCYK.86, documento 736; 55) KRWC.37, documento 745; 56) KXSG.95, documento 687; 57) KWVF.69, documento 704; 58) KYBZ.61, documento 739; 59) KRWC.39, documento 742; 60) KPYL.49, documento 695; 61) KXHK.17, documento 730; 62) JKXX.64, documento 731; 63) KRWC.41, documento 699; 64) KRWC.52, documento 729; 65) JCYK.95, documentos 734 y 851.3; 66) KTFG.93, documento 740; 67) KTFG.97, documento 749; 68) GWZD.31, documento 737; 69) JCYK.94, documentos 735 y 851.2; 70) KRWC.51, documento 727; 71) KRWC.50, documento 728; 72) JCDJ.56, documento 732; 73) JPTP.98, documento 733; 74) KYDX.56, documento 738; 75) KXST.97, documento 720; 76) LBCV.61, documento 712; 77) KZZR.17, documento 713; 78) LBCX.22, documento 716; 79) LCXJ.40, documento 724; 80) LCFR.41, documentos 715, 225 y 238; 81) HCHC.21, documento 686; 82) LCXS.80, documentos 703, 225 y 240; 83) LDLS.25, documentos 709, 225 y 242; 84) LBVX.82, documento 780; 85) LDLS.13, documentos 782 y 856.4; 86) LFVW-14, documentos 228 y 730; 87) LFVW-16, documentos 230 y 676; 88) LDLS.15, documentos 702 y 225; 89) LGHS.14, documento 665; 90) KTXP.57, documento 708; 91) LCXW.22, documento 707; 92) LBVX.85, documentos 784 y 856.1; 93) LJTK.43, documentos 785 y 856.2; 94) LKKL-67, documentos 8, 9, 509, 788 y evidencia material 262; 95) LJJD.43, documento 787; 96) LFZS.17, documento 723; 97) LPKZ.19, documento 774, 98) HCHC.40, documento 855.1; 99) LPSW.31, documento 855.4; 100) LXJY.28, documentos 792 y 416, otros medio de prueba 156.4; 101) LBVY.80, documentos 768 y 854; 102) LPHC.80, documentos 772 y 424; 103) LTJV.81, documentos 1004 y 24.3; 104) LVFY.80, documentos 1006 y 24.3; 105) LSBF.24, documentos 998 y 24.3; 106) LJVD.54, documentos 1003 y 24.3; 107) LTJV.87, documentos 999 y 24.3; 108) LXFR.78, documentos 1002 y 24.3; 109) LXCB.61, documentos 1007 y 24.3; 110) LXFR.60, documentos 846, 997 y 24.3; 111) LVFZ.69, documentos 1008 y 24.3; 112) LXCD.80, documentos 1001 y 24.3; 113) LXCD.14, documentos 1005 y 24.3; 114) LXFR.82, documentos 1000 y 24.3; 115) LVHZ.96, documentos 847.4 y 996; 116) LXCS.51, documentos 847 y 995; 117) LXFS.20, otros medios de prueba 59 y 63 y evidencia material 59; 118) LXFS.16, documento 847.1; 119) GYKL.45, documentos 847.3; 120) LCXW.20, documento 764; 121) LPSW.53, documento 414; 122) LPSW.24, documentos 415; 123) LJVD.19, documentos 957; 124) LJVD.24, documentos 958; 125) LPSW.43, documentos 430; y 126) KTFG.98, documento 994.

I.- CON RESPECTO AL DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA.

NOVENO: Análisis de los elementos del tipo penal.

Que como se ha visto en los alegatos de inicio y de clausura de las defensas, la existencia de una asociación ilícita, constituyó el principal asunto controvertido del juicio, desde que tanto los acusados que declararon y todos los defensores, negaron que se haya formado una organización de la cual formaran parte, que reuniera los requisitos legales y doctrinarios para considerarla asociación ilícita.

En síntesis, los defensores plantearon que en la especie se daba una coautoría entre una pluralidad de personas ejecutando un plan delictivo, pero que no alcanzaba a configurar una asociación ilícita, pues no existió distribución de funciones, una cierta jerarquización, empleo de medios materiales y una continuidad del plan criminal.

Negaron la organización como un cuerpo colectivo porque más allá de vínculos familiares, no existió un “*afectio societatis*” o sentido de pertenencia, entendido como la directa intención de los miembros de la asociación de pertenecer a ella para cometer sus fines ilícitos. No se observó la voluntad de permanecer en el tiempo de todos los integrantes, porque no se conocían o no había vínculos entre ellos. No existía una jefatura, Yerko Silva no era jefe o líder, prueba de ello es que el acusado Camilo Sandoval, Tatiana Arana y Freddy Miranda se separaron de Yerko, actuando de forma autónoma y por cuenta propia. No había órdenes ni instrucciones, sino que indicaciones y enseñanzas acerca de una determinada gestión o trámite. Tampoco era de carácter permanente, ya que quienes comenzaron ayudando a Yerko Silva, como Camilo Sandoval y Tatiana Arana, se disgregaron y siguieron su propio camino. No había distribución de funciones porque Yerko Silva hacía de todo dentro de las actividades del plan delictivo.

En el caso de Ilich Chopa, su defensora acotó que las actuaciones de su representado fueron aisladas y distantes en el tiempo y no obedecieron a actuaciones ejecutadas en el marco de una asociación, en la cual debiera acatar órdenes y respetar el mando o jerarquía de Yerko Silva.

En el mismo sentido, el defensor de Camilo Sandoval aseguró que su representado no recibió ningún tipo de orden o instrucción por parte del supuesto jefe Yerko Silva. Tampoco existió permanencia en el tiempo, ya que habría intervenido en ciertas ventas de vehículos, en tiempos absolutamente desconectados, las no dicen relación con esta supuesta organización.

Así las cosas, para dilucidar la controversia planteada, es relevante analizar los elementos típicos del delito de asociación ilícita, previsto y sancionado en los artículos 292 y siguientes del Código Penal, vigentes a la fecha de ocurrencia de los hechos.

Para ello, como primera cuestión, ha de señalarse que la Ley 21.577, publicada en el Diario Oficial el 15 de junio de 2023, introdujo modificaciones al tipo penal, entre otras, en el sentido de diferenciar la denominación del delito entre asociación criminal y asociación delictiva en función de su objeto, si es cometer crímenes o simples delitos; y establecer expresamente los requisitos de la figura penal que se desprenden de la propia definición que dio el legislador. A saber, “se entenderá por asociación delictiva toda organización formada por tres o más personas, con acción sostenida en el tiempo, que tenga entre sus fines la

perpetración de simples delitos”. En los mismos términos, define a la asociación criminal, con la salvedad de que entre sus fines debe tener la perpetración de hechos constitutivos de crímenes.

El artículo 292 del Código Penal, vigente a la época de los hechos materia del juicio, dispone que “toda asociación formada con el objeto de atentar contra el orden social, contra las buenas costumbres, contra las personas y propiedades, importa un delito que existe por el solo hecho de organizarse”. Esta disposición requiere, para establecer sus elementos, un primer análisis sobre el bien jurídico protegido por el tipo penal. Sin perjuicio que la actual normativa ya indicada resulta claramente orientativa para dicha labor.

Una tesis tradicional, expuesta por el profesor Grisolia -citando a Labatut y Bustos- plantea que el bien jurídico es distinto a aquellos protegidos en los delitos que cometa la asociación, y consistiría en **el ejercicio abusivo de la libertad de asociación** consagrada como garantía en el artículo 19 N°15 de la Constitución, a lo que se suma el **orden social del Estado**, dándole un carácter pluriofensivo. (Grisolia, Francisco, El Delito de Asociación Ilícita, en Revista Chilena de Derecho, Vol. 31 N°1, página 79 y 80).

En un sentido diverso, el jurista chileno José Luis Guzmán Dálbora siguiendo al experto español Antonio García-Pablos de Molina sostiene que “el objeto de la tutela en estos delitos es el propio **poder del Estado, su primacía en cuanto institución política y jurídica**; comprometida por el mero hecho de la existencia de otra institución –la asociación criminal- con fines antitéticos a los suyos, que le discute esa hegemonía o monopolio del orden jurídico y político”, añadiendo que “la asociación criminal, contemplada desde la totalidad del ordenamiento jurídico, es algo más –algo distinto- que la mera suma de personas físicas que persiguen ciertos objetivos: **es una institución, una realidad viva**, por lo que es lógico colegir que titular del bien jurídico protegido es el propio Estado, guardián del orden social, que ostenta el monopolio del orden jurídico” (José Luis Guzmán Dálbora, Estudios y Defensas Penales, Editorial Lexis Nexis, páginas 13 y 14). Otra parte de la doctrina estima que el bien jurídico protegido sería el **orden público, siendo el conglomerado social en su conjunto**, y no el Estado, el sujeto pasivo del delito, pues la existencia de una asociación cuyo objetivo sea la comisión de delitos **afecta, por sí misma, a la tranquilidad pública, no solo porque el hecho del conocimiento de su existencia produce inquietud social, sino también por el peligro que implica para la preservación del orden social establecido y legalmente protegido**. (Creus: Derecho Penal, parte especial, tomo II, Astrea, segunda edición, Buenos Aires, 1988, página 106).

Estos dos últimos puntos de vista han sido citados expresamente por la Excm. Corte Suprema, en los fallos Roles 5.576-2007, 7.712-2008 y 2.596-2009, relevando la discusión sobre el punto.

Por otra parte, los artículos 292, 293 y 294 tratan la figura de la asociación ilícita como un delito de peligro que atenta contra el orden y la seguridad pública –de acuerdo al título en que se ubica-, distinguiendo para su sanción si el objeto de la asociación ha sido la perpetración de crímenes o simples delitos, como también si se trata de los jefes, los que hubieren ejercido mando en ella y sus provocadores (aquellos que proveen de estímulos importantes y serios para la comisión del delito), o bien, si se trata de cualesquiera otros individuos que hubieren tomado parte en la asociación y los que a sabiendas y voluntariamente le

hubieren suministrado medios e instrumentos para cometer los crímenes o simples delitos, alojamiento, escondite o lugar de reunión.

Que lo relacionado en los párrafos anteriores pone en evidencia que para que exista el delito de asociación ilícita contemplado en los artículos 292 y siguientes del código punitivo debe: 1º estar constituida por tres o más personas cuyas voluntades convergen para constituir un cuerpo organizado, con vocación de permanencia y estabilidad en el tiempo, bajo la coordinación de uno o más jefes, que reconozca al menos alguna mínima regla interna y distribución de roles o funciones dentro de la asociación; 2º finalidad de la asociación, en cuanto debe existir con un objeto delictivo, la comisión de crímenes o simples delitos; 3º la existencia o presencia de medios para el cumplimiento de las finalidades de la asociación.

Así podría sostenerse que, en términos abstractos, una aproximación al injusto de este delito se afincaría en que la suma de los aportes propios de la asociación favorece o genera una potencialidad o peligro mayor de atentar contra tantos bienes jurídicos como fines tenga la asociación, pudiendo describírsele entonces como un ente potencialmente creador de riesgo.

Sin embargo, “el injusto de la asociación ilícita no se presenta en modo alguno como un injusto dependiente de algún determinado hecho delictivo futuro a ser ejecutado por sus miembros. Ciertamente, lo que confiere carácter delictivo a la sola organización consiste en una **agenda delictiva, en el sentido de que el objeto mismo (o “giro”) de la asociación ha de ser la perpetración de hechos delictivos de determinadas características...**” (Mañalich, Juan Pablo, Organización Delictiva. Bases para su Elaboración Dogmática en el Derecho Penal Chileno, en Revista Chilena de Derecho, vol. 38 N°2, pp. 279-310 [2011] página 293 en específico), lo que se ve reforzado por la existencia de la regla del inciso 1º del artículo 294 bis del Código Penal, que separa las sanciones por la asociación ilícita de aquellas propias de las ilicitudes cometidas por la asociación.

Que desde este punto de vista y luego de haber analizado el bien jurídico protegido con dicho ilícito, así como también sus elementos, se puede colegir que la sola circunstancia de constatarse la existencia de un grupo de personas más o menos numeroso, que actúa planificadamente en la comisión de delitos que afectan bienes jurídicos singulares no autoriza a inculpar los hechos con la figura de asociación ilícita, porque tales actuaciones constituyen únicamente formas de coparticipación, tal como resalta la doctrina y jurisprudencia, siendo necesario que tal organización constituya un cuerpo organizado con sus jefes y reglas particulares, finalidades y medios.

Por último, **en cuanto al tipo subjetivo, se requiere la existencia de dolo**, es decir, la convergencia anímica en las finalidades perseguidas por la asociación y el conocimiento recíproco de formar parte de ésta, los sujetos deben reconocerse como miembros o parte de la misma organización. Particularmente el legislador distingue entre jefes y provocadores, de otros cualquiera que hayan tomado parte en la asociación o que hayan, a sabiendas –dolo directo- y voluntariamente, suministrado medios o instrumentos a la asociación, para cometer los delitos, lo que requiere probar la membresía estableciendo no

sólo la contribución causal con el otro, sino que también el conocimiento del carácter criminal de lo que hace la asociación.

DÉCIMO: Hechos que se dieron por acreditados y calificación jurídica.

El tribunal en el veredicto enunció los supuestos fácticos que los acusadores lograron probar, más allá de toda duda razonable, en los siguientes términos:

1.- Que los acusados **Yerko Silva Toro, Albano Silva Toro, Ilich Chopa Aldana, Camilo Sandoval Godoy y Juan Navarrete Vásquez**, se organizaron para desarrollar un sofisticado y lucrativo plan delictual consistente en vender vehículos producto de robos, la mayoría de ellos, con intimidación o violencia, conocidos popularmente como “portonazos” o “encerronas”, previa reinscripción como vehículos nuevos y sin uso en el Registro Civil, obteniendo nuevas placas patentes, utilizando para ello, facturas de empresas automotoras falsas o “de papel” en las que se modificaban los números de motor y chasis de los móviles, así como se adulteraban materialmente dichas series en sus estructuras, para hacerlas coincidir, proceso que conllevaba el “blanqueamiento” de su origen espurio dándole una apariencia de licitud. De esta manera, se ocultaba o disimulaba la verdadera identidad del móvil, con la finalidad de venderlo en el mercado automotriz formal, principalmente, en plataformas de internet o redes sociales dedicadas al rubro, estafando a terceros compradores de buena fe en montos superiores a 40 UTM.

2.- Que la organización formada por los acusados y otros integrantes, que ya fueron condenados, tenía por objeto la comisión de delitos de receptación de vehículos motorizados y estafas, los que fueron perpetrados de manera reiterada y sostenida en el tiempo, desde el mes de marzo del año 2017 hasta el 16 de octubre de 2020, fecha en que se ejecutaron las órdenes judiciales de entrada y registro a los domicilios de sus miembros y estos fueron detenidos.

Como se puede apreciar, el tribunal tuvo por acreditados los elementos de pluralidad de personas, ya que se trata de un numeroso grupo que supera con creces el mínimo exigido de 3 personas; el plan delictual y los objetivos comunes de la organización; y la permanencia y estabilidad en el tiempo de la misma.

3.- Que los acusados, dentro de las actividades de la asociación, tenían asignadas ciertas tareas y desplegaban diversas acciones en las distintas etapas del engranaje delictivo, a saber:

a) En primera instancia, existía una fase de carácter administrativo, vinculada a la creación de empresas automotoras falsas, en la plataforma del Ministerio de Economía “empresa en un día” y posterior iniciación de actividades ante el Servicio de Impuesto Internos y la emisión de facturas, así como, la inscripción de los vehículos robados como nuevos y sin uso, con dichos documentos tributarios, en las oficinas del Registro Civil donde se otorgaban nuevas placas patentes.

b) En segundo lugar, y paralelamente, se desarrollaba el proceso operativo, que implicaba la adquisición del vehículo producto de robo y su modificación o transformación física, a través de la

adulteración del vin o chasis y/o número de motor en su estructura y/o en los stickers o adhesivos con que las diferentes marcas registraban estas series identificatorias en lugares estratégicos.

Estas operaciones se verificaban al tiempo que se inscribía el vehículo con la factura que contenía los números adulterados coincidentes con los restampados físicamente, distintos a los reales, configurando así la nueva identidad del vehículo que se plasmaba en las placas patentes únicas que se obtenían, replicada en los documentos respectivos, vale decir, certificados de homologación de revisión técnica, permiso de circulación, seguro obligatorio de accidentes personales, padrón, etc.

c) Posteriormente, el móvil así “blanqueado” con apariencia de licitud era comercializado, mediante su publicación y oferta en el mercado automotriz formal, su exhibición a terceros interesados y eventuales compradores, vendido y entregado a personas, que de buena fe lo compraban y pagaban el precio generalmente en efectivo, por sumas que en todos los casos, al menos, superaban las 40 UTM.

d) Que en el contexto del proceso delictivo llevado a cabo por la asociación, específicamente, en la fase administrativa inicial descrita en la letra a) precedente, los acusados **Yerko Silva Toro y Juan Navarrete Vásquez** proporcionaron antecedentes y datos falsos al Servicio de Impuestos Internos en la iniciación de actividades de las empresas falsas que crearon utilizando testaferros o “palos blancos” como socios, con el fin de obtener autorización para documentación tributaria, puntualmente, facturas. Estas acciones las ejecutaron respecto de algunas de las sociedades automotoras “de papel” señaladas en la acusación y en distintos períodos de tiempo, así como también participaron en esta labor otros integrantes, a saber, Sebastián Martínez Zavala y Franco Cruz Iligaray.

En concreto, Yerko Silva y Juan Navarrete se involucraron en la creación de algunas de estas sociedades, poniendo a “palos blancos” que reclutaban como socios por un pago monetario, indicando domicilios inexistentes o que no correspondían, con aportes de capital falsos, y para el único fin de iniciar actividades y obtener facturas, lo que hacían a través de las plataformas de internet del Ministerio de Economía y del Servicio de Impuestos Internos abiertas al público.

e) Que la modificación de las series de chasis y/o de motor en los vehículos, la realizaba Aimel Gavilán Caro, que prestaba sus servicios especializados a la asociación como mecánico “tatuador”, quien también se encuentra condenado, y mantenía contacto directo con los acusados Yerko Silva Toro y Camilo Sandoval Godoy; y el encargado de confeccionar e imprimir los stickers o adhesivos con las series adulteradas era Roberto Bascur Arancibia, también condenado, a solicitud y conforme a las indicaciones del acusado Camilo Sandoval Godoy.

f) Que en la reinscripción fraudulenta de los vehículos robados y consecutiva exhibición y venta de estos a través de maniobras engañosas a compradores de buena fe, que eran estafados, participaban **Albano Silva Toro, Camilo Sandoval Godoy y Juan Navarrete Vásquez**, así como otros miembros de la organización que se encuentran actualmente condenados, como Edith Silva Sánchez y Freddy Miranda

Arana, además de Tatiana Arana Espinoza (fallecida), quienes, además, reclutaban testaferros o “palos blancos” para que figuraran como primeros adquirentes de los vehículos reinscritos y/o solicitantes de dicha inscripción, por un pago de sumas menores de dinero, entre otros, Luis Astudillo Peña, Jorge Salinas Uribe, Nelson Méndez Moya, José Alfredo Paredes Quevedo, José Raiman Cordero, Carlos Gómez Zúñiga, Marcos Supanta Aguilera, Jonathan Pérez Pérez y Leónidas Hernández Concha.

En lo que respecta a las ventas fraudulentas, también participaba **Ilich Chopa Aldana**, y todos aquellos que vendían los vehículos, recibían el dinero, por lo general, en efectivo y en algunas ocasiones en un vale vista o cheque que era cobrado en esa misma oportunidad, y excepcionalmente, mediante transferencia a alguna cuenta bancaria.

g) El dinero proveniente de las ventas era recibido, finalmente, por Yerko Silva Toro a través de cuentas de terceros, como su ex pareja Claudia Sandoval Godoy, su hermana y madre, Daniela Espinoza Toro y Jeannette Toro Brenet, o bien directamente en efectivo por Claudia Sandoval Godoy. Todas estas integrantes de la asociación actualmente condenadas.

En las letras anteriores, el tribunal dejó de manifiesto los roles y funciones o labores específicas y determinadas, constatadas en el quehacer delictivo de la asociación, en que les correspondía participar a los acusados y demás miembros.

4.- Que, la asociación contaba con una estructura organizada y con cierta jerarquización, particularmente, **funciones de jefatura y liderazgo** ejercidas por **Yerko Silva Toro**, quien dirigía y coordinaba la empresa delictiva desde las unidades penales en las que estuvo privado de libertad durante todo el período de su existencia. Mientras que Albano Silva Toro, Claudia Sandoval, Tatiana Arana, Freddy Miranda y el acusado Juan Navarrete, entre otros, formaban parte de su círculo de confianza, quienes actuaban bajo sus órdenes y directrices, le rendían cuentas de las labores y trámites realizados y, además, estaban enrolados en los penales y lo visitaban presencialmente de manera periódica.

En el caso de **Ilich Chopa Aldana y Camilo Sandoval Godoy**, se acreditó que mantenían contacto para desarrollar actividades del giro delictual de la asociación y cada uno de ellos con otros integrantes de la asociación para el mismo fin.

Además, **Ilich Chopa Aldana** jugó un papel fundamental en la génesis de la organización, ya que, conforme a los propios dichos de este y de Yerko Silva entregados en sus respectivas declaraciones, se habrían conocido en el penal Santiago 1 de esta ciudad, donde ambos estaban reclusos e Ilich Chopa le propuso a Yerko la idea del emprendimiento delictual y le enseñó el *modus operandi*, de manera que iniciaron juntos el negocio que devino en la asociación ilícita materia del presente juicio, en la medida que Yerko **aportó el capital** e Ilich los **conocimientos, experiencia y contactos**.

No obstante Yerko Silva Toro ejercer funciones de dirección y coordinación en la estructura de la organización, los acusados **Albano Silva Toro, Ilich Chopa Aldana, Camilo Sandoval Godoy y Juan**

Navarrete Vásquez, siendo personas cercanas y de confianza (por vínculos familiares, Albano Silva es su hermano, Camilo Sandoval era su cuñado en esa época, hermano de la ex pareja de Yerko, Claudia Sandoval; y por vínculos de amistad, ya que con Juan Navarrete fueron compañeros de estudios), entre otros integrantes, formaron parte de la **cúpula ejecutiva o estructura apical** de la asociación, ya sea de forma permanente desde sus inicios, en determinados períodos o con algunas intermitencias, en el entendido que una característica de las asociaciones ilícitas es su estabilidad y permanencia como organización en el tiempo en tanto que sus miembros pueden ir rotando dado su carácter fungible.

En efecto, los acusados nombrados ejercieron un rol preponderante en la organización criminal como quiera que desarrollaban imprescindibles y relevantes labores, ya que en términos generales, se encargaban de reclutar a testaferros por un pago, realizar con ellos trámites notariales o en el Registro Civil, en ocasiones, proveían de medios para guardar los vehículos, exhibirlos y venderlos, destacando la función de recibir los dineros de las ventas y distribuirlo conforme a las indicaciones de la jefatura.

En consecuencia, el carácter que tenían todos los acusados en la asociación, se encuadra en la hipótesis del inciso primero del artículo 293 del Código Penal, que se refiere a los jefes, los que hubieren ejercido mando en ella y sus provocadores.

En relación con la calificación jurídica de los hechos previamente relatados, la prueba de cargo permitió formar convicción en el tribunal de que se corresponden con el delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA, al concurrir todos los elementos de dicha figura, tipificada y sancionada en los artículos 292 y 293 inciso primero del código punitivo, vigente a la fecha comisión del ilícito, vale decir, en lo que concierne al presente caso: **a)** Organización formada por una pluralidad de personas, es decir, tres o más personas que constituyen un cuerpo o estructura organizada, bajo la coordinación de uno o más líderes y con al menos alguna mínima regla interna y distribución de roles o funciones dentro de ella; **b)** Su permanencia o estabilidad en el tiempo; **c)** La existencia o presencia de medios para el cumplimiento de las finalidades de la asociación; y **d)** Que tenga entre sus fines la comisión de hechos constitutivos de crímenes.

Particularmente, en lo que concierne a este último requisito, el tribunal estimó que se cumplía dado que, conforme al artículo 456 bis A inciso quinto del Código Penal, en los casos de reiteración en la receptación de vehículos motorizados, imperativamente debe aplicarse la pena privativa de libertad establecida en el inciso tercero, aumentada en un grado, vale decir, presidio mayor en su grado mínimo, siendo ésta la pena base en abstracto de los delitos de receptación reiterados cometidos con motivo u ocasión de la asociación. Dicho de otra forma, conforme a la regla legal citada, la receptación reiterada, atendida la conminación legal abstracta asociada a ella, constituye para estos efectos un crimen.

UNDÉCIMO: Valoración de la prueba rendida por el Ministerio Público.

I.- Marco temporal de la asociación ilícita.

Respecto de este tópico relacionado directamente con el elemento permanencia y estabilidad en el tiempo de la asociación, conforme a la prueba de cargo rendida y las declaraciones de los propios acusados, el período de existencia de la asociación ilícita quedó fijado entre el mes de diciembre de 2016 y el 16 de octubre de 2020, por las razones que se explicitarán a continuación.

Si bien el tribunal en su veredicto no se refirió expresamente a la fecha del principio de ejecución del delito de asociación ilícita, sí se estableció el hecho que dio origen a esta asociación, que tuvo lugar cuando Ilich Chopa y Yerko Silva se conocieron en el centro de detención preventiva Santiago 1, estando ambos privados de libertad e Ilich le enseñó a Yerko el negocio ilícito de la venta de vehículos robados y clonados, quedando en contactarse más adelante, fue así como, ambos señalaron que esto ocurrió en diciembre de 2016. Luego se pusieron en contacto en marzo de 2017, reinscribiéndose con una factura falsa el primer vehículo robado el 29 de marzo de 2017. Por ende, el primer hecho material directo ejecutado por la asociación tuvo lugar el **27 de diciembre de 2016, fecha de constitución de la empresa falsa “Compraventa de automóviles Orión Ltda.”**, conforme a la escritura incorporada como documento 275, por cuanto con una de sus facturas –la N°19 de la fecha ya señalada- se inscribió el vehículo marca Nissan, modelo Xtrail, de color gris, año 2017, con la nueva patente HFXX.32, fecha que corresponde al principio de ejecución precisamente del delito de asociación ilícita. Lo que concuerda, por lo demás, con el lugar – domicilio de dicha sociedad en la comuna de Recoleta- que fijó la competencia de este tribunal para conocer del juicio oral en la presente causa. La venta del primer vehículo individualizado fue reconocida por el acusado Yerko Silva, y corroborada la información por el oficial de caso Fernando Vásquez Guerra.

Fijado el período de existencia y funcionamiento de la asociación ilícita, el tribunal se hará cargo de la prueba aportada por los persecutores, con el fin de acreditar los hechos relatados en el considerando anterior y con ellos, los elementos típicos del delito en cuestión.

II.- Génesis y desarrollo de la investigación denominada policialmente “Industria del Portonazo”.

Principalmente, el Ministerio Público rindió prueba testimonial de los funcionarios de la Brigada de Robos (BIRO) Metropolitana Centro Norte de la PDI, Pedro Olivares Cuevas, Larry Caro Arroyo, Daniel La Regla Mella, Álvaro Pino Saavedra, Bastián Guzmán Retamales, Raquel Forero Villarroel, Inés Valentina Solans Roa, Felipe Andrés Arriagada Fuentes y Fernando Patricio Vásquez Guerra, quienes formaron parte de un equipo especial investigativo o fuerza de tarea, y que relataron en estrados la génesis de la investigación que posteriormente fue denominada “la industria del portonazo” y su desarrollo conforme a las diligencias que cada uno fue realizando. Además, con sus declaraciones el persecutor incorporó una gran cantidad de documentos recopilados, las evidencias levantadas, los progresivos de las interceptaciones telefónicas y el contenido de los celulares incautados durante el curso de la investigación. Así como también, fueron introducidas por ellos las declaraciones que tomaron o presenciaron de diversos testigos e imputados.

Refiriéndose a cómo se gestó la presente investigación, el comisario Pedro Olivares Cuevas, señaló que en la brigada se levantó un foco investigativo de venta de vehículos o fuerza de clonación de vehículos y se llevó a cabo una primera investigación que se denominó “operación Camaleón” en la Fiscalía occidente y, después comenzó la investigación de la “industria del portanazo”. Luego, en el año 2020 fue trasladado a la ciudad de Coronel, cuando esta investigación estaba en un 80% trabajada, pero siguió trabajando a distancia con el grupo que quedó en Santiago.

Explicó que en la investigación “operación Camaleón” fue el oficial de caso, ésta comenzó en año 2016 y culminó el año 2018, donde se lograron incautar más de 90 vehículos, en su mayoría de contrabando, con modificación de facturas de la Zona Franca, por ello concurren a corroborar esa información y se logró establecer el modus operandi, que correspondía a trasladar vehículos de contrabando con la falsificación de documentos pasavantes, o vehículos robados bajo la modalidad “portonazos” en la zona Metropolitana, y a esos vehículos le modificaban el número de motor y de chasis y los reinscribían con facturas falsas del norte del país.

En la investigación tenían 3 aristas: la primera, las transferencias de vehículos con poderes falsos, que posteriormente permitían la venta de los vehículos; la segunda, personas que vendían esos vehículos y falsificaban los documentos, permisos de circulación y deudas atrasadas, entonces, se trataba sólo del delito de falsificación y las penas asociadas no permitían medidas más intrusivas, sin embargo, el tema de la inscripción como vehículos nuevos y de la aduana y acreditar el robo con intimidación, permitió solicitar la medida intrusiva de interceptación telefónica y así establecer la jerarquía y nivel de permanencia en el tiempo de la banda; y la tercera arista, eran los vehículos que salían a remate, que los compraban y colocaban la documentación de vehículos siniestrados en vehículos robados.

Precisó que la investigación de la “operación Camaleón” finalizó en junio de 2018 con 35 personas detenidas y todos condenados por los diferentes delitos como estafa, falsificación, robo con intimidación o violencia.

Fue a así como, relató el testigo, la presente investigación comenzó a inicios del año 2018, cuando oficiales que pertenecían a esta fuerza de tarea, en el centro de Santiago, visualizaron un altercado entre personas que estaban en dos vehículos y, llamó la atención, la forma agresiva de hablar, entonces, decidieron intervenir y fiscalizar a **Edith Silva, Alan Lidid y Abelino Tapia**, que supuestamente era el padre de la mujer. Esta información fue corroborada y complementada por el comisario Larry Caro Arroyo, quien participó directamente en esta diligencia, y precisó que la fiscalización ocurrió en febrero del año 2018, en la intersección de calles Paris con Zenteno, cuando estaba realizando diligencias propias de la especialidad, junto con el comisario Álvaro Pino, el inspector Fernando Vásquez Guerra y el subprefecto Juan Leiva, observaron un vehículo que estaba obstaculizando el tránsito y se enfrascaron en una discusión con otras personas porque estaba mal estacionado. Continúo relatando, que al acercarse, Pino se percató que en la parte del parabrisas inferior donde va el número de Vin, se encontraba sin la numeración o no era la forma

adecuada, por ello, les causó sospecha que se podría tratar de un auto clonado, tampoco tenía el sello verde, por eso, le preguntaron al conductor por qué estaba detenido, éste se puso nervioso, dijo que no tenía licencia de conducir, que había acompañado a una mujer que estaba al lado, Edith, que resultó ser Edith Silva Sánchez, el conductor era Alan Lidid, y atrás iba Abelino Tapia Rosas.

Pedro Olivares al respecto, señaló que ya habían visto diversas formas de clonación de vehículos y, llamó la atención, que en el parabrisas de uno de los vehículos, un Mazda CX9, había una hendidura donde debía ir el número de chasis, además ya habían visto varias formas, algunas muy burdas y otras más especializadas, entonces se les solicitó concurrir al cuartel donde decidieron realizar un peritaje del vehículo, sin embargo, al preguntarles por la propiedad de este, Alan Lidid, dijo que iba acompañando a Edith y ella dijo que había ido por un amigo, que era Camilo y, así se logró establecer con ella que era **Camilo Sandoval Godoy**.

Este testigo puntualizó que el peritaje mecánico y químico, permitió establecer que el número de Vin estaba adulterado y arrojó el que le correspondía realmente al vehículo, asociado a un vehículo de propiedad de un comerciante chino, al que le fue robado con violencia. Además, como ya habían visto en la investigación anterior, dentro del modus operandi, la creación de una empresa con facturas de numeración muy baja y, les pareció sospechoso que en este caso, la factura era de la empresa Valenzuela y Arce parecido al nombre de la automotora Valenzuela Delarze, cuya numeración era 13. Conforme a ello, se efectuó la consulta a Cristopher Artigas Cuevas, jefe de la unidad de denuncias del R.V.M. del Registro Civil, con quien ya habían tenido bastante contacto por la investigación anterior, e incluso habían efectuado reuniones planteando las falencias que como policías habían observado en el sistema registral de vehículos, ya que cualquier persona podía llegar con una factura de una empresa x, a cualquier mesón y sin una revisión del vehículo, le entregaban las placas patentes. Por ello, plantearon que no había un cotejo entre los vehículos importados con las diferentes empresas concesionarias y, en ese tiempo, ya tenían contacto con la Mazda, la Nissan, quienes les enviaban el número de Vin y preguntaban si el vehículo había sido o no importado.

El testigo acotó que el Vin contiene 17 caracteres, que permite identificar al vehículo a nivel internacional desde dónde fue fabricado, procedencia, lote, etc. y es un número único, que se encuentra en el parabrisas a mano izquierda y en otros casos en el asiento del copiloto debajo de alfombra posadera de pies y, en las camionetas en la parte posterior en el chasis.

Continuando con la revisión del St. Wg. Mazda CX9, refirió que se determinó que tenía 3 números del Vin borrados, y el perito no pudo establecer a qué vehículo correspondía, pero al efectuar un escáner en la automotora se logró establecer mediante su computador.

En el mismo sentido, declaró Larry Caro y señaló que se averiguó en las bases de dato de la PDI si el número de Vin estaba asociado a algún delito, llamó a la Municipalidad de San Ramón para ver si habían

emitido el permiso de circulación, y les señalaron que no; consultaron vía telefónica con el concesionario Derco, y el número de Vin no estaba registrado en su base de datos.

Por su parte, continuó exponiendo Caro, los peritos lograron establecer que el número de motor y chasis se encontraban adulterados, pero sin poder establecer el original, por lo cual, el fiscal determinó dejar apercibidos a los tres ocupantes e instruyó que concurrieran al concesionario Derco para establecer la verdadera identidad del vehículo Mazda CX9, patente KBWK.93, donde le pusieron un escáner al computador y arrojó el verdadero número de Vin, que estaba asociado a una patente que tenía encargo por robo con intimidación que fue subido por Carabineros.

Los comisarios a cargo de la investigación, estuvieron contestes en ilustrar al tribunal, la manera en que fueron armando la red de empresas, facturas y partícipes en esta estructura delictiva, a partir de la incautación del vehículo Mazda CX9 en febrero de 2018 y que dio origen a la presente investigación.

De ese modo, primeramente, indicaron que se consultó a Artigas Cuevas respecto de los vehículos inscritos con facturas de la misma empresa, y eran como 10 o 12 vehículos, entonces, se confirmó la hipótesis que era una sociedad creada mediante el portal “empresa en un día”, ésta era multimarca y solo tenía 10 vehículos supuestamente importados, lo que ratificaba que era una empresa falsa dedicada al tema. En segundo lugar, y como tenían experiencia en cuanto a la forma de operar de estas personas, a través de la creación de empresas de fechada, en este caso, la empresa Valenzuela y Arce que se parecía a Valenzuela Delarze, consultaron a las tres personas individualizadas en el Registro Civil, con el mismo funcionario, que les colaboraba con aportar la información relativa a cuántos vehículos tenían inscritos estas personas. Sabían que el solicitante de 1ª inscripción es quien va con la documentación al Registro Civil y el adquirente es a nombre de quien se inscribe el vehículo. Así, con esa información y través de la plataforma de “monitor web”, establecieron que los vehículos vinculados a estas tres personas, ya sea como solicitantes o adquirentes, estaban vinculados a otras empresas.

Luego, ahondando en las demás diligencias que se realizaron, el testigo Larry Caro, indicó que el único socio de la empresa Valenzuela y Arce era Carlos Gómez Zúñiga, entonces, establecieron la malla societaria, descubriendo que este sujeto tenía otras empresas, una de ellas, era Tap motors, sin ningún vehículo inscrito, cuestión que les hizo presumir que la estaban “haciendo madurar”, es decir, emitían facturas por montos menores para luego emitir una (con mayor numeración) con un vehículo. A su vez, sacaron la malla societaria a Tap motors, y apareció Claudio Tapia Olgún, el que era socio en otra empresa con Carlos Gómez Zúñiga.

El testigo Caro sostuvo que, conforme a la forma descrita, lograron determinar que las empresas estaban todas relacionadas entre sí, por ej: Orión, Full orión, Brunno Fritsch, Nova, etc., con nombres parecidos a las empresas reales, que causaba el error del funcionario del Registro Civil y, finalmente, establecieron 18 empresas y 181 vehículos inscritos por ellas.

Enfatizó que, con el correr de la investigación, tenían a muchas personas involucradas y relacionadas entre sí, y tenían claro que este tipo de delito no era para el delincuente común, sino que había un cerebro detrás, con la inteligencia para llevar a cabo este tipo de procesos.

Con la información obtenida, el comisario Larry Caro, manifestó que Edith Silva era solicitante en un vehículo **marca Jack S3, patente GYPP-92**, vendido a Erick Álvarez en La Serena, razón por la cual, se formó una patrulla a su cargo para viajar a dicha ciudad, y para aprovechar el traslado, revisaron si existían otros autos vendidos en la zona, y apareció una grúa horquilla vendida a la empresa Bermax Frut de Monte Patria.

Fue así como relató el testigo las diligencias que se realizaron en la ciudad de La Serena, que arrojaron un resultado positivo en el sentido de descubrir nuevas aristas que conducirían posteriormente a la cúpula de esta organización.

En síntesis, contó que en el mes de septiembre de 2018, se trasladó con el subinspector Vásquez, al lugar donde se encontraba la **grúa horquilla patente HFX.33**, vendida por Full Orión, y tomaron contacto con el representante de la empresa Bermax Frut, accediendo voluntariamente a las pericias de rigor. Indicó que los peritos pudieron establecer que los números de motor y chasis se encontraban adulterados. Hizo presente que esta maquinaria había sido inscrita a nombre de Nelson Méndez Moya, quien tenía otros vehículos inscritos a su nombre y también era solicitante de 1ª inscripción. Acotó que la grúa se dejó en poder de Bernardo Campusano en calidad de depositario provisional, quien señaló que su socio Máximo Contreras había comprado la grúa en una automotora ubicada en la calle San Pablo de nombre “Silva Silva”.

Continuó relatando Larry Caro, que al día siguiente fueron a La Serena a ver el auto Jack, al domicilio del dueño, los atendió don Jorge Larraguibel, suegro del propietario Erick Contreras, le explicaron el motivo de su presencia y solicitaron hacer peritajes, concurrieron en forma voluntaria al cuartel de la PDI de La Serena.

En este caso, dijo, los peritos establecieron que los números de motor y chasis estaban adulterados, y por la placa patente, era producto del delito de robo con intimidación.

Reportó que al día siguiente fueron a tomar declaración al propietario y le explicaron que el automóvil iba a quedar incautado, don Erick Contreras dijo que a través de Yapo vieron este auto, les pareció bien el precio, tomaron contacto con el dueño, que se hizo llamar José Raiman, pudieron establecer que era **José Raiman Cordero**. Este ofreció llevarle el auto a La Serena para que lo viera y si lo compraba, él les pagaría los pasajes de vuelta. Llegaron a un acuerdo en el precio de \$7.400.000, viajaron tres personas y le solicitaron que el precio fuera pagado en efectivo.

Agregó el testigo que al hacerle un reconocimiento fotográfico, identificó a Edith Silva Sánchez, que era la persona que más interactuaba con él, a José Raiman Cordero y a Manuel Astorga.

Precisó que el comprador señaló que Edith le solicitó que la acompañaran al Banco BBVA donde ella hizo un depósito y luego los fue a dejar al terminal. Añadió que a Edith se le cayó un comprobante de depósito del Banco BBVA por 5 millones y fracción, para una mujer de nombre **Claudia Sandoval Godoy**.

Explicó que esta situación llamó la atención, porque de acuerdo a su experiencia, sabían que al seguir el dinero es posible llegar al líder o cabeza de la organización, y en este caso, claramente tenía que ser una persona que estaba por sobre ellos, que no se iba a involucrar en los grados de menor jerarquía.

Siguió relatando, que posteriormente hicieron la investigación con el Banco BBVA, Claudia Sandoval Godoy no tenía empleo formal, no estaba registrada en el SII, ella tenía una hija, el padre era **Yerko Silva Toro**, a quien presumían se le había depositado el dinero, sin tener mayores antecedentes de él.

Ahora bien, el testigo narró, en relación con la grúa horquilla, que concurrieron a la automotora Silva Silva, donde entrevistaron a don Clodomiro Silva Núñez, quien señaló que la grúa horquilla la había llevado al local, **Albano Silva Toro**, el que le debía unos meses de arriendo de un local que estaba en la calle ex Los Pajaritos, casi al frente de la escuela de oficiales policiales, y les exhibió un contrato de arriendo respecto del local comercial, donde el firmante era Bernardo Olguín Donoso.

Acto seguido, concurrió al local de la parrillada y se entrevistó con Albano Silva, al preguntarle cómo había adquirido la grúa horquilla, dijo que se la había entregado junto a otro automóvil **Ilich Chopa Aldana**.

Así, revisando los antecedentes de la investigación, se dieron cuenta que Albano era hermano de Yerko Silva Toro, todo lo cual, reforzó la hipótesis de que estaban frente a una organización criminal, que constituían empresas de fachada, creadas para vender autos robados y estafar a los compradores.

En seguida, dio cuenta el testigo, que solicitaron el levantamiento del secreto bancario de Yerko Silva Toro, Albano Silva Toro y Claudia Sandoval Godoy, entre otros potenciales integrantes de una organización criminal.

Volviendo al Mazda CX9, recordó que cuando le consultaron a Edith, esta dijo que se la había pasado Camilo Sandoval, y después hicieron el match que era hermano de Claudia Sandoval. Por eso, también solicitaron el levantamiento del secreto bancario de Camilo, además, de interceptaciones telefónicas.

Manifestó que, a través de las escuchas telefónicas, pudieron verificar que había otras personas involucradas en este tema, a saber, apareció una persona que era evidente que era cercana y que estaba en un nivel alto, **Tatiana Arana Espinoza**, en ese momento, pareja de Camilo Sandoval Godoy. Además, las escuchas dieron cuenta de que habían roles definidos, que había una permanencia en el tiempo, a las personas que contactaban y la forma de operar, y al final del ciclo todos llegaban a Yerko Silva Toro, quien entregaba instrucciones a Tatiana Arana, a su hijo, a Claudia Sandoval, quien facilitaba su cuenta corriente para mover plata de estos ilícitos

Ratificando y complementando lo anterior, Pedro Olivares, añadió que había una empresa, la sociedad "SYB" donde Paula Becerra y Claudia Sandoval eran las socias, que estaba a cargo del local de

parrilladas, el cual antes era un restaurante peruano. En la red familiar de Claudia aparecía una hija con Yerko de nombre Emilia y, ella no tenía ingresos declarados, pero arrendaba una vivienda en un buen sector, manejaba un vehículo marca Jeep y aparecía como socia de esta empresa. Así llegaron a Yerko Silva Toro, quien se encontraba recluido por la internación de más de 800 kilos de marihuana en Arica donde estaban involucrados carabineros que fueron dados de baja y; dentro de las conversaciones captadas en las interceptaciones telefónicas, llamaba la atención que todo debía ser consultado al “tío pollo” y en el tema del manejo del dinero, por ejemplo, Camilo y Tatiana decían que había llegado una “nave” y no tenían dinero, y que tenían que pedirle a Claudia Sandoval, pues Yerko les decía que había que pedirle la plata a ella porque recibía todos los dineros.

En la misma línea de seguir la ruta del dinero proveniente de la venta de los automóviles, el comisario Pedro Olivares, se refirió al **St. Wg. Honda WRV patente KZTP.55, año 2019, de color plateado inscrito por la empresa Automotora Bilbao SPA**, el que había sido incautado por Carabineros en febrero del año 2019; y señaló que Rocío Kettlun Poblete (quien prestó declaración en el juicio) era la usuaria del TAG y de esa manera se obtuvo su domicilio y número de teléfono. En este vehículo, la solicitante fue Tatiana Arana Espinoza y el primer adquirente, Francisco García Zepeda.

Expresó que le tomaron declaración a la víctima, a quien le exhibieron el automóvil en el mall Arauco Maipú donde Tatiana Arana se lo mostró junto con Francisco García, y ella con su marido le sacaron fotografías al vehículo, en las cuales aparecía Tatiana Arana, a quien la víctima la reconoció como la que dirigía toda la operación de la venta e hizo pasar como esposo al dueño de vehículo. Dijo que el precio acordado fue de 8 millones, y la forma de pago 5 millones en efectivo y el resto mediante depósito. Indicó que Tatiana se presentó como “Paula” y pidió que le depositaran en la cuenta de **Jeannette Toro Brenet**, pero por ser nueva cuenta no se pudo transferir, entonces fueron a sacar los 3 millones al Banco.

El comisario Olivares hizo presente que les llamó la atención el apellido Toro, entonces se sacó la red familiar y aparecía como la madre de Yerko Silva Toro, por lo que existía la posibilidad que le estuvieran llegando dineros a ella, entonces, se solicitó un levantamiento del secreto bancario para ver si había movimientos sospechosos. También apareció en la red familiar **Daniela Espinoza Toro** y otro hijo. Con respecto a ésta, contó que había salido en tres escuchas, en donde en la primera Albano llamó a un ejecutivo de un Banco por el crédito que gestionaba Daniela para Yerko. Después otro llamado donde Albano se comunicó con Daniela y le comentó de la documentación que se necesitaba para mantener la mano. Y un tercer llamado fue de Freddy a Claudia donde le pidió 150 mil pesos, el que recurría a ella cuando le faltaba dinero, y Claudia le dijo que no podía depositarle, que si podía esperar hasta el miércoles, porque los miércoles Yerko le depositaba a su hermana Daniela. Por ello, hicieron la conexión entre las personas que recibían los dineros por parte de Yerko y, entendieron cuál era el modus operandi de la recepción de dineros provenientes de la venta de autos, en que estaban involucradas estas tres personas. Acotó que también se

solicitó el levantamiento bancario respecto de ellas, diligencia que fue llevada a cabo por personal de la Brigada de Lavado de Activos (BRILAC).

Continuando con el vehículo Honda WRV, manifestó el testigo, que posterior a la compra este tuvo fallas eléctricas, entonces, la víctima pidió el manual y Tatiana quedó de contactarse, pero nunca lo hizo. Fue a así como se recuperó porque lo llevaron a una concesionaria en Vitacura y el jefe de taller para poder configurar los elementos de trabajo se dio cuenta que el Vin no coincidía y llamaron a Carabineros.

Posteriormente la Sra. Kettlun después de la incautación hizo entrega de los documentos del vehículo, que no tenía cuando fue a la concesionaria, los cuales fueron incorporados como otros medios de prueba (OMP) 303 y 210, con la declaración del testigo, el que los reconoció, que corresponde a las fotografías del vehículo en comento, donde aparecía Tatiana Arana bajando de la puerta del copiloto y a la imagen en la que aparece el nombre de la señora Jeannette Toro como titular de la cuenta del Banco Falabella 01-009-01030-89.

Asimismo, se introdujo la prueba documental 698, que es la denuncia del Registro Civil; 341 que corresponde al certificado de anotaciones vigentes nombre de Rocío Ketlum Poblete, inscrito en la oficina Arauco el 10 de mayo de 2019; y 183, que es el encargo policial del Departamento de Encargo y Búsqueda de Vehículos Motorizados de Carabineros de Chile (SEBV), SEBV-201812-2192 de fecha 12.12.2018, a las 16:24, en que aparece que el delito ocurrió en la misma fecha, motivo robo con intimidación, ocurrido en la comuna de El Bosque, propietario y denunciante Miguel Caicedo Torres (el denunciante Miguel Caicedo Senador también declaró en el juicio), solucionado el 07 de marzo de 2019 por el SEBV, respecto del **vehículo Honda WRV plateado PPU original KTYZ.18**. Por último, se incorporó el certificado de anotaciones vigentes del mismo, propietario Miguel Caicedo Torres, fecha de adquisición 7 de septiembre de 2018.

Acotó que advirtieron que si un vehículo tenía más de un dueño, era porque la operación había resultado, es decir, porque el testaferro o palo blanco ya había hecho el trabajo de inscribir el vehículo, mostrarlo y venderlo, entonces, en la planilla también estaban la mayoría de las víctimas de robo de vehículo, las víctimas de la estafa, aquellas personas que en un principio compraron de buena fe, ya que la puesta en escena de una empresa generaba la sensación de seguridad, respecto de toda la documentación que se entregaba, porque muchas personas decían que sacaban un Autofact donde se veía la procedencia y resumen del vehículo e indicaba que estaba en perfectas condiciones, pero lo que no hacía Autofact era revisar la empresa, que era creada legalmente, pero las facturas eran ideológicamente falsas.

Por último, contó que se levantó la información y se envió al fiscal Gana, abriendo una nueva causa y se creó una planilla Excel donde se ordenó la información recopilada acerca de las empresas y los vehículos, que después fue completada a medida que se incautaban los vehículos y, se dieron cuenta que muchos ya habían sido incautados por Carabineros, y luego de varias reuniones, se logró que la investigación se radicara en la Fiscalía Centro Norte.

Siguiendo con la cronología de las etapas de la investigación, declaró Daniel La Regla Mella, Inspector de la PDI, quien ingresó a la fuerza de tarea en el año 2020, y manifestó que el primer semestre de ese año, varios oficiales del grupo de autos fueron trasladados a otras unidades, por lo que él comenzó a trabajar como oficial de caso para ayudar al Inspector Fernando Vásquez Guerra que quedó a cargo.

Indicó que desde esa época hizo distintas diligencias como escuchas telefónicas, y como la investigación estaba avanzada era el momento de ubicar a los imputados que ya estaban posicionados con distintos delitos, revisar redes sociales, tomar algunas declaraciones, analizar información extraída de teléfonos celulares.

Reportó que una vez reunida toda la información, en virtud de la orden de investigar de la Fiscalía Centro Norte, a cargo de los fiscales Sebastián Gana y Claudia España, por receptación reiterada de vehículos motorizados, asociación ilícita, lavado de activos, estafa y otros, estos recibieron una gran cantidad de informes policiales y solicitaron la orden de entrada y registro a los domicilios de los imputados y la orden de detención de los mismos. Acotó que en octubre de 2020, se dio cumplimiento a las órdenes y se detuvo a los imputados.

Expuso que a raíz del éxito de estas órdenes, se incautaron evidencias como vehículos, computadores, teléfonos, las cuales fueron analizadas por él y los demás oficiales de caso, y se realizaron distintos informes asociados que permitieron que se activaran algunas ramas de la investigación y se continuara con todo este proceso, ya que en un principio se mantenía una gran cantidad de imputados, **pero se detectó la cúpula de la organización criminal** que podría dar respuesta a una de las problemáticas policiales, cual era, qué pasaba con todos los vehículos que no aparecían.

El comisario Larry Caro, refiriéndose a la planilla Excel creada por su colega Olivares, que le fue exhibida como **OMP 729**, e incorporada en la declaración de los oficiales de la PDI y de Carabineros que practicaron la incautación de los vehículos, puntualizó que en dicha planilla ordenaron las empresas, las patentes, los adquirentes, los solicitantes de primera inscripción, las víctimas, las personas estafadas, las nuevas patentes y el delito por el cual se obtuvieron los automóviles.

Explicó que la planilla Excel fue confeccionada por el grupo operativo respecto de los vehículos, en ella también incorporaron las empresas, porque la idea era llevar un orden de lo que tenían y nutrirla con la información de las incautaciones y el oficial que tenía a cargo los informes policiales. Dio cuenta que el color verde era el de los vehículos que ya habían sido incautados por Carabineros, lo que corroboraban en los sistemas institucionales y concurriendo al SEBV. Los vehículos en azul eran los recuperados por la PDI. También están las empresas que estaban relacionadas entre sí por los socios, los primeros adquirentes o los solicitantes de primera inscripción.

Destacó que como tenían tanta información y mucha se repetía, hicieron un corte en las personas que estuvieran vinculadas con dos vehículos, porque una sola vinculación podría corresponder a personas engañadas o víctimas.

III.- Sociedades automotoras falsas o “de papel” constituidas por la asociación.

Respecto de las empresas, el comisario Pedro Olivares dio cuenta que todas habían sido creadas bajo la modalidad de “empresa en un día”, que es un mecanismo que generó el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo para facilitar a las pequeñas empresas el proceso administrativo, pero ha servido por delinquentes para defraudar al sistema. Por otra parte, indicó que en los años 2018 y 2019 existían 7 empresas certificadoras para obtener firma electrónica avanzada, entonces, concurrieron a consultar cómo se crearon las sociedades y algunas fueron mediante firma electrónica avanzada y otras en notaría, que era cuando se llenaba y enviaba el formulario del portal, se generaba un código con el cual el notario lo revisaba y daba el visto bueno, solicitaba la cédula de identidad y en 24 horas estaba lista.

Aseveró que la modalidad más usada fue la utilización de testaferros, que eran personas que prestaban su nombre y las sociedades se hicieron con la firma electrónica avanzada de ellos, entonces, se entrevistó a los representantes legales de las empresas certificadoras acerca de si los socios habían efectuado la gestión y, además, saber con quiénes los acompañaban, porque sabían que estas personas no eran las mentes pensantes de esta operación y, así se logró establecer que de las 7 empresas certificadoras, en cuatro de ellas se habían concentrado la totalidad de los socios de las empresas automotoras.

Detalló que el modus operandi consistía en que el testaferro iba a la empresa certificadora de la firma electrónica avanzada, le ofrecían pagar 50 o 60 mil pesos, en ella le sacaban una fotografía, imprimía la huella dígito pulgar derecha, debía dejar una fotografía de la cédula de identidad por ambos lados y una dirección para ser notificados y les entregaban un token, con el cual podían realizar operaciones en forma remota cuando se requería la firma electrónica avanzada.

Manifestó que se logró establecer dónde los socios habían obtenido la firma electrónica avanzada, y destacó que una de esas firmas fue pagada por transferencia electrónica a E-cert Chile y, se entrevistó a Priscila Pérez Vega (quien testificó en juicio), jefa de operaciones, quien indicó que la firma estaba a nombre de Julián Martínez, dueño de dos empresas y que se canceló con una cuenta del Banco BCI, por lo que la Fiscalía solicitó a la entidad bancaria la información y se determinó que la cuenta era de **Ilich Chopa Aldana**.

Recordó que este sujeto ya estaba dentro de la arista, porque en vehículos previos había salido su nombre, por ejemplo, en la venta de la grúa horquilla donde Albano Silva dijo que fue entregada por él.

Asimismo el testigo Pedro Olivares, agregó respecto del tópico en examen, que no todas las empresas tenían vehículos inscritos, por ejemplo Nicolás Chacón era un joven con 27 solicitudes de 1ª inscripción y tenía una empresa “Sobre Ruedas” sin ningún vehículo inscrito, solo fue creada, pues en el

Registro Civil y en el SII había empresas que en el proceso de validación se caían, entonces no les servían para inscribir vehículos.

Respecto del **otro medio de prueba 85**, que fue incorporado mediante su exhibición, el comisario Olivares explicó que era un cuadro gráfico demostrativo de las sociedades ilícitas constituidas, ordenadas en forma cronológica, con la fecha de constitución, número de vehículos inscritos y la individualización de los socios, según su opinión, todos vinculados al líder Yerko Silva Toro.

De acuerdo a los datos consignados en el cuadro exhibido, Pedro Olivares precisó que las primeras sociedades encontradas, fueron Orión, con fecha de constitución el 27 de diciembre de 2016 y Full Orión, constituida el 31 de diciembre de 2016. Los socios eran Vladimir Orellana e Ignacio Zavala, con 10 y 6 vehículos, respectivamente. Luego, aparecían Kor Ltda., creada el 28 de julio de 2017, con 12 autos, socios Carla Sandoval Riveros y Claudio Tapia Olguín, siendo este último también socio de Tap Motors, creada el 29 de diciembre de 2017, junto con el socio Carlos Gómez Zúñiga, a su vez representante legal de Valenzuela y Arce, que tiene fecha de constitución el 29 de noviembre de 2017, con 10 vehículos inscritos, y recordó que el vehículo Mazda CX9 fue incautado en febrero de 2018. En seguida, figuraban Best Car, que se creó el 13 de enero de 2018, sin autos inscritos; Nova Spa, el 22 de enero de 2018, sus socios eran Héctor Tapia Paillaqueo y Miguel Pardo Cortes, con 48 vehículos inscritos, era la empresa con más vehículos inscritos. Luego, estaban la Automotora Astorga Spa y Astorgamaq, con 5 y 0 vehículos, respectivamente, con una única socia Paula Astorga Orellana, creadas el 23 de marzo de 2018; Sobreruedas, sin vehículos inscritos, socio Nicolás Chacón Navarro; Méndez Moya Spa, con 10 vehículos, y la empresa Moya Spa, que no tenía ningún vehículo inscrito, creadas el 27 de abril de 2018, socio Nelson Méndez Moya, quien era el vendedor de la grúa horquilla. Después estaba Olímpica Autos Spa, con 28 vehículos inscritos, de los cuales en 27, aparecía como solicitante de 1ª inscripción Nicolás Chacón, constituida el 19 de agosto de 2018 y los socios eran Jaime Toro Cares y Luis Beas Riveros. Luego aparecía Comercial Mardones Spa, con 2 vehículos, se creó el 27 de agosto de 2018 a nombre de Gonzalo Mardones Tapia; Automotora Bilbao Spa, con 15 vehículos inscritos, se creó el 24 de septiembre de 2018 y el único socio era Gustavo Viveros Viveros; Nuevo Laredo y Automotriz Portillo SPA, con fecha de constitución 8 de enero de 2019, único socio Julián Martínez Arriagada, con 10 y 15 vehículos, respectivamente, **recordando que Martínez obtuvo la firma electrónica en la empresa E-cert, que fue pagada por Ilich Chopa Aldana**. Por último, dijo que en la imagen aparecía la importadora Brunno Fritsch, que se creó el 28 de marzo de 2019, con 12 vehículos y el único socio era Hans Bravo Riveros, e hizo la observación que, en este caso, ocuparon el nombre de Bruno Fritsch, pero escrito con doble ene, por lo que era evidente el ánimo de engañar a la gente.

El testigo Olivares hizo presente que, en la **Notaría de Claudia Gómez Lucares** se entrevistó a la abogada Zarella Camerotto (quien prestó su testimonio directo en juicio), ya que el documento aparecía con la firma electrónica de esa Notaría; y se le consultó si había otras empresas asociadas a los nombres que tenían, pues las sociedades Moya y Méndez Moya Spa se habían firmado en esa Notaría.

Indicó que la automotora Bilbao se creó de la misma forma y la Importadora Brunno Fritsch fue muy relevante, porque se incautó la documentación y se obtuvo que la persona que se presentó fue Hans Bravo, pero al lado de su cédula de identidad aparecía un número de celular, que decía “Sebastián”, entonces, se le consultó a Camerotto y dijo que, generalmente, la persona que firmaba venía acompañada por alguien que la asesoraba, quienes dejaban sus celulares y al consultar ese número estaba asociado a **Sebastián Martínez Zavala**, entonces, se estableció que este sujeto efectuaba trámites en la Notaría respecto de la creación de empresas, razón por la cual, se le intervino el celular y se establecieron los nexos que tenía con parte de la organización criminal.

La testigo Zarella Elena Camerotto Moraga, Abogada jefe y notaria suplente de la 50ª Notaría de Santiago de Claudia Gómez Lucares, declaró en juicio y se refirió al procedimiento de firma electrónica de la sociedad y a la **evidencia material 105**, que son las escrituras de constitución de las **sociedades Moya Spa, Méndez Moya Spa, Importadora Brunno Fristch Spa y Automotora Bilbao Spa**.

Indicó la testigo que en el mes de agosto del año 2019, concurrió un funcionario de la Policía de Investigaciones a la Notaría porque quería recabar información sobre algunas sociedades creadas mediante la página “empresas en un día”, a las cuales “les habían dado firmas electrónicas”. Detalló que eran cuatro empresas en particular, de las cuales adjuntó las copias y también las copias de las cédulas de identidad. Explicó que en la página web “empresas en un día” se llenaba un formulario y se creaba la sociedad, después les daban un número de atención, con el que iban a la notaría y, a veces, llevaban impresos los estatutos constitutivos. Agregó que había dos formas de firmar. Si iban a la Notaría, les pedían que exhibieran su cédula de identidad y se firmaba el estatuto impreso y, una vez que estaba firmado con la huella y la fotocopia de la cédula de identidad, se le daba la firma electrónica. Preciso que en la Notaría funcionaban con E-cert Chile, se firmaba en la página web y quedaba lista la empresa. Pero también podían firmarlas los mismos socios cuando tenían la firma electrónica y desde hacía un año, también se podía firmar con la clave única.

Acotó que al terminar de firmar aparecía “firmado electrónicamente” y después aparecía el RUT; y lo que seguía era de cargo del usuario.

Explicó que se ingresaba con el número de atención, que aparecía cuando el formulario estaba completo en forma correcta, luego, se debía poner el nombre del notario, el RUT de uno de los socios y al pinchar aparecía el borrador de la sociedad, un lugar donde decía “firma” y aparecían todos los que firmaban y se colocaba la clave del notario.

Se incorporó la **evidencia material 105**, NUE 5917205 de 8 de agosto de 2019, levantada en Teatinos 371, Santiago, que corresponde a los documentos originales de las constituciones de sociedades por acciones de las empresas Automotriz Moya Spa, Automotriz Méndez Moya Spa, Automotora Bilbao Spa, Importadora Brunno Fritsch Spa.

La testigo reconoció tales documentos como los entregados al funcionario de la PDI, y señaló que en la constitución de la sociedad por acciones Automotriz Moya, está la firma de quien constituyó la sociedad, Nelson Aníbal Méndez Moya, su huella y la cédula de identidad por ambos lados. En la constitución de Automotora Bilbao, aparecía firma, huella y cédula de identidad del socio Gustavo Viveros Viveros. La testigo recordó respecto de esta, que el usuario pidió firma y copia; en amarillo estaba destacado el número de atención 1883037 y también el correo electrónico que dejó para que le enviaran las copias, sebitauc24@gmail.com (que después se verá, con la evidencia levantada en su domicilio específicamente una libreta, pertenecía a Sebastián Martínez Zavala).

Respecto de la Importadora Brunno Fritsch Spa, aparecía la cédula de identidad del socio Hans Alejandro Bravo Riveros y el número de atención 2211748, además de un nombre “Sebastián” y el número de teléfono 941989616 (que correspondía a Sebastián Martínez Zavala). La testigo explicó que se contaba con 24 horas para hacer el trámite, pero a veces pedían urgencia, entonces dejaban un número. Por último, en la constitución de la sociedad por acciones Automotriz Moya Spa, se anotó el RUT 76.861.014-2, el nombre del socio, Nelson Aníbal Méndez Moya, está la imagen de su cédula de identidad, su firma y huella.

También prestó testimonio en juicio doña Lorena Elisa Quintanilla León, Notario Público de la 39ª Notaría de Santiago, quien se refirió a la evidencia material 106, que corresponde a la escritura de constitución de Sobreruedas Spa, la cual no tenía facturas emitidas, no obstante su declaración fue importante pues ilustró al tribunal con mayor claridad el trámite notarial que se debía realizar para la creación de estas empresas.

La testigo indicó que, en este caso, concurrió la persona que iba a firmar, porque no poseía firma electrónica y presentó el número de atención de la empresa, se imprimió el documento y el firmante Nicolás Chacón Navarro, presentó su cédula de identidad, se le entregó el documento para que lo revisara, luego colocó su firma y la huella del pulgar derecho, de ahí se enviaba al notario para que firmara electrónicamente en la página web **y cuando se concluía, se generaba de inmediato el número de Rut de la sociedad, el que quedaba en el sistema**. Acotó que para iniciar actividades se debía ver el tema en el SII.

La información aportada por los testigos señalados, se condice y encuentra correlato con la reseña de la inspectora Raquel Forero Villarroel, en cuanto declaró que le correspondió indagar sobre la forma en que se creaban estas empresas de fechada, porque si bien eran constituidas a través de un sistema legal, la información introducida en los formularios, documentos adjuntos y montos de acciones no eran reales, y su finalidad era poder inscribir los vehículos que sustraían con números identificatorios distintos.

Fue así como relató que en el año 2013 en Chile existió una actualización referida a cómo se constituían las sociedades, la nueva ley implementó un sistema que como su nombre lo indica, permitía constituir en línea y de forma fácil la empresa en un día. Los requisitos que se solicitaban para constituir una sociedad en dicho sistema, eran el nombre de los socios, domicilio de la empresa, acciones, y en general todo lo referido a cómo iba a funcionar. En Chile existen diferentes tipos de empresas que se pueden

constituir, como las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades por acciones SPA. Este tipo de sociedades eran las utilizadas por esta organización criminal, porque no pedían un mínimo de socios, la participación era a través de acciones y la responsabilidad si en algún momento se llegaba a terminar dicha sociedad, no los afectaba más allá en su patrimonio personal sino sólo en las acciones que ellos indicaban.

Explicó que en la página web de “tu empresa en un día”, se seleccionaba el tipo de sociedad que se quería formar, y se iba indicando el paso a paso que se debía ir completando, como el nombre de el o los socios, el domicilio de la empresa, las acciones que se reflejaban en un monto monetario que debía mantener la empresa, que a lo largo de la investigación se pudo acreditar que muchas de las personas que constituyeron estas sociedades no tenían la situación económica que reflejara dichas acciones. Por ende, la información aportada a este portal era falsa.

Dijo que una vez que la sociedad se encontraba constituida, después de completar este paso a paso, se le otorgaba el rol único tributario (RUT) con el que ya podían comenzar a facturar. Para poder finalizar este proceso en dicha plataforma, se podía realizar a través de dos tipos de firma. La firma electrónica avanzada propiamente tal, la que podía ser realizada a través de un token, que es un dispositivo tipo pendrive que entregaban las 7 entidades autorizadas en nuestro país, o través de la firma electrónica avanzada en línea, que se hacía en línea, pero la restricción que tenía era que se podía crear o realizar un número limitado de trámites, es decir, se podían crear hasta tres sociedades aproximadamente.

Manifestó la testigo que en caso de no contar con la firma electrónica avanzada de estos dos tipos, se debía concurrir a la notaría con un número de atención que entregaba el sistema, pagar el trámite en la notaría, para que el notario firmara con su firma electrónica avanzada.

De este modo, concluyó señalando que ya teniendo constituidas las sociedades, cuyo rubro era de automotora propiamente tal o servicios automotrices, que en ocasiones ocupaban nombres muy similares a automotoras legalmente establecidas, con la finalidad de no generar duda en la persona que de buena fe iba a adquirir el vehículo, que finalmente terminaba siendo estafada, podían comenzar a generar facturas, y comenzaba a operar todo este sistema delictual.

Se incorporó el OMP 379, que correspondía a fotografías de la página del SII que grafican los pasos para generar facturas electrónicas, desde cómo se debe ingresar al portal del SII con en el RUT y la clave. La testigo ilustró al tribunal, una vez que se ingresó, aparecía el link que llevaría a la creación de la factura electrónica, el ingreso a ese link en que se debía incorporar los datos que allí se pedían, como la razón social, la dirección, la comuna, correo electrónico, giro y se detalla el bien a vender que en este caso eran vehículos, por lo que, se debía indicar la marca, modelo, color, número de chasis y de motor. Luego de ingresada la información, se debía validar presionando el botón que aparece en la parte inferior que dice “validar y visualizar”. Luego, se podía visualizar el documento y una vez revisada la información que estuviera correcta, se debía confirmar la emisión de la factura presionando el botón que dice “firmar y enviar”, el cual se encuentra en la parte inferior de la imagen. Después, aparecía un mensaje de que la factura estaba firmada y

enviada y se podía volver a seleccionar el documento para ver lo que se emitió e imprimirlo. El número de factura se generaba automáticamente y son correlativos a partir del 1 y la fecha de la factura es la fecha en que se le daba el último visto bueno de firmar y enviar.

Además, se incorporaron fotografías del portal “tu empresa en un día”, a través del cual se ingresaba para constituir la empresa. En primero lugar, la testigo expuso que en el costado izquierdo había que presionar el botón que dice constituir; una vez presionado aparecían las opciones de sociedades que se podían constituir, una EIRL, una sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima cerrada, la sociedad anónima de garantía recíproca y al costado inferior derecho la sociedad por acciones o SPA, que era de interés para el proceso investigativo.

Manifestó la testigo, que podían ingresarse uno o más accionistas, e incluso después de la creación podían agregarse más accionistas, podía tener uno o más giros y era de administración libre. Estas fueron las características que hicieron atractiva esta empresa, porque es la que permitía realizar mayores actividades y no contaba con limitaciones de socios y una vez constituida podía ser modificada.

Continuando con su explicación, apoyada por las fotografías, Raquel Forero señaló que una vez que se presionaba la sociedad por acciones, se ingresaba al formulario de creación de esta empresa y aparecía un número que era único por empresa y cuando no contaban con firma electrónica avanzada y debían concurrir a una Notaría para dicho trámite, debían llevar ese número que era el asociado a esa empresa. Luego, están las pestañas del paso a paso, el primer paso es el ingreso de datos de la sociedad, el segundo paso el ingreso de datos de los accionistas, el tercero la pestaña para adjuntar documentos y el cuarto y último paso, firmar electrónicamente.

La testigo detalló en las imágenes el contenido de cada paso. Así, dijo que el paso N°1 es el ingreso de datos, se ingresa el nombre de la sociedad, es decir, la razón social y el nombre de fantasía que era opcional. **Los signos de pregunta que aparecían en un costado iban explicando qué información se debía ingresar dentro de cada campo, porque es una plataforma de uso amigable.**

Agregó que también aparecía el domicilio tributario, en que se indicaba la calle, el número, si es un departamento o un local, si está asociado a alguna villa o población, la región y la comuna. En la parte inferior de la imagen aparecían dos opciones a marcar, una para usar el domicilio tributario ingresado como domicilio social y otra, ingresar un segundo domicilio como domicilio social. Es decir, el domicilio tributario podía ser el mismo domicilio de la sociedad o podían ingresar dos domicilios diferentes.

Luego, en caso de haber elegido un domicilio diferente, se debía ingresar en la parte superior, y en la parte inferior aparecía el título objeto social, que aludía al giro que tiene la sociedad.

La testigo hizo presente que se efectuaron diligencias para verificar la existencia de los domicilios de estas empresas, y algunos de ellos no existían, otros correspondían a otras empresas diferentes creadas

con un fin lícito, ajenas a la organización criminal, y en otros casos los domicilios correspondían a casas de particulares.

Dijo la testigo Forero que el giro social aludía a lo que se dedicaba la empresa y el denominador común en las automotoras creadas era que su giro decía relación con vehículos, tales como, limpieza o venta de repuestos o accesorios, es decir, relacionados con automóviles.

Reseñó que luego, aparecía el título capital de la sociedad, en el cual, se debía ingresar el monto total del capital social, el tipo de moneda, monto del capital por pagar, el número total de acciones en que se dividía el capital social, y en la parte inferior ya se iba más al detalle del tema de acciones, como su valor nominal y los derechos que iban a poder ejercer los accionistas sobre estas acciones. Posteriormente, aparecía el título duración de la sociedad, que podía ser indefinido y en la opción de otros se podía colocar la cantidad de años o meses. El siguiente título decía relación con la administración que iba a tener la sociedad, la que podía ser con un directorio, un gerente general o un administrador. Luego, se detallaban las facultades de la administración y en la parte inferior la comunicación de la sociedad, entre la sociedad y sus accionistas y la información que se ingresaba era opcional. También se pedía detallar la periodicidad de las juntas de accionistas y en la parte inferior la resolución de diferencias, que podía ser mediante árbitro de derecho, árbitro mixto o árbitro arbitrador. Por último, indicó que aparecía el ítem distribución de utilidades, el cual era opcional y se podía indicar la forma en que se iban a repartir las utilidades dentro de la sociedad. Finalmente dejaba un punto para algún otro pacto que los accionistas quisieran agregar y también era opcional.

En el paso número 2, ingreso de los datos de los accionistas, explicó la testigo que se ingresaban los datos de los accionistas, administradores y gerentes y los representantes ante el SII. Se debía ingresar el RUT, nombres, apellidos, domicilios, algún correo y una profesión u oficio de los accionistas y administradores.

Acotó que en este caso, respecto de los domicilios de los accionistas, generalmente, dejaron el mismo domicilio que colocaron como domicilio de la empresa.

Luego, añadió, aparecía el título que era la calidad de la persona que se ingresó en el paso anterior, que podía ser de accionista, gerente, representante ante el SII, administrador, director o administrador provisorios. En la parte inferior aparecía el título del aporte de capital del accionista, en que se detallaba el tipo de bien, hacía alusión a dinero, no había bienes inmuebles. Se ponía la descripción del aporte, que podía ser del 100%, del 50%, y en la parte inferior daba la opción para ingresar otro aporte o quitar algún dato que se haya ingresado en ese recuadro.

Finalmente, sostuvo que en base a la información que se ingresó en la imagen anterior, arrojaba el resumen de la información con el RUT de la empresa, su nombre o razón social, la calidad, cantidad de acciones y aporte de capital y ya con la empresa creada se generaba el RUT con el cual podían comenzar a facturar.

Para concluir el proceso, se ingresaban los datos del vehículo a vender y con la factura se concurría al Registro Civil para realizar la primera inscripción como vehículo nuevo, para lo cual, el Registro Civil solicitaba la factura original, la cédula de identidad de la persona que iba a inscribir el vehículo y el pago de la inscripción y de las placas patentes que eran entregadas en ese momento. Por último, el padrón llegaba posteriormente por correo electrónico y si el Registro Civil detectaba algún error o algo que les llamara la atención, no emitían el padrón, pero las placas patentes ya estaban entregadas.

Ahora bien, en otro punto, con la declaración del comisario Daniel La Regla, la Fiscalía incorporó las escrituras públicas de constitución de las empresas nombradas anteriormente y que se constituyeron a través del sistema “empresa en un día” que, como se ha visto, es sumamente fácil, sencillo y amigable para que cualquier persona que cuente con un dispositivo con acceso a internet pueda realizar la constitución de una empresa, obtener un Rut y dejarla en condiciones de facturar.

El documento 375, es la escritura de la sociedad de responsabilidad limitada “**Compraventa de automóviles Orión Limitada**”, de 27 de diciembre de 2016 ante el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, constituida por Ignacio Zavala Hormazábal y William Orellana Morales, comuna de Recoleta, cuyo objeto es compraventa de vehículos automotores, capital social \$4.500.000.

El documento 374, corresponde a la escritura de la sociedad de responsabilidad limitada “**Comercializadora Full Orión Limitada**”, de 31 de diciembre de 2016 ante el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, constituida por Ignacio Zavala Hormazábal y William Orellana Morales, comuna de Las Condes, cuyo objeto es venta al por menor no realizado en almacenes, capital social \$3.000.000.-, enterado por los socios.

El documento 369, es la escritura de la sociedad por acciones “**Automotora Kor SPA**”, con domicilio en la comuna de Vitacura, Rut 76.762.004-7, de 28 de julio de 2017 ante el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, constituida por Claudio Esteban Tapia Olguín y Carla Lesly Sandoval Riveros, ambos con domicilio en Valparaíso, cuyo objeto es el comercio al por menor, mantenimiento y reparación de vehículos, venta de vehículos; capital social 10 millones de pesos, dividido en 10 acciones, pagado en su integridad, representantes legales ambos socios.

El documento 366, es la escritura de la “**Automotora Valenzuela y Arce Spa**”, RUT 76.807.369-4, con domicilio en la comuna de Las Condes, de fecha 29 de noviembre de 2017, socio Carlos Andrés Gómez Zúñiga, con domicilio en Maipú, cuyo objeto es la compra y venta de automóviles, mantención, lavado y venta de accesorios para automóviles, el capital social es de 30 millones de pesos, dividido en 3.000 acciones nominativas de la misma serie, ordinarias y sin valor nominal, el cual queda totalmente pagado en el acto, y el administrador y representante ante el SII es el único socio.

El documento 367, es la escritura de la sociedad de responsabilidad limitada “**Automotora Tap Motors Limitada**”, comuna de Quilicura, constituida el 29 de diciembre de 2017, ante el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, por Carlos Andrés Gómez Zúñiga y Claudio Tapia Olguín, cuyo objeto es el comercio al por menor, mantenimiento y reparación de vehículos, venta de vehículos, venta de partes, piezas y accesorios de vehículos, capital social de 10 millones de pesos, completamente enterado, 50% cada socio.

El documento 372, es la escritura de la sociedad de responsabilidad limitada “**Comercializadora Best Car Limitada**”, de 13 de enero de 2018 ante el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, constituida por Héctor Tapia Paillaqueo y Miguel Pardo Cortés, domicilio en Peñalolén, cuyo objeto es el comercio al por menor no realizado en almacenes, mantenimiento y reparación, venta de vehículos automotores y venta de partes y piezas de vehículos automotores, capital social 10 millones de pesos.

El documento 371, es la escritura de la sociedad por acciones “**Automotora Nova SPA**”, de 19 de enero de 2018 ante el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, constituida por Héctor Tapia Paillaqueo y Miguel Ángel Pardo Cortés, cuyo objeto es venta y reparación de vehículos, de bicicletas, venta de partes y piezas de vehículos automotores, capital social 10 millones de pesos dividido en 10 acciones nominativas, administración ante el SII ambos socios.

El documento 380, es la escritura de la sociedad por acciones “**Automotora Astorga Spa**”, de 22 de marzo de 2018 ante el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, constituida por Paula Astorga Orellana, comuna de Algarrobo, cuyo objeto es la compra y venta de automóviles, mantención, lavado y venta de accesorios de automóviles, capital social 20 millones de pesos y el **documento 381**, escritura de la sociedad por acciones “**Astorgamaq Spa**”, constituida en la misma fecha por la misma única socia, Paula Astorga Orellana, comuna de Algarrobo, cuyo objeto es la venta al por mayor de maquinarias de tipo pesado, agrícola, forestal. Construcción y minería, capital social 40 millones de pesos.

El documento 378, es la escritura de la sociedad por acciones “**Automotora Sobreruedas Spa**”, de fecha 11 de abril de 2018 ante el Registro Electrónico de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, constituida por Nicolás Chacón Navarro, en la comuna de La Cisterna, capital social 20 millones de pesos.

El documento 376, es la escritura de la sociedad por acciones “**Automotriz Moya Spa**”, constituida el 25 de abril de 2018 ante el Registro Electrónico de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, por Nelson Aníbal Méndez Moya, comuna de Quinta Normal, cuyo objeto es mantenimiento y reparación de vehículos, venta de vehículos, etc., capital social \$2.000.000.- dividido en una acción nominativa; y el **documento 377**, es la escritura de constitución de la sociedad por acciones “**Automotriz Méndez Moya Spa**”, constituida en la misma fecha y por la misma persona como único socio y

teniendo igual objeto, que es servicio de lavado, mantención y reparación, venta de piezas y partes de vehículos automotores, con un capital social de 10 millones de pesos, dividido en 1.000 acciones nominativas.

El documento 379, es la escritura de la sociedad por acciones **“Olimpica Autos Spa”**, constituida el 19 de agosto de 2018 ante el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, por Jaime Toro Cares y Luis Beas Riveros, en la comuna de Pudahuel, capital social 15 millones de pesos.

El documento 383, es la escritura de la sociedad por acciones **“Automotriz Portillo Spa”**, constituida el 7 de enero de 2019 ante el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, por Julián Martínez Arriagada, en la comuna de Quinta Normal, capital social de 20 millones de pesos; y **documento 384**, escritura de la sociedad por acciones **“Automotriz Nuevo Laredo Spa”**, constituida en la misma fecha por la misma persona como único socio y con el mismo capital social.

El documento 385, es la escritura de la sociedad por acciones **“Importadora Brunno Fritsch Spa”**, constituida el 27 de marzo de 2019, suscrita por Hans Bravo Riveros, en la comuna de Quinta Normal, capital social 20 millones. Se adjuntó una copia de la cédula de identidad de Hans Bravo por el anverso, y un número de teléfono 941989616, bajo el nombre “Sebastián”.

El documento 470, es la escritura de la sociedad por acciones **“Automotriz Guillermo Morales Spa”**, constituida el 27 de septiembre de 2019, por Alejandro Esteban Ruiz Arancibia, cuyo objeto es la compra y venta de repuestos y accesorios automotrices, con un capital social es de 10 millones de pesos.

El documento 471, corresponde a la escritura de la sociedad por acciones **“Comercial Gildemeister Spa”**, constituida en Quinta Normal, el 20 de enero de 2020, por Eduardo Hernán Sanhueza Pérez, el objeto es venta de repuestos y accesorios mantenciones y otros, y el capital social de 10 millones de pesos y se encuentra firmada electrónicamente por el Notario Nelson Eulogio Baeza Gutiérrez.

El documento 472, corresponde a la escritura de la sociedad por acciones **“C. Hernández Spa”**, constituida en Quinta Normal el 30 de enero de 2020, por **Renán Elías Guenteo Maliqueo**, el objeto es asesoría integral en terreno y el capital social de 4 millones de pesos; y en la última página aparece firmado electrónicamente por el Notario Nelson Eulogio Baeza Gutiérrez con esa misma fecha.

El documento 26, es la escritura de la sociedad por acciones **“Automotriz Soliste Spa”**, constituida por Víctor Manuel Solís Torres, el 30 de junio de 2020, ante el Registro de empresas y sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, capital social 50 millones de pesos, firmada electrónicamente por el notario Hugo Emilio Cataldo Muñoz.

Respecto de las sociedades previamente reseñadas, se incorporó el **documento 102**, oficio 8238 del Servicio Nacional de Aduanas de 9 de octubre de 2020, que informa que ninguna de ellas registró importaciones ni exportaciones en el período comprendido entre el 27 de diciembre del año 2016 y el 6 de octubre de 2020; y **documento 28**, oficio 1132 de 25 de febrero de 2021, que informa la inexistencia de

operaciones de importación o exportación entre el 30 de junio de 2020 y el 25 de febrero de 2021, de la sociedad Automotora Soliste Spa; como asimismo, fue aportada la información remitida por diversos Municipios en orden a que ninguna de las referidas empresas, cuyos domicilios estaban registrados en sus respectivas comunas, obtuvo patentes comerciales o municipales en igual período, tal como se advierte en los oficios presentados como documentos números 88 (Providencia); 81 (Cerrillos); 68 (Peñalolén); 21 (Ñuñoa); 89 (Vitacura); 79 (La Cisterna); 76 (Quinta Normal) y 622 (Las Condes).

El tribunal tuvo por acreditado, con la evidencia anterior, que las sociedades fueron creadas con el único fin de obtener facturas para defraudar con la venta de automóviles robados y “blanqueados” con una nueva identidad, ya que las empresas nunca realizaron las actividades propias del giro declarado de manera legítima.

Ahora bien, en la misma línea, para establecer el modus operandi de creación de estas sociedades falsas, el Ministerio Público incorporó **oficios de las entidades acreditadoras de firmas electrónicas**, que remitieron al persecutor, información atinente a las firmas obtenidas por las personas que figuraban como socios en dichas empresas.

De este modo, en el **documento 368, Certinet** informó el 14 de agosto de 2019, que las siguientes personas habían requerido y obtenido firmas electrónicas en esa empresa: En el año 2016, Williams Vladimir Orellana Morales e Ignacio Andrés Zavala Hormazabal (Orión y Full Orión); en el año 2017, Carlos Andrés Gómez Zúñiga (Valenzuela y Arce y Tap Motors) y en el año 2018, Paula Andrea Astorga Orellana Automotora Astorga y Astorgamaq), los que a la fecha de este documento tienen las firmas expiradas.

Corroborando y complementando la información, el testigo Miguel Ángel Robles Aguayo, Jefe de operaciones en Certinet SA, empresa certificadora de identidad en el proceso de entrega de firma electrónica, declaró en juicio que la firma electrónica permite representar a su titular de manera digital, para firmar un documento, para acceder a alguna plataforma que requiera validar identidad, para la creación de empresas y hacer gestiones bancarias, entre otras.

Precisó que en el año 2019, las personas debían ir de manera presencial con su cédula de identidad y ser mayores de edad, además, tener un correo electrónico propio. La empresa validaba la identidad con la información del Registro Civil y, después podían avanzar con el proceso de la entrega de firma electrónica, se pedía firmar los documentos que entregaban para validar que la persona fue presencialmente y se tomaba una fotografía, además, se dejaba copia de respaldo de la cédula de identidad y se tomaba la huella dactilar. En Síntesis, era un servicio que contemplaba un aspecto físico y otro digital, en que se entregaba un dispositivo criptográfico y el valor era 60 mil pesos. Acotó que la firma era indefinida, pero el certificado digital tenía vigencia de un año.

En relación con la creación de empresas, enseñó que la firma electrónica permitía en el servicio de “empresas en un día”, crear todo tipo de empresas, es decir, EIRL, de responsabilidad Ltda., SPA y

sociedades anónimas, actualmente, se llama Registro Electrónico de Empresas o de Sociedades. Acotó que, por lo general, las personas naturales no solicitaban la firma electrónica como representante legal de una empresa, sino que buscaban la creación de una, y una vez creadas usaban la misma firma para hacer facturas electrónicas en el SII, entonces, un objetivo de obtener la firma era la posterior facturación electrónica.

Por último, con respecto al pago de la firma electrónica, expuso que podía efectuarlo un tercero, pero el proceso era personal y concluía entregando el dispositivo a su titular, nunca a un tercero.

El **documento 370**, es un “Resumen de consulta por RUT” de fecha 20 de agosto de 2019, remitido por **ACEPTA.COM**, respecto de las siguientes personas de interés que obtuvieron firma electrónica ante esa entidad acreditadora: Carla Lesly Sandoval Riveros (Kor Spa), correo edita_a@hotmail.com (que se verá más adelante corresponde a Edith Silva Sánchez), desde el 25.07.2017 al 25.07.2018; Claudio Esteban Tapia Olguín (Kor Spa), desde el 25.07.2017 al 25.07.2018 y desde el 11.12.2017 al 11.12.2018, mismo correo edita_a@hotmail.com; Miguel Ángel Pardo Cortés (Nova Spa y Best Car), desde el 25.08.2017 al 25.08.2018; Jaime Alberto Toro Cares, desde el 10.08.2018 a 10.08.2019 y Luis Guillermo Beas Riveros, desde el 16.08.2018 a 16.08.2019 (Olímpica Autos).

Por último, en el **documento 373, E-CertChile**, el 16 de agosto de 2019, informó que obtuvieron firma electrónica ante esa entidad acreditadora las siguientes personas: 1) Carlos Gómez Zúñiga (Valenzuela y Arce), certificado enviado a camotorgomez@gmail.com; 2) Héctor Luis Tapia Paillaqueo (Nova Spa y Best Car Spa) con dos certificados; 3) Paula Astorga Orellana (Automotora Astorga SPA), **4) Julián Martínez Arriagada (Automotriz Nuevo Laredo y Portillo)**, con retiro presencial en la ciudad de Temuco, firma electrónica avanzada, pago transferencia electrónica por un monto de \$64.950, y se acompaña comprobante de solicitud y recepción de documento de 27.12.2018 y comprobante de transferencia de la misma fecha, desde la cuenta del Banco BCI N° 74679694, además, tiene otro certificado de fecha 09.01.2019, a nombre de la empresa Nuevo Laredo, firma electrónica simple, con pago en efectivo por \$ 14.160.

Este último antecedente es relevante dado que estas firmas fueron pagadas por Ilich Chopa Aldana, quien justamente tenía domicilio en Concepción y operaba principalmente en la zona sur del país.

En el mismo sentido, prestó declaración Priscila Evelyn Pérez Vega, ingeniero informático de E-Cert Chile, sobre el proceso de obtención de firma electrónica para constituir empresas y facturar y señaló que los certificados digitales se entregaban a través de un formulario que completan los usuarios, ingresando a la página web de la empresa y son dos tipos; uno, de firma electrónica simple, que es usado generalmente en el SII al facturar y, el otro, de firma electrónica avanzada, que contiene un dispositivo, el Etoken, que almacena un certificado digital y es similar a un pendrive. Agregó que el dispositivo se entregaba materialmente al solicitante con el certificado digital que contenía los datos personales del titular de la firma, es decir, al socio de las empresas porque era como la cédula de identidad, pero a nivel digital.

Sostuvo que la firma electrónica avanzada se usa para crear “empresas en un día” o para firmar documentos legales, por ejemplo, un contrato de trabajo. En el caso de las “empresas en un día”, se solicitaba que en el formulario debía estar el nombre de la persona con sus apellidos, el Rut con la serie de la cédula de identidad que tenía que coincidir con una cédula de identidad vigente, un correo electrónico, teléfonos, dirección y datos de facturación de la persona a quien le iban a facturar el certificado digital.

Añadió que una vez que se completaba dicha información, en el caso de la firma electrónica avanzada, los titulares debían acercarse a las sucursales con su cédula de identidad vigente, después el ejecutivo le hacía un enrolamiento a la persona, que consiste en una validación con la biometría, por ello, se le tomaba una fotografía presencial y se le escaneaba la cédula de identidad por ambos lados, una vez que se confirmaba que era el titular de la firma se le otorgaba el certificado digital.

Señaló que el dispositivo tenía vigencia de 1, 2 o 3 años y el valor dependía de la vigencia e iba desde 60 a 90 mil pesos, que se podían pagar a través de Flow, que es un medio de pago con el que cuenta el sitio, también físicamente en la sucursal donde se podía pagar en efectivo o con tarjeta, inclusive podía pagar un tercero ajeno a quien solicitó el certificado. Pero cuando se completaba el formulario y se pasaba a la etapa del pago, en el portal quedaba enlazado el formulario con el pago que se realizó y, después del pago se entregaba una factura electrónica.

Por último, indicó que hace unos dos años la Fiscalía le solicitó información de cómo se otorgaron los certificados a determinadas personas, se contestó y adjuntó los formularios de inscripción, el medio de pago y en los que correspondía a firma electrónica avanzada, además, la ficha con la validación de la cédula de identidad, la biometría y la fotografía de quien se presentó a retirar la firma electrónica avanzada.

Así las cosas, el tribunal tuvo por establecido, conforme al mérito de los antecedentes analizados, que existieron sociedades que se constituyeron en el papel, pero que no emitieron facturas y por ende, no fueron utilizadas para inscribir vehículos dentro del giro delictual de la asociación. Estas empresas son las siguientes: Tap Motors; Best Car; Astorgamaq; Sobreruedas y Moya SPA, cuestión que será confirmada más adelante, cuando el tribunal se haga cargo de la prueba rendida para demostrar los fines u objetivos comunes de la asociación, vale decir, la comisión de delitos de receptación de vehículos motorizados y estafas, principalmente, de las facturas ideológicamente falsas utilizadas para dar apariencia de licitud a los vehículos de origen ilícito.

Por esta razón, la valoración y análisis del tribunal se centrará en las sociedades que emitieron facturas usadas por la asociación y, entre ellas, las que efectivamente fueron constituidas por la misma para dicho fin, en el entendido que Yerko Silva Toro y demás miembros compraban y vendían facturas de estas empresas automotoras falsas y dada la controversia planteada por las defensas en torno a que no todas las empresas contenidas en la acusación fueron creadas por la organización y, por ende, no todos los vehículos inscritos con sus facturas pueden ser atribuidos a sus actuaciones.

En lo que concierne a la vinculación entre los miembros de la asociación y la creación de las sociedades falsas, en primer lugar, es menester dejar sentado que la prueba hasta ahora valorada ha permitido establecer que las sociedades que fueron efectivamente utilizadas por la asociación para su objetivo delictual, en orden cronológico según su nacimiento, son las siguientes:

1) Orión creada el 27.12.2016; 2) Full Orión creada el 31.12.2016; 3) Kor Spa creada el 28.07.2017; 4) Valenzuela y Arce creada el 29.11.2017, 5) Automotora Nova Spa creada el 19.01.2018; 6) Automotora Astorga creada el 22.03.2018; 7) Méndez Moya Spa creada el 25.04.2018; 8) Olímpica Autos creada el 19.08.2018; 9) Automotora Bilbao creada el 24.09.2018; 10) Automotriz Nuevo Laredo creada el 07.01.2019; 11) Automotriz Portillo creada el 07.01.2019; 12) Importadora Brunno Fritsch creada el 27.03.2019; 13) Automotriz Guillermo Morales Spa creada el 27.09.2019; 14) Automotriz Gildemeister Spa creada el 20.01.2020; 15) Automotriz C. Hernández creada el 30.01.2020 y 16) Automotriz Soliste Spa creada el 30.06.2020.

Seguidamente, se examinarán los elementos y antecedentes probatorios que se aportaron, respecto de cada una de las sociedades enumeradas, para atribuirles a los miembros de la organización algún tipo de intervención en su constitución y, por ende, en el proceso de facturación asociado a las mismas.

Respecto de las sociedades **“Compraventa de automóviles Orión Limitada”** y **“Comercializadora Full Orión Limitada”**, Yerko Silva e Ilich Chopa estuvieron contestes en declarar que estas sociedades fueron creadas por terceros a quienes les compraron las facturas, en específico Ilich Chopa, señaló que Jonathan González Queglas, compañero de delito con quien se encontraba privado de libertad en la misma causa, se las encargó a su cuñado Franco Cruz Iligaray, quien estaba en libertad y quien se convertiría en un importante miembro de la asociación, relacionado con la creación de empresas, facturación y generación de documentación falsa para los vehículos. Entonces, en un principio Cruz Iligaray comenzó proveyendo de facturas a los mencionados acusados.

En su declaración, Yerko Silva Toro reconoció que partió con estas dos empresas, pero que él no las creó.

Por su parte, Ilich refirió que la primera factura que se generó a Yerko con estas dos primeras empresas fue en abril de año 2017, las cuales ya estaban funcionando y se constituyeron a fines de diciembre de 2016, lo que supo a fines de enero o principios de febrero de 2017, ya que la facturación estaba en manos de Franco Cruz.

En lo que se refiere a la **“Automotora Kor SPA”**, Yerko Silva Toro declaró que fue creada por Franco Cruz Iligaray. Además, consta en el oficio remitido por la empresa acreditadora Acepta.com que otorgó la firma electrónica para su constitución, que en ese acto se dejó el correo electrónico de Edith Silva Sánchez, brazo operativo de la asociación según se demostrará en su oportunidad. Todo lo cual se condice con la declaración de Ilich Chopa, en el sentido que a principios de julio del año 2017, Yerko le habría pedido

una segunda factura, entonces, habló con Franco Cruz pero las dos primeras empresas estaban bloqueadas, así que le dijo a Yerko que necesitaba a dos personas para hacer una empresa y facturar, quien se consiguió dos personas y Franco Cruz creó dos empresas con los nombres que le envió Yerko, en el mes de julio de 2017 (Kor Spa se creó el 28 de julio de 2017 con Carla Sandoval Riveros y Claudio Tapia Olgún como socios).

Respecto de la “**Automotora Valenzuela y Arce**”, su único socio Carlos Andrés Gómez Zuñiga, fue reclutado por Edith Silva Sánchez, el que se enroló en la unidad penal donde Yerko Silva Toro estaba recluso para visitarlo, tal como el mismo Yerko lo reconoció en su declaración en juicio, y se colige del **documento 3**, informe de visitas enroladas respecto de Yerko Silva Toro, donde aparece en el N°13 y del **documento 388**, informe de personas que han visitado al mismo interno, donde aparece en varias oportunidades entre los meses de septiembre y noviembre de 2016, al igual que Edith Silva Sánchez.

Además, la totalidad de las facturas emitidas por esta empresa, fueron generadas por Franco Cruz Iligaray, según el documento ingresado con la declaración del inspector Fernando Vásquez Guerra, como **otros medios de prueba 46 y 145**. El primero corresponde a un cuadro de imágenes de direcciones IP, de las facturas de Valenzuela y Arce Spa, donde aparece el Rut firmante (Rut 13.463.225-9 que corresponde a Carlos Gómez Zúñiga) y dos direcciones IP (200.86.60.130 y 200.83.60.198); y el segundo, es un oficio de la empresa de telecomunicaciones VTR, que señala que ambas direcciones IP están asociadas a Franco Cruz Iligaray.

Con la declaración de la inspectora Raquel Forero fue incorporado el testimonio del único socio **Carlos Gómez Zúñiga**, presenciado por la testigo, el que señaló que conoció a Edith Silva en una fiesta en el año 2017, era la prima de un amigo, quien le ofreció dinero por enrolarse y visitar para llevar encomiendas a Yerko Silva Toro, quien estaba cumpliendo prisión preventiva en Santiago. Entonces, dijo que concurrió a la calle Pedro Montt a enrolarse y comenzó a visitar a Yerko Silva y por cada encomienda le pagaba \$15.000. Agregó Gómez que en una de esas visitas, Yerko le ofreció dinero por inscribir un vehículo, él accedió e inscribió un Peugeot 301. Indicó que después lo contactó Edith Silva para vender el vehículo, para lo cual, concurren ambos al Mall Arauco Maipú, el pago del vehículo fue en efectivo y lo recibió él. Seguidamente, Carlos Gómez dijo que Yerko Silva le ofreció dinero por constituir una empresa y realizó el trámite, después fue contactado para inscribir otro vehículo marca Hyundai Tucson, el que también fue vendido y pagado con un vale vista a nombre de Claudia Sandoval.

La testigo Forero expuso que a Carlos Gómez se le preguntó por otros vehículos que estaban inscritos a su nombre, pero este señaló que lo desconocía, ya que podían haber usado su cédula de identidad cuya fotografía por ambos lados se la envió a Yerko Silva Toro.

Advirtió, por último, que en ese momento sabían que Edith Silva formaba parte de esta organización y una de sus funciones era contactar a personas para que inscribieran y vendieran vehículos, quien también participaba de estas ventas y recibía instrucciones directas de Yerko Silva Toro.

En lo que dice relación con la “**Automotora Astorga SPA**”, si bien Yerko Silva en su declaración no se refiere directamente a esta sociedad, se contó con evidencia suficiente para establecer su origen, ya que consta en los cuadernos incautados a Sebastián Martínez Zavala, quien la creó a solicitud y bajo las instrucciones de Yerko Silva.

El inspector Fernando Vásquez Guerra, respecto de Sebastián Martínez y su participación en la organización, manifestó que tenían interceptado el teléfono de Freddy Miranda, y a través de esas escuchas lograron establecer que su función era crear las empresas y dejarlas facturando, y cuando se ejecutó la orden de entrada y registro se incautaron en su domicilio diversas especies de interés, tales como, cuadernos, libretas, timbres de Notarías y diversa documentación. Al revisar la evidencia, quedó de manifiesto que este anotaba todo lo que le mandaban a hacer, de modo que en sus libretas aparecían todas las solicitudes de Yerko para constituir las empresas, con los nombres, claves, nombres de los testaferros y los números de teléfono que tenían interceptados de cada imputado.

Con la declaración de Vásquez se introdujo la **evidencia material 32**, NUE 6194563, de 16 de octubre de 2020, incautada en el domicilio de José Manuel Balmaceda 4595, block 6, dpto. 41, comuna de Renca, perteneciente a Sebastián Martínez Zavala, que corresponde, entre otra, a un cuaderno verde con la leyenda “Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Santo Tomás”, en el cual existen escrituraciones a mano relativas a nombres y cédulas de identidad, marcas de vehículos, números de motor y chasis y precios. El testigo, para contextualizar, indicó que al comienzo del cuaderno aparecían los valores del certificado digital: por 1 año, \$14.160; 2 años, \$21.190 y 3 años, \$ 23.807. Además, en una de las hojas aparecía escrito “Yerko Albano”. F. Bilbao 3.000, Rol de Providencia. Inmobiliaria Braman y Cía. Ltda. Rut.” Y en lo pertinente, en otra hoja, aparecía escrito “Yerko”, y los siguientes datos: clave Paula 123, Automotora Astorga SPA, Rut 76.848.081-8; Representante Legal Paula Andrea Astorga Orellana; la clave del SII, domicilio, correo electrónico asociado y la clave. El testigo señaló que se consignaba, además, la certificación digital, la clave e iniciación de actividades de fecha 23 de marzo de 2018 y capital \$ 2.000.000.

Asimismo, se introdujo la declaración prestada por la única socia **Paula Astorga Orellana**, a través de la inspectora Raquel Forero, la cual es coincidente con los antecedentes expuestos, en la medida que señaló que tenía una amiga a quien acogió en su domicilio particular, debido a que por temas familiares no tenía donde residir. Esa amiga tenía una pareja que estaba cumpliendo prisión preventiva. Un día su amiga le pidió un favor, que era crear una empresa, y por ayudarla y como favor sin recibir retribución económica, fue a la comuna de Providencia para crear esa sociedad, haciendo hincapié que su amiga en todo momento hablaba por teléfono con un sujeto al que no mencionó, pero que trataba de hermano, y le iba relatando cómo se realizaba el trámite. Fue así como firmó los documentos sin leer y su amiga le dijo que la empresa se iba a dedicar al lavado de automóviles. Con el paso del tiempo tuvo problemas con su amiga y le pidió que se fuera de su domicilio, desconociendo su paradero y no tuvo más antecedentes de la sociedad que constituyó.

En cuanto a la “**Automotriz Méndez Moya Spa**”, no obstante en su declaración Yerko Silva indicó que no recordaba esta sociedad ni conocía a su socio Nelson Méndez Moya, se acreditó que fue creada por Sebastián Martínez Zavala bajo sus instrucciones, lo que debe relacionarse con la fotografía de la cédula de identidad de Nelson Aníbal Méndez Moya que estaba en el computador que se le incautó a Paula Becerra Leyton, pareja de Albano Silva Toro, que era de uso común, introducida en **otros medios de prueba 35, cuadro 5**, subcarpeta de nombre “Albano”, exhibida al testigo Daniel La Regla.

A ello se suma que este sujeto también figuraba como adquirente y solicitante de vehículos inscritos con facturas de las sociedades Kor Spa y Astorga Spa, particularmente, de la grúa horquilla que fue vendida por Albano Silva para abonar la deuda de arriendo que tenía con don Clodomiro Silva Núñez.

En el mismo cuaderno incorporado y exhibido al testigo Fernando Vásquez, como **evidencia material 34**, en otra hoja aparecía escrito “Yerko”, crear dos empresas SPA y mantiene tres domicilios de la comuna de Quinta Normal, Representante Legal Nelson Aníbal Méndez Moya, Rut, sin iniciación, giro y código giros. En otra hoja, aparecía Automotriz Moya SPA, dirección de la página web, dirección en la comuna de Quinta Normal y rol oficina. En otra hoja, que mantenía el título “Yerko”, constitución N° de atención 1642219, Automotriz Méndez Moya Spa, y constitución N° de atención 1636737, Automotriz Moya Spa. En otra hoja: “Yerko”, número atención, clave SII, Automotriz Méndez Moya Spa, Rut 76.861.015-0, representante legal Nelson Aníbal Méndez Moya, Rut, clave, domicilio en Quinta Normal, Rol, monto \$350.000 por arriendo y se mencionan los códigos: Servicio de lavado automotrices SO2010; mantención y reparación SO2080, etc. Correo: sebastianmartinezasesorias@gmail.com, otro correo electrónico y la clave y, además, la clave del certificado digital Méndez Moya. En otra hoja: “Yerko”, clave Moya 123, Automotriz Moya Spa, Rut 76.861.014-2, representante legal, Rut, clave, dirección, rol y giros. En la siguiente hoja: “Yerko”, Méndez Moya Spa, Rut, Rut del Representante Legal, clave, factura electrónica, clave.

Además, en el mismo domicilio de Sebastián Martínez Zavala, fue levantado un pendrive sin marca rojo/gris, que el testigo Fernando Vásquez indicó contenía diversos archivos en formato Word y PDF. En lo que atañe a la presente sociedad, reseñó que existían los siguientes archivos Word: uno titulado “contrato de arrendamiento automotriz Méndez Moya Spa (Yerko)”, fecha 28.04.2018. Explicó que era un contrato de arriendo del 24.04.2018, en el que se individualiza una empresa como arrendadora y el arrendatario es Nelson Aníbal Méndez Moya como representante legal de la empresa Méndez Moya, respecto del inmueble ubicado en Santo Domingo N° 4532, Quinta Normal, rol avalúo, Región Metropolitana, por la renta de \$300.000.- Aparecía el membrete de Alberto Mozo Aguilar de la 40ª Notaría de Santiago, nombre de los contratantes, sin firma, y tampoco aparecía el nombre del notario ni su firma. Había otro titulado “contrato de arrendamiento automotriz Méndez Spa (Yerko)” de fecha 28.04.2018, en los mismos términos que el anterior. Otro archivo era un poder amplio SII Nelson Méndez Moya (Yerko) de fecha 19.04.2018, que le otorgaba a Martínez Zavala, sin firma. El siguiente era un archivo de poder amplio SII, Automotriz Moya Spa (Yerko) de fecha 28.04.2018, a Martínez Zavala de fecha 26.04.2018, sin firmas y con membrete de la notaría. Por

último, un archivo de un poder amplio SII, Automotriz Méndez Moya (Yerko) de fecha 14.05.2018, el que consistía en un documento de fecha 26.04.2018, con membrete de la notaría Mozo, de Aníbal Méndez Moya, representante legal de Méndez Moya Spa, a Sebastián Martínez Zavala, en los mismos términos y con amplias facultades, sin firma.

En lo referente a la “**Automotora Bilbao Spa**”, creada el 24 de septiembre de 2018, Yerko Silva reconoció que esta sociedad la usaba para blanquear vehículos. Y en cuanto a su origen, se comprobó que fue creada por Sebastián Martínez Zavala por instrucciones de Yerko Silva, conforme a la evidencia levantada en su domicilio, al igual que el caso anterior, correspondiente a cuadernos y archivos de Word con borradores de documentos.

En el ya citado cuaderno, en lo atinente a la presente sociedad, se consignaba bajo el nombre “Yerko” lo siguiente: Gustavo Viveros Viveros, Rut, F. nac. 28.07.1990, Automotora Bilbao Spa, número de atención 1883037, const. 20/09/2018, domicilio, rol, giros, capital \$5.000.000, correo electrónico, clave, servicios \$500.000 y un Rut. En otra hoja, aparecía Automotora Bilbao SPA, clave. Facturas electrónicas, autorizada N° 369, 03/10/2018. Verificación de actividades N° 2983886, fecha 12/10/2018, 64 facturas emitidas (venta) fecha 02/10/2018 N° 122.

En otra hoja también se registraban números telefónicos, entre otros, **bajo los nombres de Albano, Gustavo Viveros (Yerko) y Yerko**; y en la última página, anotaciones de la página web “tu empresa en un día”, un Rut y una clave. Autofact.cl, mismo Rut y clave, otras páginas web y claves, y dos correos electrónicos **sebitauc24@gmail.com** y **sebastianmartinezasesorias**, y una clave.

El comisario Daniel La Regla incorporó la declaración de su único socio **Gustavo Viveros Viveros**, cuya fecha no recordaba al parecer fue en el año 2021, quien declaró que en el año 2018 estaba en situación de calle y consumía pasta base y en circunstancias que se encontraba en una ruca artesanal, con otras dos personas, se le acercó “Juan Navarrete” y le ofreció ganar dinero por hacer algunos trámites (La Regla no explicó si Viveros conocía a Juan Navarrete o tenían algún tipo de relación con él o de la nada este apareció y le ofreció dinero). Continuó relatando el testigo que Viveros fue el único que aceptó, entonces, Navarrete le dijo que tenía que hacer unos trámites notariales, le pidió su número de teléfono porque su contador lo iba a llamar. Agregó que Sebastián Martínez Zavala lo contactó y lo llevó a una Notaría, explicándole que el trámite era para constituir una empresa con la cual se iban a inscribir vehículos y por este trámite recibió 40 mil pesos. Indicó que al día siguiente se juntaron nuevamente en un cibercafé, y le hizo firmar otros documentos, pero al mantener los documentos de la empresa constituida, y ya que tenía el dinero en sus manos, los rompió y salió corriendo y nunca más volvió a ver a ninguno de los dos.

La Regla expuso que se le hizo un reconocimiento fotográfico, en el cual identificó con certeza a Juan Navarrete Vásquez como la persona que primeramente lo contactó ofreciéndole dinero y, luego, al supuesto contador Sebastián Martínez Zavala, quedado constancia de este en su declaración.

El mismo testigo sostuvo, sin embargo, que todos los informes de Juan Navarrete que pueden establecer su participación, se realizaron después de octubre de 2020 y hacia atrás no recordaba antecedentes que lo pudieran incriminar.

El testimonio anterior si bien se condice con la declaración de Carla Victoria Vildósola Godoy, funcionaria del Servicio de Impuestos Internos, que reconoció la declaración jurada N°35 de 25 de febrero de 2021, prestada por Gustavo Viveros Viveros, en orden a haber sido reclutado por Juan Navarrete para constituir la Automotora Bilbao, agregó que este habría señalado que conoció a esta persona porque le lavó el automóvil en el año 2018 y le ofreció dinero a cambio de entregar sus datos para la constitución de la sociedad.

Sin embargo, contrainterrogada por la defensa de Navarrete, precisó que solo tuvo a la vista la declaración jurada y que la fotografía se extrajo de uno de los informes policiales sin datos de la persona. Puntualizó que se le exhibió, porque Viveros en su declaración mencionó varias veces a “Juan” o “Juanito”, entonces, se quería saber si se refería a Navarrete.

En la misma línea, no se puede soslayar que la inspectora Raquel Forero, respecto de Juan Navarrete, sostuvo que a medida que fue avanzando la investigación, aparecieron otros integrantes de este grupo, específicamente, Juan Navarrete apareció en forma posterior y tuvieron antecedentes de que participaba un sujeto apodado “Juanito” del que no tenían la identidad. No recordó cómo se obtuvo la identidad, pero participó en una diligencia puntual en que se estableció que él participó desde antes, la cual fue una comparación de audios que se envió al Lacrim, y el perito estableció que las voces de ambos audios eran de la misma persona, que era Juan Navarrete Vásquez.

Así las cosas, de las inconsistencias entre la fecha de constitución de esta sociedad y la época en que los antecedentes probatorios sitúan a Juan Navarrete como integrante de la asociación; y el cuestionamiento a la validez y verosimilitud del mentado reconocimiento fotográfico por parte de su defensa, se hará cargo el tribunal, al momento de examinar el delito tributario que se le está imputando por los acusadores.

Respecto de las sociedades “**Automotriz Nuevo Laredo**” y “**Automotriz Portillo**”, ambas fueron creadas por Sebastián Martínez Zavala el 7 de enero de 2019 por instrucciones de Yerko Silva Toro, y quien gestionó y pagó la firma electrónica para su constitución en E-cert Chile fue Ilich Chopa Aldana, según su propia declaración y el testimonio del oficial de caso Pedro Olivares, como ya se señaló, al relatar la génesis de la investigación y las evidencias que condujeron a identificar a los miembros de la organización.

Respecto de la empresa Portillo Spa, Yerko Silva declaró que pudo haberla creado Sebastián Martínez, mientras que Ilich Chopa Aldana le atribuyó su creación a Franco Cruz, en la medida que reconoció el **otro medio de prueba 331**, consistente en la imagen de un correo de excit@gmail.com de 27 de diciembre de 2018 destinado a scliente@ecertchile, que en el asunto señalaba “adjunta comprobante de pago a nombre

de Julián Martínez Arriagada”. Al respecto, Ilich Chopa indicó que efectivamente pagó una firma electrónica, pero no sabía si era esa, que ese no era su correo sino que probablemente era un correo que Franco dio para que le llegara la documentación. Y con respecto a la segunda imagen, el comprobante que se adjuntaba en el correo por la suma de \$64.980, Ilich admitió que la transferencia es de su cuenta del Banco BCI, pero que no conocía a Julián Martínez, quien debía ser una persona o “goma” que constituyó una empresa con Franco Cruz.

Que las sociedades referidas, efectivamente, fueron creadas por Sebastián Martínez Zavala, por instrucciones de Yerko Silva, y no por Franco Cruz como afirmó el acusado Ilich Chopa, lo que se acreditó con la evidencia levantada en el propio domicilio de Martínez, incorporada como **evidencia material 32**, con la declaración de Fernando Vásquez, consistente en **una agenda de color café**.

El testigo Vásquez dio cuenta que al analizar el contenido de la evidencia, aparecía escrito en rojo y subrayado “Yerko”, seguidamente, Automotora Portillo SPA, Rut 76.962.651-4 y la clave, el domicilio, el nombre del representante, la clave y el correo electrónico asociado. Luego, aparecía Nuevo Laredo SPA, Rut 76.962.652-2, la clave, Julián Jesús Martínez Arriagada, la clave, correo asociado, clave de certificación digital (para facturar) y número de autenticación. Acotó que en la parte posterior de la libreta, mantenía anotados diversos números telefónicos, entre ellos, el de Albano Silva Toro y de Freddy (Yerko).

Asimismo, se exhibió un **cuaderno de color rojo marca “Alquimia”**, incautado a Martínez Zavala en su domicilio, y al respecto el testigo Vásquez señaló que en la 1ª hoja, aparecía escrito “Yerko”, subrayado con rojo, número de atención 2061233, Automotriz Portillo Spa, Rut 76.962.651-4, clave, domicilio, Representante Legal, Rut y clave, giros, fecha de constitución 07.01.2019, fecha de inicio actividades 08.01.2019, \$20.000.000 de capital 100%. Más abajo, aparecía anotado clave certificado digital, correo electrónico y clave. En la hoja siguiente, aparecía escrito “Yerko”, número de atención 2060554, Automotriz Nuevo Laredo Spa, Rut, clave, domicilio, Representante Legal, Rut, clave, giros, fecha de constitución 07.01.2019, fecha de inicio de actividades 08.01.2019, capital 20 millones 100%, y la clave certificado digital.

Finalmente, en relación con la **evidencia material 34**, que corresponde al **pendrive sin marca rojo/gris ya citado**, el testigo expresó que contenía tres archivos Word relacionados con estas empresas de fecha 07.01.2019, que correspondían a poderes amplios para actuar ante el SII, de Automotriz Nuevo Laredo SPA (Yerko), representada legalmente por Julián Jesús Martínez Arriagada otorgado a Martínez Zavala; de Portillo Spa (Yerko) mismo representante legal, a Sebastián Martínez Zavala; y de Julián Martínez Arriagada (Yerko) a Sebastián Martínez Zavala, para que actúe en su representación en el SII y en la TGR, todos los documentos con membrete de la 40ª Notaría Mozo, de fecha 08.01.2019 y sin firmas.

En relación con la **“Importadora Brunno Fritsch Spa”**, esta fue creada por Sebastián Martínez Zavala por instrucciones de Yerko Silva Toro, cuestión que fue reconocida por este en su declaración prestada en juicio.

Como ya se analizó, el oficial de caso Pedro Olivares indicó que se presentó Hans Bravo Riveros a la Notaría de Claudia Gómez Lucares y al lado de la copia de su cédula de identidad, se dejó un número de celular bajo el nombre de “Sebastián”, que correspondía a la persona que lo acompañaba y al consultarlo el número estaba asociado a Sebastián Martínez Zavala, tal como aparece en la evidencia material 105, reconocida por la notario suplente Zarella Camerotto.

Lo anterior es plenamente concordante con la evidencia levantada en el domicilio de Martínez Zavala, correspondiente al cuaderno de color rojo marca “Alquimia”, exhibida a Fernando Vásquez como evidencia material 34, ya que en la 1ª hoja, aparecía escrito en la parte superior como título “Yerko”, luego Hans Alejandro Bravo Riveros, Rut, clave de empresa en un día, número de atención 2211748, domicilio, venta de accesorios automotrices, “Importadora Brunno Fritsch SPA”. Además, en una hoja siguiente, aparecían anotados varios números telefónicos, entre ellos, de Franco (Yerko) y Claudia (Yerko) y en otra hoja, los números telefónicos de amiga Yerko, Claudia Sandoval, Yerko, Yerko último 5, Hans Bravo (Yerko).

Respecto de la “**Automotriz Guillermo Morales Spa**”, en su declaración Yerko Silva reconoció que fue creada por “ellos”, refiriéndose a la organización.

En el mismo sentido, declaró Yerko Silva respecto de la “**Comercial Gildemeister Spa**”. Además, su único socio **Eduardo Sanhueza Pérez**, fue reclutado por Juan Navarrete Vásquez, brazo operativo de la organización, siendo reconocido fotográficamente por aquel (según los oficiales de la PDI Raquel Forero y Felipe Arriagada), lo que se condice con el hecho de que en el celular de Yerko se encontraba una fotografía de su cédula de identidad y con el hallazgo de la copia de la escritura de constitución al interior del vehículo Nissan Qashqai que conducía David Millalén, junto con documentación de Navarrete y unos códigos provisionales para obtener clave en el SII.

Asimismo, se debe destacar que la copia de esta escritura, fue hallada el 23 de enero de 2020, es decir, 3 días después de la creación de la sociedad, en el vehículo Nissan Qashqai que el mismo Juan Navarrete le pasó a Millalén para que lo fuera a mostrar, junto con otros documentos personales y claves provisionales del SII.

El testigo Felipe Arriagada Fuentes, dio cuenta que **Eduardo Sanhueza Pérez**, declaró el 10 de marzo de 2021 y señaló que en ese tiempo estaba en situación de calle, y a través de un conocido del barrio conoció a Juan Navarrete, quien le comentó que necesitaba ayuda para crear una empresa y le ofreció dinero a cambio, este aceptó y concurrió a una Notaría en Quinta Normal con Juan Navarrete donde firmó una documentación, después, se trasladaron a una oficina del SII para obtener una clave. Dijo que, en esa oportunidad, no la pudieron obtener y entonces coordinaron para otro día, y tomó una fotografía a su cédula de identidad. Posteriormente, se enteró que Navarrete lo andaba buscando y como no quería verse involucrado, le dijo que había perdido la cédula de identidad. Precisó el testigo, que el imputado cuando realizó el trámite desconocía el nombre del sujeto que le ofreció el negocio, pero lo reconoció en la audiencia de 3 de marzo de 2021 a la que concurrió Juan Navarrete, Tatiana Arana y Eduardo Sanhueza.

En igual sentido declaró la inspectora Raquel Forero, que también fue testigo de su declaración, agregando que Sanhueza desconocía qué pasó con la fotografía, porque dejó de tener todo contacto con Navarrete cuando lo empezó a buscar para ir a buscar la clave al SII.

La testigo afirmó que la fotografía de la cédula de identidad de Eduardo Hernán Sanhueza Pérez, se encontraba registrada en el teléfono de Yerko Silva, tal como consta en **otro medio de prueba 110**, que es la imagen de dicho carnet, cuya ruta de archivo estaba en el almacenamiento compartido del celular, de fecha 27 de enero de 2020 a las 12:56 horas.

En lo que atañe a la **“Automotriz C. Hernández”**, Yerko Silva también reconoció que fue creada por “ellos” y su único socio **Renán Guenteo Maliqueo**, señaló que fue reclutado por Albano Silva Toro, según declaración prestada ante el comisario Daniel La Regla, además, la fotografía de su cédula de identidad estaba en el celular de Yerko (OMP 111) así como también el N° de atención de constitución de esta sociedad (OMP 11). Cabe destacar que Yerko Silva se sabía de memoria el Rut de Guenteo Maliqueo para ingresar a la página Web del SII a fin de emitir facturas, tal como consta en el video explicativo o tipo tutorial, enviado por la aplicación whatsapp WA0188, contenido en el otro medio de prueba 209. También Yerko tenía en su celular el logo de “C. Hernández” que había descargado de internet para ponerlo en esta empresa.

Con el testimonio de Daniel La Regla fue aportada la declaración del único socio de esta empresa, **Renán Guenteo Maliqueo**, quien señaló ante los fiscales y en presencia de su abogado que con la única persona que tuvo contacto fue con Albano Silva (no explicó por qué lo conocía), este lo llevó al Registro Civil para realizar inscripciones de vehículos, y también lo llevó al SII, ya que le solicitó sacar una clave para usarla él y que por estos trámites recibió un pago de aproximadamente \$40.000, pero no estaba en conocimiento de lo que hacía esta organización.

Por último, en lo que se refiere a la **“Automotriz Soliste Spa”**, se constató que Juan Navarrete Vásquez pagó la firma electrónica para su constitución en la Notaría de Hugo Cataldo Muñoz, la cual emitió la boleta N° 151696, de fecha 30 de junio de 2020 por la suma de \$8.000, hecho corroborado por el testimonio de la funcionaria del SII **Carla Vildósola Godoy**, quien revisó antecedentes vinculados a Juan Navarrete y, entre otras, a la sociedad Automotriz Soliste, y señaló que en la cartilla del contribuyente pudo observar que Juan Navarrete recibió boletas de honorarios emitidas por notarios, por lo que, hicieron un requerimiento de información a estos, los que adjuntaron a sus respuestas tanto las boletas de honorarios como las escrituras de constitución de las sociedades, ya que fueron emitidas en el marco de la validación de firmas digitales de la constitución, entre otras, de Automotriz Soliste Spa, entonces, quien pagó por la validación de esas firmas fue Juan Navarrete Vásquez a pesar de que él no era el representante legal ni dueño de esas sociedades.

Como **documento 837.2**, se incorporó la boleta N°151696 de 30 de junio de 2020, emitida por de la Notaría de Nelson Eulogio Baeza Gutiérrez, por \$8.000 a nombre de Juan Navarrete, siendo reconocida por la testigo y explicó que esta fue enviada por el notario Baeza por correo electrónico que correspondía al pago

de la firma electrónica de la escritura de Automotriz Soliste Spa, de la misma fecha, cuyo único socio es Víctor Solís Torres, que también fue remitida.

Finalmente la inspectora Raquel Forero Villarroel, se refirió a otras evidencias relevantes encontradas en el domicilio de Sebastián Martínez Zavala y reportó que durante las entradas y registros que se realizaron, su función fue quedarse en la unidad policial para realizar todo tipo de enlace que se necesitara con la Fiscalía y en virtud de esa función tomó conocimiento de los hallazgos de documentos notariales y timbres de Notarías, los que con posteriores indagaciones se pudo establecer que eran falsos. Añadió que, posteriormente, le correspondió analizar la información que se extrajo desde su celular en el cual se encontraron imágenes de un certificado de homologación en blanco y contactos de interés, que se relacionaban con la presente investigación.

La testigo reconoció los timbres que se incorporaron como **evidencia material 35, entre otros**, de la Notaría Alberto Mozo Aguilar, un timbre de agua de la 37ª Notaría de Santiago de Nancy de la Fuente, un timbre de agua de la 46ª Notaría de Santiago de Alberto Mozo Aguilar. La notario De la Fuente compareció al juicio y declaró que el timbre de agua que se le exhibió era falso y no correspondía a su Notaría.

Forero dijo que la **evidencia material 26**, es el celular Huawei STK-LY3 de color negro incautado a Martínez, al cual se le extrajo la información que posteriormente fue sometida a análisis; y se incorporaron los **otros medios de prueba 47**, que corresponden a cuadros gráficos del análisis del teléfono, una imagen de un certificado de homologación individual en blanco en cuya parte inferior se encontraba el timbre de la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda y dos imágenes de un certificado de homologación que mantenían como marca de agua la palabra cruzada copia dos y copia tres respectivamente y ambas tenían en la parte inferior el timbre de la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda.

Para terminar, se introdujo el **otro medio de prueba 48**, relatando la testigo que eran los contactos del teléfono, en el N°81 aparecía Albano vigente y en el N°86 aparecía Freddy (Yerko).

Ahora bien, **Sebastián Martínez Zavala** declaró en el juicio y reconoció las evidencias gráficas y documentales, timbres y dispositivos electrónicos levantados desde su domicilio y corroboró la información aportada por los demás testigos en torno al rol y función que desempeñaba en la asociación en relación con la creación de las empresas automotoras falsas, iniciación de actividades y facturación de las mismas.

Aportó información de relevancia que permitió entender el vínculo que lo unía con Yerko y Albano Silva Toro, y la forma en que se fue involucrando en esta organización.

Narró que Yerko Silva lo contactó por whatsapp y le solicitó crear 4 o 5 empresas con giro de automotoras, él conocía al hermano de nombre Albano a través de un amigo en común. Entonces, le dijo a Yerko que le mandara los datos de las empresas y como era todo por internet, le cobraba \$20.000 o \$25.000 por empresa, porque era súper fácil, Yerko le daba los nombres, el representante legal, capital inicial, las

copias de las cédulas de identidad de los representantes legales, nombre de las empresas, la modalidad SPA, casi siempre era un representante legal con la totalidad de las acciones.

Reiteró que la plataforma “empresaenundia.cl” era súper fácil, por lo que cualquier persona podía usarla, no era necesario tener estudios contables, se ingresaba la información, arrojaba un código y al día siguiente se presentaba en cualquier Notaría con el representante legal. Una vez creada la sociedad le mandaba a Yerko el código quien la revisaba, por si había algún error y era este quien gestionaba la concurrencia de la persona a la Notaría a quien acompañaba a firmar. Acotó que en una o dos oportunidades llegó Albano con el representante legal.

Dijo que en la Notaría tenía que pagar \$17.000, la persona pagaba y suponía que Yerko le depositaba, cuando fue Albano pagó él, en la Notaría entregaban el código que arrojaba la plataforma, al notario le aparecía la escritura con el código. Acotó que le llamaba la atención que las personas que le enviaban no tenían perfil de empresarios de automotoras o de tener un capital inicial de 5 millones, ya que la apariencia física era humilde y el nivel educacional bajo, los mandaban a firmar y no sabían lo que estaban firmando. Sin embargo, dijo que no sabía que las empresas que creó eran para fines ilícitos.

Martínez explicó que con la escritura ya venía asociado un Rut, entonces, pedía fotocopia de la cédula de identidad a los representantes legales, y con el Rut hacía un poder notarial y gestionaba la iniciación de actividades en el SII, mientras le iba informando a Yerko Silva a través de whastapp el avance del proceso.

Continuando con su relato, Martínez Zavala, indicó que después de la iniciación de actividades, como ya estaba la facturación electrónica, compraban el certificado digital y no recordó si él lo compraba o “ellos”. Lo que se compraba era un programa computacional de E-Cert Chile, que se instalaba asociado al Servicio de Impuestos Internos, por el cual se facturaba electrónicamente.

Insistió en que no recordaba haber comprado certificado digital, pero para otros clientes sí los compraba, por eso sabía que el tiempo de vigencia era de 1 a 3 años y el valor estaba asociado a ello. En ese tiempo, entre el 2016 y 2018, ya estaba implementada la facturación electrónica, por lo que había que comprar obligatoriamente el certificado digital con la firma electrónica. Entonces, manifestó que su trabajo llegaba hasta la iniciación de actividades y una o dos veces solicitó folios, que era la autorización para facturar, la cual se daba previa verificación del domicilio, si era positiva o condicionada, el SII autorizaba una a tres facturas hasta que verificaran que era una empresa real, que pagaba iva y que no era de papel.

Indicó que Yerko Silva también le daba los domicilios de las empresas, y los solicitaba a través de internet, la empresa quedaba positiva condicional, con autorización de dos folios o para hacer dos facturas. Luego se desligaba, no sabía si las empresas pagaban iva o si continuaban vigentes, porque las dejaba facturando, entregaba las claves y hasta ahí llegaba su trabajo, y suponía que Yerko emitía las facturas.

Martínez Zavala sostuvo que Yerko Silva tenía conocimiento de cómo constituir una empresa y cómo facturar, pero no sabía por qué no lo hacía él, sabía y manejaba todo el sistema a la perfección, para crear una empresa y dejarla facturando.

Detalló que Yerko le pagaba por medio de transferencia a la cuenta de su mamá, María Angélica Zavala Guzmán, desde cuentas de mujeres no de una cuenta de él.

Dijo que a Yerko no lo conocía físicamente, el trato con él era por teléfono y por whastapp, él le pedía la creación de empresas, pero también tenía otros clientes que le pedían crear empresas reales no ficticias. Por eso, tenía las escrituras y todo los datos anotados en cuadernos, incluido lo de Yerko, porque tenía la costumbre de anotar todo, en un afán de guardar los papeles, de tenerlos archivados, era una forma de trabajo.

Señaló que le habían comentado que Yerko Silva estaba metido en cosas turbias, que tenía parrilladas y un motel, por eso no le llamó la atención que le pidiera crear automotoras, después supo que estaba preso, hay gente que realiza actos ilícitos y tiene negocios lícitos, **conoce a mucha gente que tiene negocios lícitos y también hace cosas ilícitas.**

En su declaración, se reprodujo el **progresivo 5996 de fecha 04.06.2019**, contenido en otros medios de prueba 144, y señaló Martínez que reconocía su voz, pero no recordaba la llamada ni con quien hablaba. En este se pudo escuchar al testigo señalando lo siguiente:

“Freddy te tengo anotado con otro nombre, **con el nombre del goma Hans, Brunno Fritsh la hicimos hace tiempo atrás**, las últimas que hicimos fue continental y portezuelo, qué necesitan? A querís que te las mande. Cómo? Y cuánta plata me van a depositar a ver jajaja. Te mando la cuenta, me depositai y te mando la información, te la mando no tengo problema. Ya vamos a confiar. En este minuto ando en el centro, dejo las carpetas en la casa de todo lo referente a Yerko, llegando allá, te mando la cuenta, me transfieren y te mando las claves para que empiecen a facturar, porque ando re cagao de lucas así que me cae de perillas. Te mando la cuenta al tiro o te la mando más rato. Si la señora, la ubico, la conozco, si la tengo bloqueada. **Te mando la cuenta Rut, cuando esté transferido te mando las claves a ti, yo hablo contigo no más, él sabe que soy derecho**, cuando esté lista la transferencia te mando las claves al toque, te mando la cuenta con el Yerko no tengo problema, el Yerko está con problemas creo, y empecé a tratar con un tal Franco y la señora y puros problemas, yo trato contigo no más tu soy derecho”.

El testigo aclaró que en una ocasión solicitó folios al SII, no recordaba de qué empresa, presentó un contrato de arriendo falso porque se había pedido la verificación de domicilio y salió negativa, entonces, solicitó autorización de folios y le dieron 6 u 8 folios o facturas. Llamó a Yerko, para decirle que le había ido bien, y con las claves facturaba él mismo.

Al ser contra examinado por la defensa de Yerko y Albano Silva Toro, dijo que su padre se llama Juan Martínez, es contador y tiene oficina en Huérfanos, y reconoció que en ese tiempo es probable que le llevara la contabilidad a Albano cuando trabajaba en Salfa.

Afirmó que también era probable que no estuvieran en el cuaderno empresas que él no creó.

En cuanto al audio del progresivo exhibido, Martínez insistió en que no tenía mayor conocimiento del uso de las empresas y que cobraba dinero por dar las claves, porque ya se había dado cuenta para qué las ocupaban, a la tercera empresa pensó que vendían iva pero jamás se imaginó que vendían autos robados. Aseveró que los timbres que se incautaron los usaba para hacer los poderes, éstos los fabricó él. Además, tenía todos los datos y las claves, pero no recordaba haber comprado un programa para facturar (firma electrónica), tampoco recordaba si tenía los datos para llenar facturas de vehículos.

Por último, según su opinión, Yerko lo contactó porque estaba privado de libertad y, tal vez, no confiaba en el hermano, él es una persona muy inteligente.

En contraposición a lo señalado por Martínez en orden a desconocer con qué fin creaba las sociedades y desmintiendo su afirmación que no emitía facturas de estas empresas, el inspector Fernando Vásquez declaró que en el cuaderno verde con la leyenda “Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Santo Tomás”, bajo el título “factura Yerko”, aparecía anotado un vehículo Nissan X Trail año 2018, 5 puertas, color blanco perla, nombre del comprador y un Rut, automática, peso, número de chasis, número de motor y el Rut 15.449.308-5. Valor neto, IVA y el total de \$ 17.490.000.

De igual forma, el certificado de inscripción y anotaciones vigentes en el R.V.M, incorporado como **documento 494**, dio cuenta de la inscripción del mismo vehículo a nombre de Sara del Carmen Fernanda Tupper Correa, patente KHKW.72, y el propietario anterior era Alejandro Yáñez Recabal.

Enfatizó el testigo que las características del vehículo y sus números identificatorios son coincidentes y que Alejandro Yáñez Recabal, el primer adquirente, fue investigado dentro de la organización como un “goma” o testaferro para la inscripción de vehículos.

Se incorporó, además, la copia de la factura N°93 de la Automotora Astorga SPA, de fecha 12 de abril de 2018, a nombre de Alejandro Yáñez Recabal, y señaló el testigo que los datos de esta eran coincidentes con la información anotada en el cuaderno incautado en el domicilio de Martínez Zavala, lo que comprueba que este también emitía facturas de las empresas que creaba para Yerko Silva.

En consecuencia, para el tribunal, los medios probatorios examinados en los párrafos que anteceden, básicamente, testimonial, corroborada por documentos, audios, imágenes y otras evidencias materiales, con la corroboración de los atestados de los acusados Yerko Silva e Ilich Chopa, valorados en su conjunto han permitido concluir, más allá de toda duda razonable, que las primeras empresas con las que comenzaron a operar para la reinscripción de los vehículos robados y obtención de nuevas placas patentes,

vale decir, Orión, Full Orión y Kor, fueron constituidas por Ilich Chopa a través de Franco Cruz Igaray, quienes proporcionaron las facturas a Yerko Silva a fin de poner en marcha el plan delictual ya conocido.

Con posterioridad, entre los años 2017 y 2019, se incorporó a la organización Sebastián Martínez Zavala, un sujeto que realizaba trámites de contabilidad y que era conocido de Albano y Yerko Silva Toro, quien asumió el rol de constituir las empresas, hacer la iniciación de actividades y la facturación, conjuntamente con Franco Cruz e Ilich Chopa, tal es el caso de las empresas Valenzuela y Arce, Automotora Astorga, Méndez Moya, Bilbao, Portillo, Nuevo Laredo y Brunno Fritsch. Así quedó de manifiesto con las múltiples conexiones que había entre los tres imputados y entre estos con Yerko Silva y Albano Silva (que se desprenden de las anotaciones en las libretas y cuadernos de Sebastián Martínez, documentos de pago de las firmas electrónicas efectuado por Ilich, fotografías de la cedula de identidad de los testaferros en los dispositivos de Yerko y Albano, y escuchas telefónicas, entre otras evidencias).

Más adelante, a contar de fines del año 2019, en la última etapa de funcionamiento de la asociación, la generación de las sociedades estuvo a cargo de Yerko Silva Toro con la colaboración de sus brazos operativos, Juan Navarrete Vásquez y su hermano Albano. En este período se crearon las empresas Guillermo Morales, Comercial Gildemeister, Automotriz C. Hernández y Automotriz Soliste.

En la función de facturar y confeccionar homologaciones de revisión técnica para los vehículos, continuaba Franco Cruz Igaray, según las declaraciones de Yerko Silva y el propio Franco Cruz, sin olvidar a Martínez Zavala, quien también realizaba homologaciones falsas, de acuerdo a las imágenes encontradas en su celular, y falsificaba poderes notariales amplios para representar a las sociedades y a sus representantes legales, para obtener las claves del SII y hacer las gestiones necesarias para dejar a las empresas en condiciones de facturar, lo mismo que hacía Yerko Silva en la última fase evolutiva de la asociación, con la contribución de Juan Navarrete Vásquez, en relación con las empresas creadas entre fines de 2019 y el año 2020.

Por último, en lo que dice relación con las **sociedades Nova Spa y Olímpica Spa**, cabe destacar que Yerko Silva sostuvo, reiteradamente, que no las creó y que no tenía nada que ver con los socios ni con los vehículos inscritos con sus facturas, por ello, estas sociedades merecen un análisis diferenciado por cuanto ninguno de los medios probatorios ya ponderados se refieren a ellas ni a sus socios o representantes legales, Héctor Tapia Paillaqueo, Miguel Ángel Pardo Cortes, Jaime Toro Cares y Luis Beas Riveros.

De igual modo, tampoco se contó son eventuales declaraciones de estas personas ni figuraban en algún dispositivo de los incautados a los acusados o en alguna escucha telefónica incorporada al juicio de las interceptaciones a los blancos de la investigación.

Es más, el Ministerio Público en el alegato de clausura, para vincular a la sociedad NOVA con Yerko Silva y con la asociación, de manera muy escueta y superficial, en contraste con la gran batería de pruebas referentes a las demás sociedades, mencionó que Nicolás Chacón Navarro, quien figuraba como solicitante

en varios vehículos inscritos con facturas de la sociedad Nova, era a su vez socio de la empresa SOBRERUEDAS, la que se constituyó en abril de 2018, coincidente con transferencias efectuadas desde la cuenta de Claudia Sandoval a la madre de Sebastián Martínez Zavala, de lo cual, infirió que este último debió haber constituido Nova Spa tres meses antes, el 19 de enero de ese año.

Con respecto a la sociedad OLIMPICA, en el mismo sentido, el persecutor hizo presente que su fecha de constitución (agosto de 2018), coincidía con transferencias desde Claudia Sandoval a la madre de Martínez Zavala y a Franco Cruz y que el solicitante de casi la totalidad de los vehículos inscritos por esta empresa, correspondía al citado Nicolás Chacón Navarro, socio de la empresa SOBRERUEDAS constituida en abril de 2018, coincidente con transferencias desde Claudia Sandoval a la madre de Martínez Zavala.

Sin embargo, el tribunal constató que ni Nova ni Olímpica Spa aparecían en los cuadernos incautados a Martínez Zavala, quien sostuvo que anotaba en ellos todas las sociedades que hacía para Yerko como una metodología de trabajo, ni tampoco figuraban en los archivos y documentos contenidos en el pendrive de este, en definitiva, no se aportó ningún documento o evidencia que vincule a esas dos sociedades con Yerko Silva y la organización, por lo que el antecedente de que las fechas de transferencias y creación de las empresas coincidan, es circunstancial, no concluyente y carente de corroboración y, por tanto, no se dará valor a tal indicio, descartándose de este modo la hipótesis levantada por el Ministerio Público, en el sentido que estas empresas hayan sido constituidas por Yerko Silva y Sebastián Martínez Zavala.

Por lo demás, es relevante dejar sentado que la mayoría de los 46 vehículos inscritos por Nova Spa, y la totalidad de los 27 inscritos por Olímpica Spa, respecto de los cuales se acompañó prueba documental durante el juicio, no fueron encontrados ignorándose si realmente existieron, o bien se trata solamente de documentación obtenida para otros fines, como ya se examinó en su oportunidad.

Para concluir, resulta necesario mencionar otros antecedentes que permitieron establecer la relación de las empresas constituidas por la asociación, entre sí, y reforzaron aún más la hipótesis de que provenían de la misma mano, dejando en claro su falsedad y objetivo ilícito, ya que informaban los mismos domicilios, que se repetían en varias de ellas y, en algunos casos, como se verá, se presentaban los formularios 29 de declaración de impuestos los primeros meses, para conseguir burlar al sistema y continuar generando facturas por un tiempo más antes que se negara la autorización.

En síntesis, la testigo Carla Vildosola del SII, indicó que en el servicio hubo una recopilación de antecedentes previa que culminó en el informe N° 17 ARA3, relativo a empresas que hicieron inicio de actividades con datos falsos, proceso en que participó Yerko Silva Toro y algunos de sus cercanos.

Con su declaración se incorporó el **documento 23.3**, consistente en cartillas computacionales del Sistema Integrado de Cumplimiento Tributario (SICT), correspondientes a las sociedades y sus respectivos socios.

La testigo refirió que Valenzuela y Arce Spa tenía la anotación vigente que debía realizar verificación de actividad en oficina, lo que significaba que debía ir presencialmente y la dirección era Avenida Holanda N° 99, departamento 1101 en Providencia, arriendo notarial. Tenía autorización para emitir facturas electrónicas y la última emisión había sido en febrero de 2018. No presentó desde diciembre de 2017 a mayo de 2020 declaración de impuestos.

Añadió que Kor Spa, tenía dirección informada en José Córdova N° 4006 en La Granja, tenía Formularios 29 observados en agosto y septiembre de 2017, después en octubre de 2017 sin observaciones y no declaró hasta marzo de 2020.

Dijo que Astorga Spa, tenía dirección informada en Camino Melipilla 9160 en la comuna de Cerrillos, arriendo notarial. Formulario 29 con observaciones en abril de 2018 y no presentó más hasta septiembre de 2020.

Respecto de **Automotora Méndez Moya Spa**, señaló que tenía dirección informada en **Santo Domingo N° 4532 en Quinta Normal**, arriendo notarial. Formulario 29, en mayo y junio de 2018 y después no tiene.

Indicó que la Automotora Nova Spa, tenía su dirección en Francisco Bilbao N° 0160 de la comuna de Providencia, es un arriendo notarial. Emitieron facturas y notas de crédito, la última de fecha 29 de julio de 2018. Formulario 29 no declaró en enero de 2018 y observado desde febrero de 2018 a mayo del mismo año, después en junio de 2018 sin observaciones y en julio con observaciones, luego dejó de presentar formularios.

Manifestó que la Comercializadora Full Orión Ltda. tenía dirección en Los Pozos N° 6855, oficina 1056, de la comuna de Las Condes, como arriendo notarial. Factura electrónica: última vez el 27 de julio de 2017. Formulario 29 sin observaciones desde enero de 2017 a junio del mismo año y, después dejó de presentar los formularios.

En cuanto a la Compraventa de autos Orión Ltda., dijo que su dirección era Avenida Francisco Bilbao N° 8750, oficina 8898 de la comuna de Las Condes, arriendo notarial. Emitió la última factura el 14 de junio de 2017. También emitió notas de crédito electrónicas. Formulario 29 sin observaciones de enero a abril de 2017 y dejó de presentarlos.

Reseñó que Olímpica Autos Spa, con dirección en Lo Boza N° 431 de la comuna de Pudahuel, arriendo notarial, tenía la última factura de fecha 26 de noviembre de 2018. También emitió notas de crédito. Formulario 29 sin observaciones en abril de 2018, desde agosto a noviembre de 2018, con observaciones, y no presentó más.

También la Automotora Bilbao Spa, con dirección en Irrarázaval N°4790 de la comuna de Ñuñoa, arriendo notarial. La última factura emitida es de 4 de abril de 2019. Observaciones: negativa para timbraje,

porque no existe el domicilio, de fecha 3 de octubre de 2018. Formulario 29 con observaciones, en septiembre y octubre de 2018, después no tiene.

Con respecto a la **Automotriz Portillo SPA**, la última factura es de 19 de marzo de 2019, dirección informada, **Santo Domingo N°4536 en la comuna de Quinta Normal**. No presentó Formulario 29; y la **Automotriz Nuevo Laredo Spa**, dirección informada, **Santo Domingo N°4532 en la comuna de Quinta Normal**. La última factura es de 17 de mayo de 2019. Formulario 29 no presentó.

En lo referente a **Importadora Brunno Fritsch Spa**, la dirección informada es **Santo Domingo N° 4536 en la comuna de Quinta Normal**. Última factura es de 26 de junio de 2019. No presentó Formulario 29.

Señaló la testigo que **Comercial Gildemeister Spa**, tenía dirección en **Ahumada N° 312, oficina 715 en la comuna de Santiago** y no tenía Formulario 29. De igual modo, la **Automotriz Guillermo Morales Spa, informó el mismo domicilio**. Esta tenía la observación vigente que la verificación de actividad en terreno fue negativa, porque la oficina virtual no figuraba como contribuyente. Formulario 29 con observaciones en noviembre de 2019 y dejó de presentar. Finalmente, en el caso de la **Automotriz C. Hernández, se informó la misma dirección** y también tenía idéntica observación, que la verificación de actividad fue negativa, porque en el domicilio no se conocía al contribuyente. La última factura es de fecha 13 de febrero de 2020 y no presentó Formulario 29.

En consonancia con los documentos incorporados por Vildósola, los oficiales de caso tanto de la PDI como, en su momento, del SEBV de Carabineros de Chile, declararon que constituidos en terreno, los domicilios informados por estas empresas no existían o no correspondían a aquellas. Tal como lo atestiguaron los Capitanes de Carabineros Sebastián Silva Moraga y Verónica Aguayo Leal, a quienes les correspondió investigar las sociedades Orión, Full Orión y Kor, y Valenzuela y Arce, respectivamente, e incautar algunos de los vehículos inscritos por estas empresas.

Específicamente, Silva Moraga se refirió al **otro medio de prueba 530, fotografías 53, 54 y 55**, que correspondían a los domicilios asociados a las empresas antes mencionadas, relatando que concurrieron a la dirección informada de la sociedad Orión, y no existía ninguna empresa en dicho lugar, era un domicilio particular y no de empresa; también la dirección de Full Orión era un domicilio particular que no le correspondía; y por último, se concurrió al sector oriente de Santiago al domicilio de Kor SPA, y correspondía a un edificio en término de construcción que eran oficinas, pero que no correspondía a esta empresa.

IV.- Miembros de la asociación. Roles y funciones que desempeñaban en ella.

Que como se ha venido razonando, las múltiples y abundantes pruebas incorporadas con las declaraciones de los acusados, que dicen relación principalmente con las propias comunicaciones y contactos que habían entre ellos y los demás integrantes durante un extenso período de tiempo, en su gran mayoría reconocidas por estos dada su claridad y contundencia, sumado el mérito de las pruebas documentales, testimoniales y gráficas, que han sido valoradas en el contexto de los acápites anteriores de este

considerando, permitieron acreditar, en primer lugar, cómo un grupo de personas se organizaron bajo una estructura con cierta jerarquización para la consecución de objetivos ilícitos comunes.

En segundo lugar, que esta organización tenía un líder que ejercía funciones de dirección y coordinación, respecto de otras personas que cumplían roles ejecutivos y que ejercían determinadas funciones administrativas y operativas, bajo sus directrices, y adoptaban ciertas decisiones, respecto de otros sujetos que servían como testaferros o prestadores de servicios que se encontraban en las bases de la estructura.

Finalmente, que todos ellos contaban con el conocimiento acerca del objetivo ilícito, conforme a un plan o agenda delictiva, y a los medios necesarios para conseguirlo.

De todo ello, se pudo inferir la denominada “*afectio societatis*”, vale decir, la voluntad de los partícipes de pertenecer a la organización y de buscar los fines de esta, activa y coordinadamente.

Es así como, a modo de resumen de lo ya expuesto en las consideraciones precedentes, se acreditó que **Yerko Silva Toro** ejercía funciones de liderazgo y jefatura, a través de la información extraída de su celular, los progresivos de las escuchas telefónicas de algunos imputados que tenían sus dispositivos interceptados, como Albano Silva, Tatiana Arana y Freddy Miranda, los movimientos de las cuentas bancarias de terceros y propios que utilizaban, las evidencias materiales levantadas en los domicilios de algunos imputados, los testimonios de los oficiales de caso e incluso de los propios acusados, puesto que, sin perjuicio de las interpretaciones o apreciaciones que cada uno pudo tener acerca de las acciones que desplegaba o los hechos en que se vio involucrado, reconocieron, en términos generales, que trabajaban para Yerko, que éste era el dueño del capital y era quien pagaba a los colaboradores o distribuía las utilidades entre los asociados, y quien coordinaba e instruía los trámites y acciones a realizar y pedía reportes de ello, lo que no vino sino a corroborar la contundente evidencia que fue incorporada a lo largo de todo el juicio, respecto del rol de jefe que le competía.

En un siguiente nivel, dentro del círculo cercano y de confianza de la jefatura, se posicionaban **Claudia Sandoval Godoy, Daniela Espinoza Toro y Jeannette Toro Brenet**, quienes recibían, guardaban y administraban los dineros provenientes de las ganancias del negocio ilícito, denominadas policialmente “recaudadoras”, como quedó en evidencia en las escuchas telefónicas reproducidas y las cartolas de sus cuentas bancarias que registraban los movimientos desde y hacia los miembros de la asociación, corroborado con las declaraciones del propio Yerko Silva.

En otro escalón de la estructura organizacional, se encontraban aquellos que se dedicaban a **labores administrativas**, tales como, la constitución de las empresas falsas, emisión de las facturas de estas para la posterior reinscripción de los vehículos robados y de los demás documentos falsificados necesarios para su posterior venta, tal es el caso, de las homologaciones de revisiones técnicas y de los permisos de circulación. En estos roles participaban, como ya ha quedado acreditado con la prueba valorada con

antelación, principalmente, **Sebastián Martínez Zavala y Franco Cruz Iligaray**, pero también y en forma no excluyente, Ilich Chopá Aldana, Albano Silva Toro y Juan Navarrete Vásquez.

En la misma categoría, estaban los denominados **“brazos operativos”**, que se encargaban de las **funciones logísticas y ejecutivas** de la asociación que, en términos generales, consistían en recibir y guardar los vehículos robados, reclutar testaferros para la reinscripción de los mismos, coordinar los cambios de números identificatorios con los prestadores de estos servicios, reinscribir los vehículos en el Registro Civil y obtener las nuevas placas patentes, y en general todas las operaciones necesarias atinentes a la venta, transferencia y entrega de los vehículos con una nueva identidad a las víctimas estafadas.

Lo anterior de acuerdo a la prueba de cargo que ya se valoró y aquella que se examinará más adelante a propósito de cada vehículo vendido en particular.

Los miembros operativos que llevaban a cabo las tareas descritas correspondían a Albano Silva Toro, Edith Silva Sánchez, **Camilo Sandoval Godoy**, quien además tenía contacto directo con las personas que se dedicaban al robo de vehículos, para la adquisición u ofrecimiento de estos, delitos en los que también en ocasiones se involucraba directamente, **Tatiana Arana Espinoza, Freddy Miranda Arana (Yeyi)**, Ilich Chopá Aldana y Juan Navarrete Vásquez.

En otro peldaño de la estructura, se encontraban los individuos que prestaban servicios especializados a la asociación, **Aimel Gavilán Caro y Roberto Bascur Arancibia**.

Finalmente, en la base de la organización, se ubicaban personas, **denominadas “gomas” por los miembros de la asociación**, conocidos como testaferros o palos blancos, quienes por el pago de una suma de dinero, servían a los fines delictivos ya reseñados, particularmente, a la constitución de las sociedades de papel y/o a la reinscripción de vehículos robados e incluso para la venta de los mismos en su calidad de primer dueño.

En efecto, se comprobó que algunos miembros operativos de la asociación (Albano Silva, Edith Silva, Camilo Sandoval, Tatiana Arana, Freddy Miranda y Juan Navarrete), tenían la función de reclutar a personas (a veces en situación de calle o muy jóvenes) para hacerlas aparecer como socios de las empresas automotoras que constituían y para figurar como primer adquirente y/o solicitante de 1ª inscripción del vehículo como nuevo y sin uso, con las facturas de esas mismas empresas, a cambio del pago de una suma de dinero. En algunos casos, la misma persona reclutada era utilizada para ambos fines.

Lo anterior se encuentra acreditado con las escrituras de constitución de las sociedades y los formularios de solicitud de 1ª inscripción, algunos con pericia dactiloscópica adjunta; y los certificados de inscripción y anotaciones vigentes de los vehículos, concordantes con los oficiales de caso, en cuanto prestaron testimonio directo sobre este tópico y de oídas respecto de las declaraciones de estas personas.

Tal es el caso, entre otros, de los siguientes testaferros o “gomas”: Carlos Gómez Zúñiga (Valenzuela y Arce), Paula Astorga Orellana (Automotora Astorga), Nelson Aníbal Méndez Moya (Méndez

Moya Spa), Gustavo Viveros Viveros (Automotora Bilbao Spa), Julián Martínez Arriagada (Portillo y Nuevo Laredo), Hans Bravo Riveros (Importadora Brunno Fritsch), Eduardo Sanhueza Pérez (Comercial Gildemeister), Renán Guenteo Maliqueo (Automotriz C. Hernández), José Reinaldo Raiman Cordero, Avelino Tapia Rosas, José Alfredo Paredes Quevedo, Jorge Octavio Salinas Uribe, Luis Felipe Astudillo Peña (Raperito), Carla Leal Leal (Chelsie), Sindy Arancibia Muñoz, Alejandro Yáñez Recabal, Pablo Rojas Recabal, Carlos Latín Quezada, Daniela Carrasco Pérez, Jesús Gacitúa Candia, Marcos Supanta Aguilera, Jonathan Pérez Pérez, Leónidas Hernández Concha (Gualata).

El comisario Pedro Olivares, refiriéndose al cuadro gráfico demostrativo “OPERACIÓN TAP MOTORS”, que describía la vinculación entre los imputados y sus funciones dentro de la asociación, incorporado como **otro medio de prueba 86**, señaló que en él aparecían las personas que formaron parte de la investigación “industria del portonazo”, más otros que faltaban en dicho documento.

Ilustró que en la parte superior estaba **Yerko Silva Toro**, líder de la organización, porque todas las operaciones pasaban por su aprobación, cuando había una venta por efectuar o cuando había que pagar algún dinero, todo se le consultaba. Al lado, **Tatiana Arana Espinoza**, el brazo operativo más importante que tuvo en su momento Yerko Silva, porque apareció con vehículos inscritos a su nombre y como solicitante de 1a inscripción y dentro de las escuchas le decía a su hijo **Freddy Miranda Arana**, que se encuentra debajo de ella, dónde guardar los vehículos robados para después llevarlos al mecánico “tatuador” Aimel Gavilán. Tatiana era la persona que buscaba a los “palos blancos”, le pedía a su hijo que buscara gente y fue pareja de **Camilo Sandoval Godoy**, según las páginas de redes sociales. Añadió que Tatiana tenía el contacto con Aimel y con su hijo coordinaban la entrega de vehículos robados y Camilo Sandoval reclutaba a jóvenes para comprar los vehículos robados. Manifestó que **Luis Astudillo Peña** era una persona que efectuaba robos de vehículos y tenía comunicación directa con Tatiana.

Con respecto a **Claudia Sandoval Godoy**, refirió que a través de ella llegaron a Yerko, porque tiene una hija en común de nombre Emilia, siempre debía entregar plata a Freddy y a Tatiana, pues era ella la que recibía los dineros provenientes de la organización.

En relación con **Franco Cruz Iligaray**, mencionó que era cuñado de Jonathan González Queglas, otro imputado que fue formalizado con Ilich Chopa Aldana en una causa previa, que llevó Carabineros en la 8va Región, asociada a robos de vehículos y a la creación de empresas con facturas ideológicamente falsas. Dijo que Franco, en un comienzo, era la persona que entregaba facturas a la organización y con quien se generó el nexo para comenzar a conocer el negocio por parte de Yerko, porque éste conoció a Ilich y comenzaron a hablar de por qué estaba preso cada uno y a Yerko le pareció interesante el negocio de los vehículos.

Continuando con su exposición, indicó que bajo la estructura de Camilo Sandoval, estaban 5 personas, **Jorge Salinas Uribe**, de quien se hablaba en las interceptaciones (Jorge), y se logró individualizar

que era un sujeto muy cercano a la familia de Camilo (como hijo adoptivo) y que inscribía vehículos a su nombre, también como solicitante y, además, fue reconocido en algunas investigaciones.

Señaló que también aparecía **Roberto Bascur Arancibia**, que era la persona que tenía la empresa gráfica en María Pinto.

Además de **Brandon Muñoz Soto**, el que fue detenido con Camilo Sandoval y tenía antecedentes por “portonazos”, como asimismo, al momento de la detención, apareció otro sujeto, Luis Astudillo Peña apodado “raperito”, donde él en compañía de Carlos Henríquez –el que no aparece en la gráfica- y que también se dedicaba al robo de vehículos, hablaba con Tatiana y por instrucciones de Yerko le decía que debían salir del departamento, porque podrían llegar los Carabineros a allanar el domicilio, entonces, los tres se fueron al hotel Arcos para pernoctar esa noche y evitar la detención o que los llamaran a declarar por el vehículo en que andaba Camilo con Brandon. Añadió que personal policial fue al hotel y se informó a la Fiscalía en una imagen donde aparecían las tres personas antes señaladas en dicho hotel, lo que coincidía con los tráficos de llamadas y detención de Camilo.

Por otra parte, **Albano Silva Toro**, era administrador de Alto Machu Picchu y la Parrilla del Gaucho, que llamó la atención, porque con el pago de la grúa horquilla ingresaba dinero de hechos ilícitos al restaurante, asimismo, era un lugar de almacenamiento de autos, porque en la parrillada se visualizaron vehículos con encargo por robo y, también se usaba para mostrarlos, por ejemplo, según audios de Tatiana, se decía que ese vehículo está en la parrillada, lo que se confirmó al momento de generar los allanamientos respectivos, porque se encontró un vehículo Porsche robado.

Acotó que Yerko recibía visitas de Edith Silva, Claudia Sandoval, Freddy Miranda, Tatiana Arana y Bernardo Olguín. Había escuchas donde aparecía que tenían que ir a buscar unos números, entendiendo que iban a vender o generar una nueva empresa y para que diera el visto bueno.

Reseñó en lo que se refiere a **Ilich Chopa Aldana**, que al momento de su detención residía en la comuna de San Pedro de la Paz, y él junto a un equipo de la unidad lo detuvieron en su departamento, y se encontró en su domicilio un arma a fogueo, diversos celulares, placas patentes, una solicitud de 1ª inscripción y una baliza que dijo que era para una lancha, pero se podía usar en un vehículo. Enfatizó que lo más llamativo fue un desglose de los costos asociados a la venta de un vehículo: 1 “nave” 1 millón de pesos, certificado de homologación 50 mil pesos, tatuajes, Rocío, entendiendo que era tal vez el “palo blanco”, 100 o 200 mil pesos y al final el costo total, precio de venta y utilidad. La utilidad promedio por un vehículo de 15 millones era 8 millones, porque se compraban entre 600 a 1 millón de pesos.

En relación con **Edith Silva Sánchez**, explicó que, al principio se pensaba que era un “palo blanco”, pero se estableció un grado de amistad con Yerko porque lo visitó en varias oportunidades, según el enrolamiento de Genchi y, según las redes sociales eran amigos y, después, conversaban para saber cómo estaban. Edith era la persona que también reclutaba a personas para servir de testaferros.

Respecto de **Carla Leal Leal** apodada “la Chelsea”, expresó que era amiga de Tatiana y conocida de “Yeyi”, quien fue reclutada por Tatiana para inscribir un vehículo que posteriormente fue vendido a una víctima estafada.

Continuando con su relato, señaló que otra persona que apareció fue **Daniela Espinoza Toro**, hermana de Yerko, porque recibía dineros por parte de Claudia Sandoval y a quien se le levantó el secreto bancario y se obtuvieron las transferencias entre los imputados.

Con la declaración del oficial de caso Olivares, la Fiscalía introdujo una serie de progresivos en **otros medios de prueba 144** de interceptaciones telefónicas a Camilo Sandoval, Tatiana Arana y Claudia Sandoval, con las que se develaron claramente las conexiones y coordinaciones que había entre ellos para la concreción de sus tareas dentro de la organización y, además, el testigo hizo referencia al rol que desempeñaba Roberto Bascur Arancibia en la confección de los sticker con la serie de vin o chasis modificada.

Así cabe señalar, a modo ejemplar, que se reprodujeron los progresivos 5671 y 5672, de fecha 30 de noviembre de 2018, en los que conversaban Camilo Sandoval con Tatiana Arana, respecto a la venta de una camioneta blanca por menos plata y en el P. 5719, Tatiana llamó a Camilo, indicándole que “va a vender la hueá, ya que el otro no le dio respuesta y el guatón le dijo que la tirara en lo que sea” y en el P. 5801, le dijo “está lista la camioneta blanca”.

Respecto de estos audios, el testigo explicó que Tatiana Arana y Camilo Sandoval estaban tratando de vender un vehículo al que decidieron bajarle el precio y que tenían al efecto el visto bueno de Yerko Silva, lo que demostraba, a su juicio, la jerarquía dentro de la organización, Yerko Silva decidía si se vendía o no el vehículo. Agregó que hablaban de una Dominique, lo que permitió entender que Tatiana era la persona encargada de preparar al palo blanco en orden a qué decirle a los compradores. Agregó que Camilo estaba al tanto y le preguntaba a Tatiana qué había dicho Yerko, en el sentido de si se vendía o no el vehículo y además le instruía que tenía que estar clara con lo que le diría a la dueña de vehículo.

En el P. 5984 de la misma fecha, Tatiana llamó a Camilo y le dijo que necesitaba urgente plata para pagar una “nave”, porque Claudia se había ido para la playa. Necesitaba “1 luca o 2 lucas”.

Con relación a este diálogo, el testigo manifestó que Tatiana le avisaba a Camilo que le llegó una “nave”, es decir, un auto robado. Tatiana los recibía y los guardaba con su hijo “Yeyi” en Noviciado, donde vivía con el papá. Y a Claudia Sandoval le pedían la plata para pagarlo, quien era la persona encargada de recibir y entregar los dineros. Explicó que 1 luca en la jerga delictual se refiere a \$1.000.000. Y puntualizó que Tatiana, Freddy y Camilo andaban con lo justo, por lo que era siempre Claudia quien les entregaba dinero cuando lo necesitaban.

En el P. 7328 de 05.12.2018, Tatiana llamó a Camilo para que le dijera al “Jorge” que inscribiera y Camilo le respondió que le va a mandar las llaves con él, y que vaya a vender como le enseñó bien “Vivaldi” y que le vaya bien.

El testigo dijo que Jorge se refiere a **Jorge Octavio Ramírez Salinas**, quien vivía con Camilo y era como un “goma” que tenían, dentro del clan familiar, ya que hacía todo lo que le mandaban.

En el P. 7432 de 05.12.2018, Tatiana llamó a Camilo y le preguntaba por el Jorge, diciéndole que se había demorado “caleta” y andaba con la plata.

El testigo indicó que en esta conversación aparecía el nombre de “Rayo McQueen” y que Tatiana seguía en espera de las llaves de la blanca. Tatiana dijo que el “Rayo McQueen” ya la estaba esperando para que le llevara el auto (el testigo supuso que era un “tatuador” y que también había otro apodado “rulo”).

En el P. 11703 de 19.12.2018, Camilo llamó a Tatiana, y le dijo que estaba en la casa del “Raperito” (Luis Astudillo), cerca de donde se estaba haciendo el trabajo. Ella le respondió que esperara no más porque el hombre trabajaba bien (se refería al tatuador “Rayo McQueen”).

En el P. 11978 de 20.12.2018, NN llamó a Camilo Sandoval y le ofrecía uno a 700 mil.

El testigo indicó que Camilo, además de salir a robar vehículos, conocía a jóvenes que robaban vehículos. En esta conversación, explicó, lo llamó un NN que le preguntaba si le había gustado la última, ofreciéndole una del 2015 patente G, a lo cual Camilo le dijo que el precio era para él.

En tal sentido, el testigo refirió que Camilo no manejaba grandes sumas de dinero y que el NN le dijo que no la ofreciera, pues cuando llamaron en un momento a Camilo, le dijeron que iban a salir a robar, que llevaban dos e iban por el tercero.

Durante la investigación, prosiguió el testigo, se pudo establecer que Camilo sustraía vehículos, pues en los audios sujetos lo llamaban para saber si iban a salir a robar. En ocasiones prestó su vehículo para ese fin y, además, tuvo una detención flagrante por Carabineros.

Explicó que a Tatiana le habían sacado un auto de las cercanías de su domicilio, Yerko tomó conocimiento y les pidió que se fueran del departamento y que sacaran todo y se fueran a un hotel. En esa oportunidad, Carabineros detuvo a Camilo por receptación de vehículo motorizado.

En el P. 13221 de 23.12.2018, NN (voz de joven o adolescente) llamó a Camilo, y le dijo que andaba en bicicleta, que era del año y estaba impecable por dentro y por fuera, a lo cual, Camilo le pidió que le mandara una foto.

El testigo manifestó que de esta conversación se deducía que un NN le ofreció un auto, quedando en evidencia que Camilo ofrecía los vehículos, porque lo primero que le pedían a él era el kilometraje.

En el P. 5781 de 07.02.2019 a las 22:20 horas, Camilo llamó a NN y le dijo que le preguntara al cabro chico si lo pasaban a buscar al tiro, a lo que NN le dijo que rescataron recién una nave y que andaban trabajando en un Chery.

El testigo manifestó que este audio era una muestra de que Camilo se juntaba con jóvenes que robaban vehículos.

En relación con el P. 8063 de 17.02.2018 a la 01:07, el testigo señaló que quien hablaba era el “Raperito” (Luis Astudillo Peña), porque Camilo le pasó su teléfono a él, llamó a NN (Maxi) preguntando por este, a lo que le respondieron que iba en otro auto y que hablaba con un compañero del Maxi. Este le dijo que ya tenían una nave y que ahora iban por los “encargos”.

El testigo aseguró que Camilo mantenía los encargos de los vehículos y que los andaba robando. Acotó que, a propósito de la detención de Camilo junto con Brandon por parte de Carabineros, éste último estuvo en un centro del Sename y también estaba dentro del grupo de jóvenes que robaba vehículos. Observó que Camilo trabajó en el Sename, al parecer, como educador de trato directo.

En el P. 10147 de 24.02.2019, Tatiana llamó a Camilo para que le dijera al “Raperito” que necesitaba el nombre de su tía, para que ella hablara con el “bacán” (comprador) y dijo se hacía llamar “Paula” con todos los compradores.

El testigo explicó que en este audio quedó claro que Tatiana se presentaba como Paula en las ventas de los vehículos, lo que coincidió con los testimonios de las víctimas que la reconocieron con ese nombre, como la mujer que les vendió el auto.

En el P. 12601 de 04.03.2019, Camilo llamó a NN y le dijo “está todo coordinado y vendido”, y el testigo refirió que ello significaba que era un vehículo por encargo, que estaba todo hecho y que había que ponerle precio.

En el P. 12646 de 04.03.2019, NN llamó a Camilo preguntándole cómo le fue con la venta de los vehículos, contestando que los tiene listos, que los venderá a las 20:30. Le preguntó por la Duster y éste le contestó que la vendió en la mañana.

En el P. 13195 de 06.03.2019 a las 19:40, NN llamó a Camilo, y le preguntó si se robaba hoy o no. Camilo contestó que él no podía hoy, pero que le pasaba el auto al Raperito. NN le dijo que el Raperito no se afirmaba, que no le gustaba cruzar el auto.

El testigo comentó que este es un audio en donde un NN llama a Camilo y le pregunta si van a robar, a lo que éste le dice que no puede porque está con su hijo. Sin embargo, ofrece pasarle el auto al Raperito, y el NN le comenta que ayer el Raperito no había querido salir y lo dejó solo con el Maxi.

En el P. 521 de 09.05.2019, Camilo llamó a **Roberto Bascur Aracibia** (el tío), hablaron sobre los stickers y un flyer, ya que necesitaba promover un “after”.

El testigo indicó que hablaron de la confección de un sticker, le mandó las medidas pero había un problema, que tendría que verlo con un diseñador.

En el P. 634 de 09.05.2019, NN Ángelo llamó a Camilo y al respecto, el testigo indicó que Camilo, además de mandar a confeccionar los sticker para la organización, hacía negocios con estos ya que el NN precisamente le preguntaba por los sticker.

Respecto del P. 3202 de 20.05.2019 a las 19:22, el testigo refirió que el NN que llamó a Camilo, le dijo que le tiene 4 “naves”, por lo que, a su juicio, quedaba de manifiesto que estaba involucrado en la venta de los vehículos robados.

En el P. 3434 de 22.05.2019, el mismo NN que el audio anterior llamó a Camilo y al respecto, explicó el testigo que el NN le dijo a Camilo que le dejarían el auto en el estacionamiento, pero que se quedaba con las llaves hasta que le pagaran el dinero, que no era por él, sino que por los “cabros”, que ya había varios enredados.

Continuando con los audios de las interceptaciones telefónicas contenido en OMP 144 (transcripciones OMP 330), el persecutor reprodujo los progresivos, de diversas fechas de febrero, abril, mayo y junio de 2019, que se referían a conversaciones entre Tatiana Arana, Freddy Miranda y Claudia Sandoval y de ellos con terceros (raperito, Carlos Hernández, Franco Cruz), en términos generales, en el contexto de los sucesos de la detención de Camilo Sandoval, del retiro de un vehículo del lugar de residencia de Tatiana y de las instrucciones que impartió Yerko Silva de salir del departamento de esta y llevarse todo ante un eventual allanamiento y que en caso de cualquier inconveniente dieran el nombre de Ilich Chopa. También los audios incorporados daban cuenta de las conversaciones y coordinaciones habidas entre los miembros de asociación ya nombrados, en la época en que Yerko Silva fue trasladado al penal de Puerto Montt quedando incomunicado, para efectos de darle continuidad a las operaciones del rubro delictual.

De este modo, relevante es destacar el **P. 8909 de 13.06.2019 a las 13:15**, en que Freddy llamó a Franco, para ponerse de acuerdo para acompañar los dos a la “Chelsea” (Carla Leal Leal al Registro Civil a inscribir un vehículo).

Al respecto, el testigo señaló que estaban coordinando la solicitud de 1ª inscripción de la camioneta blanca, indicando que el grupo investigativo estaba trabajando con teléfonos clones, por lo que podían seguir los movimientos de los intervinientes, por ello, algunos oficiales se fueron al Registro Civil de Cerro Navia donde se efectuaría la inscripción.

En el otro medio de prueba 314, reconoció las fotografías que se obtuvieron en dicho lugar, el mismo día, donde se realizó una vigilancia por parte de algunos oficiales, describiéndolas e identificando a Freddy Miranda Arana junto a Carla Leal Leal (Chelsea) y el vehículo uber en que llegó Franco Cruz, estableciéndose que concurrieron los tres a realizar la diligencia al Registro Civil.

En el P. 6001 de 04.06.2019, Freddy llamó a Claudia Sandoval, contándole la conversación que tuvo con Sebastián Martínez Zavala, en que le solicitó las claves de las empresas de Yerko para facturar (P. 5996 del mismo día) y esta le señaló que a la tarde le iba a depositar apenas llegara a la casa. Freddy le comentó que todos los gomos de las empresas eran amigos de él, que se cayeron las empresas, porque a su amigo lo llegaron a buscar y cargó a Ilich Chopa porque él tenía antecedentes por esa hueá.

El testigo refirió que con el presente audio se podía ratificar que Claudia movía los dineros de la organización, ya que Sebastián pedía dinero a cambio de las claves de las empresas constituidas y ella le dijo a Freddy que mandara la cuenta.

En el P. 6386 06.06.2019, Tatiana hablaba con Freddy, ella le decía que hablara con Franco, él que ya se le había pagado el permiso a la camioneta, ella le dijo que estaba pata, y él que ella iba a recibir 2 millones y medio y él una luca. Freddy le comentaba que había que ir a buscar esa hueá para facturarla, el Franco tiene que hacerla, el tío pollo le mandó una hueá pa afuera, **le mandó una nota escrita a él y a Franco, donde decía que siguieran trabajando que hicieran la pega profesional**, que le manda saludos, le pedía que no lo dejara botado, que si él estaba bien él (Freddy) iba a estar mejor, luego, le dijo a Tatiana que no lo iba a dejar (a Yerko). Por último, Freddy le dijo que le pidió a Sebastián que le mandara las empresas y las claves, él le cambió la clave y se la mandó a Franco, que estaban trabajando con una empresa antigua, y que no huevee al Franco porque no tienen goma.

El testigo indicó que en este audio Tatiana demostraba un poco su enojo con Yerko porque la tenía “botá”, Freddy le decía que pronto le iba a salir un negocio con una camioneta, también le contaba que estaban trabajando con una empresa antigua –que correspondería a Brunno Fritsch- y que habló con Franco sobre el tema de las claves.

Precisó que, encontrándose Yerko Silva en Puerto Montt, seguían las comunicaciones con sus colaboradores en Santiago.

Con la declaración del oficial de caso Daniel La Regla, se incorporó el testimonio que dio **Franco Cruz Iligaray**, en presencia de su abogado defensor y ante los fiscales de la causa, que ratificó parcialmente los dichos de Yerko Silva e Ilich Chopa, y señaló que en un principio comenzó a trabajar con ambos para después quedarse más permanentemente con Yerko, reconociendo su participación en la organización pero limitada a la confección de homologaciones de revisión técnica, por pagos entre \$50.000 y \$100.000, y en cuanto a las facturas habría realizado solamente dos e indicó que conocía a Juan Navarrete porque trabajaba con Yerko, al igual que a Aimel Gavilán, quien era el mecánico que hacía las modificaciones en los números de chasis y motor.

El testigo La Regla también revisó y analizó el contenido del teléfono celular de Camilo Sandoval Godoy, incautado por Carabineros en el procedimiento por receptación del vehículo St. Wg. Nissan Qashqai, de color blanco. Refirió que ordenó la información en anexos, los audios e imágenes, y la información

obtenida permitió que se le vinculara con otros antecedentes de la investigación para armar historias de vehículos y determinar que se involucraba en robo de vehículos.

Explicó que los audios de whatsapp fueron cotejados con los progresivos de las interceptaciones telefónicas a su respecto, determinándose que intercambiaba información con terceros y con el propio Roberto Bascur acerca de los sticker de los vehículos que este confeccionaba.

Relacionado con lo anterior la Fiscalía incorporó en **OMP 330** imágenes de transcripciones de las conversaciones de los progresivos siguientes:

P. 5340 de 01.02.2019, en que Camilo llamaba a Roberto Bascur Arancibia, lo trataba de “tío”, señalándole que había mandado a imprimir el mismo con una R, “pero este cabro se equivocó”, es de la misma medida “pero cambia una letra”, y se lo envió. Camilo le preguntó si lo podía tener para mañana y lo iba a buscar donde él dijera. Bascur le dijo que tenía que ser en María Pinto, a lo que Camilo le respondió que es urgente porque tenía el vesta sin parabrisas, por lo que insistió si podía ser para hoy.

Expuso el testigo que este llamado marcó otro hito en la investigación, ya que les permitió establecer quien era la persona que entregaba los sticker a la organización y hablaban sobre un error en una letra y estaban prontos a cerrar un negocio, por eso, necesitaba la corrección del sticker con urgencia.

Respecto de **Roberto Bascur Arancibia**, el testigo refirió que fue detenido en esta investigación y se le incautaron varios dispositivos digitales y una impresora para hacer impresiones gráficas. Se le tomó declaración en presencia de su abogado defensor y dijo que conocía a Camilo Sandoval a través de su padre, ya que vivían juntos en la comuna de Pudahuel, que hace 35 años se dedicaba a las impresiones gráficas en su domicilio, en formato de papel, flayer y cualquier tipo de impresión. En el año 2018 o 2019 Camilo lo contactó, contándole que se encontraba trabajando restaurando vehículos chocados y para ello necesitaba imprimir sticker y modificar los modelos de estos. Señaló que le hizo varios y le cobraba por cada uno \$5.000, desconociendo que eran para un fin ilícito. Le entregaba los sticker de manera presencial y él se limitaba a hacerlos de la forma, tamaño y contenido que le indicaba Camilo.

El testigo reiteró que Bascur hizo entrega voluntaria de un celular, un notebook y una CPU, señalando que en esta última existía información sobre los trabajos que le encargaba Camilo Sandoval, específicamente, en intercambios de correos electrónicos.

Por otra parte, La Regla manifestó que **Luis Astudillo Peña** era un contacto que mantenía Camilo Sandoval, al parecer tenían una relación de amistad o trabajo, el que prestó declaración el año 2021, en calidad de imputado ante el Ministerio Público. Éste dijo que conocía a Camilo Sandoval desde cuando él se encontraba en el Sename, éste era profesor de educación física, y en el año 2018 conoció a su pareja Tatiana Arana. Indicó que Ilich era el que manejaba el tema de las empresas para transformar los autos, este negocio se lo enseñó a Yerko Silva, quien junto a Camilo se dedicaron a este negocio. Mencionó que Yerko con Camilo tuvieron algunos problemas personales, por lo que Yerko comenzó a trabajar con Tatiana Arana y

Camilo se habría independizado pero continuó con los delitos. Reconoció que inscribió varios autos a su nombre acompañado de Camilo Sandoval y Tatiana Arana, sabía que estos autos eran robados y que después se transformaban en lícitos, cada vez que los inscribía le pagaban \$40.000 o \$50.000.

El testigo añadió que Astudillo declaró, además, que con Camilo, Brandon y Luchín, salían a robar juntos, pero él solamente rompía ventanas de autos estacionados, indicó que Camilo participaba en robos con intimidación en compañía de estos sujetos, en ocasiones, Camilo y Tatiana no tenían personas para inscribir vehículos, por lo que le pidió a su tía Claudia Astudillo, la que realizó algunas inscripciones.

Por último, indicó Astudillo que participaba en algunas ventas de los vehículos y se refería a ello usando la palabra “enganche”, es decir, realizaba algunos trámites para vender los vehículos y recibía entre \$100.000 y \$200.000 por vehículo.

Con el análisis del contenido del celular incautado a Camilo Sandoval Godoy (fotografías, audios, contactos, llamadas entrantes y salientes); y del computador de Roberto Bascur, fue posible determinar las conexiones y vinculaciones permanentes que tenía Sandoval Godoy, en el contexto de las actividades ilícitas a que se dedicaba la asociación, con otros integrantes, como Luis Astudillo Peña (raperito); Jorge Salinas Uribe; Roberto Bascur Arancibia (encargado de hacer lo sticker modificados a solicitud de Camilo y de acuerdo a sus indicaciones); y Aimel Gavilán Caro (encargado de modificar los números de vin y motor en los vehículos).

Ahora bien, en lo que concierne a su relación con Ilich Chopá Aldana, se estableció que mantuvieron contacto durante el tiempo en que operó la asociación, a través de las imágenes extraídas de su celular (un video y captura de pantalla en OMP 476) en las que aparecía Chopá, relacionadas con el rubro delictivo de la organización, y también como se demostrará con las evidencias que serán analizadas a propósito de cada automóvil en particular, donde ellos estuvieron involucrados. Y en el caso de Yerko Silva Toro, con la prueba examinada quedó de manifiesto que desde un principio tuvo contacto con él, directa o indirectamente a través de su pareja Tatiana Arana, colaborando y beneficiándose del negocio ilícito de la asociación y en definitiva participando en ella con total conocimiento y voluntad, respecto de los fines delictivos perseguidos, los medios y operaciones para concretarlos y las personas que se encontraban involucradas.

Las probanzas rendidas en contra de Sandoval, a mayor abundamiento, fueron corroboradas con los atestados de **Tatiana Arana Espinoza**, introducidos por la inspectora Raquel Forero, quien señaló que se le tomó declaración el 14 de diciembre de 2020 ante el Ministerio Público, y esta explicó cómo llegó a tener un vínculo con los integrantes de la asociación, refiriendo que conocía hacía 4 años, aproximadamente, a Claudia Sandoval, pareja de Yerko Silva Toro, a quien le decía “pollo” y lo conoció en el año 2017 cuando fue con Claudia a visitarlo a la cárcel de Arica. Además, dijo que mantuvo una relación amorosa con Camilo Sandoval Godoy, hermano de Claudia y que en el año 2018 comenzó a trabajar con Camilo, quien trabajaba con Yerko e Ilich Chopá.

Cabe señalar que la inspectora Raquel Forero, además, introdujo el testimonio de **Claudia Sandoval Godoy**, que resultó de suma relevancia, a modo de corolario de la existencia de la asociación, los roles de sus miembros y sus funciones, incluidas aquellas que le correspondió desempeñar como integrante de esta organización liderada por su pareja.

De este modo, ratificando la declaración de Yerko Silva y la prueba de cargo, en síntesis, Claudia Sandoval reconoció que Yerko, su ex pareja, le solicitó que le facilitara sus cuentas bancarias, específicamente, del Scotiabank y la cuenta Rut del Banco Estado para recibir dineros y depósitos provenientes de la venta de los vehículos clonados, que eran realizados por Tatiana, Albano y Freddy. Acotó que Ilich Chopa trabajaba con Yerko.

También señaló que cuando quebró el restaurante Alto Machu Picchu, Yerko le pidió que hiciera una sociedad con la pareja de Albano Silva, Paula Becerra, denominada “SyB”, en la cual el capital indicado nunca existió siendo los antecedentes aportados falsos. Asimismo, indicó que cuando Yerko fue trasladado de centro penitenciario por el caso de las celdas Vip, su relación ya había terminado. No obstante, le ofreció que podía contar con su apoyo para ser el nexo con el exterior.

Claudia Sandoval admitió que, principalmente, dentro de la organización era quien recibía los dineros provenientes de la venta de los vehículos y que después de constituida la sociedad “SyB” se cambió el giro del negocio a las parrilladas el gaucho, para lo cual Yerko realizó una inversión de aproximadamente 30 millones, haciendo presente que todos estos hechos y el aporte de dinero ocurrieron mientras él se encontraba privado de libertad, y que el dinero que ella recibía en sus cuentas, que provenía de la venta de vehículos clonados, también era invertido en ese local y que su administración estaba a cargo de Albano Silva Toro.

En su declaración, Claudia también refirió que esos dineros, en muchas ocasiones, eran administrados por Daniela y Jeannette, la hermana y madre de Yerko, respectivamente.

Ahora bien, en lo que compete a la participación de estas personas, el comisario La Regla se refirió a la declaración que prestó **Jeannette Toro Brenet**, en presencia de su abogado defensor, ante los fiscales de la causa, y señaló que, en síntesis, expuso que en el año 2016 se enteró que su hijo Yerko que había sido detenido por tráfico de drogas y se mantenía recluido en Santiago 1. Indicó que terminó su relación con Ingrid y apareció una nueva pareja, Claudia Sandoval Godoy, quien no mantenía trabajo estable, por lo que recibía todos los dineros de Yerko, quien se los entregaba para que se los guardara y los administrara conjuntamente con Yerko. Contó que cuando terminaron su relación, en los trámites de separación, Yerko le pidió a ella y a su hermana, que fueran a buscar a la casa de Claudia, ocho millones de pesos en efectivo, monto que posteriormente le devolvieron a Claudia por instrucción del propio Yerko. Reconoció que en el año 2017, después que terminaron con Claudia, ella con su hija Daniela, comenzaron a administrarle los dineros a solicitud de Yerko, lo que estuvieron haciendo aproximadamente por 3 años. Aseveró que Yerko le dijo, en un principio, que no serían movimientos superiores a 5 millones, pero esto no se cumplió. Añadió que Yerko fue

trasladado a Puerto Montt donde tuvo una nueva pareja y en el año 2020, ellas ya no le administraban los dineros a Yerko, pues lo hacía su nueva pareja.

El testigo La Regla hizo hincapié en que Jeannette Toro, reconoció que había cometido un error, pues sabía que todos los dineros que recibió de Yerko eran de origen ilícito, pero no sabía si eran del tráfico de drogas o de otro delito y que le prestaba las cuentas bancarias, pero quien administraba los dineros era su hija **Daniela Espinoza Toro** (La que compareció a estados durante el juicio pero se acogió a su derecho de no declarar, dispuesto en el artículo 302 del Código Procesal Penal, en virtud del vínculo de parentesco con Yerko Silva Toro).

Concordante con los atestados de Jeannette Toro, se exhibió la **evidencia material 76**, incautada el 16 de octubre de 2020 en su domicilio a Daniela Espinoza Toro, correspondiente a una libreta de notas de color rojo, que precisamente contenía una serie de montos, cálculos, depósitos y transferencias relativas a dineros de Yerko Silva Toro.

Al respecto el testigo fue incorporando el contenido relevante y atingente al tópico en examen, y el tribunal pudo imponerse directamente al revisar la evidencia, que en la primera hoja aparecía escrito “cuentas de Yerko” y abajo distintos montos y su concepto, por ejemplo, \$1.000.000 depósito, menos \$10.000 baterías, menos \$20.000 adrián, menos \$50.000 pago tele, menos \$20.000 plata entrada. En otras páginas, aparecían permiso de circulación y seguro obligatorio. En otras, “platas de Yerko” \$530.000 plata, menos una serie de montos, entre ellos, \$50.000 Aimer. También “cuenta gordos” 23 julio, \$600.000 menos \$50.000 plata yasna duplicado y menos \$120.000 Claudia colegiatura y visita. Además, “Platas de Yerko” y el detalle, menos \$60.000, gasto funeral flores y comida, \$20.000 gasto uber adrián y se tiene efectivo \$8.900.000. En otra hoja, aparecía “Calculo” \$5.389.845, menos \$2.000.000 depósito, menos Tatiana \$270.000, menos hipódromo \$50.000, igual \$1.270.282, menos \$160.000. En otra, “Pagos Yerko” 15 de noviembre, \$8.000.000 y un listado de gastos de distintos montos. Asimismo en otra página, “Cuentas Yerko” 29 de diciembre, \$6.250.000 y un listado de una serie de gastos y aportes de distintos montos. Finalmente, en una última hoja, aparecía escrito \$6.240.000 de 1 de enero de 2020, y un listado de gastos y aportes, entre los cuales, figura \$100.000, 1ª transferencia Jesús 3.01.2020 y \$650.000 transferencia Jesús 3.01.

Puntualizó el testigo La Regla que, de acuerdo a lo señalado por doña Jeannette en su declaración, a solicitud de Yerko se le hacían transferencias a Jesús, por montos de \$200.000 a \$500.000, cada 15 días. (Lo que tiene lógica pues ese dinero iba directamente a él, a la cuenta súper digital del Banco Santander a nombre de Jesús Gacitúa Candia que Yerko manejaba de manera exclusiva).

V.- Existencia de los medios materiales a disposición de la asociación para llevar a cabo el plan delictual.

Como ha quedado acreditado con la prueba analizada y ponderada en los considerandos y acápites anteriores de este fallo, la asociación contaba con un capital inicial, aportado por su líder Yerko Silva Toro, y

con sus operaciones fue generando importantes ganancias y recursos económicos, que le permitió crecer y mantenerse vigente a lo largo de casi cuatro años.

Además, tenía acceso a servicios especializados proporcionados por Aimel Gavilán y Roberto Bascur, cada uno con sus instrumentos y herramientas para ejecutar las labores encomendadas.

Contaban con lugares para guardar los vehículos robados y modificarlos, para exhibirlos y venderlos, así como con acceso a las plataformas de internet donde se creaban cuentas para ofertarlos y hacer los contactos con futuros compradores y también se constituían las sociedades (empresaneundia.cl), se realizaba la iniciación de actividades y se emitían las facturas (misii.cl)

Incluso tenían los medios para lavar el dinero ilícito obtenido con las ganancias de la venta de los vehículos robados, a través de un local comercial donde funcionaba un restaurante, inicialmente denominado “Alto Machu Picchu” de comida peruana y posteriormente, “La Parrilla del Gaucho”.

II.- EN RELACIÓN CON EL DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97 N°23 DEL CÓDIGO TRIBUTARIO.

DUODÉCIMO: Elementos del tipo penal.

Que el artículo 97 N°23 inciso 1° del Código Tributario prescribe “el que maliciosamente proporcionare datos o antecedentes falsos en la declaración inicial de actividades o en sus modificaciones o en las declaraciones exigidas con el objeto de obtener autorización de documentación tributaria, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo y con multa de hasta ocho unidades tributarias anuales”.

Conforme a dicha norma, en relación con los elementos del tipo penal aludido, respecto del sujeto activo del delito, puede tratarse de cualquier persona (delito común), quien debe obrar maliciosamente, es decir, con dolo. El verbo rector de la conducta típicamente relevante consiste en suministrar o proporcionar datos o antecedentes falsos. Dicha falsedad puede, indistintamente, ser ideológica o de carácter material. Finalmente, la acción maliciosa debe materializarse en determinadas declaraciones, como lo sería la declaración inicial de actividades, o bien, aquellas que son requeridas con la finalidad concreta de obtener documentación de carácter tributario.

Es importante destacar que se trata de un delito tributario ordinario que entraña una maquinación fraudulenta en el falseamiento del estado inicial. Es de mera actividad porque no exige la obtención de un resultado o de un perjuicio fiscal. La sola verificación dolosa de las falsedades típicas ante el ente recaudador y fiscalizador, permiten afirmar la consumación del delito. Lo anterior, por cuanto lo que se resguarda, en definitiva, es la función estatal en orden a realizar sus actividades de fiscalización respecto del contribuyente con información verdadera, no solo para asegurar el pago de tributos, sino también para prevenir el uso de giros comerciales sin correlato en la realidad y cuyo propósito, en última instancia, apunta a disfrazar de un halo de realidad y/o legalidad, actividades inexistentes, ilícitas o contrarias al ordenamiento jurídico.

I.- Decisión condenatoria respecto de los acusados Yerko Silva Toro y Juan Navarrete

Vásquez:

En el contexto del proceso delictivo llevado a cabo por la asociación ilícita, se verificaron los presupuestos fácticos del delito tributario por el cual se acusó a Yerko Silva Toro, Juan Navarrete Vásquez y Camilo Sandoval Godoy, los que se dieron por acreditados en el veredicto y tal como se señaló en la letra d) del considerando décimo de esta sentencia, a saber, que los acusados **Yerko Silva Toro y Juan Navarrete Vásquez** proporcionaron antecedentes y datos falsos al Servicio de Impuestos Internos en la iniciación de actividades de las empresas falsas que crearon utilizando testaferros o “palos blancos”, como socios, con el fin de obtener autorización para documentación tributaria, puntualmente, facturas. Estas acciones las ejecutaron respecto de algunas de las sociedades automotoras “de papel” señaladas en la acusación y en distintos períodos de tiempo, así como también participaron en esta labor otros integrantes, tales como, Sebastián Martínez Zavala y Franco Cruz Iligaray.

En concreto, Yerko Silva y Juan Navarrete se involucraron en la creación de algunas de estas sociedades, poniendo a “palos blancos” o testaferros que reclutaban como socios por un pago monetario, indicando domicilios inexistentes o que no correspondían, con aportes de capital falsos, y para el único fin de iniciar actividades y obtener facturas, lo que hacían a través de las plataformas de internet del Ministerio de Economía y del Servicio de Impuestos Internos abiertas al público.

Como ya se vio, en los motivos anteriores, el tribunal estableció que las sociedades que fueron constituidas y utilizadas por la asociación para su objetivo delictual, en orden cronológico según su nacimiento, fueron las siguientes:

- 1) Compraventa de automóviles Orión Limitada, creada el 27 de diciembre de 2016;
- 2) Comercializadora Full Orión Limitada, creada el 31 de diciembre de 2016;
- 3) Automotora Kor Spa, creada el 28 de julio de 2017;
- 4) Automotora Valenzuela y Arce Spa, creada el 29 de noviembre de 2017;
- 5) Automotora Astorga Spa, creada el 22 de marzo de 2018;
- 6) Automotriz Méndez Moya Spa, creada el 25 de abril de 2018;
- 7) Automotora Bilbao Spa, creada el 24 de septiembre de 2018;
- 8) Automotriz Nuevo Laredo, creada el 07 de enero de 2019;
- 9) Automotriz Portillo, creada el 07 de enero de 2019;
- 10) Importadora Brunno Fritsch, creada el 27 de marzo de 2019;
- 11) Automotriz Guillermo Morales Spa, creada el 27 de septiembre de 2019;
- 12) Comercial Gildemeister Spa, creada el 20 de enero de 2020;

13) Automotriz C. Hernández, creada el 30 de enero de 2020; y

14) Automotriz Soliste Spa, creada el 30 de junio de 2020.

Además, resultó acreditado que a fines del año 2016, las primeras empresas falsas o “de papel” con las que comenzaron a operar Yerko Silva e Ilich Chopa, para la reinscripción de los vehículos robados y obtención de nuevas placas patentes, vale decir, **Orión Ltda., Full Orión Ltda. y Kor Spa**, fueron constituidas por Ilich Chopa Aldana con la colaboración de Franco Cruz Igaray, quienes proporcionaron las facturas a Yerko Silva a fin de poner en marcha el plan delictual ya conocido.

Con posterioridad, entre los años 2017 y 2019, se incorporó a la organización Sebastián Martínez Zavala, un sujeto que realizaba trámites de contabilidad y que era conocido de Albano y Yerko Silva Toro, quien asumió el rol de constituir las empresas, a solicitud y bajo las instrucciones de Yerko Silva, y hacer la iniciación de actividades y la facturación conjuntamente con Franco Cruz Igaray e Ilich Chopa Aldana. Tal es el caso de las empresas **Valenzuela y Arce, Automotora Astorga, Méndez Moya, Bilbao, Portillo, Nuevo Laredo y Brunno Fritsch**. Así quedó de manifiesto con las múltiples conexiones que había entre los tres imputados nombrados con Yerko Silva y Albano Silva, que constaban y se desprendían de las anotaciones de las libretas y cuadernos de Sebastián Martínez, documentos de pago de las firmas electrónicas efectuado por Ilich, fotografías de la cédula de identidad de los testaferros en los dispositivos de Yerko y Albano, y escuchas telefónicas, entre otras evidencias, todas ellas ya expuestas y valoradas en el considerando anterior, acápite de la constitución de las empresas.

Más adelante, a contar de fines del año 2019, en la última etapa de funcionamiento de la asociación, la generación de las sociedades estuvo a cargo de Yerko Silva Toro con la colaboración de sus brazos operativos, Juan Navarrete Vásquez y su hermano Albano. En este período se crearon las empresas **Guillermo Morales, Comercial Gildemeister, Automotriz C. Hernández y Automotriz Soliste**.

Dentro de este proceso, Sebastián Martínez Zavala falsificaba poderes notariales amplios para representar a las sociedades y a sus representantes legales (“gomas”), para obtener las claves del SII y hacer las gestiones necesarias para dejar a las empresas en condiciones de facturar. Estas gestiones también las hacía Yerko Silva, en la última fase evolutiva de la asociación, con la contribución de Juan Navarrete Vásquez y Albano Silva Toro, en relación con las empresas creadas entre fines de 2019 y el año 2020.

Asimismo, se acreditó que la totalidad de las empresas fueron creadas por internet en la plataforma del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo denominada “tuempresaneundia.cl”, cuyos procedimientos y pasos para generar una sociedad, fueron enseñados por la inspectora Raquel Forero, que ilustró al tribunal acerca de la facilidad y uso amigable de la página web para dicho fin, lo que concordó con lo declarado en estrados por Martínez Zavala, en cuanto a que la creación de este tipo de sociedades en la plataforma referida era “súper fácil” y cualquiera podía hacerlo, agregando que Yerko conocía perfectamente el sistema,

y reconoció finalmente que este le encargaba la generación de empresas con los datos de personas y demás necesarios, porque él se encontraba privado de libertad.

Por otra parte, también prestaron su testimonio dos notarios públicos en estrados, en cuyas notarías se adquirió la firma electrónica para suscribir el acto constitutivo de las sociedades Méndez Moya Spa, Importadora Brunno Fristch Spa y Automotora Bilbao Spa (Zarella Camerotto y Lorena Quintanilla) y dieron cuenta acerca del proceso de firma electrónica por parte del notario, que se realizaba en forma presencial con los socios y representantes legales y, asimismo, se contó con los atestados de los funcionarios de las entidades certificadoras de identidad para firma electrónica avanzada (Miguel Ángel Robles de Certinet y Priscila Pérez Vega, de E-Cert Chile), que debía adquirirse precisamente para constituir las sociedades en la misma plataforma y posteriormente poder facturar con ellas, y señalaron que el socio debía concurrir personalmente a las oficinas de estas empresas y pagar previamente el costo de la firma.

Todos los testigos citados, indicaron que la sociedad una vez firmada, ya contaba con un Rut, con el cual se efectuaba la iniciación de actividades, trámite que podía verificarse en forma presencial en el SII o bien, por internet, a través de la plataforma del mismo Servicio, obteniéndose así las claves de la sociedad y de los socios y representantes legales, que les habilitaba para emitir facturas, una vez que se encontrara validado el domicilio, que podía ser positiva o positiva condicional y en ambos casos, se les autorizaba una cierta cantidad de folios que equivalían a las facturas.

En el caso de las sociedades **Valenzuela y Arce, Automotora Astorga, Méndez Moya, Bilbao, Portillo, Nuevo Laredo, Brunno Fritsch, Guillermo Morales, Comercial Gildemeister, Automotriz C. Hernández y Automotriz Soliste**, Yerko Silva Toro proporcionó los datos y antecedentes falsos relativos a la persona de los socios, el objeto de la sociedad, su domicilio y el capital aportado, con total conocimiento de que eran ficticios o falsos y con el único fin de obtener facturas para cometer delitos y defraudar con ellas a terceros de buena fe, en la medida que indujo a otros miembros de la asociación ilícita, como quedó establecido, Sebastián Martínez Zavala, Juan Navarrete Vásquez y Albano Silva Toro, a reclutar testaferros (gomas) para que fuesen socios de las empresas, a conseguirse domicilios falsos o inexistentes para informarlos al SII como pertenecientes a la sociedad y, en general, a incorporar otros datos falsos en las escrituras de constitución.

Es importante destacar, que se estableció la falsedad de los domicilios pues no correspondían a las empresas ni estas tenían relación alguna con ellos ni con sus propietarios, además, en algunos casos, el mismo domicilio era utilizado para varias sociedades, a modo ejemplar, la Automotora Méndez Moya Spa informó domicilio en Santo Domingo 4532 de Quinta Normal, mismo domicilio informado por Nuevo Laredo Spa. La Automotriz Portillo Spa, informó domicilio en Santo Domingo 4536 de Quinta Normal, mismo que el de Importadora Brunno Fritsch Spa, y las Automotoras Comercial Gildemeister Spa, Guillermo Morales y C. Hernández, informaron la misma dirección de Ahumada 312, oficina 715, Santiago Centro.

Por último, todos estos antecedentes falsos Yerko Silva los entregaba a quienes hacían el trámite de declaración inicial de actividades, ya sea directamente en la plataforma del SII o de manera presencial en esa entidad pública.

Cabe señalar que en el caso de Juan Navarrete y Albano Silva, fueron entrenados e instruidos por Yerko, a quienes les enseñó el uso de las plataformas digitales, y a realizar las gestiones y trámites pertinentes de la manera como se observó en el video instructivo o tutorial, y se escuchó en los audios de whastapp, extraídos de su celular.

En efecto, Juan Navarrete Vásquez, con los datos y antecedentes falsos entregados por Yerko Silva en el acto constitutivo de las sociedades, concurría a la Notaría acompañando a los “gomas” a suscribir la escritura respectiva, obteniendo códigos o claves provisorias para el SII, con pleno conocimiento que tales gestiones tenían por finalidad conseguir las facturas, previa iniciación de actividades de la sociedad en dicho Servicio.

Tal es el caso de **Comercial Gildemeister Spa, creada el 20 de enero de 2020**, respecto de la cual, reclutó a su único socio Eduardo Sanhueza Pérez y la escritura de constitución fue encontrada en el vehículo Nissan Qashqai, ya reinscrito y que estaba a su cargo, junto a claves provisorias del SII, sólo tres días después de su constitución. Y además, la **Automotriz Soliste Spa**, en que Navarrete también acompañó a su único socio Víctor Solís Torres a la Notaría, lo que se colige del pago que realizó por el trámite de la firma electrónica avanzada, el mismo día en que se verificó y se le dio la boleta de honorarios a su nombre por la suma de \$8.000.

Lo mismo ocurrió con Albano Silva Toro, quien colaboró en la creación de la sociedad **Automotriz C. Hernández**, que fue creada por Yerko Silva Toro, en la medida que reclutó a su único socio Renán Guenteo Maliqueo, sociedad utilizada por Yerko para facturar, pues de acuerdo al video WA0188, incorporado como OMP 209, sabía de memoria el Rut de Guenteo para ingresar a la página del SII y mantenía en su celular una imagen del N° de atención de la sociedad (OMP 11), que debía entregarse en la Notaría al momento de requerir la firma electrónica notarial.

Cabe hacer presente que las tres sociedades indicadas fueron constituidas con firma electrónica avanzada en la misma Notaría de Nelson Baeza Gutiérrez.

Ahora bien, es menester precisar, a fin de respetar el principio de congruencia, en lo que concierne al acusado **Juan Navarrete Vásquez**, que la imputación contenida en las acusaciones fiscal y particular, dice relación con haber contribuido, durante los años comerciales 2018 y 2020, a la creación e inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos, específicamente, de cuatro empresas, a saber: **Gildemeister Motor Spa y Brunno Fresh Spa**, cuyo único socio y representante legal es Jonathan Carrión Muñoz y **Automotriz Soliste Spa**, cuyo único socio y representante legal es Víctor Solís Torres, toda vez que efectuó la verificación en Notaría de las firmas digitales de los socios, requeridas para la creación de dichas

sociedades, pagando por dichos trámites y a quien el notario correspondiente emitió las boletas de honorarios; y **Automotora Bilbao Spa**, representada legalmente por Gustavo Viveros Viveros, por haber reclutado al testaferro para la constitución de esta y con ello entregar información falsa en el inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos con el fin de permitir la emisión de documentación tributaria.

No obstante, en el mismo libelo acusatorio, se explicitó que la sociedad **Brunno Fresh Spa**, no contaba con inicio de actividades y, por tanto, tampoco con autorización de emisión de documentos tributarios. Esta falta de declaración inicial de actividades, se corroboró con la cartilla de contribuyente incorporada en el **documento 837.2**, en que figuraba que se constituyó el 6 de marzo de 2020 y sin fecha de inicio de actividades.

En consecuencia, en relación con esta sociedad evidentemente no se satisfacen los elementos del tipo del delito en cuestión, desde que el verbo rector de la conducta típica precisamente es suministrar o proporcionar datos o antecedentes falsos la que obviamente debe materializarse, entre otras, en la declaración inicial de actividades con la finalidad de obtener documentación de carácter tributario, cuestión que no ocurrió en este caso. Por lo mismo, no se configuró el delito materia de la acusación respecto de la sociedad Brunno Fresh Spa.

Con la declaración de la testigo Carla Vildósola, se incorporó el **documento 837.2**, que es el cuaderno de antecedentes, adjunto al informe de recopilación de antecedentes N° 5 ARA 3, de fecha 12 de julio de 2021.

Concretamente, se incorporó la imagen de correo respuesta de Hugo Cataldo notario suplente de una de las Notarías consultadas, y al respecto la testigo indicó que señalaba que **Gildemeister Motor Spa** y Bruno Fresh Spa fueron constituidas en el sistema empresas en un día, con Jonathan Carrión Muñoz como socio y ambas autorizaciones de firma electrónica avanzada fueron consideradas en la boleta 41832 de 6 de marzo, por \$16.000, pagada por Juan Francisco Gabriel Navarrete Vázquez, adjuntando la escritura de constitución de las dos sociedades y la boleta de honorario 41832 de 6 de marzo de 2020 de la Notaría de Nelson Eulogio Baeza Gutiérrez, por \$16.000 a nombre de Juan Navarrete.

Se introdujo, además, la cartilla de contribuyente de **Gildemeister Motor Spa**, de 19 de mayo de 2021, que indicaba se constituyó el 6 de marzo de 2020, inició actividades el 9 de marzo del mismo año y aparecían datos de contacto jesusgacitua8@gmail.com. La dirección informada era Ahumada 312, oficina 175, Santiago (el mismo domicilio informado en las sociedades Comercial Gildemeister, Guillermo Morales y C. Hernández). La actividad informada era otras actividades de dotación de recursos humanos y presentaba la observación que debía acreditar su domicilio.

La testigo explicó que dicha observación significaba que cuando dio sus datos faltó algún documento o había un error, la cual estaba vigente, pues si se hubiese subsanado, habría una nueva observación o habría sido eliminada.

En consecuencia, se acreditó, al igual que en la constitución de la Automotriz Soliste, que Juan Navarrete acompañó al único socio Jonathan Carrión Muñoz a la Notaría de Nelson Eulogio Baeza Gutiérrez, lo que se colige del pago que realizó por el trámite de la firma electrónica avanzada, el mismo día en que se verificó y se le dio la boleta de honorarios a su nombre, por la suma de \$16.000.

En razón de lo expuesto, en síntesis, **Juan Navarrete Vásquez**, con los datos y antecedentes falsos entregados por Yerko Silva en el acto constitutivo de las sociedades **Gildemeister Motor Spa y Soliste Spa**, concurrió a la Notaría de Nelson Baeza Gutiérrez, acompañando a los respectivos socios o “gomas” (Jonathan Carrión Muñoz y Víctor Solís Torres, respectivamente) a suscribir la escritura respectiva mediante firma electrónica avanzada, con pleno conocimiento de que dicha gestión daría lugar a la declaración de inicio de actividades en el SII para la obtención de las facturas que la asociación necesitaba para reinscribir los vehículos robados y concretar los fines delictuales.

Dicho conocimiento, que sustenta el dolo en el actuar de Navarrete, en el sentido de conocer la ilicitud de los actos que estaba ejecutando y la finalidad perseguida con ellos, quedó en evidencia en las conversaciones que mantenía con Yerko Silva registradas en los audios de whastapp extraídos de su celular, a lo que se suma que su participación en estas maniobras no fue aislada sino que sistemáticas en el tiempo.

Ahora bien, el caso de la **Automotora Bilbao Spa** difiere de las anteriores, en atención a que la hipótesis fáctica que se le imputó es haber reclutado al único socio Gustavo Viveros Viveros.

Sin embargo, el único elemento incriminatorio que se aportó para acreditarla, es la declaración que dio esta persona durante la investigación, introducida por el testigo La Regla y una declaración jurada que dio en el SII, introducida por Carla Vildósola, declaraciones que son bastante cuestionables pues incurrió en ellas en contradicciones, señalando primero no conocer al sujeto que lo contactó y después se desdijo e indicó que sí lo conocía, y estando en situación de calle lo habría puesto en contacto de un tercero, Sebastián Martínez Zavala, quien en definitiva generó la sociedad realizando todos los trámites con Viveros.

Respecto del reconocimiento que hizo de Juan Navarrete en una fotografía, se ignora de qué forma se realizó a fin de haber controlado la inducción o sesgo, considerando, además, que en esa época (septiembre de 2018) Juan Navarrete no era blanco de la investigación ni estaba posicionado como parte de la asociación ilícita, lo que ocurrió a fines de 2019 de acuerdo a su relato corroborado por Yerko Silva, Albano Silva y los oficiales de caso.

Ahora bien, a mayor abundamiento, en el supuesto que haya sido efectivo lo señalado por Viveros Viveros, lo cierto es que la mera conducta de reclutar a un testaferro para constituir una sociedad falsa, no satisface los elementos del tipo del delito tributario en comento. Es más, los mismos acusadores así lo

entendieron, al no presentar cargos por este delito en contra de Albano Silva Toro, quien desplegó la misma acción al haber reclutado a Renán Guenteo Maliqueo, para la constitución de la sociedad Automotriz C. Hernández ni en contra del mismo Navarrete por haber reclutado a Eduardo Sanhueza Pérez, único socio de la sociedad Comercial Gildemeister Spa.

Consecuente con lo dicho, el tribunal ha considerado la participación, en calidad de autor, de Juan Navarrete Vásquez, en dos delitos tributarios, en relación con las sociedades Gildemeister Motor Spa y Soliste Spa, las que fueron creadas e iniciaron actividades en el Servicio de Impuestos Internos en el año 2020.

Con respecto a la reiteración de este tipo de delitos, es relevante hacer mención a que el artículo 112 del Código Tributario dispone la aplicación de la regla de acumulación ideal contenida en el inciso 1° del artículo 351 del Código Procesal Penal, concebida como un beneficio para el autor de delitos de la misma especie, al establecer una alternativa a la acumulación material prevista en el artículo 74 del Código Penal. Sin embargo, la norma citada contiene dos disposiciones especiales, la primera, que todos los delitos del Código Tributario se consideran de la misma especie, ya sean crímenes o simples delitos y cualquiera sea el bien jurídico protegido, beneficiando la norma a todo infractor tributario múltiple. Y la segunda, es la definición de reiteración que consiste sólo en la comisión de cualquier delito en más de un ejercicio comercial.

Para el autor Alex Van Weezel, en su obra “Delitos Tributarios” (Págs. 56 y 57), el motivo de esta última disposición es que el legislador después de extender en forma desmedida el ámbito de aplicación de la norma en cuanto a los presupuestos (todos los delitos del Código se consideran de la misma especie) quiso moderar los efectos de tal opción limitando temporalmente la aplicación del beneficio.

Es decir, el efecto práctico de la norma acarrearía que, en el caso de una pluralidad de delitos tributarios cometidos en un mismo ejercicio, no habría reiteración en el sentido del artículo 112 del Código Tributario, de manera que no se aplicaría el beneficio sino la norma del artículo 74 del Código Penal, es decir, directamente la acumulación material.

Sin perjuicio de compartir el tribunal parcialmente la opinión del autor, en el evento de quien cometiera el mismo delito en más de una ocasión (dos delitos), como Juan Navarrete Vásquez, en el mismo ejercicio comercial (marzo y junio de 2020), se consideró que los jueces del fondo, siempre tendrían la facultad de optar por el tratamiento que resulte más favorable al condenado y en la especie, claramente es la regla general de acumulación ideal de las penas contemplada en el inciso 1° del artículo 351 del Código Procesal Penal. De lo contrario, el sujeto activo que comete muchos delitos tributarios e incluso de distinta naturaleza (infractor tributario múltiple) en varios ejercicios comerciales podría verse beneficiado en cuanto a la penalidad, pudiendo corresponderle una pena menos rigurosa que aquel que cometió dos delitos en un mismo ejercicio, lo que se encuentra reñido absolutamente con el principio pro reo que inspira a la legislación penal en esta materia.

II.- Decisión absolutoria en relación con el acusado Camilo Sandoval Godoy:

Que la imputación en contra del acusado Camilo Sandoval Godoy contenida en las acusaciones, dice relación, en términos muy generales, a que habría proporcionado al SII datos falsos en la iniciación de actividades de la Automotora Bilbao SPA, pero no se describe el factum o las conductas concretas desplegadas por el acusado en relación con los elementos típicos de este delito.

Ahora bien, sin perjuicio de aquella falencia del libelo acusatorio que bastaría para rechazarlo, tampoco se rindió prueba respecto de Sandoval Godoy en relación con el delito imputado, aparte de una imagen de una factura de la citada empresa que se encontró en su celular, evidencia que no guarda relación con los elementos típicos del delito en cuestión. Tampoco resulta viable inferir que por mantener una factura de la sociedad, participó en la creación e iniciación de actividades de la misma a través de las maniobras fraudulentas ya conocidas, más aun si se considera que él no se dedicaba a dichas tareas o funciones dentro de la asociación ni colaboraba en ellas. Es más, no dejó de ser llamativo para el tribunal que el acusador particular prácticamente no mencionó a Sandoval en su clausura, pese a que hizo una detallada mención de las evidencias conectadas con la participación de cada uno de los acusados por el delito tributario en cuestión.

A mayor abundamiento, la prueba de cargo rendida, que fuera expuesta y analizada en los considerandos precedentes, dio cuenta que la empresa Automotora Bilbao SPA, fue constituida por Sebastián Martínez Zavala por encargo y bajo las instrucciones de Yerko Silva Toro.

Por todas las razones señaladas se le absolverá de los cargos formulados.

III.- EN RELACIÓN CON LOS DELITOS DE RECEPCION DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y ESTAFA:

DÉCIMO TERCERO: Valoración de la prueba y hechos típicos acreditados.

Que, como se anunció en el veredicto, la organización formada por los acusados y otros integrantes que ya fueron condenados, tenía entre sus fines la comisión de hechos constitutivos de delitos de recepción de vehículos motorizados y estafas, los que fueron perpetrados de manera sistemática y reiterada en el tiempo, desde el mes de marzo del año 2017 hasta el 16 de octubre de 2020, fecha en que se ejecutaron las órdenes judiciales de entrada y registro de los domicilios de sus miembros y estos fueron detenidos.

En efecto, las actividades y operaciones llevadas a cabo por los miembros de la asociación, que ya fueron establecidas en el considerando precedente, dieron cuenta de los objetivos que perseguían, como se señaló, en primer lugar, la perpetración de hechos constitutivos del delito de RECEPCIÓN DE VEHÍCULO MOTORIZADO, previsto y sancionado en el artículo 456 bis A del Código Penal, en sus diversas modalidades comisivas, vale decir, la compra de vehículos motorizados robados a sabiendas de su origen ilícito y en ocasiones incluso estos eran encargados para ser robados, ya que se inscribían para obtener las placas patentes antes de detentarlos materialmente; la tenencia material de los mismos, en la medida que se

guardaban los vehículos y se mantenían bajo el poder de algunos de los miembros de la asociación quienes también los usaban, ejemplo de ello, son los casos en que se fiscalizaron e incautaron vehículos mientras eran conducidos por alguno de los integrantes de la organización y, finalmente, la venta de estos en el mercado automotriz formal con una nueva identidad, concretando así el fin último perseguido por ella.

Cabe señalar que los delitos base de las receptaciones, no obstante no ser una cuestión controvertida sino más bien reconocida por los acusados en sus declaraciones, concordantes con la prueba de cargo rendida, que en todos los casos consistieron en robos de vehículos y en su mayoría con intimidación y/o violencia en la modalidad conocida comunicacionalmente como “portonazos” y “encerronas”, se acreditaron con los respectivos encargos policiales adjuntos a las denuncias formuladas por las víctimas de los hechos, los testimonios directos de éstas en juicio y/o de los funcionarios policiales que recibieron las denuncias correspondientes.

En segundo lugar, respecto de los hechos constitutivos del delito de ESTAFA previsto en el N° 1 y en el inciso final del artículo 467 del Código Penal (vigente a la época de comisión de los delitos), que correspondía al objetivo final de la asociación, resultó plenamente justificado, que los acusados una vez reinscrito el vehículo con sus números identificatorios modificados y obtenida una nueva identidad con nuevas placas patentes, planificaban y ejecutaban una puesta en escena, para efectos de publicarlo en las plataformas de venta de autos o redes sociales, coordinar las visitas y contactos con los interesados, y en las interacciones con estos simular nombres e historias inventadas acerca de las razones de proceder a la venta de un auto nuevo recientemente adquirido y finalmente realizar la venta y entrega del vehículo previo pago del precio, generalmente en dinero efectivo.

De este modo, los acusados preparaban el vehículo con los documentos adulterados y en algunos casos falsificados para que coincidieran con la patente y series de vin y motor, tales como, el permiso de circulación y certificados de homologación de revisión técnica, todo con la finalidad de engañar al comprador y defraudarlo en la calidad de la cosa transferida, induciendo a las víctimas a incurrir en error acerca de dicha calidad, ya que confiaban en la legalidad de la compraventa respecto de un vehículo semi nuevo de origen lícito. No obstante que las víctimas tomaban los resguardos necesarios y suficientes para así constatarlo, eran engañadas y creyendo falsamente en que el bien que estaban adquiriendo era legítimo, incurrían en desembolsos o disposiciones patrimoniales cuantiosas, siendo perjudicados finalmente en sumas superiores a 40 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) e incluso en algunos casos el perjuicio excedió de 400 UTM, verificándose con ello los elementos objetivos del tipo penal de la estafa.

Todo ello fue probado, entre otros elementos de convicción, principalmente, a través de los numerosos testimonios de las víctimas, que relataron ante el tribunal, de manera detallada, los hechos que les afectaron y cómo se vieron sorprendidos cuando los funcionarios policiales les informaban que el vehículo que habían comprado tenía encargo por robo y, con notable elocuencia, referían las circunstancias en que

fueron incautados sus vehículos y con ello, la consecuente pérdida definitiva del bien y el perjuicio económico sufrido.

Ahora bien, previo a iniciar el análisis de las pruebas rendidas respecto de cada delito de receptación y estafa en particular y, con ello, también, lo que dice relación con la participación que en los mismos les habría correspondido a los acusados por estos ilícitos, es conveniente referirse, como marco y punto de partida, al **principio de punibilidad autónoma fijado en el artículo 294 bis del Código Penal** (vigente a la fecha de los hechos) conforme al cual, el injusto de la asociación ilícita no se presenta como un injusto dependiente de algún hecho delictivo futuro a ser ejecutado por sus miembros. Vale decir, que el injusto específico de la asociación ilícita se encuentra configurado de modo plenamente autónomo respecto del injusto específico de los eventuales delitos múltiples cuya perpetración constituye el objeto de la asociación, de manera de concurrir, por lo mismo, un concurso real de delitos entre el de asociación ilícita y los delitos fines de ella.

El artículo 294 bis del Código Penal (vigente a la época de ocurrencia de los hechos y actual artículo 294), inciso 1°, dispone: “Las penas de los artículos 293 y 294 se impondrán sin perjuicio de las que correspondan, por los crímenes o simples delitos cometidos con motivo u ocasión de tales actividades”.

Dicho esto, se pasará a examinar y valorar la abundante y variada prueba de cargo, que se rindió por cada vehículo motorizado que fue objeto de las receptaciones y/o estafas que se perpetraron por miembros de la asociación a lo largo del período en que estuvo operando.

Y para tal efecto, con el fin de dar un tratamiento ordenado a la información y favorecer la comprensión, se considerarán dos categorías según se trate de vehículos en que se logró efectivamente acreditar que miembros de la asociación participaron en hechos constitutivos de los delitos en examen o bien, de vehículos en que la prueba fue inexistente o insuficiente para vincularlos con alguno de ellos. Y dentro de cada categoría, se irán revisando los hechos relativos a cada vehículo de forma cronológica, desde el más antiguo al más reciente, conforme a la fecha de la factura ideológicamente falsa que se utilizó y, por ende, de la sociedad automotora que la generó.

I.- Vehículos motorizados objeto de delitos de receptación y/o estafa perpetrados por miembros de la asociación ilícita.

Como primera cuestión, se hará mención a algunos elementos comunes que surgieron del análisis de las probanzas rendidas con respecto a estos vehículos.

En efecto, el tribunal pudo percatarse que en todos los casos, tales vehículos fueron recuperados y se determinó su verdadera identidad a través de peritajes o de la aplicación de escáner en las automotoras concesionarias de la marca respectiva. Las pericias mecánicas arrojaban que los números de chasis y/o motor estaban adulterados y con los peritajes de revenido químico, se determinaba la serie verdadera, la que estaba asociada a la patente original que, siendo consultada, en la totalidad de los casos, el vehículo tenía

encargo vigente por el delito de robo. En aquellas situaciones, en que por el profundo desgaste de la zona en que iban estampadas las series no era posible con las pericias químicas obtener resultado positivo, se trasladaba el vehículo a la concesionaria donde a través de un escáner al computador del móvil se obtenían la series originales.

De este modo, por cada vehículo se indicarán los peritos que efectuaron las diligencias pertinentes.

Las víctimas estafadas, en todos los casos, tomaban las medidas comunes y propias, que existen a disposición para este tipo de negocio, y así corroborar que el vehículo que estaban adquiriendo fuese legítimo y que no tuviera ningún inconveniente, ya sea mecánico o legal (multas, limitaciones al dominio, deudas de Tag, etc.), a fin de precaver un engaño.

En resumen, todas las víctimas revisaban los documentos del automóvil, los que correspondían a la patente que portaba, a sus características y al nombre del propietario; obtenían un informe “autofact” en que aparecía el historial del móvil y el certificado de inscripción y anotaciones vigentes, entonces, confiaban en que todo estaba en regla para efectuar la compra. Además, la transferencia se realizaba en las oficinas del Registro Civil o ante un Notario Público, donde se entregaba la factura de la 1ª venta del automóvil y había un control y revisión de la documentación. Así las cosas, era prácticamente imposible detectar el engaño, ya que incluso los números de chasis estampados en el vehículo o en sus adhesivos, las pocas víctimas que tenían conocimiento de que se trataba del número único identificatorio y los cotejaron, también coincidían con los documentos.

Las maniobras engañosas y puesta en escena de los acusados, derivaban en que las víctimas procedieran a la compra, con seguridad y confianza, basados en una errada precepción de la realidad, y pagaran un precio importante disponiendo de su patrimonio, para finalmente sufrir un perjuicio económico equivalente, cuando al poco tiempo los funcionarios policiales les incautaban el vehículo y lo perdían definitivamente. Salvo en algunos casos muy excepcionales, les dejaban el vehículo en calidad de depositario provisional, pero sin patente por lo que se dificultaba su uso normal.

Acorde con lo señalado, se acompañaron al juicio los documentos del vehículo que entregaron las víctimas y que fueron incautados conjuntamente con las placas patentes por los funcionarios policiales que llevaron a cabo el procedimiento. Dichos documentos y evidencias materiales serán mencionados por cada vehículo que se examinará. Así como también, toda otra información aportada por las víctimas en relación con las comunicaciones y contactos que tuvieron con los vendedores. Asimismo, se hará referencia a la documentación generada a propósito de la reinscripción de cada vehículo, obtenida del Registro Civil por el ente persecutor y que fueron incorporadas al juicio. Y finalmente los certificados de inscripción en cuanto registraban las adquisiciones y transferencias del vehículo. Por último, en todos los casos la Fiscalía incorporó fotografías del vehículo incautado, las que fueron reconocidas por las víctimas y los funcionarios que declararon como testigos o peritos. Dichas pruebas también serán mencionadas por cada vehículo en específico.

Así las cosas, como se ha visto, para cada estafa había un delito de receptación previo, que se relacionaban con el mismo vehículo. A excepción de algunas situaciones en que solamente hubo estafa a través de la venta fraudulenta del vehículo, como la grúa horquilla marca Caterpillar que vendió Albano Silva. O bien, solamente hubo receptación, porque no se alcanzó a cometer la estafa, dado que el vehículo fue fiscalizado antes de ser vendido. Tal fue el caso del Nissan Qashqai en que fue sorprendido David Millalén.

Otro tópico común era que las víctimas estafadas, en la mayoría de los casos, declararon que les entregaban solo una llave y a veces faltaba el manual de usuario o algún otro accesorio. Los vendedores se comprometían a entregárselos, pero no cumplían y luego bloqueaban el contacto. Incluso en un caso, la víctima acudió al lugar acordado para la entrega, pero las personas no llegaron. También en casi todos los casos se les pedía que el precio fuese pagado en dinero efectivo.

Así el tribunal pudo percibir que cada historia relatada por las víctimas entrañaba un drama personal y familiar, y no solamente económico, que tuvieron repercusiones que se prolongaron en el tiempo, ya que muchas debieron continuar pagando las cuotas de los créditos que habían pedido para la adquisición del vehículo.

Por otra parte, las víctimas de los robos de los vehículos que prestaron declaración, dieron cuenta de las circunstancias de estas sustracciones violentas, en que, por lo general, participaba una pluralidad de sujetos portando armas de fuego, con las cuales los intimidaban e incluso agredían, y les quitaban los vehículos con las llaves y sin provocar daño o ejercer fuerza en los mismos. En otros casos eran robos que ocurrían en estacionamientos de supermercados o centros comerciales. E incluso, en domicilios particulares desde donde sustraían las llaves y se llevaban el vehículo.

1.- El primer vehículo reinscrito correspondió a un Station Wagon marca **Nissan, modelo Xtrail, de color gris**, año 2017, patente **HFFX.32**, con la factura N°19 emitida por Compraventa de Automóviles Orión Ltda. de fecha **29 de marzo de 2017**, en que la solicitante de 1ª inscripción y adquirente fue **Tatiana Arana Espinoza** (Formulario de solicitud de 1ª inscripción donde aparecen los datos de Tatiana Arana, copia de la factura y certificado de inscripción a nombre de Tatiana Arana, fueron acompañados como prueba documental 170 letra i).

Cabe señalar que Yerko Silva Toro e Ilich Chopa Aldana en sus declaraciones se refirieron a este vehículo, con el que se puso en marcha el negocio delictivo, y reconocieron ambos su participación como autores inductores en los ilícitos de receptación y estafa, siendo la autora material Tatiana Arana Espinoza.

Fue vendido al ciudadano brasileño Cleber Serdeira Da Silva Junior en \$12.000.000, lo que fue corroborado por el Capitán del SEBV de Carabineros Luis Orlando Moya Villaseca, en tanto declaró que tomó parte del procedimiento respecto de este vehículo, se hizo una revisión físico técnica e inspección ocular a sus series y advirtieron que presentaban anomalías en sus guarismos y estaban estampados de manera artesanal. Entonces, lo trasladaron al cuartel SEBV, donde los peritos ratificaron lo señalado, obteniéndose la

real identidad del vehículo, lo que concordó con el testimonio del cabo 1ro de Carabineros, perito David Ramírez Pedreros quien se refirió en estrados al resultado de su pericia con apoyo de fotografías (OMP 512) adjuntas a su informe. Ambos señalaron que consultada su patente original, el vehículo tenía encargo vigente por robo.

Además, el testigo reprodujo la declaración de la víctima, en el sentido que dicho vehículo lo había comprado en el mes de abril del mismo año, mediante una página web de compra y venta de vehículos, se reunió con el vendedor de nombre Matías y acordaron un precio de \$ 12.000.000. Agregó que después se reunieron con una mujer identificada como Tatiana, realizando la compra. Acotó que le entregaron una sola llave, les pidió la copia pero fue bloqueado el contacto y no se la entregaron.

Reconoció el testigo en OMP 513 las fotografías del vehículo y en OMP 509, la imagen de la copia de comprobante de giro por caja de 17.04.2017 emitido por Banco Santander a nombre de Cleber Serdeira, por \$ 12.000.000, que la víctima entregó.

Por otra parte, en relación con el delito base, además, se incorporó el documento 62, que correspondía al encargo policial y al certificado de inscripción y anotaciones vigentes del mismo vehículo con la patente original JLFK.15, a nombre de la víctima Yolanda Mella López, lo que sumado al parte denuncia acompañado como documento 647, permitieron establecer que sufrió el robo con intimidación de su vehículo, el 20 de febrero de 2017, el cual fue recuperado el 23 de julio de ese mismo año.

2.- Station Wagon Hyundai modelo Creta, color blanco, año 2017, patente JHFV-67, reinscrito con la factura N°22 de Compraventa de Automóviles Orión Ltda. emitida el 8 de abril de 2017, solicitante Camilo Sandoval Godoy y adquirente Jorge Salinas Uribe, quienes además vendieron el vehículo siendo reconocidos por la víctima. (En la documental 170 d) se incorporaron la solicitud de primera inscripción, factura electrónica, comprobante Banco Estado por pago del impuesto y formulario 88 de Tesorería General de la República).

Este vehículo fue vendido a Gloria Galvez Galaz en la suma de \$ 10.000.000, quien declaró en estrados que en mayo de 2017 compró un Hyundai Creta blanco, que vieron a través de yapo y su hijo se juntó con un caballero y una señora para verlo y le mandó fotos, tomaron la decisión porque sacaron un autofact en que no tenía ningún problema. Dijo que se juntaron con dos personas que decían que eran hermanos, le preguntó al dueño "Octavio" por qué lo vendía si estaba tan nuevo, le dijo que tenía 3 hijos, le había salido su casita y por eso la vendía. Acotó que pagaron el precio de 10 millones y fracción con un vale vista que estas personas cobraron en un Banco de Chile que estaba cerca.

Indicó que pasaron unos 15 días y llegaron los carabineros a su casa y se incautó el vehículo porque determinaron que era robado y clonado (declarando en juicio sobre la materia el perito Alejandro Molina), por lo que ella entregó toda la documentación incluso copia del vale vista. Agregó que no recuperó el vehículo, tenía seguro con Falabella, pero ellos no respondieron.

Sus dichos fueron corroborados por el oficial PDI Eduardo García quien le tomó declaración durante la investigación, el capitán Sebv Sebastián Silva, que llevó a cabo el procedimiento que resultó en la incautación del vehículo, y se le exhibieron fotografías del mismo en de OMP 519, el informe de autofcat en OMP 494, registro de conversaciones en la plataforma yapo entre Mauricio Zamora hijo de la víctima y Jorge Salinas en OMP 502 e imágenes de whastapp en que acordaron el precio y se remitieron fotografías del vehículo.

En OMP 500, aparecía la imagen del certificado de inscripción a nombre de la víctima, fecha de adquisición 03.05.2017 y en la documental 112, se acompañaron la solicitud de transferencia, declaración de transferencia de vehículos motorizados y giro y pago de impuesto, captura de imagen de Autofact obtenida de la página de internet www.autoplus.cl, donde se observa la imagen del vehículo que se oferta a \$11.000.000, patente JHFV.67 y el vendedor es Jorge Salinas Uribe; certificado de inscripción y anotaciones vigentes, propietario el mismo Salinas Uribe.

También se introdujo en OMP 203, las imágenes aportadas por la víctima Gloria Gálvez Galaz, respecto del vehículo Hyundai Creta donde a la izquierda se divisa a Camilo Sandoval y otras en que se veía el rostro de Camilo Sandoval reflejado en la pantalla del vehículo. Estas fueron reconocidas tanto por la víctima, quien señaló el sujeto que aparecía en ellas era el encargado de la venta del auto, como por el comisario Pedro Olivares, quien dijo además que cuando recibieron las imágenes ya tenían identificado a Camilo Sandoval Godoy.

Por otra parte, en relación con el delito base, además, se incorporaron los documentos 866 y 867, que correspondían al encargo policial y al certificado de inscripción y anotaciones vigentes del mismo vehículo con la patente original JCLZ.35, a nombre de la víctima Luis Humberto Díaz Caroca, quien prestó su testimonio en el juicio, todo lo cual permitió establecer que sufrió el robo con intimidación de su vehículo, el 26 de marzo de 2017, el cual fue recuperado el 7 de agosto de ese mismo año.

Consecuente con lo establecido, tuvieron participación en los ilícitos referidos, como autores materiales, el acusado Camilo Sandoval Godoy y Jorge Salinas Uribe y como inductores, Yerko Silva Toro e Ilich Chopa Aldana, corroborado por ambos al reconocer en sus declaraciones, que “hicieron” juntos los primeros vehículos hasta noviembre de 2017, lo que resulta del todo coherente con la prueba de cargo ya latamente examinada con antelación.

3.- Grúa Horquilla, marca Caterpillar, de color amarillo, año 2017, patente **HFFX-33**, reinscrita con factura N°3 emitida por la Comercializadora Full Orión Ltda., el **29 de abril de 2017**, solicitante **Matías Daniel Molina Daza** (la imagen de la cedula de identidad de esta persona estaba en el celular de Yerko en OMP 109) y adquirente **Nelson Méndez Moya** (único socio de automotora Méndez Moya Spa, cuya cédula de identidad y la factura indicada estaban en el computador incautado a Paula Becerra, en la carpeta de nombre Albano, incorporados en OMP 35, Nos. 15 y 21 respectivamente).

La solicitud de primera inscripción y la factura respectiva fueron incorporadas como documento 524.

Esta máquina fue vendida a la empresa Bermax Frut Ltda. en la suma de \$15.000.000, cuyo representante legal es Máximo Contreras Pinilla, y se dejó en poder del otro socio Bernardo Campusano, como depositario provisional, por no haberse determinado en ese momento su verdadera identidad, no obstante establecerse que tenía sus series identificatorias adulteradas e intervenidas, tal como lo señaló en el juicio el perito Nelson Alberto Casas Vergara.

Respecto de esta maquinaria, se estableció que su origen era distinto y no provenía de un robo, sino que había sido comprada con cheques que fueron protestados y llegó a manos de Albano Silva Toro y con la colaboración de Yerko Silva e Ilich Chopa, fue reinscrito obteniendo nuevas placas patentes para posteriormente ser vendido mediante maniobras engañosas a la empresa indicada, a través de la automotora de don Clodomiro Silva Núñez, y el dinero fue abonado a la deuda de arrendamiento, que mantenía Albano con don Clodomiro Silva por el local comercial donde funcionaba el restaurante “Alto Machu Picchu” (El contrato referido fue incorporado como documento 311).

Lo anterior conforme al testimonio del comisario Larry Caro, que realizó las diligencias investigativas a su respecto, y la víctima Máximo Antonio Contreras Pinilla, el que explicó la manera en que adquirieron la grúa en la automotora de Clodomiro Silva, quien hizo el contacto con el vendedor y el dueño, y reconocieron el vehículo en las fotografías de OMP 721. Además, se exhibió en sus declaraciones, la prueba documental 306 a 311, contrato de compraventa, certificado de inscripción a nombre de Nelson Méndez Moya, copias de los cheques a fecha y del vale vista, entregados para el pago del precio.

En OMP 331, se exhibió la fotografía 31, factura electrónica empresa Finning Caterpillar, de 20 de enero de 2017, por la grúa horquilla, por \$27.880.230. A su respecto, señaló el testigo Caro que con ella se estableció la identidad, luego de un análisis que hicieron los técnicos de dicha empresa. Y la fotografía 30, orden de compra de proveedor Finning S.A., de fecha 23 de enero de 2017, de la grúa horquilla que coincidía con la factura. Puntualizó el testigo que la grúa incautada no tenía la misma descripción de número de motor y chasis que habían sido alterados, pero correspondía a la misma grúa físicamente.

Consecuente con lo señalado, en el delito de estafa cometido en perjuicio de los compradores finales de esta máquina, participaron Albano Silva Toro, Yerko Silva Toro e Ilich Chopa Aldana.

4.- Station Wagon, marca Mazda, modelo All New CX9, de color plateado, año 2018, patente JPPW.84, reinscrito con la factura N°28 de CV de Automóviles Orión Ltda, de fecha 4 de mayo de 2017, solicitante y adquirente Tatiana Arana Espinoza. (Se incorporó la factura como documento 170 letra j), a nombre de Tatiana Arana Espinoza).

Este vehículo fue vendido a Ricardo Parra Dosque, con domicilio en Concepción, en la suma de \$23.000.000 (más de 400 UTM a junio de 2017 al valor de la UTM de \$46.740), quien declaró en estrados y

señaló que en el año 2017 encontró en yapo.cl un vehículo Mazda CX9 del año, con muy poco kilometraje, que estaba en Santiago.

Respecto de la publicación, durante la investigación, se probó que quien la hizo fue Yerko Silva Toro, según lo expuesto en el juicio por el Capitán Sebv Sebastián Silva, quien explicó que se concurrió a la empresa Yapo, donde obtuvieron una planilla de los antecedentes y datos asociados de la persona que subía la publicación de los vehículos consultados con el teléfono de contacto. Reconociendo en OMP 530, la imagen 34, correspondiente a un extracto de información de yapo respecto de la publicación del vehículo Mazda CX9, patente JPPW.84, con número de teléfono, del usuario Yerko Andrés Silva Toro, dirección IP y fecha de publicación 03.08.2017.

Continuando con el relato de la víctima, indicó que tomó contacto con la persona que lo ofrecía, que se presentó como Álvaro, le preguntó por qué lo vendía con tan poco kilometraje y le dijo que era de su señora Tatiana, a quien le quedaba grande para la ciudad y casi no lo ocupaba. Estaba publicado a un precio normal de mercado, \$24.000.000. Agregó que viajó a Santiago y se juntó con Álvaro, en un supermercado en Santiago centro, él estaba con su señora, Tatiana Arana, quien era muy cordial y elegante, andaba bien vestida, acorde con tener un auto caro. Dijo que le pasó los documentos del auto y quiso ver el número de chasis que estaba debajo de la goma de la pisadera del copiloto y Álvaro le dictó el número y concordaba con los documentos al igual que el número de motor.

Precisó que para la transferencia fue a tomar un vale vista en el Banco BBVA y se juntaron en el Registro Civil donde tuvieron que esperar como 30 minutos. Luego, le pasó el vale vista por \$23.000.000 a Álvaro, este lo fue a cobrar al mismo banco y después le pasó las dos llaves del vehículo.

Refirió que a fines de octubre, recibió la llamada de un carabinero de la SEBV y le dijo que tenía el 99% de certeza que tenía un vehículo robado. (El testigo, en ese momento, se quebró emocionalmente y rompió en llanto). Pensó que iba a quedar detenido y él es una persona muy correcta, en Concepción todo el mundo lo conoce en el área de la construcción. El testigo entregó el auto para que lo revisaran y comentaron que se veía una sola letra alterada del número del chasis e indicó que con el tiempo, un funcionario de Carabineros fue a su casa, le tomó declaración y le exhibieron un set de fotografías y reconoció a Tatiana, pero a Álvaro no lo identificó.

Por otra parte, en relación con el delito base, además, se incorporaron como documentos 61, el encargo policial y el certificado de inscripción y anotaciones vigentes del mismo vehículo con la patente original JLWT.34, a nombre de la víctima Ana María Vergara Ortega, lo que permitió establecer que sufrió el robo de su vehículo, el 22 de abril de 2017.

Conforme a lo razonado, en la receptación y venta fraudulenta que derivó en la estafa en perjuicio del Sr. Parra, tuvieron participación Yerko Silva con Ilich Chopa Aldana, lo que fue corroborado por los

propios acusados, al reconocer que “hicieron” juntos los primeros vehículos hasta noviembre de 2017, como autores inductores y Tatiana Arana como autora material.

5.- Automóvil marca **Peugeot, modelo 301, de color gris**, año 2017, patente **JHFW.67**, reinscrito con la factura N°29 emitida por CV de Automóviles Orión Ltda. el **11 de mayo de 2017**, solicitante **Edith Nélida Silva Sánchez** y adquirente **Carlos Andrés Gómez Zúñiga** (único socio de Valenzuela y Arce Spa.)

Este vehículo fue vendido a Melissa Solar Ramos en la suma de \$8.500.000, quien declaró en el juicio, que en el año 2017, con su marido buscaron en Chile Autos y encontraron un Peugeot 301, de color gris, que estaba dentro del valor de mercado y en buenas condiciones y por whastapp se comunicaron con el vendedor, con el que se juntaron 2 o 3 veces y luego se juntaron en la Notaría para hacer la transacción. Al respecto se acompañó el documento 170 letra e), contrato de 6 de junio de 2017 de compraventa del vehículo, vendedor Carlos Andrés Gómez Zúñiga, precio \$8.500.000 y aparece nombre, firma y huella de la testigo y vendedor.

Dijo que pagó \$8.500.000, en 3 transferencias que hizo su marido Luis Marcelo Concha Salgado, dos en la cuenta del BBVA de una persona de nombre Claudia y otra en una cuenta de Edith.

Se incorporó el documento 517, oficio del Banco Scotiabank que adjunta los movimientos de la cuenta corriente 35-03-778-89, de **Claudia Sandoval Godoy**, en que constan transferencias de Luis Marcelo de fecha 06.06.3017, por \$3.450.000 y por \$3.750.000, indicando la testigo que correspondían a las que hicieron por la compra del vehículo. Y el documento 445, es la cartola de Edith Silva Sánchez, en que consta abono de 7 de junio de 2017 en su cuenta vista del Banco Estado, por la suma de \$1.250.000.

La testigo mencionó que después de la transferencia en el estacionamiento la persona les entregó el vehículo y lo tuvieron 4 meses, y carabineros les avisó que tenían que llevarlo a una Comisaría de Independencia para corroborar los datos y el número de chasis que al parecer estaba adulterado. Al día siguiente lo llevó su marido y encontraron que el número de motor o chasis estaba adulterado y correspondía a un vehículo que había sido robado, por lo que, lo dejaron en el lugar y entregaron toda la documentación. Corroborando esta información el perito José Eliecer Ascencio Mora declaró que el vehículo en comento tenía la serie de casi adulterada, no así la de motor y que se determinó que tenía encargo vigente por robo.

Por otra parte, en relación con el delito base, además, se incorporó el documento 64, que correspondía al encargo policial y certificado de inscripción y anotaciones vigentes del mismo vehículo con la patente original JDFR.87, a nombre del propietario Carlos Raúl Lagos Cofré, y el denunciante Rodrigo Lagos Bastidas, declaró en el juicio reconociendo el vehículo sustraído en la fotografía de OMP 536, todo lo que permitió establecer que sufrió el robo con intimidación mientras conducía dicho móvil, el 4 de mayo de 2017, el cual fue recuperado el 16 mayo de 2018.

Conforme a lo razonado, en la receptación y venta fraudulenta que derivó en la estafa en perjuicio de doña Melissa Solar, tuvieron participación Yerko Silva Toro con Ilich Chopa Aldana, lo que fue corroborado

por los propios acusados, al reconocer que “hicieron” juntos los primeros vehículos hasta noviembre de 2017, como autores inductores y Carlos Gómez Zúñiga, como autor material.

6.- Automóvil marca **Hyundai, modelo Accent, de color plateado**, año 2017, patente **JHFW.91**, reinscrito con la factura N°30 de la empresa Compraventa de Automóviles Orión Ltda. de fecha **19 de mayo de 2017**, en que el solicitante fue **Camilo Sandoval Godoy** (su huella dactilar fue identificada pericialmente en el formulario respectivo) y la adquirente **Daniela Carrasco Pérez**. (Se incorporaron los documentos 15 al 18, que corresponden a la declaración y solicitud de transferencia, certificado de inscripción, formulario de pago de impuesto verde y la factura electrónica. La solicitud de primera inscripción, comprobante de pago del impuesto y el certificado de inscripción y anotaciones vigentes a nombre de Marcela Pereira Bonilla, y propietario anterior Daniela Carrasco Pérez, como documento 170, letra g).

Este vehículo fue vendido a Marcela Cristina Pereira Bonilla, con domicilio en la ciudad de Temuco, en \$7.500.000.

La víctima compareció a estrados y declaró que en junio de 2017, se contactó a través de Chile Autos, con una persona de nombre José, por el vehículo que estaba publicado en \$7.800.000 y se ofrecía en Santiago. Entonces le pidió al padre de su hijo, que vive en Santiago, que se reuniera con estas personas para verlo, se juntó con ellos, le mandó fotos, verificó que los papeles estuvieran en regla y que el automóvil estuviera en buenas condiciones.

Agregó que ofreció en efectivo \$7.500.000 a la persona de nombre José, el que dijo estar en proceso de separación y lo quería vender urgente. Fue así, como viajó a Santiago, hizo toda la revisión, pagó un adicional para ver que estuviera exento de multas o de otra situación compleja y se hizo la transferencia en el Registro Civil de Providencia. Acotó que pagó el precio con un vale vista del Banco Estado que fue cobrado.

Dijo que quedaron en que le enviarían las llaves y el manual del auto, porque a su señora, Daniela Carrasco, se le habían quedado olvidados en la casa, quien era la dueña del auto y firmó la transferencia.

Manifestó que el 30 de noviembre, llegaron los Carabineros a su domicilio, para informarle que su auto posiblemente podría estar vinculado a un ilícito, le pidieron autorización para los peritajes, los cuales arrojaron que era un auto clonado y se lo iban a incautar. En ese contexto, les pidió que hablaran con el fiscal, ya que es madre soltera, su hijo tenía 8 años y no tenía otra forma de movilización, le dejaron el auto como depositaria provisional sin la patente, hasta el año 2021, cuando pudo comprarse otro en cuotas e hizo la devolución del vehículo clonado a la PDI.

Las personas que le vendieron el automóvil desaparecieron, no contestaron más el teléfono, nunca le hicieron llegar la llave y el manual, pero el padre de su hijo le tomó fotografías al vehículo, en las que alcanzaron a salir estos dos hombres, ella hizo la negociación con el que estaba de pie en la imagen al lado del móvil y el otro estaba sentado en la vereda viendo el celular.

La fotografía fue incorporada en OMP 39, y la víctima reconoció al sujeto N°1 (corresponde a Camilo Sandoval Godoy) como el que le vendió el automóvil, con quien conversó vía telefónica y por whatsapp en reiteradas ocasiones y además conversaron personalmente mucho rato en el Registro Civil y con su señora Daniela Carrasco; y el sujeto que estaba sentado con el celular (corresponde a Luis Astudillo Peña), el padre de su hijo le contó que acompañaba al vendedor.

En el mismo sentido, declaró el oficial de la Brilac Eduardo Rafael García Briones, corroborando el relato de la víctima y señaló que ella entregó las características físicas del vendedor e identificó a un sujeto de nombre Camilo en el reconocimiento fotográfico.

Asimismo, con la declaración del comisario La Regla, se exhibieron las fotografías del vehículo en OMP 38 y 515, quien explicó la manera en que determinaron que los dos sujetos que aparecían en la fotografía de OMP 39, correspondían a Camilo Sandoval y Luis Astudillo apodado raperito, básicamente, haciendo comparaciones de imágenes de redes sociales, de las fotografías del biométrico y de las imágenes extraídas del celular incautado a Camilo Sandoval.

Por otra parte, en relación con el delito base, además, se incorporó el documento 66, que correspondía al encargo policial y el certificado de inscripción y anotaciones vigentes del mismo vehículo con la patente original HVHJ.40, a nombre de la víctima José Luis Roumil Apablaza, lo que sumado al parte denuncia acompañado como documento 654, permitieron establecer que sufrió el robo de su vehículo, el 16 de mayo de 2017, el cual fue recuperado el 27 de noviembre de ese mismo año.

Conforme a la prueba rendida, en los delitos de receptación y estafa antes referidos, participaron como autores inductores Yerko Silva Toro con Ilich Chopa Aldana, lo que fue corroborado por los propios acusados, al reconocer que “hicieron” juntos los primeros vehículos hasta noviembre de 2017; y como autores materiales Camilo Sandoval Godoy y Luis Astudillo Peña.

7.- Station Wagon marca Ford, modelo Explorer Limited, de color negro, patente JHFW.87, que fue reinscrito con la factura N°31 de Compraventa de Automóviles Orión Ltda, con fecha 21 de mayo de 2017, solicitante Camilo Sandoval Godoy (cuya huella dactilar fue identificada en el formulario respectivo según lo informado en el documento 654) y adquirente Daniela Carrasco Pérez. (En el documento 170 f) se incorporaron la solicitud de primera inscripción, factura electrónica, comprobante de pago de impuesto a Tesorería General de la República de 22.05.2017, formulario 88 emitido por Tesorería correspondiente a impuesto a pagar y solicitud de transferencia de 29.06.2017, contrato de compraventa del vehículo entre Daniela Carrasco Pérez como vendedora y Jeannette Cartes Espinoza, como compradora, precio \$ 27.000.000 y ambas firmaron el documento y certificado de inscripción y anotaciones vigentes en el RVM del vehículo, a nombre de la víctima).

Este vehículo fue vendido a Jeannette Lorena Cartes Espinoza en la suma de **\$27.000.000** (más de 400 UTM a junio de 2017 al valor de la UTM de \$46.740), quien compareció a estrados y declaró que en el

año 2018 compró un vehículo en Santiago que estaba publicado en el portal Chile Autos, era una Ford, Explorer 4x4, año 2017 con 4.000 kms y fracción, con todos los papeles al día. Hizo el 1er contacto a través del portal e inmediatamente le empezó a hablar por whatsapp la persona que dijo llamarse Héctor. Refirió que estaba publicado en \$29.000.000 y al final quedaron en \$27.000.000 y acordaron que viajaría a Santiago a revisar el vehículo y cerrar el trato y Héctor se ofreció a ir a buscarla al aeropuerto, porque se iba a devolver manejando el auto a Concepción.

Indicó que se dirigieron a una Notaría, donde estaban dos personas más, supuestamente la esposa y una tía, inicialmente le dijo que vendía la camioneta porque quería hacer una inversión y en la Notaría le dijo que a la Sra. le incomodaba por lo grande. Luego, fueron al Banco BBVA donde ella les entregó un vale vista, pero le pidieron que les pagara en efectivo. Añadió que cuando revisó el vehículo le faltaba una llave y el manual y le dijeron que se los mandarían por Chilexpress.

Contó que en Concepción llevó el vehículo al concesionario Ford y no les aparecía en sus registros, después llegaron funcionarios del Sebv y le dijeron que su auto al parecer estaba clonado, que lo habían robado en un portonazo y había sido reinscrito a través de una factura falsa. Manifestó que los carabineros buscaron los números de chasis y de motor y había un número alterado que estaba al lado del parabrisas, le sacaron éste y le pusieron una placa de aluminio con un número tallado con dos remaches, sacaron esa placa y estaba ahí el número real, luego consultaron y confirmaron que había sido reportado como robado a través de un portonazo.

Dijo que tuvo que entregar su vehículo y la documentación quedó en poder de los carabineros. En ese momento entregó las características físicas de las dos mujeres y el hombre, la mujer de pelo rubio era la tía. Prestó declaración ante Carabineros y la PDI y reconoció al hombre, a la tía y cree que también a Daniela que era supuestamente la vendedora. Relacionado con lo anterior el oficial de la PDI Carlos Riveros, declaró que la Sra. Cares reconoció en sets fotográficos a Camilo Sandoval Godoy y Tatiana Arana Espinoza, como quienes la recibieron y con quienes realizó la compraventa.

Se introdujo el documento 113, que son conversaciones de whatsapp aportadas por la víctima, que dan cuenta de las negociaciones para la compra del vehículo patente JHFW.87.

Finalmente, la víctima puntualizó que compró el vehículo con unos ahorros y pidió un préstamo en el Banco y tuvo que pagarlo, luego, se sentía muy vulnerable y comenzó a transitar con miedo, cuando supo la magnitud de todo esto, comenzó con tratamiento psiquiátrico y lleva años con antidepresivos y ansiolíticos.

Por otra parte, en relación con el delito base, además, se incorporó el documento 63, que correspondía al encargo policial y el certificado de inscripción y anotaciones vigentes del mismo vehículo con la patente original JPLL.25, a nombre de la víctima Cristian Jaramillo Soriano, lo que permitieron establecer que este sufrió el robo con intimidación de su vehículo, el 19 de mayo de 2017, el cual fue recuperado el 07 de noviembre de ese mismo año.

Conforme a la prueba rendida, en los delitos de receptación y estafa antes referidos, participaron como autores inductores Yerko Silva Toro con Ilich Chopa Aldana, lo que fue corroborado por los propios acusados, al reconocer que “hicieron” juntos los primeros vehículos hasta noviembre de 2017; y como autores materiales Camilo Sandoval Godoy y Tatiana Arana Espinoza.

8.- Camioneta Toyota modelo Hi Lux 2.4, de color gris, año 2017, patente **JHFX-82**, que fue reinscrita con la factura N°4 de Comercializadora Full Orión Ltda. de **28 de junio de 2017**, solicitante **Tatiana Arana Espinoza** (la huella dactilar de esta fue identificada pericialmente en el formulario respectivo según documento 654) y el adquirente **José Alfredo Paredes Quevedo** (reclutado por Camilo Sandoval Godoy).

Como documentos 115, se acompañaron la copia del permiso de circulación; copia del certificado de homologación individual que reemplaza la revisión técnica; copia de la factura; copia de la solicitud de transferencia en el Registro de Vehículos Motorizados de fecha 24 de julio de 2017; copia de declaración de transferencia de vehículos motorizados y giro y pago de impuesto, de la misma fecha; certificado de inscripción en el R.V.M, a nombre de José Alfredo Paredes Quevedo; solicitud de primera inscripción y formulario 88 Tesorería General de la República. En el documento 209 se incorporó el certificado de inscripción y anotaciones vigentes en el R.V.M, del vehículo patente JHFX.82-4, propietario Ricardo Hernán Llano Navarrete, fecha de adquisición 24.07.2017, y propietario anterior José Alfredo Paredes Quevedo.

Con el mérito de los documentos antes referidos, sumada la declaración del comisario La Regla, en cuanto señaló que José Paredes Quevedo reconoció en su declaración haber vendido la camioneta a la víctima estafada en \$15.000.000, dinero que recibió en el Banco y luego pasó íntegramente a Camilo Sandoval, y que después recibió \$100.000 o \$150.000, se acreditó, sin margen de dudas, que el vehículo singularizado fue vendido a Ricardo Hernán Llano Navarrete y posteriormente fue incautado por funcionarios policiales.

Fotografías del vehículo se incorporaron en OMP 514, exhibidas al Capitán Sebv Sebastián Silva, adjuntas al informe físico técnico. Y la fotografía de OMP 207, fue exhibida a Francisco Lara Acevedo, víctima del robo del mismo vehículo, quien la reconoció. Finalmente el perito José Ascencio expuso que revisada la camioneta, tenía la serie de chasis adulterada no así la de motor y que se determinó que mantenía encargo vigente por robo con intimidación.

Por otra parte, en relación con el delito base, además, se incorporó el documento 59, que correspondía al encargo policial y el certificado de inscripción y anotaciones vigentes del mismo vehículo con la patente original JKFY-35, a nombre de la propietaria Inversiones Santa Elena Spa. El denunciante del hecho fue Francisco Vladimir Lara Acevedo, representante legal de la propietaria, el que dio su testimonio en juicio, relatando la sustracción de su camioneta, todo lo cual permitió establecer que este sufrió el robo con intimidación de su vehículo, el 17 de mayo de 2017, el cual fue recuperado el 14 de diciembre de ese mismo año.

Conforme a la prueba rendida, en los delitos de receptación y estafa antes referidos, participaron como autores inductores Yerko Silva Toro con Ilich Chopa Aldana, lo que fue corroborado por los propios acusados, al reconocer que “hicieron” juntos los primeros vehículos hasta noviembre de 2017; y como autores materiales Camilo Sandoval Godoy y José Alfredo Paredes Quevedo.

9.- Camioneta marca **Ford, modelo Ranger, de color blanco**, año 2017, patente **HSWJ.63**, que fue reinscrita con la factura N° 7 de Comercializadora Full Orión Ltda. emitida el **4 de julio de 2017**, en que fue solicitante **Luis Astudillo Peña** y adquirente **Jorge Salinas Uribe**. (Como documentos 114, fueron incorporados copia del permiso de circulación, de la factura electrónica y de la declaración de transferencia de vehículos motorizados y giro y pago de impuestos).

Este vehículo fue vendido a René Vidal Sánchez, con domicilio en la ciudad de Coronel, en \$ 15.500.000.

La víctima declaró en estrados y señaló que buscó en internet en sitios oficiales como Chile Autos y encontró la camioneta que quería comprar, era una Ford Ranger Limited 2.5, bencinera, de color blanco, entonces, contactó al vendedor, consultó los papeles y se veía todo en regla, incluso consultó con un vecino que es carabinero y viajó a Santiago con un colega, vieron la camioneta y fue al Registro Civil a hacer la transferencia. Agregó que pagó la suma de \$15.500.000 en efectivo, ya que tenía una parte porque había vendido su auto más \$4.000.000 que sacó en préstamo.

Precisó que quienes le vendieron la camioneta eran dos hombres, uno joven, bien vestido, y el otro normal, a quienes describió físicamente y señaló que no mostraban nerviosismo en su accionar y que no tuvo cómo saber que estaba siendo estafado.

Indicó que como en septiembre, llevó el vehículo a la concesionaria Ford para solicitar la segunda llave porque no se la entregaron, donde le dijeron que no era posible hacer una segunda llave porque el chasis tenía una numeración diferente a la que consignaba el padrón. Entonces con su vecino carabinero, llevaron el vehículo a la Comisaría y lo revisaron y efectivamente el número de chasis se consultó y aparecía con encargo por robo. Acotó que se sintió muy desesperado porque perdió una gran cantidad de dinero, había pedido un préstamo y tuvo que hacer entrega de la camioneta.

Reconoció en el documento 114, la copia de presupuesto de 14 de agosto de 2017 de Difor Chile, por un valor de \$ 184.499, a su nombre que corresponde a los servicios que requirió el día en que solicitó la copia de la llave.

Además, se acompañó el documento 207, que correspondía al certificado de inscripción y anotaciones vigentes en el R.V.M, del vehículo a nombre del propietario René Vidal Sánchez, fecha de adquisición 09.08.2017, propietario anterior, Jorge Salinas Uribe.

Por otra parte, en relación con el delito base, además, se incorporó el documento 57, que correspondía al encargo policial y el certificado de inscripción y anotaciones vigentes del mismo vehículo con

la patente original HPSP.93, a nombre del propietario y víctima Santiago Brito Pavéz, que permitieron establecer que este sufrió el robo de su camioneta, el 24 de junio de 2017.

Conforme a la prueba rendida, en los delitos de receptación y estafa antes referidos, participaron Yerko Silva Toro con Ilich Chopa Aldana, como inductores, lo que fue corroborado por los propios acusados, al reconocer que “hicieron” juntos los primeros vehículos hasta noviembre de 2017; además, Camilo Sandoval Godoy, el que tenía vínculos cercanos con quien figuraba como primer adquirente y vendedor, Jorge Salinas Uribe y también con el solicitante Luis Astudillo, ambos testaferros reclutados por Sandoval.

10.- Station Wagon Ford, modelo Edge, de color blanco metal, año 2017, patente JSSD.29, reinscrito con la factura N°8 de Comercializadora Full Orión Ltda. de **4 de julio de 2017**, solicitante, **Luis Astudillo Peña** (su huella dactilar fue identificada pericialmente en el formulario respectivo según se informó en el documento 654) y el adquirente, el mismo **José Alfredo Paredes Quevedo**. (En los documentos 852, se acompañaron la solicitud de primera inscripción, copia de la factura electrónica, comprobante de pago de ServiEstado del impuesto y formulario 88 de Tesorería General de la República).

Este vehículo fue vendido a Mireya del Carmen Sepúlveda Vilches en \$22.000.000 (suma superior a 400 UTM al valor de \$46.000 a agosto de 2017), la que compareció a estrados y dio su testimonio.

La víctima señaló que el año 2017 compró un vehículo Ford Edge del año 2018, el cual vio en la página de Chile Autos, donde contactó a la persona vía celular y quedaron de juntarse para verlo en el estacionamiento del mall plaza Oeste. Refirió que ese día llegó un hombre con el automóvil, quien le dijo que era cuñado del dueño y que estaba vendiendo el Ford urgente porque a este le había salido un trabajo en una minera en el norte, donde le iban a dar casa y camioneta.

Precisó que al día siguiente se juntaron para hacer la transferencia, y este sujeto llegó acompañado de otra persona que dijo era el dueño del automóvil, entonces, preguntó por las llaves, pero le pasó una y le dijo que había salido apurado de la casa que después le entregaba la otra.

Señaló que en la Notaría los tipos le pasaron la llave y ella le dijo que se juntaran al día siguiente para que le entregaran la otra, entonces, quedaron de juntarse en el mismo estacionamiento. Recordó que llamó dos o tres veces a la persona para confirmar si le iba a llevar la llave, pero nunca le contestó e, igualmente fue con su hijo, pero no aparecieron pese a esperarlos por una hora y nunca más supo de ellos. Acotó que pagó el precio con un vale vista.

Indicó que pasaron como 20 días y le llegó el padrón a la casa y al día siguiente llegaron los carabineros, a quienes autorizó para que examinaran el vehículo, abrieron el capot y sacaron fotografías, luego le pidieron la documentación y le dijeron “todo esto señora es falso” y ella quedó asombrada. Entonces, fue citada con el vehículo para revisarlo más detenidamente, al día siguiente prestó declaración, también sacaron el asiento del piloto y debajo había una lata soldada y ahí estaba la inscripción del chasis falso y más abajo estaba el real, por lo que, el vehículo fue incautado. Puntualizó que se quedó sin vehículo y perdió

\$22.000.000, y este era su primer automóvil, ya que había hecho un curso de manejo y salió bien, y su marido le dijo que iban comprar un vehículo pero no alcanzó a manejarlo.

Respecto del documento 133 que se le exhibió, reconoció el certificado de inscripción y anotaciones vigentes en el R.V.M, del vehículo que adquirió el 28 de agosto de 2017, el propietario anterior era José Paredes Quevedo, que fue la persona que concurrió a venderle el automóvil. Asimismo, reconoció fotografías del vehículo en OMP 523.1.

El comisario La Regla, en relación con este vehículo, atestiguó que José Alfredo Paredes Quevedo, testaferro reclutado por Camilo Sandoval Godoy, expuso haber realizado la venta de un Ford modelo Edge, concurriendo a una Notaría para hacer la transferencia y luego al banco donde recibió \$20.000.000, dinero que le pasó a Camilo Sandoval y después él recibió entre \$100.000 y \$150.000.

Por último, con las declaraciones de Ilich Chopa y la testigo Daniela Opazo, se introdujo, en los documentos 808, copia de un comprobante de depósito en efectivo por la suma de \$14.350.000, efectuado por José Paredes Quevedo el 28 de agosto de 2017, el mismo día en que se vendió el vehículo en comento, en la cuenta del Banco Santander de Daniela Opazo que era usada por Ilich Chopa. Al respecto, este último indicó desconocer al depositante, en cambio, la testigo señaló que ese depósito correspondía a los que hacían en su cuenta para Ilich Chopa. Con lo que se demuestra, sin lugar a dudas, que el acusado Ilich Chopa Aldaba recibió parte del precio en que se vendió este vehículo.

Por otra parte, en relación con el delito base, además, se incorporó el documento 60, que correspondía al encargo policial y el certificado de inscripción y anotaciones vigentes del mismo vehículo con la patente original JSCW-44, a nombre de la propietaria, Cecilia Fuenzalida Zúñiga, siendo la víctima y denunciante de la sustracción del vehículo, Mauricio Ramírez Fuenzalida, todo lo cual, permitió establecer que este sufrió el robo con violencia del móvil, el 27 de junio de 2017.

Conforme a la prueba rendida, en los delitos de receptación y estafa antes referidos, participaron como autores inductores Yerko Silva Toro e Ilich Chopa Aldana, lo que fue corroborado por los propios acusados, al reconocer que “hicieron” juntos los primeros vehículos hasta noviembre de 2017 e incluso Ilich Chopa recibió parte del valor de venta; y como autores directos Camilo Sandoval Godoy y José Alfredo Paredes Quevedo, testaferro reclutado por el primero, al igual que el solicitante de la 1ª inscripción, Luis Astudillo.

11.- Station Wagon marca **Jac**, modelo **S3**, de color **gris**, año 2017, patente **GYPP.92**, fue reinscrito con la factura N°1 de la Automotora Kor SPA, emitida el **08 de agosto de 2017**, la solicitante de 1ª inscripción fue **Edith Silva Sánchez**, y como primer adquirente aparecía **José Raiman Cordero**. (Como documentos 173 b) se incorporaron la solicitud de primera inscripción, la factura electrónica de primera venta, el formulario 88 de la Tesorería General de la República y el comprobante de pago del impuesto del Banco Estado, solicitud de transferencia de la oficina La Serena, el contrato de compraventa y el certificado de

inscripción y anotaciones vigentes del vehículo en el Registro de Vehículos Motorizados del vehículo PPU GYPP.92, a nombre del propietario Erick Andrés Álvarez Contreras y propietario anterior, José Reinaldo Raiman Cordero).

Este vehículo se vendió a Erick Andrés Álvarez Contreras, con domicilio en La Serena, en la suma de \$7.400.000, quien compareció a estrados y declaró que en agosto de 2017 buscó en Facebook y en Yapó un vehículo para adquirir, y se contactó con una persona de Santiago por un Jac S3, de color gris, el cual tenía 9.000 kilómetros. Dijo que revisó la información del auto en el Registro Civil, verificando que no tenía multas ni deudas. El 7 de septiembre, el vendedor viajó a La Serena a exhibirle el vehículo, con dos personas más, y con su suegro lo revisaron y se percataron que el número de motor y toda la estructura y la documentación se veían en regla. Agregó que fueron a una Notaría a hacer la transferencia y luego al banco donde la mujer que recibió el dinero que pagó en efectivo lo depositó, y después los fue a dejar al terminal y les pagó los pasajes, la bencina y los peajes.

Dijo que le entregaron una llave, y luego al revisar el manual de usuario se dio cuenta que el vehículo traía dos llaves, por lo que intentó comunicarse con ellos, pero lo bloquearon.

Precisó que José Raiman, era el propietario, y viajó acompañado de otro hombre joven como de 30 años y una mujer de la misma edad, que supuestamente era la hija de José y esposa del joven.

Refirió que después de un tiempo lo buscó la PDI y les dio autorización para que revisaran su auto y al día siguiente lo llevaron al cuartel, quedando incautado. Prestó declaración y reconoció a dos personas, al vendedor y a su hija.

Mencionó que estas personas le entregaron una carpeta con la factura y los documentos del vehículo y en ésta, también estaba el comprobante de depósito, el cual reconoció en la evidencia material 104, que se le exhibió, señalando que era del Banco BBVA por la suma de \$ 5.700.000, de 07.09.2017, depositante Edith Silva. Preciso el testigo que el resto del dinero se lo llevaron en efectivo y que ésta fue la boleta de depósito que entregó a la PDI.

Además, se refirió a OMP 262, que eran imágenes de comprobantes de Credichile de giros de dinero de fecha 07.09.2017, para completar el precio y los documentos del vehículo que le entregaron, permiso de circulación, homologación de la revisión técnica, la factura N°1 de la automotora Kor Spa. Por último, reconoció el documento 303, que fue incorporado, como el contrato de compraventa del vehículo que suscribió.

Con la declaración del comisario Larry Caro, encargado del presente procedimiento, se incorporaron las placas patentes del vehículo (evidencia material 103), quien además señaló que se determinó que la cuenta del Banco BBVA, en que se hizo el depósito, correspondía a Claudia Sandoval Godoy quien era la pareja de Yerko Silva Toro, y fotografía de dicho comprobante le fue exhibida en OMP 331 N°34, en que

aparecía como depositante Edith Silva a Claudia Sandoval, con fecha 07 de septiembre, por la suma de \$5.700.000.

Por otra parte, en relación con el delito base, además, se incorporó el documento 153, que correspondía al encargo policial y el certificado de inscripción y anotaciones vigentes del mismo vehículo con la patente original HPCW.34, a nombre de la propietaria y víctima, Marcela Núñez Plaza, siendo denunciante de la sustracción del vehículo, Marcos Rojas Portillo, todo lo cual, permitió establecer que estos sufrieron el robo con intimidación del móvil, el 18 de junio de 2017.

Conforme a la prueba rendida, en los delitos de receptación y estafa antes referidos, participó como autor inductor Yerko Silva Toro y como autores directos Edith Silva Sánchez y José Raiman Cordero, testaferro reclutado por Edith, brazo operativo de la asociación y amiga de Yero Silva Toro.

12.- Camioneta marca **Kia, modelo Frontier, de color blanco**, año 2017, patente **HHBL.12**, reinscrita con la factura N°3 de la Automotora Kor SPA, emitida el **10 de agosto de 2017**, solicitante **Carlos Herrera Torres** y el primer adquirente era **Nelson Méndez Moya** (único socio de Méndez Moya Spa.)

Este vehículo fue vendido a José Luis Flores Zamorano en la suma de \$14.500.000.

El oficial de la PDI Eric Rojas Barrera, atestiguó que la víctima señaló, durante la investigación, que mediante la plataforma Yapo buscó un vehículo de carga porque estaba iniciando un emprendimiento, contactó a la persona que lo ofertaba, y al día siguiente revisó el vehículo y no tenía inconvenientes. Dijo que acordaron la venta y al otro día se juntaron en el Registro Civil de Quilicura, a donde llegó la persona dueña del vehículo. Estos sujetos le dijeron que preferían el pago en efectivo, por eso, lo pagó con dinero efectivo y, para eso, acompañó su cartola con un giro de emergencia del alrededor de \$ 14.000.000.

En la documental 108, reconoció una cartola de la cuenta corriente del Banco Chile, del Sr. Flores Zamorano, en la que aparece un giro por \$14.500.000, el día 5 de septiembre de 2017.

Por otra parte, en relación con el delito base, además, se incorporó el documento 55, que correspondía al encargo policial y el certificado de inscripción y anotaciones vigentes del mismo vehículo con la patente original JBFP.11, a nombre del propietario y víctima, Raimundo Arturo del Corazón Fuentes Ibarra, el que entregó su testimonio en juicio y reconoció su camioneta en la fotografía de OMP 526, adjunta al informe pericial de revenido químico, todo lo cual, permitió establecer que sufrió el robo en bins nacionales de uso público del móvil, el 9 de mayo de 2017, siendo recuperado el 31 de diciembre del mismo año.

Conforme a la prueba rendida, en los delitos de receptación y estafa antes referidos, participó como autor inductor Yerko Silva Toro y como autor directo Nelson Méndez Moya, testaferro de la asociación ilícita.

13.- Station Wagon marca **Nissan, modelo Murano, de color gris**, año 2017, patente **JPSD.56**, el que fue reinscrito con la factura N°4 de la Automotora Kor SPA, emitida el **12 de agosto de 2017**, en que fue solicitante **Jorge Salinas Uribe** y adquirente, **Carlos Latín Quezada**.

Este vehículo fue vendido a Claudio Ramírez Witto, con domicilio en Temuco, en la suma de \$18.500.000.

La víctima compareció al juicio y declaró que en el año 2017, decidió cambiar su auto, tenía un Hyundai Santa Fe del año 2013. Buscó en Chile Autos y vio un Nissan Murano publicado en \$23.000.000, y se puso en contacto con la persona de nombre Carlos Latín, quien viajó a Temuco en el auto junto a otra persona y le dijo que era abogado. Revisaron el vehículo, hicieron un checklist y este no presentaba ninguna observación y el vendedor le dijo que aceptaba su vehículo en parte de pago.

Relató que se juntaron en Temuco e hicieron la transferencia en el Registro Civil y al tiempo, Carlos Latín Quezada lo llamó y le dijo que si podía acudir a una compraventa de vehículos para ceder los derechos de la Hyundai Santa Fe y el 5 de diciembre, este lo fue a buscar para hacer el trámite y desde entonces no volvieron a tener contacto.

Indicó que al año siguiente lo llamó una persona de la PDI, señalándole que había sospechas de que su auto podía estar clonado y autorizó a que fuera periciado.

En este punto, declaró el perito mecánico Juan Pablo González Bahamondez, quien señaló que este vehículo tenía la serie de chasis adulterada y la de motor era original, y se obtuvo mediante escáner la serie de chasis verdadera.

Continuando con su relato, el afectado dijo que lo llamó su hermano abogado, para que entregara el auto porque estaba clonado, explicándole que era una mafia que se dedicaba a clonar vehículos y lo tuvo que entregar.

Manifestó que había pedido un préstamo de aprox. \$7.500.000 y presentó una demanda para no pagarlo, pero perdió el juicio y actualmente tiene una orden de embargo, todo gracias a Carlos Latín y a Camilo "Cami" Sandoval.

Precisó que la cesión de derechos del Hyundai Santa Fe se hizo en una automotora en San Miguel, por alrededor de 9 u 11 millones y que la diferencia de \$7.500.000 se la transfirió a Camilo Sandoval, en una cuenta del Banco Estado.

A este respecto, en OMP 545, reconoció las transferencias que realizó desde su cuenta del Banco Scotiabank a una cuenta del Banco Estado del destinatario Camilo Sandoval, el 29 de diciembre de 2017, consignándose el correo electrónico csandoval@hotmail.com, por \$ 500.000 y por \$325.000, que es la última cuota del vehículo; y dos transferencias desde la cuenta corriente de BK a la cuenta corriente de Camilo Sandoval por \$2.500.000 y \$5.000.000, el 5 de diciembre de 2017.

El testigo explicó que el día que hicieron el negocio, el Carlos Latín acudió con Camilo Sandoval, preguntando si la empresa BK que le hizo el préstamo, podía entregarle el dinero a Sandoval y le dijeron que sí a través de una carta poder que le envió a BK Spa. La víctima reconoció dicho documento que fue

incorporado al juicio como OMP 545, que autorizaba a depositar la suma de \$7.500.000, en la cuenta corriente de Camilo Sandoval, N° 002183983.

Respecto del resto de los documentos que aportó a la policía, y que fueron acompañados al juicio, indicó que se trataba de la autorización para vender su auto; mandato a Camilo Sandoval Godoy para que vendiera el Hyundai Santa Fe 2.4, año 2013, ambos de 5 de diciembre de 2017; certificado de inscripción a nombre del propietario anterior; homologación del vehículo; certificado de inscripción del vehículo Hyundai Santa Fe, que dio en parte de pago; fotografía de Camilo Sandoval que extrajo de Facebook, quien era la persona que se encontraba con Latín Quezada el día de la venta y a quien le otorgó la carta poder para vender la Hyundai Santa Fe y el certificado de inscripción y anotaciones vigentes a su nombre.

Por último, se introdujo una fotografía en OMP 267, y el testigo reconoció en ella el vehículo que adquirió.

En el mismo sentido, declaró el hermano de la víctima, Guillermo Ramírez Witto.

Además, corroborando el testimonio anterior, el comisario Larry Caro, que participó en el procedimiento que llevó a la incautación del vehículo, indicó que se levantaron las placas patentes que portaba, incorporadas como evidencia material 116 y los documentos del móvil, acompañados como prueba documental 173, letra e), correspondientes a la solicitud de 1ª inscripción, factura electrónica N°4 de Automotora Kor SPA, formulario 88 de la TGR de pago de impuesto y el comprobante de pago de este y el certificado de inscripción a nombre de la víctima.

Por otra parte, en relación con el delito base de la receptación, además, se incorporó el documento 187, que correspondía al encargo policial y el certificado de inscripción y anotaciones vigentes del mismo vehículo con la patente original JFSD.71, a nombre de la víctima, Alexander Goncalvez Díaz, los que permitieron establecer que sufrió el robo con intimidación del móvil, el 8 de agosto de 2017, siendo recuperado el 4 de diciembre de 2018.

Conforme a la prueba rendida, en los delitos de receptación y estafa antes referidos, participó como autor inductor Yerko Silva Toro y como autores directos Camilo Sandoval Godoy y Carlos Latín Quezada.

14.- Station Wagon marca Dodge, modelo Journey, de color plata, año 2017, patente JCCJ.30, el cual fue reinscrito con la factura N°5 de la Automotora Kor SPA, emitida el **29 de agosto de 2017**, solicitante **Carlos Andrés Gómez Zúñiga** (cuya huella dactilar estampada en el formulario fue identificada pericialmente según se informa en el documento 654) y adquirente fue **José Manuel González Arancibia**. (En el documento 173 c) se incorporaron, la solicitud de primera inscripción, factura electrónica, comprobante de pago de impuesto, formulario 88 de Tesorería, certificado de inscripción y anotaciones vigentes a nombre de la víctima Maggi Ávila Alonso, propietario anterior, José Manuel González Arancibia y en la documental 659, el certificado de homologación del vehículo).

Este vehículo fue vendido a Maggie Cristina Ávila Alonso en la suma de \$13.500.000.

La afectada prestó declaración en el juicio y señaló que en noviembre del año 2017, su marido Mario Merino, encontró este vehículo por internet porque se lo iba a regalar, contactaron a una persona y se juntaron en una bencinera de la calle Radal en Quinta Normal, ambos lo fueron a ver y les gustó, lo estaban vendiendo en \$14.900.000, le parece que era del año y tenía poco kilometraje.

Precisó que llegaron dos hombres, uno tenía como 40 años y el otro era más joven, el mayor se identificó como José, era el que conversaba, y el más joven dijo que a su señora se le había hecho grande el auto y necesitaba cambiarlo, ella era la dueña del vehículo.

Indicó que lo compraron en \$ 13.500.000, que pagaron en efectivo, llevaron \$7.000.000 y el resto lo sacaron del banco, pidieron un lugar especial por seguridad y le entregaron el dinero a José.

Manifestó que les entregaron los documentos del vehículo y una llave, no pidieron la segunda llave por inexperiencia. Agregó que tuvieron el vehículo en su poder dos días y llegaron los carabineros indicando que tenían información del Registro Civil que habían comprado el auto, lo revisaron mucho y dijeron que estaba adulterado. Expresó que en ese momento fue impactante, se derrumbó todo, porque compraron un auto para mayor comodidad, fue una depresión familiar, muy triste hasta el día de hoy. Puntualizó que el auto quedó en Carabineros, y ella perdió dinero y auto y los documentos de este los entregó a los carabineros.

La afectada reconoció el vehículo que compró en las fotografías de OMP 533, adjuntas al informe pericial químico, y en el documento 658, la declaración de transferencia de fecha 13 de noviembre de 2017.

Por otra parte, en relación con el delito base de la receptación, además, se incorporó el documento 53, que correspondía al encargo policial y el certificado de inscripción y anotaciones vigentes del mismo vehículo con la patente original HXKK.72, a nombre de la víctima, Francisco Javier Aguirre Guerrero, asimismo, el documento 660, parte denuncia de la Subcomisaría Los Jardines, los que permitieron establecer que este sufrió un robo en su domicilio en que le sustrajeron su vehículo, el 8 de junio de 2016, siendo recuperado el 5 de diciembre de 2017.

Conforme a la prueba rendida, en los delitos de receptación y estafa antes referidos, participó como autor inductor Yerko Silva Toro (dado que el solicitante de 1ª inscripción era un amigo y testaferro reclutado por Edith Silva Sánchez), y como uno de los autores directos, José González Arancibia.

15.- Station Wagon marca Hyundai, modelo Tucson, de color negro, año 2018, patente JCCK-31, reinscrito con la factura N°7 de la Automotora Kor SPA, con fecha de emisión el 11 de septiembre de 2017, solicitante Edith Silva Sánchez, y adquirente José Reinaldo Raiman Cordero. (Como documental 173 letra d), se introdujeron la solicitud de primera inscripción, factura electrónica, formulario 88 de pago de impuesto de la Tesorería General de la República, comprobante de pago de Serviestado del impuesto, certificado de inscripción y anotaciones vigentes, a nombre de Ricardo Ruiz Pontigo, fecha adquisición 26 de octubre de 2017 y propietario anterior José Reinaldo Raiman Cordero).

Este vehículo fue vendido a Ricardo Ruíz Pontigo, con domicilio en la ciudad de Viña del Mar, en \$13.000.000.

El inspector Álvaro Pino Saavedra, que participó en el procedimiento en que se incautó el presente vehículo, declaró que concurrieron a Viña del Mar, donde tomaron contacto con la víctima, quien era el segundo dueño del automóvil y lo había comprado en Santiago. Señaló que el Sr. Ruíz Pontigo, manifestó que se contactó por internet, por Chile Autos o Yapo, con una persona que estaba ofertando el vehículo, viajó a Santiago y ubicó al propietario de nombre José Raiman. Revisó la camioneta con un mecánico y al momento de la transferencia José Raiman fue acompañado por dos personas, una mujer de contextura gruesa y un hombre de contextura delgada. Le exhibieron sets fotográficos, con las personas que fueron controlados en el Mazda CX-9, identificando en un 100% a Edith Silva Sánchez, Alan Lidid Madrid y José Raiman Cordero.

El testigo acotó que Ruiz Pontigo pagó por el vehículo como \$13.000.000 y que este fue incautado conjuntamente con sus placas patentes y documentación, reconociendo estos elementos en las evidencias materiales 269 y 270 exhibidas en su declaración. Por su parte, la perito mecánico Gina Torres, Lillo, estableció que ambas series identificatorias de este vehículo estaban adulteradas, sin embargo mantenía un adhesivo original con la serie de chasis, consultada, correspondía a la patente JWDL.37.

Por otra parte, en relación con el delito base de la receptación, además, se incorporó el documento 186.1, que correspondía al encargo policial y el certificado de inscripción y anotaciones vigentes del mismo vehículo con la patente original JWDL.37, a nombre de la víctima, Verónica Poblete Vidal, asimismo, declaró la funcionaria de Carabineros Carolina Allende, quien recibió la denuncia de la sustracción del móvil, todo lo cual permitió establecer que la Sra. Poblete Vidal sufrió un robo con intimidación de su vehículo, el 8 de septiembre de 2017, siendo recuperado el 27 de marzo de 2018.

Conforme a la prueba rendida, en los delitos de receptación y estafa antes referidos, participó como autor inductor Yerko Silva Toro y como autores directos, Edith Silva Sánchez y José Raiman Cordero.

16.- Station Wagon marca Nissan, modelo Kicks, de color negro, año 2018, patente JJLL.87, reinscrito con la factura N°14 de la Automotora Kor SPA, emitida el **19 de septiembre de 2017**, solicitante y adquirente **José Reinaldo Raiman Cordero**. (En la prueba documental 525, se incorporó la solicitud de 1ª inscripción, la factura electrónica, el formulario 88 emitido por TGR y comprobante del pago de impuesto y certificado de inscripción y anotaciones vigentes en el Registro Civil, a nombre de Juan Carlos Rodríguez Vera, propietario anterior José Raiman Cordero).

Este vehículo fue vendido a Juan Carlos Rodríguez Vera, con domicilio en Temuco, en la suma de \$8.000.000, el que se presentó al juicio a dar su testimonio y señaló que en el año 2017 quería renovar su auto y con su señora buscaron en diferentes portales de internet, apareció un Nissan kicks, negro, en una casa muy bonita.

Dijo que es de Temuco y tiene familiares en Santiago, entonces, aprovechó de viajar de visita y siguió en contacto con estos tipos e hicieron el negocio, comprando el vehículo en \$8.000.000. Precisó que la transferencia se hizo en el Registro Civil de Puente Alto, le preguntó al funcionario si tenía algún impedimento y este le dijo que estaba normal. Entonces, fueron al banco, sacó el dinero y se los entregó a las personas. Refirió que el presunto dueño era José Raiman Cordero, quien estaba con una supuesta hija.

Agregó que al año siguiente, lo contactaron unos funcionarios de la PDI, señalándole que el vehículo era supuestamente robado, lo llevó a la unidad, donde le hicieron una revisión y resultó que efectivamente era robado, por eso, lo tuvo que entregar y perdió el dinero. En relación con este punto, el perito mecánico Gonzalo Román Muñoz, afirmó que las series de motor y chasis de este vehículo estaban manipuladas y adulteradas, y la serie de motor que aparecía en un adhesivo correspondía a la patente JWZT.57, lo que se corroboró con la empresa concesionaria y con el peritaje químico que reveló la verdadera serie de chasis.

Puntualizó que dio las características físicas de las dos personas, le mostraron un set fotográfico y los reconoció a los dos, había un tercero que era el conductor que supuestamente era el pololo de la mujer, pero a él no lo vio ni lo reconoció.

El afectado reconoció en OMP 266, imágenes de comunicaciones vía whatsapp que tuvo con José Raiman y, además, respecto de OMP 258, reseñó que eran fotografías del vehículo que José Raiman le envió por whatsapp, indicando que aparecía estacionado afuera de una casa bonita, por lo que le dio la impresión que era gente decente.

Acotó que se fue encariñando con el vehículo, se lo iba a regalar a su señora, porque ella se había enamorado de éste, después con su señora quedaron destruidos, pero dieron vuelta la página y siguieron adelante.

El comisario Larry Caro Arroyo, quien estuvo a cargo de las diligencias respectivas, señaló que se estableció que las fotografías enviadas por José Raiman a la víctima, fueron tomadas a 20 metros del domicilio de Camilo y Claudia Sandoval Godoy. Además, se practicó un reconocimiento fotográfico al Sr. Rodríguez y logró identificar en un 100% a José Raiman y a Edith Silva, quienes también participaron en la venta del vehículo Jac S3.

Indicó el testigo Caro que en OMP 259, aparecía una imagen de Google Maps, que obtuvieron para determinar dónde fue sacada la fotografía enviada a la víctima, se observaba dirección Avda. Las Torres 1040, comuna de Lo Prado, similar a la imagen donde estaba el vehículo; y en OMP 260, es una imagen de Google Maps donde aparecía el domicilio de Camilo Sandoval, que es calle Los Arrayanes 6850, de Lo Prado, que estaba a 20 metros de donde se tomó la fotografía del vehículo.

Reconoció, además, las placas patentes levantadas del vehículo en la evidencia material 114 y los documentos de este en la evidencia material 115, que correspondían al permiso de circulación, seguros obligatorio, certificado de homologación, el padrón a nombre de Juan Carlos Rodríguez Vera.

Por otra parte, en relación con el delito base de la receptación, además, se incorporó el documento 193, que correspondía al encargo policial y el certificado de inscripción y anotaciones vigentes del mismo vehículo con la patente original JWZT.57, a nombre de la propietaria y víctima, María Cristina Carrasco Vera, los que permitieron establecer que sufrió el robo con intimidación del móvil, el 1 de octubre de 2017 y fue recuperado el 4 de diciembre de 2018.

Conforme a la prueba rendida, en los delitos de receptación y estafa antes referidos, participó como autor inductor Yerko Silva Toro y como autores directos Edith Silva Sánchez y José Raiman Cordero, testaferro reclutado por Edith, brazo operativo de la asociación y amiga de Yero Silva Toro.

17.- Automóvil marca **Kia, modelo Cerato, de color plateado**, año 2018, patente **JZKY.32**, que fue reinscrito con la factura N°9 de la Automotora Kor SPA, emitida el **19 de noviembre de 2017**, en que fue solicitante **José Alfredo Paredes Quevedo** y el adquirente, **Óscar Mauricio Vásquez Hernández**. (Se incorporaron los documentos 529, correspondientes a la solicitud de primera inscripción, factura electrónica, formulario 88 de la TGR de pago de impuesto y comprobante de pago del impuesto y certificado de inscripción y anotaciones vigentes, propietario Automotriz Laguna Autos Spa y propietario anterior, Oscar Mauricio Vásquez Hernández).

Este vehículo fue vendido a Mauricio Laguna Mathinson, propietario de Automotriz Laguna Autos Spa, en la suma de \$8.000.000.

El comisario Álvaro Pino Saavedra, que realizó diligencias a su respecto, señaló que este vehículo estaba en una automotora de nombre Laguna Autos, ubicada en Américo Vespucio, exhibiéndose para su venta, entonces, tomaron contacto con el propietario de apellidos Laguna Mathinson, quien dijo que le habían ido a ofrecer el auto en \$9.000.000, pero que lo compraron a un precio menor, la persona que lo fue a ofrecer era Oscar Vásquez, y lo dejaron para venderlo.

Agregó que la víctima le mostró la documentación entregada por el vendedor y la información de Autofact, en que estaba todo bien, no obstante lo cual al realizar la pericia, los peritos determinaron que el vehículo estaba adulterado en su número de chasis y de motor, logrando acreditar que mantenía un encargo vigente por el delito de robo con intimidación. En este punto, el perito mecánico Carlos Herrera Riquelme y la perito químico, Marcela Rivera Donoso, ratificaron las conclusiones expuestas por el testigo.

En el mismo sentido, declaró en el juicio, Óscar Mauricio Vásquez Hernández y relató en el año 2017 inscribió a su nombre un Kia Cerato plomo, a solicitud de una persona para la que trabajaba como radio taxi, de nombre Fabián y su apellido era extranjero. Explicó que este le pidió el favor de poner el auto a su nombre porque era extranjero y como lo iba a trabajar quedó a su nombre. Dijo que lo ocupó como un mes y

Fabián quiso venderlo porque no tenía las ganancias que esperaba. Se lo vendió a la automotora Laguna, que quedaba en Santiago y fue con Fabián a ofrecer el vehículo y este lo vendió como en \$8.000.000. El dinero lo recibió Fabián en efectivo y en la misma automotora hicieron la transferencia, para lo cual firmó un papel.

Por otra parte, en relación con el delito base de la receptación, además, se incorporó el encargo policial y el certificado de inscripción y anotaciones vigentes del mismo vehículo con la patente original JLGW.41, a nombre del propietario y víctima, José Miguel Campos Cid, como documentos 155 y 210, los que permitieron establecer que este sufrió el robo con intimidación de su vehículo, el 12 de noviembre de 2017 y fue recuperado el 11 de diciembre de 2018.

Conforme a la prueba rendida, en los delitos de receptación y estafa antes referidos, participó como autor inductor Yerko Silva Toro, en la medida que el solicitante de la 1ª inscripción fue José Paredes Quevedo, testaferro de la asociación, reclutado por Camilo Sandoval.

18.- Automóvil marca **Mazda New 6, color blanco**, año 2018, placa patente **JYPV.39**, reinscrito con la factura N°16, emitida por la Automotora Kor SPA, de fecha **23 de noviembre de 2017**, solicitante y adquirente, **Avelino Benjamín Tapia Rosas**. (Se incorporó el documento 528, correspondiente a solicitud de primera inscripción, factura electrónica, formulario 88 Tesorería General de la República, certificado de inscripción y anotaciones vigentes en el R.V.M, a nombre de Avelino Tapia Rosas y comprobante de pago Serviestado del impuesto).

Este automóvil fue vendido a Juan Carlos Rodríguez Bravo en la suma de \$11.000.000; y posteriormente este lo vendió a Charles Piket.

El afectado compareció al juicio y declaró que en los años 2016 y 2017, tenía un puesto de autos en el Automall que está en Américo Vespucio N°0391, en donde compraba y vendía vehículos, y en una de sus búsquedas en Chile Autos, a fines de diciembre de 2017, apareció este vehículo para la venta, entonces, le envió un correo a la persona que lo ofrecía y le hizo una oferta, el vendedor se interesó y le llevó el vehículo al Automall. Indicó que le gustó el vehículo y lo compró. Fueron a la notaría, donde firmaron el contrato y le pagó alrededor de \$10.000.000 al contado.

Precisó que la persona que le vendió el vehículo fue Avelino Tapia, que era el dueño, y andaba supuestamente con su hija y otro joven que manejaba el auto.

Explicó que en ese tiempo los contratos quedaban firmados abiertos, es decir, solo con la firma del vendedor y cuando los vendía la misma Notaría los llenaba con el nuevo comprador. Luego, publicó el vehículo para venderlo en el mismo portal Chile Autos, y lo llamó un señor de nombre Charles Piket que estaba interesado en comprarlo. Señaló que este lo revisó, salió a dar una vuelta en él y lo reservó con la suma de \$500.000, comprándolo en \$13.000.000. Agregó que luego este señor lo llamó porque había ido a la Mazda y le dijeron que una de las llaves no era original, lo cual le pareció sospechoso, por lo que, le pidió que

fuera con el auto a Carabineros para que se lo revisaran y no tuviera problemas. Contó que los carabineros le dijeron que el auto tenía adulterado el número de motor y de chasis, entonces, le pidieron que fuera a declarar y que llevara todos los papeles de la compra del vehículo.

Indicó que concurrió a Carabineros, donde declaró y entregó todos los antecedentes y le devolvió el dinero a don Charles, que era \$4.000.000 y el cheque por \$9.000.000 que todavía tenía, porque él era el estafado. Manifestó que luego de enterarse del origen del vehículo se trató de contactar con Avelino Tapia, fue al domicilio que había dado en Maipú, pero ese domicilio no existía. Debido a esto perdió \$11.000.000 y se quedó sin el vehículo, lo que le trajo muchas consecuencias, porque no pudo seguir trabajando ya que perdió su capital y le vino una depresión grande.

La víctima reconoció la documental 221 que se incorporó, la carta de responsabilidad que firmaron en la Notaría cuando compró el vehículo, donde aparecía que el precio que pagó al contado y en efectivo de \$11.000.000, y la fecha es 20 de diciembre de 2017; el recibo de dinero y carta de responsabilidad de la venta a Charles Piket Bensan y el contrato de compraventa, que quedó abierto, por eso aparecía suscrito entre Avelino Tapia y Charles Piket, de fecha 28 de diciembre de 2017. En la documental 222, aparecía la garantía que le dejó Charles Piket para reservar el vehículo y en OMP 238, la imagen del cheque que este le entregó por \$500.000 para ese efecto.

También se exhibieron fotografías del vehículo en OMP 237 y en OMP 239, indicando el testigo que esta fue una que publicó en Chile Autos por \$13.480.000, y acotó que el automóvil tenía 2.000 kilómetros.

Asimismo, declaró como testigo el Capitán Sebv Rodrigo Salazar Pacheco, respecto de las diligencias realizadas en relación con este automóvil, y señaló que se hizo una revisión físico técnica de este, determinándose que los números de motor y chasis estaban adulterados y se encontró un adhesivo con la serie de chasis original, asociada a la patente JYFS.53, con encargo vigente por robo con intimidación. Conclusión que fue ratificada en juicio por el perito Alejandro Molina.

Por otra parte, en relación con el delito base de la receptación, además, se incorporó el encargo policial como documento 56 y el certificado de inscripción y anotaciones vigentes del mismo vehículo, como documento 220, con la patente original JYFS.53, a nombre de la propietaria, Nadia Díaz González, y como víctima y denunciante figuraba Rodrigo Manríquez Díaz, a lo que se debe sumar el testimonio del funcionario de Carabineros que recibió la denuncia de la sustracción del vehículo, todo lo cual, permitió establecer que los afectados sufrieron el robo con intimidación de su vehículo, el 24 de octubre de 2017, siendo recuperado el 06 de enero de 2018.

Conforme a la prueba rendida, en los delitos de receptación y estafa antes referidos, participó como autor inductor Yerko Silva Toro, en la medida que el solicitante de la 1ª inscripción y adquirente, Avelino Tapia Rosas, testaferro de la asociación que iba a bordo del Mazda CX-9 cuando fue fiscalizado por oficiales de la PDI, con Edith Silva Sánchez y Carlos Lidid Madrid, como conductor, lo que se condice con el modus

operandi, en este caso, en que andaba acompañado de una mujer y un hombre más jóvenes, señalando que la mujer era su hija y el sujeto conducía el vehículo.

19.- Automóvil marca **Audi A4 sport, blanco glaciár**, patente **GKWP.19**, reinscrito con la factura N°17 emitida por la Automotora Kor SPA, con fecha **29 de noviembre de 2017**, en que fue solicitante **José Alfredo Paredes Quevedo**, y adquirente, **Juan Manuel Colina Vidal**.

Este vehículo fue vendido a Antonio Melo Retamal, en \$12.000.000, quien lo compró a través de un dato que le dio Claudio Duque Rodríguez.

El testigo Claudio Andrés Duque Rodríguez, relató en estrados, que en el año 2019, un día su mecánico Johnson Mauricio le comentó que había un vehículo Audi A4 de color blanco barato, porque él dentro de su negocio tiene ese tipo de vehículos, Mercedes en general, no le gusta la marca Audi así que le dijo que se lo iba a ofrecer a un amigo que tenía esa marca. Indicó que su mecánico le dijo que tuviera cuidado porque era de La Pintana y lo ofrecían a \$15.000.000, muy barato porque era año 2018 o 2019.

Indicó que, entonces, llamó a Antonio Melo y le comentó que había un Audi que estaba en La Pintana, para que lo revisara. Luego, su amigo le contó que lo había comprado a un sujeto de nombre Juan, que era el contacto que él le había dado. Agregó que se juntaron y llegaron a un acuerdo de \$12.000.000, muy por debajo del valor que le hubiesen dado en la automotora.

Precisó que antes de la compra nunca vio el vehículo, solamente su mecánico le mandó las fotos y lo vio después de la compra porque Antonio es muy amigo.

Reconoció en OMP 246, la imagen correspondiente a un pantallazo de conversación vía whatsapp de 26 de marzo de 2018, con el contacto "Juan Audi A4", indicando recibió las imágenes de parte de su mecánico y se las reenvió a su amigo Antonio Melo. Y en OMP 244, reconoció el automóvil que adquirió Antonio, Audi A4 patente GKWP.19.

Puntualizó que después de 4 meses, un día llegaron funcionarios de la PDI y le informaron que su vehículo estaba clonado y se lo quitaron. Esta situación fue gravísima para Antonio y su familia, por el tema económico y el perjuicio que había sufrido.

Por otro lado, el inspector Fernando Vásquez Guerra, en lo que concierne a las diligencias que le correspondió efectuar respecto de este vehículo, declaró en juicio, que con el peritaje se estableció que el chasis estaba adulterado, no así el número de motor, y con este se determinó la patente original JLKW.95, la cual registraba encargo vigente y al entrevistarse con la víctima del robo, indicó que se le sustrajo en una encerrona en la comuna de Santiago Centro, y que al entrevistar a la víctima estafada, este dijo que estaban vendiendo un Audi en \$12.500.000.

Hizo presente que Paredes Quevedo fue detenido y entrevistado, señalando que la persona que lo contactó para ese auto en específico y para otros, había sido Camilo Sandoval Godoy, y se vinculó con la información que tenían de Roberto Bascur, que hacía los stickers que iban en los vehículos, ya que el sticker

que llevaba el Audi estaba en el computador que se incautó a Bascur, el que había sido enviado por Camilo Sandoval por correo electrónico. Lo señalado fue corroborado con los cuadros demostrativos 37 y 38 de OMP 43, que correspondían a la imagen del correo electrónico enviado el 30.11.2017 a Bascur por Camilo Sandoval, donde le hacía entrega de los stickers para luego confeccionarlos, y haciendo el comparativo es el mismo sticker alojado en el parabrisas del vehículo Audi cuyo número es el mismo que aparece en la inscripción del Registro Civil. Y el sticker que iba alojado en la puerta del pilar del piloto del vehículo.

Asimismo, el inspector Vásquez, señaló que se incautó un celular Nokia a Ilich Chopa Aldana, en el cual se encontraron diversas imágenes y comprobantes de depósitos bancarios a Camilo Sandoval y a Aimel Osciel Gavilán y, lo relevante para este caso, es que aparecía la cédula de identidad del solicitante José Alfredo Paredes Quevedo. Lo que fue ratificado en OMP 40, capturas de imágenes de la extracción y análisis de celular marca Nokia TA-1105 5.1 plus de Ilich Chopa, por la fotografía 61, correspondiente a la cédula de identidad de José Alfredo Paredes Quevedo.

Finalmente se incorporó como evidencia material 99, los documentos del vehículo que fueron levantados en el cuartel Borgoño, tales como, permiso de circulación, certificados de homologación individual, seguro obligatorio, certificado de inscripción RVM a nombre del propietario Antonio Eduardo Melo Retamal, solicitud de primera inscripción y factura electrónica. Y como EM 100, las dos placas patentes GKWP.19.

Por otra parte, en relación con el delito base de la receptación, además, se incorporó el encargo policial y el certificado de inscripción y anotaciones vigentes del mismo vehículo, como documentos 152, con la patente original JLKW.95, a nombre de la propietaria, Blanca Arrué Lira y como denunciante figuraba Rubén Hidalgo Pérez, los que permitieron establecer que los afectados sufrieron el robo con violencia de su vehículo, el 17 de noviembre de 2017, siendo recuperado el 11 de diciembre 2018.

Conforme con la prueba rendida, en los delitos de receptación y estafa antes referidos, participaron Ilich Chopa Aldana y Camilo Sandoval Godoy, en la medida que el solicitante de la 1ª inscripción, José Paredes Quevedo, testaferro de la asociación, fue reclutado por Camilo Sandoval, el que, además, mandó a confeccionar el sticker con los números de chasis adulterados del vehículo, y la cédula de identidad del testaferro también estaba en el celular de Ilich Chopa, todo lo cual, demuestra sin lugar a dudas que ambos tuvieron intervención directa en los ilícitos.

20.- Station Wagon Hyundai, modelo New Tucson, de color gris, año 2018, patente KBSR.10, reinscrito con la factura N°5 de la Automotora Valenzuela y Arce SPA, emitida con fecha **6 de diciembre de 2017**, en que fue solicitante **Carlos Gómez Zúñiga** y el adquirente **José González Aranciaba**. (Como documentos 559, se incorporaron la solicitud de primera inscripción, factura electrónica, comprobante de pago de impuesto y formulario 88 Tesorería General de la República).

Cabe destaca que estos mismos testaferros y en las mismas calidades, sirvieron para la reinscripción del vehículo Dodge modelo Journey patente JCCJ.30, que ya fue visto en el N°14.

Este vehículo fue vendido a Tomás Mauricio Moraga Faundez en la suma de \$12.000.000.

El afectado compareció a estrados y relató que con su señora empezaron a buscar por Chile Autos y Yapo, porque querían cambiar su autos, y el 18 de enero del año 2018 encontraron una publicación de una New Tucson del año. Se contactaron con Manuel Arancibia, el dueño del vehículo, por whatsapp y acordaron juntarse para verlo, pero que ese mismo día no podía ir y mandó a un tío, de nombre Víctor, y se juntaron en el Mall Arauco Maipú. Indicó que revisaron el vehículo, lo probaron y no encontraron nada que les llamara la atención. Revisaron los documentos y estaba todo en orden, hizo hincapié en que este sujeto los acompañó a su casa, que estaba muy cerca, revisaron el número de VIN y no se veía nada malo, ya que incluso tenía la patente grabada en los vidrios y venía con los plásticos en algunos asientos.

Agregó que al otro día, se contactaron con Manuel Arancibia y le dijeron que iban a juntar la plata lo más pronto posible, se ofrecía en \$12.400.000, pero cerraron en \$12.000.000. Precisoó que a la semana siguiente, se juntaron en el Registro Civil a las 08:30 para realizar la transferencia. Manifestó que llegó Manuel Arancibia con su tío Víctor, después, los acompañó al Banco Chile, que estaba a una cuadra, para que Manuel Arancibia cobrara el vale vista por \$12.000.000. En todo este proceso el tío Víctor siempre lo acompañó. Añadió que en febrero, para asegurar el vehículo contrató un seguro con Consorcio, donde lo revisaron y lo aseguraron, y de hecho comenzó a pagar las cuotas de la póliza. Posteriormente, el día 26 de marzo, en la mañana, trató de contactarlo un carabinero del SEBV en su antiguo trabajo, desde donde le avisaron. Ese día en la tarde, estaban los carabineros esperándolo afuera de su casa, le explicaron el motivo por el que iban a buscar ese vehículo, conversó con ellos, les dijo que lo había comprado y que tenía los documentos de la transferencia, pero le dijeron que tenían que hacerle las pericias para ver si era adulterado o no. En el SEBV le hicieron los peritajes y efectivamente el vehículo estaba adulterado, por lo que tuvo que entregarlo.

Puntualizó que con su señora quedaron impactados, el seguro no les respondió porque cubrían estafas, contrató abogados para presentar una querrela en contra de Manuel Arancibia y los que fueran responsables, pero no vio avances en la investigación y quedó en nada, haciendo presente, que el vendedor lo había comprado los primeros días de diciembre, y le preguntaron por qué lo estaba vendiendo tan rápido y este les dijo que trabajaba fuera de Santiago y como era bencinero le salía muy cara la bencina y se iba a cambiar a la versión petrolera; no vieron nada irregular en la documentación del vehículo ni en el Registro Civil ni en Autofact y al momento de comprarlo le entregaron las dos llaves.

En la documental 559, reconoció el certificado de inscripción del vehículo a su nombre como propietario; y en la documental 813, el vale vista del Banco Chile con el que pagó el vehículo, de fecha 25 de enero de 2018, a nombre de José Manuel González Arancibia, por \$12.000.000. Como OMP 569, se exhibió una fotografía del vehículo que compró.

Por otra parte, en relación con el delito base de la receptación, además, se incorporó el documento 156, que correspondía al encargo policial y el certificado de inscripción y anotaciones vigentes del mismo

vehículo con la patente original JSYK.96, a nombre de la víctima, Jaime Jesús Robles Erickson, quien se presentó al juicio a dar su testimonio acerca de la sustracción de su vehículo, ratificado por el funcionario de Carabineros Cristian Moyano que recibió la denuncia respectiva; elementos todos que permitieron establecer, sin lugar a dudas, que este sufrió un robo en su residencia de la comuna de Zapallar en que le sustrajeron su vehículo, el 25 de noviembre de 2017, siendo recuperado el 23 de marzo de 2017.

Conforme a la prueba rendida, en los delitos de receptación y estafa antes referidos, participó como autor inductor Yerko Silva Toro (dado que el solicitante de 1ª inscripción era un amigo y testaferro reclutado por Edith Silva Sánchez), y como uno de los autores directos, José González Arancibia.

21.- Automóvil marca **Mazda, modelo New 3, color negro**, año 2018, patente **JJLG.46**, reinscrito con la factura N°7 de la Automotora Valenzuela y Arce SPA, emitida el **17 de diciembre de 2017**, en que fue solicitante y adquirente, **Edith Nélida Silva Sánchez**.

Este vehículo fue incautado por funcionarios de Carabineros y, al respecto, la Capitán del SEBV Verónica Aguayo Leal, indicó que estuvo a cargo del procedimiento que correspondía a un **hallazgo de vehículo**, el cual fue ubicado en una fiscalización y trasladado al SEBV, donde le hicieron los peritajes de rigor, determinándose que tenía las series de chasis y motor adulterados y un adhesivo con la serie original, asociada a la patente original que tenía encargo vigente por robo.

Reconoció el vehículo en las fotografías de OMP 571 y en la documental 561, se incorporaron los documentos relativos al mismo, solicitud de primera inscripción, factura electrónica, comprobante de pago del impuesto, formulario 88 de Tesorería General de la República y certificado de inscripción, a nombre de la propietaria Edith Silva Sánchez, sin propietarios anteriores.

Consecuente con el testimonio anterior, en este caso, no concurrió el delito de estafa, desde que este vehículo adulterado y reinscrito con nuevas patentes, no se alcanzó a comercializar a terceros futuros compradores de buena fe. Sin embargo, el vehículo fue objeto de receptación por quienes, conociendo su origen proveniente de un robo, lo compraron y modificaron, por ello, en relación con el delito base de la receptación, el Ministerio Público rindió prueba documental y testimonial.

Se incorporó el documento 191, que correspondía al encargo policial y el certificado de inscripción y anotaciones vigentes del mismo vehículo con la patente original JRY.81, a nombre de la víctima, Miguel Ángel Riquelme Riquelme, quien se presentó al juicio a dar su testimonio acerca de la sustracción de su vehículo, ratificado por el funcionario de Carabineros, Crístopher Cáceres, que recibió la denuncia respectiva; elementos todos que permitieron establecer, sin lugar a dudas, que este sufrió el robo con intimidación de su vehículo, el 15 de diciembre de 2017, siendo recuperado el 7 de abril de 2018.

Conforme a la prueba rendida, en el delito de receptación participó, a lo menos, el acusado Yerko Silva Toro, desde que la solicitante de 1ª inscripción y adquirente del vehículo fue Edith Silva Sánchez,

integrante operativa de la asociación y una de sus personas de confianza debido a los vínculos de amistad que los unían.

22.- Automóvil marca **Mazda modelo New 3, color gris grafito**, año 2018, patente **HHBL.28**, reinscrito con la factura N°8 de la Automotora Valenzuela y Arce SPA, emitida el **29 de diciembre de 2017**, en que fue solicitante y adquirente, **Avelino Benjamín Tapia Rosas**.

Este vehículo, al igual que el anterior, fue incautado por funcionarios de Carabineros y, al respecto, la Capitán del SEBV Verónica Aguayo Leal, indicó el procedimiento también correspondía a un **hallazgo de vehículo**, pues fue encontrado en la vía pública y estaba dentro del listado de las patentes inscritas por la sociedad automotora Valenzuela y Arce que el SEBV se encontraba investigando.

En OMP 552, reconoció fotografías del vehículo, indicando que los números de chasis y motor estaban adulterados. Lo que fue corroborado por el perito Alejandro Molina, quien expuso, en el juicio, que las series estaban adulteradas pero la de chasis tenía una placa y al retirarla había sido borrada completa y se logró obtener la serie original que se asoció a la patente JZHT.13, que tenía encargo por robo.

Se incorporaron los documentos 565, que correspondían a la solicitud de primera inscripción, factura electrónica, formulario 88 de la Tesorería General de la República, comprobante de pago del impuesto y certificado de inscripción, a nombre de Avelino Tapia Rosas. Y los documentos del vehículo propiamente tal, en la documental 795, tales como, seguro obligatorio BCI Seguros, permiso de circulación y certificado de homologación individual.

Como en el caso precedente, este vehículo también fue objeto de receptación por quienes, conociendo su origen proveniente de un robo, lo compraron y modificaron, por ello, en relación con el delito base de la receptación, el Ministerio Público rindió prueba documental y testimonial.

Se incorporó el documento 163, que correspondía al encargo policial y el certificado de inscripción y anotaciones vigentes del mismo vehículo con la patente original JZHT.13, a nombre de la víctima, Jennifer Alejandra Ávila Soto, los que permitieron establecer que esta sufrió el robo con intimidación de su vehículo, el 14 de diciembre de 2017, siendo recuperado el 11 de mayo de 2018.

Conforme a la prueba rendida, en el delito de receptación participó, a lo menos, el acusado Yerko Silva Toro, desde que el solicitante de 1ª inscripción y adquirente del vehículo fue Avelino Tapia Rosas, testaferro de la asociación que acompañaba a Edith Silva Sánchez en las ventas de vehículos, como verificó en otros casos.

23.- Minibús marca **Hyundai, modelo H1, color blanco**, año 2017, patente **HHBL-27**, factura N°23 de Automotora Kor SPA, emitida con fecha **29 de diciembre de 2017**, en que fue solicitante Sara Loyola San Martín y adquirente **Nelson Aníbal Méndez Moya**. (En la documental 527, se incorporaron solicitud de primera inscripción, factura electrónica, comprobante de transacción de la Tesorería General de la

República, formulario 88, total pagado cero y el certificado de inscripción y anotaciones, a nombre del propietario, Alejandro Daniel Guajardo Otárola).

Este vehículo fue vendido a Alejandro Guajardo Otárola, y quien efectuó las diligencias a su respecto, fue el comisario Pedro Olivares que declaró en el juicio, que este fue incautado el 11 de julio de 2018, sin patentes originales, y tenía encargo policial de Carabineros por el delito de robo, cometido el 6 de octubre de 2017, denunciado por Edgardo Berger Sandoval, jefe de seguridad de la empresa Gildemeister.

Indicó que el denunciante explicó que la empresa tiene acopiados vehículos en diferentes centros, uno de los cuales corresponde al terminal Alameda, en diferentes pisos y al momento de efectuar el inventario se dieron cuenta que faltaba un vehículo que aún no había sido vendido, y realizaron la denuncia. Corroborando lo anterior, declaró en el juicio, Edgardo Rodrigo Berger Sandoval, quien señaló que en el año 2017 trabajaba como jefe de seguridad de Gildemeister, que tiene 77 sucursales a nivel nacional y el 6 de octubre, el jefe de sucursal del Mall Alameda lo llamó, informándole que le robaron un vehículo del patio de exhibición, un Hyundai H1 de color blanco, que estaba estacionado en el subterráneo del mall, pues cuando fueron a realizar un inventario no lo encontraron. Preciso que esta sucursal vendía sólo vehículos nuevos, Hyundai y de línea de fortaleza, cero kilómetro, sin documentación.

Contó que se constituyó en el lugar, reunió todos los antecedentes y llamó a los carabineros del sector e hizo la denuncia en el lugar. El avalúo del vehículo era de alrededor de **\$18.000.000 a \$ 20.000.000**.

El testigo describió el documento 677, como la copia de guía de despacho de fecha 9 de junio de 2017, de Automotora Gildemeister SPA, correspondiente al vehículo, que se genera cuando los autos son trasladados de los lugares de acopio a los locales comerciales.

Enfatizó que el vehículo estaba con sus dos llaves en las oficinas, en el piso menos 3, que no era muy concurrido por personal de su empresa, porque era un lugar de acopio, desconociendo cómo se produjo la sustracción.

Por último, reconoció el documento 149, correspondiente al encargo del vehículo efectuado por el carabinero que recibió la denuncia.

Continuando con su declaración, el testigo Olivares manifestó que la víctima estafada, Alejandro Guajardo Otárola, señaló que compró el furgón en la **automotora Procar de Juan Provoste Salgado**, dio un pie y el resto lo pagó con un crédito que le otorgó la misma empresa Procar, indicando que revisó el vehículo en Autofact y no tenía ninguna anomalía. Añadió que le tomó declaración a Juan Provoste, quien dijo que ese vehículo se lo ofreció Nelson Méndez Moya, porque iba a poner un negocio de transporte que se cayó y necesitaba el dinero para otro tipo de inversión. Se le preguntó si había recibido vehículos de esta forma y les dio varias placas patentes, encontrando una de interés, un Nissan Sentra patente KHGR-40, que figuraba en el listado.

Se exhibió la evidencia material 226, que son placas patentes HHBL.27 que portaba el furgón. Y la evidencia material 228, que correspondía a contrato de compraventa de 26 de enero de 2018 y solicitud de transferencia del vehículo.

En este punto, el testigo explicó que Juan Provoste dijo que el vehículo estaba en su automotora, pero estaba a nombre de su amigo Alfredo Patricio Córdova Aránguiz, quien necesitaba generar patrimonio para obtener algún tipo de crédito y beneficios tributarios, por ello, ese contrato fue entre Nelson Méndez Moya y Alfredo Córdova Aránguiz por el precio de \$13.230.000.

Conforme a la prueba rendida, en los delitos de receptación y estafa que quedaron establecidos, tuvieron participación Yerko Silva Toro y su hermano Albano Silva Toro, desde que el solicitante de 1ª inscripción y adquirente del vehículo fue Nelson Aníbal Méndez Moya, un recurrente testaferro de la asociación, que fue reclutado para reinscribir vehículos y con posterioridad, generar la sociedad Méndez Moya Spa, y cuya cédula de identidad la tenía Albano Silva Toro en una carpeta bajo su nombre, en el notebook que fue incautado de uso del restaurante. Este también usó al mismo testaferro para reinscribir la grúa horquilla, con quien la vendió de manera personal, siendo él el encargado de la negociación. A lo que debe sumarse el hecho que el vehículo fue vendido por Juan Provoste Salgado, amigo personal y socio de Albano, en varios negocios cuestionables, a través de su local Procar.

24.- Station Wagon marca Mazda, modelo All New CX9, color azul, año 2018, patente KBWK.63, reinscrita con la factura N°13 de la Automotora Valenzuela y Arce SPA, emitida el **25 de enero de 2018**, en que fue solicitante y adquirente, **Elvis Rioseco Leyton**. (En la documental 214, se incorporaron la solicitud de primera inscripción, factura electrónica, formulario 88 de la Tesorería General de la República, comprobante de pago de Servistado del impuesto y el certificado de inscripción, a nombre del propietario Elvis Jesús Rioseco Leyton).

Este es el vehículo que fue fiscalizado en la vía pública e incautado por el delito flagrante de receptación, el 23 de febrero de 2018, con el cual se inició la investigación denominada “Industria del portonazo”, cuyos antecedentes ya son conocidos. (

El comisario Larry Caro Arroyo, quien participó en el procedimiento, reconoció las fotografías que se le exhibieron de OMP 235, señalando que es el vehículo que fue incautado el año 2018, en el que circulaban Edith Silva Sánchez, Alan Lidid Madrid y Avelino Tapia Rosas y agregó que constataron que en redes sociales, Claudia Sandoval aparecía con este vehículo en una fotografía de su Facebook, tal como se exhibió en la imagen 38 de OMP 331.

Se exhibió la evidencia material 97, que correspondía a los documentos del vehículo, tales como, permiso de circulación de la Municipalidad de San Ramón; póliza de seguro obligatorio HDI y un certificado de homologación. Acotó el testigo Caro que tomó contacto con la Municipalidad de San Ramón y le respondieron que ni la camioneta ni el documento se encontraban registrados en sus bases de datos.

En la misma línea, la conclusión que el perito mecánico Pablo Duran Moraga expuso en el juicio, respecto del vehículo en examen, fue que tenía las series identificatorias adulteradas y manipuladas y el perito químico hizo el revenido, en la serie del chasis, arrojando sombras de la original asociada a la patente JYDZ.78.

Se acompañó, asimismo, la documental 289, que es el encargo policial del mismo vehículo, patente original JYDZ.78, de fecha 23 de enero de 2018, motivo robo con violencia, ocurrido en la comuna de Ñuñoa, el 22 de enero, víctima y denunciante YUANLONG HE. Y el certificado de inscripción y anotaciones vigentes de la patente original.

Lo anterior se condice con los testimonios de la víctima YUANLONG HE y del funcionario de Carabineros Javier Díaz Díaz que recibió la denuncia respectiva, y que permitieron acreditar que el afectado sufrió el robo con violencia de su vehículo patente JYDZ-78, en la fecha indicada.

Conforme a la prueba rendida, en el delito de receptación que quedó establecido, tuvieron participación el acusado Yerko Silva Toro, Edith Silva Sánchez, Avelino Tapia Rosas y Carlos Lidid Madird, estos últimos, se movilizaban y tenían la tenencia del vehículo de origen ilícito, que ya había sido reinscrito con nuevas patentes y modificado en su identidad, todos integrantes de la asociación, y los testaferros a cargo del brazo operativo, Edith Silva Sánchez.

25.- Station Wagon, marca **Nissan modelo Xtrail, color blanco**, año 2018, patente **KHKW.72**, reinscrita con la factura N° 93 de la Automotora Astorga SPA, emitida el **12 de abril de 2018**, en que fue solicitante y adquirente **Alejandro Yáñez Recaval**. (En la documental 494, se incorporaron la solicitud de primera inscripción, la factura electrónica, formulario 88 de la Tesorería General de la República y el comprobante de pago del impuesto del banco BCI y el certificado de inscripción y anotaciones vigentes, a nombre de la propietaria Sara del Carmen Fernanda Tupper Correa, propietario anterior, Alejandro Yáñez Recabal).

Este vehículo fue vendido a Sara del Carmen Fernanda Tupper Correa en la suma de \$14.000.000; y los datos para confeccionar la factura con la que se reinscribió, se encontraban en el cuaderno incautado a Sebastián Martínez Zavala, según dio cuenta el inspector Fernando Vásquez al referirse a la evidencia material 32, específicamente, el cuaderno de la Universidad Santo Tomás.

El testigo Sebastián Silva Moraga, Capitán SEBV, señaló que concurrió a la comuna Vitacura, al domicilio de la Sra. Tupper, y se entrevistó con su esposo de apellido Undurraga, a quien le explicó el motivo de su presencia y le exhibieron la orden de investigar. Añadió que hicieron la revisión físico técnico del vehículo, determinándose que los números identificatorios estaban adulterados y que tenía encargo por robo.

Expuso que, en esa oportunidad, el Sr. Undurraga declaró que comenzó a buscar en páginas de ventas de autos, y por yapo encontró este vehículo Nissan Xtrail que compró para uso de su señora, por lo que, entregó la documentación del vehículo que estaba al día y de la compra del vehículo.

En el mismo sentido, corroborando los atestados anteriores, declaró en el juicio el comisario de la PDI, Ángel Bustos Díaz, quien colaboró con la investigación tomando declaración a algunas víctimas estafadas.

Indicó que en septiembre de 2020 le tomó declaración a la dueña del vehículo en cuestión, la que señaló que con su marido andaban en búsqueda de este tipo de vehículo, en yapo lo encontraron, la persona que lo ofrecía se identificó como Alejandro Yáñez Recaval. Posteriormente, tomaron contacto para juntarse y ver el vehículo, concurrió solamente su marido a juntarse con estas personas en la comuna de Santiago, posteriormente, su marido hizo unas averiguaciones sobre el vehículo, y luego se reunieron para comprarlo en un valor de \$14.000.000, que fue pagado en dinero en efectivo.

Agregó la víctima que en el mes de octubre del mismo año, personal de Sebv fue a su domicilio particular a fin de manifestarle que su vehículo podía ser ilícito, le solicitaron antecedentes del auto y en el mes de noviembre volvieron, señalando que el vehículo era producto de un robo y que necesitaban que concurrieran a la unidad de Independencia, les tomaron declaración a ambos quedando el vehículo incautado porque se corroboró que era robado.

Sobre este punto, el perito Alejandro Molina Sepúlveda, expuso en el juicio, que se estableció que las series de chasis y motor estaban adulteradas, con el revenido químico se lograron recuperar las series de chasis y motor originales, que estaban asociadas a una patente con encargo por robo. Además, reconoció el vehículo periciado en las fotografías exhibidas en OMP 417, en una de las cuales, aparecían los antecedentes del Registro Civil asociados a las serie de chasis y motor originales, mismas características del auto, patente KFXZ.56, con encargo vigente por robo con intimidación de marzo de 2018.

Por otra parte, en relación con el delito base de la receptación, además, se incorporó el documento 159, que correspondía al encargo policial y el certificado de inscripción y anotaciones vigentes del mismo vehículo con la patente original KFXZ.56, a nombre de la víctima, Claudia Barría Castillo, quien se presentó al juicio a dar su testimonio acerca de la sustracción de su vehículo; todo lo cual permitió establecer, sin lugar a dudas, que esta sufrió el robo con intimidación de su vehículo en la comuna de Ñuñoa, el 19 de marzo de 2018, siendo recuperado el 22 de noviembre de 2018.

Conforme a la prueba rendida, en los delitos de receptación y estafa que han quedado establecidos, participó, a lo menos, como autor inductor Yerko Silva Toro, dado que la factura de reinscripción del vehículo fue confeccionada por Sebastián Martínez bajo sus instrucciones, y como uno de los autores materiales, Alejandro Yáñez Recaval, testaferro de la asociación, que participó de la misma forma en la reinscripción de otros vehículos.

26.- Station Wagon marca Subaru, modelo New XV, color plateado, año 2018, patente KJCT.68, que fue reinscrito con la factura N° 154 de la Automotora Nova SPA, de fecha **27 de abril de 2018,** en que fue solicitante y adquirente, **Jorge Octavio Salinas Uribe.** (En la documental 456.1 a 456.4, se

incorporaron la solicitud de 1ª inscripción, la factura electrónica, comprobante de pago Serviestado del impuesto y formulario 88 de la TGR de pago del impuesto, y como documento 456.22, se acompañó el certificado de inscripción de este vehículo, a nombre de la propietaria Joselyn Martínez Rivas, propietario anterior Jorge Salinas Uribe).

Este vehículo fue vendido a Joselyn Jimena Martínez Rivas, quien declaró en el juicio, en la suma de \$11.000.000.

La víctima, con domicilio en Talcahuano, relató en estrados que en diciembre de 2018, buscó un vehículo en internet, en la página de Yapó, donde le llamó la atención este porque era del año, tenía poco kilometraje y no estaba publicado a un precio muy alto, entonces, llamó al número que aparecía en la publicación y se comunicó con un hombre y acordaron juntarse para verlo en el Registro Civil de Hualpén, en la VII Región.

Indicó la afectada que el sujeto llegó con una mujer joven y los dos le mostraron el vehículo que estaba en buenas condiciones y le gustó, entonces, sacó el certificado de anotaciones vigentes, también fue a la comisaría y con la patente del vehículo pidió que le miraran si tenía algo y los carabineros le dijeron que no. Por eso, acordaron la compra en \$11.000.000 en dinero efectivo y al día siguiente quedaron de hacer la transferencia.

Fue así como se juntaron en el Registro Civil de Hualpén y el sujeto llegó con la misma mujer con la que estaba el día que le mostraron el auto y otro hombre, que supuestamente era el dueño del vehículo y con él hicieron la transferencia, el que le pareció extraño porque no tenía la apariencia de ser dueño de un vehículo. Acotó que se efectuó la transacción, les pasó a ellos el dinero en efectivo y se llevó el auto con una sola llave porque le iban a entregar la segunda llave, pero nunca lo hicieron.

Indicó que no alcanzó a tener el auto una semana, porque en el Mall El Trébol en Talcahuano, funcionarios de Carabineros del SEBV, la controlaron y le pidieron los documentos y le dijeron que el auto estaba clonado, por eso, se lo llevaron, y en la tarde en la comisaría le dijeron que el auto quedaba incautado. En esa línea, declaró el perito Roger Quilodrán Jerez, que practicó el peritaje mecánico al vehículo y expuso la conclusión en orden a que ambas series estaban adulteradas y con el revenido químico se determinaron las originales, asociadas a la patente original KBYT.41, que tenía encargo por el delito de robo con intimidación.

La víctima, además, dijo que entregó los documentos que tenía y, posteriormente, declaró ante funcionarios de la PDI, quienes le mostraron fotografías de algunas personas y reconoció al sujeto que le había mostrado el vehículo. Los dichos de la afectada concordaron con la información proporcionada por el testigo Carlos Riveros Gallardo, Comisario de la PDI, que colaboró con la investigación realizando diligencias puntuales, en cuanto señaló que la víctima estafada, doña Joselyn Martínez Rivas, reconoció a Ilich Chopa Aldana, como la persona que le ofreció el vehículo, con quien se contactó e hizo la transacción.

Se exhibieron fotografías del vehículo en OMP 680, que la testigo reconoció. Y en la documental N°12, la declaración de transferencia de 11 de junio del año 2018 que firmó en el Registro Civil.

La víctima terminó su declaración señalando que perdió los ahorros que tenía y además, había pedido un préstamo para pagar el vehículo y se quedó de brazos cruzados

Por otra parte, en relación con el delito base de la receptación, además, se incorporaron los documentos 137 y 93, que correspondían al encargo policial y el certificado de inscripción y anotaciones vigentes del mismo vehículo con la patente original KBYT-41, a nombre de la víctima, Carmen Aravena Aljaro, quien se presentó al juicio a dar su testimonio acerca de la sustracción de su vehículo; todo lo cual permitió establecer, sin lugar a dudas, que esta sufrió el robo con intimidación del móvil, el 18 de abril de 2018, siendo recuperado el 2 de agosto del mismo año.

Conforme a la prueba rendida, en los delitos de receptación y estafa que han quedado establecidos, participaron como autores Ilich Chopa Aldana, reconocido por la víctima que interactuó con él como el sujeto que llevó adelante la negociación, lo que se condice con la circunstancia que este es originario de Concepción y residía en dicha ciudad; y Jorge Salinas Uribe, testaferro de la asociación, reclutado por Camilo Sandoval con quien además tenía un vínculo cercano y de familiaridad.

27.- Station Wagon marca **Kia**, modelo **Sportage**, color **plateado**, patente **KKLL.10**, reinscrito con la factura N°131 de la Automotora Astorga SPA, emitida con fecha **22 de mayo de 2018**, en que fue solicitante **Nelson Méndez Moya** y adquirente **Juan Castillo Mansisidoro**.

Este vehículo fue vendido a Claudio Esteban Lemoine Rodríguez en \$8.000.000.

El afectado compareció en estrados y declaró que tenía un Audi A4 y, hace unos 5 años, lo contactó Jean Pierre Ediel quien le ofreció permutar su auto, con el cual se contactó por Messenger de Facebook, él aceptó y procedió a la permuta por una kia sportage.

Indicó que semanas después fue citado a la fiscalía porque el vehículo podía estar clonado, se dirigieron a la PDI, donde se hizo un peritaje a la kia sportage y se corroboró que estaba clonado, quedaron muy sorprendidos y tuvieron que dejarlo en la unidad de la PDI.

Relató que la kia tenía muchas multas de tag por lo que llegaron a un valor aproximado de \$ 8.000.000, y que el Audi estaba a nombre de su esposa Katherine Lee Rubio y la Kia Sportage quedó a nombre de su suegra, Jeannette Rubio.

Señaló que previamente sacó un autofact y el vehículo solamente tenía multas y le hicieron una inspección visual cuando se lo fueron a mostrar. La kia Sportage estaba a nombre de otra persona y cuando se la mostraron y en la venta, estaba Jean Piere. En la venta lo acompañaron dos hombres más.

Manifestó que le entregó a la PDI toda la documentación del vehículo, y en el interior de éste, se quedó una billetera con documentos personales de las personas que le fueron a entregar el vehículo, la cual también fue entregada.

En OMP 361, reconoció las fotografías del vehículo Kia Sportage que permutó, y respecto de las capturas de pantalla que se le exhibieron en OMP 549, explicó que eran las conversaciones con el sujeto y una imagen del vehículo Audi A4 patente CCPB.23 que le envió; en OMP 547, conversaciones por whatsapp entre el 15 y el 23 de enero de 2019, relacionadas con la permuta de los vehículos, haciendo presente que el 12.01.2019, le fueron a mostrar el vehículo donde él trabajaba en el hospital de la fach, y él también mostró el Audi, primero, contactaron a su esposa porque ella tenía publicado el Audi y le ofrecieron cambiarle el Audi por el Sportage. Finalmente, en OMP 546 dijo que eran conversaciones e imágenes de Facebook con Jean Pierre Ediel.

Manifestó que cuando se enteraron que el Kia estaba clonado, fue una frustración tremenda porque se quedaron sin vehículo y su suegra le tuvo que facilitar uno, y después de muchos meses pudo recuperar el Audi, lo conversó con el fiscal de la causa y el funcionario de la PDI, se hicieron los trámites correspondientes, pero estaba en peores condiciones que como lo entregó, había sido transferido muchas veces y tuvo muchos propietarios.

El comisario Pedro Olivares, realizó diligencias respecto de este vehículo, y se refirió a la evidencia material 142 que levantó, correspondiente a la factura electrónica, declaración de transferencia (Formulario 33) del vehículo Audi patente CCPB.23, certificados de homologación, solicitud de transferencia del vehículo Kia patente KKLL.10, declaración de transferencia del mismo, permiso de circulación y padrón a nombre de Jeannette Rubio Espinoza. Y reconoció las dos placas patentes KKLL.10 de la Kia Sportage que fue incautada, en la evidencia material 141.

Reconoció el vehículo en OMP 548 y se acompañó como documento 681, el certificado de inscripción del vehículo patente KKLL.10, a nombre de la propietaria Jeannette Rubio, la solicitud de primera inscripción, el formulario 88 Tesorería General de la República y el comprobante de pago de Serviestado del impuesto de fecha 23.05.2018.

Por otra parte, en relación con el delito base de la receptación, además, se incorporó el documento 933, que correspondían al encargo policial y el certificado de inscripción y anotaciones vigentes del mismo vehículo con la patente original JBFH.38, a nombre de la víctima, Patricio Andrés Zavala Hidalgo, que permitieron establecer, sin lugar a dudas, que este sufrió el robo con intimidación del móvil, el 20 de mayo de 2018.

Conforme a la prueba rendida, en los delitos de receptación y estafa que quedaron establecidos, a lo menos, tuvo participación Yerko Silva Toro, desde que el solicitante de 1ª inscripción del vehículo fue Nelson Aníbal Méndez Moya, un recurrente testaferro de la asociación, que fue reclutado a fin de reinscribir

vehículos y con posterioridad, generar la sociedad Méndez Moya Spa, así como el 1er adquirente también es un testaferro de la asociación que ha estado involucrado en la reinscripción de otros vehículos.

28.- Station Wagon marca **Nissan, modelo Qashqai de color gris metálico**, año 2018, patente **KJCT.95**, que fue reinscrito con la factura N° 180 de la Automotora Nova SPA, de fecha **29 de mayo de 2018**, en que fue solicitante y adquirente, **Jorge Octavio Salinas Uribe**. (En el documento 553, se incorporaron solicitud de primera inscripción, factura electrónica, formulario 88 Tesorería General de la República y certificado de inscripción y anotaciones vigentes, a nombre de Jorge Salinas Uribe, fecha de adquisición 29.05.2018).

Respecto de este vehículo, el Carabinero SEBV de Concepción, Rodolfo Ríos Crisóstomo, declaró estaban en el mall El Trebol de Talcahuano, cuando ingresaron unos vehículos que tenían encargo por sospecha, uno de ellos, era este que fue controlado por otro equipo, reconociendo en la fotografía de OMP 679, que era el 2do automóvil que hizo ingreso al mall en la ciudad de Talcahuano, Nissan Qashqai, patente KJCT.95.

A su vez, compareció el perito Roger Quilodrán Jerez, que dio cuenta del peritaje efectuado al móvil, en la ciudad de Concepción, apoyado en las fotografías de OMP 679, concluyendo que las series estaban adulteradas y fue posible determinar las verdaderas, asociadas a la patente original KJKW.70.

Por último, se acompañó el encargo policial del vehículo en la documental 144, el que fue ratificado por el funcionario de Carabineros que recibió la denuncia Matías Palacios, y el certificado de inscripción del mismo vehículo, patente original KJKW.70, en el documento 553, elementos que permitieron acreditar que la víctima Iván Alegría González, sufrió el robo con intimidación de su vehículo, el 27 de mayo de 2018.

En este caso, no se produjo una transferencia o venta del vehículo reinscrito a un tercero, sino que permaneció a nombre del testaferro Jorge Salinas Uribe, siendo el vehículo recuperado y periciado, determinándose su verdadera identidad que correspondía a un vehículo robado. Si bien este vehículo se encuentra vinculado a la asociación ilícita, se ignoran las circunstancias de su hallazgo y la identidad de quienes se movilizaban en él y, por ende, siendo la prueba rendida insuficiente no es posible tener por acreditado el delito de receptación a su respecto.

29.- Automóvil marca **Mazda, modelo New 3, de color gris**, año 2018, patente **KLLT.68**, reinscrito con la factura N°228 de la Automotora Nova SPA, emitida el **19 de junio de 2018**, en que fue solicitante **Jorge Salinas Uribe** y adquirente **David Contreras Yevilao**.

En relación con este vehículo, el funcionario del SEBV de Carabineros, declaró en estrados que el 30 de julio de 2018 estaba de servicio en Sebv de Concepción, con el Sargento 2do Juan Rivero Rivero, y fueron enviados a los estacionamientos del Mall El Trébol de Talcahuano, ya que, según información de Sebv Santiago, había ocurrido una alerta de un vehículo que hizo ingreso a los estacionamientos, un Mazda 3, de color gris, patente KLLT.68. Además, informaron que tenía un encargo por sospecha realizado en Santiago,

es decir, que era probablemente clonado o “gemeleado”. Concurrieron para verificar la información y una vez en el lugar, ubicaron el automóvil, se encontraban en él tres personas, se acercaron y se entrevistaron con ellos.

Se presentaron como carabineros con sus credenciales, les informaron el motivo de la entrevista. Se presentó el conductor y responsable del auto, Diego Martínez Urra, acompañado por David Contreras Yevilao, más una 3ra persona Felipe Leiva Aliaga. Este último, dijo que estaba interesado en comprar el vehículo y lo estaba revisando.

Reconoció el vehículo en la fotografía de OMP 678.

Agregó que le consultaron al responsable si podían revisar el auto, las series de chasis y de motor, quien accedió y se percataron que no eran originales de fábrica sino que se encontraban intervenidas.

Indicó que se informó al fiscal de turno, quien instruyó que se hicieran revenidos químicos a las series para determinar las originales, peritajes realizados por Roger Quilodrán Jerez, obteniendo como resultado que todos los autos fiscalizados mantenían encargo vigente por robo de Santiago, de los meses de abril y mayo de 2018, de la Región Metropolitana.

Lo anterior fue corroborado por el perito Quilodrán, respecto del vehículo en comento, al informar ante el tribunal la conclusión de su pericia.

Por último, se acompañó el encargo policial del vehículo en la documental 166 y el certificado de inscripción del mismo vehículo, patente original JWVG.95, en el documento 554, elementos que permitieron acreditar que la víctima Guillermo Tapia González, sufrió el robo de su vehículo, el 14 de mayo de 2018.

Al igual que en el caso anterior, en este tampoco se produjo una transferencia o venta del vehículo reinscrito a un tercero, sino que permaneció a nombre del testaferro Jorge Salinas Uribe, siendo el vehículo recuperado y periciado, determinándose su verdadera identidad que correspondía a un vehículo robado. Si bien este vehículo se encontraba vinculado a la asociación ilícita, eran terceros ajenos a la organización quienes estaban ofreciendo a la venta el vehículo, por lo que, no resulta viable atribuirle participación en el delito de receptación ni a Jorge Salinas ni a ninguno de los acusados.

30.- Station Wagon Kia, modelo Sportage, color rojo fuego, año 2018, patente KSCV.55, reinscrito con la factura N° 652 de la Automotriz Méndez Moya SPA, emitida el 1 de agosto de 2018, en que fue solicitante y adquirente Alejandro Yáñez Recabal.

Este vehículo fue vendido a Joselyn Colichén Mejías por Alejandro Yáñez Recabal.

A su respecto, declaró el inspector Fernando Vásquez Guerra, que se le realizó la pericia química, fotográfica y mecánica, pero no se logró dar con la identidad real, entonces, concurrieron al concesionario de la marca y con el vin se llegó a la patente original que era JCDT.81, con encargo vigente por robo con

violencia de fecha 2 de agosto de 2018, siendo la víctima, Mercedes del Carmen Maturana Lizana, quien indicó que la modalidad fue que ingresaron a su casa unos falsos policías y le robaron el vehículo.

Refirió que la víctima estafada, dijo que vio el vehículo en una red social y concretaron la compra en un mall. Además, reconoció a Alejandro Yáñez Recabal, como la persona que le vendió el vehículo, quien se encontraba acompañado por un sujeto, que no reconoció, pero dio sus características y a éste le dio el dinero. Acotó el testigo que de acuerdo con la investigación Yáñez Recabal era un testaferro que tenía otras solicitudes de primera inscripción.

Se exhibió la evidencia material 148, correspondiente a las dos placas patentes, levantada por el testigo el 21 de diciembre de 2018, fecha de la incautación en la unidad policial. Y la evidencia material 147, contenía documentos del vehículo, tales como, la declaración de transferencia de vehículos motorizados y giro y pago de impuesto, solicitud de transferencia, solicitud de primera inscripción, certificado de homologación, permiso de circulación, seguro obligatorio, factura electrónica, certificado de inscripción en el R.V.M. a nombre de Joselyn Colichén Mejías, fecha de adquisición 7 de noviembre de 2018 y Formulario 88 de pago de impuesto.

Por último, reconoció el vehículo referido en OMP 392.

Conforme a la prueba rendida, en los delitos de receptación y estafa que han quedado establecidos, participó, a lo menos, como autor inductor Yerko Silva Toro, toda vez uno de los autores materiales, Alejandro Yáñez Recaval, reconocido por la víctima, es testaferro de la asociación, el que participó de la misma forma en la reinscripción y venta de otros vehículos vinculados con Yerko Silva Toro.

31.- Station Wagon marca Mahindra, modelo New Xv 500, color gris grafito, año 2019, patente KWVF.42, reinscrita con la factura N°371 de la Automotora Bilbao SPA, emitida con fecha 1 de octubre de 2018, en que fue solicitante y adquirente Gisella Cárcamo Gallegos. (En la documental 689, se incorporaron la solicitud de primera inscripción, copia de factura electrónica, Formulario 88 Tesorería General de la República, solicitud de transferencia de fecha 5 de diciembre de 2018 y declaración de transferencia por un monto de \$11.816.000).

Este vehículo fue vendido a Marcelino Zamorano Candia en la suma de \$11.816.000.

El subinspector de la PDI, Bastían Guzmán Retamales, dio cuenta de la declaración de la víctima estafada y señaló que este relató que buscó vehículos en internet, en Chile Autos o Yapo, encontró este vehículo a un buen precio, entonces, tomó contacto con el vendedor y se reunieron para verlo, revisó los documentos y procedió a comprarlo. Indicó que la vendedora estaba acompañada de otra persona.

En este punto, el testigo manifestó que de acuerdo a la descripción física que dio de esta mujer (entre 40 y 50 años, un poco robusta y de pelo rubio), y en base a los antecedentes que manejaban con distintos nombres de interés, se le realizó un reconocimiento fotográfico, e identificó a Tatiana Arana Espinoza, como la mujer que acompañaba a la propietaria del auto, doña Giselle.

Se exhibieron las evidencias materiales 274, las dos placas patentes KWVF.42 levantadas del automóvil; y la 275, que correspondía a la documentación del vehículo, a saber, póliza de seguro obligatorio de SURA, certificado de homologación individual, permiso de circulación y certificado de inscripción RVM, a nombre del propietario, Marcelino Zamorano Candia.

Reconoció el vehículo en OMP 701, que correspondían a diversas fotografías de este. En relación con su origen, el perito mecánico de la PDI, Sergio Andrade Barrientos, expuso en el juicio que tenía las series identificatorias adulteradas pero que no se pudo determinar las originales, sugiriéndose escanear el vehículo en la concesionaria de la marca.

Por otra parte, en relación con el delito base de la receptación, además, se incorporó el documento 926, que correspondía al encargo policial y al certificado de inscripción y anotaciones vigentes del mismo vehículo con la patente original JJRS.14, a nombre de la propietaria, Maritza Cáceres Bahamondez, siendo el denunciante y víctima Juan Carlos Herrera Gutiérrez, conductor de uber. A ello debe sumarse el testimonio del funcionario de Carabineros Esteban González, que recibió la denuncia respectiva. Todos estos elementos permitieron establecer, sin lugar a dudas, que el afectado, ya individualizado, sufrió el robo con violencia del móvil en la comuna de La Florida, en la madrugada del 29 de octubre de 2018 y fue recuperado el 2 de julio de 2019.

Conforme a la prueba rendida, en los delitos de receptación y estafa que quedaron establecidos, tuvieron participación Yerko Silva Toro y su brazo operativo en exterior, y persona de confianza, Tatiana Arana Espinoza, la que fue reconocida por la víctima estafada.

32.- Station Wagon Nissan modelo Kicks Advance, de color gris metálico, patente KWVF-56, reinscrito con la factura N°374 de la Automotora Bilbao SPA, emitida con fecha **2 de octubre de 2018**, en que fue solicitante **Tatiana Arana Espinoza** y adquirente **Eliana Basaure Avendaño**.

Este vehículo se vendió a Claudia Arrieta Arriagada, en la suma de \$9.890.000, la que prestó declaración en el juicio, señalando que compró el vehículo en una compraventa de automóviles en Pudahuel de propiedad de Wilfredo Arenas, a quien le pagó el precio en dos cheques, uno cobrado por caja y otro en la cuenta corriente del Banco Estado de éste. Dijo que también se canceló otro monto a la Sra. Rosa Meza, quien era la propietaria del recinto y hacía los trámites correspondientes, depositándose un cheque en su cuenta corriente.

Se acompañaron los documentos justificativos de la transferencia con la documental 705 y en la EM 121, así como los documentos que inherentes al vehículo que portaba la víctima y las placas patentes en la EM 123 y 124.

Además, el comisario Pedro Olivares, corroborando los atestados de doña Claudia Arrieta Arriaga, víctima estafada, dio cuenta en su declaración, que compró el automóvil en una automotora de Pudahuel, en un sector de Laguna Sur donde existen varias compraventas. Luego de revisar varios vehículos se decidió por

este y pagó directamente al dueño de la automotora, el valor era de \$10.000.000, pero se lo rebajaron a \$9.250.000 pesos.

Expuso que se tomó declaración a Wilfred Arenas, el dueño de la automotora, quien dijo que concurrió Eliana Basaure con otra persona, de quien dio las características, de unos 40 años, rubia, aparentemente con operaciones de cirugía plástica, y era ella quien ofreció el vehículo, dijo que era dueña de un centro estético de Maipú y que el auto estaba inscrito a nombre de una empleada de ella.

Advirtió el testigo que el dueño de la automotora tenía antecedentes previos y no les dio mucha confianza, por eso, no le efectuaron un reconocimiento fotográfico, por si conocía a Tatiana Arana no le diera aviso.

Manifestó que Claudia Arrieta al principio se mostró un poco resistente a la situación y les pidió que hablaran con su marido, que era un general de ejército, Cristóbal de la Cerda, quien concurrió con su señora y su abogado.

Hizo presente que la señora Claudia recordó que detrás del vehículo había una carpeta con una cotización de cirugía plástica a nombre de Tatiana Arana.

Finalmente el perito Cristian Melo, expuso que las series del móvil estaban adulteradas y que se determinó la verdadera identidad, asociada a la placa patente KFLK.57.

Por otra parte, en relación con el delito base de la receptación, además, se incorporó el documento 178, que correspondía al encargo policial y al certificado de inscripción y anotaciones vigentes del mismo vehículo con la patente original KFLK.57, a nombre del propietario y víctima, Sergio Maldonado Martin, los que permitieron establecer que este sufrió el robo con violencia del móvil el 5 de noviembre de 2018.

Conforme a la prueba rendida, en los delitos de receptación y estafa que quedaron establecidos, tuvieron participación Yerko Silva Toro y su brazo operativo en el exterior y persona de confianza, Tatiana Arana Espinoza, la que fue solicitante de la 1ª inscripción, las descripciones físicas dadas por la víctima de la mujer que le vendió el vehículo coincidían con las suyas y además fue encontrada un documento con su nombre al interior de éste.

33.- Station Wagon Kia modelo Sportage, color blanco, año 2019, patente KXSJ.24, reinscrito con la factura N°378 de la Automotora Bilbao SPA, emitida con fecha 19 de octubre de 2018, en la que fue solicitante, Bernardita Molina Fuenzalida y adquirente Ismael Díaz Fernández.

Este vehículo fue vendido a Gonzalo Pizarro Vera, con domicilio en La Serena, en la suma de \$10.000.000.

El inspector Fernando Vásquez Guerra declaró que se entrevistó a la víctima estafada en la ciudad de La Serena, quien señaló que vio el vehículo en una plataforma y coordinó a través de whatsapp la compra y lo particular era que el dueño fue acompañado por otra persona, quienes viajaron a exhibirle el auto y a

realizar la venta. Reportó que se le realizó un reconocimiento fotográfico y logró reconocer al dueño y a la acompañante, que era una mujer individualizada como Tatiana Arana. Detalló que el pago de \$10.000.000 y fracción se lo solicitaron en efectivo a petición de Tatiana.

Agregó que se perició el vehículo y se tuvo que llevar a la marca para saber su identidad, se consultó el vin en el sistema y arrojó que la placa patente original era KYDT.90, que mantenía encargo vigente por robo con fuerza en lugar habitado del 19 de noviembre de 2018.

Se acompañaron los documentos justificativos de la 1ª inscripción y de la posterior transferencia del vehículo y los documentos inherentes a este en EM 152 y documental 696, las placas patentes se incorporaron en EM 153 y fotografías del vehículo en OMP 656.

Por otra parte, en relación con el delito base de la receptación, además, se incorporó el encargo policial y el certificado de inscripción y anotaciones vigentes del mismo vehículo con la patente original KYDT.90, a nombre del propietario y víctima, Guillermo Leiva Peñaloza, los que permitieron establecer que este sufrió un robo en su domicilio desde el cual sustrajeron el vehículo el 19 de noviembre de 2018.

Conforme a la prueba rendida, en los delitos de receptación y estafa que quedaron establecidos, tuvieron participación Yerko Silva Toro y su brazo operativo en el exterior y persona de confianza, Tatiana Arana Espinoza, la que fue reconocida fotográficamente por la víctima estafada, como la mujer que acompañaba al dueño y que dirigió la venta.

34.- Station Wagon Honda, modelo WRV, color plateado, año 2019, patente KZTP-55, que fue reinscrito con la factura N°386 de la Automotora Bilbao SPA, de fecha 16 de noviembre de 2018, en la que fue solicitante Pablo Rojas Recabal y adquirente Francisco García Zepeda.

Este vehículo fue vendido a Rocío Kettlun Poblete en la suma de \$8.000.000.

La víctima prestó declaración en juicio y señaló que encontró este vehículo Honda en Chile Autos, tenía menos de 5 mil kilómetros y el 27 de enero de 2019, su esposo se puso en contacto con la persona que lo ofrecía porque tenía interés en comprarlo. El auto supuestamente pertenecía a Manuel Zepeda, quien les dijo que había conseguido un trabajo en Calama y como el auto no era 4x4 no le servía para su trabajo y necesitaba venderlo pronto porque iba a viajar.

Agregó que fueron a ver el vehículo y se los mostró una mujer que dijo llamarse "Paula", que después supieron que era Tatiana, indicando que le sacó fotos al auto y en ellas aparecía la mujer se los mostró porque dijo que su marido estaba en el norte. Unos dos días después lo compraron directamente en el Registro Civil de Maipú, parte del precio lo pagaron en efectivo y el resto mediante una transferencia a una cuenta del Banco Falabella a nombre de otra persona. Concurrieron el dueño del auto, Manuel, con Tatiana, en un Ford Explorer con unos adolescentes, que supuestamente eran sus hijos. Añadió que el vehículo al parecer era del año 2018 y lo compraron en \$8.000.000.

Luego, dijo que lo llevó a la concesionaria Honda de Vitacura con Padre Hurtado, donde le pasaron un scanner y el número del vehículo no correspondía al número que estaba impreso en el motor y al número de chasis de los marcos de las puertas, entonces, se dieron cuenta que era una estafa y llamaron a Carabineros, y entregaron el auto voluntariamente quedando incautado.

Sobre este punto, el perito Alejandro Molina expuso en juicio, que se determinó que los números estaban adulterados, lográndose determinar su verdadera identidad y patente original KTYZ.18.

Aseveró la afectada que debido a esto, se quedó sin su dinero y sin su vehículo, lo que tuvo una gran carga económica para ellos, porque el trabajo de su esposo en ese momento era muy inestable y los \$8.000.000 eran ahorros, reiterando que por el auto pagaron \$5.000.000 en efectivo, y \$3.000.000 en una transferencia.

Reconoció en OMP 210, las imágenes de whatsapp de una conversación con la mujer de nombre “Paula” en que le pedía la garantía y el manual del auto. Además, reconoció la **transferencia que se hizo a la cuenta de Jeannette Toro del Banco Falabella cuenta N°010090103089.**

Las fotografías del vehículo que tomó la víctima con su celular, fueron incorporadas en OMP 303, e indicó que en la N°1, aparecía Paula que era la vendedora, en la parte superior izquierda y en la N°3, a la izquierda aparecía su marido de espalda y a la derecha, hacia el asiento del conductor estaba Paula.

Ilustró que en la N°5, aparecía la documentación del vehículo, para poder consultarla en Autofact, entre los cuales estaba la factura de Automotora Bilbao Spa, entonces, la googleó y efectivamente esa automotora existía, pero después supo que no era la misma, que era un clon de la empresa.

Además, la declaración de transferencia y giro y pago de impuestos se acompañó como documental 698, el que fue reconocido por la víctima

Los atestados de la víctima fueron corroborados por el inspector Ángel Bustos, quien le tomó declaración durante la investigación y recibió los documentos del vehículo, que fueron acompañados en la documental 116 y, además, agregó que se le exhibió un set fotográfico, diligencia realizada por Alejandro Hermosilla que también declaró en juicio ratificando lo expuesto, y dio cuenta que la víctima reconoció, habiéndose exhibido 4 set con 10 fotos cada uno, en el set 7-1 en el N° 1 a Tatiana Arana Espinoza como la persona que se hizo llamar Paula. Además, se acompañó el documento 341 correspondiente al certificado de inscripción del vehículo a nombre de la víctima estafada.

Por otra parte, en relación con el delito base de la receptación, además, se incorporó el encargo policial y el certificado de inscripción y anotaciones vigentes del mismo vehículo con la patente original KTYZ.18, a nombre del propietario, Miguel Caicedo Torres, siendo la víctima y denunciante Luis Caicedo Senador, quien compareció al juicio y dio su testimonio acerca de la sustracción del móvil, todo lo cual permitió establecer que este sufrió el robo con intimidación del vehículo el día 12 de diciembre de 2018. Encargo que fuera solucionado el 7 de marzo de 2019.

Conforme a la prueba rendida, en los delitos de receptación y estafa que quedaron establecidos, tuvieron participación Yerko Silva Toro y su brazo operativo en el exterior y persona de confianza, Tatiana Arana Espinoza, la que aparecía en fotografías mientras mostraba el vehículo a la víctima, corroborado con el reconocimiento fotográfico que hizo esta, que la identificó como la mujer que acompañaba al dueño y que dirigió la venta. A lo que se suma, que Tatiana le pidió que una parte del precio fuese transferido o depositado en la cuenta corriente del Banco Falabella de la madre de Yerko, Jeannette Toro Brenet.

35.- Station Wagon marca Ford modelo Edge, color gris metálico, año 2018, patente LBCY.63, fue reinscrito con la factura N°441 de la Automotriz Portillo SPA, emitida el 11 de enero de 2019, en que fue solicitante Tatiana Arana Espinoza y adquirente, Herman Sanhueza Hermosilla.

Este vehículo fue vendido a David Aarón Arias Herrera, con domicilio en la localidad de Cabrero, en la suma de \$15.300.000

La inspectora Inés Solans Roa, relató que se contactaron con la víctima en la ciudad de Los Ángeles, quien concurrió voluntariamente al cuartel, y a través de peritajes se estableció que el vehículo mantenía los números de chasis y de motor alterados. Luego, con el peritaje químico se logró identificar la placa patente original.

Reportó que la víctima declaró que vio el vehículo en Chile Autos, subido por un usuario de nombre Herman, con quien concretaron una reunión en Santiago, en Quinta Normal, donde se encontró con una mujer de nombre “Paula”, quien le mostró el vehículo y él lo revisó y le pareció bien.

Siguió relatando la víctima que al día siguiente fueron a la oficina de Arauco Maipú para comprarlo, donde llegó Paula con su hijo Freddy, además, con el dueño del auto de nombre Herman y como había una deuda de tag, que se necesitaba se resolviera en el momento, lo compró en \$15.000.000 con un cheque.

La testigo Solans mencionó que se le exhibió un cardex fotográfico, reconociendo a Tatiana Arana, quien era blanco activo de la investigación y también se le realizó un reconocimiento fotográfico respecto del hijo, quien la trataba de mamá, reconociendo a Freddy Miranda, también blanco activo de la investigación.

Además, la testigo reconoció en OMP 645, fotografía 34, la camioneta Ford Edge, patente LBCY.63, incautada a David Arias. Y en OMP 304, los pantallazos de conversaciones por whastapp, entre el afectado y las personas que le vendieron el auto, que fueron entregados por este.

Indicó que levantaron las placas patentes, exhibidas como EM 134 y los documentos del vehículo, incorporados como EM 135, donde constaban los documentos justificativos de la 1ª inscripción (también incorporados en documental 711) y de transferencia a la víctima y el certificado de inscripción.

Por otra parte, en relación con el delito base de la receptación, además, se incorporó el documento 179, correspondiente al encargo policial y certificado de inscripción y anotaciones vigentes del mismo vehículo con la patente original KKZL.22, a nombre de la propietaria y víctima, Marcia Andrea Doña Molina, quien compareció al juicio y dio su testimonio acerca de la sustracción del móvil, corroborado en juicio por el

carabinero Juan Faundez que recibió la denuncia respectiva; todo lo cual permitió establecer que esta sufrió el robo con intimidación de su vehículo el día 15 de enero de 2019. Encargo que fuera solucionado el 14 de mayo de 2019.

Conforme a la prueba rendida, en los delitos de receptación y estafa que quedaron establecidos, tuvieron participación Yerko Silva Toro y sus brazos operativos en el exterior y personas de confianza, Tatiana Arana Espinoza y su hijo Freddy Miranda Arana, los que fueron reconocidos por la víctima en la diligencia de reconocimiento fotográfico que se le practicó.

36.- St. Wg. Hyundai marca Tucson, azul marino, año 2019, patente LDCR.89, que fue reinscrito con la factura N° 392 de la Automotora Bilbao SPA de fecha 16 de enero de 2019, en que fue solicitante y adquirente, Alejandro Yáñez Recabal.

Este vehículo fue vendido a Cristopher Arbuch Pavez en la suma de \$14.000.000.

El afectado prestó testimonio en juicio y señaló que vio el vehículo en Chile Autos y se contactó telefónicamente con el oferente, se juntaron en el mall plaza sur, donde revisó el vehículo, los documentos, el número de motor, todo lo que conllevaba una inspección física y encontró todo en regla. Acotó que eran dos hombres los que le mostraron el auto.

Indicó que en la compra, estaba la persona que le vendió el vehículo y el otro sujeto, y se concretó la venta el mismo día pagando \$14.000.000, con un vale vista, el cual fue entregado con la firma en el Registro Civil, a nombre del dueño del vehículo.

Dijo que le entregaron dos llaves que estaban en buen estado, el vehículo era año 2019 y tenía 2.000 km, y el dueño le contó que lo estaba vendiendo porque se trasladaba a Iquique a trabajar por un cambio de faena por lo que estaba vendiendo sus bienes.

Añadió que tuvo el vehículo en su poder un par de meses, y fue contactado por la PDI para hacerle un peritaje y después de éste quedó requisado. Aseveró que en ese momento se le vino el mundo abajo porque era parte de una inversión fuerte, no solamente era perder el dinero sino que el endeudamiento posterior. Dijo que en ese momento prestó declaración y pudo identificar a la persona que le vendió el vehículo.

En OMP 704 reconoció en la fotografía exhibida la camioneta que compró en marzo de 2019, patente LDCR.89. Y se incorporó en documental 684, la declaración de transferencia de vehículos motorizados y giro y pago del impuesto.

Los atestados de la víctima fueron confirmados con la declaración del oficial de la PDI Bastián Guzmán, el que además, describió el vehículo que se le incautó en OMP 704, las placas patentes y los documentos del vehículo en EM 136 y 137, los que fueron levantados en el procedimiento y los documentos justificativos de la 1ª inscripción y la transferencia a la víctima, acompañados como documental 684. Además,

reportó que los peritajes que se le hicieron al móvil arrojaron que sus series estaban adulteradas y se obtuvieron las originales, asociadas a la patente LBYV.73 que tenía encargo por robo.

Por otra parte, en relación con el delito base de la receptación, además, se incorporó el documento 924, correspondiente al encargo policial y certificado de inscripción y anotaciones vigentes del mismo vehículo con la patente original LBYV.73, a nombre del propietario y víctima, Oscar de las Riberas Córdova, quien compareció al juicio y dio su testimonio acerca de la sustracción del móvil; todo lo cual permitió establecer que este sufrió el robo de su vehículo mientras estaba estacionado en el sector de estacionamientos del supermercado Jumbo, el día 17 de febrero de 2019. Encargo que fuera solucionado el 2 de julio de 2019.

Conforme a la prueba rendida, en los delitos de receptación y estafa que quedaron establecidos, tuvieron participación Yerko Silva Toro y, al menos, Alejandro Yáñez Recabal, miembro de la asociación que ha participado como solicitante de 1ª inscripción y/o primer adquirente, y también en las ventas, de varios vehículos vinculados a Yerko Silva, siendo uno de los testaferros o “gomas” utilizados por sus brazos operativos.

37.- St. Wg. Kia Sportage, color rojo, año 2019, patente LFGB.76, reinscrito con la factura N°388 de Automotriz Nuevo Laredo SPA de 1 de febrero de 2019, solicitante, Pablo Rojas Recabal y adquirente, Luis Galleguillos Maldonado.

Este vehículo fue vendido a José Alfredo Acuña Ahumada en la suma de \$12.500.000.

El afectado declaró en juicio que en el año 2019 compró este vehículo para un emprendimiento, estuvo cotizando en Yapo y se contactó con las personas que lo ofrecían. Indicó que Pablo Rojas le mostró el vehículo, lo probaron y luego quedaron en que en unos días decidiría la compra. Dijo que Rojas lo llamaba para preguntarle, pero no tomaba la decisión, y como seguían insistiendo y le bajaron el precio, se tentó. El sujeto le dijo que el dueño del vehículo no estaba en Santiago, por lo que necesitaba tener la certeza para que viajara desde Iquique, a fin de hacer la transferencia.

Relató que en el Registro Civil de la intermodal de La Cisterna se hizo la transferencia, llegó Pablo con una persona de nombre Luis Galleguillos Moscoso o Mardones, fue muy rápido porque pasó por delante de la gente que estaba esperando, se hizo toda la documentación y él entregó la suma de \$12.500.000 en efectivo, como le exigieron y se fue con el vehículo. Fue así como unas semanas después, personal de la PDI lo fue a buscar para periciar el vehículo y se dieron cuenta que era clonado.

Aseveró que perdió la camioneta, su trabajo, su matrimonio, y trató de ubicar a estas personas, pero nunca le contestaron, se fue a negro y perdió todo. Refirió que estuvo perdido como 3 semanas, con depresión, estuvo con psiquiatra y psicólogo, y todavía tiene depresión.

Reconoció el vehículo que compró en OMP 692, fotografía N°3 y la solicitud de transferencia del vehículo, acompañada como documento 706.

En este caso, también su testimonio fue corroborado por el inspector Bastián Guzmán, quien estuvo a cargo de las diligencias respecto de este móvil. El testigo señaló que se le realizaron peritajes al vehículo y arrojó que estaba adulterado, además se incautó la placa patente y sus documentos. Dio cuenta que se le tomó declaración al dueño, José Acuña Ahumada, y se le exhibió kardex fotográfico identificando a Pablo Rojas Recabal, como el sujeto que le vendió el vehículo y también al otro sujeto que lo acompañaba.

El testigo describió en OMP 692 las fotografías del vehículo y de sus series identificatorias, las placas patentes en EM 127 y la documentación del móvil en EM 126, levantados el día del procedimiento y también el certificado de inscripción y los documentos justificativos de la transferencia.

Por último, se acompañó la documental 706, correspondientes a los documentos de respaldo de la 1ª inscripción del vehículo, remitidos por el Registro Civil a la Fiscalía.

Por otra parte, en relación con el delito base de la receptación, además, se incorporó el documento 932, correspondiente al encargo policial y certificado de inscripción y anotaciones vigentes del mismo vehículo con la patente original KXJD.98, a nombre del propietario y víctima, Gabriel Martínez Marabolí, quien compareció al juicio y dio su testimonio acerca de la sustracción del móvil; todo lo cual permitió establecer que este sufrió el robo de su vehículo mientras estaba estacionado en el sector de estacionamientos del Mall Florida Center, el día 12 de marzo de 2019. Encargo que fuera solucionado el 6 de mayo de 2019.

Conforme a la prueba rendida, en los delitos de receptación y estafa que quedaron establecidos, tuvieron participación Yerko Silva Toro y, al menos, Pablo Rojas Recabal, solicitante de 1ª inscripción del vehículo y miembro de la asociación, que ha participado como solicitante y/o primer adquirente y también en las ventas, de otros vehículos vinculados a Yerko Silva, siendo uno de los testaferros o “gomas” utilizados por sus brazos operativos. Es más, otro elemento importante que lo vinculó a Yerko Silva, es el registro de las transferencias que se hicieron de la cuenta Rut de Claudia Sandoval (usada por Yerko) a Pablo Rojas Recabal a fines del año 2018, como quedó de manifiesto en las mismas cartolas incorporadas con la declaración del acusado.

38.- Camioneta Chevrolet Colorado, color gris grafito, patente KPYL.92, fue reinscrita con la factura N°504 de Automotriz Portillo SPA de 13 de febrero de 2019, fue solicitante, Leonardo Cuevas Vidal y adquirente, la empresa Agrocomercial Mardones SPA.

Este vehículo fue vendido a Cristian Silva Veloso por el martillero Ruperto Gutiérrez Larenas, en la ciudad de Concepción, en \$16.500.000.

El comisario Pedro Olivares, encargado de las diligencias a su respecto, declaró que fue incautado el 14 de mayo de 2019 en la ciudad de Los Ángeles, ya que su tenedor era un ingeniero que residía en esa ciudad, de nombre Cristian Silva, a quien le tomó declaración y dijo que a través de Chile Autos encontró esta camioneta publicada por Pedro Vilches, en \$18.000.000. El testigo reseñó que la víctima contactó a este sujeto, pero el vehículo estaba en Temuco, por lo que un amigo lo fue a ver y, una vez que le dio el visto

bueno, decidió comprarlo porque estaba todo bien. Además, le dijeron que la empresa necesitaba generar liquidez por malos movimientos y que tenían que ir a Concepción para hacer la transferencia. Siguió relatando que el afectado señaló que se presentó un tal “Jaime”, y este sujeto indicó que el vehículo tenía que ser vendido, a través de martillero con una factura de remate. Posteriormente, Jaime se presentó con Ruperto Gutiérrez, que era el martillero público, y concurrieron a una oficina de transferencia, pero no pudieron hacer la transferencia porque Jaime no era el representante legal de la empresa. Agregó que después llegó otra persona, luego de unos llamados, que se presentó para arreglar el tema y como pasó una hora, entonces Cristian Veloso, se fue y acudió donde el martillero y estando en su oficina, llegó Ilich Chopa.

Dijo el afectado que este sujeto preguntó por la venta, por el acuerdo de \$16.500.000 y **finalmente Ilich fue el encargado de concretar la venta**, le pidió las disculpas del caso y **la víctima emitió un cheque de su mamá a nombre de Ilich Chopa Aldana**.

El testigo Olivares manifestó que la víctima reconoció fotográficamente a Ilich Chopa. Y agregó que esta persona dejó firmada el acta de remate estampando su huella y se fue, después Cristian Silva fue nuevamente con el martillero a retirar el vehículo a una automotora y se le entregó la documentación respectiva, entonces se lo llevó a Los Ángeles.

La víctima señaló pasado un tiempo el vehículo tuvo problemas y lo llevó a un taller, donde le dijeron que el número de Vin no correspondía, entonces, fue a denunciar el hecho a la PDI. Acotó el testigo que después se efectuaron los peritajes y se estableció la identidad real del vehículo, asociada a la patente KXHZ-32, con encargo por robo con intimidación el 7 de febrero de 2019, de propiedad de María Teillery Bravo. Añadió que la entrevistaron y dijo que en febrero de 2019 iba con su hijo y sufrió una encerrona donde le quitaron el vehículo.

El comisario Olivares, identificó en fotografías la camioneta en OMP 645 y, además, se le exhibió OMP 588, que correspondía a la imagen del cheque de la madre de Cristian Silva de apellidos Veloso Pincheira, a nombre de Ilich Chopa Aldana, de fecha 2 de abril de 2019 por la suma de \$16.500.000 del Banco Santander; imagen a color de la cédula de identidad Ilich Chopa, explicando que se obtuvo cuando Ilich Chopa cobró el cheque en el Banco, imagen de la camioneta publicada en Chile Autos, que otorgó la víctima, otras imágenes de los contactos que tuvo la víctima con Pedro Vilches quien publicó la camioneta y la imagen de un documento entregado por la víctima, donde aparecía una cédula de identidad antigua de Ilich Chopa, en que autorizaba la subasta de la camioneta y aparecía su rut, huella digital y firma, más fotografías del anverso y reverso de la cédula de identidad y la fecha 2 de abril de 2019.

Además, como evidencia material 205, se acompañaron los documentos del vehículo y la documentación justificativa de la 1ª inscripción y de la transferencia realizada por Martillero público.

Por otra parte, en relación con el delito base de la receptación, además, se incorporó el documento 923, correspondiente al encargo policial y certificado de inscripción y anotaciones vigentes del mismo

vehículo con la patente original KXHZ.32, a nombre de la propietaria y víctima, María Constanza Telliery Bravo, quien compareció al juicio y dio su testimonio acerca de la sustracción del móvil, corroborado por el carabinero Hernán Puentes quien recibió la respectiva denuncia; todo lo cual permitió establecer que esta sufrió el robo con intimidación de su vehículo, el día 7 de febrero de 2019. Encargo que fuera solucionado el 14 de mayo de 2019.

Conforme a la prueba rendida, en los delitos de receptación y estafa que quedaron establecidos, tuvo participación Ilich Chopa Aldana, ya que el precio de venta del vehículo fue pagado con un cheque a su nombre por una suma considerable y cobrado por él, quedando copia de su cédula de identidad en el Banco, a lo que se suma que fue identificado por el afectado en reconocimiento fotográfico como el sujeto que autorizó la venta por el martillero público, a través de un documento que fue incorporado al juicio. Por todo lo cual, el tribunal consideró acreditada la participación de Chopa Aldana en ambos delitos, a pesar de que este declarara que solamente vendió a terceros la factura con que se reinscribió el vehículo, y que le pagaron con el cheque que cobró y el saldo lo devolvió a estos terceros, pues su dichos aparte de ser inverosímiles, fueron desvirtuados por la sólida y contundente evidencia señalada.

39.- Jeep marca **Suzuki modelo Vitara, color blanco**, año 2019, patente **LDLS.12**, fue reinscrito con la factura N°110 de Importadora Brunno Fritsch SPA de **5 de abril de 2019**, en que fue solicitante Marco Herrera Silva y el adquirente, Roberto Aravena Morales.

Este vehículo fue vendido a Juan Emilio Guíñez Aranguez en la suma de \$8.700.000.

El afectado declaró ante el tribunal que, en el año 2019 estaba buscando autos para renovar el suyo, y encontró éste en la plataforma Chile Autos, que tenía 5.000 kilómetros, entonces, le escribió por whatsapp al dueño y le respondió que él le podía llevar el auto a la casa, y fue un día tarde. Precisó que llegaron dos personas, quien decía ser el dueño le mostró el auto, no tenía mayores detalles, le miró la parte estética, le interesó y si podían llegar a un acuerdo lo quería comprar al día siguiente.

Indicó que el dueño dijo llamarse Esteban, éste daba detalles del auto, le contaba la historia de por qué lo vendía. Le señalaba que se había separado y que tenía un trabajo de aire acondicionado en Concepción, la esposa le estaba quitando todo y tenía que deshacerse rápido del vehículo, le dijo que no tenía golpes ni manchas en los asientos.

Se pusieron de acuerdo que al día siguiente se reunirían en el Registro Civil de La Florida y llegó otra persona que decía ser el dueño, a él lo sorprendió, pero el vendedor Esteban le explicó que por el tema de la esposa se lo tuvo que transferir. Fueron después a un banco que estaba al frente, retiró todo el dinero y se lo pasó. Agregó que le entregó una llave, y le dijo que la otra la tenía su esposa, que no se preocupara que se la iba a pedir. Lo llamó al otro día y no le contestó más.

Refirió que pasado un tiempo, lo citaron en calidad de invitado para que fuera voluntariamente a la PDI. Ahí le contaron que el auto que él había comprado era robado y clonado, le tomaron declaración y le

exhibieron un set de fotografías y en los set reconoció a dos personas. Detalló que reconoció al sujeto más alto que le mostró el auto y al que estaba en el Registro Civil, los dos que fueron a hacer la transferencia.

Indicó que tenía dinero en su cuenta, pero le faltaban como \$800.000 y se los pidió a sus compañeros de trabajo y pagó por el vehículo \$8.700.000.

Reconoció la solicitud de transferencia en EM 165.

Corroboró los dichos del testigo, la inspectora Inés Solans, a cargo de las diligencias respectivas, y quien señaló que Se llamó a peritos químicos y mecánicos para las pericias de rigor y así poder establecer si el número de chasis y de motor estaban alterados. Las pericias tuvieron resultado positivo y se estableció que el vehículo efectivamente había sido adulterado en dichos números y se obtuvo la PPU original. Este vehículo el 11 de diciembre de 2019 fue incautado, y mediante las pericias se estableció que la PPU original era la KLWR.85, que estaba asociada a un delito de robo con intimidación ocurrido el día 13 de abril de 2019, conforme al encargo, y la víctima de ese delito era Rodrigo Varas Leyton.

En cuanto a Esteban, el declarante lo describió y se realizó el reconocimiento fotográfico conforme a las características que les había dado, y Esteban resultó ser el blanco investigativo Camilo Sandoval.

Se acompañaron los documentos 486, que era el certificado de inscripción a nombre de la víctima, además la documentación del mismo y los documentos justificativos de la 1ª inscripción y de la transferencia en EM 14 y documento 781, así como las patentes se exhibieron a la tesigo como EM 13.

Por otra parte, en relación con el delito base de la receptación, además, se incorporó el documento 286, correspondiente al encargo policial y certificado de inscripción y anotaciones vigentes del mismo vehículo con la patente original KLWR.85, a nombre de la propietaria y víctima, Anita Mockridge Villar, siendo el denunciante Rodrigo Varas Leyton. Además, la ofendida compareció al juicio y dio su testimonio acerca de las circunstancias en que fue sustraído su móvil; todo lo cual permitió establecer que sufrieron el robo con intimidación del vehículo, el 13 de abril de 2019. Encargo que fuera solucionado el 11 de diciembre de 2019.

Conforme a la prueba rendida, en los delitos de receptación y estafa que quedaron establecidos, tuvo participación Camilo Sandoval Godoy, en la medida que fue identificado por el afectado en reconocimiento fotográfico, como el sujeto que se hizo llamar Esteban y que estuvo en todo momento a cargo de la venta del vehículo.

40.- St. Wg. Hyundai modelo Tucson color blanco, año 2019, patente LJLD.71, reinscrito con la factura N°124 de la Importadora Brunno Fritsch SPA de 13 de junio de 2019, fue solicitante y adquirente, Carla Francisca Leal Leal (apodada la Chelsea).

Este vehículo fue vendido a Jessica Aguilera Pavéz en la suma de \$11.900.000.

La víctima compareció al juicio y prestó declaración señalando que encontró este vehículo por una publicación en la plataforma Chile Autos, y por whatsapp se puso en contacto con la persona que lo ofrecía, se juntaron para ver el auto, le gustó y llegaron a un acuerdo.

Indicó que al día siguiente hicieron la transferencia en el Registro Civil, le pidieron un cheque para cobrarlo por caja porque la persona tenía que viajar ya que se iba a trabajar afuera, por eso, necesitaba efectivo. Su marido extendió el cheque y lo cobraron en el Banco de Chile por caja.

Refirió que su marido se llama Omar Espínola y fueron juntos a ver el vehículo, estaba el supuesto vendedor y su señora, y el vehículo aparecía ofertado en \$11.900.000 y recordó que lo adquirieron en ese monto. Agregó que al Registro Civil, fue el vendedor, la mujer que era la dueña del vehículo y, además, otro personaje que los andaba acompañando. Dijo que no les llamó la atención algo anormal o irregular, incluso coincidía la patente con un número que aparece en el parabrisas.

Después de un tiempo, indicó que llegó la PDI a informarle que el vehículo que había comprado estaba encargado por robo y tenía que entregarlo. Al día siguiente, fue a dependencias de la PDI, le tomaron declaración sobre la compra, revisaron el auto y se dieron cuenta que estaba adulterado, que era robado y que la habían estafado.

La testigo manifestó que su sensación fue horrible, juntó el dinero con sacrificio, fue parte de una herencia de su madre, tuvo que dejar su vehículo en la PDI y se fue de brazos cruzados llorando por la calle.

Se le exhibió una fotografía en OMP 699, reconociendo el vehículo que compró y en el documento 10, el certificado de inscripción a su nombre.

Relacionado con el testimonio de la víctima, la inspectora Inés Solans, declaró que le correspondió realizar una diligencia de seguimiento a dos blancos investigados, Freddy Miranda y Franco Cruz el día que fueron a reinscribir el vehículo en comento, en compañía de la testafarro que sirvió de solicitante y adquirente, Carla Leal. Indicó que había un grupo de colegas al interior de la oficina del Registro Civil de Cerro Navia y otro al exterior, y dejaron registro fotográfico de la diligencia.

La testigo dio cuenta de los movimientos de los partícipes del trámite de reinscripción, describiendo las fotografías de OMP 314.

Por su parte, el comisario Pedro Olivares, que también participó en las diligencias relacionadas con este móvil, agregó que este era el único vehículo en que aparecía Carla Leal Leal, apodada "Chelsea" y había conversaciones entre Freddy y Tatiana, en que señalaban que ella iba a buscar un goma, pero al final lo inscribió a su nombre. Dijo que le tomó declaración a la funcionaria del Registro Civil, quien reconoció a Freddy Miranda y Carla Leal como las dos personas que estaban solicitando la inscripción del vehículo, y las placas patentes les fueron otorgadas.

Se acompañaron los documentos justificativos de la 1ª inscripción en la documental 786 y los documentos del vehículo y certificado de inscripción a nombre de la víctima, en la documental 10.

Por otra parte, en relación con el delito base de la receptación, además, se incorporó el documento 287, correspondiente al encargo policial y certificado de inscripción y anotaciones vigentes del mismo vehículo con la patente original LCJD.99, a nombre de la propietaria y víctima, Flavia Paz Rivas Ponce, corroborado por el carabinero que recibió la respectiva denuncia; todo lo cual permitió establecer esta sufrió el robo de su vehículo mientras se encontraba en un estacionamiento, el 26 de abril de 2019. Encargo que fuera solucionado el 4 de diciembre de 2019.

Conforme a la prueba rendida, en los delitos de receptación y estafa que quedaron establecidos, tuvieron participación Yerko Silva Toro, Franco Cruz Iligaray y Freddy Miranda, ambos miembros de la asociación, y éste último brazo operativo y persona de confianza de Yerko, que estuvieron a cargo de la reinscripción del vehículo y su posterior venta, junto a la testaferro a nombre de quien lo inscribieron.

41.- Automóvil Ford modelo Mustang color gris metálico, año 2019, patente LKKL.73, fue reinscrito con la factura N°127 de Importadora Brunno Fritsch SPA de 21 de junio de 2019, fue solicitante Esteban Matus Escobar y adquirente, Bernardita Allende Romero.

Este vehículo fue vendido a José Camus Roumat, en la suma de \$20.000.000.

El comisario Larry Caro, encargado de las diligencias en este caso, declaró que dentro de la investigación, revisaban portales de venta de vehículos y el comisario Olivares le comentó que había un auto a la venta asociado a una empresa investigada. Entonces, tomaron contacto con la persona, se juntaron y le explicaron que era muy probable que fuera un auto clonado.

Indicó que el vehículo lo mantenía José Camus Roumat, porque trabajaba como intermediario de ventas de vehículos virtuales, y lo había adquirido sin haber hecho la transferencia y lo tenía a la venta.

Refirió el testigo que concurrió al cuartel de Independencia, donde los peritos establecieron que los números de motor y chasis estaban adulterados, pero no fue posible establecer su verdadera identidad, lo que se hizo en la concesionaria de la marca y se pudo obtener la patente original, la cual tenía un encargo por robo con intimidación. Lo anterior fue confirmado por el perito que expuso en juicio que el vehículo tenía sus series adulteradas.

El testigo Caro, dio cuenta de la declaración de José Camus, el que señaló que no conocía a la dueña Bernardita Allende, ya que había comprado el vehículo en una subasta en **vendenostuauto.com**, en \$20.000.000 y fracción. Entonces, el testigo dijo que concurrieron a dicha empresa y se entrevistaron con el gerente de operaciones, litigios y juicios, Sergio Trigo Álvarez, quien indicó que operaban de la misma forma, que tenían distintos puntos de compra y venta de vehículos, donde las personas vendían su auto, lo subían a la plataforma y lo subastaban, donde participaban “compraventeros” de autos.

Respecto del vehículo en comento, el gerente manifestó que fue adquirido en la ciudad de Concepción, quien se presentó a vender el vehículo fue Marcelo Romero Leal, en representación de Bernardita Allende Romero, por el cual se le pagó la suma de \$15.900.000. Aseguró que revisaron todo,

incluso sus técnicos, revisaron estas plataformas de información, tanto abiertas como pagadas, donde no pudieron establecer que el vehículo tuviera problema alguno, por eso, decidieron comprarlo.

Refirió que el mandatario de la propietaria, Marcelo Romero Leal, le manifestó en el momento al comprador, en este caso vendenostuauto.com, que la transferencia o el pago del automóvil **se lo hiciera a una persona de nombre Alexis Aldana**, porque él tenía problemas con su cuenta, y **le entregó su número de RUT y la cuenta corriente de Alexis Aldana, del Banco BCI número 74679694.**

Manifestó el testigo Larry Caro que el RUT de Alexis Aldana, correspondía a Ilich Chopa Aldana, quien utilizó en esa oportunidad su segundo nombre y su segundo apellido.

En OMP 698, reconoció el vehículo en las fotografías que le exhibieron. Y en OMP 599, se incorporaron imágenes de las publicaciones en que se ofertaba el vehículo.

Los documentos justificativos de la 1ª inscripción se acompañaron en la documental 850.

Por otra parte, en relación con el delito base de la receptación, además, se incorporó el documento 928, correspondiente al encargo policial y certificado de inscripción y anotaciones vigentes del mismo vehículo con la patente original LGSJ.21, a nombre del propietario y víctima, Roberto Abhuhadba Amar; que permitieron establecer que este sufrió el robo con intimidación de su vehículo, el 22 de junio de 2019. Encargo que fuera solucionado el 4 de diciembre de 2019.

Conforme a la prueba rendida, en los delitos de receptación y estafa que quedaron establecidos, tuvieron participación Yerko Silva Toro, Franco Cruz Iligaray y Freddy Miranda, ambos miembros de la asociación, y éste último brazo operativo y persona de confianza de Yerko, que estuvieron a cargo de la reinscripción del vehículo y su posterior venta, junto a la testafarro a nombre de quien lo inscribieron.

42.- St. Wg. Hyundai modelo Tucson color plateado, patente LPKZ.56, que fue reinscrito con la factura N°17 de Automotriz Guillermo Morales SPA de **1 de octubre de 2019**, fue solicitante, Carlos Varela Carrasco y adquirente, **Sindy Arancibia Muñoz.**

Este vehículo fue vendido a Gladys Carmen Aravena Jara en la suma de \$14.000.000.

La víctima compareció al juicio y declaró que Manifestó que en el año 2020, compró el vehículo señalado a través de un sitio web, donde contactó a la persona que lo ofrecía y luego se juntaron junto con su marido, en una bencinera que está en la comuna de Quinta Normal, con un hombre joven de unos 30 años, quien les exhibió el auto.

Indicó que al día siguiente se juntaron en el Registro Civil para hacer la transferencia, y ella entregó \$14.000.000 en efectivo por el auto, haciendo presente que tenía un vale vista a su nombre, proveniente de ahorros, pero esta persona le pidió que lo cobrara y le pagara en efectivo, y eso hizo en el Banco de Chile.

Además, refirió, que cuando hicieron la transferencia, esta persona llegó con una autorización (mandato) para venderlo, de manera que no era el dueño del vehículo. La testigo señaló que este quedó a

nombre de ella, tal como aparecía en el documento 432 correspondiente al certificado de inscripción, y que le entregaron una sola llave, porque la otra se había extraviado.

Dijo la víctima que tuvo el vehículo unos 6 o 7 meses y después llegaron a revisar el vehículo 3 personas del SEBV a la casa de su hija donde ella se encontraba, otorgó la autorización y los funcionarios hicieron unas pruebas y detectaron que en el asiento del copiloto del auto tenía un número que estaba alterado, por eso, se lo llevaron y ella entregó los documentos y no supo más hasta ahora que la llamaron para este juicio.

Puntualizó que, en ese momento, quedó en shock, ya que cuando hicieron la transferencia en el Registro Civil estaba toda la información legal y la persona que lo estaba vendiendo le dio confianza.

Se le exhibió una imagen en OMP 17, obtenida desde una carpeta de whastapp contenida en el teléfono celular de Yerko Silva Toro, y la víctima identificó en la fotografía 6 la parte frontal del vehículo que compró, patente LPKZ.56.

Corroboró la declaración anterior, el Suboficial Mayor de SEBV de Rancagua, Alejandro Osses Contreras, quien concurrió al domicilio de la afectada y se entrevistó con ella, donde se realizó una revisión físico-técnica del vehículo, y se determinó que el número de chasis presentaba claros signos de intervención de terceros y que el número de motor era original de fábrica. Dijo que verificado en el Registro Civil, dicho número estaba asociado a la patente LJCG.80, que registraba encargo policial vigente de 07.10.2019, por denuncia efectuada por Leoncio San Martín, en la 36ª Comisaría de La Florida. Lo anterior fue confirmado por el perito que declaró en el juicio.

Describió el vehículo y el proceso de revisión mecánica con apoyo de las fotografías de OMP 728.

Los documentos fundantes de la 1ª inscripción fueron acompañados en la documental 776.

Por otra parte, en relación con el delito base de la receptación, además, se incorporó el documento 945, correspondiente al encargo policial y certificado de inscripción y anotaciones vigentes del mismo vehículo con la patente original LJCG.80, a nombre del propietario y víctima, Leoncio San Martín Seguel; corroborado en el juicio por el carabinero que recibió la respectiva denuncia, todo lo cual permitió establecer que este sufrió el robo de su vehículo, mientras se encontraba en un estacionamiento, el 6 de octubre del año 2019. Encargo que fuera solucionado el 29 de agosto de 2020.

Conforme a la prueba rendida, en los delitos de receptación y estafa que quedaron establecidos, a lo menos, tuvo participación Yerko Silva Toro, en la medida que mantenía fotografías del vehículo en cuestión en su celular (OMP 17) y además, la testaferro que lo inscribió a su nombre y fue solicitante de esa inscripción, Sindy Arancibia Muñoz, fue reclutada por la asociación ya que Yerko Silva, mantenía la imagen de su cédula de identidad en su celular (OMP 123).

43.- St. Wg. Hyundai modelo Tucson de color blanco, año 2020, patente **LJPX.58**, fue reinscrito con la factura N°22 de la Automotriz Guillermo Morales SPA, de **23 de octubre de 2019**, fue solicitante y adquirente, **Marcos Supanta Aguilera**. (Testaferro reclutado por Juan Navarrete Vásquez).

Este vehículo fue vendido a Víctor Hugo Jiménez Hugueño, con domicilio en Coquimbo, en la ciudad de La Ligua, en la suma de \$15.000.000 pagado en efectivo.

El afectado declaró ante el tribunal que alrededor del 15 de diciembre de 2019, encontró en Yapo el vehículo singularizado, reconociéndolo en la fotografía de OMP 542. Entonces, se contactó con la persona que lo tenía publicado de nombre Álvaro Casanova, quien estaba en Santiago, en la comuna de Estación Central.

Indicó que acordaron juntarse en La Ligua, porque él estaba medio escaso de tiempo pues trabajaba en Antofagasta. Fue así como, relató el testigo, el 16 de diciembre se juntaron cerca del Registro Civil de La Ligua, él viajó con su Sra. Esther Talamilla. La persona que se presentó siempre fue Álvaro Casanova, con quien se contactó antes de viajar. Revisaron el auto y estaba todo en regla, les pareció bien.

Manifestó que el sujeto andaba acompañado de un sobrino de su esposa y un tercero que dijo ser hijo de Álvaro Casanova (eran tres hombres), en un auto Mercedes Benz deportivo, blanco. Precisó que ingresaron al Registro Civil Álvaro Casanova y Marcos Supanta y la persona que andaba en el Mercedes, en una oportunidad, entró al Registro Civil, pero todo el contacto y trámite fue con Álvaro Casanova.

Indicó que después se dirigieron al Banco de Chile a pagar el impuesto y el sujeto le pidió que le pagara en efectivo, porque tenía deudas y no podía tener dinero en su cuenta, ya que se lo podían quitar. Entonces, en el banco le pasó la suma de \$15.000.000 en efectivo, al tiempo que la tercera persona lo esperaba afuera en el auto.

Contó que en febrero lo contactó una persona de la PDI de Santiago para consultarle por el auto y concurrió a la PDI de la Serena y confirmó que la información. En agosto de 2020, llegó a su domicilio la brigada de robos de Carabineros solicitándole los antecedentes del vehículo y la documentación, además, revisaron el auto, determinando que tenía adulterado el número de chasis.

Posteriormente, dijo que lo citaron a la PDI de Coquimbo donde acudió con su esposa, los entrevistaron por separado y les mostraron un set de fotografías, en los cuales reconoció a los tres sujetos, Marcos Suplanta, Álvaro Casanova y al tercer sujeto, supuestamente hijo de Álvaro Casanova. Acotó que a su señora también le exhibieron un set de fotografías y reconoció a los tres individuos.

Puntualizó que el vehículo fue requisado por Carabineros, quedando retenido en la Comisaría de Coquimbo y él entregó las llaves y toda la documentación del mismo. Acotó que cuando se enteró que su vehículo era robado, sintió una desilusión tremenda, rabia e impotencia, ya que puso mucho esfuerzo para juntar el dinero, porque adquirir el vehículo era un sueño de toda una vida.

Lo anterior se confirmó con el testimonio del cabo 1° de Carabineros, quien reportó en el juicio que el 27 de agosto de 2020, concurrieron a verificar un vehículo y se entrevistaron con el dueño de nombre Víctor. Añadió que revisaron el auto, las placas patentes que portaba LJPX.58, eran originales, las compararon con las series de motor y chasis y coincidían, pero estas series eran falsas, se hizo peritaje químico y se determinó que el vehículo correspondía a la patente LCSF.36, que mantenía un encargo por robo. Dijo que se verificó mediante el sistema de Carabineros la fotografía del vendedor y se le realizó una exhibición fotográfica, con 2 set de 10 fotos cada uno, y reconoció a una persona como el sujeto que le vendió el vehículo, de apellido Supanta.

Por su parte, la inspectora Raquel Forero que estuvo a cargo de las diligencias investigativas en este caso, depuso en juicio corroborando el testimonio de la víctima a quien le tomó declaración. Además, dijo que se le realizó un reconocimiento fotográfico, en el cual reconoció a Marcos Supanta y con posterioridad, reconoció al sujeto que se hacía llamar Álvaro Casanova, quien era Albano Silva Toro.

Añadió la inspectora que después se le tomó declaración a la esposa, de nombre Esther, quien dio el mismo relato de los hechos y se le hizo un reconocimiento fotográfico, en el cual, reconoció a Álvaro Casanova que era Albano Silva Toro, a Marco Supanta, el propietario del vehículo y, por último, a la persona del Mercedes Benz que correspondía a Juan Navarrete Vásquez.

Los documentos del vehículo, el certificado de inscripción a nombre de Marcos Supanta y la solicitud de transferencia fueron incorporados en la EM 40. Y el certificado de inscripción a nombre de la víctima y su señora fue incorporado como documento 425. Por último, los documentos fundantes de la 1ª inscripción del vehículo, se acompañaron en la documental 778.

Por otra parte, en relación con el delito base de la receptación, además, se incorporó el documento 907, correspondiente al encargo policial y certificado de inscripción y anotaciones vigentes del mismo vehículo con la patente original LCSF.36, a nombre del propietario y víctima, Manuel Alejandro Novoa Tolosa, el que dio su testimonio en juicio acerca de la sustracción de su vehículo; todo lo cual permitió establecer que este sufrió el robo del mismo mientras se encontraba aparcado en un estacionamiento, el día 15 de noviembre de 2019. Encargo que fuera solucionado el 13 de enero de 2021.

Conforme a la prueba rendida, en los delitos de receptación y estafa que quedaron establecidos, tuvieron participación Yerko Silva Toro y sus brazos operativos, Albano Silva Toro y Juan Navarrete Vásquez, reconocidos por las víctimas como quienes estuvieron a cargo de la venta y todas las gestiones para llevarla a cabo, recibiendo Juan Navarrete, en definitiva, el dinero en efectivo, como los mismos acusados de manera coincidente lo declararon, para llevárselo a su destinatario final Yerko Silva. Además, Yerko Silva mantenía una imagen de la cédula de identidad de Marcos Supanta, testaferro reclutado por Juan Navarrete, en su celular (OMP 125).

44.- Automóvil **Fiat modelo Argo de color gris**, año 2020, patente **LPHC.30**, que fue reinscrito con la factura N°62 de C. Hernández SPA de **3 de febrero de 2020**, en que fue solicitante, **Marcos Supanta Aguilera** y adquirente, **Jonathan Pérez Pérez** (ambos testaferros reclutados por Juan Navarrete Vásquez).

Este vehículo fue vendido a Cristian Gacitúa Salgado en la suma de \$6.400.000, por José Ignacio Sánchez Marinkovic, que era el segundo dueño, quien lo había comprado a Juan Navarrete Vásquez, en la suma de \$2.800.000.

La víctima Cristian Gacitúa, compareció a estrados y declaró que el 30 de enero 2020, compró el vehículo señalado, se contactaron con José Ignacio Sánchez por Facebook, y se juntaron en el supermercado Jumbo de Chicureo para revisarlo, llegaron a un acuerdo en el precio de \$6.400.000 y se hizo la transferencia.

Indicó que pasó un año y llegó la PDI a su domicilio, le pidieron que se acercara a la unidad con el vehículo para hacerle peritaje y luego le informaron que estaba clonado. Acotó que el vehículo quedó incautado en el lugar junto con la llave y los documentos. Dijo que en ese momento se tuvo que ir con sus cosas en una bolsa de basura y sintió rabia e impotencia.

Señaló que se comunicó con José Sánchez, le contó el problema, y éste le dijo que no sabía que el auto estaba clonado y concurrió a la PDI a prestar declaración. Este le contó que lo había comprado en una página de Facebook, para su señora, ésta no lo usaba y después se lo vendió a él, posteriormente le pidió que le devolviera, a lo menos, la mitad de lo que había pagado, pero le pasó solo \$2.000.000 y perdió el resto.

Reconoció el vehículo que compró en las imágenes de OMP 129 y OMP 128, que se encontraban contenidas en la carpeta de imágenes del teléfono celular de Yerko Silva Toro y se le exhibió la EM 213, reconociendo el certificado de homologación individual del mismo vehículo.

Acorde con la declaración anterior, José Sánchez dio su testimonio en juicio y señaló que vio una publicación del vehículo señalado en Facebook, se contactó con la persona y por whatsapp y fue esa misma noche a verlo una dirección en la comuna de Cerro Navia.

Precisó que la persona con la que se contactó por whatsapp se hizo llamar Andrés Belmar. Revisó el vehículo, que estaba publicado en \$3.200.000, y tenía un choque en la parte trasera, además este sujeto le dijo que le habían robado la batería y la radio, y llegaron a un acuerdo en el precio de \$2.800.000.

Dijo que para hacer la transferencia, su papá se juntó con Andrés Belmar, porque él tenía que terminar unos traslados. Detalló que Andrés Belmar le dijo que el auto era de su primo Jonathan Washington Pérez, que fue el día de la transferencia y pagó en efectivo porque así se lo pidieron. Acotó que Andrés Belmar era flaco, blanco, pelo castaño o negro y Jonathan Pérez era bajo y medio gordito.

Contó que arregló el vehículo porque tenía un choque en la parte trasera izquierda, lo tuvo unos 6 a 7 meses y lo puso a la venta. Y una señora de nombre Marisol lo contactó porque le interesaba ver el auto, se

pusieron de acuerdo y se lo mostró en un supermercado de Colina. Entonces, llegaron a un acuerdo y se lo vendió en \$6.000.000, quedando el vehículo a nombre de la pareja de esta señora.

Refirió el testigo que un par de meses después, Marisol lo llamó y le dijo que estaba la PDI incautándole el auto, así que él fue a declarar a la PDI lo mismo que ahora. Acotó que en la PDI le exhibieron fotografías y reconoció a Andrés Belmar. Además, entregó pantallazos de la publicación del vehículo en Facebook y de las conversaciones que tuvo con el vendedor y de mensajes y audios de whatsapp. Estas imágenes y audios fueron reconocidos por el testigo en OMP 579, 580 y 581 que le fueran exhibidos.

Se acompañó en OMP 419, el certificado de inscripción a nombre de Cristian Gacitúa Salgado, que indicó era la pareja de la señora Marisol. También identificó el vehículo, aunque no chocado, en las imágenes de OMP 129.

Por último, el testigo sostuvo que devolvió a los compradores parte del dinero del auto, para lo cual se tuvo que conseguir plata, pagar intereses y fue difícil ese momento.

Corroborando las versiones anteriores, declaró la inspectora Raquel Forero, a quien le correspondió realizar diligencias respecto de este vehículo y tomó declaración a Cristian Gacitúa, José Sánchez y a su padre, quienes lo hicieron en los mismos términos, y reportó que a estos dos últimos se les realizó un reconocimiento fotográfico, identificando ambos a Andrés Belmar, quien era Juan Navarrete Vásquez.

En el mismo sentido, declaró la subinspectora Francisca Núñez López, que también participó en las diligencias respecto del vehículo en comento, y agregó que se determinó la patente original que era la LFHJ.80, la cual tenía encargo por robo de fecha 6 de enero de 2020. Sobre este punto, el perito mecánico, Juan Pablo González, expuso en juicio que constató que el móvil tenía las series adulteradas y con el peritaje químico se estableció su verdadera identidad que correspondía a la patente señalada.

Se acompañaron en la documental 630, los documentos del vehículo, además, el contrato de compra venta, entre José Sánchez Marinkovic y Cristian Gacitúa Salgado. Y en la documental 790, los documentos fundantes de la 1ª inscripción.

Por otra parte, en relación con el delito base de la receptación, además, se incorporó el documento 285, correspondiente al encargo policial y certificado de inscripción y anotaciones vigentes del mismo vehículo con la patente original LFHJ.89, a nombre de la propietaria de la época, Emily Balqui Jugo y siendo el denunciante Williams Pérez Araque, corroborado por el carabinero que recibió la denuncia y dio su testimonio en juicio; todo lo cual permitió establecer que este sufrió el robo con intimidación del vehículo, el día 6 de febrero de 2020. Encargo que fuera solucionado el 2 de febrero de 2022.

Conforme a la prueba rendida, en los delitos de receptación y estafa que quedaron establecidos, tuvieron participación Yerko Silva Toro y su brazo operativo Juan Navarrete Vásquez, éste último reconocido por las víctimas como el sujeto que se hizo llamar Andrés Belmar y que estuvo a cargo de la venta y todas las

gestiones para llevarla a cabo. Además, Yerko Silva mantenía imágenes de la factura y el formulario 88, documentos fundantes de la reinscripción del automóvil, en su celular (OMP 156 Nos. 11 y 12).

45.- Minibús Hyundai New H1 de color blanco, año 2020, patente **LPHC.22**, el que fue reinscrito con la factura N°51 de Comercial Gildemeister SPA de **3 de febrero de 2020**, en que fue solicitante, **Jonathan Pérez Pérez** y adquirente, **Leónidas Hernández Concha** (apodado Gualata y reclutado por Juan Navarrete Vásquez)

Este vehículo fue vendido a Bruno Kevric Tavonatti, con domicilio en la ciudad de Antofagasta, en la suma de \$15.200.000.

El afectado declaró en el juicio y señaló que a fines de febrero o principios de marzo de 2020 vio el minibús señalado en venta en internet, contactó al vendedor que era un hombre y quedaron de juntarse en Santiago. Indicó que lo revisó y lo probó, tomando los datos del vehículo y al día siguiente quedaron de juntarse.

El testigo explicó, que se dedicaba a arrendar vehículos, y residía en Antofagasta, entonces viajó a Santiago de vacaciones y además tenía su familia en esta ciudad. Por eso, estando en Santiago vio el auto y cuando se lo exhibieron, llegó un joven con una mujer, que no era con quien había tomado contacto.

Dijo que el joven tenía menos de 20 años y le comentó que necesitaba licencia clase A, la cual no tenía; y la mujer era adulta, decía ser la madre y el dueño supuestamente era el padre. A la mujer la vio dos veces, cuando revisó el auto y después en la notaría.

El testigo refirió que le exhibieron una factura de Gildemeister a nombre de un Sr. Leónidas, los datos que estaban en la factura coincidían con el vehículo, documento acompañado en la documental 766.

Agregó que, incluso, revisó el número de chasis estampado en el asiento del copiloto y no tenía encargo por robo. Al día siguiente se presentó Leónidas con su cédula de identidad, acompañado del mismo joven y el testigo eligió la notaría por un tema de confianza.

Indicó que pagó con un cheque que se cobró en un banco que estaba al lado de la Notaría, y que le entregaron una llave y, al pedir la segunda llave le dijeron que no la tenían, pero como él compraba vehículos usados no le llamó la atención, porque por lo general la gente pierde la otra llave.

Contó que en junio llegó personal de Carabineros, el Sargento Domínguez, y le explicó la situación, revisaron el número de chasis y estaba adulterado, autorizó que le pusieran un escáner al computador y arrojó otro vin y el número de motor también estaba adulterado. Todo lo cual fue corroborado por el Sargento del SEBV de Antofagasta, Mario Domínguez, que expuso las conclusiones de los peritajes en el juicio.

Dijo que el vehículo quedó a su nombre, como constaba en el certificado de inscripción que se acompañó como documento 426 y que reconoció al vendedor Leónidas en las fotografías que le exhibieron.

El testigo, además, reconoció las imágenes que se le exhibieron, en OMP 22, la publicación del vehículo en internet; en OMP 23, el permiso de circulación; OMP 115, la fotografía de la cédula de identidad Leónidas Hernández Concha con quien hizo la transferencia y en OMP 209, un video donde aparecía el furgón que compró.

El subinspector Felipe Arriagada, que participó en diligencias respecto del vehículo en comento, señaló que le tomó declaración a Patricio Asun Fuentes, ya que se encontró una fotografía de un vale vista del Banco de Chile, a su nombre por la suma de \$17.000.000 de fecha 27 de febrero de 2020, en el teléfono de Yerko Silva Toro. Dicho documento fue reconocido por el testigo Arriagada que se acompañó en OMP 30 y reportó que el Sr. Asun indicó que tomó el vale vista para comprar el minibús LPHC.22 y le sacó una foto enviándola al vendedor a modo de garantía de la realización de la compra; sin embargo, al concurrir a la notaría, llegaron tres personas, dos hombres y una mujer embarazada, le pareció sospechosa la situación y le di desconfianza, por lo que decidió no comprar el vehículo.

Por último, reconoció fotografías y los documentos del vehículo aportados por el Sr. Asun, en OMP 602.

Además, en lo que concierne a este furgón, cabe considerar la prueba rendida con las declaraciones de Yerko Silva Toro, Albano Silva Toro y Juan Navarrete Vásquez, que dice relación con el viaje que emprendieron a la ciudad de Arauco para vender el vehículo, particularmente audios de whastapp, venta que también resultó fallida, porque no tenían la autorización para la venta ya que el propietario tenía inicio de actividades.

Por otra parte, en relación con el delito base de la receptación, además, se incorporó el encargo policial y certificado de inscripción y anotaciones vigentes del mismo vehículo con la patente original LHDV.11, a nombre de la propietaria y víctima, Jazmín Salgado Lorca; que permitieron establecer que esta sufrió el robo de su vehículo en la vía pública, el día 31 de diciembre de 2019. Encargo que fuera solucionado el 16 de noviembre de 2020.

Conforme a la prueba rendida, en los delitos de receptación y estafa que quedaron establecidos, tuvieron participación Yerko Silva Toro y sus brazos operativos Albano Silva Toro y Juan Navarrete Vásquez, quien además reclutó al primer adquirente Leónidas Hernández, los que se involucraron en la receptación al guardar e intentar al menos en una ocasión la venta del furgón. Además, Yerko Silva mantenía imágenes y videos del vehículo y de sus documentos en su celular (OMP 209 WA0015, 1, 112, 156.7).

46.- St. Wg. Hyundai modelo Tucson, color plata, año 2020, patente LPHC.69, inscrito con la factura N° 108, emitida por Comercial Gildemeister SPA, de 3 de febrero de 2020, fue solicitante, Jonathan Pérez Pérez y el adquirente Marcos Supanta Aguilera.

Este vehículo fue vendido a Camila Alejandra Cañas Avate por Jonathan Pérez Pérez, con poder otorgado por Marcos Supanta Supanta, que figuraba como propietario, en la suma de \$9.500.000.

El Sargento Segundo de Carabineros, Rodrigo Muñoz Pantoja, declaró en juicio y señaló que el 24 de agosto de 2020, se trasladaron a la comuna de Melipilla, al domicilio donde se encontraba el vehículo referido, salió una mujer identificada como Alejandra Cañas y le exhibieron la orden de investigar, la que accedió voluntariamente a que periciaran el vehículo. Agregó que ambas series estaban adulteradas. Lo anterior, fue corroborado por el perito Ascencio quien expuso en juicio que se determinó la verdadera identidad del móvil.

Indicó el testigo que en el cuartel policial, le tomó declaración a la Sra. Cañas, quien señaló que por Chile Autos encontró este vehículo, se ofrecía a \$11.000.000, por lo que tomó contacto por whatsapp con la persona que lo vendía, quien le dijo que tenía unos partes así que le bajó el precio a \$9.500.000. Fue así como compró el vehículo el 17 de julio, en una notaría de Maipú e hicieron la transferencia. Preciso que le mostraron el auto un hombre y una mujer y que el vendedor fue un hombre.

El testigo describió el vehículo en las fotografías de OMP N°632, que le exhibieron.

Además, se exhibió la evidencia material 283, correspondiente a las dos placas patentes y los documentos del vehículo, solicitud de primera inscripción, contrato de compraventa de vehículos, entre el comprador Jonathan Washington Pérez Pérez representado por Marcos Supanta y la compradora Camila Alejandra Cañas Abarca, y la carta poder de 17 de abril de 2020, de Jonathan Pérez Pérez otorgado a Marcos Fernando Supanta Aguilera, las cédulas de identidad de ambos y el certificado de inscripción del vehículo.

En la documental 769, se acompañaron los documentos fundantes de la 1ª inscripción y se acompañó el documento 421, certificado de inscripción a nombre de Pérez Pérez.

Por otra parte, en relación con el delito base de la receptación, además, se incorporó el encargo policial y certificado de inscripción y anotaciones vigentes del mismo vehículo con la patente original KSXC.56, a nombre del propietario y víctima, Jonathan Manuel Burgos Jara, quien compareció al juicio y dio su testimonio acerca de la sustracción de su vehículo; todo lo cual permitió establecer que este sufrió el robo de su vehículo en la vía pública, el día 15 de febrero de 2020. Encargo que fuera solucionado el 27 de agosto de 2020.

Conforme a la prueba rendida, en los delitos de receptación y estafa que quedaron establecidos, tuvieron participación Yerko Silva Toro y su brazo operativo Juan Navarrete Vásquez, quien además reclutó al primer adquirente Leónidas Hernández; y quien concurrió a la venta en representación de Hernández, fue el solicitante de la 1ª inscripción Jonathan Pérez Pérez, testaferro de la asociación, que vendió junto a Juan Navarrete el Fiat Argo, así como también participó en la reinscripción de varios vehículos.

Además, Yerko Silva mantenía imágenes de las cédulas de identidad de ambos testaferros, Supanta y Pérez (OMP 125 y 119) y de la factura, solicitud de 1ª inscripción y formulario 88 para el pago del impuesto verde en su teléfono celular (OMP 26 y 156).

47.- St. Wg. Hyundai modelo Tucson de color rojo, año 2020, patente **LPHC.70**, reinscrito con la factura N°105 de Comercial Gildemeister SPA de **4 de febrero de 2020**, fue solicitante, **Leónidas Hernández Concha** y adquirente, Bastián Oyarce Ruz.

Este vehículo fue vendido a Mario Hernán Mora Morales, con domicilio en Rancagua, en la suma de \$6.500.000.

El afectado compareció a estrados y declaró que en abril de 2022, vio el vehículo señalado que estaba publicado en Market place de Facebook en \$7.000.000 y lo compró en \$6.500.000, que pagó en efectivo, porque estaba chocado más la grúa porque lo tuvo que llevar a Rancagua.

Dijo que el vendedor se llamaba Carlos, y el vehículo estaba a nombre del hijo, que se llamaba Bastián, quien firmó el contrato en la Notaría, pero le entregó el dinero en efectivo a Carlos. Reconoció el certificado de inscripción a su nombre, que fue acompañado como documento 417.

Manifestó el testigo que pasaron como 3 o 4 meses, y llegaron los carabineros, quienes le dijeron que venían con una orden de fiscalía y que necesitaban revisar el vehículo, a lo que él accedió. Acotó que lo revisaron en su casa, y determinaron que tenía encargo por robo, entonces, le sacaron las placas patentes y se lo llevaron.

Contó que hace años tiene una empresa de eventos y producciones, por lo que sacó el dinero de su capital para comprar el vehículo y una vez que lo incautaron, le dijeron que se haría cargo fiscalía y que él no podía hacer nada. Añadió que le dolió como cualquier persona que haya perdido su capital.

En OMP 727, reconoció el vehículo que compró en la fotografía que se le exhibió; en OMP 26, la imagen de la solicitud de 1ª inscripción y el documento 770, correspondiente a la factura electrónica que tuvo en su poder.

Los demás documentos fundantes de la 1ª inscripción fueron acompañados en la documental 770.

Por otra parte, en relación con el delito base de la receptación, además, se incorporó el documento 916, correspondiente al encargo policial y certificado de inscripción y anotaciones vigentes del mismo vehículo con la patente original LFRS.98, a nombre del propietario y víctima, Claudio Calderón Severino, quien compareció al juicio y dio su testimonio acerca de la sustracción de su vehículo, corroborado con la declaración del funcionario de Carabineros que recibió la denuncia; todo lo cual permitió establecer que este sufrió el robo de su vehículo en la vía pública, el día 14 de febrero de 2020. Encargo que fuera solucionado el 27 de agosto de 2020.

Conforme a la prueba rendida, en los delitos de receptación y estafa que quedaron establecidos, a lo menos, tuvo participación Yerko Silva Toro, en la medida que el solicitante de 1ª inscripción fue Leónidas Hernández Concha, testaferro de la asociación, reclutado por Juan Navarrete Vásquez, de quien tenía una imagen de la cédula de identidad en su celular (OMP 115).

Además, Yerko Silva mantenía imágenes de la solicitud de 1ª inscripción, formulario 88 para el pago del impuesto verde y las placas patentes en su teléfono celular (OMP 130).

48.- St. Wg. Kia modelo Sportage color azul mercurio, año 2020, patente **LRCH.64**, reinscrito con la factura N°102 de Comercial Gildemeister SPA, de fecha **4 de febrero de 2020**, fue solicitante **Marcos Supanta Aguilera** y adquirente Luis Ayancán Almonacid.

Este vehículo fue vendido a Josué Marcel Díaz Meléndez en la suma de \$12.150.000.

El afectado declaró en juicio que en julio de 2020 comenzó a buscar por varios sitios de internet un kia Sportage, y encontró el vehículo referido en Market place en Facebook, y se contactó con la persona que lo publicó.

Indicó que el 29 o 30 de julio se juntaron, revisó el vehículo, era relativamente nuevo y estaba en muy buenas condiciones, verificó la patente y los documentos, como un simple usuario pensó que estaba todo normal, quedaron en un precio que estaba dentro de los estándares del mercado.

Fue así como los primeros días de agosto de 2020, hicieron la transferencia en la Notaría, con la misma persona con la que se contactó y le mostró el auto, y ese mismo día fueron al Banco Santander, donde le pagó al vendedor, que le pidió que fuera un depósito en efectivo en una cuenta específica. El testigo señaló que tenía el dinero en su cuenta por seguridad, no quería andar con el dinero en efectivo, entonces, la propuesta del vendedor fue que hiciera un cheque para cobrarlo en dinero en efectivo y al mismo tiempo depositar en una cuenta de una empresa que el vendedor le dijo que era su empresa, por lo que no vio nada extraño y así lo hizo.

Dijo el testigo pagó \$12.500.000, que para la fecha, no había nada extraño en el valor. El año de fabricación era 2020 y tenía alrededor de 8.000 kms, por el año le pareció raro, pero quiso creer.

Manifestó que en septiembre de 2020, casi un mes después de la compra lo llamó personal de Carabineros a su teléfono personal, informándole que el auto tenía un problema y le dieron una dirección para que se presentara y dos días después llegó la PDI, a su domicilio, y le dijeron que tenía que llevar el auto al cuartel de Santiago explicándole que el auto tenía un problema de clonación, él asustado concurrió al cuartel. Añadió que después de que se hicieron los peritajes, le corroboraron que el vehículo tenía los números adulterados y prestó declaración, en los mismos términos. Acotó que el vehículo quedó en la unidad de la PDI de Independencia y entregó toda la documentación de éste.

El testigo reconoció imágenes de conversaciones de whatsapp con el vendedor en OMP 188, y en OMP 189, del cheque que emitió a su nombre por \$12.150.000 de 5 de agosto de 2020, del Banco Santander, para pagar el precio del vehículo.

Puntualizó que cuando esto ocurrió sintió mucha frustración pues se esforzó mucho para compararlo, no lo podía creer sentía mucha impotencia.

Se acompañaron en la documental 767 y 423, los documentos fundantes de la 1ª inscripción y el certificado de inscripción del vehículo.

Por otra parte, en relación con el delito base de la receptación, además, se incorporó el documento 904, correspondiente al encargo policial y certificado de inscripción y anotaciones vigentes del mismo vehículo con la patente original LBWL.64, a nombre de la propietaria y víctima, Jessica Ramírez Veliz, quien compareció al juicio y dio su testimonio acerca de la sustracción de su vehículo; todo lo cual permitió establecer que esta sufrió el robo de su vehículo mientras se encontraba aparcado en un estacionamiento público, el día 14 de febrero de 2020.

Conforme a la prueba rendida, en los delitos de receptación y estafa que quedaron establecidos, a lo menos, tuvo participación Yerko Silva Toro, en la medida que el solicitante de 1ª inscripción fue Marcos Supanta Aguilera, testaferro de la asociación, reclutado por Juan Navarrete Vásquez, de quien tenía una imagen de la cédula de identidad en su celular (OMP 125).

Además, Yerko Silva mantenía imágenes de la factura y formulario 88 para el pago del impuesto verde del vehículo en cuestión, en su teléfono celular (OMP 156.17 y 18).

49.- Jeep Mahindra modelo Scorpio, color blanco, año 2020, patente LPHD.24, el que fue reinscrito con la factura N°109 de Comercial Gildemeister SPA de 6 de febrero de 2020, en que fue solicitante, Albano Silva Toro y el primer adquirente y víctima estafada, José Zenón Sepúlveda Bustamante.

Este vehículo fue vendido a José Zenón Sepúlveda Bustamante, en la suma de \$10.000.000.

El afectado compareció al juicio y declaró que en el año 2020 su hija Solange Sepúlveda vio en yapo el vehículo indicado, que les serviría para trabajar porque tenían un almacén y estaba publicada en \$10.000.000.

Refirió que el sujeto que vendió el vehículo, les dijo que era abogado y andaba bien vestido, e hizo todos los trámites para inscribir la camioneta, solo le pidió su cédula de identidad, en la oficina del Registro Civil, donde les dijo que lo esperaran.

Respecto del pago del precio, ellos le dijeron que podían transferirle, pero este sujeto dijo que tenía mala la tarjeta, entonces, le pagaron \$10.000.000 en efectivo y les entregó dos llaves. Agregó que este sujeto le entregó la factura y las placas patentes y el padrón le llegó al domicilio.

Indicó que pidió un préstamo en la Caja Los Andes de entre 6 o 7 millones y con 10% de la AFP juntaron el dinero, actualmente todavía está pagando el préstamo.

Contó que pasaron unos dos años, cuando le avisaron que tenía que presentarse en la PDI por la camioneta, le hicieron peritajes y le dijeron que era robada.

En OMP 32, reconoció la camioneta que compró y que le incautó la PDI.

En el mismo sentido, depuso en el juicio Solange Sepúlveda, hija del testigo anterior, y corroboró en todas sus partes su declaración. Agregó que el sujeto siempre se presentó solo, dijo que era abogado y que se llamaba Albano Silva. También refirió que cuando vio el vehículo, estaba sin patentes, pero cuando lo fue a comprar sí las tenía y les entregó los papeles de este. Por último, añadió que la primera inscripción estaba a nombre de Albano Silva.

El comisario Daniel La Regla, encargado de las diligencias investigativas respecto de este vehículo, declaró que concurrieron al domicilio y se entrevistaron con la hija, quien señaló que ella vio por internet este vehículo que se ofrecía sin patentes, contactó a la persona que lo publicaba de nombre Albano, se juntaron cerca del río Mapocho en el mercado central para verlo, estaba en buen estado, nuevo y las placas en proceso de tramitación. Dijo que Albano se presentó como abogado, éste tenía como 40 años, tez blanca, pelo color castaño, y se comprometía a entregar las placas patentes.

El testigo La Regla manifestó que se trasladó el auto a la brigada de robos, donde fue sometido a peritaje que arrojó que el número de chasis estaba adulterado, no así el número de motor, y que tenía encargo policial por robo.

Agregó que en su declaración José Sepúlveda describió al vendedor de nombre Albano, con las mismas características, se hizo pasar por abogado y en el Registro Civil e hicieron el traspaso del vehículo a su nombre.

El comisario hizo hincapié en que las descripciones físicas entregadas por las víctimas, coincidían con las de Albano Silva y que la víctima del robo, con la cual se contactaron, puso la denuncia por robo en bienes nacionales de uso público, porque dejó su auto estacionado afuera de su domicilio, en la calle Los Arrayanes, comuna de Lo Prado, que quedaba cerca del domicilio de Camilo Sandoval.

En OMP 32, y documentos 11 y 436, se incorporaron los documentos fundantes de la 1ª inscripción del vehículo y el certificado de inscripción a nombre de la víctima.

Por otra parte, en relación con el delito base de la receptación, además, se incorporó el documento 298, correspondiente al encargo policial y certificado de inscripción y anotaciones vigentes del mismo vehículo con la patente original LZJV.17, a nombre de la propietaria y víctima, Leslie Carol Córdova Vega, que permitieron establecer que esta sufrió el robo de su vehículo mientras se encontraba estacionado en la vía pública, el día 19 de enero de 2020.

Conforme a la prueba rendida, en los delitos de receptación y estafa que quedaron establecidos tuvieron participación Yerko Silva Toro y su brazo operativo Albano Silva Toro, quien fuera el solicitante de 1ª inscripción, en este caso, y además las víctimas coincidieron en describirlo físicamente con características similares a las propias y lo identificaron por su nombre, al referirse al vendedor del vehículo. Y a mayor abundar, Yerko Silva mantenía imágenes de dos facturas respecto del móvil, una de ellas la N°109, y el formulario 88 para el pago del impuesto verde en su teléfono celular (OMP 156.19 y 20 y 156.27 y 28).

50.- Automóvil Hyundai Grand I10 color blanco, año 2020, patente **LVGC.77**, que fue reinscrito con la factura N°110 de Comercial Gildemeister SPA, de fecha **16 de febrero de 2020**, en que fue solicitante, **Marcos Supanta Aguilera** y adquirente, **Sindy Arancibia Muñoz**.

Este vehículo fue vendido a Carlos Alberto Cartes Fernández, en la suma de \$6.200.000.

Con respecto a las diligencias efectuadas en relación con este vehículo, el Sargento Segundo, Rodrigo Muñoz Pantoja, indicó que el 6 de noviembre de 2020, concurrieron a un domicilio de la comuna de La Florida, donde se encontraba el vehículo en cuestión y se entrevistaron con el propietario. Dijo que este manifestó que había encontrado el vehículo en Chile Autos publicado a \$6.200.000, por lo que se contactó por whatsapp con el vendedor, que era un hombre, y el día 27 de julio del mismo año se hizo la transferencia en una Notaría de La Florida.

El testigo refirió dio su autorización para revisar el chasis y motor, y al verificar las placas patentes, se percataron que en la parte trasera, desde donde se sacó la placa LVGC.77, se notaba otra patente en el polvo que mantenía dicha zona, y correspondía a la LRLJ.59, la cual mantenía encargo vigente por robo con intimidación de fecha 27 de febrero del año 2020.

El testigo dio cuenta que en el SEBV se hizo la pericia química y en el sitio del suceso la revisión física técnica, que realizó él, describiendo el vehículo en las fotografías incorporadas en OMP 657. El perito químico Eduardo Vásquez declaró en juicio que se determinó la verdadera identidad del vehículo asociada a la patente LRLJ.59

Exhibida la evidencia material 282, el testigo reconoció las placas patentes que portaba y los documentos del vehículo que fueron levantadas el día del procedimiento, además, del certificado de inscripción a nombre de Carlos Alberto Cartes Fernández, los documentos fundantes de la 1ª inscripción y el contrato de compraventa.

Se acompañó el certificado de inscripción a nombre de la víctima en la documental 422.

Por otra parte, en relación con el delito base de la receptación, además, se incorporaron los documentos 917 y 434, correspondientes al encargo policial y certificado de inscripción y anotaciones vigentes del mismo vehículo con la patente original LRLJ.59, a nombre del propietario y víctima, Alvis José Díaz Valdés, que permitieron establecer que este sufrió el robo con intimidación de su vehículo, el día 27 de febrero de 2020. Encargo que fuera solucionado el 7 de octubre de 2020.

Conforme a la prueba rendida, en los delitos de receptación y estafa que quedaron establecidos tuvo participación, a lo menos, Yerko Silva Toro, en la medida que fueron solicitante de 1ª inscripción y adquirente, en este caso, dos testaferros de la asociación, uno de ellos reclutado por Juan Navarrete Vásquez, y ambos partícipes de otras reinscripciones de vehículos robados.

Además, Yerko Silva mantenía imágenes tanto del vehículo (OMP 27) como de las cédulas de identidad de aquellos en su celular (Marcos Supanta Aguilera, en OMP 125 y Sindy Arancibia Muñoz en OMP 123).

51.- St. Wg. Peugeot modelo 2008, de color rojo, año 2020, patente LXVS.35, el que fue reinscrito con la factura N° 111 de Comercial Gildemeister SPA de fecha **19 de febrero 2020**, fue solicitante y adquirente Jordan Villalobos Bastías.

Tatiana Arana y Jordan Villalobos.

Este vehículo fue vendido a Jorge Rodríguez Valderrama en la suma de \$9.250.000.

El afectado declaró en estrados que compró encontró en Yapo el vehículo señalado, contactó a la persona que aparecía con un número de teléfono y se reunieron cerca de la Municipalidad de Quilicura, lugar donde revisó el vehículo y lo probó, además, verificó que la documentación correspondía con la placa patente que tenía el vehículo y como le gustó acordaron reunirse al día siguiente para realizar su compra.

Indicó que esta persona era una mujer de nombre Antonia Bastías y le comentó que el vehículo estaba a nombre de su hijo y que lo vendía, porque tenían un pub restaurante y por el tema de la pandemia estaban pasando por un aprieto económico. Luego, comentó que en su casa revisó el Autofact y vio unas multas de tránsito, entonces, tomó contacto con Antonia Bastías, y llegaron al acuerdo de la rebaja del precio.

Relató que al día siguiente, se reunieron cerca de la Municipalidad y concurre a un Banco de Chile donde sacó el dinero para pagar e hicieron la transferencia en una Notaría, donde se encontraba su hijo, Jordan Villalobos.

Dijo que el precio fue de \$9.250.000 que entregó en dinero en efectivo, le entregó una sola llave y le argumentó que la copia la tenía en Casablanca y que después se la iban a entregar, pero no le contestó más.

Indicó que pasaron como dos semanas cuando lo contactó la PDI y le informaron que el vehículo estaba con encargo y que necesitaban hacer peritajes para ver si el vehículo estaba clonado o no, entonces, accedió y fue al día siguiente. Después se enteró que estaban adulterados los números de motor y chasis y que las placas patentes no correspondían al número real, por ello, el vehículo quedó en poder de la PDI y entregó la documentación.

Puntualizó que le exhibieron sets fotográficos y reconoció a la mujer y al niño que, supuestamente, era su hijo. En este punto, la inspectora Raquel Forero, declaró que la víctima reconoció a la mujer que dijo llamarse Antonia Bastías que era Tatiana Arana Espinoza y a su hijo, como Jordan Villalobos.

Agregó que en ese momento no lo podía creer, porque había perdido el dinero que le costó como familia reunir, además era el automóvil en que su señora transportaba a sus hijos al colegio todos los días, porque ellos vivían en la pre-cordillera.

En OMP 383, reconoció la fotografía que aparecía en Yapo del vehículo que compró.

Concordando con el atestado anterior, la inspectora Raquel Forero, declaró que tomaron contacto con el afectado, le solicitaron que se presentara en la unidad policial y accedió a que se le realizara un peritaje que arrojó que los números identificatorios de su vehículo se encontraban adulterados. Pese al peritaje realizado al automóvil, no se logró obtener la verdadera identidad de éste, por lo que la testigo mencionó que se trasladó a una automotora donde le hicieron un escáner y arrojó que la patente real era LGBS.99, la que tenía encargo vigente.

Hizo hincapié en que dentro del proceso investigativo se logró determinar, que imágenes de este vehículo con la patente original LGBS.99, se encontraban en el celular de Yerko Silva Toro. Recomendando dichas imágenes que fueron exhibidas en OMP 131. También reconoció las conversaciones que tuvo el afectado con la vendedora por whatsapp, en OMP 185.

Además, se incorporaron los documentos fundantes de la 1ª inscripción en la documental 773 y el certificado de inscripción a nombre de la víctima como documento 428.

Por otra parte, en relación con el delito base de la receptación, además, se incorporó el documento 903, correspondiente al encargo policial y certificado de inscripción y anotaciones vigentes del mismo vehículo con la patente original LGBS.99, a nombre del propietario Rubén García Cuellar, siendo la denunciante y víctima su hija Estefany García Estay, quien dio su testimonio en el juicio acerca de las circunstancias de la sustracción del móvil, corroborado por el carabinero Javier Cajales Cid que recibió la respectiva denuncia; todo lo cual permitió establecer que esta sufrió el robo con intimidación del vehículo, el día 17 de febrero de 2020.

Conforme a la prueba rendida, en los delitos de receptación y estafa que quedaron establecidos tuvo participación, Yerko Silva Toro y su brazo operativo y persona de confianza, Tatiana Arana Espinoza, la que fue reconocida por la víctima como quien estuvo a cargo de la venta, haciéndose llamar Antonia Bastías.

Además, Yerko Silva mantenía imágenes y videos del mismo vehículo con su patente original en su celular (video WA0103 y fotografías en OMP 131)

52.- St. Wg. Nissan modelo Qashqai color blanco, año 2019, patente **LPHB.53**, que fue reinscrito con una factura de Automotriz Guillermo Morales SPA, en que el solicitante fue Jean Carlos Valenzuela Fuentes y el adquirente, Sergio Márquez Cordeira.

Este vehículo fue fiscalizado cuando David Millalén Llancao estaba a bordo como conductor, por lo que no se alcanzó a vender a un tercero o víctima estafada.

En los considerandos anteriores, a propósito de los delitos atribuidos al acusado Millalén Llancao, con la prueba analizada se acreditó, más allá de toda duda razonable, que en el procedimiento de 23 de enero de 2020, fue detenido Millalén e incautado el vehículo, por el delito de receptación de vehículo motorizado flagrante, en el sector de Avda. Brasil comuna de Santiago Centro. Se incautaron, además, documentos de Juan Navarrete Vásquez y la escritura de Comercial Gildemeister Spa. Y se consideró que los

hechos establecidos constituían efectivamente el delito de receptación de vehículo motorizado y que en este tuvo participación en calidad de autor Millalén Llancao.

Por otra parte, en relación con el delito base de la receptación, además, se incorporaron los documentos 942 y 779, correspondientes al encargo policial y certificado de inscripción y anotaciones vigentes del mismo vehículo con la patente original KYDV.97, a nombre del propietario y víctima Hosmer José García Marcano, quien dio su testimonio en el juicio acerca de las circunstancias de la sustracción del móvil; todo lo cual permitió establecer que este sufrió el robo con intimidación del vehículo, el día 16 de diciembre febrero de 2020.

Conforme a lo señalado, en el delito de receptación, además, tuvieron participación, Yerko Silva Toro y su brazo operativo y persona de confianza, Juan Navarrete Vásquez, en la medida que este tenía bajo su custodia el móvil que le pasó a Millalén para que lo fuera a exhibir a un interesado.

53.- Automóvil marca Porsche color plateado con techo negro, patente original **GXP.D.55**, el cual fue encontrado en el estacionamiento del restaurante “Parrilla del Gaucho”, tapado con una lona y sin sus placas patentes, en poder de Albano Silva Toro, el cual tenía encargo por robo, denuncia efectuada por Patricio Brizuela Urrea.

Respecto del hallazgo del vehículo, en el contexto de la diligencia de entrada y registro a la “Parrilla del Gaucho”, los oficiales de la PDI Carlos Riveros y Cristián Álvarez, estuvieron contestes en señalar que encontraron un vehículo de alta gama, marca Porsche, sin sus placas patentes, y se realizaron las diligencias para establecer la historia de este y se identificó al propietario, quien prestó declaración respecto del motivo por el cual se encontraba el vehículo en ese lugar.

Riveros dijo que se trasladó el vehículo a dependencias de la PDI, mediante grúa pues no tenían la llave.

Cristian Álvarez, con mayor detalle, relató haber mirado por una ventana del segundo piso y vio un vehículo tapado al costado del edificio y que colindaba con la reja del local. Sostuvo que era extraño el lugar en que estaba el vehículo, porque estaba totalmente tapado y había una reja que estaba amarrada por lo que el vehículo no se visualizaba desde el exterior. Indicó que lo destaparon y vieron que era un Porsche, modelo Boxster, de color gris, con techo de lona, que no tenía sus placas patentes puestas.

Agregó que revisando el vehículo, en la parte inferior derecha del parabrisas tenía el VIN, el que se consultó y se obtuvo la patente, la que tenía un encargo por robo. Explicó que necesitaban las llaves del vehículo y que colegas de su unidad contactaron al propietario y llevaron una llave para abrirlo y subirlo a la grúa para realizar el peritaje.

En este punto, el perito Patricio Vera declaró que perició el vehículo en cuestión que se encontraba sin patente y concluyó que ninguna de las series estaban adulteradas, asociado a la patente GXP.D.55.

En relación con este vehículo, prestó testimonio Felipe Novoa Díaz, Cabo 2do de Carabineros, quien reportó que el 15 de julio de 2020, acogió una denuncia por robo con intimidación, el denunciante era Patricio Brizuela Urrea, el que expuso que ese día, como a las 19:00 hrs., en circunstancias que se desplazaba en su auto Porsche, Boxter, año 2015, de color gris, patente **GXPD.55**, por camino Lonquén, al llegar al km 4, fue interceptado por un auto blanco del cual bajaron 4 sujetos con rostro cubierto, dos con armas de fuego, tipo pistolas, con las cuales lo intimidaron y para resguardar su integridad les hizo entrega del vehículo y estos se dieron a la fugar. El auto fue avaluado en \$65.000.000.

Aseveró que él no realizó el encargo, porque lo hacen los suboficiales de guardia, en este caso, Paulina Campos Burgos, en julio de 2020, era funcionaria de la 51ª Comisaría de Pedro Aguirre Cerda.

Se incorporó el documento 952, que correspondía al encargo policial SEBV_202007_2572 de fecha 15.07.2020, vehículo palca patente GXPD.55. Y al certificado de inscripción a nombre del propietario Patricio Brizuela Urrea.

Conforme a las pruebas rendidas, se estableció que Albano Silva Toro tenía bajo su poder un vehículo de alta gama, con encargo policial vigente por el delito de robo con intimidación, y por las circunstancias de su hallazgo y en la forma en que permanecía –completamente tapado con una lona y sin placas patentes-, es factible colegir que conocía o no podía menos que conocer su origen ilícito. Además, su explicación de que era de un amigo de nombre Patricio que se lo dejó para que lo guardara y sin las llaves, no parece plausible y carece de sustento probatorio.

54.- St. Wg. Kia modelo Sportage de color plateado, patente LYDH.25, que fue reinscrito con una factura de la Automotriz Guillermo Morales SPA, en que fue solicitante y adquirente, Marcelo Ortega González.

Este vehículo fue adquirido por Marcelo Pastén Espinoza, con fecha 19 de febrero de 2020.

El Suboficial de SEBV de Coquimbo, Francisco Cárdenas Calderón, concurrió al domicilio de la víctima y se entrevistó con doña María Graciela, a quien le exhibió la orden de investigar, que decía relación con la revisión del vehículo señalado.

El testigo expuso que doña María Graciela señaló que el vehículo era de su esposo Marcelo, que lo había comprado en febrero en Santiago, y autorizó a que se revisara. Agregó que al revisar el motor y chasis se dio cuenta que tenían los números adulterados. Reportó que no se logró obtener la serie original del motor, pero sí la del chasis, asociada a la PPU LLTS.76, y que mantenía un encargo vigente por el delito de robo.

Informó que el vehículo fue incautado y la señora entregó los documentos del vehículo.

El testigo reconoció el vehículo y el proceso de las pericias en la fotografías de OMP N° 685. Los documentos del vehículo se incorporaron como EM 279, y el certificado de inscripción a nombre de Marcelo Pastén Espinoza como documento 431.

Por otra parte, en relación con el delito base de la receptación, además, se incorporó el documento 913, correspondiente al encargo policial y certificado de inscripción y anotaciones vigentes del mismo vehículo con la patente original LLTS.76, a nombre de la propietaria y víctima, Rosa María Valencia Torres, la que declaró en juicio dando cuenta de la sustracción de su vehículo, corroborado con el testimonio del carabinero Pablo Escobedo que recibió la respectiva denuncia; todo lo cual permitió establecer que esta sufrió el robo de su vehículo en la vía pública, el día 11 de enero de 2020.

Conforme a la prueba rendida, en los delitos de receptación y estafa que quedaron establecidos tuvo participación, a lo menos, Yerko Silva Toro, ya que éste consultó la patente LYDH.25 en la página del Registro Civil, la que había salido “Aceptada”, quedando registro en su celular (OMP 134).

55.- St. Wg. Nissan modelo New Qashqai Sense, color blanco, patente que portaba **LDHP.37** con encargo por hurto, el que fue incautado y detenido Camilo Sandoval Godoy al interior del mismo como conductor, por el delito flagrante de receptación, en el procedimiento llevado a cabo el 22 de abril de 2019.

El cabo segundo de Carabineros, Elvis Isla Flores, declaró que el día 22 de abril de 2019, como a las 14:00, un compañero de la unidad, llamó por teléfono indicando que iba siguiendo a un auto con encargo por robo, marca Kia Carnival, color negro. Indicó que este iba con otro vehículo al lado, un Nissan Qashqai blanco. Agregó que se lograron acercar al que mantenía encargo por robo y se detuvo al conductor. Con respecto al vehículo Nissan, dijo que al conductor se le hizo un control preventivo, y advirtieron que el número de patente no coincidía con el número de chasis del parabrisas.

Agregó que al controlar al conductor del Nissan, éste tenía un celular en sus manos, salió y lo dejó en el asiento y le pidió que le mostrara y tenía una imagen de la Kia Carnival, entonces, se detuvo al conductor y al copiloto de la Qashqai.

Detalló que el Nissan lo conducía Camilo Sandoval Godoy, quien iba con Brandon Muñoz Soto.

Precisó que consultaron a la central, y la patente no tenía encargo por robo, pero el número de chasis sí. El conductor de la Kia con encargo por robo, pasó a control detención, pero los otros dos quedaron apercebidos y el celular fue incautado bajo cadena de custodia.

En OMP 458, reconoció dos fotografías del vehículo.

En el contra examen, explicó que el compañero que le avisó por teléfono estaba de vacaciones e iba en su vehículo particular, el Kia hizo una maniobra a exceso de velocidad y casi lo choca y por eso comenzó a seguirlo. Llamó a la central e hizo la consulta, verificándose que tenía encargo por robo. Por eso su colega los llamó a ellos al teléfono del cuadrante, informándoles que iba en seguimiento de un auto robado. Aclaró que su compañero les indicó que andaban los dos vehículos uno junto al otro, por eso, a la Nissan Qashqai, le hicieron un control preventivo.

Al tribunal aclaró que, en el instante en que se verificó el vehículo, se consultó la patente y el chasis, por su compañero Jara y se percataron que tenía encargo por robo el número de chasis.

En relación con la patente LDHP.37 que portaba el vehículo, depuso en el juicio, David Barahona Abarca, y señaló que el 11 de abril de 2019, fue a un supermercado en Gran Avenida, de La Cisterna, estacionando su vehículo en el subterráneo, y al regresar se percató que no estaban las palcas patentes de su Nissan Qashqai, blanco perla, año 2019. Dijo que hizo la denuncia en una comisaría y no las recuperó, por lo que tuvo que ir al Registro Civil a solicitar unas nuevas.

Con la declaración del comisario Daniel La Regla, se incorporaron fotografías y documentos asociados a este vehículo.

Respecto de las fotografías exhibidas en OMP 458, dijo que era el vehículo Nissan Qashqai color blanco perla, patente LDHP.37, el cual fue recuperado con la detención de Camilo Sandoval y sus dos compañeros de delito.

Se acompañó en la documental 143, el certificado de inscripción del vehículo patente LDHP.37-9, a nombre del propietario David Andrés Barahona Abarca. Y como documento 604, se incorporó parte denuncia de la 10° Comisaría de La Cisterna, de fecha 11 de abril de 2019, por el delito de hurto simple, respecto de dos patentes delantera y trasera LDHP.37.

También declaró el perito mecánico Patricio Vera, el que determinó que el número de chasis estaba adulterado, y no coincidía con el del adhesivo y del panel, los cuales eran originales, y consultado se obtuvo la patente original del vehículo KHCR.97-3. Corroborada la conclusión por el perito químico José Ascencio, que estableció que las series de chasis y motor estaban adulteradas, y con el revenido químico se obtuvieron las originales asociadas a la patente KHCR.97, con encargo por robo.

Por otra parte, en relación con el delito base de la receptación, además, se incorporaron los documentos 605 y 613, correspondientes al encargo policial y certificado de inscripción y anotaciones vigentes del mismo vehículo con la patente original KHCR-97, a nombre del propietario y víctima, Miguel Concha Matamala, corroborado por el funcionario de Carabineros que recibió la respectiva denuncia; todo lo cual, permitió establecer que este sufrió el robo con intimidación de su vehículo en la vía pública, el día 9 de abril de 2019 y recuperado el 23 de abril de 2019.

Conforme a las pruebas rendidas, se estableció que Camilo Sandoval Godoy tenía bajo su poder un vehículo, con encargo policial vigente por el delito de robo con intimidación, que portaba una placa patente que había sustraído a otro de idénticas características, generando vehículos “gemeleados”. Además, las circunstancias en que fue sorprendido por funcionarios de Carabineros, conduciendo junto a otro vehículo con encargo por robo, lo que debe necesariamente vincularse a los audios de interceptaciones telefónicas, que daban cuenta que su detención causó una alerta a otros miembros de la asociación, es factible colegir que conocía o no podía menos que conocer su origen ilícito.

Finalmente, no está demás señalar, que el defensor de Camilo Sandoval, en el alegato de clausura, cambió la tesis inicial expuesta en la apertura, en el sentido que se reconocía únicamente la comisión de este

delito de receptación, lo que resultó poco serio al negar la existencia misma del hecho punible y desligarse de su responsabilidad, ya admitida al iniciarse el juicio.

II.- Vehículos vinculados con la asociación ilícita sin prueba acerca de su verdadera identidad.

Se trata de vehículos que fueron reinscritos y modificados por la organización, pero que se ignoró si existían materialmente y, en algunos casos, existiendo físicamente porque fueron incluso vendidos a terceros de buena fe, no se rindió prueba acerca de la verdadera identidad de los vehículos ni de su origen, concretamente, si fueron objeto de algún delito.

En razón de ello y de lo que se adicionará, de ser necesario, en cada caso en particular, no es factible tener por acreditado ningún delito en relación con los siguientes vehículos:

1) La camioneta marca Kia modelo Frontier, patente **JRSR.26**, reinscrita con factura N°34 de CV de Automóviles Orión Ltda. de 8 de junio de 2017, en que fue solicitante **Camilo Sandoval Godoy** y adquirente **Carlos Gómez Zúñiga**, en que la copia de la solicitud de 1a inscripción estaba en celular Ilich Chopa Aldana. A su respecto únicamente se rindió la documental 170 k) y el OMP 40. 2) Automóvil Chevrolet Sail, color rojo, patente **JRSS.55**, reinscrito con la factura N°36 de CV de Automóviles Orión Ltda. de 13 de junio de 2017, solicitante **Camilo Sandoval Godoy** y adquirente **Carlos Gómez Zúñiga**, y también la copia de solicitud de 1a inscripción estaba en el celular de Ilich Chopa. A su respecto se rindió únicamente el OMP 40 y la documental 170 l). 3) St. Wg. Chevrolet Captiva, de color gris, año 2018, patente **JRZY.69**, reinscrita con la factura N°6 de Automotora Kor SPA, de 8 de septiembre de 2017, solicitante y adquirente Felipe Andrés Luengo López, y también la copia de la factura y solicitud 1a inscripción estaban en el celular de Ilich Chopa. Se rindió el OMP 40 y documento 173 a). 4) St. Wg. marca Nissan modelo Qashqai, gris metálico, año 2019, patente **LBCY.57**, reinscrito con factura N°435 de Automotriz Portillo SPA, de 9 de enero de 2019, solicitante y adquirente, Verónica Agüero Tello, fue vendido a Eliana del Carmen Mena Fuentes y se acreditó que concurren a la venta Tatiana Arana Espinoza y Freddy Miranda Arana. Se exhibió la EM 132, el OMP 298 y el documento 714. 5) Automóvil marca Suzuki modelo Swift, color azul, año 2020, patente **LXJY.28**, reinscrito con factura N°64 de la automotora C. Hernández SPA, de fecha 5 de febrero de 2020, solicitante y adquirente, **Jesús Diego Gacitúa Candia**, este fue adquirido por Benjamín Fuchslocher Groenteman, el 24.07.2020 y la factura estaba en el celular de Yerko Silva Toro. Se acompañó el documento 792 y 416 y el OMP 156.4. 6) St. Wg. Kia Sportage, azul mercurio, año 2020, patente **LBVY.80**, reinscrito con la factura N°107 de Comercial Gildemeister SPA, de 10 de febrero de 2020, solicitante y adquirente, Héctor Manuel Iturra Lucero; fue adquirido por Víctor Gatica Pinilla, el 19.10.2020 y propietario anterior Bernardo Gallegos Martínez, adquirido el 23.02.20. La factura y el formulario 88 de la TGR estaban en el celular de Yerko Silva (OMP 156.21 y 22) y se acompañó el documento 768 y 854. 7) St. Wg. marca Hyundai modelo Tucson, gris grafito, patente **LXFS.20**, reinscrito con factura N°166 de Comercial Portillo Motors SPA, de fecha 28 de agosto de 2020 (empresa que no está comprendida en la acusación), solicitante

y adquirente John Araya Jara y la factura fue encontrada en el domicilio de Juan Navarrete Vásquez. **8)** St. Wg. Mazda CX3 año 2019, patente **KYVL.98**, fe sustraído mediante robo con intimidación a su propietario Kevin Jack Steinsapiri, encargo no solucionado a abril de 2024; y las fotos y homologación del mismo se encontraban en el celular de Camilo Sandoval Godoy. De acuerdo a OMP 96, 472, 473, y 474.2 (audios de whastapp). **9)** St. Wg. marca Jeep modelo Grand Cherokee Limited, color gris, patente **KXSS.27**, reinscrito con la factura N°389 de Automotora Bilbao SPAd fecha 5 de diciembre de 2018, solicitante, **Luis Astudillo Peña** y adquirente, la tía de este, Claudia Astudillo Pineda. Fotografías de este vehículo se encontraban en el celular de Camilo Sandoval Godoy(OMP 101). Además, se exhibieron OMP 474.2, 144 y documento 683. **10)** St. Wg. Ford modelo Explorer, color negro profundo, año 2019, patente **LFVW.14**, reinscrito con la factura N°392, de la Automotriz Nuevo Laredo SPA, de fecha 9 de abril de 2019, solicitante Christopher Rafael Veliz Reyes y adquirente Raúl Vera Pérez y las fotografías de este se encontraban en el celular de Camilo Sandoval Godoy. Se acompañaron documentos 228 y 730. **11)** St. Wg. Chevrolet modelo Tracker, color rojo, año 2019, patente **LFVW.16**, reinscrito con la factura N°393 de Automotriz Nuevo Laredo SPA, de fecha 11 de abril de 2019, solicitante Andrés Alberto Rendón Loaiza y adquirente Raúl Vera Pérez, este fue adquirido por Isabel Alejandra Marín Jorquera y las fotografías del mismo estaban en el celular de Camilo Sandoval Godoy. Se acompañaron los documentos 230 y 676. **12)** Camioneta Chevrolet New Trax, color plateado plata, año 2019, patente **LCHC.53**, reinscrito con la factura N°518 de Automotriz Portillo SPA, de fecha 4 de marzo de 2019, solicitante Claudia Astudillo Pineda (la tía de Luis Astudillo Peña “raperito”) y adquirente Agrocomercial Mardones SPA, fue adquirida por Claudio Hernán Oyarzun Vargas, con fecha 30.05.2019, según el documento 690, la cual también fue vendida por martillero Edison Cid Chavarría, mismo modus operandi que la camioneta Chevrolet Colorado vendida por Ilich Chopa Aldana. **13)** Automóvil marca Volvo modelo V40, color gris titanio, patente **JTGR.48**, inscrito con la factura N°10 de Comercializadora Full Orión Ltda. de 27 de julio de 2017, solicitante Jorge Salinas Uribe y adquirente, Carlos Latín Quezada; la copia de solicitud de 1a inscripción estaba en el celular de Ilich Chopa Aldana, quien declaró al respecto, que este vehículo no existía pues se inscribió con el fin de asegurarlo en una Compañía de seguros, y luego hacer la denuncia por robo, darlo por perdido y cobrar la indemnización. Se exhibió OMP 40 y documentos 523 y 212. **14.-** Camioneta Nissan NP 300, color blanco, año 2018, patente **KHTC.73**, inscrita con factura de Automotora Astorga SPA, en que fue adquirente Juan Castillo Mansisidoro, testaferro de la asociación, la que fue adquirida por Alan Swinburn Población en la automotora Pomeyo Carrasco, que en definitiva fue la víctima estafada. Se exhibieron OMP 702 y 292, EM 130 y 131 y se acompañaron los documentos 335 y 332.

III.- Vehículos en que la prueba fue inexistente o insuficiente para atriburles a los acusados, alguno de los delitos de receptación o estafa establecidos.

Es conveniente hacer presente que si bien, en la mayoría de los casos, se acreditó la existencia de los delitos de receptación y estafa, respecto de los vehículos que se pasarán a enunciar, lo cierto es que el único elemento incriminatorio que obra en contra de los miembros de la asociación y, en concreto, de los acusados por los delitos fines de ésta, vale decir, Yerko Silva Toro, Albano Silva Toro, Ilich Chopa Aldana y

Juan Navarrete Vásquez, estaba constituido por la factura de primera venta generada por las sociedades automotoras constituidas por la organización o bien aquellas que no creó, pero que eventualmente sus facturas podrían haber sido utilizadas.

Además, cabe señalar que la mayoría de las facturas con las que se reinscribieron estos vehículos, son de la automotora Nova Spa, que no fue creada por la asociación ilícita, por lo que, en estos casos surgen aún más dudas acerca de la vinculación con los acusados.

Por último, también es importante advertir que en unos pocos casos, no se identificó a un comprador o víctima estafada o se trató de un procedimiento de hallazgo de vehículo.

Así las cosas, el tribunal estimó que la participación de los encausados en estos delitos, no se acreditó, más allá de toda duda razonable, en atención a que el documento indicado configura una mera sospecha, pero desprovista de otros indicios o pruebas directas, que hayan permitido inferir o establecer, con el grado de convicción exigido legalmente, que los acusados efectivamente de alguna manera pudieran haber participado en los delitos que se les imputaron.

En estas condiciones se encuentran los siguientes vehículos: **1)** GYKK.56 reinscrito con la factura N°25 de CV de Automóviles Orión Ltda. de 14/04/2017, solicitante y adquirente Ítalo Castellón León, y no se identificó comprador o víctima estafada. **2)** GZTH.48 reinscrito con factura N°6 de Comercializadora Full Orión Ltda. de 30/06/2017, solicitante y adquirente Luciano González Sepúlveda. **3)** GYLH.70 reinscrito con factura N°2 de Automotora Kor SPA, de fecha 10/08/2017, solicitante y adquirente, Chris Gálvez Velásquez. **4)** HYFL.43 reinscrito con factura N°6 de Automotora Valenzuela y Arce SPA de 17/12/2017, solicitante y adquirente, Manuel Astorga Carreño. **5)** JXRD.49 reinscrito con factura N°11 de Automotora Valenzuela y Arce SPA de fecha 09/01/2018, solicitante y adquirente Daniel Alejandro Fuentes Fuentes. **6)** JXRD.74 reinscrito con factura N°29 de Automotora Nova SPA de 20/01/2018, solicitante Enzo Francescoli Sereño Lepe y adquirente, Nicolás Romero Gallardo. **7)** HYDG.53 reinscrito con la factura N°47 de Automotora Nova SPA de 06/02/2018, solicitante y adquirente Osvaldo Lagos Millar. **8)** KCFD.17 reinscrito con factura N°14 de Automotora Valenzuela y Arce SPA de 10/02/2018, solicitante y adquirente Manuel Astorga Carreño. **9)** KGFB.18 reinscrito con factura N°53 de Automotora Nova SPA de 20/02/2018, solicitante Óscar Vásquez Hernández y adquirente, Bory Orellana Canales. **10)** KBWV.94 reinscrito con factura N°81 de Automotora Nova SPA de 12/03/2018, solicitante y adquirente Luis Guillermo Soto Rojas. **11)** KHGR.40 reinscrito con factura N°95 de Automotora Nova SPA de 18/03/2018, solicitante Bernardita Ambiado y adquirente, Domingo Gómez Hevia. **12)** KDVEY-76 reinscrito con factura N°101 de Automotora Nova SPA de 12/04/2018, solicitante y adquirente, Luis Alejandro Alarcón Vidal. **13)** KJLJ.52 reinscrito con factura N° 110 de Automotora Nova SPA de 15/04/2018, solicitante y adquirente, Carol Giselle García Cáceres. **14)** KKYG.90 reinscrito con factura N°167 de Automotora Nova SPA de 09/05/2018, solicitante y adquirente Juan Pablo Pereira Osses. **15)** HYDG.43 reinscrito con factura N°178 de Automotora Nova SPA de 23/05/2018, solicitante y adquirente, Vanesa Marín Conejera. **16)** KHPC.38 reinscrito con factura N°182 de Automotora Nova SPA de

30/05/2018, solicitante y adquirente, Carlos David Astete Pereira. **17)** KLHJ.79 reinscrito con factura N°135 de Automotora Astorga SPA de 01/06/2018, solicitante y adquirente, Yonathan Elías González Valdebenito. **18)** LJFS-50 reinscrito con factura N°121 de Importadora Brunno Fritsch SPA de 05/06/2018, solicitante y adquirente, Mauricio Barbazzo Herrera. **19)** KCPT.44 reinscrito con factura N°217 de Automotora Nova SPA de 13/06/2018, solicitante y adquirente, Oscar Renato Rodríguez Silva. **20)** KGFC.33 reinscrito con factura N° 226 de Automotora Nova SPA de 18/06/2018, solicitante y adquirente Cristian Espinoza Maldonado. **21)** KPFT.53 reinscrito con factura N°238 de Automotora Nova SPA de 25/06/2018, solicitante Sebastián Díaz Salinas y adquirente, Cinthya Moraga Toledo. **22)** KGFC.48 reinscrito con factura N°239 de Automotora Nova SPA de 01/07/2018, solicitante y adquirente, Luis Navarro Águila. **23)** KKTP.99 reinscrito con factura N°290 de Automotriz Méndez Moya SPA de 06/07/2018, solicitante y adquirente, María Díaz Villaseca. **24)** KKTR.36 reinscrito con factura N°654 de Automotriz Méndez Moya SPA de 06/08/2018, solicitante Miriam Morales Fuentes y adquirente, Ramón Fuentes Iribarra. **25)** KRVV.61 reinscrito con factura N°710 de Automotriz Méndez Moya SPA de 07/08/2018, solicitante y adquirente, Luis Ayala Godoy. **26)** KVTB.46 reinscrito con factura N°385 de Automotora Bilbao SPA de 14/11/2018, solicitante y adquirente, Juan Pablo Olivares Fuentes. **27)** LCPX.13 reinscrito con factura N°404 de Automotriz Portillo SPA de 09/01/2019, solicitante y adquirente, Emmanuel Sanhueza Iturra. **28)** LBCZ-86 reinscrito con factura N° 508 de Automotriz Portillo SPA de 17/01/2019, solicitante y adquirente, Oscar Cortes Pozo. **29)** LCFR.33 reinscrito con factura N°506 de Automotriz Portillo SPA de 18/01/2019, solicitante y adquirente, Marco Antonio Henríquez Díaz. **30)** LBCZ.92 reinscrito con factura N°510 de Automotriz Portillo SPA de 22/01/2019, solicitante y adquirente, Francis Fuentes Lineros. **31)** LCXH.92 reinscrito con factura N°393 de Automotora Bilbao SPA de 19/02/2019, solicitante, Juan Valdenegro Cotaipi y adquirente, Elvira Fornes Navarrete. **32)** LDLR.97 reinscrito con factura N°394 de Automotriz Nuevo Laredo SPA de 20/03/2019, solicitante Luis Félix Barrera Peralta y adquirente, Sofía Elena Muñoz Ramírez. **33)** LCXS.73 reinscrito con factura N°108 de Importadora Brunno Fritsch SPA de 05/04/2019, solicitante y adquirente, Héctor Torres Esparza. **34)** LRBS.44 reinscrito con factura N°16 de Automotriz Guillermo Morales SPA de 03/10/2019, solicitante Pablo Mallanes Calfucura y adquirente, Marcelo Rodríguez Ordenes. **35)** LJLJ.18 reinscrito con factura N°20 de Automotriz Guillermo Morales SPA de 16/10/2019, solicitante y adquirente, Rodrigo Sepúlveda Jiménez. **36)** LJLV.73 reinscrito con factura N°29 de Automotriz Guillermo Morales SPA de 14/11/2019, solicitante y adquirente, Kevin Jacob Pérez Oviedo. **37)** LJLV.85 reinscrito con factura N°31 de Automotriz Guillermo Morales SPA de 07/12/2019, solicitante y adquirente, Christopher Luis Vásquez Díaz. **38)** LBVY.68 reinscrito con factura N°33 de Automotriz Guillermo Morales SPA de 22/12/2019, solicitante y adquirente, Patricio Oñate Hernández. **39)** LXTY.25 reinscrito con factura N°35 de Automotriz Guillermo Morales SPA de 01/01/2020, solicitante, Martina Fuentes Albornoz y adquirente, Catalina Yáñez Magaña. **40)** LCPX.63 reinscrito con factura N° 507 de Automotriz Portillo SPA de 18/01/2019, solicitante y adquirente, Carolina Gallegos Salinas.

En lo que respecta a los siguientes vehículos, se acreditó su verdadera identidad y que fueron robados, sin embargo, no se acompañaron los documentos que dieran cuenta de su reinscripción con

facturas de la asociación ilícita; sin perjuicio de que en algunos casos se indicó la nueva patente obtenida: Automóvil Hyundai Grand I10, plateado, año 2019, reinscrito con patente LGCC.49 y el primer adquirente fue Cristian Herrera Muñoz; St. Wg. Ford Explorer color blanco metal, año 2016, reinscrito con patente GKWT.23; St. Wg. Kia Sportage color rojo, año 2017, y St. Wg. Nissan Xtrail color blanco, año 2018, se desconoce la patente nueva de estos dos últimos vehículos.

Finalmente, en el caso del St. Wg. Kia modelo Sportage de color gris acero, año 2020, patente LVPD.14, que fue reinscrito con la factura N°63 de C. Hernández SPA de fecha 5 de febrero de 2020, en que fue solicitante y adquirente José Antonio Tapia Álvarez, únicamente se acompañaron dos documentos, a saber: el 791 que son los fundantes de la 1ª inscripción y el certificado de inscripción a nombre de un segundo dueño, Hans Urcillo Contreras, con fecha de adquisición el 15 de mayo de 2020. Y el 912, que es el encargo policial y certificado de inscripción de un vehículo de iguales características pero con la patente LPBH.69, de propiedad de Luis Ricardo Chávez Vásquez, quien compareció atestiguando acerca del robo de su vehículo desde un estacionamiento público, el 12 de diciembre de 2019.

Al no contarse con otros elementos que dieran cuenta de las circunstancias en que fue adquirido dicho vehículo, por el segundo dueño, y si se determinó que estaba alterado y/o su verdadera identidad, la prueba documental se consideró insuficiente para acreditar los presupuestos fácticos del delito de receptación y estafa y la participación que en ellos les pudo haber cabido a los acusados, pese a que la factura de 1ª venta mencionada estaba en el celular de Yerko Silva (OMP 156.6).

IV.- Concurso medial entre los delitos de receptación de vehículo motorizado y estafa.

Que, tal como se consignó en el veredicto, los hechos que se han dado por acreditados, dieron cuenta de un modo operandi respecto de la modificación de los vehículos robados y su reinscripción en el Registro Civil, obteniendo una nueva identidad para ser vendidos, como fin último de este proceso, en el mercado automotriz formal a terceras personas que eran estafadas. Por tal motivo, se constató, sin lugar a dudas, que por cada vehículo ilícito vendido, se configuraron, sucesiva y consecutivamente, los delitos de receptación y de estafa, el primero como un medio necesario para perpetrar el segundo.

De este modo el tribunal, conforme a la doctrina de los autores Mario Garrido Montt, Sergio Politoff y Luis Ortiz Quiroga, consideró la concurrencia de un concurso medial o ideal impropio entre los delitos de receptación y estafa, por cuanto, sin perjuicio de no existir unidad de acción entre ellos sino que acciones sucesivas que pueden separarse, ambos se encuentran conectados ideológica e irreductiblemente, conforme al plan delictual de la organización, cual era, en rigor, lucrar con la venta de vehículos robados con apariencia de licitud, existiendo, por ende, plena coincidencia entre el objeto material de uno y otro, esto es, el vehículo robado.

En otras palabras, atendido el plan criminal de la asociación ilícita, la receptación de vehículo motorizado es el medio necesario para la perpetración del delito de estafa, acorde a lo previsto en el artículo 75 del Código Penal.

Por la misma razón y, además, porque no se reúnen los requisitos jurisprudenciales y doctrinarios, deben desestimarse las alegaciones de la defensa en cuanto a una eventual concurrencia de delitos continuados de receptaciones y estafas.

Por otra parte, no está demás aclarar, respecto de lo argumentado por el Ministerio Público en la réplica de clausura, que no se está planteando que la receptación sea el objeto del engaño en la estafa, sino que es el tipo penal que constituye el instrumento o medio necesario para perpetrar el delito de estafa, de modo de haber una perfecta identificación entre el objeto material de las receptaciones y de las estafas, en todos los casos, que era precisamente el vehículo robado y posteriormente adulterado para aparentar licitud.

Evidentemente que al engaño también contribuían los documentos adulterados simultáneamente con los números en el vehículo, principiando por la factura de 1ª venta que servía de base para la reinscripción y que contenía información falsa, sumado a los relatos entregados por quienes exhibían y vendían finalmente el vehículo.

La adquisición de vehículos robados y su tenencia a efectos de su custodia y modificación física con fines de ser vendidos pero con otra identidad con apariencia legal, constituyen evidentemente el delito de receptación, sin estas acciones y maniobras previas no habría estafas, porque la comercialización y las ventas no recaían abiertamente en vehículos robados a personas que a su vez sabían este origen ilícito, en cuyo caso se habría agotado el delito de receptación.

Además, cabe considerar que hubo casos de vehículos robados y adulterados, que siendo objeto de receptación por parte de los miembros de la asociación, fueron abandonados y/o incautados por los agentes policiales antes de que fueran vendidos fraudulentamente, por lo que, en esos eventos no hubo estafa, reforzando la idea que eran delitos separados pero la estafa dependía de la receptación a través del vínculo ideológico de medido a fin conforme al plan delictual de la asociación ilícita.

IV.- RESPECTO DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS.

DÉCIMO CUARTO: En cuanto al delito atribuido a Yerko Silva Toro y Albano Silva Toro. Valoración de la prueba y hechos acreditados.

Que, como se señaló en el veredicto condenatorio, las importantes ganancias en dinero y bienes obtenidas de las ventas fraudulentas y actividades delictivas propias de la asociación, que de acuerdo a la prueba rendida y los hechos asentados en el considerando anterior, a lo menos, ascendieron a la suma de \$600.000.000, durante el tiempo en que desarrollaron sus operaciones, fueron objeto de diferentes maniobras ejecutadas por el líder **Yerko Silva Toro en conjunto con su hermano Albano Silva Toro**, con el propósito de ocultar o disimular su origen ilícito, logrando así dissociar el dinero de su fuente ilícita e introducirlo al

sistema económico formal mediante actividades comerciales lícitas, la adquisición de bienes y la realización de inversiones que no tenían justificación en función de los ingresos formales y patrimonio que registraban los acusados, en los organismos competentes.

Las maniobras de lavado de activos llevadas a cabo por los acusados serán enumeradas y descritas a continuación:

En primer lugar, el uso de cuentas bancarias de terceros (uso de testaferros) por parte de Yerko Silva Toro, específicamente, de familiares (su hermana Daniela Espinoza Toro y su madre Jeannette Toro Brenet), su pareja Claudia Sandoval Godoy y de otros, como Jesús Gacitúa Candia, entre las cuales se realizaban frecuentes traspasos de diversas cantidades así como remesas de éstas hacia otras cuentas, disimulando el origen ilícito de los fondos gestionados a través de ellas. Lo anterior, debido a que los dineros que ingresaban a dichas cuentas, provenían de los delitos fines de la asociación ilícita, cuestión reconocida por el propio Yerko Silva y las titulares de las cuentas. En el caso de Claudia Sandoval, quien no realizaba ningún trabajo o actividad remunerada y doña Jeannette Toro, quien tampoco tenía ingresos para justificar las elevadas sumas que recibía en su cuenta bancaria. En la misma situación estaba su hija y hermana de Yerko, Daniela Espinoza Toro, quien recibía dineros de origen ilícito y los traspasaba a la cuenta de su madre y distribuía a terceros. Ambas plenamente conscientes que provenían de ilícitos perpetrados por Yerko Silva quien los dirigía desde el interior de la cárcel.

De este modo, Yerko declaró que tuvo una relación con Claudia Sandoval desde el año 2016 hasta abril o mayo de 2019, y ella hacía lo que él que le pedía, le guardaba y pasaba plata, aunque sabía que la plata no venía de un buen lado y agregó que, a cambio, le compró a crédito un vehículo en \$14.000.000 o \$15.000.000 en 48 cuotas de \$260.000, además, le daba una pensión para los gastos de su hija de \$300.000 y pagaba sus gastos propios, por un suma total de \$800.000, que provenía de la plata que obtenía de la venta de los vehículos blanqueados.

Cabe recordar que Yerko al prestar declaración reconoció que él ocupaba la cuenta de Claudia Sandoval para transferir dinero a terceros, ella le enviaba la clave dinámica y él transfería, por lo que todas las transferencias que fueron exhibidas en la audiencia (documento 445, información de enero de 2016 a marzo de 2019 de cuenta RUT 16.666.181 adjuntando cartolas) las hizo él, aunque Claudia también usaba la cuenta para hacer compras o pagos, pero le avisaba y él le daba el visto bueno. Acotó que como ella no trabajaba, la plata que estaba en esa cuenta era de él y también había gente que le depositaba a él en esa cuenta.

La fiscal hizo presente que el monto de las transferencias entre abril de 2017 a noviembre de 2018, fue de \$3.872.945 y el acusado señaló que él no sacó la cuenta pero supone que sí.

Respecto de las cuentas de su hermana Daniela Espinoza y su madre Jeannette Toro, dijo que le transfería dinero proveniente de la venta de los vehículos blanqueados a su hermana y ella a su vez le transfería a Claudia Sandoval. Esa plata a veces llegaba donde Claudia que se la guardaba y la pasaba a buscar Daniela y también había plata en efectivo en la casa de su mamá, pero ellas nunca consultaron por el origen de esta. Además, reconoció que en ocasiones le transfería dinero a su madre pero, por lo general, ella recibía dinero que él le transfería a su hermana. Agregó, en relación la imagen de un cuaderno con anotaciones que se le exhibe, que eran las cuentas que hacía Daniela de la plata que le mandaba y de lo había gastado. Dijo que Daniela también le hacía transferencias a la cuenta de Jesús Gacitúa Candia para sus compras.

En relación con esa cuenta número 700184335 súper digital del Banco Santander (OMP 9 que era la aplicación contenida en su celular), expuso que Jesús Gacitúa Candia abrió dicha cuenta que él usaba, quien era un testaferro que reclutó Juan Navarrete. Señaló que los movimientos que se hicieron en la cuenta referida, desde enero a septiembre de 2020, correspondían a dinero de la venta de los vehículos blanqueados.

Respecto de la cuenta vista número 02-121-4792-3, de Daniela Espinoza Toro, del Banco Itaú, se incorporó el documento 938, cartolas de enero de 2017 a agosto de 2019, destacando transferencias respecto de Claudia Sandoval, Edith Silva, Aimel Gavilán, Camilo Sandoval y Albano Silva Toro.

Sin perjuicio de la prueba documental y fotográfica exhibida con la declaración de Yerko Silva, el persecutor a fin de acreditar los hechos constitutivos de la presente tipología de lavado de activos, hizo comparecer al juicio a los comisarios de la BRILAC de la PDI, Carlos Andrés Riveros Gallardo y Cristian Ricardo Álvarez Cabión, los que declararon acerca de la génesis de la investigación y de las maniobras de lavado de activos que identificaron en su desarrollo.

El comisario Álvarez señaló que trabajó con el comisario ® Riveros, los años 2019 y 2020, una orden de investigar y en la etapa de análisis, una serie de instrucciones que emitió la Fiscalía. Explicó que la investigación se dirigía determinar maniobras de un posible lavado de activos en la investigación madre, que se llevaba adelante por los delitos de asociación ilícita, falsificación, receptaciones y estafas.

Manifestó que el delito base se investigaba en la Biro Centro Norte, refiriendo haber acompañado a Carlos Riveros a una serie de reuniones con los oficiales investigadores, quienes les dieron antecedentes del delito base y del funcionamiento de la estructura que se estaba investigando, para poder orientar la investigación patrimonial y determinar si existían algunas maniobras o conductas que pudieran constituir el delito de lavado. Fue así como, el comisario Riveros comenzó a levantar la información que contenía la carpeta investigativa, y a realizar el levantamiento patrimonial respecto de cada uno de los blancos investigativos, de los cuales, los blancos principales eran los hermanos Yerko Silva Toro y Albano Silva Toro.

Indicó que se analizaron diversas cuentas bancarias, que en su gran mayoría no estaban directamente relacionadas con los imputados, pero que registraban montos considerables. Por ejemplo, en una cuenta del Banco Itaú de Claudia Sandoval, había depósitos importantes entre \$3.000.000 a \$20.000.000, que no tenía cómo justificar. También se analizaron cuentas de la hermana de los imputados, Silva Toro, Daniela Espinoza Toro, que registraba una serie de ingresos y salidas de dinero principalmente con su madre Jeannette Toro Brenet. Agregó que tenían alrededor de tres o cuatro cuentas bancarias en la cuales había una serie de transferencias entre ellas, muchos abonos no eran elevados, pero sí constantes en el tiempo y pasaban de una cuenta a otra, de Daniela Espinoza Toro a su madre Jeannette Toro Brenet y viceversa. En definitiva, era una serie de transferencias bancarias que circulaban entre varias personas.

Refirió que había una cuenta de un tercero, Jesús Gacitúa, en la que hubo abonos de Jeannette Toro y también de Francisca Venegas, que fue pareja de Yerko Silva y, de acuerdo con el oficial que estaba a cargo de la causa, Carlos Riveros, estas eran transferencias que provenían directamente de la inyección de fondos que se estaba realizando a las cuentas bancarias.

Explicó el testigo que, en términos teóricos, se habla de los procesos del lavado de activos, en donde hay una etapa de colocación, en la cual se van inyectando los fondos directamente al sistema financiero formal y, luego, una etapa de estratificación, que es la diversificación de esos fondos que llegan y se van colocando en el sistema. Sostuvo que, en este caso, hubo distribución de fondos entre distintas cuentas bancarias, en las que se iban traspasando en montos no tan elevados, la mayoría de las veces, pero constantes, a fin de no llamar la atención de los organismos de control.

El comisario Carlos Riveros, en el mismo sentido y complementando el testimonio anterior, declaró que efectuaron diligencias respecto de Albano Silva Toro, Yerko Silva Toro, Claudia Sandoval Godoy, Paula Becerra Leyton, Daniela Espinoza Toro, Camilo Sandoval Godoy y Jeannette Toro Brenet, que formaban parte del círculo más cercano. También había personas vinculadas a ciertas operaciones, como Juan Eduardo Provoste, hoy en día fallecido. Además, explicó que, en investigaciones de esta naturaleza, desde el punto de vista policial se parte realizando un análisis de carácter patrimonial de los blancos investigativos, pero la finalidad es poder detectar maniobras de lavado, es decir, el deseo de ocultar bienes de origen ilícito o el aprovechar o usar estos bienes de distinta manera. Entonces, se enfocaron en detectar estas maniobras y llegaron a la conclusión de que sí existían, identificando las que eran más claras y permitían presumir fundadamente que se estaba cometiendo este delito.

Aseveró que, para este efecto, los vínculos financieros eran importantes, porque dejaban una huella trazable que era difícil de desconocer, ya que quedaban los registros y las personas que participaban en ellos en las respectivas instituciones. Fue así como, se elaboró un análisis de las cuentas bancarias de los blancos investigativos y detectaron vínculos entre los familiares de los principales imputados, con su madre, su pareja,

después con Francisca que fue la otra pareja que tuvo y su hermana Daniela. El análisis de las cuentas bancarias les permitió determinar el vínculo entre las personas y los bienes.

Reconoció el documento 516, del Banco Santander respecto de Jesús Gacitúa Candia, cliente de Súper digital con cuenta vista activa, adjuntando cartolas, transferencias, abonos, entre otros. Al respecto, mencionó que Yerko Silva utilizaba esta cuenta y empezaron a aparecer operaciones por parte de la madre de Yerko, su pareja y su hermana, entonces, se hizo un resumen de ese análisis con todos los movimientos del período investigativo y se consolidó en el informe policial que se confeccionó.

El testigo con apoyo del cuadro resumen de OMP 213, de la cuenta vista Súper Digital 0-710-00-18433-5, que contenía la cantidad de transferencias y los montos asociados de las personas que aparecían en la cartola bancaria, señaló que las personas que hicieron transferencias hacia dicha cuneta son: Juan Navarrete Vásquez, \$5.811.000, con 23 transferencias, Jeannette Toro Brenet, \$3.850.000, con 12 transferencias, Ingrid Torres Silva, \$1.750.000, con 4 transferencias, Francisca Venegas Miranda, \$1.394.000, con 24 transferencias, Adrián Espinoza Toro \$968.700, con 7 transferencias, Bárbara Sanhueza \$470.000, con 5 transferencias y Jesús Gacitúa, \$400.000 con 1 transferencia. Además, en la documental 99 a 99.9, se incorporó el detalle de las cartolas con los movimientos desde enero a septiembre de 2020.

Respecto del **documento 517**, que es el oficio respuesta del Banco Scotiabank respecto de productos de **Claudia Sandoval Godoy Rut 16.666.181-1**, en particular, la cuenta corriente 35-03-778-89, aperturada el 26.03.2014, adjuntado **los movimientos en dicha cuenta**.

Indicó en relación con las operaciones que se registran, que en entre enero de 2017 y septiembre de 2018, hay ingresos y salidas con Daniela Espinoza y Jeannette Toro y transferencias a Albano Silva, Edith Silva, Franco Cruz, la comercializadora Albano Silva Toro y la comercializadora "SyB", destacando también ingresos en dinero efectivo por montos elevados de dinero y retiros de la misma forma, tales como, el 6 de junio de 2017, transferencia de Luis Marcelo Co. por \$3.750.000, mismo Rut que la transferencia de \$3.450.000; el 8 de agosto, ingreso de dinero en efectivo por \$21.000.000; el 9 de agosto, retiro en efectivo por \$10.100.000; el 14 de agosto, retiro en dinero en efectivo por \$4.000.000; el 17 de agosto, retiro en dinero en efectivo por \$6.000.000, el 7 de septiembre, ingreso en efectivo por \$5.750.000; el 17 de octubre, transferencia del Rut 76.530.779-1 de la comercializadora Albano Silva Toro, por \$400.000; el 19 de diciembre, transferencia del mismo Rut de comercializadora, por \$26.000; el 5 de marzo de 2018, ingreso en efectivo por \$660.000; el 5 de abril, ingreso en efectivo por \$1.000.000; el 20 de abril de 2018, abono cheque por \$4.400.000; el 24 de abril de 2018, retiro en efectivo por \$1.250.000; el 24 abril, abono cheque por \$4.400.000; el 6 de junio, abono cheque por \$500.000 y \$900.000; el 28 de junio, abono cheque por \$510.000, el 19 de septiembre, transferencia desde el Rut 76.893.612-9 de la comercializadora "SyB" por \$800.000 y el 25 de septiembre, transferencia de comercializadora "SyB" por \$2.000.000.

El testigo reseñó que el análisis de las cuentas bancarias de Claudia Sandoval los orientó para considerar, como hipótesis válida, que existía un ingreso de dinero ilícito al sistema financiero formal, en atención a las operaciones en dinero en efectivo que constataron, las personas con las cuales realizaba estas operaciones y la coincidencia con otras conductas desplegadas por la organización, atendida la comisión del delito precedente, por ejemplo, el pago de un vehículo vendido en la cuenta de Claudia Sandoval, y al cotejar con las cartolas coincidía plenamente. Por ello, Claudia Sandoval recibía en su cuenta personal, el dinero de la venta de los vehículos investigados y lo distribuía a otras personas.

Añadió que en el caso de Daniela Espinoza Toro, de sus movimientos bancarios también se evidenciaban transferencias con sus hermanos y con su madre, indicando que revisó personalmente las cartolas adjuntas al documento 938, de la cuenta vista 0212147923 del Banco Itaú, desde enero de 2017 a agosto de 2019, con detalle de transferencias enviadas y recibidas en dicho período.

Ilustró al tribunal en OMP 221, que es el cuadro resumen de imágenes de transferencias de la cuenta de Daniela Espinoza Toro. Detalló que la imagen 1, contenía el total de transferencias que se realizaron desde la cuenta, se desglosa lo transferido a Jeannette Toro, que corresponde a 91 transferencias, total \$27.997.842, una transferencia a Albano por \$10.000 y 14 transferencias a Claudia Sandoval, por \$4.240.000. La imagen 2, es la cantidad de transferencias recibidas, respecto de Jeannette Toro, 132 transferencias recibidas, por la suma de \$39.960.510; Claudia Sandoval registraba 14, Camilo Sandoval Godoy 2 transferencias, Albano Silva 3 transferencias y una de la Comercializadora Albano Silva Toro.

En segundo lugar, en el veredicto se estableció, que la prueba de cargo también permitió verificar, la **existencia y funcionamiento del restaurante “Alto Machu Picchu”, ubicado en Gladys Marín 6106 de Estación Central**. El cual formalmente aparecía como de propiedad y administrado por Albano Silva Toro, y que fue utilizado por los hermanos Silva Toro, para ingresar dinero y bienes provenientes de la asociación ilícita, los que constituyeron, en abril de 2018, la sociedad comercializadora “SyB” Spa, valiéndose de sus respectivas parejas como socias, para administrar el restaurante “Parrilla del Guacho” continuador de “Alto Machu Picchu”.

Esta fue la tipología de lavado de activos, que más generó controversia y debate entre el Ministerio Público y las defensas, particularmente, de Albano Silva Toro y de Carolina Cornejo y Víctor Quezada.

Sobre el punto, el persecutor, en su alegato de clausura, calificó al local ubicado en Avenida Gladys Marín N°6106, comuna de Estación Central, como una empresa fachada, que fue utilizada por los imputados Yerko y Albano Silva Toro bajo las razones sociales "Alto Machu Picchu" y luego "La Parrilla del Gaucho", en la sociedad "Comercializadora SyB SPA", con la participación de Claudia Sandoval y Paula Becerra, en la cual se inyectaba dinero proveniente de los ilícitos. En definitiva, la tesis de la Fiscalía es que los acusados mantuvieron el local comercial como fachada para llevar a cabo las actividades ilícitas, ya que este

restaurante no era más que una pantalla utilizada para justificar movimientos de dinero entre los miembros de la organización.

Por su parte, la defensa de Albano Silva Toro, alegó en el cierre que para el Ministerio Público el restaurante sería una estructura de fachada para lavar dinero y que se formó para defraudar. Sin embargo, refutó dicha hipótesis señalando que el restaurante funcionaba como tal, con flujos importantes de dinero, clientes, insumos, con deudas declaradas por el dueño de la propiedad, don Clodomiro Silva. Hizo presente que el restaurante nunca pudo estar al día en sus obligaciones, nunca salió de las deudas, por lo que un lavado de dinero bastante sui géneris. Para reforzar este punto, enfatizó que en la cuenta de la comercializadora o en la cuenta de Albano Silva, nunca ingresó dinero de Daniela Espinoza o de Claudia Sandoval, ni de ninguno de los acusados que hoy se encuentra en este juicio.

Para dilucidar la polémica acerca de la naturaleza y el origen del local comercial, como primera cuestión, se debe aclarar que el Ministerio Público asimiló la categoría de empresa fachada con empresa pantalla, las cuales doctrinariamente tienen diferencias, confusión que se deriva desde la acusación y el alegato de apertura, en que se hizo referencia a que el restaurante era una empresa “fachada o pantalla”.

A su vez, los defensores entendieron que el persecutor se estaba refiriendo a una verdadera empresa fachada creada con el único fin de lavar el dinero de la venta de los automóviles robados, sin embargo, si bien están en lo correcto en cuando al concepto de empresa fachada, no lo están al desconocer las características que el Ministerio Público le atribuyó al restaurante que, más allá de su denominación, conceptualmente se encuadra en la categoría de una empresa pantalla, es decir, aquella que tiene existencia física y legal y que cumple parcialmente la actividad económica declarada, pero la misma se mezcla con actividades ilícitas de manera que se permite o favorece ocultar la actividad ilícita mezclando los recursos que se obtienen por una y por otra.

Aclarados los conceptos de la manera antedicha, a juicio del tribunal, se acreditó, más allá de toda duda razonable, que el restaurante “Alto Machu Picchu” y su continuador “La parrilla del gaucho” efectivamente era una empresa pantalla utilizada para ingresar dinero de origen ilícito con el propósito de disimular ese origen y fusionarlo con los dineros de su actividad económica propia.

En relación con la génesis del restaurante “Alto Machu Picchu”, se comprobó que Bernardo Olguín Donoso, sujeto que visitaba a Yerko Silva en la cárcel, facilitó su nombre y cheques a Albano, para suscribir el contrato de arrendamiento del local ubicado en Gladys Marín 6106, comuna de Estación Central donde posteriormente funcionó el restaurante.

Así lo declaró Clodomiro Silva Núñez, arrendador, quien señaló que le arrendó el local comercial señalado, que era un restaurante chino completo y funcionando, a Albano Silva Toro con el que realizó personalmente la negociación.

Lo anteriormente señalado se condice con el contrato de arrendamiento acompañado como documento 311, con la declaración del comisario Larry Caro, que realizó las diligencias respecto de la grúa horquilla blanqueada, que Albano Silva vendió y abonó el dinero a las rentas adeudadas del local. El contrato

aparecía celebrado como arrendatario por Construcciones Bernardo José Olguín Donoso E.I.R.L., representado por Bernardo Olguín Donoso, el plazo de vigencia era de un año contado desde el 1 de abril de 2016, renovable automáticamente por períodos iguales. La renta era el equivalente en moneda nacional a 163.9 UF por mes. El arrendatario dejó como instrumento de garantía, un cheque del Banco BCI por \$4.200.000, sin fecha, número de cuenta 86931253, a nombre del arrendador. Firmó Construcciones Bernardo José Olguín Donoso E.I.R.L., como arrendatario, y Bernardo José Olguín Donoso como persona natural, como codeudor y autorizadas las firmas por notario Alberto Mozó Aguilar, 18 de marzo de 2016.

Los hechos que han quedado establecidos, deben necesariamente relacionarse con el antecedente que Yerko Silva estaba privado de libertad por tráfico de drogas y declaró que tenía plata guardada producto de ese delito y que incluso había vendido un restaurante de sushi llamado Mano Santa. En cambio, a pesar de que Albano intentó justificar que tenía un capital para comenzar el emprendimiento gastronómico, producto del ahorro de dinero obtenido de trabajos como contratista en Salta y en una empresa propia de recolección de residuos, lo cierto es que sus dichos no encontraron sustento en el análisis patrimonial y actividades económicas como persona natural y como socio de la comercializadora Albano Silva Toro EIRL, realizado e incorporado por el testigo Felipe Meriño, en cuanto no registraba movimientos que revelaran algún ingreso después del año 2010, es decir, 6 años antes del contrato, o registrando a esa fecha ninguna actividad o trabajo formal remunerado.

Además, otro antecedente indiciario de esta maniobra de lavado, era la forma de funcionamiento del restaurante, ya que primero partió con una sociedad, la comercializadora María Paz Gajardo EIRL, según Albano una prima, con una cuenta vista que no tuvo movimiento, luego se cambió a la comercializadora Albano Silva Toro EIRL, en que Albano era el único socio y aún mantenía giro vigente, para posteriormente volver a cambiar a la comercializadora Diego Sepúlveda EIRL, en la que un tercero (testaferro) prestó su nombre y cuenta corriente, para finalmente constituir una sociedad ficticia con su hermano Yerko Siva, usando a sus respectivas parejas como testaferros y siendo creada por Sebastián Martínez Zavala.

El propio acusado, prestando declaración ante el tribunal, sobre el punto, relató que en el año 2016 se inició con el nombre de Comercializadora de productos de alimentación María Paz Gajardo Silva EIRL, quien es su prima hermana y el nombre de fantasía era Comercializadora Alto Machu Picchu. **En agosto de 2016**, se cambió el nombre a Comercializadora de productos alimenticios Albano Silva Toro EIRL y quedó como único socio de la sociedad. Luego vendió la comercializadora **con fecha 7 de noviembre de 2017**, mediante escritura pública de la notaría Alberto Mozo y en esa fecha se modificó la sociedad aumentando el capital social a \$20.000.000 y se cambió la razón social a Productos Alimenticios **Diego Andrés Sepúlveda Guzmán EIRL**, quedando sólo él como socio de ésta con un aporte de \$17.500.000.

Cabe hacer presente que **Diego Sepúlveda Guzmán** declaró en estrados y dio un relato, en lo medular, acorde a la declaración del acusado, pero dejando en claro que únicamente le prestó una cuenta corriente que tenía en el Banco Santander que no usaba y su nombre, para constituir una sociedad para que Albano pudiera comprar insumos y pagar gastos del restaurante Alto Machu Picchu, y que para ello le pasaba

cheques firmados; pero no tenía ninguna vinculación con ese restaurante. Puntualizando que con Albano se conocían en el contexto del fútbol y que le colaboró en la representación de jugadores, desde fines de 2017 hasta el año 2020.

El acusado explicó que en abril de 2016 cuando abrió el restaurante el giro que usaba era Productos alimenticios María Paz Gajardo Silva, con fecha de constitución 7 de abril de 2016, se hizo así porque él tenía Dicom y necesitaba a alguien sin Dicom y ella era ingeniera comercial, tenía cuenta corriente y ésta se iba a utilizar con los proveedores y para las compras mensuales.

Dijo que al inicio del restaurante, se usó la cuenta corriente de Productos alimenticios María Gajardo Silva. Sin embargo, la Fiscal lo confrontó señalando que se solicitó información al Banco Estado respecto de esa comercializadora desde el año 2015 hasta el 2020 y no se obtuvo registro alguno desde abril hasta noviembre de 2016 ni de ingresos o egresos y el primer registro de ingresos es en noviembre de 2016 por la suma de \$500.000.

El acusado dijo que en esa fecha el restaurante ya estaba funcionando y reconoció que la comercializadora productos alimenticios María Gajardo Silva, tuvo la cuenta en el Banco Estado, desde abril a diciembre de 2016; pero María Paz entró a trabajar con él, entonces, se abrió la cuenta corriente en el Banco Estado y caía plata, pero a la mayor parte de los proveedores **se les pagaba con la cuenta del BBVA de María Paz y ella salió en el año 2016 de la sociedad**, y le cedió el restaurante a su nombre.

Puntualizó que **en agosto de 2016 ingresó a trabajar Carolina Cornejo**, una semana o un mes después que se fue María Paz y con ella se fue creando una confianza, sabía que él trabajaba en el negocio de los autos chocados y había una tercera clave que le llegaba a su señora Paula Becerra. La confianza era tanta que en el sistema de consulta tributaria puso el correo de ella como persona natural y no como comercializadora. Tal como consta en el **documento 676** que es el sistema de consulta integrada del SII, donde está su nombre y datos del contribuyente y el correo que se incorporó fue carolinacornejoarriagada@gmail.com.

En relación con los restaurantes ya referidos, a fin de demostrar que eran una empresa pantalla en que ingresaban dineros provenientes de los delitos fines de la asociación ilícita, se contó con las declaraciones de los comisarios de la Brilac, Carlos Riveros y Cristian Álvarez, a las que se suman las diligencias de análisis financiero y patrimonial realizados por los especialistas de OS7 sección lavado de activos, Felipe Meriño y Melissa Muñoz Ibarra.

En lo que concierne a la **Comercializadora de Productos Alimenticios Albano Silva Toro EIRL**, el testigo Riveros, dijo que apareció vinculada a la persona natural de Albano Silva Toro, la que formó parte de la cadena de sociedades vinculadas al local de las parrilladas, que primero se llamaba “Alto Machu Picchu”, pero ambos siempre estuvieron bajo el control y propiedad de la misma persona, a su criterio, de los principales blancos investigados.

Explicó que esta sociedad posteriormente fue cedida a otra persona y cambió de nombre y, posteriormente, se estableció que esta persona era socio de Albano, terminada esta sociedad, luego se creó la Comercializadora “SyB” y continuó operando como parrilladas.

Se exhibió **OMP 215** y señaló el testigo que es un cuadro resumen de las transferencias y movimientos financieros que existieron entre las dos cuentas asociadas a Albano Silva Toro, en los años 2017 y 2018, que reflejaba los flujos entre la cuenta de la comercializadora y la cuenta como persona natural de Albano Silva.

En el año 2017, traspasos o transferencias a la cuenta vista de la Comercializadora, 162 operaciones, por la suma total de \$122.079.636 (desde la cuenta Rut de Albano) y recibidas de esta cuenta, 8 operaciones, por \$1.370.000 (a la cuenta Rut de Albano).

En el año 2018, traspasos o transferencias enviadas a la cuenta vista de la Comercializadora, 161 operaciones, por \$111.160.858 y recibidas de esta cuenta, 26 operaciones, por \$5.205.000.

En relación con el cuadro incorporado, se acompañó el **documento 445**, que es el oficio del Banco Estado que adjuntó información de cuentas vigentes y detalle de todos los movimientos efectuados en dichas cuentas de Albano Silva Toro, desde enero de 2016 al año 2018.

El testigo señaló que de la información aportada es factible interpretar, que ingresaba dinero (abono) a la cuenta vista de la comercializadora y egresaba la misma cantidad (cargo) de la cuenta Rut de Albano, indicando que esta dinámica fue reiterativa en los años 2017 y 2018, salvo algunos casos, en que se produjo a la inversa, es decir, abono a la cuenta Rut de Albano Silva y al mismo tiempo, por el mismo monto, cargo a la cuenta vista de la comercializadora.

Sobre este mecanismo, la fiscal le consultó a Albano Silva Toro, **por qué desde noviembre de 2016 a julio de 2018** (fecha en que se inició la Parrilla del Gaucho con la sociedad “SyB”) **desde su cuenta vista del Banco Estado se transfería dinero a la Comercializadora que tenía a cargo la cuenta del restaurante, primero Albano Silva Toro y después Diego Sepúlveda Guzmán.** (Flujo de dinero entre su cuenta Rut y las cuentas de la Comercializadora), y el acusado explicó que **a la chequera electrónica (se refiere a su cuenta Rut) llegaban los pagos de Transbank** y Diego es un amigo con el cual también pasó la misma situación, es decir, que quería seguir funcionando con los proveedores y no había podido porque no tenía cuenta corriente, entonces, él le dijo que no había problema, por eso se firmó en la notaría para poder seguir trabajando con los proveedores y los pagos que caían en su cuenta se transferían a la otra cuenta. (Cabe destacar la ambigüedad de la explicación dada por el acusado acerca del motivo de las transferencias desde su cuenta Rut a las cuentas de las comercializadoras, primero, Albano Silva Toro EIRL y después, Diego Sepúlveda Guzmán EIRL)

Explicó que nada entraba directamente como ingreso de lo obtenido del restaurante a esa cuenta (se refiere a la de la comercializadora), sino que entraba a su cuenta Rut. Las máquinas (de Transbank) estaban asociadas a su nombre no a la de Diego, éste prestaba su nombre para pagar a los proveedores.

Mencionó que todo lo que recibía de Transbank en su cuenta como persona natural lo transfería a la comercializadora (de Diego). Los pagos a los proveedores se hacían de la cuenta de Diego. Los pagos caían a su cuenta Rut, él tenía una chequera con ese Rut y los lunes o martes transfería a la cuenta de Diego para pagar a los proveedores y esto era, porque él tenía Dicom.

Indicó que en ese tiempo no tenían la chequera electrónica y fue por poco tiempo que llegó la plata a su cuenta rut. Entonces, señaló que a su cuenta personal ingresaban dineros del restaurante y después transfería a la cuenta de la Comercializadora, pero no recordó el período en que se hacía esto.

En todo caso, advirtió que él no hacía nada, porque todo eso lo veía Carolina Cornejo.

La fiscal planteó que al revisar las cartolas del Banco Estado de su cuenta Rut, **entre abril de 2016 y julio de 2018**, transfirió un monto de \$313.215.046.

El acusado respondió que podía ser, porque ese monto de más de 300 millones, correspondía a los pagos de Transbank de las tarjetas bancarias, que llegaban de lunes a miércoles y el día martes caían \$7.000.000 y sumando los meses podría dar esa suma.

La explicación dada por Albano está en contradicción con lo declarado por Carolina Cornejo y además no cuadrarían las sumas de dinero que ingresaban a su cuenta Rut supuestamente de los pagos de Transbank, con los ingresos propios de la actividad comercial del restaurante, ya que, como se verá más adelante con la declaración de la contadora Melissa Muñoz, los antecedentes tributarios de las comercializadoras que estuvieron vinculadas al restaurante dieron cuenta que los ingresos eran bastante menores y que prácticamente no había ganancias.

Ahora bien, durante la declaración de Albano Silva, la fiscal hizo presente que de la cuenta del restaurante a su cuenta Rut había un abono total en el año 2017 de \$1.370.000 y en el año 2018, de \$5.205.000, y el acusado explicó que esas transferencias eran para pagar proveedores y hacer compras, entonces, Carolina le transfería de la chequera electrónica (de la comercializadora) para poder pagar lo que se gastaba a diario en alcohol y en Lo Valledor.

En todo caso, advirtió que todas estas transferencias las hacía Carolina Cornejo quien administraba el restaurante.

A pesar de la ambigüedad y lo confuso del relato del acusado, este pretendió explicar, para justificar las transferencias que constaban en las cartolas de su cuenta Rut, la siguiente mecánica que era bastante extraña: que el pago de Transbank correspondiente a tarjetas bancarias se abonaba a su cuenta Rut del Banco Estado -que desde abril de 2016 a julio de 2018 alcanzó a más de 300 millones de pesos-, luego, transfería este dinero a la cuenta de la comercializadora para pagar proveedores y a su vez de ésta se le transferían sumas de dinero a su cuenta Rut para lo mismo, pagar proveedores y hacer compras para el restaurante y pagar proveedores.

La testigo experta Melissa Muñoz, que realizó el análisis patrimonial y tributario de la comercializadora Albano Silva Toro EIRL, señaló que esta funcionó los años tributarios 2016 a 2019 y sus compras netas fueron \$588.000.000 aproximadamente y sus ventas netas aproximadamente \$614.000.000.

Respecto de OMP 622 que se exhibió, correspondiente a imágenes del análisis patrimonial, explicó que la información de compras y ventas netas la extrajo de los formularios 29, ya que no tuvo acceso a la contabilidad de la empresa.

Indicó que la tabla 2, se refería a los formularios 22 de impuesto a la renta, en el año tributario 2017 tuvo una devolución de \$723.232 y en año tributario 2018, una devolución de \$3.115.977. Al respecto, precisó que la devolución de impuesto a la renta puede deberse a dos causas, porque las empresas acumulan mensualmente PPM para el pago de renta sobre los ingresos o utilidades que tienen, entonces, una causa es que no tuvo mucha utilidad o que pagó de más en sus provisiones mensuales, entonces el SII le devuelve dinero a la empresa.

Ilustró sobre la tabla 3, que es la información extraída del formulario 29 sobre IVA, que refleja en el año tributario 2017 (año comercial 2016), desde mayo a diciembre, ventas netas por \$150.800.011 y compras netas por \$139.461.474; y en el año tributario 2018 (año comercial 2017) las ventas netas aumentaron considerablemente a \$324.583.911 y las compras netas \$320.255.842, ya que tuvo movimiento los 12 meses del año. En el año tributario 2019 (año comercial 2018), de enero a septiembre, sus ventas netas \$139.153.932 y las compras netas \$128.919.300.

Advirtió la testigo que solamente pudo ver sus compras y ventas netas, no tuvo la contabilidad, pues esta debe entregarla el contador para ver si tenía utilidades o pérdidas y eso lo pidió pero no lo recibió.

Indicó que la tabla 4, corresponde a acreencias bancarias, que es donde tiene cuentas bancarias, en este caso el Banco Estado del año 2016 a 2021, que corresponde a uno de los informes financieros que realizó. La comercializadora no tenía deudas con instituciones financieras o bancos, no tenía bienes raíces ni vehículos ni más socios, era una empresa individual.

De acuerdo con las pruebas que se han venido analizando, es posible asentar que, en la primera etapa del restaurante denominado “Alto Machu Picchu”, comenzaron los flujos e intercambios de dinero entre las cuentas personales de Albano Silva y las cuentas asociadas al restaurante, correspondientes a las cuentas vistas (o chequeras electrónicas) de la Comercializadora Albano Silva Toro EIRL y Comercializadora Diego Sepúlveda Guzmán EIRL (porque la 1ª no tuvo movimiento señalando Albano que supuestamente se usó la cuenta corriente de su prima María Paz).

De este modo, durante los años 2017 y 2018, en pleno apogeo de las actividades delictivas de la asociación ilícita, época en que se concentraron la mayor parte de las ventas de vehículos blanqueados, se involucraron en estos traspasos de dineros en el contexto del desarrollo del giro comercial del restaurante, Carolina Cornejo, como administradora de este y su pareja, Víctor Quezada, ex funcionario de la PDI, poniendo a disposición sus cuentas bancarias personales para recibir dineros de la cuenta personal de Albano y de las asociadas al restaurante y, a su vez, transferir otras remesas desde sus propias cuentas hacia las de Albano, quedando cuantiosos saldos a favor de ellos. Estas maniobras se analizarán en detalle a propósito del delito de lavado de activos imputado a estos dos acusados.

En el veredicto, en relación con la tipología en examen, además, se dio por establecido que el local comercial fue remodelado, a pesar de no generar utilidades y mantener deudas millonarias en arriendo –como fue reconocido por Albano Silva y corroborado por el dueño de la propiedad y arrendador Clodomiro Silva Núñez-, ejecutándose mejoras para transformarlo en un nuevo restaurante con una especialidad gastronómica distinta, con recursos aportados directamente por Yerko Silva Toro a través de Claudia Sandoval, en la misma época en que, a través de la sociedad ya mencionada, los acusados adquirieron un inmueble que se pagó en efectivo y no se inscribió en el Conservador de Bienes Raíces respectivo.

Sobre este tópico, el comisario Riveros declaró que dentro de la investigación, comenzaron a aparecer las personas jurídicas asociadas a los blancos investigativos. En principio fue la “Comercializadora SyB”, y luego fueron apareciendo otras sociedades que tenían como razón social Comercializadora Albano Silva Toro y Comercializadora Diego Sepúlveda, las que fueron vinculadas a una actividad comercial que las personas naturales ejercían desde hace un par de años.

Aseveró que la principal actividad comercial era un local gastronómico ubicado en Gladys Marín N° 6106 de Estación Central, que era un local de parrilladas y antes fue comida peruana, ambos asociados a las personas jurídicas, porque uno era el continuador del otro.

Reseñó brevemente que entre los años 2016 y 2017, “Alto Machu Picchu” comenzó con Comercializadora María Paz Guajardo, quien cedió sus derechos y cambió la razón social a Comercializadora Albano Silva Toro, quien luego hizo lo mismo y cambió a Comercializadora Diego Sepúlveda.

Posteriormente, desde el año 2018 en adelante se constituyó la Comercializadora “SyB”, que fue la persona jurídica que empezó a operar con la razón social “Parrilla del Gaucho”. El vínculo entre ella y las personas investigadas, que eran los hermanos Yerko y Albano Silva Toro, era que fue constituida por sus respectivas parejas, Claudia Sandoval Godoy y Paula Becerra. Esta tenía como capital la suma de \$50.000.000, dividido en \$25.000.000 cada una de las socias, que se pagó al contado.

Se exhibió OMP 211, que es un cuadro resumen sobre esta sociedad, y destacó que la actividad económica era de restaurante, suministro industrial de comidas por encargo, etc. Y registraba un bien inmueble, adquirido el 29 de marzo de 2019, en \$80.000.000 al contado. La actividad comercial del año 2019, estaba autorizada la emisión de facturas electrónicas, boletas de ventas y servicios y notas de crédito electrónicas. La actividad comercial era del año 2019. Tiene por concepto de protestos y morosidades \$10.906.550 en total, desglosado en \$9.259.483 por protestos y morosidades y de \$1.647.067 por boletín laboral, es decir, deudas previsionales de trabajadores.

Además se incorporó el detalle del Formulario 29, respecto de la base imponible por cada período, para efectos de determinar el impuesto, que correspondería a los ingresos brutos mensuales de la Sociedad “SyB”, según el siguiente desglose:

Agosto de 2018 no registra información; septiembre de 2018 \$20.096.095; octubre de 2018 \$23.268.132; noviembre de 2018 no registra información; diciembre de 2018 \$12.788.937; enero de 2019 \$14.329.126; febrero de 2019 \$13.819.195; marzo de 2019 \$8.654.268; abril de 2019 \$10.356.232; mayo de

2019 \$5.159.642; junio de 2019 \$4.685.868 y julio de 2019 \$4.985.011. Y desde agosto a octubre de 2019 no registra información.

Precisó que el SII recibe la información que señala el contribuyente, y que los ingresos brutos no consideran los gastos que se generan dentro del mismo período

La documental 125, es la consulta tributaria integrada del SII respecto de la comercializadora, desde agosto de 2018 a octubre de 2019, con detalle de las declaraciones mensuales y pagos simultáneos del Formulario 29, en que se agregó el número de facturas emitidas y los montos de débitos y créditos del IVA.

Por último, se exhibió el **documento 50**, que corresponde a la información financiera y bancaria que la comercializadora “SyB” registraba en el Banco Estado, respecto de la cuenta vista emprendedor 261-7-011583-9, destacando el 19 de diciembre de 2018, un ingreso en efectivo de \$9.700.000 y el 26 de diciembre de 2018, un ingreso en efectivo por \$14.000.000. Registrando un saldo de \$6.861.761 al 1 de diciembre de 2020.

Complementando la información aportada, la testigo Melissa Muñoz, se refirió a **OMP 623**, imágenes del análisis patrimonial de Comercializadora “SyB” Spa, que realizó.

Al respecto indicó que la imagen 1, es la situación tributaria, el inicio de actividades fue el 19 de julio de 2018, tiene timbraje de facturas, boletas y notas de crédito del año 2019, y figura como contribuyente inconcurrente, se le ha pedido mayor información y no responde, por eso el Servicio manda a tener cuidado con los movimientos de esta empresa.

Indicó que la tabla 3, mostraba las ventas y compras netas, extraídas de los formularios 29 impuesto IVA, realizados por la misma empresa y presentados al SII.

Refirió que la empresa tuvo movimientos por dos años tributarios, el 2019 y 2020. En el año tributario 2019, las ventas netas de septiembre, octubre y diciembre, fueron de \$53.153.163 y las compras netas, en agosto, septiembre, octubre y diciembre, fueron de \$63.092.568. El año tributario 2020, las ventas netas de enero a julio fueron de \$61.989.342 y las compras netas, en los mismos meses, fueron de \$65.448.911.

Agregó que posee un bien inmueble ubicado en calle Los Robles 1034 comuna de Lo Prado, pero sólo tuvo acceso al avalúo fiscal, el cual es de tipo habitacional, aunque se trata de una empresa.

Finalmente, mencionó el resumen del patrimonio de la empresa, a saber: compras netas de los años 2019 a 2020 \$128.541.479; el avalúo fiscal de \$33.706.292 del bien raíz, con un total de inversiones de \$162.247.771; y ventas netas de los años 2019 a 2020, \$118.142.505.

Respecto del análisis financiero de la Comercializadora SyB, se incorporó OMP 627, que son cuadros resúmenes, de la cuenta vista emprendedor del Banco Estado de esta sociedad, respecto de los movimientos de algunos meses del año 2020.

Indicó que la tabla 1, era el detalle de los cargos o salidas de dinero de esta cuenta de los meses de mayo, junio, julio, octubre y noviembre de 2020, por un total de \$17.637.832, destacando que en octubre de 2020 tuvo la mayoría de los cargos, \$15.945.832 y en el desglose de estos, en octubre figuraba una

transferencia de \$10.000.000 a inmobiliaria Santa Rosa. Y la tabla 3, manifestó que era el detalle mensual de los abonos o entradas de dinero, en los meses de mayo, junio, agosto y octubre de 2020, por \$24.276.596, destacando el abono de octubre por \$22.816.594, de los cuales, existía un depósito en efectivo de \$17.400.000 y un abono de tarjeta de débito de \$6.816.594.

La testigo respecto de este análisis, enfatizó que, en general, el efectivo no se ocupaba tanto entre las compras y ventas, pues la mayoría de las personas tiende ocupar tarjetas o transferencias.

Respecto de la adquisición de un bien raíz por la Comercializadora “SyB”, el testigo indicó que se adquirió el 29 de marzo de 2019, por un precio pagado al contado de \$80.000.000.

Se incorporó el **OMP 211**, señalando el testigo que es la información de la página de la Tesorería General de la República, que indica el nombre del contribuyente, Comercializadora “SyB” Spa; la dirección del inmueble asociado y el rol, **Los Robles N°1034 de la comuna de Lo Prado**, Rol 325-02248-020. Ese rol de Lo Prado no registraba deuda de impuesto territorial.

Agregó el comisario Riveros, que cuando consultaron en el Conservador de Bienes Raíces, la comercializadora “SyB” no aparecía como propietaria, y eso se debe a que las personas que lo adquirieron no realizaron la inscripción, por eso figuraba el propietario anterior. Explicó que esta maniobra generalmente se hacía para que el adquirente no figurara como propietario formal de un bien inmueble. Es una potencial maniobra de lavado de activos, porque es un mecanismo que las personas usan para no aparecer vinculadas a inversiones de esta naturaleza.

Con el OMP 211, se incorporó un certificado de deuda de la Tesorería GR de la propiedad de Los Robles 1034, comuna lo Prado, sin deuda.

Sobre este bien raíz, Albano Silva, declaró que lo compró con dinero de Eduardo Provoste (imputado en esta causa fallecido), poniendo su firma, pero para que quedara para la sociedad “SyB”.

Por otro lado, el testigo relató que se impusieron que Claudia Sandoval y Paula Becerra eran las parejas de Yerko y Albano Silva Toro, porque tuvieron acceso a la carpeta investigativa del delito base, donde se daba cuenta de las relaciones familiares y sentimentales de los imputados. Además, se pudo colegir de escuchas telefónica que quienes tenían el control de la comercializadora y el restaurante eran los hermanos Yerko y Albano Silva Toro.

Tal como se pudo comprobar en **OMP 144, progresivo 4393** de 15 de febrero de 2019, donde Claudia Sandoval habla con su madre y le señala que Yerko la tiene aburrida, que está enojado y que la tiene metida en la empresa y como está enojado no la va a sacar. Y el **progresivo 5891** de 26 de febrero de 2019, donde dos hombres están conversando, Albano Silva saluda al otro como Juanito y hablan de arreglos en la terraza, en la barra y de que contrató varias venezolanas para trabajar en el local en los happy hour.

El testigo sostuvo que Albano Silva le comentaba a otro sujeto sobre las mejoras que estaba haciendo en la Parrilla del Gaucho, como el arreglo de la terraza, lo que daba cuenta que él dirigía el restaurante y era el propietario, porque además hablaba de la contratación de personal, por lo que tomaba decisiones sobre este y ejercía el control sobre el local.

Puntualizó que los audios son indiciarios del vínculo de estas personas con el local comercial y el posicionamiento que tienen en el funcionamiento.

En el mismo sentido, declaró el comisario Álvarez, quien manifestó que con la comercializadora “SyB”, desde el punto de vista del lavado y de su tipología típica, comenzó a aparecer la figura del testaferro, que consiste en poner a nombre de terceras personas bienes con el objeto de poder ocultar su origen.

Agregó que desde el punto de vista tributario, desde el año tributario 2017 hasta el 2021, las personas involucradas no tenían ingresos formales presentados ante el SII, que pudieran justificar poner en marcha un negocio de estas dimensiones, ya que, conforme a las vigilancias que realizaron, visualizaron el local, el cual era de dimensiones e infraestructura importantes.

Reseñó que, posteriormente, comenzaron a revisar los antecedentes tributarios de la sociedad, y se encontraron con una serie de desprolijidades en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

En primer lugar, refirió, no encontraron declaraciones de impuestos anuales de renta. Luego, las declaraciones de IVA y de los pagos de los PPM, sí estaban, pero con montos que en algunos meses no se reflejaban, por ejemplo, el monto mayor en cuanto a la base imponible dentro del período analizado fue de alrededor de \$20.000.000 mensuales. Sin embargo, de acuerdo con el análisis de los vectores, se podía ver que los ingresos brutos estaban muy cercanos a los costos, y por eso las utilidades no eran significativas.

Indicó que también analizaron audios de interceptaciones telefónicas y en ellos, Claudia Sandoval conversaba con su madre y dejaba de manifiesto que estaba su nombre en la sociedad porque era una obligación impuesta por su pareja, que ella estaba ahí contra su voluntad y quería salirse, pero por algún problema con su pareja, Yerko Silva, él la mantenía en la sociedad.

Dijo el testigo que, en relación con la segunda socia, Paula Becerra, pareja de Albano Silva Toro, en los audios, este dejaba claro que él administraba el local y hacía las inversiones. En una conversación decía que había invertido mucho dinero en el local, que había contratado cinco mujeres venezolanas y que estaba construyendo una terraza. Por lo tanto, él era la persona que disponía de los fondos para hacer inversiones en el local.

Todos estos elementos fueron dejando en evidencia que las personas que aparecían como socias, fueron puestas con el objetivo de ocultar al verdadero propietario de los capitales del negocio, que eran los hermanos Silva Toro.

Indicó también que hubo un ingreso de fondos a la empresa, que provenían de la venta de una máquina que provenía de los delitos que en particular cometían estas personas. Relató que era una máquina Caterpillar que se vendió en una compraventa de vehículos ubicada en la calle San Pablo, Comercial Silva y Silva, de Clodomiro Silva, quien tenía una serie de inmuebles, uno de los cuales era el lugar donde funcionaba la Parrilla del Gaucho. De los antecedentes que obtuvieron de la carpeta investigativa, se estableció que esa máquina se vendió en la automotora de Clodomiro Silva, y el dinero producto de la venta se le entregó a este en parte de pago de la deuda por rentas de arrendamiento que tenía Albano Silva por el

local. Precisó que dicha máquina había sido blanqueada, porque fue facturada por una de las sociedades que constituyeron los hermanos Silva Toro para perpetrar el delito base.

En conclusión, sostuvo que el dinero de origen ilícito, de la venta de la maquinaria blanqueada, fue inyectado directamente a la actividad comercial del restaurante. De esta manera, puntualizó, se pudo realizar el proceso, como se denomina en términos de lavado de dinero, de colocación al sistema financiero formal.

Así las cosas, el comisario Álvarez aseveró que en el restaurante de la parrillada pudieron ver varias figuras, por un lado, la del testaferrato, que son terceras personas que se usaron para poner el nombre a la sociedad y no figurar los verdaderos dueños directamente en el negocio; y también, la empresa de pantalla, que son empresas que existen y que funcionan en el giro, en este caso la empresa funcionaba como parrillada, sin embargo, se le inyectaron capitales ilícitos para ocultar el origen de esos fondos.

Explicó que la maniobra anterior es independiente de que la empresa tenga buenos o malos resultados, porque lo que las define son las inyecciones de fondos ilícitos con el objeto de disimular su origen. En este caso esos fondos provenían de las actividades delictivas que cometían los acusados, a los que querían darle una apariencia legal en el negocio que funcionaba como restaurante.

A mayor abundamiento, necesario es recordar la declaración de Claudia Sandoval Godoy, que señaló cuando quebró el restaurante Alto Machu Picchu, Yerko le pidió que hiciera una sociedad con la pareja de Albano Silva, Paula Becerra, denominada “SyB”, en la cual el capital indicado nunca existió siendo los antecedentes aportados falsos, y una vez constituida la sociedad “SyB” se cambió el giro del negocio a las parrillas del gaucho, para lo cual Yerko realizó una inversión de aproximadamente \$30.000.000, lo que ocurrió mientras él se encontraba privado de libertad, y que el dinero que ella recibía en sus cuentas, que provenía de la venta de vehículos clonados, también era invertido en ese local y que su administración estaba a cargo de Albano Silva Toro.

Por último, **una tercera forma de lavado de activos**, que el tribunal consideró en el veredicto, fue la **compra de un segundo inmueble ubicado en Papa San Eleuterio N° 542, comuna de Pudahuel, por parte de Albano Silva Toro**, que si bien en primera instancia inscribió a su nombre, la modalidad en que pagó el precio y la venta a menos de un año por casi la mitad del valor en que lo compró, a una sociedad creada dos meses antes con un capital menor, fueron indicios de una maniobra de lavado de activos, en el entendido que tuvo por finalidad ocultar el origen ilícito de los fondos invertidos en la adquisición de tal inmueble.

Respecto de estos hechos, el comisario Riveros, relató que durante la investigación se verificó la toma de un vale vista por \$115.000.000, en el año 2017, en que Albano Silva aparecía como beneficiario. Dijo que el tomador era la automotora Procar y su representante legal era Juan Eduardo Provoste, que también estuvo vinculado a la investigación porque formaba parte de la red que desarrollaba la actividad investigada. Agregó que el vale vista señalaba que había sido tomado en dinero en efectivo, y un mes después Albano Silva como persona natural, aparece adquiriendo un inmueble en la comuna de Pudahuel por ese mismo valor, y al año siguiente ese bien inmueble Albano Silva lo vendió en \$60.000.000.

Indicó el testigo que al realizar la trazabilidad de esa inversión, llegaron a la conclusión que era una potencial maniobra de lavado de activos, considerando el mecanismo en que se originó el flujo del dinero.

Respecto de OMP 219, refirió que era una captura de imagen de vale vista emitido por Banco Santander, por la suma de \$115.000.000, que registra como beneficiario a Albano Silva Toro, tomador Automotora Procar Limitada, fecha de emisión **29 de junio de 2017**. Acotó que fue tomado en efectivo y retirado por Juan Provoste Salgado.

Hizo presente el testigo que dentro de las variables que llamaron la atención, desde el punto de vista del lavado de activos, era la forma de tomar el vale vista, que fue en dinero en efectivo. Además, dijo que presenció la declaración de Juan Provoste Salgado, quien dijo que Albano Silva le solicitó que él tomara el vale vista, porque tenía problemas en el ámbito bancario y financiero, lo cual aceptó debido al vínculo de amistad y cercanía que había entre ellos. Agregó que Albano llegó con una mochila con el dinero al momento de tomar el vale vista en el Banco.

Se incorporó OMP 220, que correspondía a un cuadro resumen de imágenes respecto del inmueble de calle Papa San Eleuterio N° 542, comuna de Pudahuel.

Indicó que la imagen dos, es la escritura pública de compraventa de fecha 11 de julio de 2017, en que se liberaba del gravamen de usufructo vitalicio, a la vendedora María José Bastérrica Correa. El precio es \$115.000.000, que el comprador pagó en ese acto al contado y que la vendedora recibió a su entera satisfacción.

Señaló que el inmueble quedó a nombre de Albano Silva y al cabo de un año lo vendió, y llamó la atención que fue vendido casi 50% más barato, se \$60.000.000.

Refirió el testigo que en la imagen siete de OMP 220, estaba la escritura pública de compraventa mediante el cual Albano Silva Toro le vendió a Casane inmobiliaria y transporte Spa, de fecha 15 de mayo de 2018. El precio de la compraventa fue de \$60.000.000, que se canceló con \$30.000.000 al contado, que recibió a su entera satisfacción y el saldo en 30 cuotas iguales y sucesivas de \$1.000.000 cada una.

En relación con esta operación, hizo hincapié que la actividad comercial que realizaba Albano, no permitía justificar dicha compra, ya que no registraba información de una fuente formal de ese flujo de dinero y el hecho que lo hubiera adquirido en una suma y al año siguiente vendido en la mitad de su valor, no era razonable. Agregó que al efectuar la trazabilidad de los dineros involucrados y de las personas que participaron, en particular, la persona jurídica que adquirió la propiedad de Albano Silva en \$60.000.000, esta había sido constituida muy recientemente por dos personas, un mes y fracción antes de la celebración de la compraventa, sin tener historial financiero ni comercial, entonces, llegaron a la conclusión de que esa sociedad, prácticamente, había sido constituida sólo para participar en ese contrato de compraventa.

Albano Silva, consultado por la fiscal, señaló al respecto que Eduardo Provoste le hizo un vale vista de su automotora Procar, por un monto de \$115.000.000, para comprar una propiedad debido a que tenía una pareja nueva y no quería que estuviera a su nombre, ya que su ex señora e hijos se la podían quitar.

Entonces, dicha propiedad estaba a su nombre, pero no era para él y después de un tiempo, el mismo Eduardo Provoste, en el año 2018, le pidió si podía ir a firmar a la Notaría para traspasar la casa.

En relación con el restaurante, el tribunal adquirió la convicción, más allá de toda duda razonable, conforme a la prueba latamente analizada, que este local comercial desde un principio se formó como una empresa pantalla para el lavado de dinero de origen ilícito, tomando en cuenta la forma en que se creó, usando el nombre y cheques de un sujeto que se reunía con Yerko Silva Toro en las visitas de la cárcel y, sin contar Albano Silva Toro con capital o patrimonio que justificare la inversión. Además, teniendo presente que era un local comercial del giro gastronómico, que no tenía documentos ni antecedentes contables, libros, balances, etc. (Tal como los señalaron los funcionarios que ingresaron y registraron el local el 16 de octubre de 2020 y lo corroboró la misma contadora Carolina Cornejo, dejando en claro que ella no hacía balances) y que la única información oficial registrada en el SII y proporcionada por el mismo contribuyente, se trataba de la información parcial de los formularios 29, de algunos meses de su ejercicio, en que constaba que los montos de las compras netas eran prácticamente equivalentes a los de las ventas netas.

Por lo demás, si se consideran gastos como arriendo del local que ascendía a 163 UF, el que fue pagado esporádicamente acumulando una importante deuda; consumos básicos, remuneraciones de los trabajadores, a la luz de las ventas netas declaradas ante el SII, difícilmente habría obtenido utilidades, al contrario, es dable inferir que, con todos estos antecedentes, el restaurante generaba pérdidas.

Así las cosas, es evidente la inconsistencia y falta de sustento de los dichos de Albano Silva Toro y, quien trabajara como administradora del restaurante “Alto Machu Picchu” durante dos años, desde agosto de 2016 a julio de 2018, Carolina Cornejo Arriagada, los que claramente tendieron a magnificar la actividad comercial del restaurante e inflar o exagerar las ventas e ingresos que generó durante ese período.

Sin embargo y no obstante el escenario económico descrito, ingresaban a las cuentas vinculadas al restaurante y circulaban entre ellas y hacia terceros, elevadas sumas de dinero que no tenían justificación ni en la propia actividad comercial del local, porque no se reflejaba en la información presentada al SII, ni en los ingresos, recursos ni patrimonio propio de Albano Silva Toro ni de los demás involucrados.

Debe sumarse a lo anterior, que desde las cuentas asociadas al restaurante, como lo era la cuenta Rut de Albano, las cuentas vistas de la diversas comercializadoras a cargo del mismo e incluso de las cuentas bancarias personales de la administradora Cornejo y su pareja Víctor Quezada, se hicieron traspasos a miembros de la asociación ilícita y, recibían sumas elevadas en dinero en efectivo. Todos estos movimientos han quedado irrefutablemente demostrados con los registros de las cartolas bancarias, que fueron analizadas y expuestas por testigos expertos de la BRILAC y OS7 de Carabineros, sección lavado de activos.

A mayor abundamiento, la contadora auditora Melissa Muñoz, dio cuenta del incumplimiento de obligaciones tributarias por parte del restaurante y de las malas prácticas en que sistemáticamente incurrían las personas a cargo de su administración.

Por todo lo razonado, el tribunal estimó que es un hecho de la causa, que el restaurante de los hermanos Silva Toro, estuvo funcionando durante el período y en el contexto del negocio ilícito llevado a cabo por la organización delictual, lugar donde no solamente se guardaban y modificaban vehículos robados, sino que también era utilizado como una empresa pantalla a fin de disimular el origen ilícito de las enormes ganancias obtenidas de la verdadera actividad lucrativa, que era el giro de la asociación ilícita. En efecto, se ingresaba y distribuía el dinero mal habido entre las cuentas asociadas a éste, se hicieron inversiones directas en el local y se adquirió a nombre de la sociedad de pantalla un bien inmueble de destino habitacional, todo ello, con el propósito de disimular el origen y movimiento del dinero ilícito y procurar, con esas maniobras, confundir los dineros provenientes de dos fuentes distintas, una ilícita y la otra lícita.

DÉCIMO QUINTO: Calificación jurídica de las premisas fáctica.

Como primera cuestión, es necesario hacer presente que el Ministerio Público acusó a los hermanos Silva Toro por las hipótesis de las letras A) y B) del artículo 27 de la Ley 19.913, sin embargo, en opinión del tribunal, las operaciones comerciales y financieras que se han tenido por acreditadas, así como los actos jurídicos que se ejecutaron, constituyen maniobras de lavado de activos descritas y sancionadas en la letra A) de la disposición legal citada, en la medida que se estableció la concurrencia de los elementos típicos de dicha figura, vale decir: 1) la existencia de mecanismos, dentro de los cuales, están la utilización de testaferros, la creación y uso de personas o estructuras jurídicas, en su versión “sociedad de pantalla”, y la realización de operaciones ficticias, en el caso de la adquisición del inmueble ubicado en Papa San Eleuterio N° 542, comuna de Pudahuel, por parte de Albano Silva Toro, atendida la forma en que pagó el precio de \$115.000.000 y luego a menos de un año, lo vendió a una sociedad formada dos meses antes, cuyos socios no tenían ingresos formales para pagar ni el capital ni el inmueble, en la mitad del valor de compra. 2) que esos mecanismos se lleven a cabo con la finalidad de ocultar o disimular el origen ilícito de determinados bienes, en este caso, dinero. 3) A sabiendas de que provenía directa o indirectamente de alguno de los delitos precedentes enumerados en la ley.

En la especie, las receptaciones de vehículos motorizados y estafas que se estaban perpetrando con ocasión y/o con motivo de la asociación ilícita, delito este último que se encuentra contemplado expresamente en el artículo 27 letra A), en su texto vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos, desde que hace referencia a los delitos previstos en el párrafo 10 del título VI del Libro II del Código Penal, donde se encuentra precisamente la asociación ilícita, en los artículos 292 y siguientes de dicho código.

Ahora bien, establecido que las operaciones que realizaron los acusados Yerko y Albano Silva Toro, son compatibles con figuras de auto-lavado previstas en la letra A) de la disposición legal ya señalada, por cuanto ellos participaron del delito precedente, las adquisiciones de bienes muebles o inversiones efectuadas con dinero proveniente de esas actividades ilícitas, como la compra de caballos de carrera (que por lo demás se probó que se realizó en el año comercial 2016 fuera del período de existencia de la asociación ilícita) y de un vehículo a nombre de Claudia Sandoval, e incluso la compra de dólares por parte de Albano Silva Toro,

que el persecutor atribuyó a la figura de la letra B) del artículo 27, estimó el tribunal que no se encuadraban en la figura típica.

Por el contrario, las operaciones indicadas, en opinión del tribunal, más bien corresponderían al proceso de agotamiento de los delitos fines de la asociación, ya que a pesar de que el vehículo haya sido adquirido con el producto del delito y, en el caso de la divisa extranjera probablemente también, esos bienes no tenían un origen ilícito cual es el objeto material de este delito.

DÉCIMO SEXTO: En cuanto al delito imputado a Carolina Cornejo Arriagada y Víctor Quezada Bravo. Valoración de la prueba y hechos acreditados.

Que, el veredicto condenatorio dictado en contra de los referidos acusados, consignó como un hecho no controvertido que además fluyó de la prueba de cargo, que entre los años 2016 y 2018 (específicamente agosto de 2016 y julio de 2018) Carolina Cornejo Arriagada, en su calidad de contadora, administró el restaurante “Alto Macchu Picchu” y, por tanto, era una persona cercana y de confianza de Albano Silva Toro y su señora Paula Becerra Leyton.

En ese contexto, durante los años 2017 y 2018, en pleno auge de las actividades ilícitas de la asociación, los acusados Silva Toro utilizaron cuentas bancarias de terceros, entre ellas, las que pertenecían a Carolina Cornejo y su pareja Víctor Quezada -en ese entonces oficial activo de la PDI-, quienes conociendo el origen ilícito de los dineros al momento de recibirlos, y con ánimo de lucro, facilitaron sus cuentas para recibir numerosas y periódicas transferencias o depósitos en efectivo, para posteriormente y de la misma manera devolver remesas a las cuentas de Albano Silva y de las comercializadoras asociadas al restaurante, quedándose ellos a su vez con parte del dinero.

Los hechos así asentados se tuvieron por acreditados, más a allá de toda duda razonable, con los medios probatorios aludidos en el mismo veredicto, cuyo análisis y valoración pasará a desarrollarse a continuación:

1.- Cartolas de las cuentas bancarias correspondientes al período señalado que registraban los movimientos entre las cuentas implicadas, que fueron analizadas por los especialistas del OS7 de Carabineros y Dpto. V de Asuntos Internos de la PDI.

El inspector Bogarett Amayo Cepeda, como perteneciente al Dpto. V de Asuntos Internos, le correspondió diligenciar una orden de investigar que tenía su origen en la investigación denominada “industria del portonazo”, en la que resultó detenido Albano Silva Toro.

Señaló que se realizó el levantamiento del secreto bancario de éste, y se observaron transferencias con un funcionario de la PDI, Víctor Quezada Bravo y con Carolina Cornejo, con quien tenían dos hijos en común.

Indicó que también se levantó el secreto bancario, previamente autorizado, de la cuenta Rut de Víctor Quezada Bravo, y de sus cuentas corrientes del Banco Estado y Scotiabank, de la cuenta Rut del Banco Estado de Carolina Cornejo; la cuenta de la comercializadora de alimentos Albano Silva Toro, y una última cuenta corriente de Diego Sepúlveda Guzmán del Banco Santander.

Respecto de éste último, revisaron equifax, y detectaron que era un socio de la comercializadora de Albano Silva y que había transferencias entre ellos.

Puntualizó que, analizados los registros de transferencias en los períodos 2017 y 2018, Víctor Quezada Bravo había recibido alrededor de \$62.000.000, y retornó desde sus cuentas a las cuentas de Albano Silva alrededor de \$26.000.000. Y respecto de Carolina Cornejo, en el mismo período, esta había recibido alrededor de \$20.000.000 de las cuentas de Albano y de la comercializadora y regresado desde su cuenta a aquéllas \$2.000.000 y fracción.

Indicó que, seguidamente, realizaron una auditoría a Gepol, que tiene acceso a todas las personas que mantienen antecedentes con la PDI, y descubrieron que Víctor Quezada Bravo había realizado 6 consultas para Albano Silva Toro, 2 para Paula Becerra Leyton y una para Carolina cornejo Arriagada, considerando los parámetros rut y nombre. Explicó que para justificar dichas consultas, solicitaron a la Escuela de Investigaciones Policiales, las órdenes del día (documento institucional en que están consignados los servicios del día) y las copias del Libro de Guardia (lo lleva el oficial de guardia para dejar las distintas constancias del día), para las fechas de las consultas, y revisadas, Víctor Quezada no se encontraba de turno en esos días y en el libro de guardia no habían constancias que justificaran las consultas, ya que la función principal de éste era realizar instrucción a los aspirantes de la escuela, y no recibía órdenes del Ministerio Público u otras entidades para realizar investigación.

Continuando con el relato de las diligencias investigativas desarrolladas, el testigo Amayo expuso que se obtuvo una evidencia que había sido levantada, que era un notebook usado por Paula Becerra Leyton, se realizó una copia forense de los antecedentes que contenía, y al observarla, encontraron imágenes que correspondían a la gira de estudios de Quezada con los aspirantes de la escuela, y de una declaración jurada firmada por Albano Silva Toro, en calidad de dueño de la comercializadora de alimentos, en que autorizaba que los ingresos de Transbank fueran enterados en la cuenta de BBVA de Carolina Cornejo.

Por último, aseveró que con todos estos antecedentes, llegaron a la conclusión que tanto las transacciones que hacía Albano a las cuentas de Quezada y de Carolina, que fueron múltiples transferencias de distintos montos, en el caso de Quezada no era coincidente con su sueldo formal, que corresponda al cargo de subcomisario, percibiendo alrededor de \$1.600.000 mensuales y sumado a eso, las consultas realizadas en el sistema Gepol no mantenían ninguna justificación para las tres personas, por ello, establecieron que no existía una correlación sustantiva entre los ingresos de las cuentas con los ingresos formales de Quezada.

Por otra parte, manifestó que le correspondió ejecutar las órdenes de entrada y registro del domicilio de Víctor Quezada y Carolina Cornejo, ubicado en la localidad de Teno y la detención de ambos, lugar donde se incautó un notebook y sus respectivos celulares. Esta diligencia se llevó a cabo el 2 de febrero de 2022.

Posterior a esta diligencia fue entregada la investigación a Carabineros.

En relación con la revisión de las cartolas de los acusados, Albano Silva y las cuentas asociadas al restaurante “Alto Machu Picchu”, se incorporó el **OMP 603**, que consta de 17 tablas que resumen la información confeccionadas por el testigo.

Apoyado en las referidas imágenes que se le exhibieron, el testigo Amayo, expuso que la **tabla 1**, era el resumen de las transferencias hechas y recibidas de la cuenta Rut 13656296 de Albano Silva Toro del Banco Estado.

Aparecían las transferencias hechas por \$20.017.112, en 50 depósitos, a la cuenta corriente N° 42800005404 del Banco Estado de Víctor Quezada Bravo. A su vez, desde esta cuenta corriente se transfirió \$2.609.500, en 10 depósitos, a la cuenta Rut de Albano. Asimismo, transferencias hechas desde la cuenta Rut de Albano Silva, \$2.765.084, en 17 depósitos, a la cuenta vista 42870016713, de Carolina Cornejo Arriagada, y desde esta cuenta vista se transfirió \$335.000 a la cuenta Rut de Albano Silva.

Conforme a este resumen, el tribunal pudo constatar que luego de estos traspasos de dinero, únicamente con la cuenta Rut de Albano Silva, quedó un saldo a favor de Víctor Quezada de \$17.407.612 y a favor de Carolina Cornejo de \$2.430.084, que no tiene justificación, dado que esta última, declaró que se trataba de un flujo de dinero que ingresaba y retornaba entre las cuentas por las mismas cantidades.

El detalle de los movimientos señalados en el resumen de la tabla 1, se encuentran en las cartolas de Albano Silva Toro, del período enero de 2016 a 2018 del Banco Estado, incorporadas como documento 445.

Ahora bien, según el documento 833, los productos contratados por Víctor Manuel Quezada Bravo en el Banco Estado son la cuenta corriente N°428-000-426-2, fecha apertura 24.04.2008 y cuenta corriente N° 367-6-260202-9 de 16.11.2011 (vigente), remitiendo cartolas de movimiento y detalle de transferencias de cuenta 367-6-260202-9 y de Carolina Cornejo Arriagada, chequera electrónica subtipo cuenta Rut 428-7-001671-3, aperturada 03.11.2008, adjuntando sus movimientos. Y conforme al documento 818, Víctor Quezada es titular de la cuenta corriente N° 710175115 del Banco Scotiabank, y se adjuntan los movimientos del período consultado.

Continuando con el OMP 603, el testigo refirió que en la **tabla 2**, mostraba los detalles de las transferencias hechas y recibidas de la cuenta corriente 710175115 del Scotiabank de Víctor Quezada Bravo, hacia o desde la cuenta Rut de Albano Silva. Indicó que el 01.02.2017, monto recibido \$1.000.000 de la cuenta Rut de Albano Silva, el 07.02.2017, \$800.000, el 28.02.2017, \$1.000.000, el 09.03.2017, \$800.000 y el 10.04.2017, monto recibido \$800.000 de la cuenta de la comercializadora Albano Silva Toro (total de transferencias recibidas \$3.400.000) y el 19.05.2017, monto transferido a la cuenta de la comercializadora de Albano, \$4.000.000 (saldo a favor de Albano \$600.000). Este resumen se corroboró con las planillas en Excel de las cartolas de movimientos, transferencias efectuadas y transferencias recibidas, de la cuenta corriente del titular Víctor Quezada Bravo del Banco Scotiabank, incorporadas como documento 818.

Respecto de la **tabla 3**, el testigo explicó que correspondía al detalle de las transferencias recibidas en la cuenta Rut de Carolina Cornejo desde la cuenta Rut de Albano Silva, que se relacionaría con la tabla 1 que

mostraba el total general. Afirmó que desde el 08.05.2017 hasta el 25.09.2018, se registraron 16 transacciones recibidas por Carolina Cornejo desde la cuenta Rut de Albano Silva. Lo anterior se corroboró con el documento 833.1 que son las cartolas de movimientos y detalle de transferencias para el periodo 2016-2021, de los productos vigentes de Víctor Quezada y Carolina Cornejo, y en lo atinente a esta última, aparecían 16 transacciones en la planilla, coincidentes con las señaladas en la tabla precedente.

El testigo manifestó que la **tabla 4**, correspondía al detalle de las transferencias recibidas por la cuenta Rut de Carolina Cornejo desde la cuenta de la comercializadora Albano Silva, siendo la 1ª transferencia de 30.01.2017, por la suma de \$350.000 y la última 05.12.2018, por \$205.000. Dicha información también fue corroborada con el documento 833.1 y se hizo un filtro en el Rut de origen 76.530.779-1 de la comercializadora, obteniéndose que la 1ª transferencia es de fecha 30.01.2017, por el monto de \$350.000 y la última de fecha 15.12.2018, \$205.000, con un total de 87 transacciones.

Respecto de la **tabla 5**, indicó que era el detalle de las transferencias hechas desde la cuenta Rut de Carolina Cornejo hacia la cuenta de la comercializadora Albano Silva Toro. La 1ª de fecha 24.05.2017 por un monto de \$5.000 y la última de fecha 12.04.2018, por la suma de \$507.000, con un total de 12 transacciones.

La **tabla 6** indicó que mostraba el detalle de las transferencias hechas desde la cuenta Rut de Carolina Cornejo a la cuenta Rut de Albano Silva Toro, que son dos, la 1ª por \$100.000, el 02.05.2017 y la 2ª por \$235.000 el 10.10.2017, esta información la obtuvo de las cartolas.

Estas últimas transferencias también fueron ratificadas con el documento 833.1, correspondiente a los registros en las cartolas.

La **tabla 7**, refirió el testigo que era el detalle de las transferencias recibidas en la cuenta corriente 42800005404 del Banco Estado de Víctor Quezada Bravo, desde la cuenta Rut de Albano Silva (relacionada con la tabla 1 que contiene los totales generales).

En esta el tribunal pudo advertir que de las 50 transferencias existentes, hubo varias de \$1.000.000, es decir, montos elevados e incluso más de una transferencia el mismo día.

La **tabla 8**, dio cuenta el testigo que correspondía al detalle de las transferencias recibidas por Víctor Quezada en su cuenta corriente del Banco Estado, provenientes de la cuenta vista de la comercializadora Albano Silva. La 1ª de fecha 17.02.2017, por \$385.000 y la última de 25.10.2018, por \$79.500, con un total de 129 transacciones.

Respecto de la **tabla 9**, dijo que era el detalle de las transferencias realizadas desde la cuenta corriente de Quezada Bravo a la cuenta Rut de Albano Silva Toro. La 1ª de fecha 28.02.2017, por \$ 150.000 y la última de 23.01.2018, por \$500.000, con un total de 10 transferencias.

La **tabla 10**, que mostraba el detalle de las transferencias realizadas desde la cuenta corriente de Quezada Bravo a la cuenta vista de la comercializadora Albano Silva Toro. La 1ª de fecha 30.01.2017, por \$1.000.000 y la última de 21.06.2018, por un monto de \$18.000, con un total de 29 transferencias.

La información contenida en las últimas tablas, fue confirmada con el documento 833.1 que se exhibió.

En relación con la **tabla 11**, señaló que era el detalle de las transferencias realizadas desde la cuenta corriente de Quezada Bravo del Banco Estado a la cuenta Rut y cuenta corriente de Diego Sepúlveda socio de la empresa de Albano Silva. El 17.11.2017 transferencia hecha por \$ 40.000 a la cuenta Rut y a la cuenta corriente, el 13.12.2017 por \$251.000 y la última transferencia es de 05.02.2018, por \$51.000. Estos movimientos también fueron corroborados con el documento 833.1, en que figura 1 transacción a la cuenta Rut y 21 transferencias a la cuenta corriente.

Llamó la atención al tribunal, la cantidad y frecuencia de las transferencias y los elevados montos (\$1.016.000, \$1.447.600 y \$2.317.000) y también, en algunos casos, constaban dos transferencias el mismo día, a la luz de lo dicho por Carolina Cornejo, en orden a que traspasaba fondos de la cuenta corriente de su pareja para cubrir los cheques entregados a los proveedores.

Finalmente el comisario Amayo, explicó que la **tabla 12**, era un resumen del total de transferencias hechas desde la cuenta Rut de Albano Silva, cuenta vista de la comercializadora Albano Silva y cuenta Rut y corriente de Diego Sepúlveda, por un monto total de \$62.510.377, a la cuenta corriente de Quezada Bravo del Banco Estado. Asimismo, del total de transferencias hechas desde la cuenta corriente del Banco Estado de Quezada Bravo hacia las cuentas antes mencionadas, por un monto total de \$26.562.609.

Advirtió el tribunal que, conforme al cuadro resumen, quedó un **saldo a favor de Víctor Quezada de \$35.947.768**, que no tiene justificación.

Ahora bien, el testigo agregó que en la **tabla 13** se mostraban los montos percibidos por concepto de sueldo de la PDI de Víctor Quezada Bravo en los años 2017 y 2018, de enero a diciembre. Se observó que en el año 2017, percibió un promedio de \$1.300.000 mensual, salvo el mes de diciembre en que aparecía un monto superior (\$4.939.527) y, al respecto, el testigo indicó que lo más probable es que correspondiera a un retroactivo. Y en el año 2018, percibió un promedio de \$1.600.000 mensuales. Dicha información fue corroborada con las respectivas liquidaciones de sueldo acompañadas como documento 816.

Por último, las **tablas 16 y 17**, registraban las consultas realizadas en el sistema de gestión policial de la PDI, por Quezada Bravo a Albano Silva Toro, el 12.09.2016, 27.09.2016, 13.10.2016 y 16.05.2017, a Carolina Cornejo Arriagada, el 21.11.2016 y a Paula Becerra Leyton, el 12.09.2016.

Cabe destacar que Albano Silva Toro, a quien conocía, fue consultado en varias oportunidades desde septiembre de 2016 a mayo de 2017.

Consultado por la defensa de los acusados Cornejo y Quezada, aclaró que la información obtenida de gepol es si la persona ha pasado detenida por la PDI o si tiene órdenes de detención pendientes, pero no si una persona está siendo investigada, ya que existen otros registros en la PDI para obtener dicha información, pero no se constató que Víctor Quezada haya accedido a estos registros.

En el mismo sentido, declararon Scarlet Cornejo Gómez y Adolfo Ávalos Sarmiento, de la misma Brigada, corroborando los dichos del testigo anterior, y este último incorporó el testimonio que prestó Víctor

Quezada Bravo durante la investigación, quien, en general, desconoció los hechos porque su pareja manejaba sus cuentas bancarias y hacía las transferencias y dijo que, ocasionalmente, las revisaba y respecto a las consulta en gepol, señaló que quería conocer con quien estaba trabajando su mujer.

2.- Informes de análisis patrimonial y financiero de los acusados Cornejo y Quezada, reportados por la funcionaria ejecutora y corroborados con prueba documental.

La testigo experta Melissa Muñoz Ibarra, con apoyo de **OMP 620**, ilustró al tribunal acerca del análisis patrimonial de Víctor Quezada Bravo, el que no presentaba inicio de actividades, recibía remuneraciones de la PDI porque pertenecía a esa entidad, apareciendo informados desde los años tributarios 2016 a 2022, rentas netas, por un total **en el año 2016, de \$13.931.218, en el año 2017, \$16.221.455, en el año 2018, \$21.076.079**, en el año 2019, \$22.322.552, en el año 2020, \$24.355.199, en el año 2021, \$23.303.123 y en el año 2022, \$24.687.010. Además, tuvo devolución de impuestos a la renta de 2016 a 2021, por un total de \$812.027 y un segundo retiro de la AFP en el año 2021 por \$475.374.

Agregó que Víctor Quezada tuvo inversión y rescate de fondos mutuos en los años tributarios 2017 a 2021, según el siguiente detalle: Inversión en fondos mutuos, en el año 2017 por \$967.962, año 2018 por \$240.000, año 2019 por \$540.000, año 2020 por \$4.784.180 y en el año 2021 por \$5.347.940. Total \$11.880.082. Y rescate de fondos mutuos: En el año 2017 por \$929.506, 2018 por \$242.428, 2019 por \$461.293, 2020 por \$4.803.190 y 2021 por \$5.248.918. Total \$11.685.335.

La testigo hizo hincapié en que las inversiones y rescates de los años tributarios 2020 y 2021 (2019 y 2020) son considerablemente mayores, lo que da cuenta que estaba bien económicamente para invertir dinero, porque lo normal es que la gente pueda invertir cuando tiene dinero demás.

Continuó exponiendo que, Víctor Quezada hizo retiros de cuenta de ahorro, según los vectores del SII, en los años tributarios 2017 a 2020, según el siguiente detalle: En el año 2017, por \$200.000, 2018 por \$500.000, año 2019 por \$300.000, año 2020 por \$790.000. Total \$1.790.000. Además, tuvo inversión en fondos sin detallar cuáles, en el año 2018, por \$60.296 y en el año 2019 por \$141.413. Total \$201.709.

Respecto de compras y ventas de vehículos, indicó la testigo que en el año 2016, aparecía una compra de una moto marca Suzuki del año 2009, por \$3.000.000, que vendió en el año 2015. También vendió un automóvil Nissan año 2012 por \$4.743.093 con fecha 10 de junio de 2015. Total \$7.743.093. Y en el año 2018, aparecía una compra de un station wagon usado, marca Toyota, año 2014, en \$11.045.406, con fecha 17 de marzo de 2017. Ese mismo vehículo lo vendió el año tributario 2021 en \$7.103.257, el 11 de septiembre de 2020. Total de compras \$11.045.406 y total de ventas \$14.846.350.

Manifestó que Víctor Quezada tiene dos propiedades: una, en Cuadro Verde N°140 departamento 101. El departamento tiene un avalúo de \$48.956.144. La bodega de \$1.003.457 y el estacionamiento de \$6.109.829 y como estaba fuera de su período, entonces sólo tuvo acceso al avalúo fiscal del año 2022. Dos, una propiedad en Romeral, ubicada en callejón La Quinta, sitio 3, avalúo fiscal de \$4.142.610. Total \$60.212.040. Explicó que el avalúo fiscal es un monto que da el servicio, no está relacionado con el valor comercial.

Respecto de las acreencias y deudas del investigado, según informe de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), aparecían en el Banco Estado de 2009 a 2022, Banco Santander de 2011 y 2012, en Scotiabank de 2016 y 2022, en Coopeuch de 2019 y 2022 y BBVA de 2010 y 2018. Y deudas en Banco Estado, Matic Kard S.A., Scotiabank, BCI, Banco Santander, Cat administradora de tarjetas S.A., en BBVA y en Coopeuch, sin información del período de las deudas. Explicó que las acreencias son los productos bancarios.

En el contrainterrogatorio de la defensa de los acusados, agregó que Quezada tenía créditos y avances de tarjetas de crédito, que aparecían en las cartolas bancarias, y recordó que tenía un avance de tarjeta de crédito por \$7.000.000, un crédito por \$13.000.000 y otro crédito por \$7.000.000, estos son del inicio del período investigado, es decir, 2016 o 2017.

Por otro lado, continuó exponiendo, respecto de la participación en sociedades del investigado, figuraba en las sociedades Antonio Quezada Spa con 50 % e incorporación 10 de mayo de 2021, con el último timbraje el año comercial 2021, **Quezada y Cornejo Spa con 50%, último timbraje año 2022 y se incorporó el 19 de mayo de 2017.**

Respecto del análisis financiero del investigado, éste tenía la cuenta corriente del Banco Estado terminada en 5404 y la cuenta corriente del Scotiabank terminada en 5115, que fueron las utilizadas en el período investigado.

Con el respaldo de **OMP 671**, tablas contenidas en el informe de análisis financiero, señaló respecto de la cuenta unipersonal 4280005404 del Banco Estado, que es la secundaria, porque no está el depósito de las remuneraciones y consideró todos los cargos que tuvo esa cuenta, las salidas con los saldos mensuales y anuales, en compras, transferencias o depósitos que él hace.

En el año 2016, salió en el mes de diciembre un total de \$5.429.864. **En el año 2017, total de salidas de dinero de \$119.245.720. Por ejemplo, en enero salió \$18.071.490 y en marzo \$17.418.920. En el año 2018, total de salidas por un monto de \$65.335.848.** En el año 2019, total \$26.957.175. En el año 2020, total \$27.556.679. En el año 2021, hasta mayo total \$2.464.481, que correspondía a los meses de enero, febrero y mayo.

La testigo destacó que llamaba la atención que las salidas de los años 2017 y 2018, diferían mucho de los siguientes años, por ejemplo 2019-2020 con salidas de \$26.000.000, pero en el año 2017 por \$120.000.000 y 2018 por \$65.000.000, entonces, se observó que era mucha la diferencia y este período coincidía con los años en que su pareja estuvo trabajando en la comercializadora.

Señaló que el año comercial 2017, las salidas de dinero de la cuenta del Banco Estado fueron por un total de \$119.245.720 y si se considera, la imagen 11, de los otros medios de prueba 620, el dinero por concepto de ingreso del año tributario 2017 (año comercial 2016), y el año tributario 2018, (año comercial 2017) sería de \$21.076.069, que fue lo que recibió por concepto de remuneración de la Policía de Investigaciones. Además, en las inversiones del año 2018, el vehículo comprado por \$11.045.406, o sea, más de la mitad de su remuneración anual fue utilizada en la compra del vehículo.

Recalcó la testigo que en la cuenta del Banco Estado no se depositaba el sueldo, porque se depositaba en el Scotiabank, en consecuencia, ese dinero ingresó por transferencias y depósitos en efectivo que, en este caso, fueron bastantes.

Advirtió que Albano Silva Toro y la comercializadora, le transfirieron a la cuenta personal de Víctor Quezada en los años comerciales 2016, 2017 y 2018. A su vez, Víctor Quezada le transfirió a Albano Silva y a la comercializadora, en el mismo período.

Continuando con la incorporación de OMP 671, señaló que en la tabla 2, se detallaban los cargos o salidas de dinero. Y en la tabla 4, se indicaban los ingresos de dinero a la cuenta corriente de Quezada, desglosada por meses y años.

La testigo, en este punto, explicó que los ingresos pueden ser por cualquier tipo de abonos, ya sea, transferencias, depósitos, depósitos de cheque, etc.

Indicó que en el año 2016, se contó solamente con los abonos de diciembre, ascendentes a \$8.000.000 y fracción. En el año 2017, el total de enero a diciembre fue por \$105.764.873; el año 2018 por \$75.336.494; el 2019 por \$27.010.805; el 2020 por \$2.833.952; y el 2021 \$4.670.300 desde enero a mayo. La suma total entre los años 2016 a 2021 fue por \$239.805.796.

Advirtió que esta cuenta presentaba muchos abonos, pese a que en ésta no se depositaban sus remuneraciones. Además, en los años 2017 y 2018 los abonos casi se triplicaban en comparación con los otros años, siendo muy notoria la diferencia en ese período.

Ahora bien, los abonos categorizados en las glosas que aparecían en la cartola, son los siguientes:

Por concepto de transferencias recibidas, correspondientes a abonos desde el año 2017 al año 2021, en el año 2016 no tuvo saldos; en el año 2017, por \$19.702.573; en el 2018, \$11.142.657; el 2019, \$6.791.200; el 2020 por \$4.005.000; y el 2021 por \$445.000.

Por concepto de transferencias recibidas desde la comercializadora Albano Silva Toro, había montos sólo los años 2017 y 2018, el 2017, por \$22.059.830 y el 2018 por \$15.993.435. El total fue de \$38.053.265. Por concepto de transferencias de fondos cuyo origen no se pudo identificar, de 2016 a 2020, saldo cero; el 2016, \$5.929.369; el 2017, \$8.103.236; el 2018 \$7.423.075; el 2019, \$3.226.360; y, 2020, \$800.687. Por concepto de transferencias recibidas de Albano Silva, solamente años 2017 y 2018. En 2017, \$15.247.135 y el 2018 \$4.769.977, siendo el total por una suma de \$20.017.102. Por concepto de depósitos en efectivo, solamente en los años 2017, 2018 y 2019, en el año 2017, \$10.639.000, el 2018 \$4.277.000, el 2019 \$215.000, total \$15.131.000. Por concepto de depósitos con documentos, a través de cheques o vale vista, se consignó el saldo en los años 2017 y 2018, en el año 2017, fue \$13.000.000 y el 2018, \$252.000. El total ascendió a \$13.250.000.

Por concepto de transferencias desde Carolina Cornejo, desde el 2016 a 2021, el 2016 por \$420.000; el 2017 por \$4.342.332, el 2018 por \$1.156.374; el 2019 por \$4.209.500; el 2020, por \$1.192.000; y, el 2021 por \$1.170.000. Monto total fue de \$12.490.206.

Precisó que las **transferencias desde Sandoval Godoy Claudia, en el año 2017, fueron por \$250.000.**

En relación con la cuenta corriente N°710175115 de Scotiabank de Víctor Quezada, señaló que era su cuenta principal, ya que en ella recibía sus remuneraciones y el período analizado entregado por las cartolas es desde agosto de 2016 hasta mayo de 2021, indicando los cargos o salida de dinero, según el siguiente detalle: En el año 2016, por un total de \$24.444.246. En el año 2017, de enero a diciembre, \$52.778.185. En el año 2018, de enero a diciembre, \$66.032.053. En agosto de 2018, \$26.789.744. En el año 2019, \$50.499.563. En el año 2020, \$41.519.095. En el año 2021, de enero a mayo, \$13.314.351.

La testigo enfatizó que llamaba la atención el saldo del año 2018, pues se diferencia mucho de los años anteriores, a saber, los años 2016 y 2017, ya que la diferencia es de prácticamente \$16.000.000, que coincidía con el período en que Carolina Cornejo, pareja de Víctor Quezada, estuvo trabajando en la comercializadora.

Respecto del detalle de los cargos de la cuenta Scotiabank, señaló que por concepto de transferencias a Carolina Cornejo, en los años 2017 y del 2019 al 2021, asciende a un monto total de \$31.605.450. En cuanto a retiros en efectivo, sólo cuenta con un saldo en el año 2018, por \$21.666.000. La salida de dineros por cheques: saldos solamente en los años 2016 a 2019. En el año 2018, fue por \$10.448.960 y el 2017, por \$5.116.322. El total ascendió a \$20.177.503. Inversiones en fondos mutuos, de 2017 a 2021, un total de \$14.660.000. Transferencias a la comercializadora, hay solo un saldo el año 2017, por \$4.000.000. Transferencias a Albano Silva, saldo sólo el año 2016, por la suma de \$500.000.

Respecto de los abonos de la cuenta corriente de Scotiabank, indicó que el año 2016, total de \$32.173.573; el 2017, \$46.526.792; el 2018, \$65.636.430; el 2019, \$48.838.737; el 2020, \$42.260.786; y el 2021, de enero a mayo, \$13.361.881. El monto total fue de \$ 248.798.199.

Luego, precisó mismos montos clasificados por las glosas correspondientes en la cartola, según el siguiente detalle: Monto total de abonos por transferencias de Víctor Quezada, \$24.819.916, monto total de depósitos en efectivo de 2016 a 2019, \$31.690.000. Transferencias de Carolina Cornejo a Víctor Quezada, total de \$15.615.490. Rescate de fondos mutuos, de 2016 a 2020, total de \$10.958.000. Transferencias desde la comercializadora de Albano Silva Toro, en el año 2017 por \$800.000.

Finalmente, a modo de conclusión, la testigo Muñoz sostuvo que se podía observar, de las cuentas del Banco Estado y Scotiabank, que Víctor Quezada presentaba bastantes movimientos en efectivo, lo que en estos tiempos no es muy usual. En el Banco Estado, por un monto de \$15.000.000 y en el Scotiabank, por \$30.000.000. Al ser depósitos en efectivo, no es posible rastrear el dinero.

Por otra parte, indicó que el total de las transferencias hacia la comercializadora y a Albano Silva Toro, se constató un total aproximado de \$14.000.000, pero los abonos recibidos desde las cuentas de Albano y de la comercializadora ascendieron a un total de \$64.000.000. Por lo tanto, existía una diferencia de \$50.000.000 que se habría quedado en las cuentas de Víctor Quezada, lo cual llamaba la atención porque supuestamente las transferencias de las cuentas de Quezada eran sólo préstamos.

Respecto de Carolina Cornejo Arriagada, con el apoyo de **OMP 621**, la testigo dio cuenta del análisis patrimonial que realizó a su respecto.

De este modo, señaló que tenía inicio de actividades el 13 de mayo de 2008, siendo el último timbraje de boletas de honorarios en el año comercial 2022, devolución de impuesto a la renta entre 2016 a 2021, por un total de \$876.049, el año 2017, de \$56.340. Indicó que aparecían las remuneraciones entre los años 2016 a 2022, en el año 2016 recibió \$7.907.456 y en el año 2017, \$10.634.400, ambos años de la Cía. de Seguro Consorcio y en el año 2017, recibió \$100.000 de la comercializadora Albano Silva Toro EIRL, destacando que en el año 2018 no tenía remuneraciones informadas.

En este punto, la testigo enfatizó que las empresas, como la comercializadora en cuestión, están obligadas a hacer una declaración jurada de remuneraciones, y omitirlo constituye una irregularidad, por lo que, esa declaración debió consignarse de manera completa durante los 3 años en que Carolina Cornejo trabajó en la comercializadora.

En cuanto a los honorarios que obtuvo Carolina Cornejo entre los años 2016 a 2022, dijo que en el año 2016 y 2017, recibió honorarios de Consorcio, por \$155.390 y \$281.440, respectivamente y en el año 2017 recibió \$101.200 como honorario de la comercializadora Albano Silva Toro. Sin embargo, el año 2018 no presentaba honorarios. También para las empresas como la comercializadora, con régimen de contabilidad completa, es una obligación presentar una declaración jurada de honorarios, siendo ésta una nueva irregularidad.

En cuanto a las inversiones en fondos mutuos, en los años 2016, 2017 y 2020, dijo que en el año 2016, su inversión fue un poco menor que su rescate, por lo que obtuvo ganancias aproximadas de \$70.000.

Indicó la testigo que aparecía la compra de un vehículo en el año 2016, por un monto de \$6.118.000 que fue vendido el año 2018, por la suma de \$4.306.610.

Respecto de bienes raíces, aparecía en el año 2019, la venta de una propiedad habitacional, ubicada en Santa Elvira 2123, Bombero Garrido, por un monto de \$25.000.000 y fracción. Hizo presente en este punto, que sólo presentaba este bien raíz que fue vendido y se le pagó el monto al contado, siendo la fecha de la venta el 25 de mayo de 2018.

Respecto de las acreencias y deudas bancarias, tenía en Banco Estado del 2019 a 2022; en el BCI del 2019 a 2022; en el Banco Ripley, de 2020 a 2022; en el Banco Falabella de 2021 a 2022; en el Banco Santander de 2009 a 2022; en Ahorrocoop de 2016 a 2022; y, en BBVA, actual Scotiabank Chile, de 2012 a 2016.

En cuanto a la participación en sociedades, aparecía la sociedad de inversiones Arriagada y Fuenzalida Ltda., con un 50%, con inicio actividades en 2020; Te Asesora Spa, con un 100%, siendo el último timbraje 2022; Agua Bendita Spa, con último timbraje el 2022; y, en Quezada y Cornejo Spa, con un 50%, siendo el último timbraje el 2022.

La testigo indicó que tres de esas empresas fueron creadas en el año 2022, agregando que cuando uno está emprendiendo se suele poner el foco en una sola empresa, pero Carolina Cornejo creó tres y la otra un año después.

En relación con el análisis financiero de carolina Cornejo, con el respaldo de OMP 672, se refirió a las salidas de dinero de la chequera electrónica N°42870016713 del Banco Estado, desde los años comerciales 2015 a 2021, según el siguiente detalle: En el año 2015, de mayo a agosto, y octubre a diciembre, \$2.925.721; en el año 2016, \$9.261.427; **en el año 2017, \$18.312.794; en el año 2018, \$15.783.807**; en el año 2019, desde enero hasta mayo y julio a diciembre, \$6.926.425; en el año 2020, de enero a marzo y mayo, julio y agosto, \$1.269.429. Y, finalmente, en el año 2021, en enero, febrero y abril, \$764.900.

La testigo hizo hincapié que se podía observar que en los años 2017 y 2018 presentó el doble de cargos que en los otros años.

En relación con los mismos montos, pero separados según la glosa que aparecía en la cartola bancaria, indicó que por giro de dinero y extracción desde la cuenta, año 2017 por \$5.320.000, en el año 2018, \$7.577.000 y el 2019 \$360.000. Monto total \$ 14.069.000. Transferencias de fondos sin identificar, por un total de \$13.353. Trasferencias el 2015 y 2016, no hay. El 2017, hay transferencias a Quezada por \$8.398.196. Transferencias a Carolina Cornejo los años 2017, 2019 y 2021, sin saldo. Los años 2015, 2016 y 2018, las hay por un total de \$3.318.892. Gastos varios, estos son las salidas de dinero por compras, ascienden a \$5.485.891.

Transferencias a la Comercializadora, presentaba un saldo en los años 2017 y 2018 por \$2.112.280. Transferencias a Albano Silva Toro, solamente en el año, 2017 por la suma de \$335.000.

En lo que dice relación con los abonos en la cuenta desde 2015 al 2021, refirió que el monto total de mayo, julio, agosto, septiembre y noviembre de 2015, es de \$2.923.022; en el año 2016, de enero a diciembre, asciende al total de \$9.271.703; en el año 2017, de enero a diciembre, es de \$18.302.824; el 2018, de enero a diciembre, el total es de \$15.794.021; el 2019, \$6.922.340; el 2020 de enero a marzo, mayo y julio, el monto es de \$1.259.231; 2021 en enero, abril y mayo, es de \$799.450.

Destacó la testigo, que los años 2017 y 2018 presentó montos que eran el doble de los años contiguos.

En lo concerniente a los mismos montos anteriores, categorizados por las glosas que están en la cartola, indicó que eran las transferencias desde la comercializadora, sólo con saldo los años 2017 y 2018. Transferencias de Víctor Quezada, de 2017 a 2020, ascienden a \$9.810.300. Depósitos en efectivo, \$7.090.000. Transferencias de fondos sin identificar, los saldos de 2015 a 2017 y 2020, \$454.0475. Transferencias de Albano Silva Toro, correspondientes a los saldos de los años 2017 y 2018, por la suma de \$2.035.084. Transferencias de Carolina Cornejo, saldos desde el años 2019 a 2021, por las suma de \$936.900. Depósitos con documentos, saldos 2015 a 2017, es de \$389.549 y transferencias de Claudia Sandoval Godoy el 2018, por \$25.000.

Finalmente la testigo Muñoz, puntualizó que respecto de las cuentas de Carolina Cornejo, en menor medida, se presentaban varias transferencias de entrada y salida con Albano Silva y la comercializadora y también bastantes movimientos en efectivo. Si se hace el mismo ejercicio que con Víctor Quezada, existía una diferencia de \$18.000.000 que habría quedado en la cuenta del Banco Estado de Carolina Cornejo, desde el 2016 hasta el 2018, período en que estuvo trabajando en la comercializadora.

Como es dable advertir, los testimonios y pruebas documentales a han sido descritas y analizadas, permitieron tener por acreditados los traspasos de dinero y su periodicidad, entre las cuentas de Albano Silva, de su empresa y de Diego Sepúlveda Guzmán, quien se las facilitó y las cuentas de Víctor Quezada Bravo del Banco Estado y del Scotiabank, quedando un saldo a favor del acusado Quezada, por un monto considerable (\$38.947.768).

A su vez, entre las cuentas de Albano Silva Toro y de la empresa del mismo y la cuenta Rut del Banco Estado de Carolina Cornejo Arriagada, también quedando a favor de la primera una importante suma de dinero (\$18.585.669).

Razón por la cual, entre ambos mantuvieron y en definitiva adquirieron, la suma \$57.533.437, situación que no ha podido ser justificada con las explicaciones dadas por Carolina Cornejo, en su declaración en juicio, que por lo demás no han tenido sustento fáctico ni probatorio en la causa.

Asimismo, con las probanzas rendidas, se acreditó que los montos transferidos no tenían concordancia con los ingresos formales de Albano Silva Toro como persona natural ni con los ingresos de la actividad comercial propia del restaurante, dado que según la información proporcionada por el SII, el local no generaba ganancias, es decir, el monto bruto de las ventas era prácticamente equivalente al monto bruto de las compras y por otro lado, tampoco se condecían con la remuneración de los acusados, ya que Carolina Cornejo percibía por su trabajo en el restaurante entre \$600.000 y \$800.000 mensuales, según su propia declaración, ya que no se encontraban informadas al SII, y Víctor Quezada recibía un sueldo promedio de \$1.500.000 mensuales, durante los años 2017 y 2018, ni con su situación financiera y patrimonial previa al período en que estuvieron vinculados al restaurante y se produjeron los traspasos dinerarios, cuestión que por sí sola ya sería suficiente para descartar la explicación dada por Carolina Cornejo al declarar en juicio, en orden a que le prestaba dinero al restaurante para que pudiera seguir funcionando, el que después le era devuelto, generándose un flujo de dinero entre las cuentas propias y de su pareja y las de Albano y del restaurante.

En lo que concierne al flujo de dinero que la acusada Carolina Cornejo alegó en su defensa, señalando reiteradamente en su declaración que la misma cantidad que ella le facilitaba al restaurante era la que se reembolsaba, lo cierto es que resulta imposible probar o trazar dicho flujo, en la medida que se usaban varias cuentas bancarias, como se ha visto, seis cuentas en total, entre las cuales fluían los traspasos de dinero, a los que se suman montos que se facilitaban al restaurante en dinero en efectivo, de los cuales no habían registros ni respaldos.

3.- Que también se probaron una serie de indicios serios, graves y concordantes, que permitieron establecer la faz subjetiva del delito, constituida por el dolo o conocimiento del origen ilícito del dinero recibido y, el ánimo de lucro en el actuar de los acusados, en la medida que recibían el dinero mal habido en sus cuentas manteniendo y adquiriendo parte del mismo, lo que significó un particular incremento patrimonial durante el período en que participaron en el restaurante, como quedó establecido con los análisis de patrimonio y financiero expuestos por la testigo experta Melissa Muñoz, en relación con los años inmediatamente anteriores y posteriores.

Para así determinarlo, entre otros indicios, el tribunal tuvo especialmente presente la falta de registro de los dineros que supuestamente Carolina le facilitaba al restaurante y que, a su vez, el restaurante le restituía, y la falta de respaldo de las supuestas compras de insumos y pagos a proveedores y/o trabajadores en que utilizaba dicho dinero, es más, en su declaración se limitó a señalar que los respaldos eran las facturas de los proveedores (que no se encontraron en el local comercial al momento de ser registrado el 16 de octubre de 2020, a dos años de su salida de este) y que los dineros que ella prestaba estaban considerados en las compras y ventas del ejercicio. Por lo que debe entenderse, paradójicamente, que el único registro que existía de los flujos o traspasos entre los acusados y Albano Silva, está constituido precisamente por las cartolas bancarias que no tienen ningún atributo explicativo.

Sobre este punto, Albano Silva señaló en su declaración que los ingresos y egresos que tuvo el restaurante para poder determinar la ganancia estaba en archivadores, con facturas, contratos de trabajadores y contrato de arriendo y el día del allanamiento se llevaron todo.

Sin embargo, esta aseveración fue absolutamente contradicha por los comisarios de la Brilac que ingresaron y registraron el local del restaurante, Carlos Riveros y Cristian Álvarez, quienes estuvieron contestes en indicar que solamente encontraron un par de cuadernos con anotaciones específicas relacionadas con ventas diarias y que no había documentación contable.

Además, Albano manifestó que Carolina juntaba las boletas y cada compra tenía su factura o boleta, que Carolina guardaba en un cuaderno y todo eso estaba en el local, pero fue incautado por los funcionarios policiales. Pero, tal afirmación no encontró corroboración ni en los testimonios de los funcionarios ni en los dichos de Carolina Cornejo.

A ello se sumó, como otro indicio relevante, la evidencia levantada correspondiente a una conversación en la aplicación “telegram” (que fue incorporada con las declaraciones de la capitán de OS7 Náyade Madrid Vargas y el carabinero Felipe Meriño) una vez producida la detención de los acusados Albano Silva y Paula Becerra, entre Carolina y su pareja Víctor Quezada, acerca de la investigación e inminente formalización, comentando ella “que investiguen todo porque no tiene nada que ocultar”, ante lo cual, Víctor le contesta “no seas inocente”, de lo cual se infiere que Víctor en su calidad de funcionario de la PDI, sabía que si la Fiscalía los investigaba y se levantaba el secreto bancario, quedarían en evidencia los flujos y los dineros recibidos en sus cuentas, cuestión que les acarrearía serios problemas.

En fin, no deja de ser también altamente indiciario el hecho de que Carolina Cornejo, siendo contadora de profesión y con conocimientos especializados en cuestiones referidas a la administración de recursos materiales y monetarios ajenos, primero, haya comprometido en el negocio que administraba dineros propios y de su pareja, sin que éste se haya enterado y, segundo, sin adoptar ningún resguardo, registro o respaldo para justificar los flujos de dinero con Albano Silva, pese a que se trató de montos considerables. Y en su declaración no hubo ninguna explicación plausible al respecto, resultando inverosímil inferir o suponer que ello se debiera al compromiso que tenía con los trabajadores del local o a la relación de confianza con Albano Silva.

A mayor abundar, el tribunal estimó que, en cuanto al actuar doloso de los acusados, malamente estos podían alegar desconocimiento del origen de los dineros que ingresaban y se movían en las cuentas de Albano Silva y las asociadas al restaurante, al contrario, ellos sabían que al interior de este negocio había movimientos de dinero mal habido producto de ilícitos.

Los acusados, particularmente, Albano Silva en su declaración pretendió sugerir que podría haber sido víctima de una especie de apropiación de dinero por parte de Carolina Cornejo y su pareja, pero las evidencias y las pruebas incorporadas en juicio, demostraron que ellos conocían y estaban conscientes de la crisis económica que atravesaba el restaurante, el que no generaba utilidades y aun así habían ingresos y movimientos de grandes sumas de dinero. También sabían que el hermano de Albano, Yerko Silva Toro, estaba preso y tenía injerencia en el restaurante, todo lo cual, se puede inferir, sin margen de dudas, atendida la calidad de las personas, Quezada era policía instructor en la PDI, enseñaba las técnicas de la persecución e investigaciones penales. El cual contaba y accedía a medios propios de la institución, como lo demostró al consultar a Albano y Paula Becerra en las bases de datos institucionales (lógicamente para cerciorarse que no tuvieran causas penales en su contra, dado que una orden de detención supone la judicialización de una investigación). Y, por su parte, Carolina, era de profesión contadora con experiencia e incluso con títulos de postgrado. En consecuencia, no eran personas sin conocimientos en la materia o que hayan sido utilizadas por Albano, por el contrario, ellos se involucraron durante un tiempo prologado en el funcionamiento del local comercial y con pleno conocimiento de cómo funcionaba, pusieron a disposición sus cuentas bancarias para de manera sistemática participar en el lavado de dinero que sabían se estaba cometiendo a través del restaurante a cambio de una ganancia económica.

De este modo, el tribunal entiende en cuanto al dolo, que el comportamiento del agente que se basa en el conocimiento que tiene de la situación que ha creado (administración del restaurante) y el control que es capaz de ejercer sobre esa situación (Carolina Cornejo contaba con la confianza de los dueños del restaurante y tenía acceso a las cuentas de este y también a las cartolas), es siempre doloso, en la medida que esa actuación sea libre y consciente, porque la manifestación de la voluntad no es más que discernimiento y consciencia de la conducta, vale decir, que el sujeto no se encuentre afecto a alguna fuerza irresistible, o bien su entendimiento no esté interferido por algún tipo de error.

En ese mismo orden de cosas, en el alegato de clausura, el defensor de los acusados, señaló que en el juicio faltó prueba en general, pero en particular del dolo de sus representados. Y en este caso, era una exigencia del propio tipo, el conocimiento de los delitos base, e insistió en que no hay un solo medio de prueba que haya dado un indicio de cómo sus representados podrían haberse enterado de que se estaban haciendo estafas, que se estaban clonando vehículos, y que se estaban ocupando las cuentas de Alto Machu Picchu.

Respecto del conocimiento específico y detallado de los delitos base que, según el defensor es lo que exige la letra B) del artículo 27, este no es un requisito de la figura de lavado tipificada en dicha disposición, y a juicio del tribunal, basta con el conocimiento del origen ilícito de los bienes, a diferencia de las hipótesis previstas en la letra A) que contiene el catálogo taxativo de los delitos de los que se derivaría dicho origen.

Además, en opinión del defensor, se hizo una investigación patrimonial respecto de sus representados absolutamente básica, ya que se revisaron en determinados períodos cortados, ingresos y egresos de cuentas bancarias, pero no se investigó qué otros negocios trataron de emprender, ya que se trata de un oficial de la Policía de Investigaciones con más de 15 años y de una contadora auditor, evidentemente tienen una vida comercial más amplia, incluso, señaló el persecutor que don Víctor realizó una serie de transferencias pese a que doña Carolina explicó que ella era quien manejaba las cuentas de don Víctor.

Afirmó el defensor que aquello es bastante normal y bastante razonable, si se tiene en cuenta que es un policía, que pasaba el día en la calle investigando y su mujer, madre de dos hijos, es contadora auditor.

Es necesario corregir las afirmaciones del defensor, debido a que Víctor Quezada no era un oficial operativo, sino que un instructor de la Escuela de la Policía de Investigaciones, por lo tanto no tenía a su cargo investigaciones y por lo mismo, según explicó la Fiscal, tampoco tenía acceso a otros registros internos más que al que revisó de órdenes de detención.

Ahora bien, el tribunal compartió con el defensor que era factible y no tenía nada de extraño que uno de los miembros de la pareja manejara y administrara las cuentas bancarias, pero lo que no es verosímil es que el titular de las cuentas, incluso aquella en que se pagaba el crédito hipotecario y en la que recibía su remuneración, nunca las haya revisado en dos años ni le llegara ninguna notificación de los bancos, ya sea por correo electrónico u otro medio, por tanto, no es verosímil que haya desconocido las transferencias y movimientos de dinero que se realizaban en sus cuentas, algunas de ellas por sumas considerables.

Al contrario, incluso en el supuesto que esto haya ocurrido de la manera explicada por la encausada Cornejo y su pareja Víctor Quezada, no haya efectuado ni recibido ninguna de las transferencias objeto del delito, aun así, la circunstancia que él detentara la titularidad de esas cuentas siendo el responsable ante la entidad bancaria, resultaba indiciaria de que él sí se enteró de estos movimientos, y conociendo el origen de esos fondos haya permitido que su señora las ocupara para beneficio propio, de la forma en que quedó acreditado.

En efecto, es innegable que Víctor Quezada sí conocía los traspasos de dinero que se hacían en sus cuentas bancarias, pues de lo contrario, habría que suponer que durante dos años nunca hizo un giro en un cajero automático, nunca hizo un pago mediante transferencia, nunca ocupó su tarjeta de débito, incluso viajando al extranjero, pidiendo préstamos bancarios según la propia declaración de su mujer y, además, invirtiendo en fondos mutuos, como quedó de manifestó con el análisis financiero y patrimonial realizado a su respecto, durante ese mismo período. Con esas operaciones necesariamente se deben conocer los saldos e incluso los movimientos en detalle, por eso, de acuerdo a la lógica y máximas de experiencia, el desconocimiento de ellos es imposible descartándose la hipótesis planteada por los acusados y su defensa.

En consecuencia es un hecho asentado en los indicios indicados y no en meras conjeturas o sospechas, que Víctor Quezada sabía al igual que su pareja Carolina Cornejo los traspasos de dinero entre las cuentas en cuestión, mecanismo lucrativo que les reportó considerables ingresos, los que también fueron acreditados con los informes de análisis financiero y patrimonial sumados a la declaración de los funcionarios especializados que los realizaron.

Por último, en la misma línea de reprochar la calidad de la investigación, el defensor en el cierre, hizo presente que su representada declaró ante la Fiscalía en febrero de 2022, señalando lo mismo que en juicio y la Fiscalía no realizó ninguna diligencia para comprobar la veracidad de sus dichos, para determinar, por ejemplo, desde qué dirección IP se hacían las transferencias, diligencias que no podía hacer la defensa sino que exclusivamente el Ministerio Público.

Al respecto, baste señalar que la defensa pudo haber solicitado diligencias durante la investigación, pero al parecer no lo hizo y, además, cabe hacer notar que la acusada aseveró haberle entregado a su abogado la documentación de respaldo de sus dichos para entregar al Ministerio Público durante la investigación, pero al parecer no se hizo y luego ofreció en el auto de apertura prueba pericial para el juicio oral, pero en su oportunidad fue retirada, en consecuencia, habiendo la acusada Carolina Cornejo levantado una tesis exculpatoria no aportó ningún antecedente para sostenerla.

DECIMO SÉPTIMO: Calificación jurídica de las premisas fácticas establecidas.

Del texto del artículo 27, letra b) de la Ley 19.913, sanciona al que “adquiera, posea, tenga o use los referidos bienes, con ánimo de lucro, cuando al momento de recibirlos ha conocido su origen ilícito”, se desprende que el sujeto activo puede ser cualquiera y las acciones típicas pueden ser cuatro: adquirir, poseer, tener y utilizar y el objeto material son los bienes de origen ilícito.

Adquirir o poseer implica realizar ciertas operaciones de significación jurídica, comercial o económica y tener o usar son actos meramente materiales y pueden afectar a los autores de los hechos que generaron los bienes y a sus lavadores, que normalmente se valdrán de ellos.

En el presente caso, los acusados adquirieron y poseyeron en sus cuentas bancarias, dinero de origen ilícito, a través del mecanismo que resultó acreditado.

En cuanto al tipo subjetivo, ya se dijo que es un delito doloso porque la norma exige que el sujeto activo haya conocido el origen ilícito de los bienes y al momento de recibirlos, no con posterioridad. Además del dolo, se exige un elemento adicional que es el “ánimo de lucro”.

Conforme a lo razonado en el número 3 del considerando anterior, el tribunal dio por establecido que concurrió dolo y ánimo de lucro en el proceder de los acusados, argumentos que se darán por reproducidos.

IV.- EN RELACIÓN CON LOS DELITOS DE ASOCIACIÓN ILÍCITA Y RECEPCIÓN IMPUTADOS A DAVID MILLALÉN LLANCAO:

DÉCIMO OCTAVO: Decisión absolutoria respecto del delito de asociación ilícita.

Que en el veredicto se decidió absolver al acusado David Millalén Llancao de los cargos atribuidos por el Ministerio Público, de ser autor de asociación ilícita, por cuanto se consideró por los juzgadores que las premisas fácticas que fundaron la acusación a su respecto no resultaron acreditadas ni, por ende, su participación en dicho ilícito penal.

En efecto, el Ministerio Público lo sindicó como quien obedecía instrucciones del imputado Juan Navarrete Vásquez, bajo la dirección de Yerko Silva Toro, y participaba en la exhibición y venta de autos robados junto a otros miembros de la asociación.

Respecto de la imputación fiscal, lo primero que llamó la atención, es que se refería a una pluralidad de vehículos robados, y que la participación de Millalén en la asociación ilícita materia del presente juicio, estaría dada por la exhibición y venta de ellos. Sin embargo, ni el nombre del acusado ni su persona, aparecieron en alguna de la abundante y diversa prueba que rindió el persecutor, ya fuese, testimonial, documental, evidencia material, grabaciones de interceptaciones telefónicas, fotografías o audios de los celulares incautados de los demás acusados, que diera cuenta que David Millalén hubiese realizado actividades o labores propias del rubro delictivo de la asociación, particularmente, que haya exhibido y vendido a terceros varios vehículos con otros miembros, de los cuales se desconocían mayores antecedentes porque el libelo acusatorio omitió identificarlos.

Sin perjuicio de lo expuesto, el tribunal decidió condenar a David Millalén como autor del delito de receptación del vehículo Nissan Qashqai, placa patente LPHB.53, que fue reinscrito y blanqueado por miembros de la organización liderada por Yerko Silva Toro, precisamente, porque si bien este delito pudo haberse perpetrado en el contexto de la actividad ilícita de la asociación, evidentemente se trató de un hecho aislado y puntual en el cual el sujeto activo se vio involucrado, sin que ello necesariamente importe ser miembro de la misma y/o tener conocimiento de su existencia.

En consecuencia, no habiéndose acreditado su participación en el delito de asociación ilícita establecido en la presente causa, se le absolverá de los cargos formulados en ese sentido.

Decisión condenatoria respecto del delito de receptación de vehículo motorizado.

Que en lo que concierne al delito de receptación de vehículo motorizado, respecto del Station Wagon marca Nissan, modelo Qashqai, de color blanco, año 2019, patente LPHB.53, se estableció en el

veredicto como un hecho de la causa que el acusado David Millalén Llancao, fue controlado y detenido por funcionarios de la PDI a bordo de dicho vehículo como conductor, el día 23 de enero de 2020, en la vía pública, suceso que fue reconocido por el acusado Millalén, pero negando haber tenido conocimiento de que se trataba de un vehículo robado y adulterado.

En consecuencia, la cuestión controvertida quedó circunscrita a la existencia del elemento subjetivo del tipo del conocimiento directo o indirecto del origen ilícito del vehículo que mantenía en su poder.

Por otra parte, con prueba documental introducida y el testimonio de la víctima del robo, Hosmer José García Marcano, quien dio su testimonio en el juicio referido a la sustracción de su vehículo, sumado el encargo policial respectivo, se acreditó que el vehículo singularizado, fue reinscrito con una factura de la Automotriz Guillermo Morales SPA, una de las empresas automotoras ficticias utilizadas por la asociación, y se logró determinar la placa patente real, KYDV.97, asociada a un vehículo de las mismas características, que fue objeto de un robo con intimidación que afectó a su propietario el día 16 de diciembre de 2019.

El acusado Millalén, en su declaración ante el tribunal, intentó justificar la tenencia del vehículo robado, señalando que Juan Navarrete -a quien conocía de niño por ser amigo del padre y además por ser vecino- le pidió el favor de mostrar el móvil que tenía estacionado afuera de su casa, a un tercero que estaba interesado en comprarlo, a quien le entregó su número de teléfono para que lo contactara, versión consistente con la señalada por el oficial de caso y con lo declarado por Juan Navarrete.

En efecto el oficial de caso Pedro Olivares, señaló que cuando ya tenían varios vehículos incautados, confeccionaron un listado o "torpedo" con una gran cantidad de patentes y, además, veían en Santiago muchos vehículos de un valor superior a \$15.000.000 que eran conducidos por personas que no correspondían. Fue así como en el sector de Avda. Brasil cerca de una Shell visualizaron un vehículo, Nissan Qashqai, de color blanco, que estaba dentro del listado. Dijo que se hizo un control y el conductor era David Millalén, quien señaló que Juan le pidió el favor de mostrar el vehículo, desconociendo su origen, pero como estaba en el listado tenían la certeza de que era robado y clonado. Entonces, comentó, revisaron el vehículo y se encontró documentación de otra empresa asociada a Juan Navarrete. Acotó que el vehículo fue incautado y resultó que tenía encargo por robo.

El testigo Olivares reportó que a Millalén lo trasladaron a la unidad policial a la espera del peritaje, se estableció la verdadera identidad del móvil y a este se le informó que el vehículo era clonado, siendo apercibido por indicación del Fiscal Gana, pues no tenían antecedentes de su participación en la organización, por lo que pensaron que era un "goma" que le pagaron una suma menor de dinero.

Reconoció la evidencia material 107 que eran las placas patentes que portaba el vehículo controlado, LPHB.53, levantadas el 23 de enero de 2020, día del procedimiento. También reconoció la evidencia material 108, de la misma fecha, que correspondía a la documentación de la empresa Comercial Gildemeister Spa, creada el 20 de enero de 2020, es decir, 3 días antes; tres contratos de la Tía Rica a nombre de Juan Navarrete (aparecía su cédula de identidad con su domicilio), quien en ese momento no era un blanco investigado de la organización. Agregó que también había un presupuesto de una bomba de agua

de un Mercedes Benz a su nombre y boleta electrónica de Nelson Baeza Gutiérrez, por firma electrónica, y la persona que la pagaba era Eduardo Sanhueza Pérez, socio de la empresa Gildemeister Spa y por último, los códigos provisorios del SII que se dieron para la creación de la empresa. Los demás documentos, concluyó, eran los asociados al Nissan Qashqai, vale decir, permiso de circulación, seguro obligatorio, certificado de homologación que estaba plastificado, sin embargo, vieron el papel sin el plastificado y se notaba una diferencia en textura que después resultó ser falso de acuerdo al análisis por parte del laboratorio.

Y finalmente, el testigo reconoció dos fotografías del vehículo en comento, introducidas como OMP 689, señalando que al interior de éste se encontró la evidencia que tuvo a la vista.

El tribunal descartó la explicación que dio el acusado Millalén, ya que no es creíble ni verosímil que sabiendo que el vehículo que le pasó su amigo Juan Navarrete no era de su propiedad, aceptó exhibirlo a un tercero sin indagar quién era el dueño y sin constatar si el vehículo tenía los documentos, cuestión que es esencial al momento de ofrecer y exhibir un vehículo para la venta y finalmente, porque a pesar de que el interesado tenía su número de celular y se comunicó con él, confirmándole su asistencia al lugar acordado, éste no habría concurrido, según su propio relato; circunstancias que constituyen indicios que sumados a los audios de Yerko Silva del mismo día, en que se refería a la pérdida del vehículo a cargo del “primo” de Juanito, aludiendo evidentemente a Millalén, condujeron, de manera lógica e inequívoca, a la conclusión de que el acusado Millalén Llancao, fue reclutado por Juan Navarrete a fin de mostrar el vehículo a un futuro comprador, como era la forma normal de operar de la asociación y, además, considerando que él no pudo hacerlo personalmente porque viajó a Puerto Montt ese mismo día a visitar a Yerko en la cárcel, como se acreditó en la causa a propósito del delito de asociación ilícita y, por ende, el acusado sabía o no podía menos que saber el origen ilícito del vehículo que tenía en su poder.

V.- RESPECTO DE LOS DELITOS DE TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO Y DE MUNICIÓN IMPUTADOS A DAVID MILLALÉN LLANCAO.

DÉCIMO NOVENO: Decisión condenatoria respecto del delito de tenencia ilegal de arma de fuego.

Que en el contexto de la ejecución de la orden de entrada y registro al domicilio de David Millalén Llancao, ubicado en Sara Gajardo N°6449, comuna de Cerro Navia, el día 16 de octubre de 2020, según los testimonios contestes de los oficiales de la BIRO René Juárez Maureira y Cristóbal Soto Figueroa, que realizaron la diligencia, encontraron en el dormitorio del encausado el armamento y menciones que se pasa a describir: 1.- un revolver Taurus, calibre 38 mm con 6 cartuchos en su interior del mismo calibre; 2.- una pistola marca CZ, calibre 9 mm con 12 cartuchos del mismo calibre; 3.- una pistola Brevette, calibre 32 mm con 7 cartuchos del mismo calibre; 4.- 25 cartuchos calibre 9 mm, un cartucho calibre .57 magnum, un cartucho calibre .357 Winchester, un cartucho de escopeta calibre 20 mm y dos cartuchos de escopeta calibre 16 mm.

El armamento y las municiones fueron analizados por el perito armero Jaime Olguín Leiva, quien apoyado en fotografías, expuso en juicio que determinó que todos eran aptos para el disparo.

Además, consultada la Dirección General de Movilización Nacional, el acusado no tenía armas inscritas a su nombre ni contaba con autorización para portarlas.

Por su parte, el propio acusado al prestar declaración en juicio, corroboró la tenencia de las armas y municiones y que no contaba con los permisos correspondientes.

Consecuente con los hechos que han tenido por acreditados, concurre la agravante especial, contemplada en el artículo 12 de la Ley 17.798, por cuanto se cometió el delito con más de dos armas de fuego.

Decisión condenatoria respecto del delito de tenencia ilegal de arma de fuego.

Ahora bien, en lo que concierne a la tenencia ilegal de municiones, el tribunal decidió absolverlo, en atención a que de los 30 cartuchos que mantenía aparte de las armas cargadas con munición en su interior, 25 cartuchos eran de calibre 9 mm, es decir, compatibles con la pistola marca CZ del mismo calibre.

Así las cosas, al no haber duda respecto de la coincidencia en el calibre de la mayoría de las municiones y de las armas, y teniendo presente que de los otros 5 cartuchos restantes, tres eran de escopeta de perdigón múltiple, por lo que su peligrosidad resultaba marginal o irrelevante para el bien jurídico protegido, se concluyó de forma unánime por el tribunal que, en este caso, el injusto de la tenencia de las municiones se subsumía en la tenencia de las armas de fuego, lo que constituye en rigor un concurso aparente de leyes penales, que se resuelve a través de la aplicación del principio de consunción o subsunción, en la medida que el disvalor del delito de tenencia ilegal de municiones aparece subsumido por el delito de tenencia de arma de fuego, pues éste último absorbe el disvalor o la reprobación jurídica del primero.

VI.- RESPECTO DEL DELITO DE TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO IMPUTADO A CAMILO SANDOVAL GODOY.

VIGÉSIMO: Valoración de la prueba y hechos punibles acreditados.

Que, al igual que en el caso del acusado Millalén, en el marco de la ejecución de la orden de entrada y registro a su domicilio, ubicado en los Arrayanes N°6850, en la comuna de Lo Prado, el día 16 de octubre de 2020, según los testimonios contestes de los oficiales de la PDI Diego Caroca Donoso, Leonardo Colipán Bravo, Francisco Saavedra Cerda y Paulina Norambuena Sepúlveda, que participaron en la diligencia, encontraron en el segundo piso donde residía el encausado, encima de la mesa del comedor, **un revolver marca Taurus calibre 32 mm, con seis cartuchos en su cargador**, además, de unos walkie talkie, celulares y en una mochila, un inhibidor, antenas, guantes y una baliza.

Examinados el armamento y las municiones por el perito armero Jaime Olguín Leiva, el que expuso en juicio, apoyado en fotografías, que estableció que eran aptos para el disparo, y consultada la Dirección General de Movilización Nacional, el acusado no tenía armas inscritas a su nombre ni contaba con autorización para portarlas.

Si bien el acusado Sandoval Godoy no prestó declaración y su defensa pretendió atribuirle la tenencia del arma al amigo que estaba pernoctando en su domicilio casualmente el día del allanamiento, de

nombre Jorge Jara Quiroga, el tribunal estimó que se encontraba plenamente probado el hecho punible y la participación de Sandoval.

En primer lugar, porque el arma estaba en su domicilio, en el segundo piso donde residía de forma independiente del 1er piso donde vivía su padre, a simple vista sobre la mesa del comedor, ámbito privado del cual detentaba pleno control y dominio, como se demostró en las fotografías incorporadas en OMP 80 y 81 con los testimonios de los oficiales ya referidos.

Y en segundo término, porque el armamento que se encontraba argado, estaba junto a otros elementos conocidamente utilizados para cometer el delito de robo, tales como, inhibidores, balizas, walkie talkie, cuestión que necesariamente debe vincularse con las grabaciones de las escuchas telefónicas referidas a que Sandoval portaba armas de fuego y los audios e imágenes levantadas de su teléfono celular, incautado en un procedimiento por receptación de vehículo donde fue detenido, que contenía suficiente material audiovisual relativo a robos con intimidación o violencia de vehículos motorizados del tipo “encerronas”, que daban cuenta de su participación junto con otros sujetos.

Acorde con lo anterior, el arma de fuego cargada con municiones -aptos para el disparo y sin que el encausado la tuviera inscrita a su nombre-, hallada en la diligencia de la entrada y registro verificada a su domicilio, es concordante y consistente con las actividades delictivas a las que se dedicaba.

A mayor abundamiento se tuvo, especialmente, presente que el testigo Diego Caroca indicó que se entrevistó a Jorge Jara Quiroga, quien señaló que era amigo de Camilo y que andaba viendo a una polola que vivía cerca, por lo que le pidió quedarse esa noche. Mientras que el subcomisario Francisco Saavedra, a cargo del procedimiento, quien ingresó directamente al segundo piso de la vivienda, detalló que Camilo Sandoval abrió la puerta e inmediatamente le exhibió la orden de detención informándole el motivo de ésta y que en una de las habitaciones encontraron acostado al sujeto identificado como Jorge Jara Quiroga.

En relación con este delito, el defensor de Camilo Sandoval, alegó que no se aportó prueba de cargo respecto de la supuesta tenencia y que no haya tenido el carácter de esporádica. El profesor Politof señala un concepto clave para determinar el concepto normativo de la posesión o tenencia, que es la esfera potestativa. Así podrán existir situaciones en las cuales el arma, de hecho una persona la sostiene y sin embargo no la posee o tiene para efectos jurídicos penales, por cuanto no ha salido de la esfera potestativa de quien se la entrega, siendo eso una tenencia fugaz y atípica.

El tribunal desestimó dicha alegación, pues se refiere a una situación muy distinta a los hechos que se imputaron a Sandoval y que finalmente se tuvieron por acreditados. En efecto, se estableció que Sandoval tenía el arma de fuego junto con otros elementos conocidamente utilizados para cometer delitos de robo, en su propio domicilio, en la mesa del comedor de su residencia, que es un ámbito privado sobre el cual tiene control absoluto y facultades potestativas, de lo cual se deriva la tenencia penalmente relevante, alejándose por completo del ejemplo que dio el defensor.

Ahora bien, no es un hecho controvertido que la noche del allanamiento se encontrara un tercero en el domicilio de Sandoval, quien justificó su presencia en el lugar, considerada como suficiente por el

persecutor para decidir su libertad en este procedimiento, pues lo esporádico y circunstancial precisamente fue su estadía en el domicilio de Sandoval, y el testimonio del padre del acusado no tuvo el valor para demostrar que este sujeto haya ingresado la mochila que se encontró junto al armamento, con otros elementos para cometer robo ni menos aún para suponer que el arma la portaba él dentro de esa mochila, pues, además de ser un testigo parcial desde que es el padre del acusado, como describió los hechos difícilmente pudo haber visto con certeza ni constarle que la mochila la portaba el amigo y no su propio hijo, siendo sus declaraciones meramente especulativas.

Por lo mismo, es irrelevante la dependencia del domicilio en que se encontraba Sandoval al momento de la entrada de los funcionarios, en relación con el armamento, ya que no cae la tenencia porque él no se encontrara en ese momento cerca del arma, así como tampoco, el tribunal visualizó contradicciones por parte de los funcionarios que participaron en la diligencia porque a cada uno le correspondió realizar distintas labores y por ello tuvieron distintas perspectivas para percibirla.

Finalmente, el defensor alegó que el perito Jaime Olgún al ser consultado respecto de dónde fue recogida y levantada el arma para ser puesta en la cadena de custodia 6194548, indicó que fue levantada en el sitio del suceso, ubicado en Los Castaños, domicilio distinto a donde fue detenido su representado, en Los Arrayanas 6850, comuna de Lo Prado y no en Los Castaños como estaba indicado en esta cadena de custodia.

En relación con lo dicho, el tribunal se preguntó si lo que pretendía el defensor, con su alegación, era generar dudas acerca de que el arma de fuego levantada en el domicilio de Camilo Sandoval no era la misma que fue analizada por el perito. Sin embargo, lo cierto es que el error de transcripción del nombre de la calle que fue corregido en la misma cadena como aclaró la Fiscal, a juicio de los juzgadores, no afectó en nada la concordante y sólida prueba de cargo, en orden al hallazgo del arma, su incautación y posterior pericia balística que determinó que era apta para el disparo.

VII.- RESPECTO DE LOS DELITOS DE ASOCIACIÓN ILÍCITA, RECEPCIÓN Y ESTAFA ATRIBUIDOS A GERMÁN DUARTE PEREIRA.

VIGÉSIMO PRIMERO: Valoración de la prueba y duda razonable:

Que, el tribunal adoptó en el veredicto una decisión absolutoria a favor de Duarte Pereira, y para ello se tuvo en consideración la propia descripción fáctica de la acusación, en que el persecutor señaló que “con ocasión de la asociación ilícita, desempeñando funciones en ella, el acusado solicitó la primera inscripción y primera adquisición de diversos vehículos y, al menos, participó activamente en las maniobras de engaño que resultaron en la compraventa de un vehículo a la víctima de buena fe que, engañada de esta forma, adquirió dicho vehículo, pagando por éste y siendo perjudicada en un monto superior a las 40 UTM, siendo reconocido por la víctima junto a Tatiana Arana. Vehículo que para tal efecto mantuvo en su poder y comercializó, sabiendo o no pudiendo menos que saber que éste había sido previamente sustraído y adulterado de la forma ya señalada”.

Respecto de la imputación fiscal, lo primero que se debe señalar es que no se probó que Duarte Pereira formara parte de la asociación materia del presente juicio, por cuanto ningún medio probatorio de los aportados al juicio, testimonial, documental, evidencia material, grabaciones de interceptaciones telefónicas, fotografías o audio de los celulares incautados de los demás acusados, se refería directa o indirectamente a que este haya realizado actividades o labores propias del rubro delictivo de la asociación y, particularmente, haya servido como testaferro o “goma” para la reinscripción de vehículos, en calidad de primer adquirente o solicitante de 1ª inscripción. Cuestión que ha quedado totalmente descartada.

En consecuencia, no habiéndose acreditado su participación en el delito de asociación ilícita establecido en la causa, se le absolverá de los cargos formulados en ese sentido.

Ahora bien, lo que sí se probó respecto de Germán Duarte, mediante las declaraciones de los oficiales de caso, es que, sin ser un blanco investigado dentro de la asociación, su nombre surgió durante el curso de la investigación, vinculado específicamente a dos vehículos robados y reinscritos con facturas de las empresas automotoras falsas utilizadas por la asociación investigada, como segundo adquirente o comprador.

Se trata del vehículo Station Wagon Kia, modelo Sportage, de color rojo fuego, patente KVTB-46, cuya verdadera identidad fue determinada pericialmente y asociada a la patente KXRF.65. Y Station Wagon Mazda, modelo CX-5, de color blanco perla, patente LCPX-63, cuya verdadera identidad fue determinada pericialmente asociada a la placa patente KPZL.25. Ambos vehículos con encargo vigente por el delito de robo con intimidación, conforme a los formularios que se adjuntaron a las denuncias respectivas. Además, ambos vehículos fueron comprados por Germán Duarte como segundo adquirente y vendidos por éste a terceros, ya que declaró en juicio que por un tiempo se dedicó a la compraventa de vehículos, corroborado esto con los documentos justificativos de dichas compraventas, los documentos inherentes a los vehículos, las facturas y solicitudes de 1ª inscripción y de transferencia acompañadas.

En la misma línea, que el acusado se dedicara a comprar y vender autos usados, fue corroborado por los testimonios de descargo de su señora e hijo y, además, acompañó documentos correspondientes a la compraventa de otro vehículo que hizo en el año 2020.

Asimismo, el acusado declaró en juicio que fue víctima de estafa al comprar esos dos vehículos robados y clonados, ya que tomó los resguardos pertinentes, obteniendo el respectivo certificado de inscripción, un autofact con el historial de estos, e incluso concurriendo con los automóviles a una Comisaría de Carabineros para consultar las patentes, no teniendo ningún problema, por lo cual, procedió a la compra. También explicó que les pedía a los vendedores que le dieran un poder notarial para vender los vehículos y así mantenerlos con un solo dueño a efectos de facilitar su comercialización, lo que constituiría una práctica habitual entre quienes se dedicaban a esta actividad comercial.

En ese contexto, respecto del primer móvil, el Kia Sportage, Duarte lo compró en enero de 2019 al 1er adquirente Juan Pablo Olivares Fuentes, quien para comprobarlo, además, acompañó copia de vale vista de 8 de enero de 2019, tomado a favor del vendedor por \$11.000.000, y a los pocos días, lo vendió a Ricardo

Zepeda Trigo, valiéndose de un poder otorgado por Olivares, dando el comprador un vehículo de su propiedad en parte de pago y una cantidad de dinero en efectivo.

Dado que era un hecho no controvertido el origen ilícito del vehículo producto de robo y que este había sido reinscrito con una factura de la Automotora Bilbao SPA, que correspondía a las usadas por la asociación ilícita, obteniendo una nueva identidad, la controversia se centró en determinar si Duarte tenía conocimiento del origen ilícito del vehículo y consciente de ello, procedió a la venta fraudulenta a un tercero de buena fe.

Para dicho efecto, el órgano acusador presentó el testimonio de la víctima Ricardo Zepeda Trigo, quien concordando con Duarte señaló que éste tenía un poder de Juan Pablo, cuñado de Duarte según le comentó, el que le había dado el vehículo en parte de pago por la venta de una panadería. Agregó que le llamó la atención que cada 5 o 10 minutos lo llamaban por teléfono, indicando éste que era su señora y le mostró su foto en el celular. La víctima también señaló que no pudo sacar el permiso de circulación porque la patente no aparecía vigente para el pago, entonces, llamó a Duarte insistentemente pero no contestó, le mandó correos y whatsapp pero nunca lo logró ubicar. Por último, expuso que reconoció al vendedor y a la mujer que le mostró en el celular en las fotografías que le exhibieron.

La declaración anterior y el reconocimiento fotográfico realizado por la víctima, respecto del vendedor Germán Duarte y de su supuesta señora, Tatiana Arana, fueron corroborados por el oficial de caso Larry Caro.

Consecuente con lo señalado, el principal elemento incriminatorio que el Ministerio Público hizo valer en contra de Germán Duarte, es el reconocimiento fotográfico efectuado por Ricardo Zepeda Trigo de Tatiana Arana Espinoza, brazo operativo de la asociación ilícita, identificándola como la mujer que vio en la imagen del celular de Duarte, siendo de tal relevancia dicho reconocimiento que permitió al persecutor conectar a Duarte con la asociación y como miembro de esta, desempeñar funciones en la venta de los vehículos robados.

La defensa cuestionó el valor probatorio de tal reconocimiento, en la medida que consideró que por la metodología aplicada y el tiempo transcurrido, no podía dar certeza de exactitud ni de corrección. Pues bien, el tribunal compartió el reproche de la defensa, partiendo de la base que Zepeda dijo haber visto una imagen de una mujer de cuerpo entero en el celular y cuatro meses después habría reconocido a la misma mujer en fotografías de rostro en blanco y negro, además, dio características físicas muy generales e incluso señaló que era parecida a la acusada Carolina Cornejo, de tez blanca y rubia, es decir, podría haber reconocido a cualquiera otra mujer con esa vaga descripción, de lo que se sigue que la exactitud y certeza del reconocimiento es feble y susceptible de una alta probabilidad de error.

Por otra parte, es dable preguntarse ¿por qué Germán Duarte tendría una fotografía de Tatiana Arana Espinoza en su celular? Y de haber sido así ¿qué necesidad tenía de hacerla pasar por su señora? Si se supone que estaba realizando una venta fraudulenta de un vehículo que sabía era robado, la lógica indica que habría tratado de no despertar sospechas ni entregar más información de la necesaria. Las interrogantes

planteadas no encuentran respuestas en la escasa prueba rendida por el Ministerio Público en contra de Duarte.

Ahora bien, desestimado el valor probatorio del citado reconocimiento, los dichos de la víctima en torno a que Duarte durante la venta estaba nervioso y lo llamaban reiteradamente para preguntarle cómo iba, no deja de ser una apreciación o percepción sensorial del observador.

Por otra parte, la víctima también dijo que al tener dificultades con la obtención del permiso de circulación, trató de comunicarse insistentemente con Duarte sin éxito, situación que podría ser indiciaria del conocimiento que Duarte tenía de la ilicitud del vehículo porque desapareció después de la venta y, en consecuencia, del propósito de engañar al comprador, lo que si bien despertó sospechas en el tribunal acerca de la eventual participación del acusado en los delitos de receptación y estafa, atendido, además, las particulares circunstancias que rodearon la venta, lo cierto es que únicamente los dichos de la víctima sobre estos puntos, sin corroboración alguna y sin existir otros indicios, no son suficientes ni satisfacen el estándar legal de convicción exigido para condenarlo como autor de los delitos imputados.

Con respecto al segundo vehículo, el Mazda CX-5, el acusado Duarte señaló que lo adquirió en febrero de 2019 a la 1ª adquirente Carolina Gallegos, vale decir, un mes después que el Sportage, también pidió un poder a la vendedora pero terminó inscribiéndolo a su nombre y a los dos meses, lo vendió a través de un poder otorgado a un amigo de su hijo de nombre Rodrigo, quien lo ofertó junto con otro amigo de nombre Martín, pero que personalmente concurrió a la venta incluso conversó con el comprador.

En este caso, a diferencia del anterior, el comprador Simón Díaz Santis, no prestó testimonio directo en juicio, sino que la testigo Raquel Forero, entrevistó a su pareja, Camila Gatica y el testigo Álvaro Pino, se refirió a la compra que hizo el Sr. Díaz, destacando que ninguno mencionó que Duarte haya estado presente durante la compraventa, realizándose el negocio con Rodrigo Vásquez, mandatario del dueño, quien recibió el dinero.

El tribunal estimó que la prueba rendida por el Ministerio Público, constituida por testimonios de oídas, resultaba insuficiente para tener por acreditados los presupuestos fácticos de los delitos atribuidos, pues el testimonio de la supuesta víctima era esencial a fin de aclarar las circunstancias particulares de las maniobras de engaño que derivaron en el error, dado que en dichas actuaciones estuvieron involucradas dos personas que tampoco declararon, por lo que, en tal escenario para el tribunal surgió una duda razonable acerca del conocimiento que pudo haber tenido el acusado Duarte acerca del origen ilícito del vehículo y, por ende, acerca del propósito de estafar a terceros con su venta.

Consecuente con lo razonado, se le deberá absolver de los cargos formulados en su contra como autor de receptación y estafa respecto de los vehículos señalados.

VIGESIMO SEGUNDO: Participación culpable de los acusados que resultaron condenados.

Que con los mismos medios de prueba, que ya han sido expuestos latamente y valorados en esta sentencia, a propósito de los delitos de asociación ilícita, delito tributario, receptaciones y estafas y lavado de activos, ha quedado establecida la participación que como autores, conforme a lo previsto en el artículo 15 N°

1 del Código Penal, les ha correspondido a los encausados en cada uno de los delitos por los cuales el tribunal ha decidido condenarlos y, en el caso de Yerko Silva Toro, Albano Silva Toro, Ilich Chopa Aldana, Juan Navarrete Vásquez y David Millalén Llancao, el tribunal, además, ha tomado en cuenta sus declaraciones prestadas en juicio, en la medida que dieron cuenta de hechos, situaciones y actividades que, con prescindencia del sentido o interpretación que les otorgaron, contribuyeron a formar convicción para asentar los hechos punibles y sus intervenciones, por haber tomado parte en su ejecución de una manera inmediata y directa.

Cabe señalar que el tribunal consideró que la participación de Yerko Silva Toro en los delitos de receptación, estafa y apertura de giros con antecedentes falsos ante el SII, correspondía también a la de autor directo, pues no obstante haber estado privado de libertad durante todo el período en que operó la asociación ilícita, lo que obviamente limitaba su margen de acción, igualmente manejaba el giro delictivo a distancia a través de su teléfono celular, como quedó de manifiesto con el análisis del contenido de éste, dispositivo que le permitía comunicarse con terceros para seleccionar y comprar vehículos robados, constituir empresas falsas y facturar, publicar en las plataformas de internet y ofertar vehículos, negociar precios de venta y coordinar exhibiciones con interesados, acciones constitutivas de los delitos indicados que Yerko Silva realizaba personal y directamente; sin perjuicio que también actuaba como autor inductor conforme al N° 2 del artículo 15 del código punitivo, respecto de otras gestiones que en razón de su reclusión no podía efectuar materialmente y de propia mano, para cuya ejecución contaba con los brazos operativos de la asociación.

VIGÉSIMO TERCERO: Alegaciones de las defensas no resueltas en las motivaciones anteriores.

Como ha quedado de manifiesto en los considerandos anteriores de esta sentencia, el tribunal se hizo cargo expresa o implícitamente de todas las alegaciones y defensas, ya fuesen fácticas, probatorias o jurídicas, planteadas por los respectivos defensores, al efectuar la valoración de la prueba, dar por establecidos los hechos y la participación de los acusados y, en definitiva, en sus razonamientos jurídicos.

Sin perjuicio de ello, en esta instancia, se emitirá pronunciamiento acerca de algunas alegaciones específicas de los defensores, que concitaron la atención del tribunal.

Una alegación común de los defensores de Yerko y Albano Silva Toro, respecto de la inexistencia del delito de asociación ilícita, fue que los supuestos integrantes de esta organización no todos se conocían entre sí y que algunos hacían negocios ilícitos paralelos, siendo un requisito que todos ellos se conocieran entre sí como pertenecientes a un conjunto que compartía objetivos comunes.

Frente a esta afirmación, valga decir que en los considerandos precedentes quedó suficientemente demostrado que los acusados no solo se conocían sino que interactuaban y se comunicaban, y obviamente se reconocían como pertenecientes al colectivo, desde que sabían las tareas que cumplían y las que cumplían los otros, se demostró que conocían y buscaban en conjunto un mismo objetivo. Y que se hayan

cometido ilícitos aparte no obsta a la existencia de la asociación como estructura ni al acto decisorio individual de pertenecer a ella.

La defensora de Ilich Chopa, aseveró que una vez que su representado recuperó su libertad, nunca más tuvo contacto con Yerko o con algún otro miembro, salvo hechos específicos y puntuales que él mismo reconoció en su declaración y posteriormente se dedicó a vender algunas facturas. Sin embargo, esta afirmación quedó desvirtuada con la evidencia aportada en el juicio, entre otras, las fotografías que lo vinculaban a Camilo Sandoval, que estaban en el celular de Camilo y en su propio celular, las transferencias y depósitos entre ellos, con Claudia Sandoval (que manejaba los dineros de Yerko), Franco Cruz y otros, la compra de las firmas electrónicas para la creación de dos empresas que constituyó Sebastián Martínez por encargo de Yerko Silva.

En el alegato de clausura, el defensor de Camilo Sandoval, aseveró que la evidencia presentada en juicio no ha logrado acreditar que los vehículos pasaran por las manos de su representado o que haya tenido la posesión o la capacidad de disponer de los mismos, o un control directo sobre estos vehículos. Pero al parecer el defensor olvidó las fotografías contenidas en su celular, donde aparecían varios automóviles, incluso uno que se ofrecía en una locación cerca de su casa, así como también, los audios de las interceptaciones telefónicas en que le ofrecían vehículos robados para adquirir o para vender.

También sostuvo que su representado en ningún momento tuvo contacto con miembros de esta supuesta organización, por lo que no existió por su parte ningún sentido de permanencia. Pero se probó que tenía contacto, en relación con las operaciones delictivas, con Ilich Chopa, Tatiana Arana, Franco Iligaray, Aimel Gavilán, Roberto Bascur, etcétera.

Finalmente, el defensor de Juan Navarrete, alegó en el cierre, que su representado solamente ayudaba a realizar algunas labores menores, como acompañar a acusados a la venta de vehículos y simplemente traer el dinero de vuelta, como quedó demostrado en la venta del vehículo Hyundai Tucson, patente LJPX.58.

Sin embargo, dentro de la dinámica y el proceso del rubro delictivo, estas labores precisamente constituían una función principal y relevante, que denotaban cierto liderazgo y control tanto en la operación de reinscripción de vehículos –a cargo de la persona o personas que servirían como palos blancos- y en la venta de los mismos, recibiendo nada más ni nada menos que el dinero de la transacción, para luego dar cuenta a la jefatura ejercida por Yerko Silva, quedando en evidencia que éste era una persona de confianza a quien delegaba labores trascendentes del negocio ilícito llevado a cabo por la asociación.

VIGÉSIMO CUARTO: Prueba desestimada.

Que, los medios de prueba que se enunciaron en el considerando quinto de la presente sentencia y que no fueron mencionados expresamente en los motivos donde se desarrolló el análisis y valoración de la prueba, no incidieron en las conclusiones ni la convicción alcanzadas por el tribunal, por tanto serán desestimados, en atención a su falta de pertinencia en relación con los hechos materia de la acusación, o su desconexión con los demás elementos probatorios, o por haber resultado innecesarios y sobreabundantes.

En el mismo sentido, será desechada la documental que se refería a oficios remisores de antecedentes requeridos por el Ministerio Público y todo aquel otro medio de prueba o evidencia material considerados redundantes por referirse a puntos suficientemente establecidos, entre otros documentos y elementos agregados al juicio, que no influyeron ni significaron un aporte para establecer los hechos y/o la participación de los condenados.

VIGÉSIMO QUINTO: Audiencia prevista en el inciso final del artículo 343 del Código Procesal Penal.

Que, para mayor orden y comprensión, las solicitudes de penas que efectuaron los intervinientes y sus argumentos, se expresarán por separado, respecto de cada condenado.

I.- En lo que se refiere a Yerko Silva Toro:

El **Ministerio Público** reconoció que le favorecía únicamente la atenuante del artículo 11 N° 9 del Código Penal, esto es, haber colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos y, por lo mismo, solicitó que se le impusiera las siguientes penas:

Por el delito de asociación ilícita, la pena 7 años de presidio mayor en su grado mínimo.

Respecto de las receptaciones y estafas, tratándose de reiteración de delitos de la misma especie, acorde a lo dispuesto en el artículo 351 del Código Procesal Penal, la pena 12 años de presidio mayor en su grado medio y multa del doble del avalúo fiscal de los vehículos receptados.

Por el delito tributario, 7 años de presidio mayor en su grado mínimo, subiendo un grado por la reiteración, conforme al artículo 12 del Código Tributario. En cuanto a la pena pecuniaria, en la acusación se requirió una multa de 2 Unidades Tributarias Anuales (UTA).

Finalmente, por el delito de lavado de activos, la Fiscalía solicitó la pena de 4 años de presidio mayor en su grado mínimo, sin exponer argumento alguno respecto de la rebaja en un grado de la asignada por la ley al ilícito en cuestión. En la acusación, respecto de la pena pecuniaria, pidió una multa de 400 UTM.

La **querellante**, a su turno, invocó en su contra la circunstancia agravante del artículo 111 del Código Tributario, por cuanto Yerko Silva se concertó con su brazo operativo para cometer el delito tributario.

Por ello, pidió la pena de 7 años de presidio mayor a su grado mínimo y multa de 2 UTA, de conformidad a la regla de reiteración del artículo 112 del Código Tributario en relación con el artículo 351 del Código Procesal Penal.

Por su parte, el **defensor** de Yerko Silva, solicitó que se tuviera la atenuante del artículo 11 N° 9 del Código Penal como muy calificada, respecto de todos los delitos por los cuales fue condenado y, de acuerdo al artículo 68 bis del mismo código, pidió se aplicaran a su representado las siguientes penas:

Por la asociación ilícita, 541 días de presidio menor en su grado medio, rebajando dos grados desde el mínimo legal.

Respecto de las receptaciones y estafas, en virtud del concurso medial que fue establecido y de conformidad con el artículo 75 del Código Penal, 3 años y un día de presidio mayor en su grado máximo y multa de 5 UTM.

En cuanto al delito tributario, 61 días de presidio menor en su grado mínimo, ya que a su juicio no habría reiteración.

Respecto del lavado de activos, 61 días de presidio menor en su grado mínimo, solicitando en definitiva la rebaja en tres grados del mínimo legal.

La defensa argumentó para la rebaja de penas solicitada, en términos generales, razones de proporcionalidad, justicia y equidad, ya que otros imputados por los mismos delitos fueron condenados a dichas penas en procedimiento abreviado.

II.- En lo que dice relación con Albano Silva Toro:

El **Ministerio Público**, reconoció que le favorecían dos atenuantes de responsabilidad penal, las previstas en el artículo 11 Nos. 6 y 9 del Código Penal, y en razón de ello, solicitó que se regularan las penas del siguiente modo:

Por la asociación ilícita, 5 años de presidio menor en su grado máximo, rebajando un grado del mínimo.

Por las receptaciones y estafas, en virtud de la reiteración, 10 años de presidio mayor en su grado mínimo y multa de 20 UTM.

Por el lavado de activos, 3 años de presidio menor en su grado medio, solicitando, en específico, la rebaja en dos grados del mínimo legal y multa de 400 UTM.

Por su parte, la **defensa** del condenado, solicitó por el delito de asociación ilícita, la pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo, es decir, en concreto la rebaja en tres grados del mínimo legal, aduciendo razones de justicia y proporcionalidad, en atención a que el Ministerio Público no le ofreció un procedimiento abreviado y esa fue la pena que se aplicó en esos casos.

Respecto del concurso medial entre las receptaciones y las estafas, 3 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio, es decir, la rebaja en un grado del mínimo legal.

Finalmente, por el lavado de activos, 61 días de presidio menor en su grado mínimo, pidiendo implícitamente se rebaje en tres grados del mínimo legal.

Además, atendidas las cuantías solicitadas, que en total no excederían los 5 años, solicitó la pena sustitutiva de libertad vigilada a favor de su representado y dejó a disposición del tribunal un informe psicológico del mismo.

En cuanto a la extensión del mal causado, hizo presente que muchas de las víctimas recuperaron sus vehículos o tenían seguro y éste fue pagado.

Por último, se opuso al comiso de los bienes del restaurante pues señaló que no eran producto del lavado de activos, ya que el Ministerio Público no acreditó la inversión en dichos bienes.

III.- En lo que concierne a Ilich Chopa Aldana:

El **Ministerio Público** hizo presente que no contaba con irreprochable conducta anterior, pero le reconoció la atenuante del artículo 11 N° 9 del Código Penal. Además, invocó la agravante del artículo 12 N°

16 del Código Penal, esto es, haber sido condenado anteriormente por delito de la misma especie, respecto de los delitos de asociación ilícita, receptación y estafa.

El persecutor para acreditar la reincidencia específica incorporó dos sentencias:

1) En causa Rit 2473-2016 del 9º Juzgado de Garantía de Santiago, dictada con fecha 10 de enero de 2018, en que se le condena como autor de asociación ilícita (541 días), receptación de vehículo motorizado (3 años y un día) y estafa (180 días) con libertad vigilada intensiva, delitos cometidos desde septiembre de 2014 a marzo de 2016.

2) En causa Rit 285-2015 del Juzgado de Garantía de Chillán, dictada con fecha 27 de diciembre de 2017, en que se le condena como autor de receptación de vehículo motorizado (541 días) y estafa (61 días) con 602 días de pena remitida, delitos cometidos el 21 de enero de 2014.

Por la asociación ilícita, 7 años de presidio mayor en su grado mínimo, ya que no le afectarían modificatorias por la compensación racional entre ellas.

Respecto de las receptaciones y estafas, 15 años de presidio mayor en su grado medio y multa de 30 UTM, en virtud de la reiteración.

La **defensora** del condenado, a su vez, sostuvo que a su representado le favorecía la atenuante del Art. 11 N° 6 del Código Penal, esto es, su irreproachable conducta anterior, respecto del delito de asociación ilícita.

Para fundamentar lo anterior, señaló que se debía estar al presupuesto fáctico de la acusación, es decir, que los acusados se organizaron a lo menos desde el año 2016 y, en la primera causa, la Rit 203-2003 del Top de Concepción, se dictó sentencia el 26 de junio de 2016, condenado como autor de receptación (200 días) y receptación de vehículo motorizado (3 años y un día). Hizo presente que la indeterminación de la fecha en cuanto al principio de ejecución del delito de asociación ilícita, permitía sostener que su representado no tenía condenas anteriores al año 2016, en que se verificó el principio de ejecución.

Acorde con lo señalado, solicitó que las penas a aplicar se regulen de la siguiente manera:

Por la asociación ilícita, atendido que su representado no tendía agravante e invocó dos atenuantes, la del artículo 11 Nos. 6 y 9, pidió 541 días de presidio menor en su grado medio, es decir, la rebaja en dos grados del mínimo legal.

Respecto del concurso medial entre las receptaciones y estafas, hizo presente que de considerarse la regla de reiteración del artículo 351 del Código Procesal Penal, habría una infracción al principio non bis in ídem, porque se estaría castigando o agravando la pena respecto de su representado dos veces por la misma conducta.

Dicho lo anterior, en primera instancia, en virtud del artículo 75 del Código Penal, la pena mínima asignada por la ley, 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo. Luego, modificó su petición a 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo, mas no argumentó los motivos de la rebaja en un grado del mínimo legal, dado que únicamente le favorecería una atenuante (11 N° 9 CP).

En relación con las multas, sostuvo que la legislación aplicable a la fecha de los hechos, establecía la multa de 5 a 20 UTM, y respecto de la pena pecuniaria también se aplicaría el artículo 75 del Código Penal, por lo que, solicitó se regulara la multa en el mínimo de 5 UTM, teniendo presente lo establecido en los artículos 49 y 70 del Código Penal, en orden a que su representado actualmente también se encuentra privado de libertad cumpliendo dos penas de 5 años y un día y de tres años y un día y, por lo mismo, pidió se le eximiera del pago de las costas de la causa.

IV.- En lo que atañe a Camilo Sandoval Godoy:

El Ministerio Público, reconoció únicamente a su favor la atenuante del artículo 11 N° 6 del Código Penal, por ello, solicitó se le impongan las siguientes penas:

Por la asociación ilícita, 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo.

Por las receptaciones y estafas, 12 años de presidio mayor en su grado medio y multa del doble de la tasación fiscal de los vehículos receptados.

Por la tenencia ilegal de arma de fuego, 5 años de presidio menor de su grado máximo y comiso de las especies incautadas.

El defensor del condenado, por su parte, solicitó al tribunal que considerara a favor de su representado, la atenuante prevista en el artículo 11 N° 7 del Código Penal, vale decir, haber procurado con celo reparar el mal causado, en relación con todos los delitos por los que fue condenado, salvo la tenencia ilegal de arma de fuego.

Para justificarla acompañó un certificado del 5° Juzgado de Garantía de Santiago que daba cuenta de siete depósitos efectuados en nombre de Camilo Sandoval, en diversas fechas durante el año 2021, por un total de \$2.200.000, estando privado de libertad con motivo de la presente causa.

Conforme a ello y teniendo presente que le favorecerían dos atenuantes de responsabilidad penal, solicitó las siguientes penas:

Por la tenencia ilegal de arma de fuego, 3 años y un día de presidio mayor en su grado máximo.

Por la asociación ilícita, 61 días de presidio menor en su grado mínimo, es decir, una rebaja en tres grados del mínimo legal.

Para fundamentar la cuantía solicitada, señaló que la Fiscalía incorporó sentencias dictadas en procedimientos abreviados en contra de coimputados como Freddy Miranda y Sebastián Martínez, que también cumplieron roles en la asociación de la misma envergadura, por lo cual, por un tema de justicia y equidad, solicitaba la imposición de penas similares a las que dichas personas obtuvieron en su oportunidad.

Respecto del concurso medial entre las receptaciones y estafas, teniendo presente la pena asignada al delito y que el marco normativo para efectos es el artículo 449 del Código Penal, solicitó la pena de 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo.

Por último, en cuanto a las multas, indicó que teniendo presente el marco temporal que fijó el tribunal en su veredicto, a contar de marzo de 2017, la legislación aplicable en dicho momento establecía la multa de 5 a 20 UTM, razón por la cual, solicitó una multa de 5 UTM.

V.- En lo atinente a Juan Navarrete Vásquez:

La Fiscalía reconoció a su favor las atenuantes contempladas en el artículo 11 Nos. 6 y 11 del Código Penal, en virtud de ello, solicitó se le apliquen las siguientes penas:

Por la asociación ilícita, la pena de 5 años de presidio mayor en su grado mínimo.

Por las receptaciones y estafas, 10 años de presidio mayor en su grado mínimo, considerando la reiteración, y multa de 30 UTM.

Por el delito reiterado de apertura de giros con antecedentes falsos, del artículo 97 N°23 del Código Tributario, 5 años de presidio mayor en su grado mínimo y multa de una UTA más el comiso de las especies.

La **querellante SII**, indicó que se oponía a la atenuante del artículo 11 N° 9 del Código Penal, por cuanto el condenado declaró que nunca había ingresado a la página del SII y que no sabía lo que era la iniciación de actividades, por lo cual, su declaración no aportó ningún antecedente en orden a establecer la configuración del delito tributario.

Además respecto de Juan Navarrete, al igual que como lo hizo con Yerko Silva, invocó la agravante del artículo 111 inciso 2° del Código Tributario, ya que se concertó con otros miembros de la organización para cometer el delito.

En consecuencia, pidió la pena de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo y multa de una UTM, en virtud de la reiteración de acuerdo al artículo 112 del Código Tributario en relación con el artículo 351 del Código Procesal Penal.

El **defensor** del condenado, considerando las dos atenuantes que favorecen a su representado, solicitó la regulación de las siguientes penas:

Por la asociación ilícita, 61 días de presidio menor en su grado mínimo, rebajando en 3 grados la pena del mínimo legal.

En el caso de las receptaciones en concurso medial con las estafas, 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo.

Respecto de la pena de multa, adujo que como el marco temporal es del año 2017 en adelante, la legislación de la época imponía una multa de 5 a 20 UTM, por lo tanto, solicitó el mínimo de la multa de 5 UTM.

En cuanto al delito tributario, 61 días de presidio menor en su grado medio, solicitando una rebaja implícita de 3 grados del mínimo legal.

Por último, señaló que atendidas las cuantías de las penas solicitadas por su parte, su defendido podría optar a una pena sustitutiva, y acompañó dentro del plazo que se otorgó, un informe presentencial respecto de Juan Navarrete.

VI.- En lo que respecta a David Millalén Llancao:

La **Fiscalía** reconoció a su favor la atenuante del artículo 11 N° 6 del Código Penal respecto de todos los delitos por los que fue condenado y, en virtud de ello, solicitó la imposición de las siguientes penas:

Por la receptación, 4 años de presidio menor en su grado máximo y multa de 15 UTM.

Por la tenencia ilegal de armas de fuego del artículo 9 en relación con el artículo 2, letra b) de la Ley 17.798, la pena de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo, considerando, además, la atenuante del artículo 11 N°9 del Código punitivo, y la agravante del artículo 12 de la Ley 17.798, más accesorias y el comiso de toda la evidencia incautada.

A su turno, el **defensor** del condenado, en relación con el delito de receptación, señaló que tiene un marco punitivo rígido que no permite bajar en grado la pena, por lo cual, solicitó el mínimo de 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo.

Y respecto del delito de tenencia ilegal de arma de fuego, solicitó que la agravante del artículo 12 de la Ley 17.798 no sea considerada, ya que el disvalor del acto ya está contenido en el precepto aplicable respecto de la tenencia de arma, por ello, pidió se le impusiera la pena mínima de 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo.

VII.- En relación con Carolina Cornejo Arriagada y Víctor Quezada Bravo:

El **Ministerio Público** reconoció la atenuante prevista en el artículo 11 N°6 del Código Penal y solicitó se les impusiera, como autores de lavado de activos, la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo y multa de 200 UTM más el comiso de las especies incautadas.

Por su parte, **el defensor** de los condenados, solicitó que el tribunal se considerara a favor de ambos la atenuante del artículo 11 N° 9 del código punitivo.

Respecto de Carolina Cornejo, porque declaró durante la investigación a principios del año 2022, básicamente, reproduciendo todo el esquema de trabajo que tenía dentro del restaurante Alto Machu Picchu, el que fue utilizado por la Fiscalía e incluso incorporado como prueba al juicio, declaración que fue ratificada por ella en el juicio oral.

Respecto de Víctor Quezada, si bien no declaró en el juicio oral, sin embargo lo hizo durante la etapa de investigación, reconociendo ante los funcionarios policiales todos y cada uno de los hechos materiales que forman parte de la acusación.

Por ello, solicitó, en definitiva, la rebaja de pena en un grado, y se aplicara a cada uno la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio.

Además, pidió la remisión condicional de la pena, sin perjuicio de que si se estimara del caso, imponer una pena en el rango de 3 años y un día a cinco años, solicitó la pena sustitutiva de libertad vigilada. Para lo cual, incorporó sendos informes psicológicos de sus representados, suscritos por la perito psicóloga doña Catalina Espinoza. Además, acompañó otros antecedentes sociales y familiares y los certificados de nacimiento de los dos hijos comunes.

Respecto de la multa, pidió el mínimo legal y que se dieran 12 cuotas para su pago.

Por último, solicitó que conforme al artículo 38 de la Ley 18.216, se omitiera esta anotación en el certificado de antecedentes.

El **Ministerio Público**, además, respecto de todos condenados solicitó se les condene a pagar las costas de la causa y que respecto de los que les imponga penas superiores a 3 años y un día, de acuerdo a lo previsto en el artículo 17 de la Ley 19.970, el registro de su huella genética en el sistema nacional de ADN.

Finalmente, que la regulación de las penas, se considerare la extensión del mal causado, conforme a los distintos testimonios que dieron tanto las víctimas de robo como las víctimas de estafa durante el juicio oral, que ilustraron al tribunal acerca de los importantes perjuicios sufridos a causa de los delitos.

En la réplica, el persecutor sostuvo que, respecto de Yerko Silva Toro, se oponía a la aplicación del artículo 68 bis del Código Penal, ya que en su opinión no existía mérito para calificar la atenuante, desde que el condenado negó la existencia de los delitos de asociación ilícita y lavado de activos, y también del delito tributario, sostuvo que esto fue casi un grupo de conocidos que se hacían favores, por eso, reconoció el delito de estafa, pero negó absolutamente los otros delitos.

Respecto de Ilich Chopa Aldana, insistió en la agravante del artículo 12 N° 16 del Código punitivo, respecto del delito de receptación y estafa, ya que la sentencia que fue invocada estaría dentro del período de la comisión de estos delitos. También insistió en que no tenía la minorante del artículo 11 N°6, en relación con el delito de asociación ilícita, considerando que la primera condena es de 26 de junio del año 2016, que también se encontraría dentro del período del año 2016 en adelante como señala la acusación.

Respecto de Camilo Sandoval Godoy, se opuso a la minorante del artículo 11 N°7 del Código Penal, principalmente, porque el Ministerio Público estaba en conocimiento de estos depósitos por un monto de \$2.200.000, desde que fueron hechos, suma que no correspondía siquiera a un milésimo del valor de un auto receptado, considerando que el acusado fue condenado por reiteración del delito de receptación, y que la defensa hizo alusión al gran esfuerzo económico que estaba haciendo la familia del condenado, ante lo cual, no pudo dejar de mencionar que ha estado seis meses en juicio con un defensor privado, pero, independientemente de ello, consideró que el monto es escaso, ya que los aportados por los imputados condenados en procedimientos abreviados, fueron montos notoriamente mayores, alrededor de 10 millones o 7 millones de pesos, por eso, se consideraron como atenuante del artículo 11 N°7 del Código Penal.

Respecto del delito tributario, señaló que los procedimientos abreviados que se efectuaron, no fueron por el artículo 97 N° 23, sino que por el artículo 210 del Código Penal, que tiene una pena notoriamente distinta y una circunstancia totalmente diversa, por lo que no se podía hacer una equivalencia en las penas.

Respecto de Carolina y Víctor, se opuso a la atenuante del artículo 11 N° 9 invocada por el defensor, por los siguientes argumentos:

En cuanto a Carolina Cornejo, porque no hay ningún documento ni otro medio de prueba que haya sido aportado por la condenada durante el desarrollo del juicio, y lo que se le exhibió son planillas Excel del computador incautado a Paula Becerra en su domicilio, las que podían o no tener verosimilitud.

Respecto de Víctor Quezada, porque no prestó declaración y tal como lo señalaron los funcionarios policiales, declaró durante la investigación que sus cuentas las manejaba su pareja, Carolina Cornejo, y que

tenía total y absoluto desconocimiento de los movimientos que ella efectuaba, por lo que no reconoció los hechos materiales, lo que es concordante con lo que declaró Carolina.

VIGÉSIMO SEXTO: Circunstancias modificatorias de responsabilidad penal.

Que el tribunal, siguiendo la misma línea anterior, se pronunciará respecto de cada condenado por separado, acerca de las modificatorias que les favorecen o perjudican.

Respecto de **Yerko Silva Toro**, en el veredicto el tribunal anticipó que se había considerado su declaración prestada en el juicio, para tener por acreditados los hechos constitutivos de cada delito por el que se decidió condenarlo y su participación, la que fue consistente con la prueba de cago incorporada por el persecutor.

En lo que dice relación con el mérito de la declaración de Yerko Silva, es importante destacar que éste fue el primero de los acusados que prestó una larga declaración, siendo sometido a un extenso y acucioso interrogatorio por los fiscales, en cuyo contexto fueron incorporando y exhibiendo abundante prueba. De este modo, el acusado fue reconociendo y explicando cada información contenida en su celular, ya sea documentos, imágenes, videos, contactos, conversaciones y audios de whatsapp, aplicaciones, carpetas, etc., como asimismo, los audios de interceptaciones telefónicas, que se le exhibieron como medios de prueba para acreditar los hechos típicos de los delitos de asociación ilícita, receptaciones y estafas.

Además, cabe hacer notar que las declaraciones de Yerko Silva (estuvo 4 jornadas de juicio declarando), fueron aportadas incluso con antelación a la etapa probatoria en el presente juicio, y sin perjuicio de que este trató de negar la existencia de una asociación y otros elementos del delito tributario, como la realización de la iniciación de actividades y del lavado de activos, por ejemplo, desligándose del restaurante y le dio una interpretación distinta a los hechos o bien los minimizó, lo concreto es que, en el fondo, reconoció los hechos materiales del tipo penal, respecto de todos los delitos.

Así Yerko Silva aportó antecedentes detallados durante la investigación y en el juicio, acerca del inicio de la organización, de sus integrantes, del modus operandi, que contribuyeron a acreditar los hechos ilícitos y su participación en ellos, en concordancia con las sólidas evidencias incorporadas por el Ministerio Público.

En consecuencia, el tribunal resolvió que se configuraba a favor de Yerko Silva Toro la **atenuante del artículo 11 N°9 del Código Penal**, por reunir los presupuestos de ella, ya que se consideró muy relevante, trascendente y vital la colaboración que prestó al esclarecimiento de los hechos a través de sus declaraciones y, además, por las razones explicitadas **se tendrá como muy calificada para efectos del artículo 68 bis del Código Penal**.

Ahora bien, en relación con la agravante del artículo 111 del Código Tributario, invocada por la parte querellante, esta será rechazada, de conformidad con el artículo 63 del Código Penal, por cuanto el concierto previo para perpetrar el delito tributario se encuentra implícito y queda comprendido en el injusto del delito de asociación ilícita, ya que en este caso es el delito marco, ya que el primero se perpetró precisamente con motivo de las actividades de la asociación ilícita.

En el caso de **Albano Silva Toro**, igualmente en el veredicto se adelantó que su extensa declaración constituyó un elemento importante para tener por acreditados los hechos punibles por los que se decidió condenarlo y su participación, no siendo óbice el sentido o interpretación que les dio o en otras palabras, la percepción u opinión personal que tenía respecto de ellos.

En relación con su irreprochable conducta anterior, se acompañó su extracto de filiación y antecedentes exento de anotaciones penales pretéritas y no fue controvertida.

Por consiguiente, se configuraron en beneficio del acusado, las **atenuantes consignadas en el artículo 11 Nos. 6 y 9 del Código Penal**.

En cuanto al condenado **Ilich Chopa Aldana**, en primer lugar, **respecto de las atenuantes**, el tribunal anticipó en el veredicto que su extensa declaración contribuyó, de manera relevante, a la convicción para dar por establecida la existencia de los delitos por los cuales fue condenado y su participación, sin perjuicio de que haya negado ciertos aspectos para pretender exculparse o darle un sentido diferente, razón por la cual también obra en su favor **la atenuante del artículo 11 N° 9 del Código Penal**.

En lo que concierne a la irreprochable conducta anterior, alegada por su defensa, específicamente, en relación con el delito de asociación ilícita, si bien en el veredicto no se fijó expresamente la fecha del principio de ejecución de este delito, el tribunal en el presente fallo, que es la oportunidad procesal idónea, estableció los hechos que dieron origen a la asociación y fijó el principio de ejecución el 27 de diciembre de 2016, en que tuvo lugar el primer hecho material directo, con la constitución de la empresa automotora Orión Ltda.

Consecuente con lo señalado, Ilich Chopa tenía condenas anteriores a la comisión del delito de asociación ilícita, en virtud de la causa Rit 203-2003 del Tribunal Oral en lo Penal de Concepción, que dictó sentencia el 26 de junio de 2016 y lo condenó por los delitos de receptación y estafa, como bien refirió su defensora.

Corolario de lo anterior es que Ilich Chopa no tiene irreprochable conducta anterior por ninguno de los delitos por los que fue condenado.

En relación con la **agravante de reincidencia específica**, invocada por la Fiscalía, revisadas las sentencias que el persecutor incorporó para fundarla, el tribunal pudo constatar que, efectivamente, concurría la reincidencia específica respecto de los delitos de receptación de vehículo motorizado y estafa, ya que las sentencias son de fecha 27 de diciembre de 2017 y 10 de octubre de 2018 y tres de los delitos de receptación y estafa en que participó directa y materialmente Ilich Chopa, los cometió con posterioridad a esas fechas, en concreto, en el mes de abril de 2018 (vehículo marca Subaru), en febrero de 2019 (camioneta Chevrolet colorado) y en junio de 2019 (Ford mustang).

No obstante, no ocurrió lo mismo con el delito de asociación ilícita, en la medida que el principio de ejecución de dicho delito se verificó el 27 de diciembre de 2016. Entonces, no es posible tener por configurada la reincidencia específica porque si bien el delito anterior se cometió desde el mes de septiembre

de 2014, es decir, antes de la fecha de comisión del presente, la sentencia condenatoria se dictó con posterioridad, el 10 de enero de 2018.

Por último, no está de más tener presente que, del examen de la sentencia dictada en la causa Rit 2473-2016 del 9º Juzgado de Garantía de Santiago, de 10 de enero de 2018, en que se le condenó como autor de asociación ilícita, receptación de vehículo motorizado y estafa, cometidos desde septiembre de 2014 a marzo de 2016, se pudo advertir que corresponde a hechos de la misma naturaleza que los juzgados en el presente proceso. En aquella causa, el jefe de la organización delictual era Jonathan González Queglas, sujeto que estaba preso con Ilich y era cuñado de Franco Cruz Iligaray, al que le pidieron ayuda para crear empresas falsas y facturar. Con esta sentencia quedó de manifiesto que Ilich ha participado en el negocio ilícito de la reinscripción y venta de vehículos robados, a lo menos, desde el año 2014, ininterrumpidamente, aun estando privado de libertad, el que ha ido expandiendo, formando otros grupos con los cuales operar.

En lo que respecta a **Camilo Sandoval Godoy**, le favorece la **atenuante de irreproachable conducta anterior del artículo 11 N°6 del Código Penal**, reconocida por el persecutor y no controvertida.

En relación con la atenuante prevista en el artículo 11 N° 7 del Código Penal, esto es, haber procurado con celo reparar el mal causado, respecto de los delitos de asociación ilícita, receptaciones y estafas, por haber efectuado sus familiares a su nombre, en cuenta corriente jurisdiccional, siete depósitos, por un total de \$2.200.000, durante el año 2021 estando privado de libertad.

Al respecto, lo primero que debe decirse es que el delito de asociación ilícita es de peligro abstracto y afecta a la sociedad toda, en cuanto vulnera la seguridad pública, por lo tanto, no existe una víctima específica o determinada a quien reparar.

En razón de ello, la atenuante podría considerarse únicamente para los delitos de receptación y estafa por los cuales fue condenado.

Sin embargo, el tribunal rechazará la atenuante así solicitada, por considerar irrisoria la exigua suma de dinero depositada, atendido el perjuicio económico causado por la asociación ilícita que se probó en juicio de, a lo menos, \$600.000.000 y, específicamente, solo con los delitos de estafa en que Sandoval Godoy participó como autor directo, que asciende, a lo menos, a \$66.500.000, de modo que la insignificante cantidad en ningún caso revelaría la intención real de reparación de su parte, para las numerosas víctimas de estafa. Esto sin contar a las víctimas de los delitos base de las receptaciones que, por lo general, fueron delitos violentos que también acarrearón daños materiales y psicológicos de importancia.

De este modo, resultó evidente para el tribunal, que la ínfima suma depositada iba en su propio beneficio, al servirle de justificación para alegar una atenuante que le permitiera rebajar una eventual condena.

En relación con **Juan Navarrete Vásquez**, al igual que en el caso de los acusados anteriores, en el veredicto se adelantó que su extensa declaración también significó un elemento importante para tener por acreditados los hechos punibles por los que se decidió condenarlo y su participación, incluido el delito tributario, toda vez que si bien negó algunos aspectos para tratar de exculparse, las acciones y situaciones

que reconoció dieron cuenta precisamente de los elementos típicos no siendo, tampoco, obstáculo para ello la opinión o interpretación personal que tuvo al respecto.

En relación con su irreprochable conducta anterior, se acompañó su extracto de filiación y antecedentes exento de anotaciones penales pretéritas y no fue controvertida.

Por consiguiente, se configuraron en beneficio del acusado, **las atenuantes consignadas en el artículo 11 Nos. 6 y 9 del Código Penal.**

En cuanto a la agravante prevista en el artículo 111 del Código Tributario, alegada por la querellante, por las mismas razones reseñadas a propósito del acusado Yerko Silva Toro, será rechazada.

En cuanto a la reiteración del delito tributario, aun cuando Navarrete resultó responsable por dos delitos en el mismo ejercicio comercial (año 2020), el tribunal aplicará la norma del artículo 351 del Código Procesal Penal por resultar más favorable al condenado. Los razonamientos de esta decisión que fueron desarrollados en el considerando duodécimo, precisamente, en el contexto del análisis del delito tributario, se dan por enteramente reproducidos a fin de evitar repeticiones innecesarias.

En lo que atañe a **David Millalén Llanca**, para determinar las modificatorias hay que distinguir de qué delito se trata.

En primer lugar, respecto del delito de receptación de vehículo motorizado, le favorece únicamente la atenuante de **irreprochable conducta anterior del artículo 11 N° 6 del Código Penal** y, en segundo término, concurren respecto del delito de tenencia ilegal de arma de fuego dos atenuantes, las contempladas en el **artículo 11 Nos. 6 y 9 del código señalado**, esta última en atención a que David Millalén prestó declaración en juicio reconociendo, de manera clara y directa, que mantenía las armas y municiones incautadas en su domicilio y que las tenía bajo su poder sin que estuvieran inscritas a su nombre.

Además, como se señaló en el veredicto, respecto de este último delito, concurre la regla de determinación de pena o **agravante especial del artículo 12 de la Ley 17.798.**

Así la petición de la defensa será rechazada, en atención a que el tenor de la disposición señalada es clarísimo y no susceptible de debate alguno, ya que si el delito se comete con más de dos armas de fuego, como en el caso de Davis Millalén, la pena sube en un grado.

En cuanto a **Carolina Cornejo Arriagada y Víctor Quezada Bravo**, la minorante de haber colaborado sustancialmente con el esclarecimiento de los hechos, invocada por su defensa, será rechazada, en el caso de Víctor Quezada, porque ni siquiera prestó declaración en el juicio oral, guardando silencio y en la etapa investigativa se limitó a negar y desconocer las transferencias cuestionadas, declaración que obviamente no sirvió ni al Ministerio Público para esclarecer los hechos investigados ni al tribunal para acreditar los delitos que se le imputaron.

Y en el caso de Carolina, por cuanto si bien prestó declaración voluntariamente en la investigación y en el juicio, renunciando a su derecho a guardar silencio, ello no significó per se una colaboración, ni menos de carácter sustancial, por el contrario, su testimonio no tuvo el efecto exigido por el artículo 11 N°9 del Código Penal para atenuar su responsabilidad, en la medida que desde un principio negó toda

responsabilidad en los hechos y sostuvo una versión alternativa que mantuvo en el juicio, la que resultó desvirtuada por la abundante prueba de cargo, además, de no haber aportado ningún antecedente para darle sustento.

Por lo señalado, Carolina Cornejo no sólo no colaboró con el esclarecimiento de los hechos sino que el tribunal pudo advertir que, con su declaración, acomodaba los hechos y los confundía, lo que, en su oportunidad, dificultó la labor investigativa del Ministerio Público y acrecentó su carga probatoria, lo que devino en un extenso juicio oral, que llevó al tribunal a ponderar la profusa prueba rendida, que pudo haberse aminorado si la acusada hubiese tenido la real intención de contribuir de manera seria con el establecimiento de los hechos.

En consecuencia, concurre a su favor únicamente la atenuante de irreprochable conducta anterior, prevista **en el artículo 11 N° 6 del Código Penal**, que no fue controvertida.

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Determinación de las penas.

Que para regular las penas que en concreto se impondrán a los condenados, primeramente, se hará referencia a las disposiciones legales que sancionan cada uno de los delitos y, luego, se enunciarán los fundamentos para la determinación de las penas en cada caso en particular.

El delito de **asociación ilícita**, de acuerdo al artículo 293 inciso 1° del Código Penal (vigente a la fecha de comisión del delito), se encuentra sancionado con la pena de **presidio mayor en cualquiera de sus grados** en atención a que los condenados tenían la calidad de jefe, o que ejercían mando o de provocadores y la asociación ilícita tenía por objeto la comisión de crímenes.

El **delito reiterado de receptación de vehículo motorizado**, se encuentra sancionado en el artículo 456 bis A inciso 5° del Código Penal (vigente a la fecha de comisión de los delitos), con la pena de **presidio mayor en su grado mínimo y multa de 5 a 20 UTM**.

En este punto, el tribunal tuvo presente que la pena de multa del delito de receptación de vehículo motorizado fue modificada de UTM al avalúo fiscal del vehículo, con la Ley 21.170 publicada el 26 de julio de 2019.

Por consiguiente, en el presente este caso, atendido que los delitos de receptación, fueron perpetrados a contar de marzo de 2017 hasta octubre de 2020, siendo reiterados y, además, en concurso medial con el delito de estafa, corresponde aplicar una pena única, entonces, la pena de multa seguiría la misma lógica y se regiría por las mismas reglas.

Por tal motivo, siendo más favorable la normativa vigente a la fecha de comisión de los hechos, anterior al 26 de julio de 2019, en atención a que no es viable imponer multas diversas por cada uno de los ilícitos cometidos, se aplicará la multa de 5 a 20 UTM a todos los condenados.

El delito de **estafa**, previsto en el artículo 467 N° 1 del Código Penal (vigente a la fecha de comisión del delito), se encuentra sancionado con **presidio menor en sus grados medios a máximo y multa de 11 a 15 UTM** y el previsto en el inciso final, con **presidio menor en su grado máximo y multa de 21 a 30 UTM**.

El delito tipificado en el artículo 97 N°23 del Código Tributario, está sancionado con la pena de **presidio menor en su grado máximo y multa de hasta 8 UTA**.

El delito de lavado de activos tipificado en el artículo 27 de la Ley 19.913, se sanciona con la pena de **presidio mayor en sus grados mínimos a medio y multa de 200 a 1.000 UTM**.

Cabe señalar que el inciso final de dicho precepto, dispone que “en todo caso, la pena privativa de libertad aplicable en los casos de las letras a) y b) **no podrá exceder de la pena mayor que la ley asigna al autor del crimen o simple delito** del cual provienen los bienes objeto del delito contemplado en este artículo”.

El delito de **tenencia ilegal de arma de fuego**, se encuentra sancionado en el artículo 9 de la Ley 17.798, con la pena de **presidio menor en su grado máximo**. En tanto que el artículo 12, dispone que “el que cometiera el delito con más de 2 armas de fuego, sufrirá la pena superior en uno o dos grados a la señalada en dicho artículo”.

En el caso de **Yerko Silva Toro**, considerando que le favorece una atenuante muy calificada, se bajará un grado del mínimo legal en los casos en que sea procedente y, por tanto, se le impondrán las siguientes penas:

Por el delito de asociación ilícita, presidio menor en su grado máximo y se regulará en el *minimum*.

Por los delitos de receptación de vehículo motorizado y estafa, en virtud de la regla del concurso medial que prescribe el artículo 75 del Código Penal, solo se impondrá la pena mayor asignada al delito más grave, es decir, la receptación de vehículo motorizado, presidio mayor en su grado mínimo, no siendo aplicable el artículo 68 bis del mismo código en este caso, por expresa prohibición del artículo 449 del Código Penal, que establece un marco rígido de penalidad para dicho delito.

De este modo, no procede aplicar la regla de acumulación ideal de las penas del artículo 351 del Código Procesal Penal, por cuanto la reiteración ya fue considerada en virtud de la norma del inciso 5° del artículo 456 bis A del Código Penal, que agrava el reproche penal aumentándola en un grado, quedando la pena base en presidio mayor en su grado mínimo. Luego, se debe aplicar lo dispuesto en el artículo 75 del mismo código que tiene por objeto morigerar el reproche penal en los casos de concurso medial de delitos.

En consecuencia, la aplicación de las reglas de determinación de penas señaladas, obviamente, excluyen la del artículo 351 del Código Procesal Penal, pues de lo contrario se incurriría en infracción al principio *non bis in idem*.

Además, al regular la pena en concreto se impondrá en el *máximum* del rango, atendida la gran cantidad de delitos en que Yerko Silva Toro tuvo participación, respecto de alrededor de 46 vehículos que fueron recuperados, y considerando la mayor extensión del mal causado.

En relación con este último punto, como ya se analizó en los considerandos anteriores, las víctimas estafadas sufrieron importantes daños económicos, perdieron el dinero invertido y el vehículo que habían comprado, e incluso el daño se ha prolongado en el tiempo al tener que pagar cuotas de créditos obtenidos

para adquirir los vehículos. Además, en muchos casos, las víctimas sufrieron daños psicológicos y las repercusiones impactaron a sus respectivas familias.

Por otro lado, en la misma línea, a pesar de que no se acusó por delitos de robo de vehículos, sino que por las receptaciones de estos y posteriores estafas, el tribunal no puede obviar que precisamente estos hechos, por los cuales fueron condenados, suponen el conocimiento previo del origen de los vehículos objeto de sus delitos, ya que los acusados sabían perfectamente que provenían de robos con violencia e intimidación. Ellos necesitaban vehículos de ciertas y determinadas marcas, modelos y características, en ocasiones de alta gama, sin ningún daño o señal de fuerza y con sus llaves originales, para facilitar su venta con apariencia de licitud. Además, Yerko Silva y Camilo Sandoval recibían audios y fotografías de sujetos que les ofrecían vehículos que habían sido recién robados bajo esa modalidad.

En consecuencia, los condenados emprendieron y desarrollaron el negocio de las ventas y con ello incentivaban y, en algunos casos inducían por encargo, el robo de vehículos y principalmente las “encerronas” y “portonazos”, en completa indiferencia e indolencia por las víctimas de aquellos delitos y los daños que sufrían.

Por el delito tributario, considerando la regla de reiteración del artículo 112 del Código tributario en relación con el artículo 351 del Código Procesal Penal, la pena se subirá en un grado y por aplicación del artículo 68 bis del Código Penal, quedará en el rango del presidio menor en su grado máximo y se regulará en su mínimo.

Por el lavado de activos, presidio menor en su grado máximo y se regulará en el mínimo.

En el caso de **Albano Silva Toro**, considerando que le favorecen dos atenuantes de responsabilidad penal, se bajará un grado del mínimo legal en los casos en que sea procedente y, por tanto, se le impondrán las siguientes penas:

Por el delito de asociación ilícita, presidio menor en su grado máximo y se regulará en el mínimo.

Por los delitos de receptación de vehículo motorizado y estafa, en virtud de la regla del concurso medial que prescribe el artículo 75 del Código Penal, solo se impondrá la pena mayor asignada al delito más grave, es decir, la receptación de vehículo motorizado, presidio mayor en su grado mínimo, no siendo aplicable el artículo 67 del mismo código, en este caso, por expresa prohibición del artículo 449 del Código Penal, que establece un marco rígido de penalidad.

Además, al regular la pena en concreto se impondrá en el mínimo del rango, en atención a que Albano Silva participó solo en algunos delitos y considerando que la extensión del mal causado con ellos fue menor.

Por el lavado de activos, presidio menor en su grado máximo y se regulará en el mínimo.

En el caso de **Ilich Chopa Aldana**, considerando que le favorece una atenuante respecto del delito de asociación ilícita y una atenuante (11 N°9 CP) y una agravante (12 N°16 CP) en relación con los delitos de receptación y estafas, se le impondrán las siguientes penas:

Por la asociación ilícita, presidio mayor en su grado mínimo y se regulará en concreto la pena en el *mínimum*.

Por los delitos de receptación de vehículo motorizado y estafa, en virtud de la regla del concurso medial que prescribe el artículo 75 del Código Penal, solo se impondrá la pena mayor asignada al delito más grave, es decir, presidio mayor en su grado mínimo, no siendo aplicable el artículo 67 del mismo código, por expresa prohibición del artículo 449 del Código Penal, que establece un marco rígido de penalidad.

Además, al regular la pena en concreto no se impondrá en el *mínimum* del rango, en atención a la cantidad de delitos en que participó Ilich Chopa y, considerando, además, que es reincidente en este tipo de ilícitos.

En el caso de **Camilo Sandoval Godoy**, considerando que le favorece solo una atenuante, se le impondrán las siguientes penas:

Por la asociación ilícita, presidio mayor en su grado mínimo y se regulará la pena en el *mínimum*.

Por los delitos de receptación de vehículo motorizado y estafa, en virtud de la regla del concurso medial que prescribe el artículo 75 del Código Penal, solo se impondrá la pena mayor asignada al delito más grave, es decir, presidio mayor en su grado mínimo, no siendo aplicable el artículo 67 del mismo código, por expresa prohibición del artículo 449 del Código Penal, que establece un marco rígido de penalidad.

Además, al regular la pena en concreto se impondrá en el *mínimum* del rango, pero no en el mínimo en atención a la cantidad de delitos en que participó y, considerando, además, la extensión del mal causado con ellos.

Por la tenencia ilegal de arma de fuego, presidio menor en su grado máximo y se regulará la pena en el *mínimum*.

En el caso de **Juan Navarrete Vásquez**, considerando que le favorecen dos atenuantes de responsabilidad penal, se bajará un grado del mínimo legal en los casos en que sea procedente y, por tanto, se le impondrán las siguientes penas:

Por el delito de asociación ilícita, presidio menor en su grado máximo y se regulará en el *mínimum*.

Por los delitos de receptación de vehículo motorizado y estafa, en virtud de la regla del concurso medial que prescribe el artículo 75 del Código Penal, solo se impondrá la pena mayor asignada al delito más grave, es decir, presidio mayor en su grado mínimo, no siendo aplicable el artículo 67 del mismo código, en este caso, por expresa prohibición del artículo 449 del Código Penal, que establece un marco rígido de penalidad.

Además, al regular la pena en concreto se impondrá en su *mínimum*, en atención a que Juan Navarrete participó solo en algunos delitos, cometidos en el último período de la asociación, y considerando que la extensión del mal causado con ellos fue menor.

Por el delito tributario, considerando la regla del artículo 351 del Código Procesal Penal, en virtud de la reiteración, la pena se subirá en un grado y por aplicación del artículo 67 del Código Penal, quedará en el rango del presidio menor en su grado máximo y se regulará en su *mínimum*.

En el caso de **David Millalén Llancao**, aun cuando le favorecen dos atenuantes de responsabilidad penal, no procede la rebaja en grado del mínimo de las penas que le corresponderán, en virtud de lo dispuesto en el artículo 449 del Código Penal que excluye la aplicación del artículo 67, para el delito de receptación; y del artículo 17 B inciso final de la Ley 17.798, para el de tenencia ilegal de arma de fuego y, respecto de éste último, además, le perjudica la regla de determinación de pena o mal llamada agravante especial del artículo 12 de la misma ley. Conforme a ello se subirá la pena en un grado y, en definitiva, se le impondrán las siguientes penas:

Por el delito de receptación de vehículo motorizado, presidio menor en su grado máximo y se regulará en el mínimo.

Por la tenencia ilegal de arma de fuego, presidio mayor en su grado mínimo y se regulará la pena en el mínimo.

En el caso de **Carolina Cornejo Arriagada**, considerando que le favorece solo una atenuante, por el delito de lavado de activos, se le impondrá la pena de presidio menor en su grado máximo, conforme a lo dispuesto en el inciso final de artículo 27 de la Ley 19.913 y, se regulará la pena en concreto en su mínimo.

En el caso de **Víctor Quezada Bravo**, considerando que le favorece solo una atenuante, por el delito de lavado de activos, se le impondrá la pena de presidio menor en su grado máximo, conforme a lo dispuesto en el inciso final de artículo 27 de la Ley 19.913 y, se regulará la pena en concreto en su mínimo.

Así las cosas, habiéndose ajustado estrictamente el tribunal a las normas legales que regulan la forma de determinar las penas en cada caso, respecto del argumento de algunos defensores en cuanto a que por razones de justicia y proporcionalidad, las penas a imponer a sus representados debiesen ser equivalente a aquellas que se aplicaron a coimputados por los mismos delitos en procedimientos abreviados, en sede de Garantía, basta para rechazar dicho planteamiento la prohibición que establece el artículo 335 del Código Procesal Penal, respecto de la incorporación al juicio oral de antecedentes propios de la tramitación de un procedimiento abreviado y, por lo mismo, no fueron tomadas en cuenta las sentencias dictadas en procedimientos abreviados que la Fiscalía introdujo al juicio oral, de esta misma causa y por los mismos hechos.

En cuanto a las multas, atendido que las penas privativas de libertad serán de cumplimiento efectivo, dado sus cuantías, y el largo tiempo que han permanecido en prisión preventiva la mayoría de los condenados, se regularán en el mínimo respecto de todos los delitos que comprenden penas pecuniarias.

Por las mismas razones **se les eximirá del pago de las costas** a todos los condenados, tomando en cuenta, además, que no fueron totalmente vencidos en la medida que varios de ellos fueron absueltos respecto de determinados delitos.

En el caso de Carolina Cornejo y Víctor Quezada, se les eximirá del pago de las costas, en atención a sus modestas condiciones económicas actuales, determinadas en sus informes psicosociales.

Además, se dispondrá la incorporación de la huella genética al Registro de Condenados del Sistema Nacional de Registro de ADN, de los condenados Yerko Silva Toro, Albano Silva Toro, Ilich Chopa Aldana,

Camilo Sandoval Godoy, Juan Navarrete Vásquez y David Millalén Llancao, de conformidad con el inciso final del artículo 17 de la Ley 17.970, en atención a que se les aplicará una pena de crimen, y tomando en cuenta, principalmente, la naturaleza, modalidades y móviles determinantes de la asociación ilícita y sus delitos fines y, en el caso de Millalén, la tenencia ilegal de tres armamentos cargados además de variada munición.

VIGESIMO OCTAVO: De las penas sustitutivas.

Que se rechazan las solicitudes de pena sustitutiva a favor de los condenados Albano Silva Toro y Juan Navarrete Vásquez, por cuanto el total de las penas a aplicar en cada caso, excederá del máximo establecido en la Ley 18.216 como requisito objetivo de procedencia.

Respecto de Carolina Cornejo Arriagada y Víctor Quezada Bravo, se sustituirá el cumplimiento de la pena privativa de libertad por la libertad vigilada intensiva, en atención a que reúnen los requisitos previstos en los artículos 15 y 15 bis de la Ley 18.216. En efecto, las penas a imponer no excederán de 5 años, no tienen condenas anteriores por simples delitos o crímenes y, además, cuentan con las condiciones personales y sociales, con una familia con dos hijos en edad escolar y actividades laborales, como se demostró con los informes psicosociales y los documentos adicionales que se acompañaron en su oportunidad. Todo lo anterior, permite colegir que una intervención personalizada en el medio libre será favorable para su reinserción social.

VIGÉSIMO NOVENO: Del comiso.

Que se dispone el comiso de todas las especies incautadas en el presente proceso que se individualizaron en el auto de apertura, por constituir objetos, producto o instrumentos de los delitos por los que se ha condenado a los acusados.

En cuanto a los bienes incautados del restaurante “La parrilla del gaucho”, el tribunal consideró que habiéndose acreditado que dicho local comercial fue utilizado para lavar activos, e incluso los propios acusados reconocieron que se hicieron inversiones en él, no sólo en remodelaciones sino en mobiliario, estos corresponden al producto del delito señalado y, por tanto, deben caer en comiso.

TRIGÉSIMO: Costas respecto del Ministerio Público.

Que, en relación con la solicitud de condena en costas al Ministerio Público, por la absolución del acusado Germán Duarte Pereira, esta será rechazada, por cuanto el tribunal estimó que, en su oportunidad, contaba con una investigación que arrojaba mérito suficiente para presentar acusación en su contra, sin embargo el tiempo transcurrido y la complejidad de la causa, generaron reales dificultades para rendir en juicio prueba importante respecto del acusado Duarte, principalmente, la comparecencia y declaración de testigos, cuestión que se consideró no imputable al persecutor.

Y visto lo dispuesto en los artículos 1°, 7°, 11 N°6 y 9, 12 N°16, 14, 15, 21, 29, 30, 31, 50, 68, 68 bis, 69, 70, 76, 292, 293, 294, 294 bis, 449, 456 bis A, 467 y demás pertinentes del Código Penal; artículos 259 y siguientes, y artículo 351 y demás disposiciones pertinentes del Código Procesal Penal; artículo 97 N°23 y 112 del Código Tributario; artículo 27 letras a) y b) de la Ley 19.913; artículo 2° letra b), 9, 12 y 17 B de la Ley 17.798; Ley 18.216 y artículo 17 de la Ley 19.970, se declara:

1.- Que **se absuelve** a **Camilo Sammy Sandoval Godoy**, de los cargos de ser autor del delito de apertura de giros con antecedentes falsos al SII, previsto y sancionado en el artículo 97 N°23 del Código Tributario, perpetrado desde el año 2017 hasta el 16 de octubre de 2020 en diferentes comunas de la ciudad de Santiago.

2.- Que **se absuelve** a **David Enrique Millalén Llancao**, ya individualizado, de los cargos de ser autor del delito de asociación ilícita, perpetrado desde el 27 de diciembre de 2016 hasta el 16 de octubre de 2020, en la comuna de Recoleta de la ciudad de Santiago.

3.- Que **se absuelve** a **David Enrique Millalén Llancao** de los cargos de ser autor del delito de tenencia ilegal de munición, perpetrado el 16 de octubre de 2020 en la comuna de Cerro Navia de la ciudad de Santiago.

4.- Que **se absuelve** a **Germán del Carmen Duarte Pereira** de los cargos de autor del delito de asociación ilícita, perpetrado desde el 27 de diciembre de 2016 hasta el 16 de octubre de 2020, en la comuna de Recoleta de la ciudad de Santiago.

5.- Que **se absuelve** a **Germán del Carmen Duarte Pereira** de los cargos de ser autor de los delitos de receptación de vehículo motorizado y estafa, perpetrados en los años 2018 y 2019, en distintas comunas de la ciudad de Santiago.

6.- Que se condena a **Yerko Andrés Silva Toro**, antes individualizado, a cumplir la pena de tres (3) años y un día de presidio menor en su grado máximo y a la de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, como autor del delito consumado de asociación ilícita, perpetrado desde el 27 de diciembre de 2016 hasta el 16 de octubre de 2020, en la comuna de Recoleta de la ciudad de Santiago.

7.- Que **se condena** a **Yerko Andrés Silva Toro** a la pena única de diez (10) años de presidio mayor en su grado mínimo, multa de 5 unidades tributarias mensuales (UTM) y a la de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, como autor de los delitos consumados de receptación de vehículos motorizados en concurso medial con los delitos de estafa, perpetrados a contar del 29 de marzo de 2017 hasta el 16 de octubre de 2020, en diferentes comunas de la Región Metropolitana y de otras Regiones del país.

8.- Que **se condena** a **Yerko Andrés Silva Toro** a la pena de tres (3) años y un día de presidio menor en su grado máximo, multa de una (1) unidad tributaria anual (UTA) y a la de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, como autor del delito consumado de apertura de giros con antecedentes falsos al SII, previsto y sancionado en el artículo 97 N°23 del Código Tributario, en carácter de reiterado, perpetrado desde el año 2017 hasta el 16 de octubre de 2020 en diferentes comunas de la ciudad de Santiago.

9.- Que **se condena** a **Yerko Andrés Silva Toro** a la pena de tres (3) años y un día de presidio menor en su grado máximo, multa de 200 UTM y a la de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, como autor del delito consumado de lavado de activos, previsto y sancionado en el

artículo 27 letra a) de la Ley 19.913, perpetrado desde el año 2017 hasta el 16 de octubre de 2020 en diferentes comunas de la ciudad de Santiago.

10.- Que **se condena a Albano Ariel Silva Toro**, ya individualizado, a la pena de tres (3) años y un día de presidio menor en su grado máximo y a la de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, como autor del delito consumado de asociación ilícita, perpetrado desde el 27 de diciembre de 2016 hasta el 16 de octubre de 2020, en la comuna de Recoleta de la ciudad de Santiago.

11.- Que **se condena a Albano Ariel Silva Toro** a la pena única de cinco (5) años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, multa de cinco (5) UTM y a la de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, como autor de los delitos consumados de receptación de vehículos motorizados en concurso medial con los delitos de estafa, perpetrados a contar del 29 de marzo de 2017 hasta el 16 de octubre de 2020, en diferentes comunas de la Región Metropolitana y de otras Regiones del país.

12.- Que **se condena a Albano Ariel Silva Toro** a la pena de tres (3) años y un día de presidio menor en su grado máximo, multa de 200 UTM y a la de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena como autor del delito consumado de lavado de activos, previsto y sancionado en el artículo 27 letra a) de la Ley 19.913, perpetrado desde el año 2017 hasta el 16 de octubre de 2020 en diferentes comunas de la ciudad de Santiago.

13.- Que **se condena a Camilo Sammy Sandoval Godoy**, antes individualizado, a la pena de cinco (5) años y un día de presidio mayor en su grado mínimo y a la de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, como autor del delito consumado de asociación ilícita, perpetrado desde el 27 de diciembre de 2016 hasta el 16 de octubre de 2020, en la comuna de Recoleta de la ciudad de Santiago.

14.- Que **se condena a Camilo Sammy Sandoval Godoy** a la pena única de seis (6) años de presidio mayor en su grado mínimo, multa de 5 UTM y a la de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, como autor de los delitos consumados de receptación de vehículos motorizados en concurso medial con los delitos de estafa, perpetrados a contar del 29 de marzo de 2017 hasta el 16 de octubre de 2020, en diferentes comunas de la Región Metropolitana y de otras Regiones del país.

15.- Que **se condena a Camilo Sammy Sandoval Godoy** a la pena de tres (3) años y un día de presidio menor en su grado máximo y a la de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, como autor del delito consumado de tenencia ilegal de arma de fuego, cometido el 16 de octubre de 2020 en la comuna de Lo Prado de la ciudad de Santiago.

16.- Que **se condena a Ilich Alexis Chopa Aldana**, ya individualizado, a la pena de cinco (5) años y un día de presidio mayor en su grado mínimo y a la de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la

condena, como autor del delito consumado de asociación ilícita, perpetrado desde el 27 de diciembre de 2016 hasta el 16 de octubre de 2020, en la comuna de Recoleta de la ciudad de Santiago.

17.- Que **se condena a Ilich Alexis Chopa Aldana**, a la pena única de ocho (8) años de presidio mayor en su grado mínimo, multa de 5 UTM y a la de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, como autor de los delitos consumados de receptación de vehículos motorizados en concurso medial con los delitos de estafa, perpetrados desde el 29 de marzo de 2017 hasta el 16 de octubre de 2020, en diferentes comunas de la Región Metropolitana y de otras Regiones del país.

18.- Que **se condena a David Enrique Millalén Llancao**, a la pena de tres (3) años y un día de presidio menor en su grado máximo, multa de 5 UTM y a la de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, como autor del delito consumado de receptación de vehículo motorizado, perpetrado en la comuna de Santiago centro, el día 23 de enero de 2020.

19.- Que **se condena a David Enrique Millalén Llancao** a la pena de cinco (5) años y un día de presidio mayor en su grado mínimo y a la de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos como autor del delito consumado de tenencia ilegal de armas de fuego, cometido el 16 de octubre de 2020 en la comuna de Cerro Navia de la ciudad de Santiago.

20.- Que **se condena a Juan Francisco Gabriel Navarrete Vásquez**, a la pena de tres (3) años y un día de presidio menor en su grado máximo y a la de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, como autor del delito consumado de asociación ilícita, perpetrado desde el 27 de diciembre de 2016 hasta el 16 de octubre de 2020, en la comuna de Recoleta de la ciudad de Santiago.

21.- Que **se condena a Juan Francisco Gabriel Navarrete Vásquez** a la pena única de cinco (5) años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, multa de cinco (5) UTM y a la de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, como autor de los delitos consumados de receptación de vehículos motorizados en concurso medial con los delitos de estafa, perpetrados a contar del 29 de marzo de 2017 hasta el 16 de octubre de 2020, en diferentes comunas de la Región Metropolitana y de otras Regiones del país.

22.- Que **se condena a Juan Francisco Gabriel Navarrete Vásquez** a la pena de tres (3) años y un día de presidio menor en su grado máximo, multa de una (1) unidad tributaria anual (UTA) y a la de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, como autor del delito consumado de apertura de giros con antecedentes falsos al SII, previsto y sancionado en el artículo 97 N°23 del Código Tributario, en carácter de reiterado, perpetrado en el año 2020 en diferentes comunas de la ciudad de Santiago.

23.- Que **se condena a Víctor Manuel Quezada Bravo**, ya individualizado, a la pena de tres (3) años y un día de presidio menor en su grado máximo, multa de 200 UTM, y a la de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, como autor del delito consumado de lavado de activos, previsto y

sancionado en el artículo 27 letra b) de la Ley 19.913, perpetrado entre los años 2017 y 2018, en la comuna de Estación Central de la ciudad de Santiago.

24.- Que **se condena a Carolina Angélica Cornejo Arriagada**, a la pena de tres (3) años y un día de presidio menor en su grado máximo, multa de 200 UTM y a la de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, como autora del delito consumado de lavado de activos, previsto y sancionado en el artículo 27 letra b) de la Ley 19.913, perpetrado entre los años 2017 y 2018, en la comuna de Estación Central de la ciudad de Santiago.

25.- Que atendida la extensión de las penas corporales impuestas a **Yerko Silva Toro, Albano Silva Toro, Ilich Chopa Aldana, Camilo Sandoval Godoy, Juan Navarrete Vásquez y David Millalén Llancao**, no se concede a los sentenciados ninguna de las penas sustitutivas contempladas en la Ley 18.216, por lo que deberán cumplir las penas privativas de libertad, de manera efectiva, las que se comenzarán a contar de la manera que se dirá, de acuerdo al siguiente detalle:

A.- YERKO ANDRES SILVA TORO, cédula de identidad 16.083.237-1, por no tener abonos que considerar en la presente causa, desde que termine de cumplir la penas impuestas en la causa RIT 6244-2013 del Juzgado de Garantía de Arica y la causa RIT 596-2015 del 10° Juzgado de Garantía de Santiago, en las que está rematado, con fecha de término de condena el 27 de abril de 2027, al día siguiente y sin solución de continuidad.

B.- ALBANO ARIEL SILVA TORO, cédula de identidad 13.656.296-7, desde que la presente sentencia quede ejecutoriada, debiendo oficiarse al Juzgado de Garantía de Antofagasta a fin de que se suspenda la prisión preventiva en la causa RIT 10010-2022, a la que está sujeto desde el 7 de diciembre de 2022.

Además, le favorece un total de 748 días de abono, debido a que estuvo sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva en la presente causa, desde el día 16 de octubre de 2020 al 19 de mayo de 2022 (581 días) y a la medida cautelar del artículo 155 letra a) parcial (10 horas diarias), desde el día 20 de mayo de 2022 al 6 de diciembre de 2022 (167 días).

C.- ILICH ALEXIS CHOPA ALDANA, cédula de identidad 15.911.618-2, desde que termine de cumplir las penas impuestas en la causa RIT 1942-2020 del Juzgado de Garantía de Temuco y en la causa RIT 307-2020 del Juzgado de Letras y Garantía de Bulnes, en las que se encuentra rematado, al día siguiente y sin solución de continuidad.

Además, le favorece un total de 757 días de abono, debido a que estuvo sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva en la presente causa, desde el día 19 de octubre de 2020 (detención) hasta el 14 de noviembre de 2022.

D.- CAMILO SAMMY SANDOVAL GODOY, cédula de identidad 17.027.885-2, desde el día 16 de octubre de 2020 (detención) fecha desde la cual se encuentra privado de libertad en esta causa, sujeto a prisión preventiva, sumando un total de 1.530 días de abono a la fecha.

E.- JUAN FRANCISCO GABRIEL NAVARRETE VÁSQUEZ, cédula de identidad 18.613.986-0, desde el día 13 de agosto de 2022, fecha desde la cual está sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva en la presente causa, de manera ininterrumpida, sumando un total de 864 días de abono a la fecha.

Adicionalmente, le favorece un abono de **6 días** por haber estado detenido en la presente causa, entre los días 16 y 21 de octubre de 2020 y sujeto a la medida cautelar del artículo 155 letra a) parcial (8 horas diarias), desde el día 22 de octubre de 2020 al 12 de agosto de 2022, que suma un total de **440 días** de abono.

F.- DAVID ENRIQUE MILLALEN LLANCAO, cédula de identidad 14.584.198-4, desde el día 16 de octubre de 2020 (detención), fecha desde la cual se encuentra privado de libertad sujeto a prisión preventiva en esta causa, en forma ininterrumpida, sumando un total de 1.530 días de abono a la fecha.

Las medidas cautelares y abonos que le corresponde a cada condenado constan en el certificado del Ministro de Fe del tribunal, de esta fecha, incorporado a la causa.

En cuanto al orden de cumplimiento de las diversas penas corporales impuestas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 74 del Código Penal, deberán ser cumplidas por cada condenado principiando por la más grave.

26.- Que, por reunir los requisitos del artículo 15 bis de la Ley 18.216, se sustituye a los sentenciados **Carolina Cornejo Arriagada y Víctor Quezada Bravo** el cumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta por la de libertad vigilada intensiva, por un término igual al de la pena corporal, vale decir, tres años y un día, debiendo ambos presentarse al Centro de Reinserción Social de Gendarmería de Chile, que corresponda a su domicilio, dentro del plazo de cinco días contados desde que quede ejecutoriada esta sentencia, bajo apercibimiento de despacharse orden de detención en su contra, debiendo, además, cumplir durante el período de control con el plan de intervención individual que se apruebe en su momento y con las condiciones de las letras a), b) y c) del artículo 17 y d) del artículo 17 ter de la misma ley.

Si la pena sustitutiva impuesta fuese incumplida podrá ser revocada o, en su caso, se le remplazará por una pena sustitutiva de mayor intensidad o se dispondrá la intensificación de las condiciones decretadas.

En caso de que la pena sustitutiva fuese dejada sin efecto, sea por incumplimiento o quebrantamiento de la misma, se someterá al condenado infractor al cumplimiento del saldo de la pena inicial, abonándose en su favor el tiempo de ejecución de la pena sustitutiva de forma proporcional a la duración de ambas. Para dicho evento, además, a los sentenciados les benefician los siguientes abonos:

A.- CAROLINA ANGÉLICA CORNEJO ARRIAGADA cédula de identidad 16.481.490-4, estuvo un día detenida, el 3 de febrero de 2022 en la presente causa; 51 días sujeta a la medida cautelar del artículo 155 letra a) parcial (8 horas diarias), desde el día 4 de febrero de 2022 al 21 de abril de 2022, que corresponde a 51 días; y 26 días sujeta a la misma medida cautelar pero de 6,5 hrs. diarias, desde el día 22 de abril de 2022 al 8 de junio de 2022, lo que suma un total de 78 días de abono.

B.- VÍCTOR MANUEL QUEZADA BRAVO, cédula de identidad 15.998.069-3, estuvo 9 días detenido en la presente causa, desde el 3 al 11 de febrero de 2022; 44 días sujeta a la medida cautelar del artículo 155

letra a) parcial (8 horas diarias), desde el día 14 de febrero de 2022 al 21 de abril de 2022 y 26 días sujeto a la misma medida cautelar pero de 6,5 hrs. diarias, desde el día 22 de abril de 2022 al 8 de junio de 2022; lo que suma un total de 79 días de abono.

Las medidas cautelares y abonos que le corresponde a cada sentenciado, constan en el certificado del Ministro de Fe del tribunal, de esta fecha, incorporado a la causa.

Para los efectos de lo previsto en el artículo 55 del Reglamento de la Ley 18.216, comuníquese a Gendarmería de Chile la pena sustitutiva impuesta.

27.- Que, en cuanto a las penas pecuniarias a que fueron condenados los sentenciados, si no tuvieren bienes para pagar las multas impuestas, procédase en su oportunidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del Código Penal.

Y en el caso de **Carolina Cornejo Arriagada y Víctor Quezada Bravo**, concédase plazo para su pago por parcialidades, conforme a lo dispuesto en el artículo 70 del Código Penal, en 12 cuotas mensuales, iguales y sucesivas, comenzando por el mes siguiente a que la sentencia quede ejecutoriada. El no pago de una sola de las parcialidades, hará exigible el total de la multa adeudada.

28.- Que se decreta **el comiso** de los bienes y especies incautadas a **Yerko Silva Toro y Albano Silva Toro** en relación con el ilícito de lavado de activos, específicamente, los inmuebles ubicados en Los Robles N°1034, comuna de Lo Prado, inscrito a fojas 56153, número 53960, año 2001, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y en Papa San Eleuterio N°542, comuna de Pudahuel, inscrito a foja 46505, número 66845, año 2018, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago.

Además, de los dineros retenidos en los productos bancarios de las siguientes personas y entidades:

- 1) Daniela Espinoza Toro, Banco Itaú y Corpbanca;
- 2) Jeannette Toro Brenet, Banco Falabella, Banco Estado, BCI, Banco Itaú, Corpbanca y Banco Santander;
- 3) Claudia Sandoval Godoy, Scotiabank y Banco Estado;
- 4) Comercializadora "SyB", Rut 76.893.612-9, Banco Estado;
- 5) Yerko Silva Toro, Banco Estado;
- 6) Albano Silva Toro, Banco Estado y Banco Santander;
- 7) Comercializadora de productos alimenticios Albano Ariel Silva Toro EIRL, RUT 76.530.779-1, Banco Estado;
- 8) Paula Becerra Leyton, Banco Santander, Banco Estado y Banco de Chile;
- 9) Jesús Gacitúa Candia, Banco Santander.

Asimismo se decreta el comiso del mobiliario del restaurante "La Parrilla del Gaucho", ubicado en Avenida Gladys Marín N°6106, comuna de Estación Central.

29.- Que se decreta **el comiso** de las armas y municiones incautadas, a **Camilo Sandoval Godoy y David Millalén Llancao**, singularizadas en los considerandos vigésimo y décimo noveno, respectivamente, cuyo destino será el que establece el artículo 23 inciso 2° de la Ley 17.798.

30.- Que de conformidad con el inciso final del artículo 17 de la Ley 19.970, incorpórese al Registro de Condenados la huella genética de **Yerko Silva Toro, Albano Silva Toro, Ilich Chopa Aldana, Camilo Sandoval Godoy, Juan Navarrete Vásquez, David Millalén Llancao**, para dicho efecto, ejecutoriado el fallo, a fin de dar cumplimiento a dicha ley y su Reglamento, si no se hubiesen tomado muestras biológicas

con anterioridad, para la determinación y registro de las huellas genéticas respecto de los condenados, procédase a tomarlas por parte de Gendarmería de Chile.

Además, ejecutoriado el fallo, infórmese al Servicio Electoral al tenor del artículo 17 de la Ley 18.556.

31.- Que se exime a los sentenciados del pago de las costas de la causa, por las razones explicitadas en el considerando vigésimo séptimo de esta sentencia y también al Ministerio Público, respecto de la absolución del acusado Germán Duarte Pereira, por haber tenido motivo plausible para litigar.

32.- Que, una vez ejecutoriado el fallo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 18.216, procédase a la omisión, en los certificados de antecedentes de los sentenciados **Carolina Cornejo Arriagada y Víctor Quezada Bravo**, de las anotaciones a que diere origen la presente sentencia.

Devuélvase a quien corresponde la suma de dinero (\$2.200.000) depositada en la cuenta corriente jurisdiccional del 5° Juzgado de Garantía de Santiago, en representación del condenado Camilo Sandoval Godoy, por haberse rechazado la atenuante del artículo 11 N° 7 del Código Penal.

Devuélvase al Ministerio Público los medios probatorios incorporados en la audiencia.

Oficiése, en su oportunidad, a los organismos que corresponda para hacer cumplir lo resuelto y remítanse los antecedentes necesarios al Quinto Juzgado de Garantía de Santiago, para la ejecución de las penas.

Regístrese.

Redactada por la Jueza Marcela Nilo Leyton.

RIT 412-2023

RUC 2201068442-4

CÓDIGO DELITO (510) (869) (5001) (816) (12174) (10001) (5001) (10011)

PRONUNCIADA POR LOS JUECES DEL SEGUNDO TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE SANTIAGO, DON EDUARDO GALLARDO FRÍAS, DOÑA MARCELA NILO LEYTON Y DOÑA ALEJANDRA RODRÍGUEZ ORO.